¿Cómo va la vida en América Latina?

MEDICIÓN DEL BIENESTAR PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



OCDE

dev
CENTRO DE DESARROLLO

¿Cómo va la vida en América Latina?

MEDICIÓN DEL BIENESTAR PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los Países miembros de la OCDE.

Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.

Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera:
OECD (2022), *¿Cómo va la vida en América Latina?: Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7f6a948f-es.

ISBN 978-92-64-35985-7 (impresa)
ISBN 978-92-64-64891-3 (pdf)

La OCDE ha externalizado la traducción del presente documento. Las únicas versiones oficiales son las redactadas en inglés y francés.

Las erratas de las publicaciones se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OCDE 2022

El uso del contenido del presente trabajo, tanto en formato digital como impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en: https://www.oecd.org/termsandconditions.

Prefacio

La medición del bienestar comporta analizar resultados de desarrollo multidimensionales a escala nacional y regional desde la perspectiva de la población (personas y hogares), y no indicadores de crecimiento económico exclusivamente. Este cometido exige tener en cuenta una serie de métricas más amplia que la utilizada tradicionalmente para dar seguimiento al progreso nacional, que describa las condiciones materiales actuales de las personas y su calidad de vida, la distribución de los resultados entre los distintos lugares y grupos de población y los recursos sistémicos que apuntalan la sostenibilidad del bienestar de las personas con miras al futuro.

El presente informe, *¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas*, es el resultado de un proyecto de tres años dirigido por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades y el Centro de Desarrollo de la OCDE. Este proyecto se ha propuesto identificar métricas comparables para dar seguimiento al bienestar multidimensional en América Latina y el Caribe (ALC), a fin de poner de relieve posibilidades de mejora en cuanto a cobertura y recolección de datos, así como de analizar el uso de marcos de bienestar en relación con las políticas públicas en países de ALC. El informe se basa en una versión adaptada del Marco de Bienestar de la OCDE que representa las prioridades de la región de ALC, en particular en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este documento se ha elaborado en el marco del instrumento regional de la Unión Europea “Facilidad para el Desarrollo en Transición” para América Latina y el Caribe, resultado del trabajo conjunto encabezado por la UE, la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

En la región de ALC resulta especialmente pertinente adoptar un enfoque más completo y centrado en las personas para medir el desarrollo, pues en estos países persisten las desigualdades y otros desafíos estructurales a pesar de que, en las últimas décadas, muchos han entrado en la categoría de países de ingresos altos o medios-altos, lo cual destaca la importancia del enfoque de Desarrollo en transición. La agitación que ha experimentado esta región desde que comenzó el proyecto en 2018 – con la ola de protestas sociales surgidas a finales de 2019 a la que pronto se sumó el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 – subraya aún más la necesidad de adoptar una perspectiva de progreso más amplia que transforme el bienestar de la población en el eje central de la formulación de políticas y la cooperación internacional para ‘construir un futuro mejor”.

Agradecimientos

Este informe ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) y el Centro de Desarrollo (DEV) de la OCDE. La gestión y la producción globales del informe fueron dirigidas por Katherine Scrivens (analista de Políticas de WISE), bajo la supervisión de Carrie Exton (jefa de Unidad de WISE), Marco Mira d'Ercole (consejero del WISE), Sebastián Nieto-Parra (jefe de Unidad del DEV) y Federico Bonaglia (vicedirector del DEV).

El informe se publica bajo la dirección de Romina Boarini (directora del WISE), Ragnheiður Elín Árnadóttir (directora del DEV) y Mario Pezzini (exdirector del DEV). El proyecto en sí comenzó en 2018, antes de la creación del WISE, e inicialmente se encontraba bajo la responsabilidad de la Dirección de Estadística y Datos (SDD). El apoyo de la SDD y, en particular, las orientaciones de Martine Durand (exjefa de Estadística de la OCDE y directora de la SDD) ha sido inestimable para las actividades de preparación y la investigación realizada para el informe.

Las autoras del Capítulo 1 son Carrie Exton y Katherine Scrivens; los Capítulos 2 a 5 han sido redactados conjuntamente por Joshua Monje-Jelfs (WISE), Katherine Scrivens y Elena Tosetto (WISE); y la autora del Capítulo 6 es Nathalia Montoya González (DEV), aunque también incluye contribuciones de Margreet Frieling (WISE), João Castello Branco (DEV), Rita Da Costa (DEV) y Adriana Caicedo (DEV). Monica Quinza (WISE) ha facilitado asistencia estadística con respecto al conjunto del informe. Asimismo, a lo largo de todo el proceso, ha resultado esencial la ayuda del Equipo de Comunicaciones de WISE, Anne-Lise Faron, Martine Zaïda y Julia Carro. Sonia Primot ha diseñado la portada, Patrick Hamm ha suministrado las pautas editoriales y Meral Gedik ha preparado y dado formato al documento para su publicación. La traducción al español del informe ha sido realizada por el Equipo de Traducción de la OCDE y revisada por Liliana Tafur. A todos ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su apoyo y su trabajo.

Una amplia red de expertos y colegas han desempeñado una función clave a lo largo de todo el proceso, dirigiendo el proyecto, aportando opiniones, insumos, comentarios y asesoramiento. El apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental y las aportaciones de colegas de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA, Jolita Butkeviciene, Pelayo Roces-Fernández y Sergio Martín Moreno) y Eurostat (Maria-João Santos y María-Isabel Lazaro) ha configurado la orientación estratégica del informe. La CEPAL ha sido un socio crucial en materia de conocimientos a lo largo de todo el proyecto. Xavier Mancero y Pablo Villatoro, de la División de Estadísticas de la CEPAL, han colaborado estrechamente con el equipo del proyecto desde su inicio hasta el proceso de redacción final y sus contribuciones han tenido un valor inestimable. La participación de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, el vicesecretario Ejecutivo, Mario Cimoli, y el director de la División de Estadísticas, Rolando Ocampo, en eventos de alto nivel y debates estratégicos, así como las aportaciones iniciales y el asesoramiento de Nunzia Saporito, Sebastián Rovira, Romain Zivy y los compañeros del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES, dirigido por Cielo Morales) han resultado esenciales para fijar la dirección del proyecto en general y garantizar la pertinencia de sus productos. Fabiana del Popolo, de la División de Desarrollo y Población de la CEPAL, e Iliana Vaca Trigo, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, también realizaron comentarios muy útiles.

La contribución de expertos de las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) de los países analizados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) ha sido esencial para determinar la dirección y el contenido del informe. Los ejemplos que se incluyen en el Capítulo 6 se basan en entrevistas con expertos en políticas de diversos ministerios y departamentos gubernamentales de los países analizados. Los consejos e insumos de otros expertos regionales del mundo académico y la sociedad civil también han sido sumamente útiles. Aunque estos expertos en medición y políticas de los países analizados son demasiado numerosos para nombrarlos de forma individual, manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento por sus contribuciones y consejos, y esperamos que el producto final les resulte útil para su trabajo.

Nos sentimos en deuda con muchos colegas de diversas divisiones de la OCDE por su ayuda, comentarios y análisis, tanto en lo que respecta al texto preliminar, como a consultas específicas. Entre ellos se encuentran los siguientes: Jens Arnold, Carlotta Balestra, Ivan Bornacelly, Monica Brezzi, Guillaume Cohen, Marcos Díaz Ramírez, Gabriel di Paolantonio, Gráinne Dirwan, Eva Feron, Lara Fleischer, Catherine Gamper, Alessandro Goglio, Santiago González, Chris James, Cristian Herrera, Katia Karousakis, Eija Kiiskinen, Alexandre Kolev, Justina La, Juan de Laiglesia, Gaetan Lafortune, Horacio Levy, Jessica Mahoney, Thomas Manfredi, Claire McEvoy, José René Orozco, Hyeshin Park, Edward Perry, Jan Rielaender, Olivier Thevenon, Isabelle Ynesta, Belen Zinni y Jorrit Zwijnenburg. Agradecemos y reconocemos el apoyo de la Secretaría de Relaciones Mundiales (GRS) de la OCDE. También han sido de gran utilidad los diálogos mantenidos con colegas y expertos en el contexto del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.

Por último, el marco de medición, las prioridades de desarrollo estadístico y la información pormenorizada sobre políticas que se presentan en este informe se prepararon y mejoraron mediante interacciones con cientos de participantes en los diversos eventos presenciales y en línea que se organizaron como parte del proyecto. Deseamos transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en estos eventos, así como a los coorganizadores y socios institucionales: la Unión Europea (y en particular la DG INTPA y Eurostat), la CEPAL, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México y la Universidad del Rosario de Bogotá (Colombia).

Índice

Prefacio 3

Agradecimientos 4

Guía del lector 15

Resumen ejecutivo 19

1 ¿Cómo va la vida en América Latina? Introducción y aspectos clave 23
Resumen 24
Medición del bienestar: objeto y alcance 26
El marco de la OCDE para medir el bienestar y su adaptación al contexto de ALC 28
Selección de indicadores para medir el bienestar en la región de ALC 32
Comparación del marco de los ODS con el marco de bienestar de la OCDE 34
El uso de los marcos de bienestar en las políticas 37
Estructura del informe 39
Aspectos clave: evolución del bienestar en el grupo de países analizados 40
Progresión del bienestar, 2000-2019 42
Evolución de los recursos y riesgos para el bienestar futuro, 2000-2019 47
Dentro de los países analizados de ALC 11 existen grandes disparidades en materia de bienestar 53
Se corre el riesgo de que la crisis del COVID-19 elimine los avances en el bienestar logrados en las últimas dos décadas en la región 60
Aspectos para el desarrollo estadístico 66
Conclusiones 67
Referencias 68
Anexo 1.A. Candidatos a indicadores principales para medir el bienestar en la región de ALC 74
Notas 76

2 Condiciones materiales en América Latina 79
Introducción 80
Ingresos y consumo 81
Trabajo y calidad del empleo 97
Vivienda 110
Referencias 119
Notas 123

3 Calidad de vida en América Latina 127
Introducción 128
Salud 129
Conocimientos y competencias 143
Seguridad 155
Calidad del medioambiente 163
Compromiso cívico 170
Relaciones sociales 175
Conciliación de la vida personal y laboral 180
Bienestar subjetivo 181
Referencias 189
Notas 207

4 Recursos para el bienestar futuro en América Latina 213
Introducción 214
Capital natural 214
Capital económico 226
Capital humano 235
Capital social 244
Referencias 258
Notas 264

5 Desigualdades en el bienestar entre grupos sociales y territorios 269
Introducción 270
Desigualdades entre géneros 271
Desigualdades a lo largo del ciclo de vida 294
Desigualdades durante el ciclo de vida: niños 294
Resultados de bienestar de los jóvenes adultos 299
Resultados de bienestar de las personas mayores 303
Desigualdades territoriales 312
Desigualdades étnicas y raciales 321
Desigualdades en función de la educación 331
Referencias 335
Notas 346

6 Las políticas públicas desde la óptica del bienestar: experiencias en ALC y países de la OCDE 351
Desafíos en materia de bienestar social en los países de ALC 352
El valor de un enfoque de desarrollo multidimensional en la región de ALC 355
Enfoque multidimensional de las políticas públicas: aprovechar la experiencia de América Latina y del resto del mundo 360
Conclusión 383
Referencias 386
Anexo 6.A. Índices de Pobreza Multidimensionales de los países de ALC 394
Anexo 6.B. Metodología de los mapas de calor 397
Notas 399

GRÁFICOS

Gráfico 1.1. Marco de bienestar de la OCDE 29
Gráfico 1.2. Correspondencia de los ODS con las dimensiones del marco de bienestar de la OCDE 35
Gráfico 1.3. Grado de relevancia de los indicadores de *¿Cómo va la vida en América Latina?* para las metas de la agenda de los ODS 36
Gráfico 1.4. Resumen del promedio de avances y retrocesos de ALC 11 en bienestar futuro durante las dos últimas décadas 42
Gráfico 1.5. A partir de 2015, el ritmo de reducción de la pobreza se deceleró en el grupo de países analizados, al tiempo que descendió el empleo 43
Gráfico 1.6. El aumento del INB per cápita en el grupo de países analizados se debilitó después de 2015, mientras que el desempleo crecía incluso antes de la pandemia 44
Gráfico 1.7. El crecimiento del gasto en consumo de los hogares per cápita se redujo después de 2014-2015, al tiempo que descendió la satisfacción con el nivel de vida 44
Gráfico 1.8. Mientras que el PIB per cápita prosiguió su ascenso después de 2014, el promedio de satisfacción con la vida se redujo, creció la proporción de personas con baja satisfacción con la vida y aumentaron los homicidios 45
Gráfico 1.9. La satisfacción con la disponibilidad y la calidad de la atención sanitaria se ha reducido, incluso a medida que ha aumentado la cobertura en los países de ALC 11 46
Gráfico 1.10. En comparación con mediados de la década de 2000, se ha reducido el número de personas que han manifestado su opinión a un funcionario público, y ha aumentado el de aquellas que creen que su país está gobernado por grupos poderosos en beneficio propio 47
Gráfico 1.11. Resumen del promedio de avances y retrocesos de ALC 11 en recursos para el bienestar futuro durante las dos últimas décadas 48
Gráfico 1.12. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en todo el grupo de países analizados, al tiempo que se redujo la proporción de energías renovables dentro del conjunto de fuentes energéticas 49
Gráfico 1.13. La confianza en el gobierno y el apoyo a la democracia han caído drásticamente desde 2010 en los países de ALC analizados 50
Gráfico 1.14. Los niveles de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación y con empleo informal se mantienen sistemáticamente altos 51
Gráfico 1.15. La obesidad cada vez preocupa más con relación a los resultados futuros en materia de salud, mientras que cada vez se fuma menos y se reduce ligeramente el consumo de alcohol 52
Gráfico 1.16. El crecimiento anual de las inversiones en capital fijo bruto se debilitó después de 2012, mientras que el servicio de la deuda externa por parte del gobierno aumentó después de 2014 52
Gráfico 1.17. Las mujeres del grupo de países analizados están más formadas y viven más que los hombres, pero se ven desfavorecidas en muchos aspectos de las condiciones materiales, la participación ciudadana y el capital social 54
Gráfico 1.18. Los jóvenes y los jóvenes adultos registran mayores tasas de pobreza y desempleo, así como más homicidios y suicidios, y confían menos en la policía 57
Gráfico 1.19. En la mayoría de los indicadores, las personas indígenas de los países analizados registran un bienestar inferior al del promedio de la población no indígena 58
Gráfico 1.20. Las oportunidades para una vida mejor no se distribuyen de forma equitativa entre las zonas urbanas y rurales en los países del grupo analizado 59
Gráfico 1.21. Las mujeres, los residentes en zonas rurales, las cohortes más jóvenes y las personas con menor nivel educativo experimentaron un mayor descenso de la satisfacción con la vida entre 2019 y 2020 en el grupo de países analizados 65
Gráfico 2.1. El ingreso nacional y el consumo final de los hogares per cápita se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE en los países analizados, a pesar del incremento considerable registrado en las dos últimas décadas 82
Gráfico 2.2. En promedio, en los países analizados, tanto los niveles de ingreso nacional como los de gasto de consumo per cápita se hallan estancados desde mediados de la década de 2010 83
Gráfico 2.3. Aunque en la mayoría de los países analizados la satisfacción con el nivel de vida ha aumentado, a partir de 2014 registró una caída y, en los últimos años, se ha recuperado 84
Gráfico 2.4. Desde el año 2000, la pobreza absoluta y la pobreza extrema se han reducido a más de la mitad en el grupo analizado, si bien desde 2017 han vuelto a aumentar en los países con datos disponibles 86
Gráfico 2.5. Los distintos métodos de medición de la pobreza pueden arrojar resultados muy diferentes 88
Gráfico 2.6. La desigualdad en los ingresos se ha reducido significativamente en las dos últimas décadas, aunque desde 2013-2014 disminuye a menor ritmo 90

Gráfico 2.7. En el grupo de países analizados, 2 de cada 5 personas afirman tener dificultades para satisfacer sus necesidades a partir de los ingresos familiares, proporción que comenzó a aumentar en 2014 92
Gráfico 2.8. La inseguridad alimentaria creció en la región de ALC entre 2014 y 2019, y los precios de los alimentos siguen aumentando 94
Gráfico 2.9. Entre 2019 y 2020, en el grupo analizado, la satisfacción de la población con su nivel de vida evolucionó de forma distinta según el país 95
Gráfico 2.10. En los años previos a la pandemia, la tasa de empleo se mantuvo estable en los países analizados, mientras que la de desempleo fue en aumento 99
Gráfico 2.11. La tasa de desempleo oscila entre el 60% y el 80% en los países analizados, pero, en promedio, aproximadamente 1 trabajador de cada 12 no trabaja tantas horas como querría 100
Gráfico 2.12. El grupo analizado presenta grandes diferencias entre países en materia de desempleo, si bien en la mayoría de ellos la proporción de desempleo de larga duración está por debajo del promedio de la OCDE 101
Gráfico 2.13. Más de la mitad de los trabajadores de los países analizados (57%) están empleados en el sector informal 102
Gráfico 2.14. En los países analizados, los salarios reales aumentaron muy poco entre 2010 y 2019, pero su incremento fue mayor en el extremo inferior de la distribución, consiguiendo así rebajar la desigualdad salarial y la pobreza activa 103
Gráfico 2.15. A 3 de cada 5 ciudadanos de los países analizados les preocupa perder su trabajo, mientras que en Europa la cifra es de tan solo 1 de cada 5 105
Gráfico 2.16. En el grupo analizado, aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores tiene una jornada laboral muy larga 106
Gráfico 2.17. Las lesiones relacionadas con el trabajo varían de un país a otro en el grupo analizado 107
Gráfico 2.18. En promedio, solo un poco más de la mitad de la población de los países analizados está cubierta por al menos un sistema de protección social 108
Gráfico 2.19. Pese a la considerable reducción de la proporción de población urbana que vive en barrios marginales desde el año 2000, casi 1 de cada 6 habitantes urbanos vivía en un barrio marginal en 2018 112
Gráfico 2.20. La densidad de vivienda se ha reducido desde el año 2000 y las tasas de hacinamiento varían de forma considerable entre los países analizados; en promedio, afectan a 1 de cada 5 hogares 113
Gráfico 2.21. En 2017, solo el 70% de la población de los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles tenía acceso a servicios de agua potable segura, y solo la mitad de la población tenía acceso a servicios de saneamiento 115
Gráfico 2.22. La proporción de hogares con acceso a Internet en casa se ha incrementado en todos los países del grupo analizado desde 2005 pero, en promedio, solo aproximadamente la mitad de las casas tienen 116
Gráfico 3.1. Desde el año 2000, la esperanza de vida se ha incrementado en 3,7 años en promedio en el grupo de países analizados 130
Gráfico 3.2. Desde 2000, la mortalidad infantil prácticamente se ha reducido a la mitad, en promedio, en los países analizados, mientras que la mortalidad materna ha disminuido en casi un tercio 132
Gráfico 3.3. La mortalidad prematura sigue siendo relativamente alta en los países del grupo analizado, aunque con grandes disparidades 133
Gráfico 3.4. Las enfermedades no transmisibles son la causa más habitual de muerte en los países del grupo analizado 134
Gráfico 3.5. La prevalencia del suicidio sigue considerablemente por debajo del promedio de la OCDE en la mayoría de los países analizados de ALC 135
Gráfico 3.6. El acceso a la atención sanitaria ha mejorado desde 2000, aunque con un gran desembolso de gastos directos para algunos 136
Gráfico 3.7. En 2 de 6 países analizados, más de un 2% de la población ha pasado a situarse por debajo del umbral de la pobreza social debido a los gastos directos en atención sanitaria 137
Gráfico 3.8. La satisfacción con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad disminuyó en promedio en los diferentes países analizados entre 2006-2009 y 2017-2019 138
Gráfico 3.9. Entre 2019 y 2020, los cambios en la satisfacción con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad presentaron considerables variaciones entre los diferentes países analizados 141
Gráfico 3.10. Pese a las mejoras en cuanto a logro educativo, menos de la mitad de los adultos de 25 años o más ha terminado la enseñanza secundaria de ciclo superior en el grupo de países analizados 144
Gráfico 3.11. En la mayoría de los países analizados, el desempeño de los estudiantes de 15 años en las pruebas normalizadas sobre competencia lectora, matemática y científica ha mejorado 146
Gráfico 3.12. Un gran porcentaje de estudiantes latinoamericanos no alcanza el nivel mínimo de competencia necesario para participar de forma productiva en la sociedad 147

Gráfico 3.13. En promedio, en los países analizados, los estudiantes desfavorecidos tienen más del doble de posibilidades de obtener malos resultados en lectura que sus homólogos de entornos ricos, y 30 veces menos posibilidades de situarse entre los alumnos con mejores resultados 148
Gráfico 3.14. La tasa de competencia lectora en adultos ha mejorado en la mayoría de los países desde 2000 149
Gráfico 3.15. En los países de América Latina sobre los que existen datos, los niveles de competencia en capacidad de cálculo y resolución de problemas en entornos tecnológicos de los adultos siguen siendo bajos 150
Gráfico 3.16. La proporción de la población satisfecha con el sistema educativo varía entre los diferentes países analizados, con tendencias divergentes 152
Gráfico 3.17. En términos generales, la satisfacción con la educación cayó en el grupo de países analizados en 2020 con respecto a 2019 154
Gráfico 3.18. Las tendencias de las tasas de homicidios varían entre unos y otros países analizados, aunque la tasa de victimización obtenida a partir de datos facilitados en encuestas descendió en todos los países 157
Gráfico 3.19. En los países analizados sobre los que hay datos disponibles, los robos son la forma más habitual de violencia 158
Gráfico 3.20. En promedio, la proporción de la población que se siente segura se ha mantenido relativamente estable, pero con tendencias divergentes entre los diferentes países 159
Gráfico 3.21. En Argentina, México y Perú, el temor a la delincuencia influye de manera considerable en las actividades cotidianas de la población 160
Gráfico 3.22. Las muertes por accidentes de tráfico en el grupo de países analizados duplican el promedio de la OCDE y la diferencia entre los que obtienen mejores y peores resultados es cada vez mayor 161
Gráfico 3.23. La exposición a partículas finas en el aire ha mejorado en promedio desde 2010, pero las poblaciones de la mayoría de los países de ALC siguen expuestas a niveles nocivos 165
Gráfico 3.24. Los niveles de contaminación atmosférica superan las directrices de la OMS en un 90% de las regiones del grupo de países analizados 166
Gráfico 3.25. En general, el número de personas fallecidas, desaparecidas o directamente afectadas por catástrofes en el grupo de países analizados ha disminuido 168
Gráfico 3.26. La participación electoral se ha mantenido estable en términos generales en la mayoría de los países del grupo analizado, aunque la proporción de la población que manifestó su opinión a un funcionario público ha descendido significativamente en los últimos años 172
Gráfico 3.27. En los países del grupo analizado, la mayoría de las personas considera que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio 173
Gráfico 3.28. El apoyo de las redes sociales ha experimentado pocos cambios en el grupo de países analizados desde 2006-2009 y sigue siendo ligeramente inferior al promedio de la OCDE 176
Gráfico 3.29. En el grupo de países analizados, la mayoría de la población considera que puede contar con otras personas cuando lo necesita, aunque este porcentaje disminuyó tras la pandemia 178
Gráfico 3.30. En promedio, la carga de trabajo no remunerado es relativamente elevada en el grupo de países analizados, pues la población asalariada de determinados países realiza una “doble jornada” de trabajo remunerado y no remunerado 181
Gráfico 3.31. Los niveles de satisfacción con la vida y afecto negativo se mantuvieron relativamente estables, en promedio, en el grupo de países analizados entre 2006-2009 y 2017-2019 183
Gráfico 3.32. Los indicadores de bienestar subjetivo muestran un cambio significativo en algunos países entre 2019 y 2020 187
Gráfico 4.1. La estabilidad regional de la cubierta terrestre enmascara la divergencia de patrones en los países de América Latina 216
Gráfico 4.2. En América Latina y el Caribe, la biodiversidad se está reduciendo a un ritmo que dobla el promedio de la OCDE 218
Gráfico 4.3. La protección de los entornos terrestres y marinos está aumentando en América Latina y el Caribe, si bien no al mismo ritmo en toda la región 219
Gráfico 4.4. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma moderada en la región, mientras que la proporción de renovables en el suministro de energía se ha reducido casi 4 puntos porcentuales desde 2000 221
Gráfico 4.5. En los países analizados, el estrés hídrico es inferior al promedio de la OCDE, pero algunos países registran niveles muy superiores 222
Gráfico 4.6. Entre 2000 y 2017, la huella material per cápita ha aumentado en casi dos tercios de los países analizados 223
Gráfico 4.7. Se observan amplias diferencias en cuanto al valor de los activos fijos producidos per cápita en los países de América Latina, aunque con el paso del tiempo van disminuyendo 227
Gráfico 4.8. La formación bruta de capital fijo siguió creciendo en América Latina, aunque desde 2009 ha aminorado el ritmo 228

Gráfico 4.9. La inversión en infraestructura del transporte como proporción del PIB es mayor en América Latina que en los países de la OCDE, pese a que la infraestructura del transporte sigue estando subdesarrollada 230
Gráfico 4.10. El saldo per cápita de *software* y bases de datos de América Latina representa únicamente el 9% del promedio de la OCDE, mientras que la inversión en I+D anual sigue siendo limitada 231
Gráfico 4.11. Los gobiernos redujeron los pagos de la deuda pública en un 40% en comparación con el año 2000, mientras que los ingresos tributarios representan solo el 60% del promedio de la OCDE 233
Gráfico 4.12. En los países analizados, el coeficiente de suficiencia de capital del sector bancario supera el requerimiento mínimo de Basilea III, pero se sitúa por debajo del promedio de la OCDE 234
Gráfico 4.13. En los países de ALC, 1 de cada 6 jóvenes ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación 236
Gráfico 4.14. Pese a que el empleo informal entre los jóvenes ha ido disminuyendo, todavía incumbe a más del 50% 238
Gráfico 4.15. En promedio, el 70% de los jóvenes han completado la enseñanza secundaria en los países de ALC 11, porcentaje que casi dobla el de 2000 239
Gráfico 4.16. Uno de cada 10 niños menores de 5 años sufre retraso del crecimiento en los países analizados, proporción que se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2000 240
Gráfico 4.17. En los países de ALC, casi el 60% de la población tiene sobrepeso y el 25% es obeso, porcentajes que vienen aumentando desde 2000 241
Gráfico 4.18. La prevalencia del consumo tanto de tabaco como de alcohol en la región de ALC es inferior al promedio de la OCDE 242
Gráfico 4.19. Alrededor de 1 de cada 6 ciudadanos de los países analizados habían donado voluntariamente su tiempo a una organización durante el mes anterior, un nivel ligeramente inferior al de 2006-2009 245
Gráfico 4.20. En los países analizados, solo 1 de cada 7 ciudadanos considera que se puede confiar en la mayoría de las personas 246
Gráfico 4.21. En los países analizados, menos de un tercio de la población confía en el gobierno de la nación, y la mitad confía en la policía local 247
Gráfico 4.22. La percepción de la corrupción tanto de la población como de los expertos en los países analizados es superior al promedio de la OCDE 249
Gráfico 4.23. El apoyo a la democracia está estrechamente vinculado a las medidas de la integridad gubernamental 250
Gráfico 4.24. Solo la mitad de la población considera del todo injustificable eludir el pago de impuestos, proporción que se ha reducido con respecto a comienzos de la década de 2000 y que guarda relación con el apoyo a la democracia 251
Gráfico 4.25. Casi 1 de cada 5 habitantes de América Latina declara pertenecer a un grupo discriminado 252
Gráfico 4.26. Más del 80% de la población de América Latina cree que la distribución del ingreso es injusta 253
Gráfico 4.27. En 2020, la confianza en el gobierno nacional y la percepción de la corrupción mostraban una fuerte correlación 255
Gráfico 5.1. Las diferencias de bienestar entre los géneros son dispares, aunque en general las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas, vivir en la pobreza y dedicar más tiempo al trabajo no remunerado 273
Gráfico 5.2. La feminización tanto de la pobreza absoluta como de la pobreza extrema ha aumentado en la mayoría de los países analizados en las dos últimas décadas 276
Gráfico 5.3. En la mayoría de los países analizados, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ocupar un empleo informal, y sus ingresos mensuales medios son un 14% inferiores a los de ellos 279
Gráfico 5.4. Las mujeres dedican más del doble de horas semanales que los hombres al trabajo no remunerado, y las mujeres trabajadoras dedican casi 10 horas más al trabajo semanal remunerado y no remunerado 282
Gráfico 5.5. En los países analizados, 1 de cada 4 mujeres de 15 a 49 años ha experimentado violencia de pareja a lo largo de su vida, mientras que cada año miles de mujeres son víctimas de feminicidios 284
Gráfico 5.6. Puntuaciones de las dimensiones del SIGI en la región de ALC y sus subregiones 286
Gráfico 5.7. El promedio de la proporción de mujeres en los parlamentos del grupo analizado se ha duplicado (hasta aproximarse al 30%) en las dos últimas décadas 288
Gráfico 5.8. El impacto de la crisis del COVID-19 en la desigualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres 289
Gráfico 5.9. Impactos diferenciados de la pandemia en distintas medidas de bienestar reportado por las propias personas 291
Gráfico 5.10. Los niños experimentan niveles muy elevados de pobreza absoluta y extrema en comparación con la población en edad de trabajar 295
Gráfico 5.11. Los niños varones, así como los niños de zonas rurales, más pobres e indígenas tienen más probabilidades de ocupar un trabajo infantil 297

Gráfico 5.12. La proporción de personas de 5 a 19 años con sobrepeso aumentó de 1 de cada 5 en 2000 a casi 1 de cada 3 en 2016 299
Gráfico 5.13. Las diferencias en los resultados de bienestar son dispares si se comparan los jóvenes con las personas de mediana edad, aunque los primeros tienen más probabilidades de estar desempleados, ocupar empleos informales y ser víctimas de homicidio 301
Gráfico 5.14. En los países analizados, los hombres jóvenes tienen 9 veces más probabilidades que las mujeres jóvenes de morir por homicidio 302
Gráfico 5.15. Mientras que las personas mayores suelen tener menos probabilidades de vivir en la pobreza que el grupo comparativo de mediana edad, sus resultados son inferiores en varios indicadores de calidad de vida 304
Gráfico 5.16. Las personas de 55 a 64 años del grupo analizado presentan mayores tasas de empleo informal que los trabajadores del grupo de máximo rendimiento, sobre todo después de los 65 años 306
Gráfico 5.17. En las últimas dos décadas, tan solo dos países del grupo analizado alcanzaron la total cobertura de las pensiones, y una tercera parte de la población que cumple los requisitos no percibe una pensión 307
Gráfico 5.18. En las zonas rurales, las personas se sienten más seguras, tienen un mayor compromiso cívico y el capital social es más sólido, pero sus resultados son mucho peores que los de las personas que viven en zonas urbanas en numerosas dimensiones del bienestar y en capital humano 314
Gráfico 5.19. La pobreza extrema en las zonas rurales triplica la de las zonas urbanas en los países analizados 315
Gráfico 5.20. La desigualdad en los ingresos es mayor en las zonas urbanas, con las únicas excepciones de Paraguay y Perú 316
Gráfico 5.21. Algo menos del 70% de la población rural tiene acceso a agua y saneamiento, mientras que en las zonas urbanas la cobertura es prácticamente total 317
Gráfico 5.22. Aproximadamente una tercera parte de los hogares tienen acceso a Internet en las zonas rurales, la mitad que en las zonas urbanas 318
Gráfico 5.23. En promedio, en los países analizados, el 8% de la población se identifica como indígena y otro 8% como afrodescendiente 321
Gráfico 5.24. En la mayoría de los indicadores seleccionados las personas indígenas y afrodescendientes registran peores resultados de bienestar que el grupo comparativo 322
Gráfico 5.25. En varios indicadores relativos a la vivienda y los servicios, las personas afrodescendientes e indígenas obtienen peores resultados que otras personas 325
Gráfico 5.26. En los países analizados con datos disponibles existen grandes carencias en la cobertura de las pensiones por origen étnico y raza 326
Gráfico 5.27. Al menos 1 de cada 4 personas indígenas y afrodescendientes considera que pertenecen a un grupo discriminado, en comparación con menos de 1 de cada 6 en el caso de otras personas 327
Gráfico 5.28. Las personas con menos educación afrontan peores condiciones materiales, mientras que la situación no está tan clara en cuanto a la calidad de vida y el capital social 333
Gráfico 6.1. Las medidas y los marcos de bienestar pueden aportar información en la que fundamentar cada fase del ciclo de políticas 356
Gráfico 6.2. Dominios del bienestar actual incluidos en planes nacionales de desarrollo de ALC 366
Gráfico 6.3. Dominios del bienestar futuro incluidos en planes nacionales de desarrollo de ALC 367
Gráfico 6.4. Proceso del Presupuesto del Bienestar de Nueva Zelanda 372

CUADROS

Cuadro 1. Países incluidos en el promedio regional de ALC cuando no existe un cálculo en la fuente 16
Cuadro 2. Códigos ISO de los países analizados y regiones del mundo 17
Cuadro 1.1. Conceptos que aborda el marco del informe ¿Cómo va la vida? de la OCDE y aspectos adicionales relevantes para la región de ALC 31
Cuadro 1.2. Criterios de evaluación de la calidad 32
Cuadro 6.1. Resumen de las medidas y los marcos principales que van “más allá del PIB” aplicados a las políticas públicas en países de ALC 362
Cuadro 6.2. Marcos jurídicos que son la base del cumplimiento de la Agenda 2030 en los países de ALC 363
Cuadro 6.3. Evaluación de impacto *ex ante* de una estrategia coordinada para reducir la pobreza multidimensional en Costa Rica 375

Cuadro del Anexo 1.A.1. Candidatos a conceptos principales e indicadores empleados para ilustrarlos 74
Cuadro del Anexo 6.A.1. Índices Nacionales de Pobreza Multidimensionales en los países de ALC 394
Cuadro del Anexo 6.B.1. Bienestar actual 397
Cuadro del Anexo 6.B.2. Bienestar futuro 398

Siga las publicaciones de la OCDE en:




http://twitter.com/OECD_Pubs


http://www.facebook.com/OECDPublications


http://www.linkedin.com/groups/OECD-Publications-4645871


http://www.youtube.com/oecdilibrary



http://www.oecd.org/oecddirect/

Este libro contiene...

StatLinks
¡Un servicio que transfiere ficheros Excel® utilizados en los cuadros y gráficos!

Busque el logotipo *StatLinks* en la parte inferior de los cuadros y gráficos de esta publicación. Para descargar la correspondiente hoja de cálculo Excel®, sólo tiene que introducir el enlace en la barra de direcciones de su navegador incluyendo primero el prefijo *https://doi.org* o bien haga clic en el enlace de la versión electrónica.

Guía del lector

El 15 de mayo de 2020, el Consejo de la OCDE invitó a Costa Rica a convertirse en miembro de la Organización. En la fecha de preparación de la presente publicación, todavía se encontraba pendiente el depósito del instrumento de adhesión al Convenio de la OCDE de Costa Rica. Por lo tanto, Costa Rica no aparece en la lista de miembros de la OCDE ni se ha incluido en los promedios de la OCDE reseñados.

Convenciones

- Este informe centra su análisis en once países de América Latina y el Caribe (ALC 11): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos países se han seleccionado por estar incluidos en la categoría de países de ingresos altos e ingresos medios-altos en el contexto del instrumento regional de la UE "Facilidad para el Desarrollo en Transición" (véase el Recuadro 1.1). A lo largo de este informe se utiliza el término "países analizados" para designar este grupo de 11 países de ALC.
- En cada gráfico, los datos con la leyenda "ALC 11" son un promedio simple de los 11 países analizados antes mencionados y mostrados en el gráfico, a menos que se indique lo contrario. Cuando no se cuenta con datos de los 11 países analizados, se especifica en el gráfico el número de países incluidos en el cálculo (por ejemplo, "ALC 8" cuando se abarcan datos de 8 de los países analizados).
- En cada gráfico, los datos con la leyenda "OCDE" se refieren al promedio de los países miembros de la OCDE (excluyendo a Costa Rica). Cuando se encuentra disponible en la fuente, el promedio de la OCDE se toma directamente de ella con el objetivo de garantizar la coherencia. Cuando la fuente no calcula el promedio de la OCDE, se halla el promedio simple de los países de la OCDE mostrados, a menos que se indique otra cosa. Cuando no se cuenta con datos de los 37 países de la OCDE (excluyendo a Costa Rica), se especifica en el gráfico el número de países incluidos en el cálculo (por ejemplo, "OCDE 33").

En cada gráfico, los datos que lleven la leyenda ALC" (sin ningún número) se refieren al promedio regional del conjunto de América Latina y el Caribe, incluidos los ALC 11. Cuando se encuentra disponible en la fuente, el promedio regional de ALC se toma directamente de esta con el objetivo de garantizar la coherencia. Cuando la fuente no calcula el promedio regional de ALC, se considera el promedio simple de los países con datos disponibles que figuran en la lista del

- Cuadro 1. Este sistema sigue la convención utilizada de manera general por el Centro de Desarrollo de la OCDE y la CEPAL de las Naciones Unidas.

Cuadro 1. Países incluidos en el promedio regional de ALC cuando no existe un cálculo en la fuente

Antigua y Barbuda	Dominica	Nicaragua
Argentina	**República Dominicana**	Panamá
Bahamas	**Ecuador**	**Paraguay**
Barbados	El Salvador	**Perú**
Belice	Granada	San Cristóbal y Nieves
Bolivia	Guatemala	San Vicente y las Granadinas
Brasil	Guyana	Santa Lucía
Chile	Haití	Surinam
Colombia	Honduras	Trinidad y Tobago
Costa Rica	Jamaica	**Uruguay**
Cuba	**México**	Venezuela

Nota: En negrita los países analizados.

- Cuando se encuentra disponible en la fuente, el promedio regional de ALC y el promedio de la OCDE generalmente se calculan como promedios ponderados. La única excepción se produce en el caso de datos tomados de fuentes de la CEPAL, donde se encuentra disponible el promedio regional simple de ALC con respecto a todos los indicadores. Para ver información pormenorizada sobre los cálculos, consúltese el enlace incluido en el epígrafe "Fuente" que figura debajo de cada gráfico.
- Los promedios de la OCDE y de ALC ponderados (o totales de la OCDE y ALC) se muestran en aquellos casos en los que la convención de la OCDE es facilitar este tipo de promedio. En esos casos, se especificará en las notas del gráfico junto con los pormenores sobre la metodología de ponderación. Por ejemplo, cuando los datos se ponderan por población, se hace de acuerdo con el tamaño de la población en diferentes países, como porcentaje de la población total de la OCDE/ALC. En el total de OCDE/ALC se considera a todos los países de la OCDE/ALC como una única entidad, en la que cada país contribuye de forma proporcional a la suma.
- En los análisis de variaciones a lo largo del tiempo y líneas de tendencia, los promedios de ALC 11, ALC y la OCDE se refieren solo a aquellos países con datos disponibles respecto a cada uno de los años mostrados, es decir se mantiene una muestra de países constante a lo largo de todos los años. Esto implica que solo se incluyen países con una serie de tiempo completa, lo que puede dar lugar, en ocasiones, a diferentes promedios de ALC 11, ALC y la OCDE correspondientes a las líneas de tendencia en comparación con los relativos a los primeros y últimos puntos temporales disponibles.
- En cada gráfico se especifica el periodo de tiempo abarcado, con notas en las que se facilita información más pormenorizada cuando los datos se refieren a años diferentes relativos a distintos países. Los países se denominan con su código ISO (Cuadro 2).
- Al comparar los primeros y últimos puntos temporales, se han agrupado los datos correspondientes a indicadores extraídos de la Encuesta Gallup Mundial en un período de cuatro años (2006-2009) y otro de tres (2017-2019) con el objetivo de mejorar la precisión de las estimaciones. Al haber mejorado la cobertura de los países con el paso del tiempo, con respecto al último período disponible se ha considerado en cambio un promedio de tres años en lugar de cuatro. Respecto a las líneas de tendencia que se muestran en el Capítulo 1, los datos se han agrupado de manera sistemática con respecto a un período de tres años hasta 2014.
- En relación con la información sobre las desigualdades, cuando los datos de la fuente se han extraído de sondeos con tamaños de muestra inferiores (por ejemplo, la Encuesta Gallup Mundial y el Latinobarómetro), se han agrupado a lo largo de un período de tiempo más amplio para

garantizar un número de observaciones suficiente. Por norma general, se han agrupado los datos con respecto al período 2014-2019 en relación con la Encuesta Gallup Mundial y con respecto al período 2016-2018 en el caso de las desigualdades por edad y grupo étnico con respecto al Latinobarómetro, con el fin de mejorar la precisión de las estimaciones. Para obtener información más completa, consúltense los archivos de Statlink que acompañan a los gráficos del Capítulo 5.

Cuadro 2. Códigos ISO de los países analizados y regiones del mundo

ARG	Argentina	**DOM**	República Dominicana	**OCDE**	Promedio de la OCDE
BRA	Brasil	**ECU**	Ecuador	**PRY**	Paraguay
CHL	Chile	**ALC**	Promedio de América Latina y el Caribe	**PER**	Perú
COL	Colombia	**ALC 11**	Promedio de los países analizados	**URY**	Uruguay
CRI	Costa Rica	**MEX**	México		

Resumen ejecutivo

¿Se han trasladado las mejoras en el ingreso nacional de América Latina a los diferentes ámbitos de la vida de las personas? En este informe se aborda esta cuestión a través de una serie de indicadores, tomando como base el Marco de bienestar de la OCDE. El análisis se centra en un grupo de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay), denominados en adelante "países analizados".

Durante las dos décadas anteriores a la pandemia se observaron mejoras considerables en el bienestar promedio de esta región…

El número de personas en situación de pobreza absoluta de los países analizados descendió de 1 de cada 3 en 2006 a 1 de cada 5 en 2019 y, en ese mismo período, se registró un sustancial descenso de la desigualdad en los ingresos. También mejoró el acceso de la población al agua potable y a Internet, además de que el porcentaje de población urbana que vive en asentamientos informales o barrios marginales descendió de manera significativa. El promedio de la esperanza de vida al nacer aumentó desde los 73 años en 2000 a casi 77 años en 2018 en los países analizados, con tasas de mortalidad que prácticamente se habían reducido a la mitad en el caso de menores de 5 años y, en el caso de las madres durante su embarazo o al dar a luz, descendieron un 30%. El porcentaje de la población que había recibido una educación secundaria superior en los países analizados aumentó del 34% al 46%, mientras que el porcentaje de personas con estudios terciarios se incrementó del 12% al 19%. En general, el porcentaje de la población que manifiesta tener niveles bajos de satisfacción con la vida descendió en estos países del 24% al 19%.

…pero el ritmo de progreso se ha ralentizado desde mediados de la década de 2010 y, hasta 2019, persistían problemas estructurales como la informalidad y las desigualdades

Tras el fin del auge experimentado por el precio de las materias primas a mediados de la década de 2010, las mejoras en las condiciones materiales decayeron e incluso se revirtieron en la mayoría de los países de esta región. Después de 2014, los resultados en cuanto a fuerza de trabajo y percepción de las propias personas sobre sus niveles de vida empeoraron en los países analizados, y también se ralentizó el ritmo de reducción de la desigualdad en los ingresos y la pobreza. La confianza de los ciudadanos en el gobierno y su apoyo a la democracia cayeron a partir de 2010. Pese a que las tasas de suicidio descendieron entre el año 2000 y 2019 prácticamente un 25% en los países analizados, las tendencias presentaban marcadas divergencias entre unos y otros países, y a partir de 2015 volvieron a incrementarse. El aumento a largo plazo de la satisfacción con la vida experimentado durante las dos décadas previas a 2019 también alcanzó su punto álgido en 2013, con ligeros descensos a partir de entonces. El porcentaje de trabajadores que desempeñan un empleo informal sigue siendo persistentemente elevado (del 57%), y tan solo se registró una ligera reducción entre 2010 y 2019. Pese a que se avanzó en cierta medida en la superación de las brechas de género, edad, lugar de residencia, grupo étnico o raza y nivel educativo en materia de bienestar, siguen existiendo grandes disparidades.

Muchos de los recursos que apuntalan la sostenibilidad del bienestar -capital natural, humano, social y económico- se encuentran en peligro o están descendiendo

El escaso capital social de la región (del que son un ejemplo la exigua y cada vez menor confianza en los demás, la baja moral tributaria y el aumento de la percepción de corrupción) subraya la necesidad de reforzar la relación entre las personas y las instituciones públicas que las atienden. El capital humano ha aumentado debido al incremento del logro educativo de nuevos cohortes, pero se ve obstaculizado por porcentajes persistentemente elevados de empleo informal y población que "ni trabaja, ni estudia ni recibe formación" (NINI), así como por el aumento de las tasas de obesidad. Los niveles de capital económico de la región partían de una base reducida en relación con los países de la OCDE y, pese a registrarse ciertas mejoras desde 2000 en términos de formación bruta de capital fijo y recaudación de impuestos, otros aspectos se mantuvieron igual (por ejemplo, la inversión en I+D) o el ritmo de progreso se ralentizó desde 2013. Pese a que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales, presenta una especial vulnerabilidad debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Desde el año 2000, la masa forestal intacta descendió en promedio un 8% en los países analizados y la biodiversidad está descendiendo a una velocidad que duplica el ritmo promedio de la OCDE.

Al mirar más allá de los promedios se aprecian amplias variaciones entre los diferentes países y también dentro de estos

En prácticamente todos los indicadores, los promedios de los países analizados encubren diferencias considerables en los niveles y tendencias registrados entre unos y otros. Más allá de estas variaciones entre los diferentes países, se encuentran disparidades igual de pronunciadas en la distribución del bienestar dentro de su territorio nacional, y mujeres, niños, ancianos y jóvenes, la población rural, los pueblos indígenas y de ascendencia africana, así como quienes tienen menor nivel educativo suelen obtener peores resultados y tener menos oportunidades, en particular en lo relativo a las condiciones materiales. Por ejemplo, las mujeres de los países analizados tienen más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza y, en las últimas décadas, esta diferencia se ha pronunciado, en lugar de atenuarse. También realizan más del doble de trabajo no remunerado y cuidados domésticos que los hombres, tienen menos probabilidades de sentirse seguras y la probabilidad de que no trabajen, ni estudien ni reciban formación (NINI) es prácticamente el doble que la de los hombres. No obstante, junto a estas desventajas existen ciertas fortalezas, como el aumento de las tasas de logro educativo entre las mujeres, la enorme conectividad de los jóvenes y el incremento de los niveles de capital social en las zonas rurales.

La pandemia de COVID-19 podría hacer desaparecer muchos de los beneficios alcanzados en las últimas décadas en materia de bienestar, y también acentuar desafíos ya existentes

Como se ha señalado anteriormente, la pandemia llegó en un momento en el que ya estaban surgiendo importantes vulnerabilidades en lo que atañe al bienestar. En 2020, el desempleo y la pobreza absoluta aumentaron de forma drástica en toda la región, al tiempo que cayeron los ingresos, el empleo y la fuerza de trabajo. Las malas condiciones de la vivienda han dificultado la lucha contra el virus y la brecha digital obstaculizó las oportunidades de aprender, trabajar y acceder a servicios de forma remota. Los fuertes descensos del nivel de satisfacción con la vida y las relaciones sociales ponen de relieve el costo humano de la crisis y subrayan la necesidad de utilizar planes de recuperación y políticas macroeconómicas (en países en los que existe margen para hacerlo) como herramientas para superar las vulnerabilidades preexistentes y también las nuevas que han surgido durante la crisis.

Un enfoque de las políticas basado en el bienestar ayudaría a los países de ALC a abordar los desafíos sociales sumamente interrelacionados que encaran

Los países de la región de ALC han avanzado mucho en la incorporación de un enfoque multidimensional centrado en las personas de la medición y la política (en particular en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas). No obstante, al igual que ocurre en otras regiones del mundo, son necesarios vínculos más fuertes entre, por una parte, los objetivos multidimensionales recogidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo y, por otra, su aplicación real, incluso a través de la asignación presupuestaria, la formulación de políticas y la focalización. Construir una visión compartida de las prioridades en materia de políticas y utilizar un marco común para identificar las fortalezas y debilidades de los países puede mejorar tanto las políticas nacionales como la cooperación regional, a través de alianzas internacionales más efectivas y el aprendizaje de pares. La integración de un enfoque basado en el bienestar en América Latina exigirá un amplio apoyo público y político, así como mecanismos institucionales que vinculen las prioridades en materia de bienestar con operaciones del gobierno a largo plazo. También se necesitan mejoras en la disponibilidad de datos desagregados armonizados sobre todos los aspectos pertinentes de las políticas de bienestar. Este informe tiene por objeto apoyar el futuro trabajo y las conversaciones continuas entre los agentes políticos, los órganos estadísticos y una amplia variedad de interlocutores sociales para que el bienestar de las personas sea el eje central de las actuaciones de los gobiernos en ALC.

1 ¿Cómo va la vida en América Latina? Introducción y aspectos clave

Los avances en materia de bienestar en la región de ALC entre 2000 y 2019 fueron considerables. No obstante, el ritmo de los progresos se ralentizó de forma notable desde mediados de la década de 2010. Por otra parte, muchos de los recursos naturales, humanos, sociales y económicos que mantienen la sostenibilidad del bienestar ya se veían amenazados o estaban en declive antes de la pandemia, y problemas estructurales como los altos niveles de informalidad y las desigualdades se mantuvieron hasta 2019. Existe el riesgo de que la pandemia de COVID-19 haga que se malogren muchos de los avances en materia de bienestar alcanzados en las últimas décadas, y agrave los problemas ya existentes. Un enfoque de bienestar en las políticas ayudaría a los países de ALC a afrontar las dificultades sociales sumamente interconectadas a las que se enfrentan, aunque integrar este tipo de enfoque en América Latina requerirá del apoyo generalizado tanto público como político, además de mecanismos institucionales que afiancen las prioridades de bienestar en las operaciones de los gobiernos a largo plazo. Asimismo, es necesario introducir mejoras en los datos sobre todos los aspectos del bienestar relevantes a efectos de las políticas.

¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas es un informe conjunto elaborado por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) y el Centro de Desarrollo (DEV) de la OCDE. Este supone culminar un proyecto de colaboración de tres años entre la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea con el objeto de identificar indicadores de bienestar comparables para la región de América Latina y el Caribe (ALC) (véase el Recuadro 1.1). La región ha registrado una agitación extraordinaria desde la puesta en marcha del proyecto en 2018, empezando por la ola de protestas sociales que comenzó a finales de 2019, a la que pronto siguió la irrupción de la pandemia de COVID-19 en el arranque de 2020, y sus posteriores efectos socioeconómicos sin precedentes, que afectaron sobre todo al bienestar de las poblaciones más vulnerables. Describir la progresión del bienestar en la región durante este período ha sido como apuntar a un blanco móvil, ya que sus repercusiones han ido evolucionando en tiempo real. En todo caso, estos acontecimientos, que ni siquiera se preveían al comienzo del proyecto, han acentuado todavía más la necesidad de ampliar la visión del progreso para que su eje sea el bienestar de las personas, para "construir un futuro mejor".

Resumen

Este informe sirve a tres propósitos. El primero consiste en promover un mayor conocimiento de los resultados de bienestar en América Latina, presentando aquellos relativos a una serie de dimensiones importantes para la vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro. A lo largo de cuatro capítulos, el informe analiza los indicadores de condiciones materiales, calidad de vida, recursos para el bienestar futuro y experiencias para los distintos grupos de población. Si bien para la mayoría de indicadores se incluye el promedio de ALC, el informe se centra en particular en 11 países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—, que fueron seleccionados por su condición de países de ingresos altos y medios-altos en el contexto del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea, así como, en muchos casos, por haber manifestado su interés y su compromiso con este proyecto (véase el Recuadro 1.1). El segundo es contribuir al objetivo de medir mejor el bienestar en la región, identificando ámbitos de mejora clave en la recopilación y la cobertura de los datos: por cada dimensión del bienestar o grupo de población cubierto, una sección específica pone de relieve los principales aspectos para el desarrollo estadístico, a fin de valorar mejor el estado de la región. El tercero defiende que, para que las medidas de bienestar puedan emplearse en la toma de decisiones políticas, no basta con limitarse a elaborar más estadísticas y de mejor calidad; también se requiere innovación institucional, analítica y operativa en el modo en que los gobiernos formulan las políticas. Este tema se trata en profundidad en el último capítulo del informe. Partiendo del trabajo previo que analiza el uso de los marcos de bienestar en las políticas de los países de la OCDE, profundiza en los restos y los logros que plantea aplicar un enfoque de bienestar a la política en la región de ALC.

Recuadro 1.1. Métricas para las políticas del bienestar y del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe

El presente informe constituye el producto final del proyecto *Métricas para políticas del bienestar y del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe,* dirigido por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE y el Centro de Desarrollo de la OCDE, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea. Este proyecto forma parte del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea, una herramienta regional de apoyo al diseño y la aplicación de políticas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en ALC.

El concepto de "desarrollo en transición" se refiere a aquellos países que están alcanzando mayores niveles de ingresos pero siguen enfrentándose a problemas estructurales (o "trampas del desarrollo") que tienen que ver con aspectos como las desigualdades, la movilización de recursos internos, marcos sociales débiles, disparidades a nivel subnacional, capacidades de innovación limitadas y escasa diversificación económica (OCDE et al., 2019[1]). Para obtener una descripción más pormenorizada de las trampas del desarrollo específicas que existen en la región de ALC consulte el Capítulo 6. A escala internacional, la transición de los países hacia unos mayores niveles de ingreso nacional bruto (INB) per cápita tiene entre sus consecuencias que dejan de poder optar a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Esto implica perder una importante fuente de apoyo financiero externo incluso pese a que sigan afrontando complejos retos de desarrollo. En este contexto, el proyecto *Métricas para las políticas del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe* se centra en la necesidad de contar con medidas más amplias del desarrollo, más allá de los ingresos, que sirvan de base para las políticas nacionales y la cooperación internacional. Si bien las medidas empleadas en el informe aspiran a ser relevantes para el conjunto de la región, los datos que se recogen en los capítulos expositivos del informe (Capítulos 1 a 5) se centran en los 11 países de ingresos altos y medios-altos antes mencionados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El proyecto ha tenido como objetivo general respaldar el desarrollo sostenible y emplear las métricas de bienestar relevantes en la formulación de políticas, en aras de lograr el desarrollo sostenible en la región de ALC. Esta es una labor tanto estadística como política. En el plazo de tres años, el proyecto ha ofrecido numerosas plataformas para el diálogo internacional entre los organismos políticos, así como entre los estadísticos y los responsables de la formulación de políticas. Se han celebrado numerosos actos presenciales y virtuales que han promovido el intercambio de conocimientos y experiencias en una red regional de expertos durante el proyecto, entre los que se incluyen:

- **"Métricas que marcan la diferencia: uso de los indicadores de** bienestar y del desarrollo sostenible en las políticas públicas de América Latina y el Caribe", conferencia internacional celebrada en Bogotá en octubre de 2019 (OCDE, 2019[2]). Durante los dos días de la conferencia tomaron parte más de 50 oradores y 200 asistentes. En ella se expusieron distintas perspectivas y experiencias sobre el uso de los indicadores de bienestar en las políticas, por medio de un taller técnico (primer día) y un acto de alto nivel (segundo día), inaugurado por el presidente colombiano Iván Duque. Este evento estuvo organizado de forma conjunta en asociación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario de Colombia.
- "**Towards a Comprehensive Measurement of Well-being" ("Hacia una medición integral del bienestar"),** serie de conferencias de expertos celebradas entre junio y julio de 2020. Esta serie, compuesta por seis actos en línea, atrajo a una audiencia internacional para debatir temas clave entre los que se incluyen experiencias de diseño de encuestas multidimensionales,

el uso de registros administrativos y la mejora en la medición de la desigualdad en los ingresos. La serie, organizada conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, sirvió también como base para las deliberaciones del grupo mexicano de expertos encargado del diseño de una nueva encuesta nacional de bienestar.

- **"Medición de las percepciones, evaluaciones y experiencias de las personas: cuestiones clave y mejores prácticas en América Latina y el mundo"**, serie de seminarios virtuales celebrada de septiembre a octubre de 2020. Coorganizados con la División de Estadísticas de la CEPAL, estos cuatro seminarios virtuales dieron respuesta al interés suscitado en la región por medir una serie de aspectos subjetivos de la vida de las personas (su percepción de los cambios que se están produciendo en el conjunto del país, sus evaluaciones de aspectos clave de la vida y sus experiencias personales en un gran número de campos). También abordaron la metodología de recopilación de datos sobre bienestar subjetivo, confianza y discriminación, además de analizar las experiencias del país. Como continuación a estos seminarios virtuales, la División de Estadísticas de la CEPAL ha adoptado medidas para establecer un grupo de trabajo específico (en el contexto de la Conferencia Estadística de las Américas) con miras a analizar vías para mejorar la medición comparativa de estos aspectos en toda la región de ALC.
- "**Llevando el bienestar al centro de las políticas públicas en América Latina y el Caribe"**, que formó parte de la serie de seminarios virtuales Desarrollo en transición, celebrada el 7 de julio de 2021. Este seminario web sirvió de espacio para la presentación y el debate de las experiencias nacionales en el uso de herramientas multidimensionales y marcos de bienestar en las políticas de los países de ALC. Tuvo como objetivo compartir las principales lecciones extraídas y las dificultades encontradas en la formulación de políticas para lograr incidir en el bienestar de los ciudadanos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las Jornadas sobre Desarrollo en transición relativas a América Latina y el Caribe, organizadas en el marco del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea con las principales partes interesadas de la región, sirvieron de oportunidad para hacer balance de las valiosas experiencias e ideas para una recuperación sostenible e inclusiva tras la crisis en ALC.

Medición del bienestar: objeto y alcance

Medir el bienestar implica adoptar un enfoque multidimensional y centrado en las personas para evaluar la progresión nacional, en lugar de centrarse exclusivamente en los indicadores de crecimiento económico. Durante décadas, medidas como el ingreso nacional bruto (INB) y el producto interno bruto (PIB) han servido de sustitutos de los niveles de desarrollo de los países. Esta prioridad otorgada a los indicadores macroeconómicos se ha basado en gran parte en el supuesto de que el aumento de los ingresos nacionales (o la productividad) conduce a una mejora automática y general de los resultados sociales. No obstante, cada vez existe un mayor reconocimiento de que la relación entre crecimiento económico, por una parte, y desarrollo sostenible e inclusivo, por otra, es más compleja, y que es necesario contar con un conjunto de información más amplio para obtener una imagen más completa.

Las iniciativas para ir "más allá del PIB" por lo general no pretenden sustituirlo por otra medida única, sino complementarlo con varias métricas adicionales, con el objetivo de compensar sus carencias y aquellos aspectos a los que da un protagonismo excesivo[1]. Según Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi y Martine Durand, "lo que medimos afecta lo que hacemos, y si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto. Si no medimos algo, lo pasaremos por alto, como si el problema no existiese" (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[3]). Teniendo en cuenta que mejorar el bienestar de las personas de manera sostenible y equitativa se considera, en general, un objetivo fundamental de la política (el cual constituye la esencia de los ODS, a los que se han adherido todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas), se necesita un conjunto de indicadores más amplio para valorar si las políticas contribuyen a este propósito.

La idea de que la ampliación de las perspectivas del progreso nacional y el desarrollo debe ir más allá del PIB, de los promedios y de las personas y las empresas no es en absoluto novedosa. Especialmente en los últimos quince años, varias iniciativas han contribuido a dar una mayor visibilidad a esta necesidad de medir el bienestar y las reservas de recursos que lo sustentan. Esto incluye, en especial, prestar más atención al capital natural, social y humano, así como su papel para mantener el bienestar en el tiempo y para las generaciones futuras. Tuvieron una gran influencia en este sentido las recomendaciones de la Comisión sobre la medición del desempeño económico y el progreso social (establecida en 2008 y conocidas comúnmente como informe "Stiglitz-Sen-Fitoussi", por sus presidentes Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi), que establecieron una hoja de ruta para el desarrollo estadístico necesario con miras a obtener una instantánea más exacta de la vida de las personas y los factores de la sostenibilidad (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[4]). La OCDE también lleva tiempo haciendo énfasis en la necesidad de ampliar el alcance de los indicadores empleados para evaluar el progreso de la sociedad más allá de los indicadores macroeconómicos. De hecho, en 2011 puso en marcha su Iniciativa para una Vida Mejor, que tiene como objetivo promover la medición del bienestar y que este concepto forme parte del núcleo central de la formulación de políticas públicas. Esta Iniciativa engloba una serie de productos, que van desde la publicación regular *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2020[5]) hasta la herramienta interactiva en línea Índice para una Vida Mejor (http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/), y muchos otros informes, directrices metodológicas, documentos de trabajo y artículos. A nivel europeo, en septiembre de 2009 la Comisión Europea emitió una comunicación titulada "Más allá del PIB", en la que se identifican acciones clave destinadas a mejorar la métrica del progreso (Comisión Europea, 2009[6]). Desde entonces, las instituciones europeas han proseguido innovando y reflexionando sobre la mejor forma de incorporar una perspectiva más centrada en las personas en la medición y la política a nivel regional (Consejo de la Unión Europea, 2021[7]; Consejo de la Unión Europea, 2019[8]).

Teniendo presente esta idea, muchos países del mundo ya han hecho esfuerzos por establecer marcos multidimensionales para medir el bienestar. Más de la mitad de los países de la OCDE han desarrollado algún tipo de cuadro de indicadores del bienestar nacional, entre los que se incluyen Francia, Nueva Zelanda, Italia, Israel, los Países Bajos, el Reino Unido, Eslovenia y Noruega (OCDE, 2019[9]). Los países de ALC (incluidos tanto los pertenecientes como los no pertenecientes a la OCDE) también son pioneros en la medición del bienestar desde hace años. Conceptos como "Vivir Bien", empleado en Bolivia, y "Buen Vivir", empleado en Ecuador, encarnan el principio del bienestar sostenible y equitativo para todas las personas, y se han empleado como base en la recopilación de datos y la acción política. Países de la región como Chile, Colombia, México y muchos otros pretenden ampliar los límites del desarrollo de herramientas de medición multidimensionales, englobando aspectos como bienestar subjetivo, delincuencia y seguridad, calidad de vida y otros relativos al bienestar de las personas (para más información consúltese el Capítulo 6).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también representa este cambio de paradigma, al reconocer el bienestar de las personas y del planeta como objetivos últimos del desarrollo. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas interrelacionados, con 231 indicadores únicos convenidos por la comunidad estadística internacional con el propósito de medir los progresos. El gran número de indicadores ilustra la importante tensión que se genera al ir "más allá del PIB", es decir, cómo equilibrar la facilidad de comunicación (la necesidad de contar con un número menor de indicadores o incluso un solo índice compuesto) con la exhaustividad de la información (que requiere un conjunto de indicadores mayor). Ambos aspectos son importantes y, en última instancia, tanto el alcance como la cobertura adecuados de un conjunto de indicadores de bienestar dependerá de su finalidad prevista. Un análisis de los cuadros de indicadores de bienestar desarrollados en 28 países de la OCDE permitió establecer una distinción clara entre los marcos centrados en medir, monitorear y elaborar informes sobre el bienestar (normalmente, dirigidos por las oficinas nacionales de estadísticas (ONE), aunque no siempre) y los elaborados como apoyo a la aplicación de políticas (con frecuencia dirigidas por los departamentos del Tesoro u otros departamentos del núcleo del gobierno) (OCDE, 2019[9]). En términos generales, los cuadros de indicadores de monitoreo suelen ser mayores

(con hasta 147 indicadores en el caso de *Measures of Australia's Progress* (Medidas del progreso de Australia)), mientras que aquellos orientados a la política son de menor tamaño, con un rango de 5 a 15 indicadores en la mayoría de los casos (OCDE, 2019[9]).

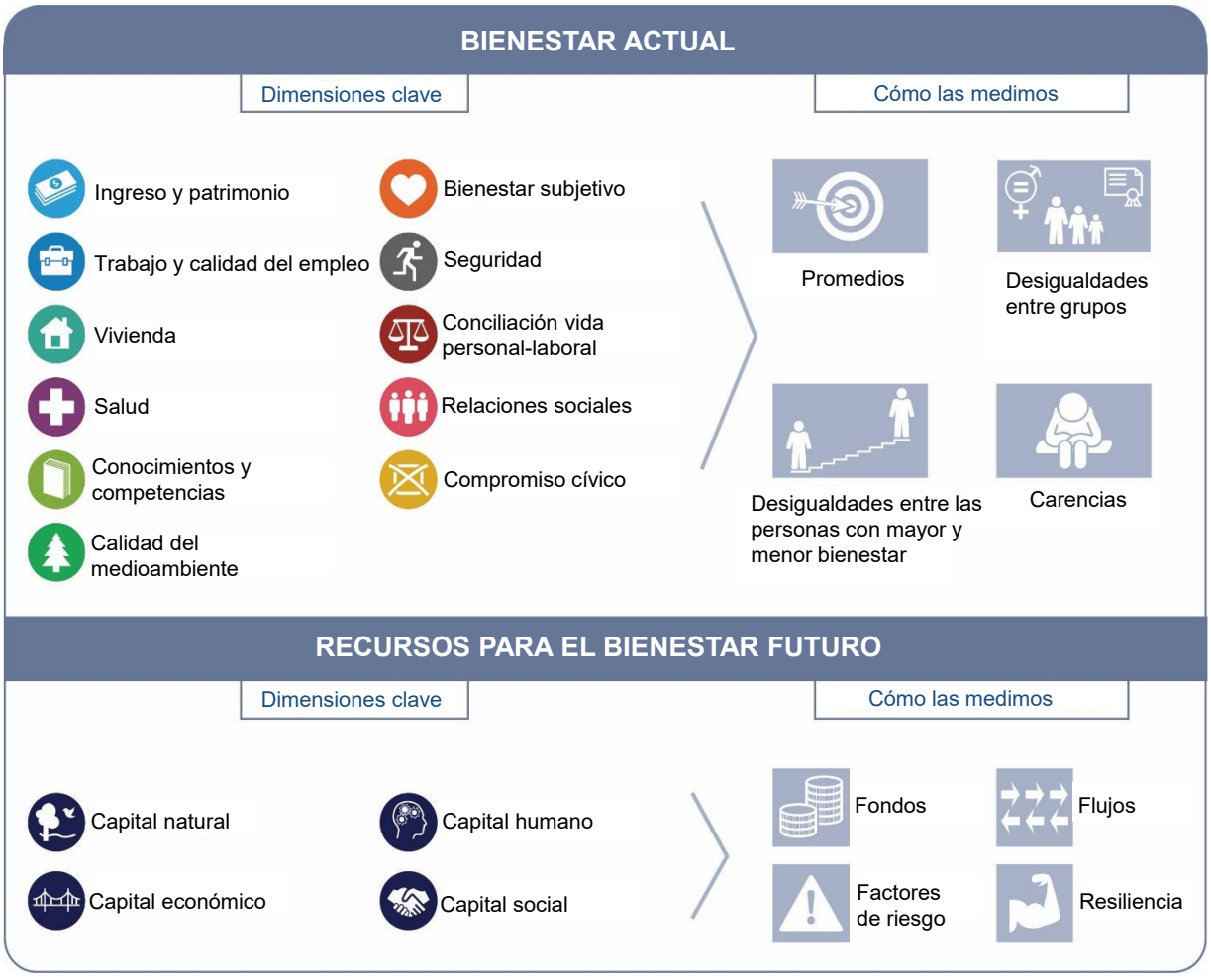
El cuadro de indicadores que se presenta en este informe prioriza la exhaustividad sobre la brevedad, y presenta 107 indicadores como apoyo a la medición y la elaboración de informes sobre bienestar en la región de ALC. No obstante, cabe señalar que la relevancia política de los indicadores ha sido un criterio importante a la hora de seleccionarlos (véase más adelante la sección sobre el proceso de selección de indicadores). Es de esperar que las conclusiones expuestas en este informe establezcan los trabajos preparatorios para el proceso de carácter más político de seleccionar un conjunto de indicadores más limitado que respalde el diálogo político entre los países de la región y los asociados para el desarrollo. En el Anexo 1.A. de este capítulo se recoge una lista preliminar de 30 candidatos a conceptos principales y los indicadores que los acompañan. Dichos indicadores han servido de orientación a las notas por países en línea que acompañan al informe.

El marco de la OCDE para medir el bienestar y su adaptación al contexto de ALC

Tanto la descripción como el análisis que se recogen en el presente informe se basan en el marco de la OCDE, que en el último decenio ha servido de orientación para la medición y la investigación sobre el bienestar, tanto dentro como fuera de la Organización. Dicho marco concibe el bienestar en función de 11 dimensiones del bienestar actual y cuatro tipos de recursos para el bienestar futuro (capital humano, natural, económico y social) (Gráfico 1.1). Como reflejo del trabajo previo sobre el significado del desarrollo y las deliberaciones sobre la naturaleza del bienestar humano[2], el marco de la OCDE presenta cuatro características distintivas:

- En primer lugar, se concentra en las **personas** (es decir, tanto los particulares como las familias), su situación y cómo se relacionan con otros miembros de la comunidad en la que viven y trabajan. Es importante centrarse en ellas y no en el sistema económico, ya que habitualmente existen diferencias entre la evaluación de la economía de un país en su conjunto y las experiencias de bienestar de sus habitantes.
- En segundo lugar, se concentra tanto en los **resultados** para el bienestar actual y los **recursos** en los que se basa el bienestar futuro. Resulta fundamental concentrarse en los resultados del bienestar actual (p. ej., el desempeño de los alumnos) y no en los insumos (p. ej., el gasto en educación) o los productos (p. ej., los alumnos que se gradúan), ya que los resultados proporcionan información directa sobre la vida de las personas.
- En tercer lugar, tiene en cuenta la distribución del bienestar en la población junto con los logros promedios; esto permite analizar las **desigualdades** en las distintas dimensiones del bienestar, y también por edad, género, condición socioeconómica y otras características.
- Por último, analiza aspectos tanto **objetivos como subjetivos** del bienestar, ya que las experiencias personales y las valoraciones que hacen las personas de las circunstancias de su vida aportan información importante, además de las medidas objetivas de dichas circunstancias.

Gráfico 1.1. Marco de bienestar de la OCDE



Fuente: OCDE (2020[5]), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9870c393-en.

El marco de la OCDE no representa una expresión definitiva de lo que constituye una "buena vida", ya que aquello más importante para las personas difiere entre individuos y contextos nacionales, en función de las circunstancias, la cultura y muchos otros factores. No obstante, proporciona una lista exhaustiva de "ingredientes" para el bienestar inclusivo y sostenible[3]. El marco pretende proporcionar una estructura para llevar a la práctica el concepto de bienestar en distintos contextos[4]. En esta perspectiva, el marco aportó un punto de partida para identificar un conjunto de indicadores comparables para medir el bienestar en ALC.

En la adaptación del marco para reflejar las prioridades de la región han influido consideraciones tanto conceptuales como pragmáticas. En primer lugar, era importante determinar si el marco de la OCDE pasaba por alto aspectos de especial importancia para los latinoamericanos, o si, por el contrario, prestaba una atención excesiva a temas menos relevantes en la región. A fin de evaluar los componentes necesarios del marco de bienestar de ALC se recurrió a varios métodos y fuentes, entre los que se incluyen:

- Los resultados de una consulta realizada en 2016 a las oficinas nacionales de estadísticas (ONE) de la región de ALC[5], además de intercambios adicionales con las ONE regionales y la División de Estadísticas de la CEPAL.

- El contenido de los planes nacionales de desarrollo y otros documentos de políticas estratégicas, además de los marcos de medición multidimensional, elaborados por los países de la región.
- Dos documentos clave de un ejercicio realizado por el Grupo de coordinación estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.
  - El primero, una ambiciosa propuesta para un marco regional de indicadores de los ODS que engloba 307 indicadores, de los que 143 proceden del marco de indicadores mundiales de las Naciones Unidas, 135 fueron indicadores complementarios propuestos y 29 fueron indicadores sustitutos propuestos (CEPAL, 2017[10]).
  - El segundo, el informe final del ejercicio de priorización, en el que se presentaron los indicadores conservados entre los propuestos tras el extenso debate celebrado entre los miembros del Grupo de coordinación estadística. Este informe incluyó 154 indicadores, de los que 120 proceden del marco de indicadores mundiales de las Naciones Unidas, 30 son indicadores complementarios y 4 son indicadores sustitutos (CEPAL, 2019[11]).
- Estos documentos constituyen recursos importantes, ya que, en conjunto, ofrecen una amplia imagen general de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el monitoreo del desarrollo sostenible, desde la perspectiva de los expertos regionales en medición.
- Por último, varios actos presenciales y virtuales celebrados durante el proyecto (véase el Recuadro 1.1) brindaron la oportunidad de intercambiar conocimientos y propiciaron el debate con un amplio abanico de expertos sobre los aspectos más importantes de la medición del bienestar para las políticas en América Latina y el Caribe.

Tanto la investigación como la consulta permitieron determinar que, a nivel de dimensión, el marco de la OCDE ha englobado los diversos aspectos que se consideran importantes para el bienestar en la región. No obstante, también demostró que, en lo que se refiere a los conceptos clave que deben destacarse y la selección de indicadores resultante, era necesario que la expresión de las dimensiones difiriera del enfoque de la OCDE en algunos ámbitos. En concreto, si bien todos los conceptos incluidos en *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2020[5]) (punto de referencia para llevar a la práctica el marco de bienestar en los países de la OCDE) fueron también relevantes para el bienestar en los países de ALC, se excluyeron varios aspectos de gran importancia para la región, o se hizo un énfasis menor del necesario en ellos. En el Cuadro 1.1 se resumen los conceptos clave que aborda el marco del informe *¿Cómo va la vida?* de la OCDE, así como aspectos adicionales relevantes identificados para ALC. El cuadro definitivo de indicadores en el que se fundamenta este informe no incluye todos estos conceptos, debido a la limitación de los datos (como se expone en la sección siguiente). Sin embargo, este inventario ha servido de ambiciosa guía del ideal que se espera alcanzar en una lista pormenorizada de métricas de bienestar para la región.

En el Cuadro 1.1 no se ha incluido cada uno de los conceptos específicos de ALC que identificó la investigación, sino únicamente aquellos que numerosas fuentes señalaron como relevantes para la región. Un grupo de aspectos omitido en la actual versión, pero que podría considerar incluirse en futuras versiones del marco, tiene que ver con las creencias y prácticas culturales, que revisten especial importancia para las comunidades indígenas y sobre las que la disponibilidad de datos también continúa planteando dificultades.

Cuadro 1.1. Conceptos que aborda el marco del informe ¿Cómo va la vida? de la OCDE y aspectos adicionales relevantes para la región de ALC

Dimensión	Informe *¿Cómo va la vida?* de la OCDE	Aspectos adicionales relevantes para la región de ALC
Condiciones materiales		
Ingreso y patrimonio/consumo	Ingreso familiar; patrimonio del hogar; desigualdad en los ingresos; pobreza relativa de ingresos; dificultad para llegar a fin de mes; inseguridad financiera	Pobreza absoluta y pobreza extrema; seguridad alimentaria
Trabajo y calidad del empleo	Tasa de empleo; brecha salarial de género; desempleo a largo plazo; ninis; inseguridad en el mercado laboral; tensión laboral; largas horas de trabajo remunerado; ingresos	Informalidad; desempleo; pobreza laboral; desigualdad salarial; lesiones asociadas al trabajo; protección social; trabajo infantil
Vivienda e infraestructura	Hacinamiento; acceso a la vivienda; costo excesivo de la vivienda; hogares pobres sin acceso a servicios sanitarios básicos; acceso a Internet	Prevalencia de barrios marginales; acceso al agua potable
Calidad de vida		
Salud	Esperanza de vida; percepción de la salud; muertes a causa de suicidio, el alcohol o las drogas	Mortalidad materna; mortalidad de lactantes e infantil (menores de 5 años); carga de morbilidad; acceso a una atención sanitaria asequible y de calidad
Conocimientos y competencias	Competencias cognitivas de los alumnos en lectura, matemáticas y ciencias; competencias de alfabetización y aritmética de los adultos	Logro educativo; acceso a una educación de calidad
Seguridad	Homicidios; sentirse seguro; muertes por accidentes de tráfico	Victimización por delitos; efecto de la delincuencia en la conducta; violencia de género
Calidad del medioambiente	Acceso a espacios verdes; exposición a la contaminación del aire exterior	Impacto de los desastres naturales
Compromiso cívico	Influencia sobre la acción del gobierno; participación electoral	Gobernanza inclusiva
Relaciones sociales	Apoyo social; tiempo dedicado a las interacciones sociales; satisfacción con las relaciones personales	
Conciliación de la vida personal y laboral	Tiempo para el ocio; trabajo no remunerado; brecha de género en las horas trabajadas; satisfacción con el uso del tiempo	Tiempo de desplazamiento al trabajo
Bienestar subjetivo	Satisfacción con la vida; balance entre emociones positivas y negativas	
Recursos para el bienestar futuro (reservas de capital)		
Capital humano	Logro educativo de los jóvenes adultos; infrautilización de la mano de obra; mortalidad prematura; prevalencia de tabaquismo; prevalencia de obesidad	Malnutrición infantil; consumo de alcohol; empleo informal juvenil
Capital social	Confianza en los demás; confianza en el gobierno; participación de actores gubernamentales; paridad de género en la política; corrupción; voluntariado por medio de organizaciones	Apoyo a la democracia; discriminación; percepciones de la desigualdad; moral fiscal
Capital natural	Cubierta terrestre natural y seminatural (reserva y tasas de pérdida o de ganancia); bosques intactos; zonas terrestres y marinas protegidas; pérdida de biodiversidad; emisiones de gases de efecto invernadero; huella de carbono; energías renovables; balance de nutrientes del suelo; estrés hídrico; huella material; tasa de reciclado	
Capital económico	Activos fijos producidos; activos de propiedad intelectual; formación bruta de capital fijo; inversión en I+D; capital financiero neto de la economía total; endeudamiento del hogar; capital financiero neto del gobierno; apalancamiento del sector bancario	Inversión en infraestructura; deuda pública; ingresos impositivos del gobierno

Selección de indicadores para medir el bienestar en la región de ALC

Una vez establecido el marco conceptual, el siguiente paso consistió en analizar las fuentes de datos disponibles, a fin de seleccionar los más adecuados para el cuadro de indicadores. Para la selección se contó con un conjunto de indicadores estandarizados a modo de orientación. Se basaron en los criterios de evaluación de la calidad empleados en la primera edición de *¿Cómo va la vida?* de 2011 (OCDE, 2011[12]) y se mejoraron con la revisión de la calidad hecha en 2019 del conjunto de indicadores de la OCDE de *¿Cómo va la vida?* (Exton and Fleischer, a continuación[13]). En el Cuadro 1.2 se presentan los distintos criterios (relevancia, disponibilidad de desgloses de población para calcular las medidas de la desigualdad, exactitud, credibilidad y comparabilidad, oportunidad y frecuencia, capacidad de interpretación y limitaciones del trabajo) y se explican los principales aspectos considerados en cada una de las categorías.

Cuadro 1.2. Criterios de evaluación de la calidad

Relevancia *Valor para medir y monitorear el bienestar*	**Desgloses de población** *Las desigualdades pueden cuantificarse*	**Exactitud** *El indicador refleja de forma correcta el concepto subyacente que pretende captar*	**Credibilidad y comparabilidad** *Las estadísticas se elaboran con arreglo a normas de gran calidad y son comparables entre países*	**Oportunidad y frecuencia** *Velocidad y frecuencia de disponibilidad de los datos*	**Capacidad de interpretación** *Facilidad con la que los usuarios pueden comprender y emplear y analizar los datos de forma adecuada*	**Limitaciones del trabajo** *Requisitos prácticos para producir estadísticas de bienestar comparables y asequibles*
Resultado susceptible de ser aplicado en las políticas	Pueden cuantificarse las desigualdades (horizontales, verticales, carencias)	Validez	Fuente y calidad de la muestra	Producción recurrente de datos en el futuro	Interpretación inequívoca	Cobertura del país y diversidad
Para el bienestar actual: Unidad de análisis: a nivel individual o del hogar Para los capitales: factor de reservas/flujos/riesgo/ resiliencia		Fiabilidad	Definición comparable entre países	Series de tiempo homogéneas que se remontan en el pasado	Resumen general del resultado del concepto	Carga adicional de la recopilación para quien produce los datos
			Recopilación del instrumento bien consolidada	Tiempo transcurrido entre recopilación y publicación	Transparencia de la elaboración/simplicidad	

Fuente: Exton y Fleischer (a continuación[13]), "The future of the OECD Well-being Dashboard" (El futuro del cuadro de indicadores de bienestar de la OCDE), *Statistics working papers*, OCDE, París.

En conjunto, los criterios de calidad del Cuadro 1.1 describen las características ideales de una métrica de bienestar, pero incluso en el cuadro de indicadores de *¿Cómo va la vida?* de la OCDE, no todos los indicadores cumplen por completo cada uno de estos criterios. Para este informe se adoptó un planteamiento más pragmático. Si bien se consideraron importantes todos los aspectos de calidad, se otorgó prioridad a los siguientes:

- **Relevancia:** El valor del indicador destinado a medir y monitorear el bienestar debía ser claro, tener un elevado grado de relevancia política y referirse o bien a los hogares o a las personas (con respecto al bienestar actual) o a los distintos tipos de recursos relevantes para el bienestar futuro.
- **Capacidad de interpretación:** El significado del indicador debía ser evidente, y la variación en este inequívocamente positiva o negativa.
- **Oportunidad:** Siempre que sea posible, los datos deben basarse en recopilaciones de datos recurrentes, con series de tiempo anuales que al menos se remonten a 2000. En la medida de lo posible, se dio prioridad a los datos que se publican con un desfase no superior a dos años.
- **Credibilidad y comparabilidad**: Dentro de lo posible, los datos únicamente se obtuvieron de estadísticas oficiales basadas en definiciones comparables, o, en aquellos casos en que no estaban disponibles, de instrumentos bien consolidados. En general, se prefirieron aquellos indicadores que permiten la comparación directa con el promedio de la OCDE.
- **Limitaciones del trabajo:** Se dio prioridad a los indicadores con cobertura de datos de los 11 países analizados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay); por norma general, para ser incluido, cada indicador debía disponer de datos de series de tiempo de al menos 7 de los 11 países.

No obstante, dado que este proyecto también tenía por objeto dar una mayor visibilidad a aspectos que por lo general no se tienen en cuenta en los ejercicios de establecimiento de valores de referencia, se permitió una serie de excepciones a estas normas. En estos casos, en su lugar se emplearon los "siguientes mejores" indicadores disponibles cuando la importancia del concepto era mayor que la necesidad de cumplir todos los criterios de calidad. Por ejemplo, en el caso de los ingresos y el consumo, respecto a los que se carece de datos comparables a nivel de los hogares de la región, se han empleado dos indicadores obtenidos de las cuentas nacionales (Ingreso Nacional Bruto per cápita y Gasto en Consumo Final de los Hogares) como sustitutos de la medida de ingreso disponible del hogar per cápita incluido en *¿Cómo va la vida?* En otros casos se han empleado datos cuya oportunidad, comparabilidad y cobertura nacional distaban de ser las ideales, a fin de proporcionar una indicación de la situación, además de poner de relieve la necesidad de disponer de mejores datos en estos ámbitos. Sin embargo, incluso con este planteamiento de mayor flexibilidad faltan datos comparables en algunos ámbitos importantes para el bienestar en la región de ALC (como el patrimonio del hogar y la desigualdad de patrimonio, y las actividades de uso del tiempo que van más allá del trabajo remunerado y no remunerado). Cada una de las secciones de los Capítulos 2 a 4 del presente informe (correspondientes a cada una de las dimensiones del marco) y el Capítulo 5 (correspondiente a cada tipo de desigualdad del grupo analizado) concluye con un análisis de los "Aspectos para el desarrollo estadístico", que tiene por objeto mejorar la medición del bienestar en los distintos ámbitos.

Debe hacerse especial mención al uso de la Encuesta Gallup Mundial y a los datos del Latinobarómetro para una serie de medidas subjetivas que recoge el informe. En los casos en que ha sido posible, los datos se han obtenido de organizaciones internacionales, que a su vez recogen los datos de las ONE, y armonizan las medidas a posteriori con miras a obtener resultados más comparables. No obstante, pese a que un número cada vez mayor de ONE de la región están recopilando indicadores subjetivos sobre diversos temas, la disponibilidad de datos comparables sigue sin ser suficiente como para permitir compilar indicadores basados en fuentes oficiales. Como ya se ha hecho en el pasado con la serie *¿Cómo va la vida?* de la OCDE, en estos casos se han empleado fuentes alternativas (aunque de gran calidad). Tanto Gallup como el Latinobarómetro constituyen órganos de elaboración de encuestas consolidados,

cuyos resultados nacionales se basan en preguntas comparables y los tamaños de sus muestras cuentan al menos 1.000 observaciones.

Por último, en el proceso de selección de indicadores se tuvo como consideración general emplear en la medida de lo posible los procedentes del marco de indicadores de los ODS. En la sección siguiente se compara el marco de los ODS con el de bienestar de la OCDE, y se explica el grado de relevancia de los indicadores empleados en este informe a efectos del primero.

Comparación del marco de los ODS con el marco de bienestar de la OCDE

El marco de bienestar de la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas presentan numerosos aspectos comunes en lo referente a contenido y propósito, así como el objetivo compartido de mejorar la vida de las personas en ámbitos sociales, medioambientales y económicos clave. De hecho, salvo el Objetivo 17, orientado a los procesos, todos los ODS se representan en el marco de bienestar (véase el Gráfico 1.2). No obstante, también presentan importantes diferencias. El enfoque de bienestar de la OCDE pretende ser una herramienta de diagnóstico, analítica y viable a efectos de políticas, integrada en un marco conceptual claro. Por su parte, la Agenda de los ODS constituye una serie de compromisos políticos y ambiciosos. La Agenda 2030 pone de relieve que todas las metas importan y que, para tener éxito, los países deben lograr todos los objetivos y metas. Pero realmente es necesario que los países sean capaces de comprender la mejor forma de secuenciar las políticas. Esto requiere un planteamiento conceptual que contribuya a priorizar las acciones e identificar los equilibrios y las sinergias. En este sentido, ambos planteamientos se complementan: abordar los ODS desde la óptica del bienestar puede ayudar a los países a identificar los indicadores más relevantes para monitorear los progresos hacia el desarrollo sostenible.

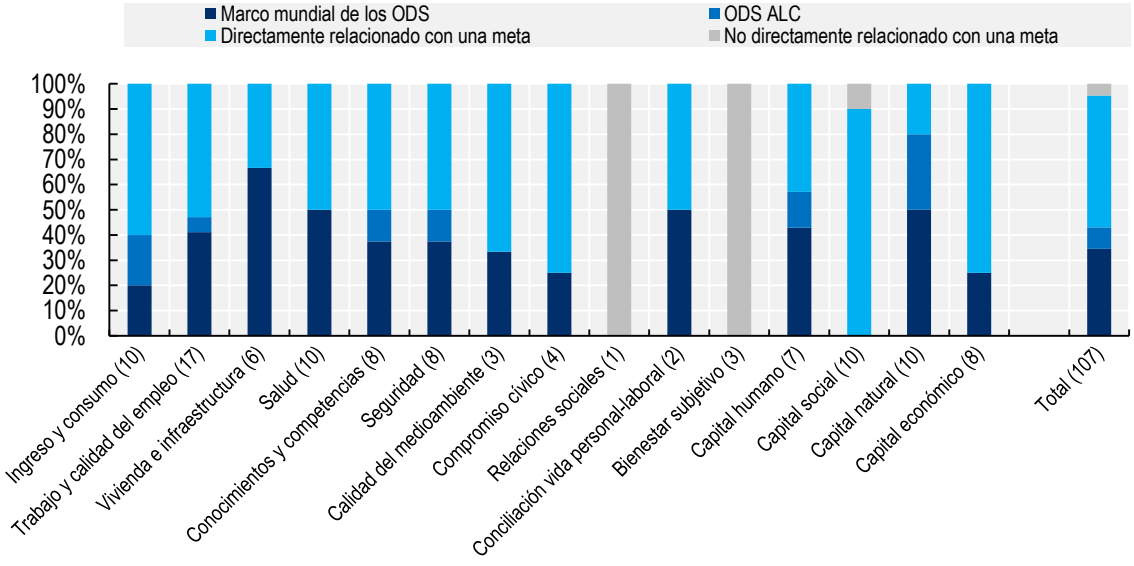
Gráfico 1.2. Correspondencia de los ODS con las dimensiones del marco de bienestar de la OCDE

Marco de bienestar de la OCDE			Objetivos de Desarrollo Sostenible
Bienestar actual		Ingresos y riqueza	ODS 1 (pobreza); ODS 2 (alimentos)
		Empleo e ingresos	ODS 8 (trabajo decente y economía)
		Vivienda	ODS 11 (ciudades)
		Salud	ODS 3 (salud)
		Conciliación vida personal-laboral	ODS 8 (trabajo decente y economía)
		Educación y competencias	ODS 4 (educación)
		Compromiso cívico y gobernanza	ODS 16 (instituciones)
		Calidad del medioambiente	ODS 6 (agua); ODS 11 (ciudades)
		Seguridad personal	ODS 16 (instituciones)
Desigualdades		**[captadas en todas las dimensiones]**	ODS 1 (pobreza); ODS 5 (mujeres); ODS 10 (desigualdad)
Recursos para el bienestar futuro		Capital natural	ODS 13 (clima); ODS 14 (océanos); ODS 15 (biodiversidad); ODS 12 (producción sostenible)
		Capital económico	ODS 7 (energía); ODS 8 (trabajo y economía); ODS 9 (infraestructura); ODS 12 (producción sostenible)
		Capital humano	ODS 3 (salud); ODS 4 (educación)
		Capital social	ODS 16 (instituciones)

En la medida de lo posible, los indicadores empleados para completar el marco de bienestar de la región de ALC se seleccionaron mediante referencia al marco de indicadores de los ODS, teniendo en cuenta tanto el Marco mundial de los ODS (elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas) (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]) como los indicadores complementarios y sustitutos de los ODS para ALC, identificados por el Grupo de Coordinación Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEPAL, 2019[11]).

En el Gráfico 1.3 se establece el grado de relevancia para el marco de indicadores de los ODS correspondiente a los distintos indicadores que se contemplan en este informe. En conjunto, 37 de los 107 indicadores (algo más de una tercera parte) se han tomado directamente de la lista del Marco mundial de los ODS, y otros 9, de la lista priorizada de indicadores de los ODS para la región de ALC. Otros 56 indicadores adicionales (más de la mitad del conjunto) se consideran directamente relevantes para una meta de los ODS, pese a no estar incluidos ni en el Marco mundial ni en la lista priorizada para ALC. Por ejemplo, se han incluido tanto la proporción entre los quintiles S80/S20 (Capítulo 1) como el coeficiente de Gini de ingresos del trabajo (Capítulo 2), ya que proporcionan información resumida sobre los ingresos y la desigualdad salarial respectivamente, lo cual sirve como base para la meta 10.4 de los ODS de "Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad". Del mismo modo, en la dimensión del capital social se ha empleado una serie de indicadores principalmente subjetivos para captar conceptos relevantes a efectos de las metas 16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas), 16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas) y 16.7 (Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades). En algunos casos, los indicadores empleados fueron los sustitutos más próximos disponibles para los indicadores del Marco mundial. Por ejemplo, en ausencia de una cobertura de datos adecuada por países sobre el indicador 10.3.1, se emplearon los datos del Latinobarómetro sobre la proporción de la población que asegura pertenecer a un grupo que ha sido objeto de discriminación.[6]

Gráfico 1.3. Grado de relevancia de los indicadores de *¿Cómo va la vida en América Latina?* para las metas de la agenda de los ODS



Nota: Las cifras entre paréntesis de cada denominación se corresponden con el número de indicadores de cada dimensión. Marco mundial de los ODS hace referencia a la lista oficial de indicadores elaborada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]). ODS ALC hace referencia a los indicadores complementarios y sustitutos de los ODS correspondientes a la región de ALC identificados por el Grupo de Coordinación Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (2019[11]). "Directamente/no directamente relacionado con una meta" se refiere a la lista oficial de metas de los ODS (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]).

StatLink https://stat.link/d86fp9

En la mayoría de los casos, el motivo para emplear un indicador alternativo o complementario en lugar de uno tomado del Marco mundial o de la lista priorizada para ALC fue una de las tres consideraciones expuestas a continuación: en primer lugar, la necesidad de centrarse en medidas de resultados resumidas cuya interpretación sea inequívoca. Como ya se ha señalado, muchos de los indicadores de los ODS están orientados a políticas o procesos, y no a los resultados. También suelen centrarse en problemas políticos limitados, en lugar de hacer énfasis en los resultados de alto nivel. Las métricas clave para monitorear el bienestar social general, como la esperanza de vida o la participación electoral, no se incluyen en las listas de indicadores de los ODS, pese a incluirse aquí. En segundo lugar, en enfoque de la medición del bienestar de la OCDE (al igual que muchos otros) destaca el valor de las medidas subjetivas además de las objetivas, mientras que las listas de indicadores de los ODS incluyen muy pocas medidas subjetivas. En tercer lugar, pese a los progresos continuados desde 2015, todavía no existen datos de calidad cobertura y comparabilidad suficientes para todos los indicadores de los ODS; en estos casos fue necesario buscar los indicadores alternativos más próximos disponibles.

Por último, de los 107 indicadores que figuran en este informe, respecto a cinco de ellos no puede establecerse una relación directa con una meta de los ODS. Esto se aplica en concreto a todos los indicadores de relaciones sociales (la proporción de personas que asegura tener a alguien con quien contar en caso de necesidad) y bienestar subjetivo (satisfacción con la vida reportada por la propia persona, balance negativo de afecto, proporción de personas con baja satisfacción con la vida) y a un indicador de capital social (la proporción de personas que hacen voluntariado). Esto es un reflejo de las diferencias conceptuales entre los dos marcos: pese a que existe un notable grado de solapamiento, las dimensiones que se consideran importantes para el bienestar inclusivo y sostenible no son exactamente las mismas en ambos. Si bien no se mencionan en concreto en ninguna de las metas, las relaciones sociales sólidas, los elevados niveles de bienestar subjetivo y la participación cívica activa son todos ellos aspectos de las metas de desarrollo sostenible centrado en las personas que se detalla en los ODS.

El uso de los marcos de bienestar en las políticas

Para comprender de forma más precisa los retos de desarrollo a los que se enfrentan los distintos países, resulta esencial contar con marcos de indicadores de gran calidad, exhaustivos y multidimensionales. No obstante, a fin de garantizar que estas métricas se emplean posteriormente en la toma de decisiones, que es el objetivo último de este empeño, no basta con producir más datos y de mejor calidad sobre el bienestar y la sostenibilidad. Para que los gobiernos avancen en la adopción de un enfoque de política de bienestar, se requieren innovaciones institucionales, analíticas y operativas, así como mejoras estadísticas. Además del análisis estadístico que se recoge en el presente informe, otro aspecto igualmente importante de la investigación consistió en estudiar cómo podrían emplearse los marcos de bienestar a lo largo del ciclo de formulación de políticas en la región de ALC, partiendo de la experiencia acumulada en otros países de la OCDE. En esto se centra el Capítulo 6.

Un enfoque de bienestar en la política emplea los datos contrastados en este ámbito de forma integrada a lo largo de su ciclo de formulación —desde la fase de programación de la agenda (pasando por la planificación del desarrollo), hasta la formulación de políticas y la elaboración de presupuestos, la implementación, el monitoreo y la evaluación— para trabajar en pro de una visión más completa, a largo plazo e integral del desarrollo. Debería centrar enérgicamente la acción del gobierno en aquello que más importa a las personas y la sociedad, en lugar de hacerlo en un solo objetivo (o una serie muy limitada de objetivos), como el crecimiento del PIB. Cada vez son más los gobiernos de todo el mundo que incorporan elementos de este enfoque (con independencia de si emplean o no una etiqueta específica de “bienestar”), ya que reconocen que para afrontar los grandes retos actuales es necesario distanciarse de las formas de pensar y actuar tradicionales, cortoplacistas y orientadas al aislamiento.

En el Capítulo 6 se presentan los conocimientos y la experiencia adquiridos sobre el uso de los marcos de bienestar en las políticas de los países de ALC y otros países de la OCDE. En él se identifican una serie de lecciones clave que sirven de base a la política nacional y la cooperación internacional:

- **Adoptar una perspectiva multidimensional puede ayudar a los países de ALC a afrontar los cambios sociales extremadamente interrelacionados a los que se enfrentan, que se han visto agravados de forma adicional por la crisis del COVID-19**. Al respaldar los esfuerzos pangubernamentales y centrar la atención de los gobiernos en aquellos ámbitos que presentan mayores necesidades, los marcos multidimensionales de bienestar pueden contribuir a reforzar la eficacia y la eficiencia de los procesos de formulación de políticas. Durante la recuperación pos-COVID, más que nunca antes, los gobiernos de ALC están llamados a idear respuestas políticas a la crisis que evalúen y aborden el carácter multidimensional del bienestar de las personas.
- **Aplicar un enfoque de bienestar en la política puede orientar el proceso de construir un futuro mejor tras la pandemia, al ayudar a los gobiernos a restablecer, rediseñar, realinear y reconectar sus prioridades de varias formas**. Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de los principales retos a los que se enfrenta la región, como la universalización de la protección social, las demandas de los ciudadanos de replantear un nuevo contrato social y el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación internacional (OCDE et al., a continuación[15]). Un enfoque de bienestar puede arrojar claridad a los objetivos, las prioridades y las medidas del éxito: articular qué significa en la práctica construir un futuro mejor. Contribuye a identificar las vulnerabilidades tanto previamente existentes como nuevas, o las acumuladas, a fin de dirigir el apoyo de forma más eficaz. Aborda temas que en ocasiones tienen menor visibilidad en la política, pero que revisten una gran importancia para la calidad de vida de las personas y que se han visto gravemente afectados durante la pandemia, como las relaciones sociales, la salud mental y el bienestar subjetivo. Fomenta la resiliencia de los sistemas, lo que no solo engloba los sistemas económicos y naturales, sino también los sociales (como son las instituciones y la confianza). Asimismo, contribuye a establecer redes de colaboración entre los departamentos y las agencias del gobierno para que puedan centrarse en mayor medida en los resultados comunes, necesarias para cumplir las agendas integradas multidimensionales como las que se requerirán en la aplicación de los planes inclusivos y sostenibles de recuperación de la pandemia.
- **Los gobiernos de los países de ALC ya han adoptado medidas importantes para aplicar un enfoque de la política que va "más allá del PIB"**. Si bien no siembre se emplea la palabra "bienestar", los países de ALC están muy avanzados en la incorporación de un enfoque multidimensional y centrado en las personas en la medición y las políticas (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[16]). Por ejemplo, muchos países de la región cuentan con una prolongada trayectoria en el uso del Índice de Pobreza Multidimensional (incluso para focalizar las políticas sociales durante la crisis del COVID-19), mientras que las oficinas de estadística de la región han adoptado por completo la agenda de los ODS y están haciendo grandes esfuerzos por dar seguimiento a su logro. Tanto los planes nacionales de desarrollo como otras estrategias de desarrollo de la región también incluyen, cada vez con más frecuencia, un enfoque integral del desarrollo que tiene en cuenta los objetivos sociales y medioambientales, además de los objetivos económicos.
- **Los enfoques participativos en el desarrollo de marcos multidimensionales y el establecimiento de prioridades sociales pueden contribuir a reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos**. Para garantizar la legitimidad y el apoyo público a este tipo de marcos, resulta esencial una participación amplia del público en el desarrollo y la revisión periódica de los marcos multidimensionales de bienestar, además de movilizar la acción colectiva para lograr los objetivos sociales identificados. Esto cobra especial importancia en un momento en que los esfuerzos por reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos son muy necesarios en la

región, con miras a implementar reformas fundamentales y lograr una recuperación sólida, sostenible e inclusiva (OCDE et al., a continuación[15]).

- **Si bien los planes nacionales de desarrollo adoptan una perspectiva cada vez más multidimensional, los objetivos económicos continúan predominando en gran medida, en parte debido a las lagunas de información sobre los objetivos no económicos**. El análisis de los planes nacionales de desarrollo (PND) de ALC, incluido en el capítulo, ha demostrado que, aunque los PND incluyen cada vez más objetivos sociales y medioambientales, continúan predominando los objetivos económicos, y se presta menos atención a dimensiones más amplias del bienestar, o a otras formas de capital necesarias para mantener en bienestar en el tiempo, más allá del capital económico.
- **Se precisan vínculos más sólidos entre los objetivos multidimensionales establecidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo, por una parte y, por otra, su aplicación mediante la dotación presupuestaria, el diseño de políticas y la focalización, así como otros mecanismos políticos**. Aprovechar las buenas prácticas existentes y reforzar las relaciones entre los "objetivos" y la "implementación" —incluida la dimensión presupuestaria— puede marcar la diferencia entre un plan de desarrollo nacional, que sigue siendo una visión de alto nivel, frente a otro basado en objetivos sociales compartidos de forma general, y que puede llevarse a la práctica y movilizar la acción colectiva para mejorar la vida de las personas.
- Por último, el informe argumenta que los **marcos multidimensionales tienen el potencial de orientar la toma de decisiones a escala regional e internacional**, así como a nivel nacional (y subnacional). Esto cobra especial relevancia en el contexto de la crisis de la COVID-19, y otros desafíos mundiales como el cambio climático y la migración. Construir un futuro mejor también dependerá de unas formas más robustas e innovadoras de cooperación y colaboración internacional. Convenir un único conjunto de prioridades al que dar seguimiento con indicadores comunes en toda la región (un proceso a la vez político y técnico) ayudaría a los países de ALC a identificar las prioridades y dificultades que comparten, así como sus puntos fuertes y débiles, y también a ampliar el ámbito de aprendizaje entre pares y de actuación coordinada. A su vez, esto contribuiría a que surja una serie más amplia y flexible de modalidades de asociación internacional (sin limitarse únicamente a la ayuda financiera), más adaptada a las necesidades de los países en una era de desarrollo en transición (OCDE et al., 2019[1]).

Estructura del informe

En el resto de este capítulo se presentan los **aspectos clave** de los Capítulos 2 a 5 del informe. Estos aspectos clave proporcionan un resumen de alto nivel de la evolución de las tendencias en el tiempo, presentando series de tiempo promedias correspondientes a los 11 países analizados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) y, en los casos en que sea posible, el promedio regional de ALC y el promedio de la OCDE. En la sección de aspectos clave se resumen los avances y los retrocesos generales observados en los distintos ámbitos del bienestar en los países objeto de estudio (al tiempo que se reconoce que en muchos casos el promedio oculta divergencias de patrones entre los países analizados y dentro de estos, como se muestra más detalladamente en los Capítulos 2 a 5). También se resumen las principales desigualdades en materia de bienestar entre los distintos grupos de población, que se tratan en el Capítulo 5, y concluye con un resumen de los datos contrastados sobre el impacto de la pandemia, además de los aspectos para el desarrollo estadístico, que se señalan a lo largo del informe.

En los Capítulos 2 a 5 se aborda más detalladamente la evolución de todos los ámbitos comprendidos en el marco de bienestar de la OCDE:

- El Capítulo 2, sobre las **condiciones materiales**, abarca los ingresos y el consumo, el trabajo y la calidad del empleo y la vivienda, analizando tanto los patrones promedios (a nivel de país) como las desigualdades verticales (es decir la distribución general en la sociedad de los resultados de bienestar seleccionados), así como las carencias (es decir, la proporción de personas que se encuentran por debajo de determinado umbral de bienestar);
- El Capítulo 3 sobre **calidad de vida**, adopta el mismo planteamiento para abordar la salud, los conocimientos y competencias, la seguridad, la calidad del medioambiente, el compromiso cívico, las relaciones sociales, la conciliación de la vida personal y laboral y el bienestar subjetivo;
- En el Capítulo 4, sobre los **recursos para el bienestar futuro,** se presentan los indicadores de las cuatro reservas de capital consideradas en el marco de bienestar de la OCDE, es decir, el capital económico, natural, humano y social;
- El Capítulo 5, sobre **desigualdades en materia de bienestar entre los grupos sociales y los territorios**, analiza las desigualdades horizontales por género, edad (niños, jóvenes y ancianos), territorios (centrándose en las diferencias entre zonas urbanas y rurales), origen étnico y raza (por la condición de indígena o afrodescendiente), así como la educación.

En cada uno de estos capítulos se muestran los resultados a nivel del país a partir de los últimos datos disponibles para cada indicador,[7] y se comparan con el año 2000 o el año más próximo disponible, en caso de que existan series de tiempo adecuadas. En la mayor parte de los casos, los datos más recientes corresponden a 2019 y la mayoría de los resultados describen las variaciones en el bienestar desde comienzos del siglo XXI hasta el inicio de la pandemia de COVID-19. Los resultados se organizan por secciones, en función de la dimensión del bienestar en los Capítulos 2 y 3, por tipos de reservas de capital destinadas a los recursos para el bienestar futuro en el Capítulo 4, y en función de los distintos grupos de población en el Capítulo 5. Cada una de las secciones concluye con dos subsecciones especiales sobre:

- El **impacto de la pandemia de COVID-19** sobre la dimensión, el recurso o el grupo de población objeto de análisis. Si bien, en general, en el cuerpo principal de cada una de las secciones no se aborda la pandemia como tal, sí se recogen datos contrastados sobre los factores de resiliencia y vulnerabilidad que han configurado las repercusiones de la crisis en los distintos países. Además, esta subsección se basa en las investigaciones y las proyecciones disponibles para abordar la posible repercusión de la pandemia en cada uno de los aspectos. En los casos en los que es posible, también se presentan datos que reflejan las diferencias entre los niveles de 2019 y 2020.
- **Aspectos para el desarrollo estadístico**. En estas subsecciones se analizan las carencias estadísticas que deben abordarse, así como los problemas metodológicos que deben tenerse en cuenta para mejorar la medición de los distintos aspectos del bienestar tanto actual como futuro.

Por último, el Capítulo 6 analiza a la **política a través de una óptica del bienestar: experiencias de ALC y del conjunto de los países de la OCDE**. Como ya se ha descrito, en él se presentan las experiencias de uso de los marcos multidimensionales de bienestar en las políticas de los países de la región de ALC, y otros países de la OCDE, así como las enseñanzas para la política de bienestar a nivel nacional e internacional.

Aspectos clave: evolución del bienestar en el grupo de países analizados

En 2019, varios aspectos de la vida habían mejorado en toda la región de ALC con respecto al año 2000. Ahora bien, el proceso de desarrollo del bienestar no fue sencillo, e incluso antes de que la pandemia afectara a la región en 2020 ya existían importantes dificultades. En los 11 países analizados, los avances significativos en las condiciones materiales, incluida la reducción de la pobreza

absoluta y la desigualdad en los ingresos, así como las mejoras en las condiciones de la vivienda, no siempre han ido acompañados de mejoras similares en la calidad de vida (p.e., en aspectos de seguridad, conexiones sociales y compromiso cívico). La ralentización del progreso económico a mediados de la década de 2010 incidió directamente en el nivel de vida (p.e., reduciendo la disponibilidad de empleos formales y aumentando el desempleo), pero también se asoció con un descenso de la satisfacción de las personas con sus condiciones, y de su confianza en el gobierno.

La sostenibilidad del bienestar en el tiempo enfrenta amenazas mundiales a las que la región es especialmente vulnerable (como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que afectan al capital natural), y para afrontarlas será necesaria una acción nacional combinada con la cooperación internacional. Entretanto, la debilidad del capital social de la región pone de relieve lo frágil que es la relación entre las personas y las instituciones públicas que les prestan servicios. El capital humano se ve afectado por niveles sistemáticamente altos de jóvenes en empleo informal o que no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis), así como unos niveles cada vez mayores de obesidad. El bajo capital económico, aunque en ascenso, comenzó a estancarse incluso antes de la llegada de la pandemia. Resulta crucial adoptar un enfoque pangubernamental de la inversión en recursos para el bienestar futuro, a fin de garantizar que la actuación en un ámbito no socava los progresos en los restantes.

Si se analiza más allá del promedio nacional, es posible observar grandes variaciones entre las experiencias de las personas. Para poder adoptar decisiones de forma efectiva se necesita una imagen más desglosada y localizada de los datos de bienestar. El bienestar no se distribuye de forma equitativa: en general, las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas que viven en zonas rurales, las personas indígenas y afrodescendientes, y aquellas con menos educación suelen registrar peores resultados y tener menos oportunidades, en especial en lo que se refiere a las condiciones materiales. No obstante, junto con estas desventajas, todavía existen algunos ámbitos en los que destacan estos grupos, como las tasas superiores de logro educativo de las mujeres, en promedio; la solidez de las conexiones sociales de los jóvenes; los niveles superiores de capital social en las zonas rurales; y las mayores tasas de empleo de las personas indígenas y afrodescendientes.

La COVID-19 está teniendo un profundo impacto en el bienestar de la región, y podría invertir muchos de los avances logrados en las dos últimas décadas, además de agravar los problemas existentes. Llegó en un momento en el que ya estaban surgiendo importantes vulnerabilidades en materia de bienestar: el crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza ya estaban disminuyendo; el empleo estaba reduciéndose y el desempleo aumentando; y la satisfacción de las personas con sus condiciones de vida y su confianza en las instituciones públicas se estaban reduciendo. En 2020, la pobreza absoluta y el desempleo aumentaron drásticamente, mientras que se redujeron los ingresos, el empleo y la participación en la fuerza de trabajo. Las condiciones deficientes de las viviendas de la región han dificultado la lucha contra el virus, en tanto que la brecha digital dificulta las oportunidades de aprendizaje, trabajo y acceso a los servicios a distancia. Los marcados descensos observados en la satisfacción con la vida y las relaciones sociales ponen de relieve el costo humano de la crisis. Al mismo tiempo, la pandemia ha acentuado las vulnerabilidades del capital humano, social, económico y natural, y agravado las desventajas a las que se enfrentan los jóvenes y los jóvenes adultos. Esto implica que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar el bienestar, recurriendo a planes de recuperación y al estímulo fiscal como herramientas para hacer frente a las vulnerabilidades previamente existentes y a las nuevas que han surgido. La pandemia ha afectado a cada uno de los aspectos de la vida de las personas, y las profundas interrelaciones que existen entre los resultados económicos, sociales y medioambientales. Ha servido de crudo recordatorio de que el éxito de las políticas no puede definirse únicamente en términos económicos limitados, y ha puesto de manifiesto el valor de los enfoques más integrados y multidimensionales del *desarrollo en transición*.

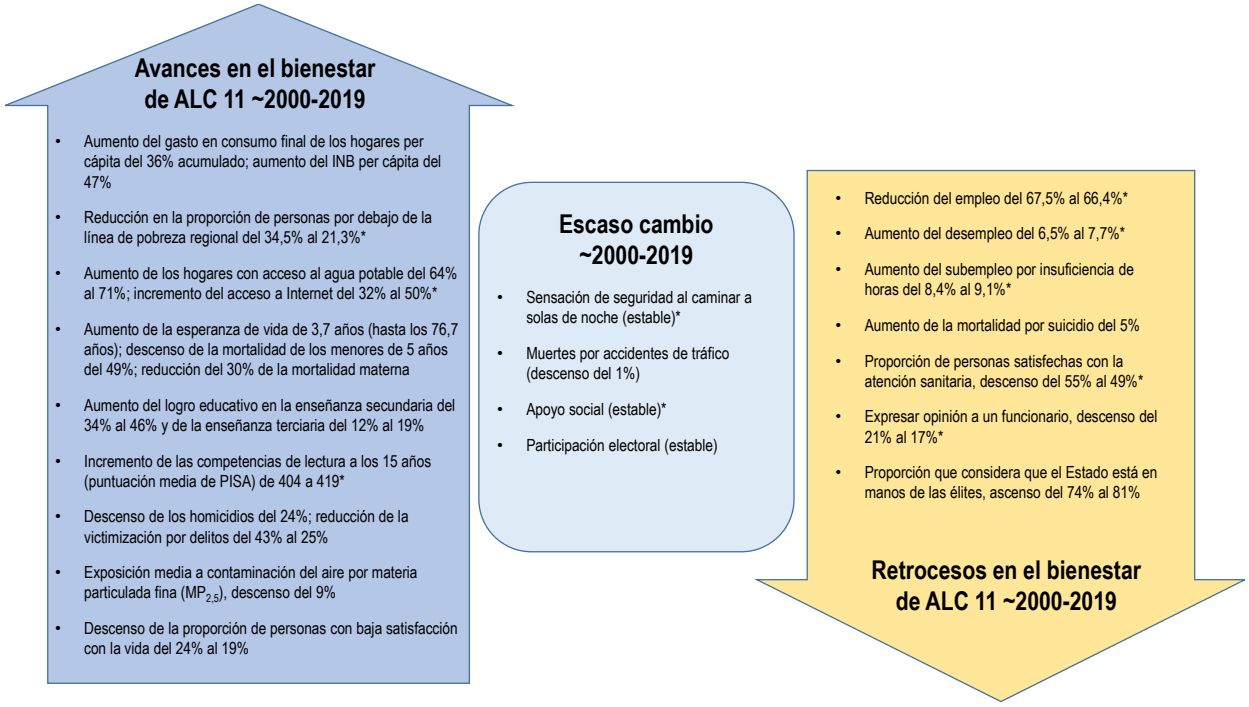
Progresión del bienestar, 2000-2019

En los dos decenios previos a la pandemia se registraron avances considerables en el promedio de bienestar, aunque también se retrocedió en algunos ámbitos.

Durante los dos decenios previos a la pandemia, el bienestar material había experimentado varios avances importantes en los 11 países de ALC analizados (ALC 11) (Gráfico 1.4). Entre los primeros años del milenio y aproximadamente 2019, el promedio del gasto en consumo final de los hogares creció más de un tercio de forma acumulada, un avance superior al de un cuarto experimentado en promedio por los países de la OCDE. En torno a 2006, una de cada tres personas vivía en la pobreza (según la línea regional de pobreza absoluta de la CEPAL); en 2019 esta cifra se había reducido a una de cada cinco. El análisis de las distintas líneas de pobreza absoluta (1,90 UDS al día; 3,20 UDS al día; y 5,50 UDS al día) indican que los mayores avances se produjeron al sacar a las personas más pobres de la pobreza. Pese a que la desigualdad en los ingresos sigue siendo alta en comparación con el promedio de la OCDE, se ha reducido: el índice de Gini bajó del 0,51 en 2008-2009 al 0,44 en 2018-2019, y la proporción de los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población se redujo de 15 veces los percibidos por el 20% más pobre en 2008-2009, a 10 veces en 2018-2019. También se observaron mejoras en varios indicadores relativos a la vivienda y la infraestructura. Por ejemplo, la proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas se redujo del 23% al 17%. Si bien todavía es baja, también mejoró la proporción de hogares con acceso a servicios de agua e Internet (Gráfico 1.4).

Gráfico 1.4. Resumen del promedio de avances y retrocesos de ALC 11 en bienestar futuro durante las dos últimas décadas

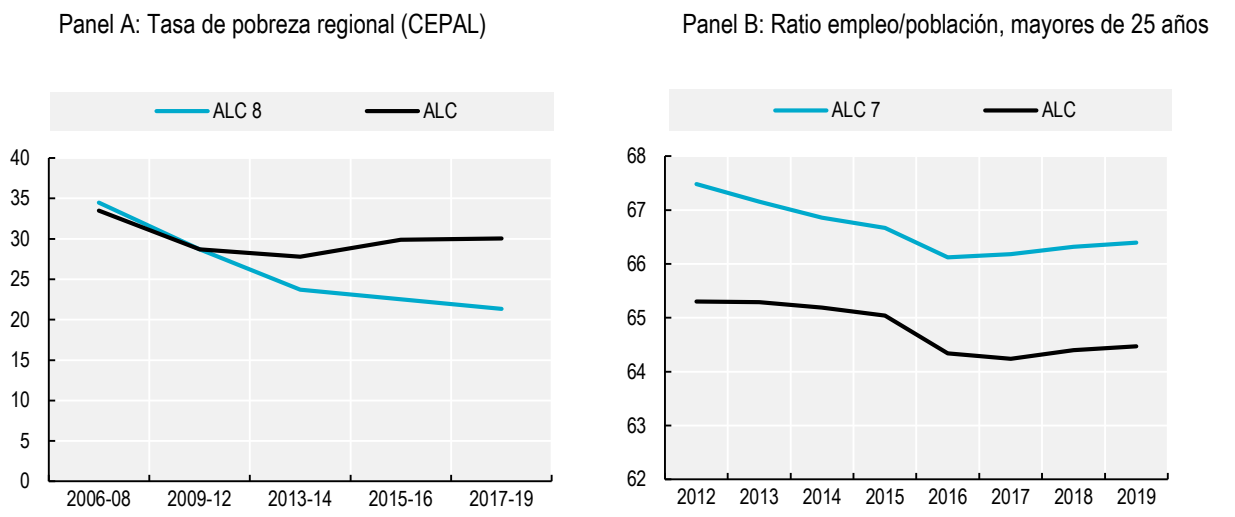
Entre 2000 (o el primer año disponible) y 2019 (o el último año disponible antes de 2019)



Nota: Indicadores seleccionados de los Capítulos 2 y 3. *La serie de tiempo completa de 2000 a 2019 no está disponible para varios indicadores; cabe destacar que la serie de tiempo correspondiente a los resultados del mercado laboral por lo general comienza en 2011 o 2012. En los Capítulos 2 y 3 de este informe se recogen detalles sobre las definiciones de los indicadores, sus fuentes y los períodos comprendidos.
Fuente: Capítulos 2 y 3, y Gráficos 1.5 a 1.11, a continuación.

Pese a estos avances positivos, con frecuencia los progresos de las condiciones materiales se ralentizaron, o incluso se invirtieron, con el fin del auge de los precios de las materias primas. En concreto, los resultados de la fuerza de trabajo y las percepciones de las personas sobre su nivel de vida se deterioraron después de 2014, al tiempo que disminuyó también el ritmo de reducción de la desigualdad en los ingresos (Capítulo 2). Después de 2015 se estancaron tanto el crecimiento del INB per cápita como la reducción de la pobreza en los países de ALC analizados, mientras que descendían los niveles de empleo entre las personas de 25 años o mayores, y el desempleo aumentaba incluso antes de la llegada de la pandemia (Gráfico 1.5; Gráfico 1.6).[8] Los niveles promedios de empleo informal en ALC 11 cayeron un punto porcentual entre 2010 y 2019, aunque siguen siendo altos. La informalidad afecta a más de la mitad del total de trabajadores (57%), con una proporción similar entre los trabajadores no agrícolas (Capítulo 2). El crecimiento del gasto en consumo final de los hogares per cápita también se redujo después de 2014, sumado a una caída de la satisfacción de las personas con su nivel de vida (Gráfico 1.7).

Gráfico 1.5. A partir de 2015, el ritmo de reducción de la pobreza se deceleró en el grupo de países analizados, al tiempo que descendió el empleo

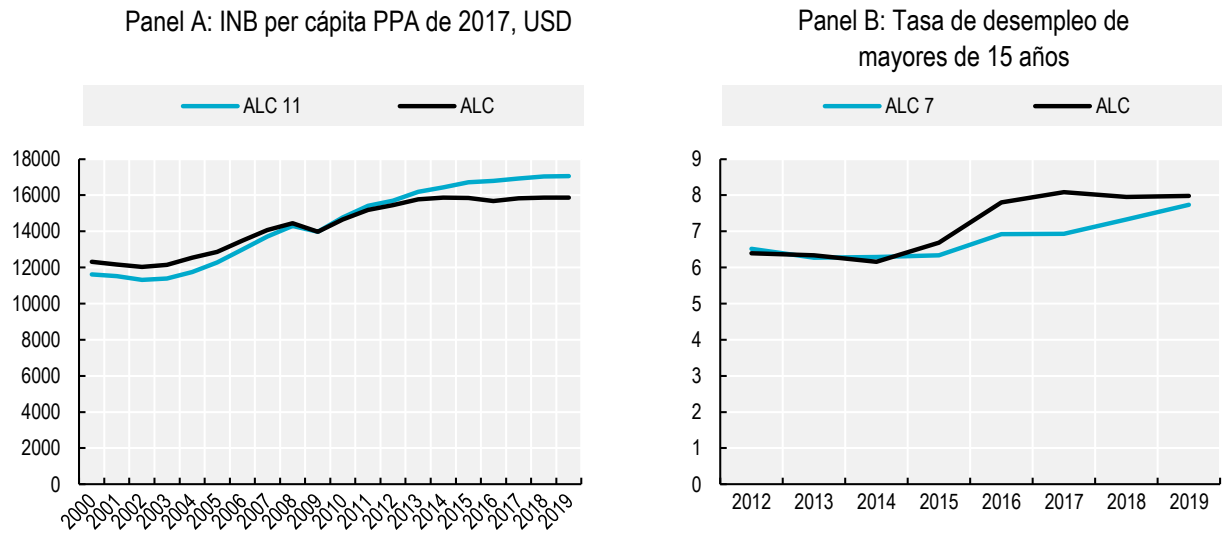


Nota: En el panel A, ALC 8 excluye a Brasil, Costa Rica y la República Dominicana, debido a interrupciones en las series de tiempo. Los datos correspondientes a Argentina únicamente se refieren a poblaciones urbanas. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL. En el panel B no están disponibles los datos de las series de tiempo anteriores a 2012. ALC 7 excluye a Argentina, la República Dominicana, Ecuador y Uruguay. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la OIT.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=i (panel A) y OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer34/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_DWAP_SEX_AGE_RT_A para obtener los datos de los países, y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer13/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2WAP_SEX_AGE_RT_A para obtener el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel B). Para ALC 7 datos a nivel de país: series no basadas en modelos de la OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A; para el promedio de ALC en su conjunto, series basadas en modelos de la OIT https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A.

StatLink https://stat.link/fyb2ja

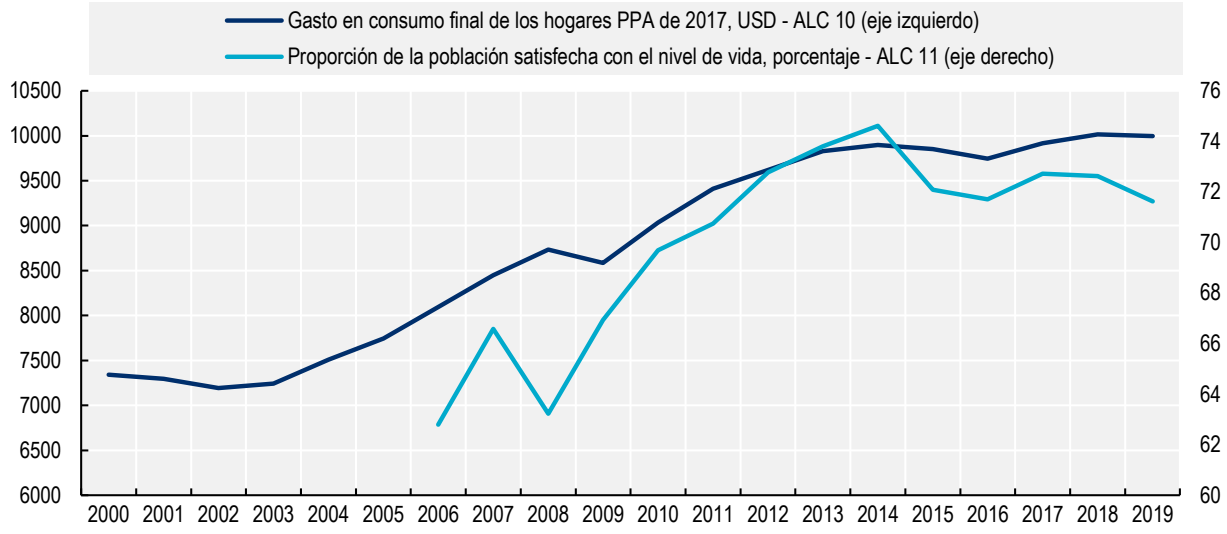
Gráfico 1.6. El aumento del INB per cápita en el grupo de países analizados se debilitó después de 2015, mientras que el desempleo crecía incluso antes de la pandemia



Nota: En el panel A, ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial. En el panel B, ALC 7 excluye Argentina, la República Dominicana, Ecuador y Uruguay, debido a interrupciones en las series. El promedio de ALC corresponde a la media regional para América Latina y el Caribe calculada por la OIT.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD (panel A) y OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A para los datos de países https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer59/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_A para el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel B).

StatLink https://stat.link/fea3ph

Gráfico 1.7. El crecimiento del gasto en consumo de los hogares per cápita se redujo después de 2014-2015, al tiempo que descendió la satisfacción con el nivel de vida



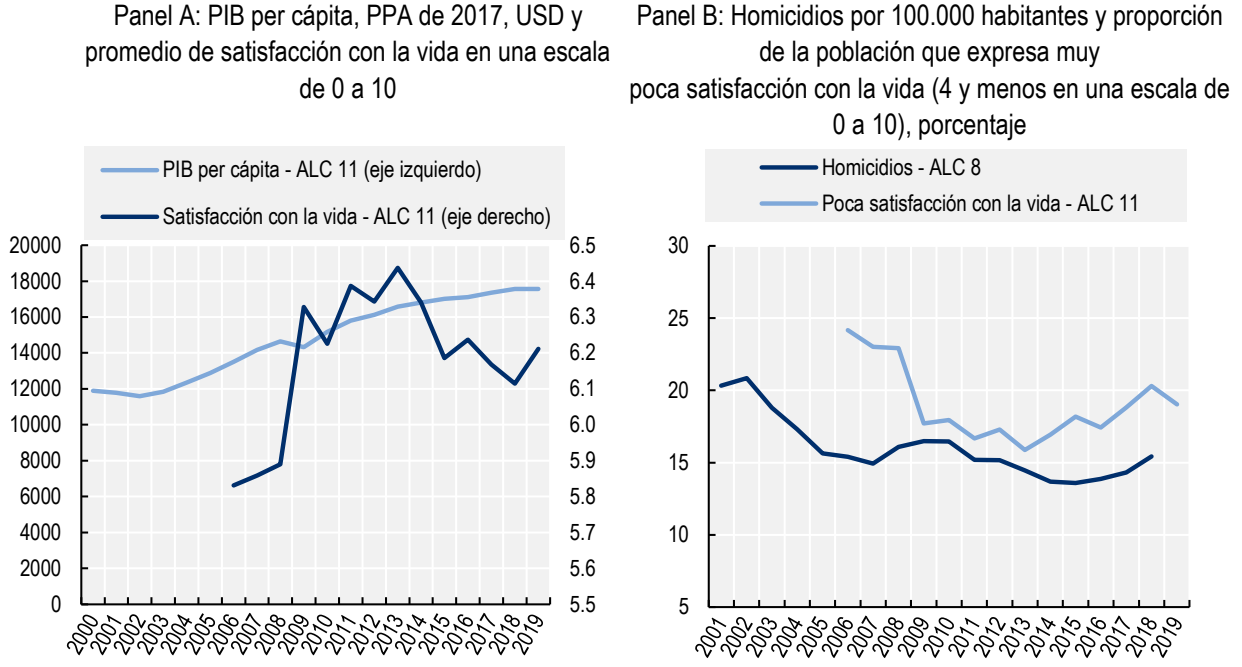
Nota: ALC 10 excluye Uruguay, ya que no existen datos disponibles.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicador/NE.CON.PRVT.PP.KD y cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

StatLink https://stat.link/c4jt6u

Entre 2000 y 2019 también se registraron avances en varios ámbitos de la calidad de vida en ALC 11 —en especial en materia de salud física, logro educativo, homicidios y victimización por delitos—. El promedio de esperanza de vida al nacer aumentó de 73 años en 2000 a 76,7 años en 2018; y las tasas de mortalidad de los menores de 5 años se redujeron prácticamente un 50%, mientras que la mortalidad materna cayó un 30%. Pese a estos avances en materia de salud física, las tasas de suicidio se incrementaron un 5% desde 2000. En lo que a conocimientos y competencias se refiere, la proporción de la población que ha completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria aumentó del 34% al 46%, en tanto que la proporción de las personas con enseñanza terciaria ascendió del 12% al 19%. Si bien sigue siendo casi cinco veces superior a la del promedio de la OCDE, la tasa de homicidios se redujo casi un cuarto en las últimas dos décadas, aunque se observan fuertes divergencias entre las tendencias dentro de los países de ALC 11 (y de forma más general en el conjunto de la región)[9]. El promedio de la proporción de la población que asegura haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses también se redujo del 43% en 2001 al 25% en 2018.

Como reflejo del deterioro de los resultados del mercado laboral después de 2013 —pese a mantenerse por encima de los niveles alcanzados en la década de 2000—, algunos de los resultados en materia de calidad de vida comenzaron a empeorar incluso antes de la pandemia. Esto se produjo pese a mantenerse el crecimiento del PIB per cápita durante ese mismo período, aunque debilitado (Gráfico 1.8, panel A). Por ejemplo, a pesar de que durante el período de tiempo completo analizado se observó una ganancia neta en satisfacción con la vida, alcanzó su nivel más alto, de 6,4 en 2013, y después se redujo levemente (Gráfico 1.8, panel A). Del mismo modo, la proporción de la población que declara bajos niveles de satisfacción con la vida anotó su nivel más bajo en 2013, para posteriormente subir (Gráfico 1.8, panel B). La tasa de homicidios también ha aumentado en ALC 11 desde 2015.

Gráfico 1.8. Mientras que el PIB per cápita prosiguió su ascenso después de 2014, el promedio de satisfacción con la vida se redujo, creció la proporción de personas con baja satisfacción con la vida y aumentaron los homicidios



Nota: En el panel B, ALC 8 excluye Chile, la República Dominicana y Perú.

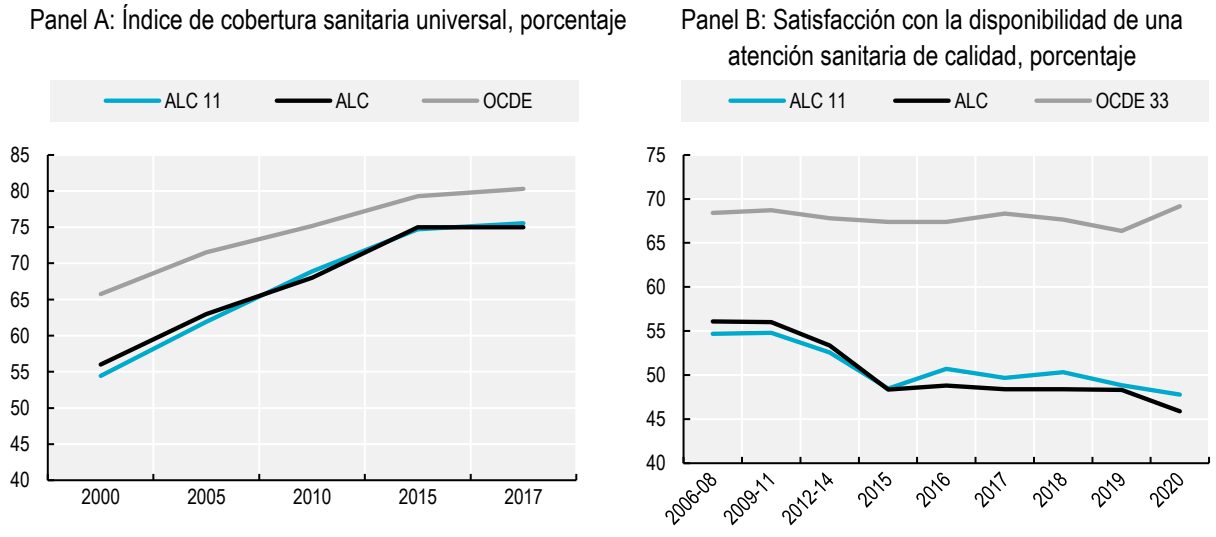
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD y Encuesta Gallup Mundial, //www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y base de datos de UNODC, https://dataunodc.un.org/GSH_app, y cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel B).

StatLink https://stat.link/x2qiul

En las últimas dos décadas también se han estancado algunos aspectos de la seguridad personal y las conexiones sociales. Las muertes por accidentes de tráfico y la sensación de seguridad de las personas al caminar a solas de noche se han mantenido estables en el promedio de ALC 11, lo cual contrasta con la marcada mejora de ambos indicadores en el promedio de la OCDE. Del mismo modo, la calidad del aire ha registrado algunas mejoras, aunque son escasas en comparación con los grandes avances registrados por el promedio de la OCDE en ese mismo período: la proporción de la población expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire en los países analizados sigue siendo muy alta, del 91% en 2019. Por último, la proporción de personas con amigos y familia a la que recurrir en momentos de necesidad rondó entre el 86% y el 87% en las dos décadas previas a la pandemia.

La confianza en el gobierno y algunos servicios públicos se deterioró en los países de ALC 11. El acceso a la atención sanitaria (cuantificado mediante el Índice de cobertura sanitaria universal)[10], experimentó notables avances entre 2000 y 2015, aunque se redujo la satisfacción de las personas con la atención sanitaria —una tendencia que ya estaba presente antes de la llegada de la pandemia— (Gráfico 1.9). La participación electoral se ha mantenido relativamente estable desde 2000, aunque han sido menos las personas que han expresado su opinión a un funcionario (Gráfico 1.10, panel A) y cada vez son más las personas que consideran que el Estado está en manos de los intereses de las élites que ostentan el poder (Gráfico 1.10, panel B).

Gráfico 1.9. La satisfacción con la disponibilidad y la calidad de la atención sanitaria se ha reducido, incluso a medida que ha aumentado la cobertura en los países de ALC 11



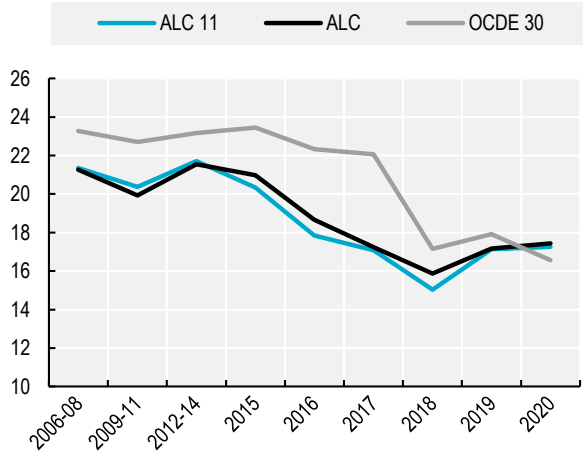
Nota: En el panel A, el Índice de cobertura sanitaria universal está compuesto por las tasas de cobertura en 14 intervenciones esenciales; el promedio de la OCDE excluye a Costa Rica. En el panel B, los datos hacen referencia a la proporción de consultados que respondieron "sí" a la pregunta: "¿Está satisfecho con la disponibilidad de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que usted vive?"; el promedio regional de ALC incluye 15 países, entre ellos los 11 analizados. OCDE 33 excluye a la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega, debido a que sus series de tiempo están incompletas.

Fuente: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 3.8.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (panel A) y Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel B).

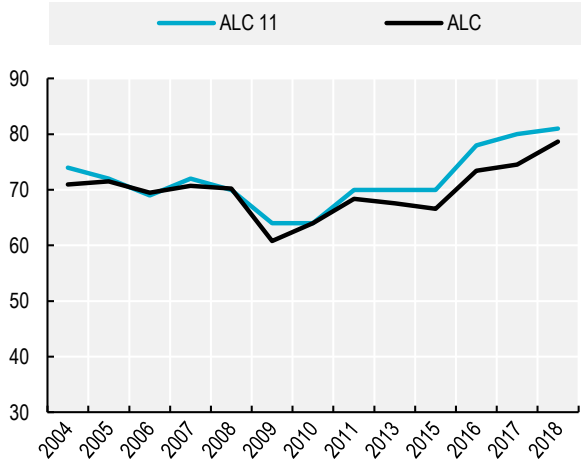
StatLink https://stat.link/uenrf0

Gráfico 1.10. En comparación con mediados de la década de 2000, se ha reducido el número de personas que han manifestado su opinión a un funcionario público, y ha aumentado el de aquellas que creen que su país está gobernado por grupos poderosos en beneficio propio

Panel A: Proporción de personas que han expresado su opinión a un funcionario, porcentaje



Panel B: Proporción de la población mayor de 18 años que considera que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio,



Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, además del grupo de países analizados. OCDE 30 excluye a la República Checa, Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Noruega y Suiza, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, los datos se refieren al porcentaje de la población mayor de 18 años que considera que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio. No se incluyen los años 2012 y 2014, ya que no existen datos disponibles. Además del grupo de países analizados, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y Latinobarómetro, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (panel B).

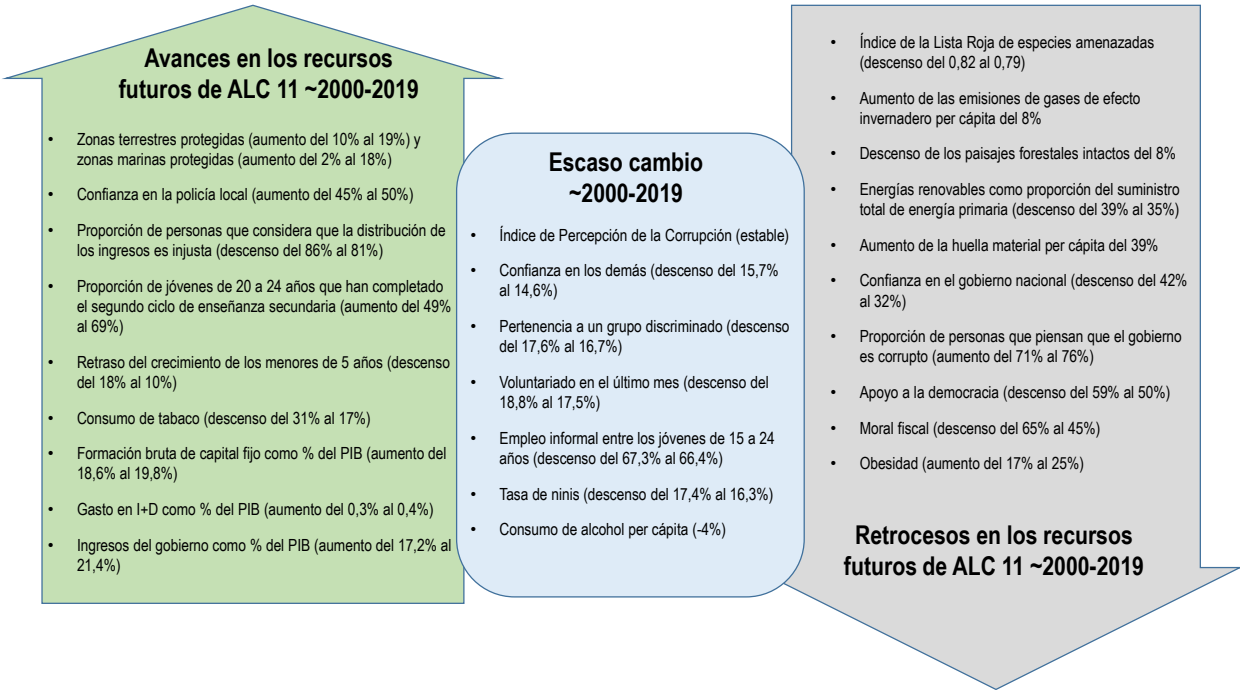
StatLink https://stat.link/u7jr6l

Evolución de los recursos y riesgos para el bienestar futuro, 2000-2019

La importancia de adoptar una perspectiva multidimensional se pone de manifiesto una vez más al considerar la evolución a medio plazo de los recursos que sustentan el bienestar futuro. Aunque algunos de estos recursos aumentaron en el período 2000-2019, también se produjeron retrocesos significativos (Gráfico 1.11). El comportamiento tanto dentro de los cuatro tipos de capitales como entre estos sigue siendo desigual. Algunos elementos del capital natural y el social se han reducido desde 2000, aunque no de forma general. La mayoría de los indicadores del capital económico han mejorado, pese a que partían de una posición muy inferior a la del conjunto de los países de la OCDE. Entretanto, el capital humano registró algunos avances positivos en lo que a conocimientos y competencias se refiere, si bien continúan existiendo desafíos recurrentes relativos a los resultados de los jóvenes en el mercado laboral, así como al aumento de algunos riesgos para la salud futura (Gráfico 1.11).

Gráfico 1.11. Resumen del promedio de avances y retrocesos de ALC 11 en recursos para el bienestar futuro durante las dos últimas décadas

Entre 2000 (o el primer año disponible en la serie de tiempo para ALC 11) y 2019 (o el último año disponible antes de 2019)



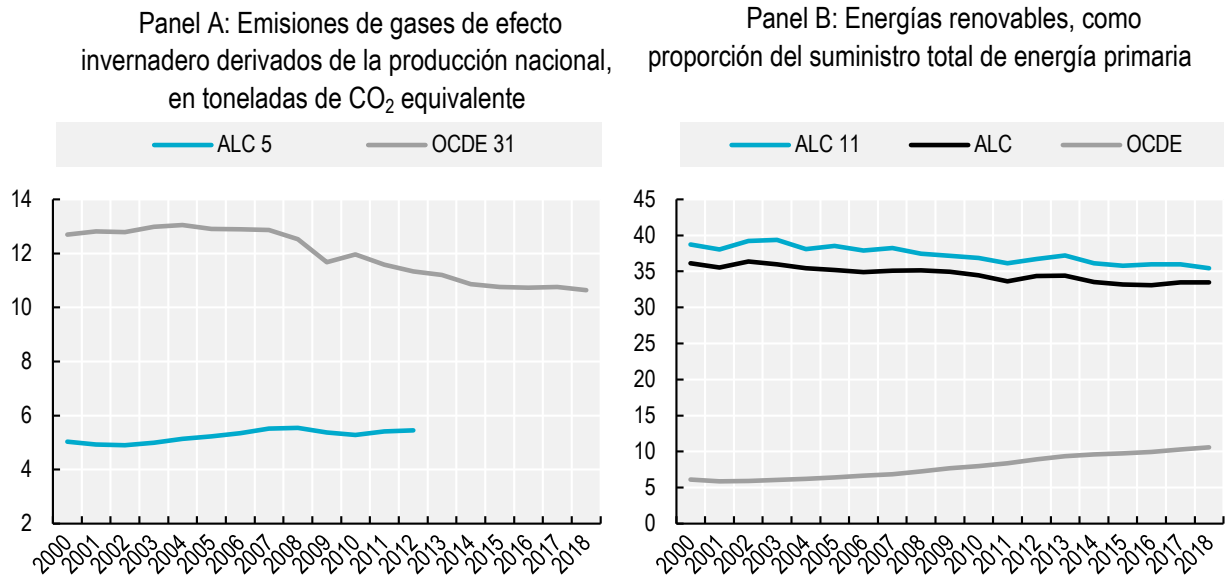
Nota: Incluye indicadores seleccionados del Capítulo 4. La serie de tiempo completa de 2000 a 2019 no está disponible para varios indicadores; los pormenores de los períodos de tiempo considerados, así como las definiciones de los indicadores y sus fuentes pueden consultarse en el Capítulo 4.
Fuente: Capítulo 4 y gráficos 1.13 a 1.18, a continuación.

La región de América Latina y el Caribe es rica en recursos naturales, aunque especialmente vulnerable al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los países de ALC 11 partían de una posición de solidez relativa con respecto al promedio de la OCDE sobre varios indicadores del capital natural, aunque las tendencias a largo plazo han mostrado un deterioro de estos activos. Por ejemplo, la región alberga gran parte de la biodiversidad mundial, aunque, según el Índice de la Lista Roja de especies amenazadas, en los países de ALC 11 la biodiversidad se está reduciendo al doble de velocidad que en el promedio de la OCDE. La estabilidad regional de la cubierta terrestre natural y seminatural del promedio de ALC 11 entre 2004 y 2019 oculta patrones que difieren entre los distintos países (véase el Capítulo 4), y los avances en la cubierta terrestre natural (p. ej., mediante la reforestación) no reemplazan en todos los casos la biodiversidad perdida cuando la intervención del hombre provoca cambios en la cubierta terrestre en otros lugares. Diez de los países analizados todavía conservan paisajes forestales intactos, que suponen el 30% de las reservas totales del mundo (la región de ALC en su conjunto representa el 36% de estas). No obstante, en los 10 países del grupo analizado de los que se dispone de datos, su superficie se ha reducido un 8% desde 2000.

Los países de ALC analizados se encuentran en una mejor posición que el promedio de la OCDE en lo que se refiere a emisiones, energías renovables y huella material, aunque sus tendencias muestran una trayectoria insostenible. Existen pocos datos recientes sobre emisiones de gases de efecto invernadero[11] per cápita, pero de los 5 países del grupo analizado que cuentan con datos de la serie de tiempo, el nivel promedio de 2012 (5,5 toneladas de CO_2 equivalente por persona) era la mitad

del de los países de la OCDE. No obstante, si bien las emisiones per cápita en los países de la OCDE se redujeron un 16% entre 2000 y 2018, en estos 5 países del grupo analizado las emisiones aumentaron un 8% entre 2000 y 2012 (Gráfico 1.12, panel A). Del mismo modo, la huella material per cápita de ALC 11, que nuevamente suponía la mitad de la de los países de la OCDE en 2000, creció un 39% entre 2000 y 2017. La proporción de energías renovables en el grupo de países analizados (35%) es tres veces superior a la del promedio de la OCDE (11%), aunque, si bien las energías renovables cada vez tienen un papel mayor en el conjunto de suministro de energía de la OCDE, su papel se ha visto reducido desde 2000 en ALC 11 (descenso con respecto al 39% registrado en 2000) (Gráfico 1.12, panel B). En contraste, entre 2000 y 2019 ha aumentado sustancialmente la proporción de zonas terrestres y marinas protegidas (Gráfico 1.11), evolución que también se ha producido en los países de la OCDE.

Gráfico 1.12. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en todo el grupo de países analizados, al tiempo que se redujo la proporción de energías renovables dentro del conjunto de fuentes energéticas



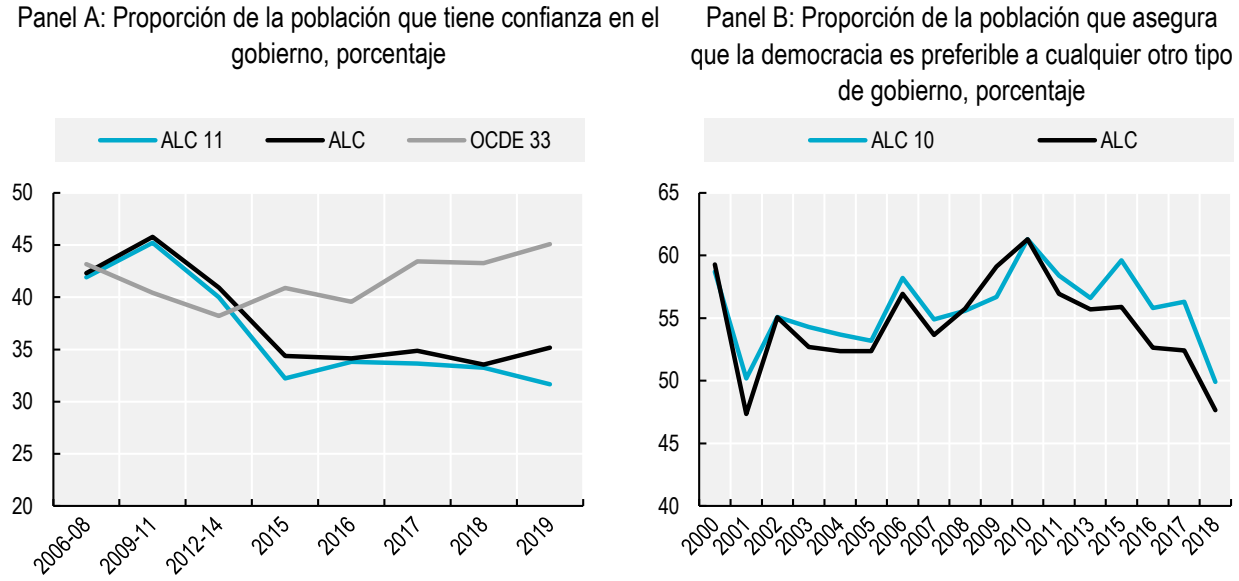
Nota: En el panel A, ALC 5 incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. OCDE 31 excluye a Chile, Colombia, Israel, Italia, Corea y México debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, el promedio regional de ALC incluye 23 países de América Latina y el Caribe, entre ellos los países analizados.
Fuente: OCDE, emisiones de gases de efecto invernadero (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG (panel A) e Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE: Productividad medioambiental y de los recursos (base de datos), https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=77867 (panel B).

StatLink https://stat.link/7lx81e

El capital social se ha debilitado en la última década. Las recientes revueltas son un indicio de la fragilidad del contrato social en la región, que presenta un apoyo cada vez menor a la democracia electoral, escasa confianza en el gobierno, y altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta (OCDE/CAF/CEPAL, 2018[17]; OCDE, 2021[18]). Tanto la confianza en el gobierno nacional como el apoyo a la democracia alcanzaron su nivel máximo en torno a 2010, pero comenzaron a deteriorarse después, y la tendencia se ha ido pronunciando en los últimos años (Gráfico 1.13). El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International se ha mantenido relativamente estable durante el período, aunque ha aumentado del 71% al 76% la proporción de personas que consideran que el gobierno es corrupto. Además, la moral fiscal se encuentra en niveles bajos: tan solo la mitad de la población coincide con la afirmación de que la evasión fiscal nunca

está justificada, y esta proporción se ha reducido desde principios de la década de 2000. La confianza en los demás, indicador clave del capital social, mostró ciertos avances entre 2000 y 2011, aunque estos se perdieron en la década posterior. Los niveles de confianza en los demás se sitúan aproximadamente cuatro veces por debajo de los de los países de la OCDE en promedio (véase el Capítulo 4)[12].

Gráfico 1.13. La confianza en el gobierno y el apoyo a la democracia han caído drásticamente desde 2010 en los países de ALC analizados



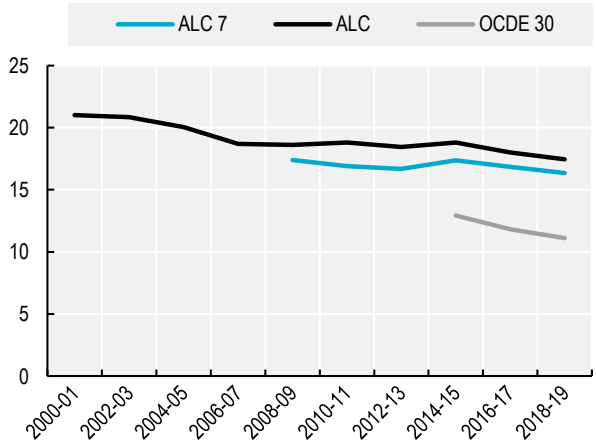
Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, además de los países analizados. OCDE 33 excluye a Costa Rica, la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, ALC 10 excluye a la República Dominicana, debido a que su serie de tiempo está incompleta. El promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, además de los 10 países del grupo analizado que cuentan con datos disponibles.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (panel B).

StatLink https://stat.link/9d53oy

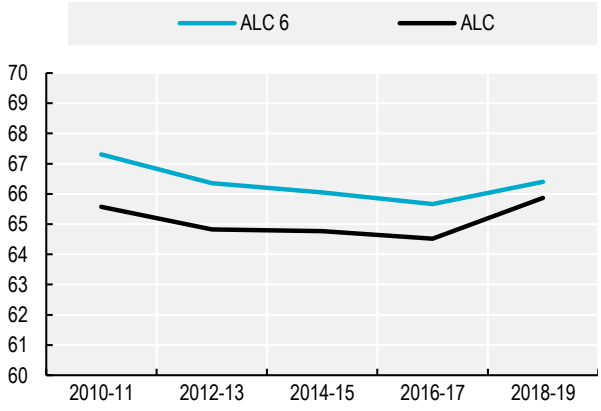
El empleo informal de los jóvenes y las elevadas proporciones de ninis siguen siendo un reto constante, mientras que el aumento de la obesidad es una amenaza para el futuro de la salud. Invertir en las competencias de los niños y los jóvenes reviste especial importancia para el capital humano y el bienestar futuro (OCDE/CAF/CEPAL, 2016[19]). En promedio, en los países analizados la proporción de jóvenes adultos (de 20 a 24 años) que han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria aumentó del 49% en torno al año 2000 al 69% en 2019. Sin embargo, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis) descendió tan solo 1 punto porcentual, y se mantiene 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE (Gráfico 1.14, panel A). El empleo informal entre los jóvenes sigue siendo alto y, pese a haberse observado una leve mejora entre 2010 y 2016-2017, la situación volvió a deteriorarse en 2018-2019, incluso antes de la llegada de la pandemia (Gráfico 1.14, panel B). En lo que a los factores determinantes de la salud actual y futura se refiere, entre 2000 y aproximadamente 2018 las tasas de malnutrición infantil se redujeron más de un tercio, y el consumo de tabaco descendió prácticamente a la mitad, y el consumo de alcohol cayó un 4%. No obstante, la obesidad aumentó de forma sustancial —en 2016 afectaba a uno de cada cuatro adultos, lo que supone un ascenso con respecto a la cifra registrada en 2000, de uno de cada seis— (Gráfico 1.15).

Gráfico 1.14. Los niveles de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación y con empleo informal se mantienen sistemáticamente altos

Panel A: Proporción de personas de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan ni reciben formación, porcentaje, progresiones regionales



Panel B: Proporción de jóvenes empleados (de 15 a 24 años) que cuentan con un empleo informal, porcentaje



Nota: en el panel A, ALC 7 excluye Brasil, Chile, Costa Rica y la República Dominicana, debido a que los datos son incompletos o a interrupciones en las series. ALC corresponde al promedio regional calculado por la CEPAL. OCDE 30 excluye a Chile, Costa Rica, Islandia, Irlanda, Japón, Corea, Luxemburgo y Suiza, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, ALC 6 hace referencia a Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay; quedan excluidos otros países analizados debido a que los datos son incompletos o a interrupciones en las series. El promedio regional de ALC incluye a Panamá, además de los 6 países analizados de los que se dispone de datos.

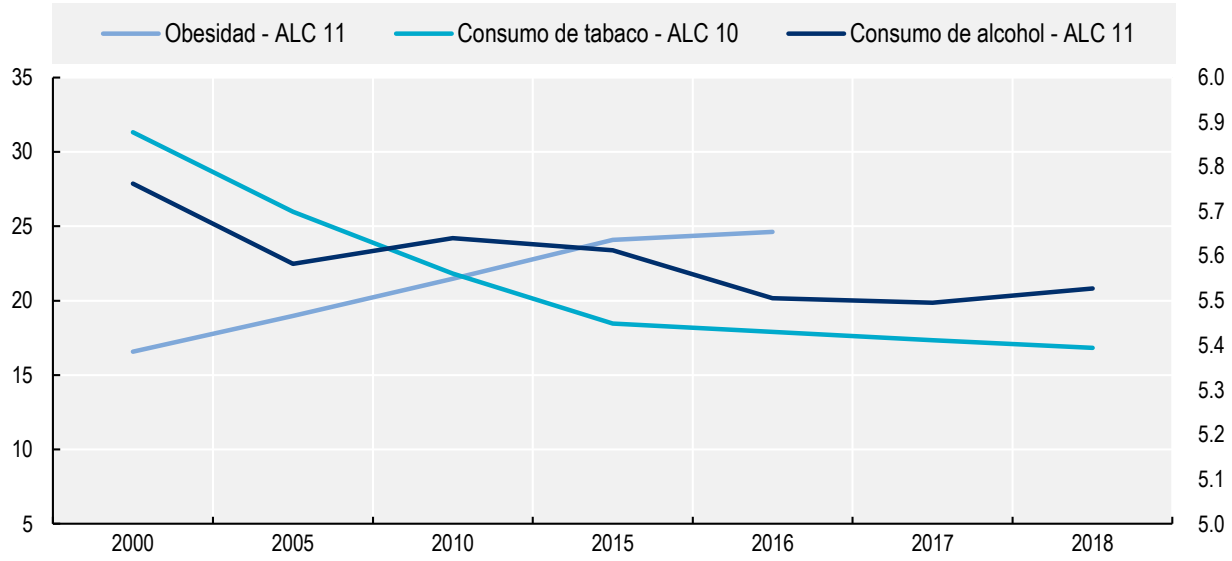
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3469&idioma=I y OCDE, Transición de la escuela al trabajo (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_TRANS (panel A) e ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/# (panel B).

StatLink https://stat.link/ucre2x

En 2019, algunos indicadores del capital económico mostraban un comportamiento en general mejor que en 2000, aunque algunos elementos se debilitaron considerablemente después de 2014. Los niveles de capital económico de la región partían de una base baja en comparación con los países de la OCDE, pese a que registraron algunos avances sobre todo en la década previa a 2013. El crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo (como proporción del PIB) alcanzó su nivel más alto en 2008 y 2012 y, pese a que el valor de 2019 sigue siendo superior al de 2000, desde 2014 se ha observado una tendencia de importante debilitamiento (Gráfico 1.16, panel A). El valor total de los activos fijos producidos en el grupo de países analizados se ha incrementado más de un 50% desde 2000, pero, dado que los países de la OCDE han crecido a un ritmo próximo al 40%, la brecha entre ambos grupos se ha ampliado en términos absolutos. El promedio de inversión en I+D en los países analizados (del 0,4% del PIB en 2018) sigue siendo muy bajo, equivalente a una sexta parte del nivel promedio de la OCDE (2,6%), y este tan solo ha avanzado 0,1 puntos porcentuales desde 2000. La inversión en infraestructura de transporte en los países analizados (0,9% del PIB en 2014-2019) ha aumentado ligeramente (un ascenso con respecto al 0,8% de 2008), aunque se mantiene por debajo del promedio regional de ALC del 1,1%. En el sector público, en general el servicio de la deuda se ha reducido más de un tercio desde 2000, aunque ha aumentado drásticamente desde 2013 (Gráfico 1.16, panel B). Entretanto, los ingresos tributarios públicos como proporción del PIB han aumentado del 17,2% al 21,4%, si bien se mantienen muy por debajo del promedio de la OCDE (33,8% en 2019).

Gráfico 1.15. La obesidad cada vez preocupa más con relación a los resultados futuros en materia de salud, mientras que cada vez se fuma menos y se reduce ligeramente el consumo de alcohol

Proporción de la población con un IMC superior a 30, o que fuma tabaco a diario, porcentaje (eje izquierdo); consumo de alcohol anual per cápita, en litros (eje derecho)

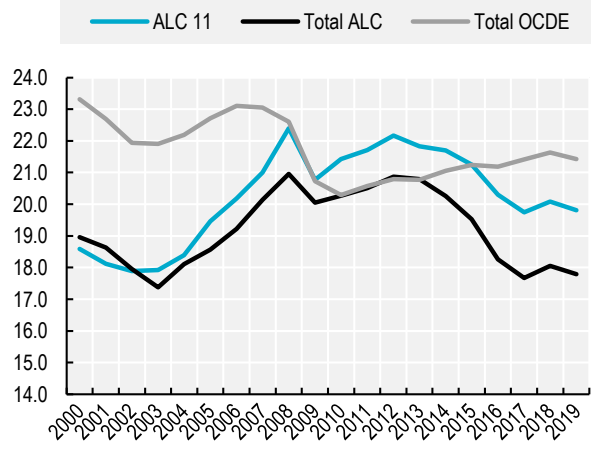


Nota: ALC 10 excluye a Ecuador, ya que no existen datos disponibles.
Fuente: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 3.a.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (para el consumo de tabaco); Observatorio mundial de la salud (GHO) de la OMS (base de datos), https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol) y GHO de la OMS (base de datos) https://apps.who.int/gho/data/view.main.CTRY2430A.

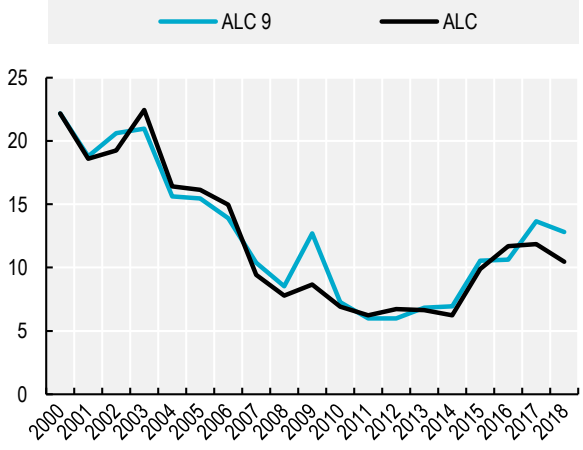
StatLink https://stat.link/kl62im

Gráfico 1.16. El crecimiento anual de las inversiones en capital fijo bruto se debilitó después de 2012, mientras que el servicio de la deuda externa por parte del gobierno aumentó después de 2014

Panel A: Formación bruta de capital fijo, como proporción del PIB



Panel B: Servicio de la deuda externa por parte del gobierno, como proporción de las exportaciones de



Nota: En el panel A, ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial, y OCDE corresponde al promedio de la OCDE calculado también por el Banco Mundial. Las regiones se consideran una sola entidad, a cuya suma contribuye cada país proporcionalmente. En el panel B, ALC 9 excluye a Chile y Uruguay, ya que no existen datos disponibles. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas.
Fuente: Panel A: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS?locations=ZJ; panel B: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 17.4.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/, https://w3.unece.org/SDG/Indicator?id=74.

StatLink https://stat.link/u0dask

Dentro de los países analizados de ALC 11 existen grandes disparidades en materia de bienestar

Concentrarse en el desempeño promedio contribuye a pasar por alto la importante diversidad existente entre países y dentro de estos. En los Capítulos 2, 3 y 4 se recogen datos a nivel de país correspondiente a cada uno de los integrantes del grupo analizado de ALC 11. El análisis a nivel de país muestra que existen aspectos del bienestar en los que prácticamente todos los países han registrado mejoras significativas de su desempeño (es decir, de al menos media desviación típica) entre 2000 y 2019. Por ejemplo, el desempeño en acceso a Internet, el gasto en consumo final de los hogares, la pobreza absoluta, la desigualdad en los ingresos (medida según el índice de Gini), la victimización por delitos, la cobertura de atención sanitaria, la mortalidad de los niños menores de cinco años, el consumo de tabaco y las zonas terrestres protegidas mejoraron prácticamente en todos los países de ALC 11 que disponen de datos. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los indicadores, pese a que se observa una mejora en el desempeño promedio de ALC 11, la imagen a nivel de país es más desigual, ya que algunos mejoran, otros registran escasos cambios e incluso algunos empeoran. La imagen es igualmente dispar en lo que se refiere a los ámbitos en los que el desempeño promedio se deteriora en todos los países analizados. De hecho, prácticamente no existe ningún indicador en los que todos los países del grupo analizado hayan experimentado un deterioro significativo (es decir, de al menos media desviación típica) entre 2000 y 2019; la única excepción es el sobrepeso y la obesidad. La moral fiscal también se debilitó en 9 de los 11 países del grupo analizado, mientras que las percepciones de captura del Estado por parte de las élites aumentaron en 8 de los 11 países.

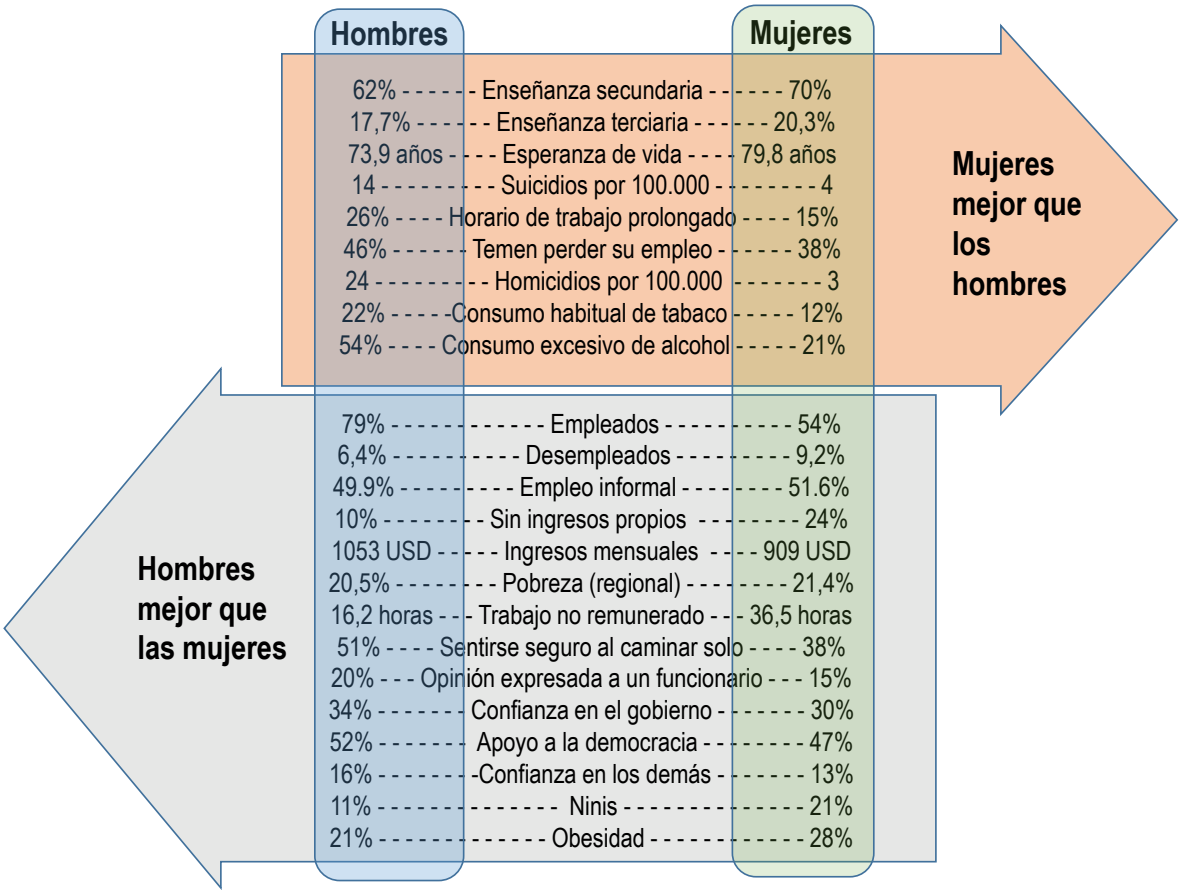
Las desigualdades tienen carácter multidimensional, y los distintos grupos de población se enfrentan a distintos obstáculos para su bienestar. En el Capítulo 5 se analiza la distribución del bienestar en diversos grupos de población diferentes dentro del grupo de países analizados —incluidos los resultados en distintas etapas de la vida, los resultados por tipo de educación y las variaciones regionales (subnacionales) en el bienestar (o las desigualdades espaciales). A continuación se recoge un resumen de una selección de conclusiones relativas a las diferencias en materia de bienestar basadas en el género, la raza y el origen étnico, relativas a los jóvenes (en comparación con las personas de mediana edad) y entre las zonas urbanas y rurales. En general, los datos señalan menos oportunidades, en especial en las condiciones materiales, para las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, los afrodescendientes y las personas que viven en zonas rurales. Sin embargo, estos grupos de población también presentan una fortaleza relativa en determinados ámbitos, como la educación en el caso de las mujeres, el apoyo de la red social en el de los jóvenes, las tasas de empleo en el de las personas indígenas, y el capital social en el de quienes viven en zonas rurales. Con miras al desarrollo futuro, uno de los principales retos consistirá en igualar las oportunidades al alza, aprovechando estas ventajas (p. ej., la educación de las mujeres), en lugar de hacerlo a la baja (de forma que las mujeres deban afrontar la misma carga de horario de trabajo prolongado y altos porcentajes de inseguridad laboral que los hombres).

Diferencias en el bienestar entre los géneros

Pese a que en los últimos años se han hecho avances considerables en la mejora de los resultados de bienestar de las mujeres en el grupo de países analizados, continúan existiendo desigualdades de género persistentes que frenan el desarrollo económico y social más amplio. Superar las brechas de género implica eliminar varias barreras estructurales, entre las que se incluyen la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales discriminatorios, violentos y patriarcales; el reparto desigual del trabajo y la atención; y la concentración del poder y las relaciones jerárquicas en el ámbito público (CEPAL, 2017[20]).

En los países analizados, las mujeres salen mucho peor paradas que los hombres en numerosos aspectos de las condiciones materiales. En promedio, las mujeres tienen muchas menos probabilidades de estar empleadas, y prácticamente un tercio de probabilidades más de estar desempleadas, y sus ingresos mensuales son un 13,7% inferiores a los de los hombres[13]. Además, la proporción de mujeres que no dispone de ingresos propios duplica con creces la de los hombres (Gráfico 1.17). Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza, diferencia que se ha ampliado en las últimas dos décadas, y sus probabilidades de ocupar empleos informales son también ligeramente mayores. En contraste, son más los hombres que las mujeres que trabajan jornadas muy largas de trabajo remunerado, y los que temen perder sus empleos en el plazo de los próximos 12 meses.

Gráfico 1.17. Las mujeres del grupo de países analizados están más formadas y viven más que los hombres, pero se ven desfavorecidas en muchos aspectos de las condiciones materiales, la participación ciudadana y el capital social



Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.1.

Las mujeres salen mejor libradas que los hombres en varios resultados en materia de educación y salud, aunque hacen más trabajo no remunerado. Pese a que sus resultados del mercado laboral son mucho peores que los de los hombres, las mujeres registran mayores tasas de logro educativo en el grupo de países analizados. Por ejemplo, el 70% de las mujeres ha alcanzado un nivel mínimo de educación de segundo ciclo de enseñanza secundaria (que contrasta con el 62% de los hombres) y el 20% de ellas ha completado la enseñanza terciaria (en contraste con el 18% de los hombres). Las mujeres viven 6 años más que los hombres, y su esperanza de vida al nacer es de 79,8 años. En cambio, los hombres tienen tres veces más probabilidades que las mujeres de morir a causa de suicidio, y ocho veces más de morir de homicidio. No obstante, las mujeres se enfrentan a amenazas generalizadas en lo que a agresiones sexuales y violencia doméstica o de pareja se refiere, no tan bien cuantificadas mediante estadísticas comparables. Por ejemplo, se calcula que una de cada cuatro mujeres de 15 a 49 años de los países analizados ha experimentado violencia de pareja a lo largo de su vida. Son menos las mujeres que se sienten seguras al caminar solas en su vecindad (el 38%, en contraste con el 51% de los hombres). Las mujeres desempeñan más del doble de la atención y el trabajo doméstico no remunerado[14] que los hombres: en promedio dedican 36,5 horas semanales a este tipo de trabajos, en comparación con las 16,2 horas que destinan los hombres. Esto genera una carga de "doble jornada" para las mujeres que tienen un empleo remunerado; las mujeres trabajadoras dedican al menos 10 horas más de su tiempo de trabajo total (que incluye el trabajo remunerado y no remunerado) que los hombres, con una jornada laboral total que en promedio se acerca a las 72 horas semanales, en contraste con las 62 horas de la de los hombres.

Las mujeres tienen una menor participación ciudadana y política, así como menores niveles de confianza que los hombres, mientras que los perfiles de riesgo para el capital humano difieren entre hombres y mujeres. En promedio, la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales en el grupo de países analizados se ha duplicado en las últimas dos décadas hasta alcanzar el 30% (un porcentaje ligeramente superior al del promedio de la OCDE). Sin embargo, la falta de paridad de género también se extiende al compromiso cívico y la confianza entre la población general. Por ejemplo, son menos las mujeres que aseguran haber expresado su opinión a un funcionario público en los últimos 12 meses; ellas manifiestan un apoyo ligeramente menor a la democracia; y también son menos las que confían en su gobierno nacional. En términos más generales, las mujeres presentan asimismo menores niveles de confianza interpersonal, con un 13% que consideran que puede confiarse en la mayoría de las personas, cifra que contrasta con el 16% de los hombres. En lo que respecta a los riesgos para el capital humano, la proporción de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que no tiene empleo, educación o formación (21%) es mucho mayor que la de los hombres jóvenes (11%), lo que significa que cuentan con menos oportunidades de desarrollar sus conocimientos y competencias en una transición crítica de sus vidas. Los riesgos futuros para la salud también muestran diferencias entre hombres y mujeres: si bien los hombres tienen el doble de posibilidades de consumir tabaco regularmente y presentar un consumo excesivo de alcohol, el 28% de las mujeres son obesas, dato que contrasta con el 21% de los hombres.

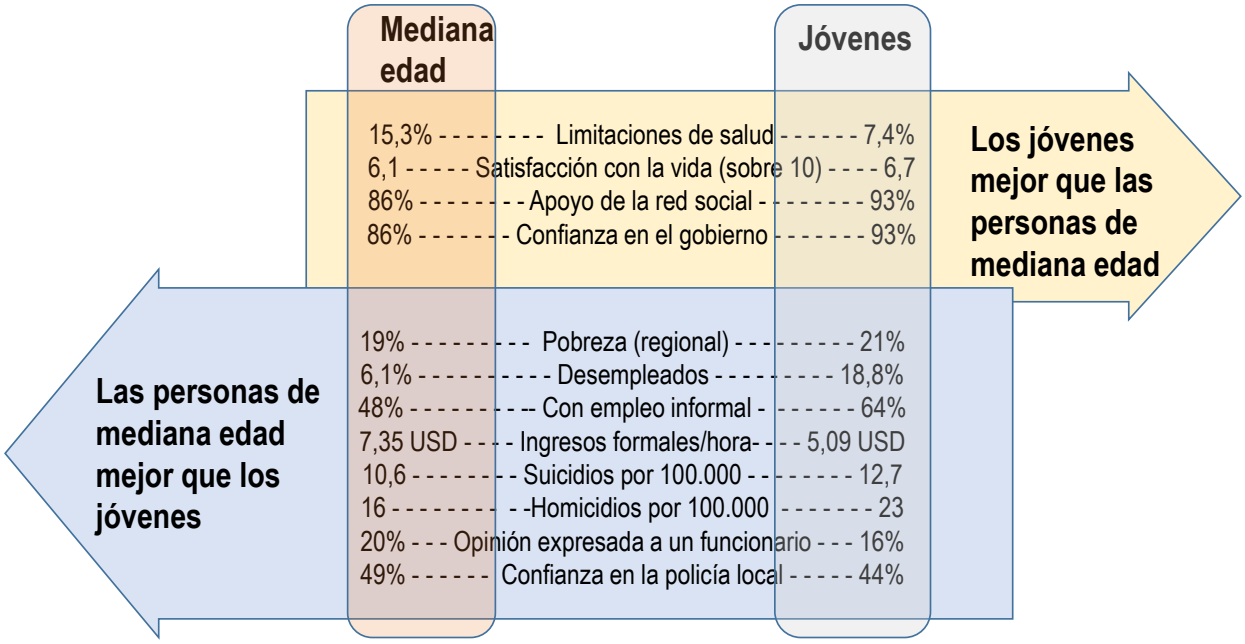
Diferencias en el bienestar por edades

Tanto los jóvenes como los jóvenes adultos se enfrentan a niveles muy altos de desempleo e informalidad, pero también salen mucho peor parados que las personas de mediana edad en varios ámbitos de la calidad de vida. Siguiendo un patrón común por igual a los países de la OCDE y de ALC, muchos jóvenes y jóvenes adultos (es decir, de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años) tienen dificultades para abrirse paso en el mercado laboral (Gráfico 1.18). En el grupo de países analizados, en 2020 el desempleo entre los jóvenes era en promedio tres veces superior al de las personas de mediana edad, y la proporción de jóvenes con empleo informal también era muy alta (64% frente al 48% de las personas de mediana edad). Las personas más jóvenes registran una mejor salud física, con la mitad de prevalencia de limitaciones para sus actividades cotidianas por problemas de salud, pero los escasos

datos disponibles sugieren que sus resultados en salud mental son mucho peores que los de los adultos de mediana edad, con tasas de suicidio más elevadas. Las tasas de homicidios entre los jóvenes de los países de ALC 11 casi multiplican por 1,5 las de las personas de mediana edad. Los patrones de capital social varían muy poco entre estos dos grupos de edad, salvo la confianza en el gobierno (que presenta porcentajes más altos en el caso de los jóvenes) y la confianza en la policía local (en la que los jóvenes registran porcentajes más bajos que las personas de mediana edad). Pese a las distintas dificultades a las que se enfrentan los jóvenes de la región, el apoyo de su red social y la satisfacción con la vida son mayores entre los jóvenes que entre las personas de mediana edad. Este patrón suele mantenerse a nivel mundial —pese a que el descenso de la satisfacción con la vida en 2020 ha sido mayor en el caso de los jóvenes que en el de otros grupos de edad— (a continuación).

Si bien los niños de la región afrontan una mayor prevalencia de pobreza absoluta, trabajo infantil y malnutrición, las personas de 50 años o mayores se enfrentan a problemas de bienestar distintos. Los niños del grupo de países analizados registran tasas de pobreza que duplican las de los adultos, en promedio: en 2019, el 31% de los niños de 0 a 14 años vivía en la pobreza de ingresos absoluta, y el 9% en la pobreza extrema, mientras que las personas de 25 a 54 años registraban tasas del 17% y el 4% respectivamente. Todavía queda bastante por hacer para poder eliminar el trabajo infantil: en 2018, el 5% de los niños de 10 a 14 años de la región de ALC 11 trabajaba, con porcentajes incluso mayores entre los varones y en las comunidades rurales, más pobres e indígenas. Las tasas de retraso del crecimiento entre los niños del grupo de países analizados se han reducido a la mitad desde 2000, aunque esta condición continúa afectando a uno de cada diez niños menores de 5 años. Entre los 5 y los 19 años, la prevalencia de obesidad ha aumentado del 22% registrado en 2000 al 31% en 2016, lo cual refleja la misma tendencia que en los adultos. Las personas de 50 años o mayores, situadas en el extremo opuesto del espectro etario, registran mayores ingresos por hora obtenidos del empleo formal, menos pobreza, menos homicidios y un mayor capital social que el promedio de los adultos de otros grupos de edad —aunque, como cabría esperar, las limitaciones de salud empeoran considerablemente con la edad (seis veces más que entre los jóvenes y los jóvenes adultos; casi tres veces más que entre las personas de mediana edad)—. Los suicidios y el empleo informal también son ligeramente más comunes entre las personas de 50 años o mayores, en comparación con las de mediana edad. Para los jubilados, la escasa cobertura de las pensiones sigue siendo un problema importante en toda la región: en promedio, en el grupo de países analizados, tan solo dos tercios de la población en edad de percibir una pensión recibe una pensión social, lo que contrasta con la media de cobertura prácticamente universal (95%) de los países de la OCDE.

Gráfico 1.18. Los jóvenes y los jóvenes adultos registran mayores tasas de pobreza y desempleo, así como más homicidios y suicidios, y confían menos en la policía



Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible. Para la mayoría de los indicadores que aquí se recogen, "jóvenes" se refiere a jóvenes y jóvenes adultos, de 15 a 29 años; el desempleo y el empleo informal constituyen una excepción (ya que el rango de edad considerado es de 15 a 24 años) así como el suicidio (con un rango de edad de 20 a 29 años). Por lo general el grupo de mediana edad se refiere a los adultos de 30 a 49, con excepciones en los casos del desempleo y el empleo informal (25 a 54 años); los ingresos por hora del empleo formal (30 a 54 años); y los homicidios (30 a 59 años).
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.13.

Diferencias en el bienestar por origen étnico y racial

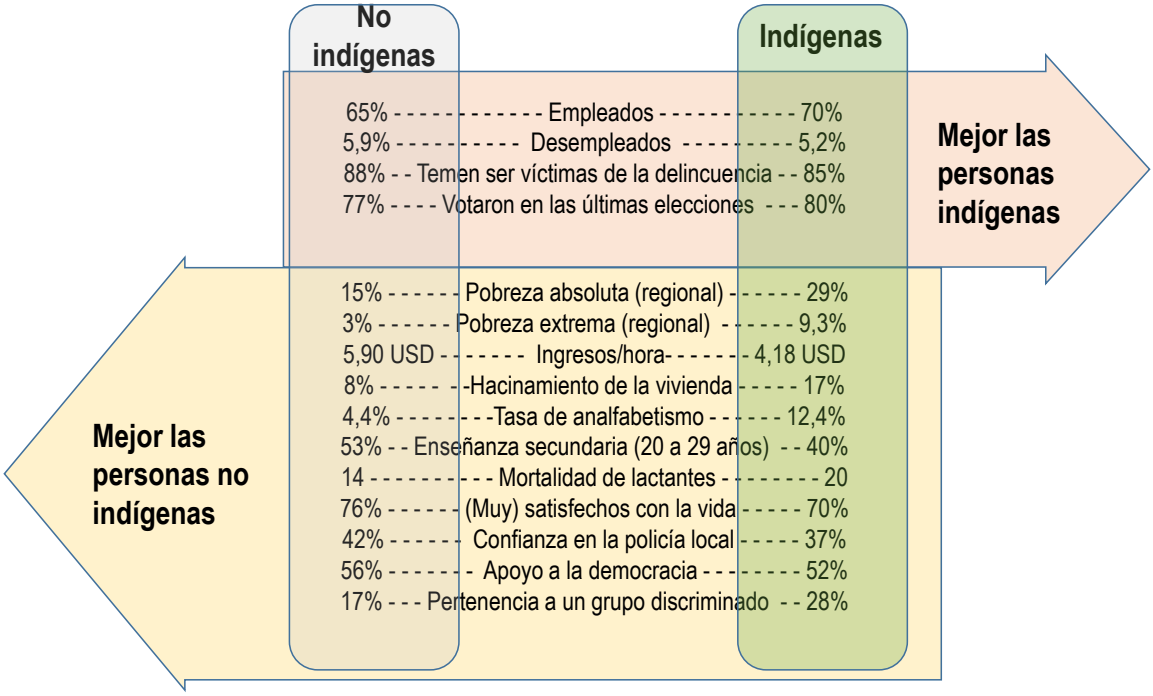
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes se enfrentan a algunos problemas comunes en lo que a exclusión, carencias y discriminación se refiere. En América Latina, el concepto de origen étnico se refiere habitualmente a las personas indígenas y el concepto de raza se emplea sobre todo con los afrodescendientes (CEPAL, 2016[21]). En promedio, en los países analizados, el 8% de la población se identifica como indígena y otro 8% como afrodescendiente. La disponibilidad y la oportunidad de los datos sobre bienestar es especialmente limitada en el caso de los desgloses por raza y origen étnico, tanto en lo que se refiere a los indicadores de bienestar como a los países del grupo analizado. Sin embargo, en prácticamente todos los indicadores disponibles correspondientes a condiciones materiales, calidad de vida y capital social y humano, en promedio, las personas indígenas suelen obtener menores resultados de bienestar que las no indígenas, y los afrodescendientes suelen registrar resultados de bienestar más bajos que los no afrodescendientes.

Las personas indígenas del grupo de países analizados obtienen mejores resultados que las no indígenas en materia de empleo y desempleo, pero en general presentan resultados peores en condiciones materiales, salud e indicadores relacionados con la educación. Por ejemplo, las tasas de pobreza absoluta (con arreglo a la definición regional de la CEPAL) son prácticamente el doble de altas entre las personas indígenas, y la pobreza extrema es tres veces mayor, en comparación con las personas no indígenas. Este dato se da pese a que registran mayores tasas de empleo y ligeramente menos desempleo (Gráfico 1.19). El aumento de la pobreza va acompañado de la reducción de los ingresos, un mayor hacinamiento de las viviendas, menores niveles de educación secundaria entre los jóvenes adultos

y mayores niveles de analfabetismo. Si bien el temor a ser víctima de la delincuencia es ligeramente menor entre las personas indígenas, el porcentaje de personas que aseguran haber sido víctimas de un delito en los 12 meses previos es muy similar para las personas indígenas y no indígenas (aproximadamente el 30%). Los indicadores del capital social, como la confianza en los demás y en el gobierno, también muestran similitudes entre las comunidades indígenas y no indígenas. Sin embargo, la confianza en la policía local y el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno son ligeramente menores en las personas indígenas. Además, más de una de cada cuatro personas indígenas considera que pertenecen a un grupo discriminado, en comparación con una de cada seis personas no indígenas.

Los afrodescendientes registran mayores tasas de empleo que los no afrodescendientes, aunque se enfrentan a numerosas dificultades en las dimensiones de las condiciones materiales, la calidad de vida, y el capital humano y social. En el grupo de países analizados, el 22% de los afrodescendientes viven en la pobreza absoluta (con arreglo a la definición regional de la CEPAL) y el 5,3% en la pobreza extrema —porcentajes muy superiores a los de los no afrodescendientes—. Sus tasas de empleo alcanzan el 67,6% (que contrasta con el 66,5% de los no afrodescendientes), aunque el desempleo, la percepción de la inseguridad laboral y la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación son mayores entre los afrodescendientes. Los obstáculos a las oportunidades a los que se enfrentan los afrodescendientes incluyen unas tasas de menor logro educativo secundario y terciario, así como mayores tasas de mortalidad de lactantes (aproximadamente un tercio mayores) y de mortalidad materna (tres veces mayores, en promedio). Una cuarta parte de afrodescendientes también considera que pertenece a un grupo discriminado. La confianza en los demás y en el gobierno nacional son muy similares entre las personas afrodescendientes y las no afrodescendientes, aunque la participación electoral, la confianza en la policía, el apoyo a la democracia y la moral fiscal son entre 3 y 8 puntos porcentuales más bajos entre los afrodescendientes.

Gráfico 1.19. En la mayoría de los indicadores, las personas indígenas de los países analizados registran un bienestar inferior al del promedio de la población no indígena

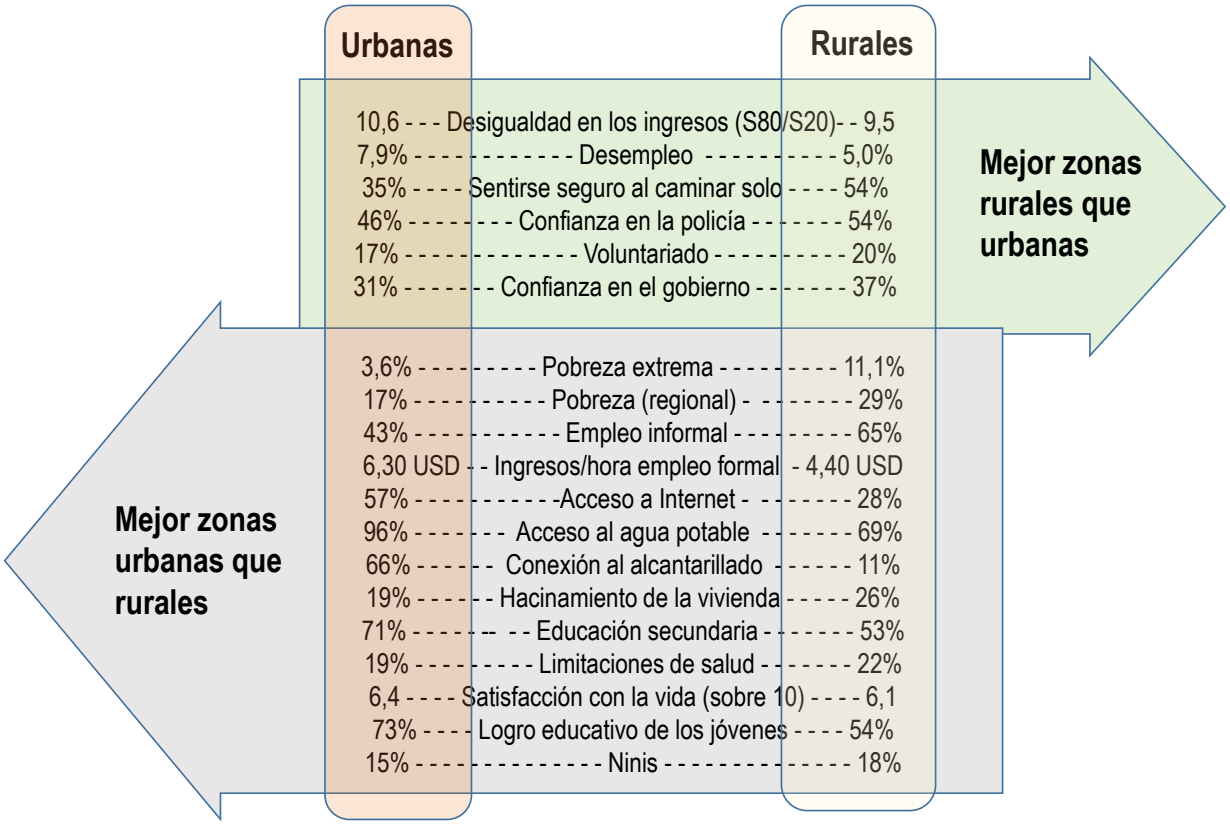


Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.26.

Diferencias en el bienestar entre zonas urbanas y rurales

Las oportunidades para una vida mejor no se distribuyen de forma equitativa entre las zonas urbanas y rurales en los países del grupo analizado. Las zonas rurales presentan condiciones de la vivienda mucho más deficientes, mayores tasas de pobreza e ingresos formales más reducidos. La proporción de personas que vive en hogares sin ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos (la definición regional de pobreza extrema de la CEPAL) es tres veces mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, mientras que la pobreza absoluta (según la definición regional de la CEPAL) es aproximadamente 1,5 veces mayor (Gráfico 1.20). Las proporciones entre empleo y población son en general similares, aunque el empleo informal es mucho más alto en las zonas rurales (65%) que en las urbanas (43%), y los ingresos rurales medios (ya sea en el sector formal o informal) se sitúan a tan solo dos tercios del nivel de los ingresos urbanos. Algunas de las diferencias más llamativas entre zonas urbanas y rurales tienen que ver con las condiciones y la infraestructura de la vivienda, que limitan las oportunidades de los residentes en zonas rurales de vivir de forma saludable y digitalmente conectada. Por ejemplo, solamente unos dos tercios de la población rural tienen acceso a servicios de agua potable o instalaciones sanitarias higiénicas (en las zonas urbanas, el 96% y el 93% respectivamente); y algo más de uno de cada cuatro hogares rurales tienen acceso a Internet, mientras que en el caso de los hogares urbanos es uno de cada dos.

Gráfico 1.20. Las oportunidades para una vida mejor no se distribuyen de forma equitativa entre las zonas urbanas y rurales en los países del grupo analizado



Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.19.

Los conocimientos, competencias y perspectivas de los jóvenes también son menores en las zonas rurales, aunque el capital social y la sensación de seguridad son mayores. En las zonas rurales, tan solo el 53% de las personas han alcanzado como mínimo un nivel educativo de segundo ciclo de enseñanza secundaria, mientras que la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación es también mayor (18%) en comparación con las zonas urbanas (15%). En contraste, en el capital social se observan algunos ámbitos de solidez comparativa de las zonas rurales: las tasas de voluntariado son mayores, existe una mayor confianza tanto en la policía local como en el gobierno nacional, y la percepción de la corrupción del gobierno es algo menor. Las personas de las zonas rurales también se sienten más seguras. Mientras que el 54% se sienten seguras al caminar solas en su vecindad, tan solo el 35% de los habitantes urbanos se sienten de la misma forma.

Se corre el riesgo de que la crisis del COVID-19 elimine los avances en el bienestar logrados en las últimas dos décadas en la región

La pandemia ha afectado prácticamente a todos los aspectos del bienestar de las personas y asestado duros golpes a las condiciones materiales y la calidad de vida

La pandemia de COVID-19 ha golpeado con especial dureza a América Latina y el Caribe. A 28 de junio de 2021, la región había registrado 1,26 millones de muertes a causa del coronavirus, prácticamente un tercio del total de la cifra mundial, pese a albergar tan solo el 8,4% de la población del mundo (CEPAL, 2021[22]). Dado que la crisis sanitaria se transformó rápidamente en una crisis económica y social, las consecuencias para el bienestar de las personas han sido de mucho más calado. Concretamente, el efecto de la crisis fue asimétrico para los ciudadanos y afectó especialmente a los grupos más vulnerables. Los confinamientos y las medidas de contención destinados a mitigar la pandemia afectaron con especial dureza a los trabajadores informales y escasamente remunerados. Hasta el 38% del total de trabajadores (y el 61% de los trabajadores informales vulnerables) no tienen acceso a ningún tipo de protección social. La ausencia de redes de seguridad hace que se vean expuestos a un mayor riesgo (OCDE, 2020[23]). Durante la primera ola de la pandemia, en 2020, la población de América Latina soportó uno de los confinamientos más prolongados a nivel mundial (Parkin, Phillips and Agren, 2020[24]), se vio sometida a algunas de las restricciones más rigurosas a la movilidad y los contactos (Alicea-Planas, Trudeau and Vásquez Mazariegos, 2021[25]; Hale et al., 2021[26]; OCDE et al., a continuación[15]) con implicaciones significativas para la educación, ya que las escuelas se cerraron con mayor frecuencia que en otras regiones (OCDE et al., a continuación[15]). Dado que la pandemia prosigue y la situación sanitaria ha alterado la recopilación de datos en todo el mundo, tardará algún tiempo en conocerse la verdadera dimensión de los efectos en el bienestar en muchas de las estadísticas recopiladas en este informe.

La pobreza absoluta y el desempleo aumentaron drásticamente en 2020, mientras que se redujeron los ingresos, el empleo y la participación. Entre 2019 y 2020, el INB per cápita del grupo de países analizados se contrajo un 7,4% y el gasto en consumo final de los hogares un 8,8%. Según indican las estimaciones para el conjunto de la región de ALC, el número de personas que ha caído por debajo de la línea de pobreza absoluta de la CEPAL ascendía a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que en 2019 (CEPAL, 2021[27]). De estas se calcula que aproximadamente 78 millones vivían en condiciones de pobreza extrema, lo que supone un incremento de 8 millones en comparación con 2019 (CEPAL, 2021[27]). Estos cambios sitúan la pobreza absoluta en su nivel más alto desde 2008, y el de la pobreza extrema en el más alto desde 2000. La crisis también ha tenido efectos pronunciados sobre el empleo: los siete países analizados para los que se dispone de datos experimentaron un descenso de 9 puntos porcentuales el promedio de su tasa de empleo, y un aumento de 3,6 en el desempleo entre 2019 y 2020. Muchas personas en edad de trabajar también abandonaron por completo la fuerza de trabajo (CEPAL/OIT, 2020[28]), y se prevé que aumente el trabajo informal (Altamirano et al., 2020[29]).

Las condiciones deficientes de las viviendas de la región han dificultado la lucha contra el virus, y la brecha digital ha obstaculizado las oportunidades de aprendizaje, trabajo y asistencia médica a distancia, entre otros. A medida que la transmisión comunitaria del COVID-19 se afianzaba en América Latina, el mayor riesgo de exposición se ha observado entre los habitantes de viviendas hacinadas, cuyo acceso a agua y saneamiento a menudo es escaso o nulo (Lustig and Tommasi, 2020[30]), lo cual dificulta tanto el distanciamiento físico como aplicar prácticas de higiene adicionales. Varias de las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar los efectos del confinamiento sobre la economía y el bienestar de las personas —desde el teletrabajo a gran escala hasta la educación en el hogar, pasando por la telemedicina— requieren disponer de acceso fiable a Internet de alta velocidad en el hogar.

La pandemia ha afectado considerablemente a la educación en la región. A mediados de mayo de 2020, más de 160 millones de alumnos de todos los niveles educativos de América Latina y el Caribe vieron interrumpidas las clases presenciales y, en general, este cierre de las escuelas en el grupo de países analizados tuvo una duración total superior a 41 semanas (UNESCO, 2021[31]). Los datos de la Encuesta Gallup Mundial muestran un claro descenso de la proporción de personas satisfechas con el sistema educativo en 2020 con respecto a los niveles de 2019: el descenso interanual de 11 puntos porcentuales dejó el nivel promedio entre los países del grupo analizado en el 52% para 2020, que contrasta con el 67% de la OCDE. Durante el cierre de las escuelas se establecieron soluciones de aprendizaje a distancia en toda la región, pero impartir la formación en línea resulta complicado cuando el 46% de los niños de 5 a 12 años vive en hogares sin conectividad (CEPAL, 2020[32]), y menos del 14% de los alumnos pobres (los que viven con menos de 5,5 USD al día, PPA 2011) de educación primaria cuentan con una computadora conectada a Internet en casa, dato que contrasta con más del 80% de los alumnos acomodados (es decir, los que viven con más de 70 USD al día) (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[33]). Además, las dificultades relacionadas con las competencias digitales también afectan a la inclusividad de la región. Para mejorar los resultados no basta con proporcionar más computadoras y TIC a las escuelas y los alumnos desfavorecidos — resulta fundamental desarrollar las competencias digitales para aprovechar las oportunidades de mayor transformación digital (OCDE et al., 2020[34]).

La pandemia ha puesto de relieve la importancia del acceso a la atención sanitaria para los problemas de salud física y mental. Antes de la pandemia, aproximadamente el 25% de la población de América Latina en su conjunto no tenía acceso a servicios esenciales de atención sanitaria. Estas personas habrán visto su acceso todavía más restringido durante 2020. Los problemas de salud también pueden tener un efecto significativo en las finanzas del hogar: de los seis países analizados para los que se dispone de datos, en el período 2010-2018, aproximadamente el 9% de los hogares incurrió en gastos sanitarios superiores al 10% de sus ingresos que debieron pagar de su propio bolsillo. Si bien se ha prestado una gran atención a los efectos de la pandemia de COVID-19 en las condiciones médicas físicas, también existen inquietudes con respecto a su efecto en la salud mental. Por ejemplo, uno de cada dos mexicanos aseguró que la pandemia había incidido negativamente en su salud mental (51%), y casi uno de cada cuatro indicó sufrir al menos un problema de salud mental (22%) (YouGov, 2020[35]). En términos más generales, el 27% de los jóvenes latinoamericanos (de 13 a 29 años) aseguró haber sentido ansiedad y el 15% depresión en los 7 días previos durante los primeros meses de la pandemia (UNICEF, 2020[36]). Es probable que las medidas de confinamiento hayan incrementado la soledad de las personas, el consumo de sustancias y las autolesiones (OMS, 2020[37]).

Los confinamientos prolongados en América Latina y el Caribe sacaron a las personas de las calles, con consecuencias dispares en materia de delincuencia. En la actualidad existen muy pocos datos comparativos que permitan evaluar el efecto de la pandemia en la seguridad personal. A nivel mundial ha habido una gran preocupación por el posible impacto de las órdenes de permanecer en casa en los adultos y los niños que viven en hogares con riesgo de violencia doméstica. Las noticias de aumento de la violencia doméstica en cuatro de los países del grupo analizado (Argentina, Chile, Colombia y México) durante las primeras semanas del confinamiento lo confirman (Statista, 2020[38]). Es probable que

las condiciones del confinamiento hayan modificado los patrones delictivos: durante el primer semestre de 2020, el 22% de los hogares de México fue objeto de robo, allanamiento o hurto, lo que contrasta con el 35% de un año antes (2019) (INEGI, 2020[39]), al tiempo que los delitos cometidos fuera de viviendas privadas se redujeron del 17% al 9%. Sin embargo, el número de homicidios en México experimentó un escaso cambio (Gobierno de Mexico, 2020[40]; UNODC, 2020[41]). También es posible que la pandemia haya creado una ventana de oportunidad para que los grupos de delincuencia organizada consoliden su poder local, participando en actividades benéficas (Felbab-Brown, 2020[42]) e imponiendo sus propias restricciones a las comunidades (Asmann, 2020[43]), al tiempo que las dificultades materiales provocadas por la pandemia pueden servir de caldo de cultivo para la captación de delincuentes (Nugent, 2020[44]).

La pandemia de COVID-19 ha alterado los procesos electorales de varios países latinoamericanos, lo que provocó que se pospusieran las citas electorales en Chile, la República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Según los datos contrastados obtenidos de 14 elecciones al parlamento y presidenciales, la pandemia puede haber afectado la conducta de voto de la región (López-Calva, 2021[45]). Si se comparan las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia con los promedios históricos, la participación electoral mostró un leve incremento en la mitad de los países, y se redujo en la otra mitad. Sin embargo, si se comparan con las elecciones más recientes, la mayoría de estos países (11 de los 14) vieron reducida la participación electoral (López-Calva, 2021[45]).

La pandemia ha pasado factura al bienestar subjetivo de las personas y sus relaciones sociales. Entre 2019 y 2020, la satisfacción con la vida se redujo un 7% en el grupo de países analizados —un descenso que ha borrado por completo los avances en satisfacción con la vida logrados en dichos países entre 2006 y 2008—. Del mismo modo, aumentó la proporción de personas que declara niveles muy bajos de satisfacción con la vida, lo que afectaba a una de cada cuatro personas en 2020, mientras que tan solo un año antes esta proporción era de una de cada cinco. El bienestar emocional también se ha visto afectado: en promedio, el 17% de los encuestados de los países del grupo analizado experimentaron más sentimientos negativos que positivos en un día normal de 2020, aproximadamente 6 puntos porcentuales más que en 2019. Tanto el distanciamiento social voluntario como las políticas de confinamiento obligatorias han tenido implicaciones en la capacidad de las personas para mantener las relaciones sociales más allá de los miembros más próximos del hogar. En el grupo de países analizados, la proporción de personas que cuentan con amigos o familia a la que recurrir en momentos de necesidad se redujo del 87% en 2019 al 83% en 2020. Esto contrasta con la pauta en los países de la OCDE, en los que se ha mantenido un nivel ligeramente superior al 90% tanto durante 2020 como antes de este año.

La pandemia de COVID-19 ha acentuado las vulnerabilidades del capital humano, social, económico y natural

La pandemia tiene un profundo impacto en el capital humano, con consecuencias para los jóvenes, la educación y la salud, y es probable que deje secuelas a largo plazo. Según estimaciones del Banco Mundial, las pérdidas de aprendizaje, capital humano y productividad podrían traducirse en un descenso de aproximadamente 1,7 billones de USD en los ingresos agregados de la región de América Latina y el Caribe, lo que supone un 10% de los niveles de la línea de base (Banco Mundial, 2021[46]). La crisis ha azotado con especial dureza a los jóvenes trabajadores, sobrerrepresentados en los sectores que más afectados se han visto por la pandemia, como el comercio minorista, la hospitalidad y el turismo —y que ya tenían dificultades para acceder al mercado de trabajo formal antes de la llegada de esta—. La mala salud aumenta la vulnerabilidad a los efectos del COVID-19, y se calcula que el 21% de la población de América Latina presenta al menos un problema de salud previo que provoca que se vean expuestos a un mayor riesgo de padecer consecuencias severas de esta dolencia (LSHTM CMMID COVID-19 working group, 2020[47]).[15] Las altas tasas de obesidad y los elevados niveles de exposición a la contaminación del aire (arriba) plantean otros riesgos (Pozzer et al., 2020[48]; Wu et al., 2020[49]). El papel de la contaminación del aire interior, un problema importante en los países de ingresos bajos y medios, también cobra nueva relevancia al pasar más tiempo en casa (Du and Wang, 2020[50]).

En la región de ALC el capital social ya mostraba debilidad antes de la pandemia, lo que constituye un factor de riesgo de cara a la recuperación. Incluso antes de la pandemia, existía una importante insatisfacción con las permanentes desigualdades, y también con el funcionamiento del sistema político, además de una creciente desconfianza en las instituciones y un escaso y decreciente apoyo a la democracia. A largo plazo, puede que estas percepciones se vean todavía más agravadas por el papel que ha tenido la pandemia en la ampliación de las desigualdades, por las restricciones a las libertades personales y por la rápida movilización de fondos públicos, en ocasiones con escasa supervisión (ONU, 2020[51]). Sin embargo, a corto plazo, en los países del grupo analizado se observó un aumento de la proporción de personas que confían en su gobierno nacional, del 32% en 2019 al 37% en promedio en 2020, mientras que la proporción de quienes consideran que el gobierno es corrupto se contrajo del 77% al 72%. Este efecto de unión en torno a la bandera también se ha observado en los países de la OCDE, y parece reflejar un fenómeno de mayor unidad nacional ante una amenaza común —aunque con arreglo a los datos contrastados de la OCDE, también se indica que puede que no sea un efecto duradero con relación al COVID-19 (OCDE, a continuación[52]).

El capital económico, en proceso de debilitamiento desde 2015, se verá socavado en mayor medida por los descensos de la inversión. Entre los principales elementos de los programas de estímulo fiscal se han incluido pagos directos a las familias, desgravaciones y aplazamientos fiscales, programas de préstamos a empresas y gasto adicional en salud. El aumento del gasto público se ha financiado mayoritariamente mediante deuda pública, pero también mediante préstamos oficiales. La respuesta de política monetaria también ha tenido varias facetas, entre las que se ha incluido el suministro de liquidez; el relajamiento temporal de los requisitos de reservas a la banca; las rebajas en la política de tipos de interés; la intervención de los mercados de divisas; y, en el caso de Chile y Colombia, programas de flexibilización cuantitativa. A pesar de estas medidas, la pandemia ha provocado una contracción del 6,8% del PIB en 2020 en el conjunto de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021[22]). Simultáneamente, los programas de estímulo han agotado en gran medida el espacio fiscal limitado del que disponían los países de la región. La deuda pública en la economía mediana de ALC ha pasado del 53% del PIB en 2019 al 69% en 2020 (Banco Mundial, 2021[53]), lo que ha provocado que América Latina y el Caribe sea la región en desarrollo más endeudada (CEPAL, 2021[54]). La gran incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones de financiación durante la pandemia han provocado demoras en el gasto en infraestructuras y recortes en investigación y desarrollo —cuyos niveles ya se encuentran muy por debajo del promedio de la OCDE y que resulta fundamental para garantizar la productividad futura—.

Los recursos naturales se han visto expuestos a un mayor riesgo a causa de las unidades para aplicar la protección de determinados bienes naturales durante la pandemia. El colapso de la actividad económica durante esta provocó un descenso temporal de las emisiones de carbono, aunque su repercusión será escasa en el cambio climático, salvo que durante la recuperación se les dé continuidad con medidas políticas enérgicas, ya que su efecto en la reserva global de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera es muy reducida, y los datos obtenidos de crisis previas apuntan a una fuerte recuperación de las emisiones en cuanto repunte la economía (OCDE, 2020[55]). Entretanto, las restricciones provocadas por la pandemia no han detenido la deforestación en América Latina (León and Cárdenas, 2020[56]). En el último decenio, han aumentado considerablemente las amenazas externas para estos bosques causadas por las empresas mineras, petrolíferas, agrícolas y madereras, los ganaderos, los agricultores, los grupos ilegales y los especuladores de tierras (Walker et al., 2020[57]; Ellis et al., 2017[58]). Mientras tanto, los esfuerzos de los gobiernos por controlar las incursiones ilegales en territorios indígenas se han visto reducidos en varios países de la región. Esta situación ha empeorado todavía más con la pandemia, ya que los gobiernos se vieron obligados a reducir sus esfuerzos de vigilancia por motivos tanto de salud como presupuestarios, lo que agravó la vulnerabilidad de los bosques, el agua y otros recursos naturales en territorios indígenas (CEPAL, 2020[59]).

La pandemia ha agravado las brechas de oportunidades existentes y provocado nuevas vulnerabilidades

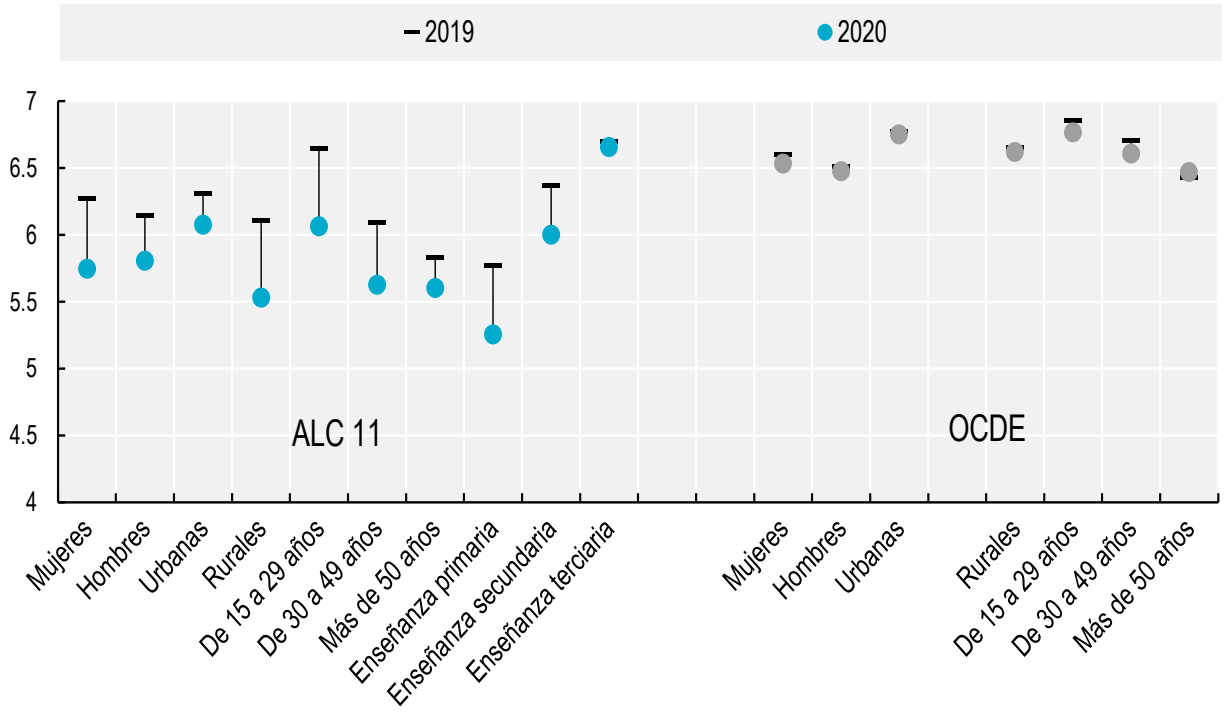
Hombres y mujeres se han enfrentado a distintas repercusiones económicas, sociales y de salud durante la pandemia. Los hombres han registrado mayores tasas de mortalidad hasta el momento, pero los trabajos de las mujeres con frecuencia las ha situado en primera línea. América Latina registra la mayor proporción mundial de trabajadoras en la atención sanitaria (la mitad de los doctores y más del 80% de los enfermeros) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018[60]). Al mismo tiempo, las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores que sufrieron más trastornos y pérdidas de empleo, como la restauración y los hoteles, el comercio minorista y los servicios domésticos (CEPAL/OIT, 2020[61]). Se prevé que el desempleo femenino para el conjunto de la región alcance el 22,2% en 2020, lo que supone un incremento interanual de 12,6 puntos porcentuales (ONU CEPAL, 2021[62]). Las mujeres de América Latina también experimentaron un mayor descenso proporcional del empleo (del 18,1%, que contrasta con el 15,1% registrado por los hombres), así como más salidas del mercado laboral (15,4%, en comparación con el 11,8% de los hombres) (CEPAL/OIT, 2020[61]). Se prevé que, en total, el efecto negativo de la pandemia en la participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina suponga suprimir una década de avances (ONU CEPAL, 2021[62]). Las mayores tasas de pobreza que registraban las mujeres incluso antes de la pandemia implican que cuenten con menos oportunidades de generar ahorros que les permitan mitigar futuras pérdidas de ingresos. Se calcula que, tras la crisis, 118 millones de mujeres de la región vivirán en la pobreza absoluta (cifra que contrasta con la población total de pobres de 187 millones de personas que se registraba en 2019) (ONU CEPAL, 2021[62]; ONU CEPAL, 2021[63]). Por último, los confinamientos, sumados a las dificultades económicas, pueden haber puesto en una situación de especial vulnerabilidad a las personas que viven con un miembro de la familia violento o que comete abusos.

Antes de la llegada de la pandemia, los jóvenes ya enfrentaban dificultades considerables en el mercado laboral, que ahora se han visto agravadas por la crisis. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes en el grupo de países analizados era del 18% en 2020, tres veces mayor que la de los trabajadores de edad más avanzada. La COVID-19 expone a los jóvenes vulnerables de la región a mayores riesgos de desinterés y abandono de la educación y la formación, y puede incrementar el número global de ninis. Si bien los motivos del desinterés y el abandono son complejos y evolucionan con el tiempo (Aarkrog et al., 2018[64]), la pandemia puede tener un potente efecto multiplicador debido a la pérdida de motivación provocada por varios factores, entre los que se incluyen las interrupciones de la educación o la formación; la pérdida de conexiones con adultos que proporcionan apoyo y las interacciones positivas entre iguales; los aumentos de la pobreza de los hogares; y un mayor estrés en el hogar (OCDE, 2020[65]).

Los datos de las encuestas proporcionan una primera idea de cómo se han mantenido el estado psicológico y los apoyos sociales de las personas en 2020. Como muestra el Gráfico 1.21, el promedio de satisfacción con la vida en el grupo de países analizados descendió prácticamente en todos los grupos de población, con la excepción de las personas con enseñanza terciaria, que han contado con una mayor protección ante la repercusiones más duras de la pandemia sobre las condiciones de vida. Las mujeres, los residentes en zonas rurales, los jóvenes y los adultos jóvenes de 15 a 29 años, y las personas con menores niveles de logro educativo fueron los que vieron más reducidos sus niveles de satisfacción con la vida. En el caso del apoyo de la red social, entre 2019 y 2020, las mujeres y los habitantes de zonas rurales nuevamente experimentaron descensos ligeramente mayores que los hombres y los habitantes de zonas urbanas (respectivamente). Sin embargo, en el caso del apoyo social, los gradientes por edad y nivel educativo no estuvieron tan claramente definidos: las personas de mediana edad y aquellas con enseñanza secundaria fueron las que experimentaron los mayores descensos en comparación con las personas más jóvenes y mayores (así como con enseñanza primaria o terciaria), aunque también se observaron descensos pronunciados en el caso de los jóvenes adultos (como puede observarse en el Capítulo 5).

Gráfico 1.21. Las mujeres, los residentes en zonas rurales, las cohortes más jóvenes y las personas con menor nivel educativo experimentaron un mayor descenso de la satisfacción con la vida entre 2019 y 2020 en el grupo de países analizados

Valores medios de satisfacción con la vida, escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible, 2019 comparado con 2020



Nota: Los datos se refieren a las respuestas (escala del 0 al 10) a las preguntas siguientes: "Imagine una escalera con escalones numerados de 0 en la parte inferior a 10 en la parte superior. Suponga que la parte de arriba de la escalera representa la mejor vida posible para usted, y la parte de abajo representa la peor vida posible para usted. ¿En qué escalón diría que siente que se encuentra en lo personal en este momento, suponiendo que cuanto más arriba esté el escalón, mejor se sentirá respecto a su vida, y cuanto más abajo esté el escalón, peor se sentirá respecto a su vida? ¿Qué escalón se aproxima más a la forma en que se siente?». ALC 11 excluye a Argentina, Colombia, la República Dominicana, México y Perú, con respecto a la enseñanza primaria, secundaria y terciaria. OCDE se refiere a la OCDE 35 en el caso de los hombres y las mujeres y excluye la República Checa y Luxemburgo; es la OCDE 36 en el caso de las zonas rurales y urbanas, y excluye Luxemburgo; es la OCDE 28 para las edades de 15 a 29 años, de 30 a 49 años y los mayores de 50 años, y excluye Australia, la República Checa, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos y Eslovenia, ya que no existen datos disponibles para ambos años.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/e6nwju

Las condiciones deficientes de las viviendas y la falta de servicios, que agravan los problemas asociados a la pandemia, presentan especial prevalencia en las zonas rurales, pero la densidad de las poblaciones urbanas también las sitúa en una posición de alto riesgo. La pronunciada concentración espacial y la densidad de población de las principales zonas urbanas de América Latina aceleraron la propagación del COVID-19, en especial en los segmentos de población que fueron objeto de importantes vulnerabilidades y carencias (CEPAL, 2020[66]). Las personas expuestas a un mayor riesgo epidemiológico, así como las más vulnerables a los efectos socioeconómicos de la pandemia, son aquellas que viven en condiciones de hacinamiento, sin agua o saneamiento —en especial las que viven en barrios marginales o asentamientos informales de zonas urbanas—. En su mayoría son trabajadores informales, con escasos o limitados recursos, sin seguridad social y con frecuencia sin acceso a Internet. El acceso al agua, las instalaciones para la higiene de manos y el saneamiento son esenciales para

contener la propagación del COVID-19, mientras que el acceso a Internet y las tecnologías digitales (cuando proceda) han resultado claves para poder acceder al aprendizaje a distancia y el teletrabajo, la información pública y para mantener los contactos sociales.

Las carencias relativas de las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes hacen que se vean expuestas a un nivel desproporcionado de vulnerabilidad ante las consecuencias de la pandemia. Los desafíos comunes a los que se enfrentan ambos grupos —en lo que a pobreza, informalidad, falta de protección social y condiciones inadecuadas de la vivienda se refiere— incrementan los riesgos a los que se ven expuestos durante la pandemia, tanto en lo referente al impacto directo en la salud, como a los resultados socioeconómicos más amplios (CEPAL et al., 2020[67]; CEPAL, 2021[68]). Sin embargo, estos dos grupos también presentan diferencias que condicionan la forma en la que pueden evolucionar estos riesgos, entre las que se incluyen la gran proporción de población indígena que vive en zonas rurales, y los patrones principalmente urbanos que presenta la población afrodescendiente.

Aspectos para el desarrollo estadístico

La disponibilidad de datos sobre bienestar sigue siendo un importante reto para los países del grupo analizado, y de forma más generalizada en la región de América Latina y el Caribe. En los Capítulos 2 a 5 de este informe se ponen de relieve diversas carencias de datos importantes para comprender los niveles, las tendencias y las distribuciones de los resultados de bienestar en la región. En general, los principales problemas en materia de datos pueden resumirse como se detalla a continuación. Es preciso:

- **Comprender mejor las desigualdades entre las dimensiones del bienestar.** Esto incluye el desarrollo de la capacidad de desglosar las medidas fundamentales del bienestar por género, edad, raza y origen étnico, además de comprender mejor la distribución geográfica de los resultados de bienestar dentro de los países.
- **Profundizar en los ámbitos del bienestar muy preocupantes**, como los niveles y las pautas de trabajo informal, el uso del tiempo, el efecto de la violencia y las experiencias de seguridad en el bienestar de las personas, y una comprensión más precisa de las situaciones financieras de los hogares (mediante mejores datos sobre el ingreso familiar, la riqueza, el gasto).
- **Recopilar datos sobre bienestar de forma más armonizada** que permita establecer comparaciones con otros países y regiones, y mejore la oportunidad de los datos —ya que la mayoría de los indicadores que se abordan en el presente informe normalmente presentan un retraso de al menos 2 o 3 años—. Resulta crucial disponer de datos más oportunos para que los indicadores de bienestar se integren de forma más general en la toma de decisiones políticas, como ha puesto de relieve la crisis de la pandemia.
- **Reforzar la medición de las experiencias de bienestar subjetivo en los países de ALC.** La reciente ola de protestas y descontento social en los países de la región han subrayado la necesidad de comprender mejor las experiencias vividas por los ciudadanos a la hora de tomar decisiones políticas. Dado que no existen estadísticas oficiales armonizadas correspondientes a aspectos subjetivos de la calidad de vida y el capital social en particular, para este informe se han utilizado fuentes de datos no oficiales, como la Encuesta Gallup Mundial y el Latinobarómetro, que, a pesar del menor tamaño de sus muestras presentan la ventaja de aplicar métodos comparables en todos los países y disponer de recopilaciones de datos frecuentes y recurrentes.

Por último, las oficinas de estadística de la región podrían colaborar en la elaboración de una lista prioritaria de indicadores principales para evaluar el desarrollo en transición, más allá del PIB. Todos los países de la región tienen compromiso con las actividades de monitoreo de los ODS, y varias de las oficinas de estadística y ministerios de los gobiernos del grupo de países analizados ya han comenzado a trabajar para cuantificar el bienestar, entre los que se incluyen México, Colombia, Chile y Ecuador (para más información véase el Capítulo 6). En un contexto en el que los recursos son limitados, las oficinas

nacionales de estadísticas no pueden dar prioridad a cada uno de los indicadores para recopilar datos de forma frecuente y recurrente. Sin embargo, las oficinas de estadísticas y sus partes interesadas en la región podrían convenir una reducida selección de medidas "principales" (desglosadas por los principales grupos de población de interés) como prioritarias para detectar los retos de desarrollo que presentan los países en su proceso de transición de ingresos bajos ingresos altos. Partiendo de los análisis y la información que se recogen en este informe, así como del trabajo previo de la OCDE, en el Anexo 1.A. se propone una lista de candidatos como punto de partida para su posterior elaboración y debate.

Conclusiones

La comunidad internacional reconoce de forma general la necesidad de ir "más allá del PIB" y este cambio de paradigma se ha plasmado en la agenda de los ODS, así como en muchas otras iniciativas nacionales e internacionales en materia de bienestar. En la región de ALC es especialmente importante emplear un conjunto más amplio de métricas relevantes a efectos de la política, en especial para el grupo de países que se encuentran en proceso de transición a países de ingresos medianos-altos y de ingresos altos, pero que continúan enfrentando problemas estructurales. La pandemia de COVID-19 y sus profundos efectos socioeconómicos han subrayado todavía más la necesidad de los países de la región (y de otras partes del mundo) de aplicar estrategias de recuperación basadas en una visión multidimensional, centrada en las personas y con visión de futuro del desarrollo. Contar con una idea común de las prioridades políticas y emplear un mismo marco para identificar las fortalezas y las carencias relativas también puede contribuir a mejorar la cooperación regional y a respaldar alianzas internacionales más eficaces.

El marco de indicadores que se presenta en este informe se ha adaptado a partir del marco de bienestar original de la OCDE, con el fin de reflejar mejor los aspectos de especial relevancia para la región, incluyendo las condiciones materiales, la calidad de vida, los recursos para el bienestar futuro y las desigualdades entre grupos y territorios. No obstante, el informe también pone de relieve que, para que las métricas puedan suponer una diferencia en la política, se requieren innovaciones institucionales, analíticas y operativas, además de los avances estadísticos. Los países de la región de ALC muestran grandes avances en la incorporación de un enfoque de la medición y la política multidimensional y centrado en las personas, aunque (al igual que en otras regiones) se precisan vínculos más sólidos entre los objetivos multidimensionales establecidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo, por una parte y, su aplicación efectiva mediante la dotación presupuestaria, el desarrollo de políticas y la focalización, por otra.

A fin de avanzar en la incorporación de un enfoque de bienestar en la medición y la política a nivel tanto nacional como regional en América Latina, es necesario que los agentes políticos, los organismos estadísticos y diversas partes interesadas de la sociedad civil sigan debatiendo. Las conclusiones de este informe pretenden contribuir a estos debates y reforzar la base para el trabajo y las deliberaciones futuros.

Referencias

Aarkrog, V. et al. (2018), "Decision-making processes among potential dropouts in vocational education and training and adult learning", *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, Vol. 5/2, pp. 112-129, http://dx.doi.org/10.13152/ijrvet.5.2.2. [64]

Alicea-Planas, J., J. Trudeau and W. Vásquez Mazariegos (2021), "COVID-19 risk perceptions and social distancing practice in Latin America", *Hispanic Health Care International*, p. 154041532098514, http://dx.doi.org/10.1177/1540415320985141. [25]

Altamirano, A. et al. (2020), *¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo? Posibles escenarios para América Latina y el Caribe*, Inter-American Development Bank, Washington, D.C., http://dx.doi.org/10.18235/0002062. [29]

Asmann, P. (2020), *What Does Coronavirus Mean for Criminal Governance in Latin America?*, https://www.insightcrime.org/news/analysis/criminal-governance-latin-america-coronavirus/. [43]

Banco Interamericano de Desarrollo (2018), *The Future of Work in Latin America and the Caribbean: Education and Health, the Sectors of the Future?*, https://publications.iadb.org/en/future-work-latin-america-and-caribbean-education-and-health-sectors-future-interactive-version. [60]

Banco Mundial (2021), *Acting Now to Protect the Human Capital of Our Children : The Costs of and Response to COVID-19 Pandemic's Impact on the Education Sector in Latin America and the Caribbean*, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276. [46]

Banco Mundial (2021), *Global Economic Prospects*, https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. [53]

Basto-Aguirre, N., P. Cerutti and S. Nieto-Parra (2020), *Is COVID-19 widening educational gaps in Latin America? Three lessons for urgent policy action*, OECD Development Centre, https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-urgent-policy-action/. [33]

Boarini, R., A. Kolev and A. McGregor (2014), "Measuring Well-being and Progress in Countries at Different Stages of Development: Towards a More Universal Conceptual Framework", *OECD Development Centre Working Paper*, No. 325, http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/oecd-statistics-working-papers_18152031. [71]

CEPAL (2021), "COVID-19 reports: People of African descent and COVID-19: Unveiling structural inequalities in Latin America", CEPAL, Santiago. [68]

CEPAL (2021), *COVID-19 Special Report No. 10: Financing for development in the era of COVID-19 and beyond: priorities of Latin America and the Caribbean in relation to financing for development policy agenda*, United Nations, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46711/S2100063_en.pdf. [54]

CEPAL (2021), *Panorama Social de America Latina*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020. [27]

CEPAL (2021), *The recovery paradox in Latin America and the Caribbean Growth amid persisting structural problems: inequality, poverty and low investment and productivity*, https://www.cepal.org/en/publications/47059-recovery-paradox-latin-america-and-caribbean-growth-amid-persisting-structural. [22]

CEPAL (2020), *Reconstruction and transformation with equality and sustainability in Latin America and the Caribbean*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46130/1/2000652_en.pdf. [66]

CEPAL (2020), *The part played by natural resources in addressing the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean | Insights | Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, https://www.cepal.org/en/insights/part-played-natural-resources-addressing-covid-19-pandemic-latin-america-and-caribbean?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200914_natural_resources_bulletin_1. [59]

CEPAL (2020), *Universalizing access to digital technologies to address the consequences of COVID-19*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45939/5/S2000549_en.pdf. [32]

CEPAL (2019), *Report on the Activities of the Statistical Coordination Group for the 2030 Agenda in Latin America and the Caribbean*, Statistical Conference of the Americas of ECLAC. [11]

CEPAL (2017), *Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 [Montevideo Strategy for the Implementation of the Regional Gender Agenda in the context of Sustainable Development to 2030]*. [20]

CEPAL (2017), *Proposal on a regional framework of indicators for monitoring the sustainable development goals in Latin America and the Caribbean (Document prepared by the technical secretariat for the Statistical Coordination Group for the 2030 Agenda in Latin America and the Caribbean) | Publication | Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, CEPAL, https://www.cepal.org/en/publications/42397-proposal-regional-framework-indicators-monitoring-sustainable-development-goals. [10]

CEPAL (2016), *The Social Inequality Matrix in Latin America*. [21]

CEPAL et al. (2020), *The impact of COVID-19 on indigenous peoples in Latin America (Abya Yala): between invisibility and collective resistance*, CEPAL, Santiago. [67]

CEPAL/OIT (2020), *El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, https://www.cepal.org/es/presentaciones/trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente-la-enfermedad-coronavirus-covid-19. [28]

CEPAL/OIT (2020), "Employment trends in an unprecedented crisis: policy challenges", *Employment Situation in Latin America and the Caribbean*, No. 23, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46309/4/S2000600_en.pdf. [61]

Comisión Europea (2009), *GDP and beyond: Measuring progress in a changing world*, https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/gdp-and-beyond-measuring-progress-changing-world_en. [6]

Consejo de la Unión Europea (2021), "Beyond GDP: Measuring what matters", *Issues Paper*, European Union, Brussels, https://www.consilium.europa.eu/media/49818/beyond-gdp-measuring-what-matters-issues-paper-19-may-2021-web.pdf. [7]

Consejo de la Unión Europea (2019), *Conclusions of the Council of the European Union on the Economy of Well-being*, https://www.europeansources.info/record/conclusions-on-the-economy-of-wellbeing/. [8]

Du, W. and G. Wang (2020), "Indoor air pollution was non-negligible during COVID-19 lockdown", *Aerosol and Air Quality Research*, Vol. 20/9, pp. 1851-1855, http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2020.06.0281. [50]

Ellis, E. et al. (2017), "Private property and Mennonites are major drivers of forest cover loss in central Yucatan Peninsula, Mexico", *Land Use Policy*, Vol. 69, pp. 474-484, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.048. [58]

Exton, C. and L. Fleischer (a continuación), "The future of the OECD Well-being Dashboard", *Statistics working papers*, OECD, Paris. [13]

Felbab-Brown, V. (2020), "Mexican cartels and the COVID-19 pandemic.", in *Mexican cartels are providing COVID-19 assistance. Why that's not surprising.*, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/27/mexican-cartels-are-providing-covid-19-assistance-why-thats-not-surprising/. [42]

Gobierno de Mexico (2020), *Informe Anual de Seguridad 2020*, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603367/CPM_Informe_Anual_de_Seguridad_2020__31dic20.pdf. [40]

Hale, T. et al. (2021), "A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)", *Nature Human Behaviour*, http://dx.doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8. [26]

INEGI (2020), *Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (Septiembre 2020)*, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/ensu2020_10.docx. [39]

León, D. and J. Cárdenas (2020), *Lessons from COVID-19 for a Sustainability Agenda in Latin America and the Caribbean*, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/lecciones-del-covid-19-para-una-agenda-de-sostenibilidad-en-amer.html. [56]

López-Calva, L. (2021), *The Virus and the Votes: How is COVID-19 changing voter turnout in LAC?*, UNDP, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/the-virus-and-the-votes--how-is-covid-19-changing-voter-turnout-.html. [45]

LSHTM CMMID COVID-19 working group (2020), *How many are at increased risk of severe COVID-19 disease? Rapid global, regional and national estimates for 2020*, Cold Spring Harbor Laboratory, http://dx.doi.org/10.1101/2020.04.18.20064774. [47]

Lustig, N. and M. Tommasi (2020), *Covid-19 and social protection of poor and vulnerable groups in Latin America: a conceptual framework*, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html. [30]

Montoya, N. and S. Nieto-Parra (a continuación), *Policymaking beyond GDP in Latin America: Case studies and lessons*, OECD Development Policy Papers, OECD Publishing, Paris. [16]

Naciones Unidas Estadísticas (2021), *SDG Indicators: Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. [14]

Nugent, C. (2020), *Why Armed Groups in Latin America Are Enforcing COVID-19 Lockdowns*, https://time.com/5870054/coronavirus-latin-america-armed-groups/. [44]

Nussbaum, M. (2001), *Women and Human Development: the Capabilities Approach*, Cambridge University Press, Cambridge. [70]

OCDE (2021), *Perspectives on Global Development 2021: From Protest to Progress?*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/405e4c32-en. [18]

OCDE (2020), "COVID-19 and the low-carbon transition: Impacts and possible policy responses"*, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/749738fc-en. [55]

OCDE (2020), "COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Regional socio-economic implications and policy priorities"*, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/93a64fde-en. [23]

OCDE (2020), "COVID-19: Protecting people and societies"*, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e5c9de1a-en. [65]

OCDE (2020), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9870c393-en. [5]

OCDE (2019), *OECD Economic Surveys: New Zealand 2019*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/b0b94dbd-en. [9]

OCDE (2019), "Summary and Key Messages of the 'Metrics that make a difference' conference", Bogotá, October 2019, https://www.oecd.org/statistics/LAC-well-being-metrics-Bogota-2019-summaryandkeymessages.pdf. [2]

OCDE (2017), *How's Life? 2017: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en. [74]

OCDE (2016), *Measuring and Assessing Well-being in Israel*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264246034-en. [75]

OCDE (2015), *How's Life? 2015: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en. [73]

OCDE (2013), *How's Life? 2013: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en. [72]

OCDE (2011), *How's Life?: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en. [12]

OCDE (a continuación), *COVID-19 and Well-Being: Life in the first year of the pandemic*, OECD Publishing, Paris. [52]

OCDE/CAF/CEPAL (2018), *Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/leo-2018-en. [17]

OCDE/CAF/CEPAL (2016), *Latin American Economic Outlook 2017: Youth, Skills and Entrepreneurship*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-en. [19]

OCDE et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [34]

OCDE et al. (a continuación), *Latin American Economic Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris. [15]

OCDE et al. (2019), *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/g2g9ff18-en. [1]

OMS (2020), *Mental health and COVID-19*, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/mental-health-and-covid-19. [37]

ONU (2020), *The Impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean*, United Nations, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac.pdf. [51]

ONU CEPAL (2021), *COVID-19 Special Report No. 9: The Economic Autonomy of Women in a Sustainable Recovery with Equality*, CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46634/S2000739_en.pdf. [62]

ONU CEPAL (2021), *Social Panorama of Latin America 2020*, CEPAL. [63]

Parkin, J., D. Phillips and D. Agren (2020), "Covid warnings ring out as Latin America bids to return to normality", *The Guardian*, https://www.theguardian.com/world/2020/sep/19/latin-america-covid-coronavirus-warnings. [24]

Pozzer, A. et al. (2020), "Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19", *Cardiovascular Research*, Vol. 116/14, pp. 2247-2253, http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvaa288. [48]

Sen, A. (1999), *Development as Freedom*, Knopf, New York. [69]

Statista (2020), *Growth of domestic violence and sexual abuse reports during the COVID-19 lockdown in selected Latin American countries as of April 2020*, https://www.statista.com/statistics/1113975/gender-violence-growth-coronavirus-latin-america/. [38]

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (2018), *Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264307292-en. [3]

Stiglitz, J., A. Sen and J. Fitoussi (2009), *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr. [4]

UNESCO (2021), *Education: From disruption to recovery*, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures. [31]

UNICEF (2020), *The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth*, https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth. [36]

UNODC (2020), *Research brief: Effect of the COVID-19 pandemic and related restrictions on homicide and property crime*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Property_Crime_Brief_2020.pdf. [41]

Walker, W. et al. (2020), "The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 117/6, pp. 3015-3025, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1913321117. [57]

Wu, X. et al. (2020), *Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study*, Cold Spring Harbor Laboratory, http://dx.doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502. [49]

YouGov (2020), *How COVID-19 is affecting mental health across the globe*, https://today.yougov.com/topics/health/articles-reports/2020/12/10/covid-19-mental-health-global. [35]

Anexo 1.A. Candidatos a indicadores principales para medir el bienestar en la región de ALC

Cuadro del Anexo 1.A.1. Candidatos a conceptos principales e indicadores empleados para ilustrarlos

Dimensión	Concepto objetivo	Indicador utilizado	Fuente actual
Bienestar actual: Condiciones materiales			
Ingreso y consumo	Pobreza absoluta	Proporción de la población que vive por debajo de la línea regional (CEPAL) de pobreza absoluta	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
	Desigualdad en los ingresos	Relación entre quintiles S80/S20	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
Trabajo y calidad del empleo	Empleo	Ratio entre empleo y población	OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer13/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2WAP_SEX_AGE_RT_A
	Informalidad	Proporción de empleo informal en relación con empleo total	OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer23/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_NIFL_SEX_ECO_RT_A
Vivienda e infraestructura	Acceso al agua potable	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios de agua potable	Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 6.1.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicadores/base de datos/
	Acceso a Internet	Hogares con acceso a Internet	Estadísticas de la CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL y UIT, World Telecomunication, Base de datos de indicadores TIC 2020, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
Bienestar actual: Calidad de vida			
Salud	Esperanza de vida al nacer	Esperanza de vida al nacer	Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT
	Mortalidad infantil	Tasa de mortalidad de los menores de 5 años	Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT
Conocimientos y competencias	Completado el segundo ciclo de educación secundaria	Proporción de la población que ha completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria	UNESCO, base de datos UIS, http://data.uis.unesco.org/?lang=en&SubSessionId=c135923f-6971-48b9-8d43-e7f5cdfe39ce&themetreeid=-200
	Competencias cognitivas a los 15 años	Se refiere a las puntuaciones de PISA en lectura, matemáticas y ciencias	OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do (Resultados de PISA 2018 (Volumen I): Lo que los estudiantes saben y pueden hacer), PISA, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en
Bienestar subjetivo	Satisfacción con la vida	Satisfacción con la vida reportada por la propia persona, escala de 0 a 10	Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
Seguridad	Tasa de homicidios intencionales	Homicidios intencionales, víctimas por 100.000 habitantes	UNODC, https://dataunodc.un.org/GSH_app
Calidad del medio ambiente	Calidad del aire	Exposición de la población a materia particulada fina ($MP_{2,5}$) superior a 10 microgramos/m^3	OCDE, Exposición a $MP_{2,5}$ en los países y regiones (base de datos) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EXP_PM2_5
Compromiso cívico	Gobierno inclusivo	Percepción de captura del Estado por parte de las élites: porcentaje de la población mayor de 18 años que considera	Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

		que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio.	
	Participación política	Proporción de personas que ha expresado su opinión a un funcionario	Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
Relaciones sociales	Apoyo de la red social	Proporción de personas que tienen a alguien con quien contar en caso de necesidad	Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
Recursos para el bienestar futuro			
Capital humano	Proporción de ninis	Proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación y que no trabajan exclusivamente en casa	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3469&idioma=I
	Sobrepeso y obesidad	Proporción de la población con sobrepeso u obesidad	GHO de la OMS (base de datos), https://apps.who.int/gho/data/view.main.CTRY2430A
Capital social	Confianza interpersonal	Confianza en los demás	Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
	Confianza institucional	Confianza en el gobierno nacional	Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
Capital natural	Recursos biológicos y biodiversidad – especies amenazadas	Índice de la Lista Roja	Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 15.5.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicadores/base de datos/
	Recursos biológicos y biodiversidad – cambio en la cubierta terrestre	Pérdida de suelo con vegetación natural y seminatural	OCDE, Variación de la cubierta terrestre en los países y regiones (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAND_COVER_CHANGE
	Cambio climático	Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción per cápita	OCDE, Emisiones de gases de efecto invernadero (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG (panel A) e Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE:
Capital económico	Formación bruta de capital fijo	Formación bruta de capital fijo como proporción del PIB	Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS?locations=ZJ
	Ingresos tributarios del Gobierno	Ingresos tributarios del gobierno como proporción del PIB	Estadísticas tributarias de la OCDE - América Latina y el Caribe: cuadros comparativos (base de datos), https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=RSLACT
Desigualdades horizontales			
Género	Trabajo remunerado y no remunerado	Promedio de horas semanales dedicadas por los trabajadores al trabajo no remunerado y remunerado, combinado (total de horas trabajadas)	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp
	Representación en el gobierno	Proporción de escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=I
Ciclo de vida – niños	Pobreza infantil	Proporción de niños de 0 a 14 años que vive por debajo de la línea regional (CEPAL) de pobreza absoluta	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp
Ciclo de vida – ancianos	Cobertura de las pensiones	Proporción de la población que supera la edad establecida por ley de recibir una pensión que la percibe	Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 1.3.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicadores/base de datos/
Origen étnico y racial	Pobreza	Proporción de pobreza entre la población indígena y no indígena	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp

Zonas urbanas y rurales	Acceso a los servicios de agua	Proporción de hogares rurales con acceso a agua comparados con los hogares urbanos	Base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS y Banco Mundial) https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/
Educación	Pobreza	Ratio de la tasa de pobreza de la población con enseñanza primaria comparada con la que posee enseñanza terciaria	Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp

Notas

[1] Concretamente, el PIB suele dominar el discurso sobre el progreso. Si bien el indicador del PIB nunca ha tenido por objeto plasmar el bienestar de las personas en sentido general, su facilidad de comunicación, la frecuencia y la oportunidad con la que se notifica, el marco bien consolidado de cuentas nacionales en el que se basa y el elevado nivel de estandarización aplicado a su recopilación —además del hecho de que resume información del conjunto de la economía— lo convierten en una herramienta excepcionalmente útil para monitorear los resultados macroeconómicos. Sin embargo, como medida meramente económica a nivel del sistema, el PIB no aporta ninguna información sobre los resultados sociales y medioambientales que no se negocian en los mercados, pero que tienen un gran valor para las personas; el PIB no proporciona información sobre cómo se distribuye el bienestar en la sociedad (con lo que pasa por alto aspectos de desigualdad); y, sobre todo, carece de una perspectiva de futuro que le permita abarcar aspectos de sostenibilidad e impacto intergeneracional. El PIB excluye el valor de numerosas actividades no remuneradas que contribuyen de forma indirecta a la economía (y son indispensables para la sociedad), pero a las que actualmente no puede darse seguimiento a través del Sistema de Cuentas Nacionales. Este es el caso del trabajo doméstico no remunerado, los cuidados domésticos y el voluntariado. Asimismo, incluye el valor de otras actividades que no pueden considerarse aspectos del "progreso", o que incluso son perjudiciales para el bienestar y la sostenibilidad, como el costo de incrementar los presupuestos policiales y penitenciarios para hacer frente al aumento de la delincuencia, o los costos de limpieza tras catástrofes medioambientales.

[2] Entre los principales conceptos que han influido en el marco se incluyen el enfoque de competencias, como recogen Sen (1999[69]) y Nussbaum (2001[70]), así como las recomendaciones de la Comisión sobre la medición del desempeño económico y el progreso social, dirigida por Joseph Stiglitz (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[4]). Además de la literatura académica y especializada, el marco se basa asimismo en las experiencias tanto nacionales como regionales, incluidas las consultas públicas, centradas en el objetivo de ir "más allá del PIB", y también en las interacciones con cientos de profesionales de todos los sectores de la sociedad durante los Foros Mundiales de la OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y Política que se celebran cada dos o tres años desde 2004. Para obtener más información sobre los antecedentes y los fundamentos conceptuales del marco, véanse las ediciones anteriores de *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2011[12]) (OCDE, 2013[72]).

[3] La comparación de 20 cuadros de indicadores nacionales de medición del bienestar con los indicadores del marco de la OCDE muestra que existe un elevado grado de solapamiento en la mayoría de los casos (Exton and Fleischer, a continuación[13]).

[4] Por ejemplo, la OCDE y su Centro de Desarrollo han elaborado un marco adaptado que reformula algunas de las dimensiones con el propósito de considerar mejor las perspectivas de los países en desarrollo (Boarini, Kolev and McGregor, 2014[71]). El marco también se ha adaptado para concentrarse en las necesidades o prioridades concretas de las regiones (https://www.oecdregionalwellbeing.org/), los niños (OCDE, 2015[73]), y los migrantes (OCDE, 2017[74]), además de para aplicarse a contextos nacionales como el de Israel (OCDE, 2016[75]).

[5] Siete oficinas nacionales de estadísticas de la región de ALC (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay) respondieron al cuestionario remitido en mayo de 2016 relativo a qué habría que modificar en el marco de la OCDE para reflejar las prioridades de ALC.

[6] Indicador 10.3.1 del Marco mundial de los ODS: proporción de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

[7] Con la excepción parcial del Capítulo 5, en el que, debido a las limitaciones de datos, así como a la necesidad de mantener una longitud razonable de los capítulos, únicamente se presenta una pequeña selección de indicadores con resultados a nivel de país, y el resto se resume con promedios correspondientes a los 11 países analizados (o al número máximo de países analizados de los que se dispone de datos).

[8] No se dispone de datos comparables del promedio de ALC 11 previos a 2012 respecto de la fuerza de trabajo aquí incluidos: la serie de tiempo comienza en 2012 en el caso del empleo y el desempleo; en 2011-2013 en el del subempleo por insuficiencia de horas; y en 2012-2013 en el del empleo informal como proporción del total del empleo.

[9] La tendencia media está condicionada principalmente por un descenso drástico en Colombia (-42 puntos), así como bajadas considerables en Paraguay (-12 puntos) y Ecuador (-9 puntos). No obstante, se han producido aumentos sustanciales en México (+18 puntos), Perú (+8 puntos) y Uruguay (+6 puntos).

[10] Este índice fue elaborado por la OMS para medir el avance en el logro de la meta 3.8 de los ODS, y se define como la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones con trazadores, como las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos. El índice emplea una escala de 0 a 100 sin unidades, y se calcula como la media geométrica de 14 indicadores trazadores de la cobertura de los servicios de salud. Los indicadores trazadores son los que se detallan a continuación, organizados con arreglo a cuatro componentes de la cobertura del servicio: 1. 1. salud reproductiva, materna, neonatal e infantil; 2. enfermedades infecciosas; 3. enfermedades no transmisibles; y 4. capacidad de los servicios y acceso a ellos. Véase el informe de seguimiento de 2019 para consultar el indicador trazador de cada componente. Para más información, véase: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/uhc-index-of-service-coverage

[11] De producción doméstica, excluye las emisiones generadas por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS).

[12] No se dispone de datos comparables de la OCDE para el Gráfico 1.12; esta conclusión se extrae de la Encuesta Mundial de Valores (véase el Capítulo 4 para obtener más información).

[13] La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los ingresos mensuales medios de los hombres y las mujeres, con relación a los ingresos mensuales medios de los hombres.

[14] Según la definición de la CEPAL, el trabajo no remunerado incluye los bienes y servicios no remunerados producidos por los miembros del hogar para su propio consumo, así como la atención domiciliaria y el trabajo doméstico y comunitario.

[15] Se extrajeron las estimaciones de prevalencia para las siguientes categorías de enfermedad por edad, sexo y país: (1) enfermedades cardiovasculares, incluidas las enfermedades cardiovasculares provocadas por la hipertensión; (2) enfermedad renal crónica, incluida la enfermedad renal crónica provocada por la hipertensión; (3) enfermedad respiratoria crónica; (4) enfermedad hepática crónica; (5) diabetes; (6) cánceres con inmunosupresión directa; (7) cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión provocada por el tratamiento; (8) VIH/sida; (9) tuberculosis; (10) trastornos neurológicos crónicos; y (11) drepanocitosis.

2 Condiciones materiales en América Latina

En los 11 países analizados, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los ingresos han disminuido con respecto a los niveles de 2000, aunque siguen siendo elevadas. A partir de 2014, aproximadamente, el ingreso y el consumo de los hogares se estancaron, y la región comenzó a registrar un descenso de la satisfacción con las condiciones de vida. Aunque hasta 2019 los niveles de desempleo fueron relativamente elevados en la región, datos recientes muestran que la crisis del COVID-19 tuvo efectos negativos sobre el empleo y el desempleo. En el conjunto de América Latina, más de la mitad de todos los trabajadores están empleados en el sector informal y no suelen tener acceso a programas sociales o protección contra el despido improcedente. Por lo que se refiere a la calidad de la vivienda, en promedio y en relación con los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, solo aproximadamente la mitad de los hogares tenía acceso a servicios de saneamiento, y únicamente el 70% tenía acceso a agua potable limpia.

Introducción

El marco de bienestar de la OCDE abarca tres dimensiones del bienestar actual relacionadas con las condiciones materiales: Ingresos y patrimonio (que en virtud del presente documento pasa a ser "ingresos y consumo"), Trabajo y calidad del empleo, y Vivienda (OCDE, 2020[1]). Juntas, estas tres dimensiones describen el bienestar económico o las posibilidades de consumo de las personas (p. ej., su capacidad de acceso a bienes y servicios esenciales, y sus oportunidades de participación en el mercado laboral). Las condiciones materiales determinan la capacidad de las personas de satisfacer sus necesidades (p. ej., de alimentos, agua, ropa y vivienda) y deseos (p. ej., de transporte, ocio y comunicación), así como otros aspectos de sus vidas, como el acceso a educación y atención sanitaria de calidad.

Los 11 países analizados en este informe fueron seleccionados atendiendo a su condición actual de países de ingresos altos (IA) o países de ingresos medios altos (IMA), con arreglo a la clasificación del Banco Mundial basada en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita.[1] En todos estos países, el PIB y el gasto de consumo medio de los hogares han registrado una mejora significativa en las dos últimas décadas. Pese a la heterogeneidad entre los distintos países, tanto la pobreza como la pobreza extrema y la desigualdad en los ingresos han disminuido en todos ellos de forma considerable desde el año 2000, mientras que la satisfacción de las personas con su propio nivel de vida ha aumentado. No obstante, el panorama favorable que se deriva de esta evolución a mediano plazo se desdibuja al poner el foco en las variaciones registradas en los últimos años y, en particular, a partir de mediados de la década de 2010, período en el cual la caída de los precios de las materias primas debilitó el crecimiento del PIB. A partir de 2014, aproximadamente, los niveles de ingresos y consumo de los hogares se estancaron, y la región comenzó a registrar un descenso de la satisfacción con las condiciones de vida. Asimismo, existen indicios de que, en los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, la pobreza y la pobreza extrema volvieron a aumentar en torno a 2017. La desigualdad en los ingresos se ha mantenido también en niveles elevados, pese a haberse reducido considerablemente en las dos últimas décadas; además, desde mediados de la década de 2010, la desigualdad disminuye a menor ritmo. Los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19 sobre las condiciones económicas están provocando un deterioro del nivel de vida material en la región, lo cual podría echar por tierra años (o décadas) de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y seguir ralentizando la convergencia con los países con ingresos más altos.

El trabajo y la vivienda siguen siendo los principales retos que afronta la región, en especial en el contexto de la pandemia, durante la cual las precarias condiciones laborales y habitacionales han sido importantes factores impulsores de la expansión del virus. Aunque hasta 2019 los niveles de desempleo fueron relativamente elevados en la región, también en los países analizados, datos recientes muestran que la crisis del COVID-19 ha tenido efectos claramente negativos sobre los niveles de empleo y desempleo. Asimismo, más allá de la cantidad de empleo, su baja calidad y, en particular, la prevalencia de la informalidad, han redundado en un aumento de la precariedad laboral. En el conjunto de América Latina, más de la mitad de todos los trabajadores están empleados en el sector informal y no suelen tener acceso a programas sociales o protección contra el despido improcedente. En consecuencia, durante la pandemia, muchos trabajadores tuvieron que elegir entre obedecer la orden de quedarse en casa y ganar un sustento. Por lo que se refiere a la calidad de la vivienda, en promedio y relación con los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, solo más o menos la mitad de los hogares tenía acceso a servicios de saneamiento en 2017, y únicamente el 70% tenía acceso a agua potable limpia. Como solo 1 de cada 2 hogares tenía acceso a Internet, la mayoría de los ciudadanos de los países analizados tuvieron dificultades para acceder a las distintas modalidades de teletrabajo y enseñanza a distancia, o para respetar las medidas de higiene adecuada durante la pandemia.

Ingresos y consumo

El acceso de los ciudadanos a recursos económicos adecuados es un componente esencial de su bienestar actual. El flujo de ingresos y el saldo de patrimonio al cual pueden recurrir las personas y los hogares determina su capacidad para satisfacer sus necesidades y deseos, así como su libertad para elegir cómo vivir su vida, lo cual incluye los bienes y servicios que desean consumir y a los cuales quieren tener acceso. Para poder elaborar un panorama completo de estas condiciones materiales a nivel individual o familiar es necesario tener en cuenta los ingresos, el consumo *y* el patrimonio.[2] No obstante, la falta de datos comparables sobre saldos de patrimonio en países de América Latina imposibilita actualmente la evaluación en este capítulo de esta última característica de los recursos económicos.

En toda América Latina, los elevados niveles de crecimiento económico registrados entre comienzos de la década de 2000 y mediados de la de 2010 se ven reflejados en una subida de los niveles de ingreso nacional per cápita. De todos modos, este crecimiento estuvo ligado a un auge de los precios de las materias primas[3] y, cuando estos comenzaron a tambalearse, a partir de 2014 más o menos, los avances en relación con los ingresos y gastos medios, así como la reducción de la pobreza y la desigualdad, empezaron a estancarse o incluso a revertirse. América Latina es la región con mayor desigualdad del mundo, y la relativa a los ingresos es un rasgo distintivo y persistente de sus países (CEPAL, 2018[2]). El coeficiente de Gini promedio de desigualdad en los ingresos en la región de América Latina y el Caribe (ALC) ha sido superior al de todas las demás regiones del mundo durante décadas, incluso durante el período de reducción prolongada de los últimos tiempos (Banco Mundial, 2016[3]).

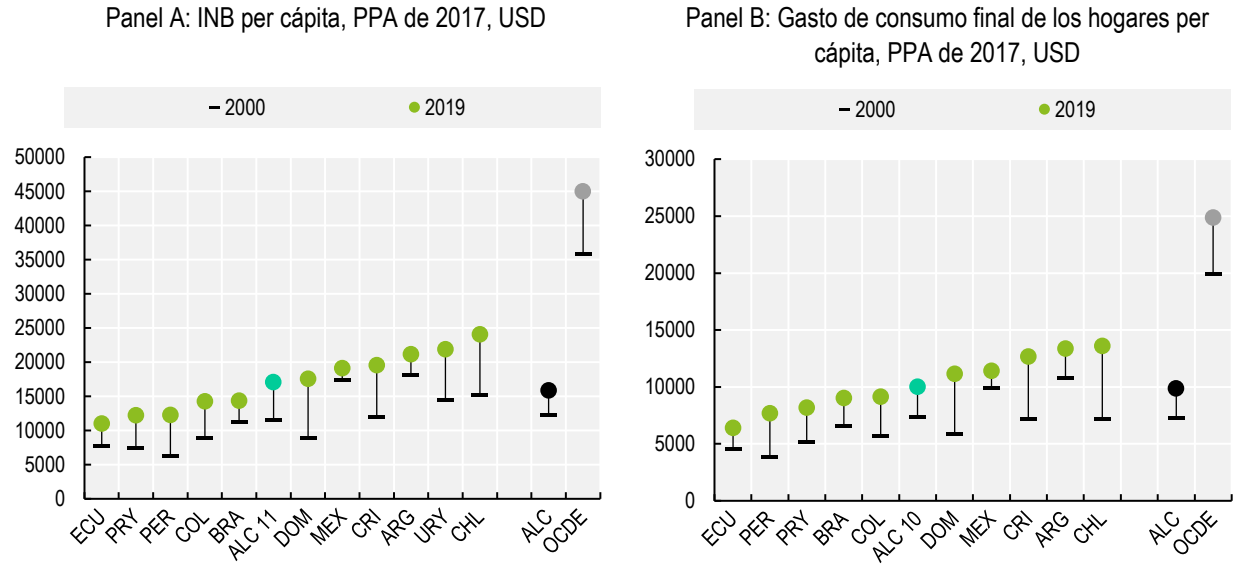
Ingresos y consumo promedios

Como se ha mencionado anteriormente, los 11 países en los que se centra este informe son todos de ingresos altos e ingresos medios altos (con arreglo a los umbrales definidos para el ingreso nacional per cápita). En 2019, el INB per cápita del grupo de 11 países analizados de ALC (16.711 USD en PPA de 2017) superaba el promedio regional de ALC (15.754 USD) en unos 1.000 USD (Gráfico 2.1, panel A). El incremento medio del INB per cápita en ALC 11 también fue superior al aumento del promedio regional desde el año 2000, reflejo de las mejoras sustanciales en las dos últimas décadas en un número reducido de los países analizados, en particular en Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay. Como suele ser habitual, el promedio enmascara las amplias divergencias entre países; por ejemplo, el INB per cápita de Ecuador (11.044 USD) no llega a la mitad del de Chile (23.261 USD) en 2019. A su vez, este es considerablemente inferior al promedio de la OCDE (44.573 USD). Por otra parte, la brecha de ingreso nacional per cápita entre la OCDE y el conjunto de la región de ALC, así como en relación con el grupo analizado, viene ampliándose desde el año 2000.

El gasto de consumo de los hogares es un buen indicador del nivel de vida material de estos, puesto que informa sobre su gasto en bienes y servicios de consumo (que, a su vez, es un componente importante del PIB total).[4] Aunque existen salvedades en cuanto al uso de este indicador como medida exacta del gasto de los hogares, sigue siendo importante tenerlo en cuenta puesto que, a falta de medidas directas del ingreso disponible de los hogares, la información relativa al consumo de los hogares refleja de qué modo el incremento del ingreso nacional podría traducirse en variaciones tangibles de la situación económica de las personas y familias (véase más información en la sección titulada “Aspectos para el desarrollo estadístico”). El valor medio del gasto de consumo final de los hogares en los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles registró un incremento, pasando de los 7.340 USD de 2000 a los 9.996 USD en 2019 (Gráfico 2.1). El promedio regional de ALC de estos niveles en ambos años fue solo ligeramente inferior (7.269 USD en 2000 y 9.930 USD en 2019). El ingreso nacional y el gasto de consumo final de los hogares per cápita en los países analizados se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE, a pesar del incremento considerable registrado en las dos últimas décadas. En líneas generales, la variación entre países y las tasas de incremento son parecidas en los dos indicadores; Chile, Costa

Rica, la República Dominicana y Uruguay son los que registran mejoras más significativas a partir del año 2000, tanto en gasto de consumo de los hogares como en INB per cápita (Gráfico 2.1, panel B).

Gráfico 2.1. El ingreso nacional y el consumo final de los hogares per cápita se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE en los países analizados, a pesar del incremento considerable registrado en las dos últimas décadas



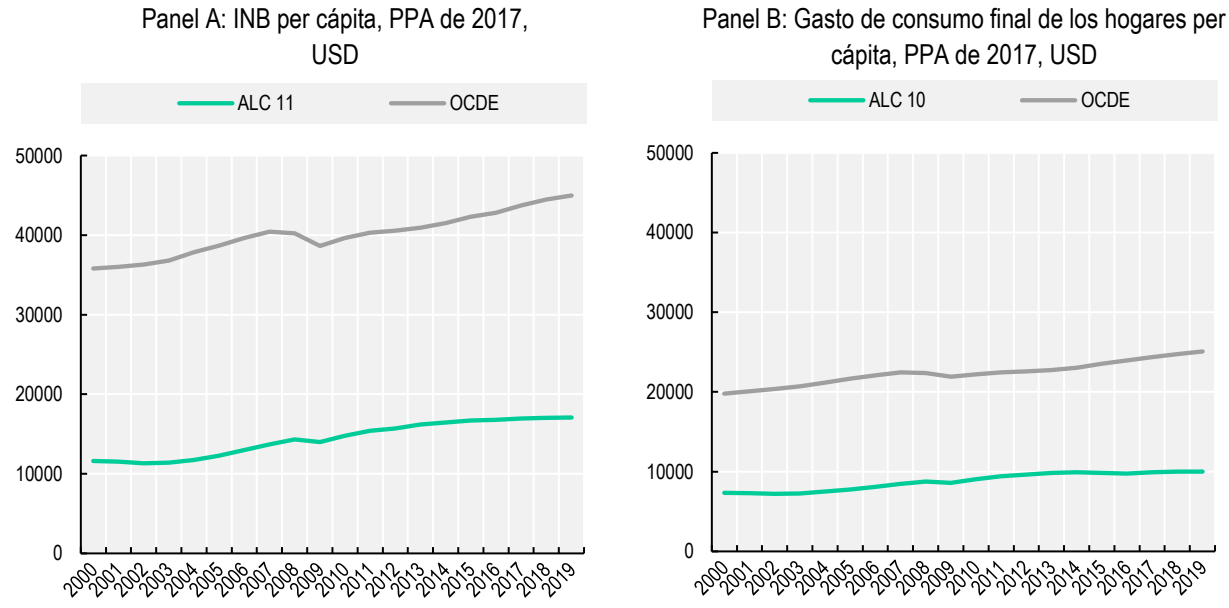
Nota: Los promedios regionales de América Latina y el Caribe y la OCDE o bien han sido calculados por el Banco Mundial (panel A), o bien se basan en los cálculos del Banco Mundial (panel B). En el panel B, ALC 10 excluye a Uruguay, puesto que no están disponibles los datos en USD a PPA de 2017. El gasto de consumo final de los hogares corresponde al valor de mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los duraderos (como automóviles, lavadoras y computadoras personales) comprados por los hogares. Excluye las compras de vivienda, pero incluye el alquiler imputado para vivienda ocupada por su propietario. También incluye los pagos y las tasas abonados a las administraciones con el fin de obtener permisos y licencias. El gasto de consumo de los hogares incluye los gastos de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, incluso si el país los declara por separado. La conversión de los datos a dólares internacionales constantes de 2017 se efectúa mediante aplicación de las tasas de paridad de poder adquisitivo al PIB, el INB y el consumo privado para obtener el gasto de consumo final de los hogares.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD (panel A) y cálculos de la OCDE basados en la base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL y https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.PP.KD (panel B).

StatLink https://stat.link/6fuiq3

Al comparar las tendencias a largo plazo del ingreso nacional y el gasto de consumo de los hogares per cápita en la región se observa que, si bien los efectos de la crisis económica de 2008-2009 fueron menos pronunciados en el grupo analizado que en el promedio de la OCDE, el final del auge de los precios de las materias primas en 2013-2014 ha provocado un estancamiento tanto del ingreso como del consumo en el conjunto de la región, mientras que en la OCDE estos siguen aumentando.

Gráfico 2.2. En promedio, en los países analizados, tanto los niveles de ingreso nacional como los de gasto de consumo per cápita se hallan estancados desde mediados de la década de 2010



Nota: Los promedios de la OCDE o bien son cálculos del Banco Mundial (panel A), o bien se basan en cálculos del Banco Mundial (panel B). En el panel B, ALC 10 excluye a Uruguay, puesto que no están disponibles los datos en USD a PPA de 2017.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD (panel A) y cálculos de la OCDE basados en la base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL y https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.PP.KD (panel B).

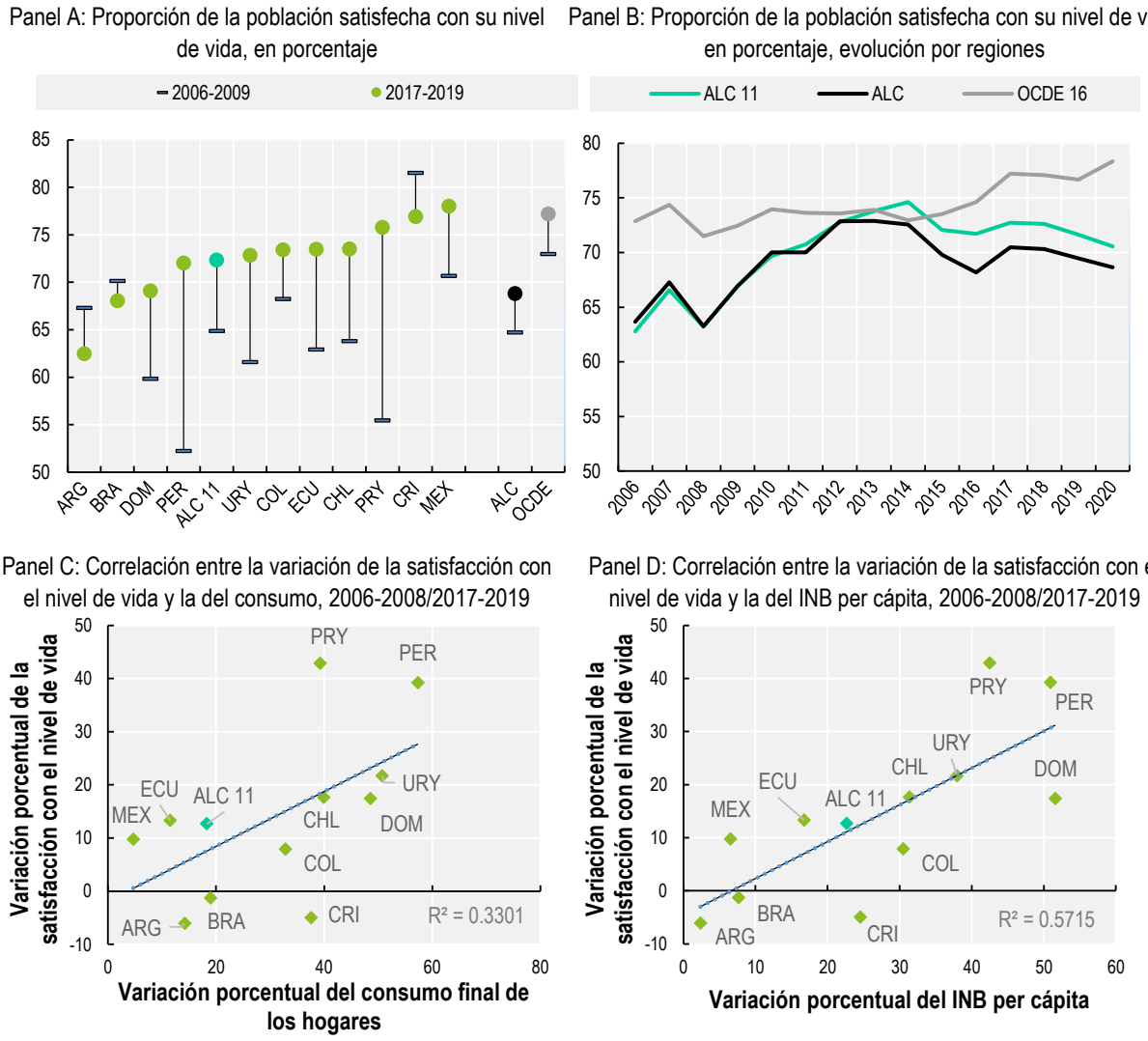
StatLink https://stat.link/hu4kcy

Satisfacción con el nivel de vida

La percepción que los propios hogares de ALC tienen de sus condiciones materiales de vida pueden ayudar a entender cómo los habitantes de la región han vivido los cambios que se han producido en los 10 últimos años. En el Gráfico 2.3 se presentan los niveles y tendencias de la proporción de la población que afirma sentirse satisfecha con su propio nivel de vida. En el panel A, se comparan los niveles de satisfacción del período trienal más antiguo sobre el cual existen datos (2006-2009) con los del período trienal más reciente (2017-2019), anterior a la pandemia de COVID-19. La mayoría de los países analizados (8 de 11) registraron un incremento de la satisfacción con el nivel de vida; en el grupo analizado, el nivel medio aumentó 7 puntos porcentuales, pasando del 65% al 72%. Los países en los que el incremento del ingreso nacional y el gasto de consumo per cápita fueron más elevados entre 2006-2009 y 2017-2019 experimentaron también la subida más destacada de los niveles de satisfacción. Al analizar las tendencias a largo plazo (Gráfico 2.3, panel B), se observa que el promedio del grupo registró un aumento bastante sostenido entre 2006 y 2014 (interrumpido únicamente por una caída en 2008, año de la crisis financiera mundial), hasta alcanzar un nivel (75%) cercano al promedio de la OCDE. No obstante, a partir de 2014, la mejora de la satisfacción con el nivel de vida comenzó a tambalearse y registró un leve descenso, seguido de un estancamiento en los últimos años. Esta evolución es muy parecida a la de las medidas macroeconómicas del INB y el gasto de consumo final de los hogares per cápita descritas anteriormente. Estos patrones se diferencian significativamente de los que prevalecen en la zona de la OCDE, donde los niveles de satisfacción vienen aumentando desde 2016, tras una década de estabilidad generalizada.

Al medir la correlación entre los tres indicadores, se obtuvo un coeficiente de determinación (R^2) entre la variación porcentual de la satisfacción con el nivel de vida y la variación porcentual del INB per cápita entre 2006-2009 y 2017-2019 de 0,57 (Gráfico 2.3, panel C), mientras que el coeficiente entre la satisfacción y el gasto de consumo final de los hogares fue de 0,33 (Gráfico 2.3, panel D). Aunque esto demuestra que una parte importante de la varianza entre países en cuanto a satisfacción con el nivel de vida puede atribuirse a divergencias en el INB y el gasto de consumo final de los hogares per cápita, también implica que una parte importante de dicha varianza no queda justificada por las variables macroeconómicas.

Gráfico 2.3. Aunque en la mayoría de los países analizados la satisfacción con el nivel de vida ha aumentado, a partir de 2014 registró una caída y, en los últimos años, se ha recuperado



Nota: Los gráficos presentan la proporción de la población que respondió "Satisfecho/a" a la pregunta: "¿Está satisfecho/a o insatisfecho/a con su nivel de vida, todo lo que puede comprar y hacer?". En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 19 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 15 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. El promedio de OCDE 16 incluye Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Lituania, México, Polonia, Reino Unido, Suecia y Turquía. Los paneles C y D muestran la variación porcentual de las variables respectivas y comparan los valores combinados del período trienal 2006-2008 con los del período 2017-2019. En el caso de Uruguay, el período de datos sobre el INB per cápita más reciente es 2017-2018 en vez de 2017-2019.

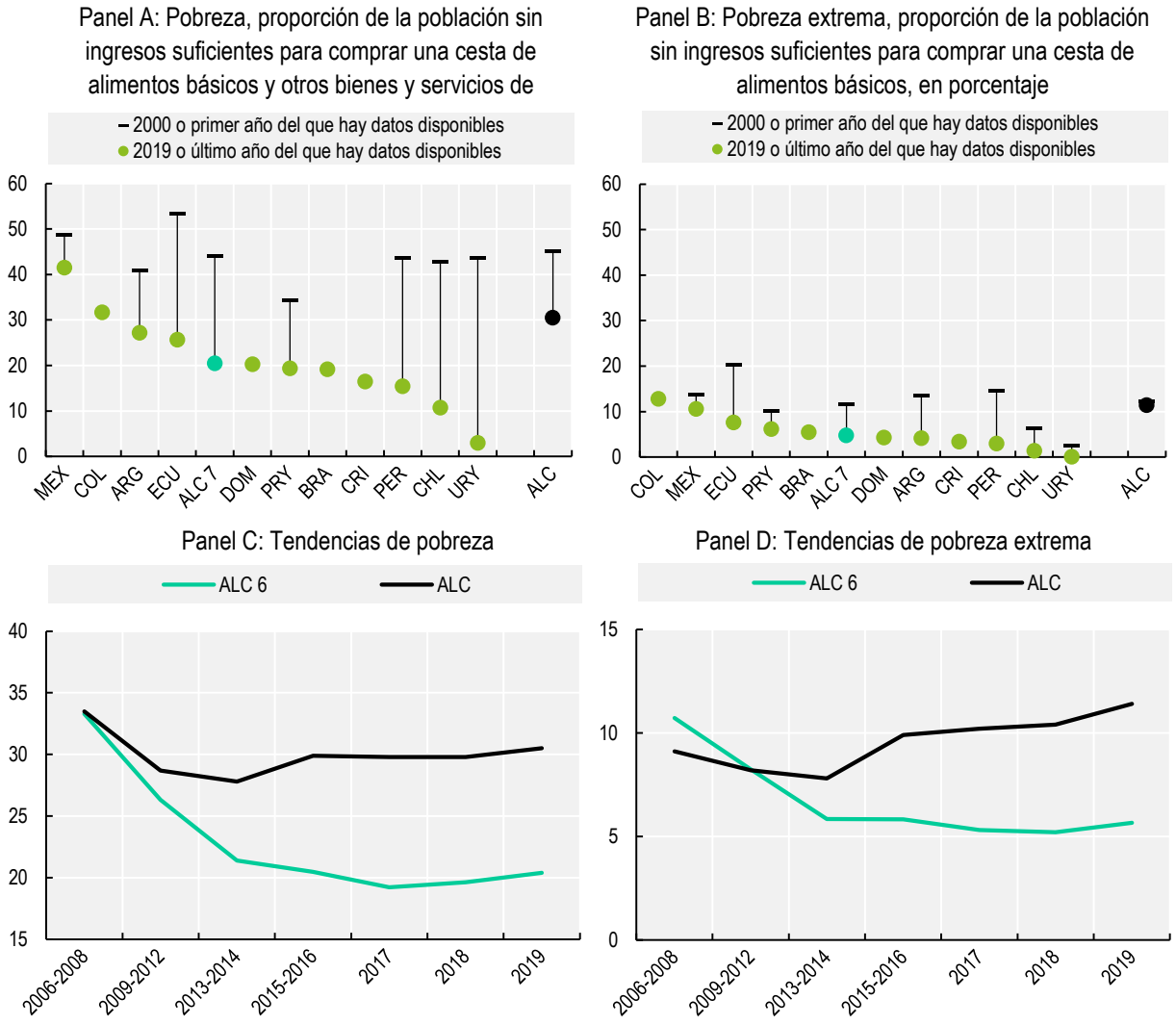
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (en relación con la satisfacción con el nivel de vida), cálculos de la OCDE basados en la base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL y https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.PP.KD (panel C) y base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD (panel D).

StatLink https://stat.link/3f9gup

Pobreza de ingresos

La reducción de la pobreza sigue siendo uno de los principales objetivos de política de todos los países de la región. Aunque la pobreza es una cuestión multidimensional que va más allá de las condiciones materiales (véase en el Capítulo 6 un análisis sobre el uso de las medidas de pobreza multidimensionales en la región), los bajos ingresos son todavía uno de los principales determinantes de la privación que sufren millones de habitantes de América Latina. El Gráfico 2.4 presenta mediciones de la pobreza absoluta y extrema basadas en los ingresos, con arreglo a las medidas calculadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (véase en el Recuadro 2.1 una explicación de los distintos umbrales de pobreza). Desde el año 2000, se han registrado importantísimos avances en cuanto a reducción de la pobreza tanto absoluta como extrema en la región, especialmente en los países analizados. En promedio, en 7 de los 11 países analizados sobre los cuales se dispone de los datos más tempranos y tardíos, la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza absoluta se redujo a menos de la mitad entre 2000 y 2019, pasando del 44% al 20,4%, mientras que la proporción de ciudadanos que viven en condiciones de pobreza extrema se redujo del 11,6% al 4,7% (Gráfico 2.4, paneles A y B). Se trata de un descenso mucho más pronunciado que el del conjunto de la región, donde la tasa de pobreza absoluta pasó del 45,2% al 30,5%, y la de pobreza extrema se redujo del 12,2% al 11,4%. La reducción de la pobreza absoluta fue particularmente importante en Uruguay (del 43,7% al 3%), Chile (del 42,8% al 10,7%) y Perú (del 43,7% al 15,4%).

Gráfico 2.4. Desde el año 2000, la pobreza absoluta y la pobreza extrema se han reducido a más de la mitad en el grupo analizado, si bien desde 2017 han vuelto a aumentar en los países con datos disponibles



Nota: Las tasas de pobreza absoluta y pobreza extrema las calcula la CEPAL y representan la proporción de la población que vive en hogares sin ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, así como otros bienes y servicios de primera necesidad (en el caso de la pobreza absoluta), y la de población sin ingresos suficientes ni siquiera para adquirir la canasta básica de alimentos (en el caso de la pobreza extrema) (CEPAL, 2019[4]). En el caso de México y Chile, los años más recientes con datos disponibles son 2018 y 2017, respectivamente. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Argentina y Ecuador; 2004 en el caso de Perú; 2005 en el caso de Paraguay y 2007 en el de Uruguay. En los paneles A y B, ALC 7 excluye a Brasil, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, por series temporales incompletas. En los paneles C y D, el promedio de ALC 6 abarca Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=i.

StatLink https://stat.link/1ugkm3

Sin embargo, incluso antes de que estallase la pandemia, ya se apreciaban señales de estancamiento o reversión de las tendencias de reducción de la pobreza en países con datos disponibles. Los paneles C y D del Gráfico 2.4 presentan las tendencias de pobreza absoluta y extrema del promedio regional de ALC, así como del promedio de países analizados sobre los cuales hay datos disponibles para los años 2017 a 2019 (Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Con posterioridad a 2013-2014, en seis países del grupo analizado, la caída de la pobreza tanto absoluta como extrema comenzó a desacelerarse, y las tasas medias vienen registrando un ligero repunte desde 2017. La tendencia hacia un aumento de la pobreza observada a partir de 2014 es todavía más evidente en el promedio regional de ALC.

Recuadro 2.1. Distintos métodos de medición de la pobreza de ingresos en América Latina

No existe una única medida estadística de la pobreza. En términos generales, la noción de pobreza remite a "una situación en que las personas no alcanzan un estándar, norma social o estado de situación deseable" (CEPAL, 2019[4]). Puede referirse a la incapacidad de satisfacer las propias necesidades básicas de supervivencia, como el acceso a una alimentación adecuada o una vivienda digna, o interpretarse en un sentido más amplio, como la imposibilidad de participar plenamente en la sociedad de otras formas. Cada vez caben menos dudas de que la pobreza es un fenómeno multiforme, con muchas causas, repercusiones y manifestaciones diferentes que pueden afectar todos los aspectos de la vida de las personas. Los métodos multidimensionales de medición de la pobreza han sido herramientas de información y orientación determinantes para la formulación de políticas en los países de América Latina en los últimos años (véase el capítulo 6 para más información)[1].

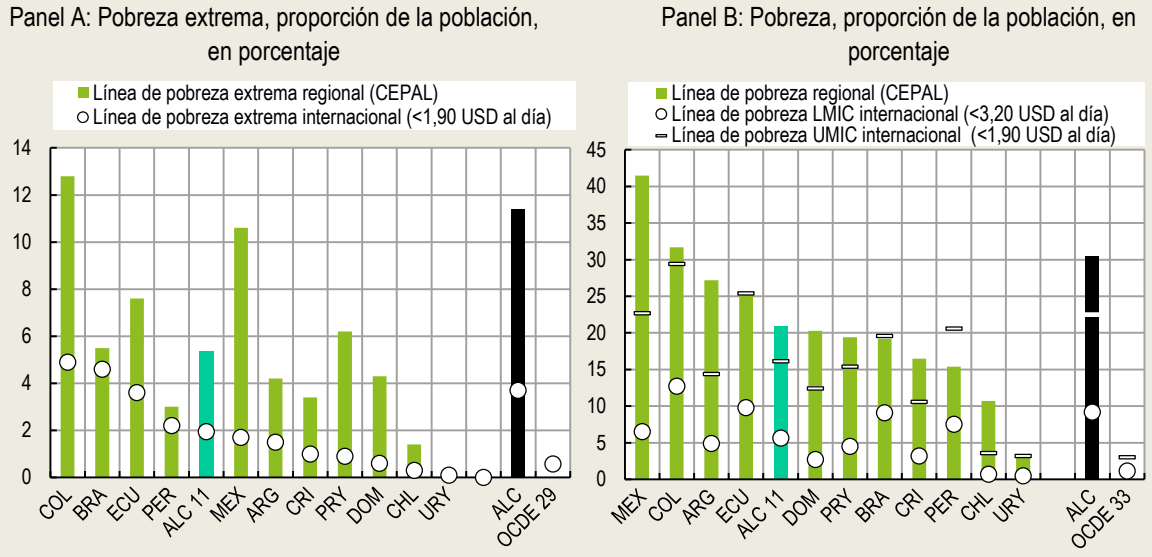
No obstante, una medida de la pobreza basada únicamente en los ingresos sigue siendo una buena fuente de información sobre las privaciones materiales de una sociedad, y muchos países elaboran medidas de la pobreza por ingresos a partir de los umbrales considerados más relevantes atendiendo a las circunstancias nacionales particulares. El problema de las medidas nacionales de la pobreza es que no pueden compararse con las de otros países, haciendo necesario disponer de medidas alternativas a efectos de comparación internacional, incluso aunque estas no se ajusten necesariamente a las cifras oficiales publicadas por los institutos nacionales de estadística. Las medidas de pobreza por ingresos más destacadas a nivel internacional se basan en umbrales monetarios comunes (en valor absoluto) en todos los países (o grupos de países). Es el caso de las líneas de pobreza extrema asociadas al indicador 1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que presenta la proporción de la población que vive con menos de 1,90 USD al día (importe revisado al alza; el umbral original era de 1,25 USD al día). El Banco Mundial se basa en tres líneas de pobreza internacionales: 1,90 USD al día para la medición internacional de la pobreza extrema; 3,20 USD al día para la medición de la pobreza en países de ingresos medios bajos, y 5,50 USD al día para la pobreza en países de ingresos medios altos.

Sin embargo, los umbrales monetarios comunes en todos los países también tienen inconvenientes, puesto que una línea de pobreza más elevada podría no reflejar el verdadero alcance de la privación de ingresos. Por esta razón, en este capítulo se emplean las tasas regionales de pobreza absoluta calculadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como indicador principal de la pobreza por ingresos. Estas medidas fueron seleccionadas por expertos en la región, que las consideraron los indicadores más adecuados para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en América Latina en la consecución del objetivo 1.1 de los ODS (CEPAL, 2019[5]). El método de la CEPAL consiste en calcular la línea de pobreza como valor monetario que considera dos componentes: en primer lugar, el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y, en segundo lugar, el costo de otros bienes y servicios, expresados como relación entre el gasto total y el gasto en alimentos[2]. La canasta básica de alimentos se construye de forma que cubra los requerimientos energéticos medios de la población de cada país, a partir de una estructura de bienes y precios

obtenida de los patrones de consumo observados en un grupo de referencia, ajustada por los equilibrios nutricionales básicos. La línea de pobreza extrema se calcula como el valor necesario para comprar la canasta básica de alimentos sin bienes y servicios adicionales, mientras que la línea de pobreza absoluta incorpora a los costos de la canasta de alimentos los correspondientes a los componentes no alimentarios.

En el Gráfico 2.5 se comparan los niveles de pobreza por ingresos (con arreglo a las líneas de pobreza regional calculadas por la CEPAL) con las líneas de pobreza internacional: 1,90 USD (indicador oficial de los ODS), 3,20 USD y 5,50 USD (las medidas de pobreza monetaria del Banco Mundial para países de ingresos medios bajos y altos, respectivamente). El gráfico deja claro que los distintos métodos de medición de la pobreza arrojan resultados muy diferentes. En la mayoría de los países analizados, la línea de pobreza extrema internacional (<1,90 USD al día) solo captura una parte del porcentaje de pobreza extrema obtenido tras aplicar la metodología de la CEPAL. En los países analizados, la tasa de pobreza extrema media en 2019 solo es del 1,9% con arreglo a la medida del Banco Mundial, mientras que el cálculo con el método de la CEPAL arroja un valor del 5,4% (Gráfico 2.5, panel A).

Gráfico 2.5. Los distintos métodos de medición de la pobreza pueden arrojar resultados muy diferentes



Nota: Los datos se refieren a 2019, excepto en el caso de México (2018) y Chile (2017). La sigla LMIC (en inglés) significa "clase de ingresos medios bajos"; la sigla UMIC (en inglés), "clase de ingresos medios altos". ALC es el promedio regional de América Latina y el Caribe, con arreglo a los cálculos de pobreza y pobreza extrema regionales realizados por la CEPAL, y los cálculos de líneas de pobreza internacionales llevados a cabo por el Banco Mundial. En el panel A, OCDE 27 excluye a Alemania, Australia, Eslovenia Hungría, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, República Checa y Suiza, por datos incompletos. En el panel B, OCDE 33 excluye a Australia, Japón, Nueva Zelanda y Eslovenia, por datos incompletos.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=I y Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY (panel A), https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC y https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC (panel B).

StatLink https://stat.link/cu7xbn

Los indicadores descritos anteriormente tienen en cuenta las privaciones en relación con un umbral fijo para medir la pobreza absoluta. El uso de medidas de la pobreza relativa, como la proporción de la población que vive con ingresos en un umbral determinado por debajo del nivel de ingresos medio, es muy habitual en países de ingresos más altos. Por ejemplo, el umbral del 50% se utiliza para medir la pobreza en la OCDE; en la Unión Europea, el umbral empleado es el del 60%. La razón fundamental de ello es que, más allá de satisfacer sus necesidades básicas para la supervivencia, los seres humanos necesitan poder participar, en una medida razonable, en la sociedad en la que viven, de la cual se verían excluidos si subsisten con ingresos muy inferiores a la media (Townsend, 1979[6]). Este informe no incluye ninguna medida de la pobreza relativa, puesto que en la región de ALC los ingresos medios (conforme a las encuestas) son tan reducidos que las medidas relativas generan un recuento de pobreza inferior al de las medidas absolutas. Por ejemplo, mientras que en 2019 el 30,5% de la población de ALC vivía en condiciones de pobreza absoluta, según la medida de pobreza regional de la CEPAL solo el 19,1% lo hacía en pobreza relativa (valor obtenido a partir del 50% del umbral de ingresos medios)[3].

A lo largo de este informe, salvo indicación en contrario, las medidas de pobreza y pobreza extrema se refieren a las medidas regionales absolutas calculadas por la CEPAL.

Notas

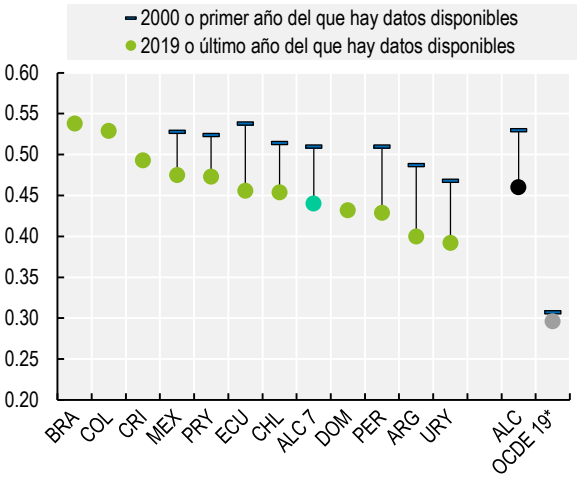
1. Los Índices de Pobreza Multidimensionales (IPM) son ampliamente utilizados en la región y, en algunos casos (como en México), se emplean como medida oficial de la pobreza. En este informe no se incluyen los IPM como indicadores de bienestar, por dos razones. En primer lugar, la definición de pobreza multidimensional y la metodología para calcular los IPM no son iguales en todos los países, y todavía no se ha desarrollado ningún método de escala mundial o regional comparable. En segundo lugar, la inclusión de un índice compuesto (que combine varios indicadores) en un cuadro de indicadores más amplio podría llevar a duplicar cuestiones (p. ej., calidad de la vivienda o logro educativo, incluidos a menudo en los IPM). Sin embargo, la importancia de adoptar un método multidimensional de medición de la pobreza, así como el papel de los IPM en particular, se reconocen y analizan con mayor detalle en el Capítulo 6.
2. El procedimiento utilizado para seleccionar los productos y servicios no alimentarios consiste en incluir aquellos artículos de adquisición habitual por parte de los hogares: vivienda, salud, ropa y calzado, transporte, equipamiento de la vivienda, educación y otros gastos. Véase una explicación más detallada de la metodología empleada por la CEPAL en (CEPAL, 2019[4]).
3. Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3307&idioma=e

Desigualdad en los ingresos

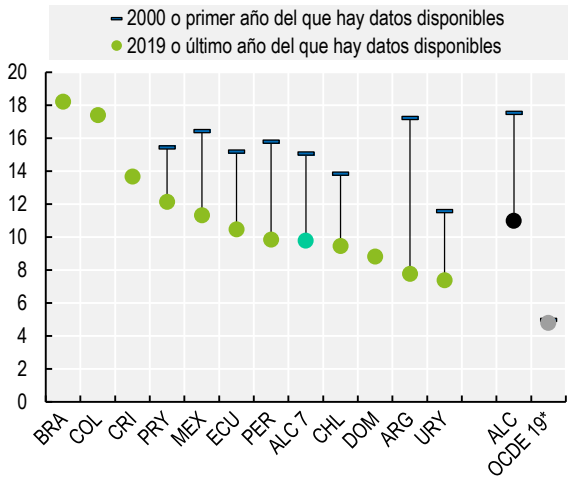
América Latina es considerada la región con mayor desigualdad del mundo, y uno de los elementos más claros y persistentes de esa desigualdad es la igualdad en los ingresos (CEPAL, 2018[2]). El Gráfico 2.6 muestra los niveles y tendencias del coeficiente de Gini y la participación en el ingreso de S80/S20 entre 2000 y 2019. El coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados para describir la desigualdad, al expresar hasta qué punto la distribución del ingreso de un país se desvía de una distribución perfectamente equitativa en una escala de 0 a 1, siendo 0 una distribución completamente equitativa y 1 una distribución completamente desigual. La relación S80/20 muestra la participación en el ingreso del 20% más rico como proporción de la participación correspondiente al 20% más pobre.

Gráfico 2.6. La desigualdad en los ingresos se ha reducido significativamente en las dos últimas décadas, aunque desde 2013-2014 disminuye a menor ritmo

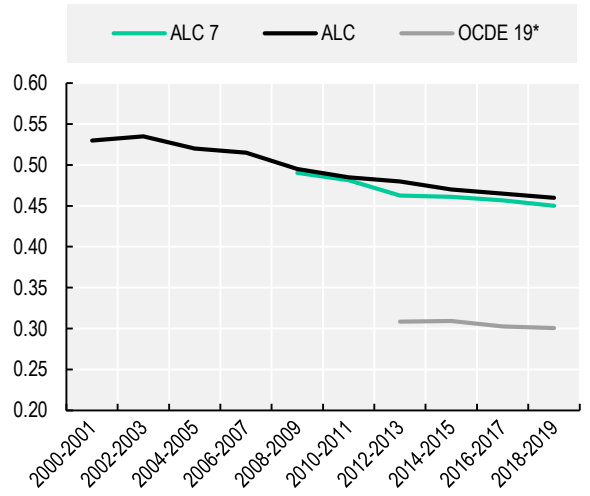
Panel A: Coeficiente de Gini



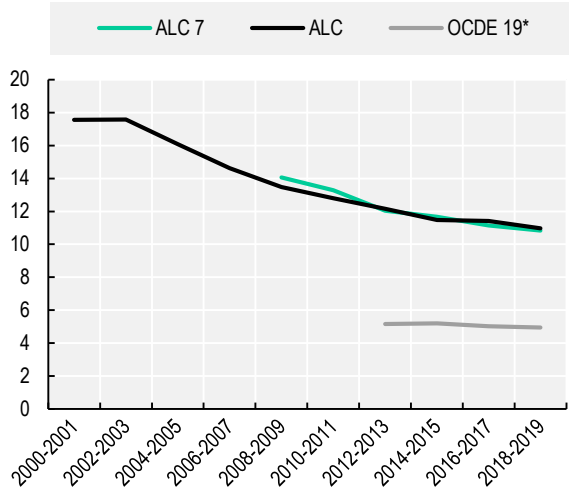
Panel B: Coeficiente de participación en los ingresos S80/S20



Panel C: Coeficiente de Gini, evolución regional



Panel D: Coeficiente de participación en los ingresos S80/S20, evolución regional



Nota: El coeficiente de Gini describe la desigualdad en los ingresos, al expresar hasta qué punto la distribución del ingreso de un país se desvía de una distribución perfectamente equitativa en una escala de 0 a 1, siendo 0 una distribución completamente equitativa y 1 una distribución completamente desigual. La relación S80/20 muestra la participación en el ingreso del 20% más rico como proporción de la participación correspondiente al 20% más pobre. Los datos sobre los ingresos de países de América Latina no están estandarizados en cuanto a si se refieren a ingresos antes o después de impuestos, y suelen referirse a trabajadores individuales. Por su parte, los datos correspondientes al promedio de la OCDE (marcados con un *) se extraen de la base de datos armonizada Income Distribution Database de la OCDE y se refieren únicamente a ingresos después de impuestos y equivalentes (es decir, ajustados de forma que reflejen las economías de escala del hogar). El último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de Costa Rica y México, y 2017 en el de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Ecuador; 2004 en el caso de Perú; 2005 en el caso de Paraguay y 2007 en el de Uruguay. En los paneles A y B, ALC 7 excluye a Brasil, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, puesto que sus series temporales son incompletas, y OCDE 19 incluye a Austria, Canadá, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suiza. En los paneles C y D, el promedio de ALC 7 excluye a Brasil, Chile, Costa Rica y la República Dominicana, puesto que sus series temporales son incompletas, y OCDE 19 incluye a Australia, Austria, Canadá, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suecia. ALC es el promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp (paneles A y C), estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp (paneles B y D) y base de datos Income Distribution Database de la OCDE, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD en el caso de los países de la OCDE.

StatLink https://stat.link/sxfi45

Durante los últimos 20 años, los países del grupo analizado, así como los del conjunto de la región, han logrado reducir enormemente la desigualdad en los ingresos, lo cual corroboran las dos medidas. En promedio, en el grupo de países analizados de ALC 7 sobre los cuales hay datos disponibles para todo el período, el coeficiente de Gini pasó de 0,51 en 2000 a 0,44 en 2019, mientras que el coeficiente de participación en los ingresos S80/20 descendió de 15,1 en 2000 a 9,8 en 2019 (es decir, en 2019 la participación en los ingresos del 20% más rico de la población casi multiplicaba por diez la del 20% más pobre) (Gráfico 2.6, paneles A y B). Durante ese mismo período, el nivel promedio en la OCDE de estas mismas medidas se mantuvo prácticamente sin variación, lo cual significa que, si bien la desigualdad en los ingresos sigue siendo muy elevada, desde 2000 viene produciéndose cierta convergencia entre la región de ALC y la OCDE.

De todos modos, estos logros en materia de desigualdad requieren un esfuerzo constante, sobre todo en el marco del COVID-19 (véase más adelante la sección dedicada a los efectos de la pandemia). Desde 2014 aproximadamente, la reducción de la desigualdad avanza a menor ritmo, por lo menos en los siete países analizados sobre los cuales hay datos disponibles para todo el período (Gráfico 2.6, paneles C y D). En estos países, el descenso medio del coeficiente de Gini fue de 0,03 puntos en el período de cinco años que abarca de 2008-2009 a 2012-2013 (de 0,49 a 0,46), y solo una cuarta parte de este en el período de cinco años siguiente, entre 2014-2015 y 2018-2019 (de 0,46 a 0,45).

Cabe señalar aquí que las comparaciones entre países, así como entre el grupo destacado de ALC o la región y los promedios de la OCDE, deben manejarse con cierta prudencia, puesto que el cálculo de los ingresos no está armonizado en ALC. En la mayoría de países de la región, los ingresos de los trabajadores asalariados se registran después de impuestos, mientras que los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y los procedentes de otras fuentes se declaran antes de impuestos. En otros países (p. ej., Brasil), todos los ingresos se declaran antes de impuestos. En general, los ingresos se refieren a particulares. Por su parte, los datos correspondientes al promedio de la OCDE se extraen de la base de datos armonizada Income Distribution Database de la OCDE y se refieren únicamente a ingresos después de impuestos y equivalentes. Ello no impide utilizar los valores de los datos disponibles en comparaciones generales entre países y en el tiempo, pero sí subraya de nuevo la necesidad de armonizar los datos regionales correspondientes a los ingresos de los hogares, aspecto que se aborda más a fondo en la sección titulada “Aspectos para el desarrollo estadístico”.

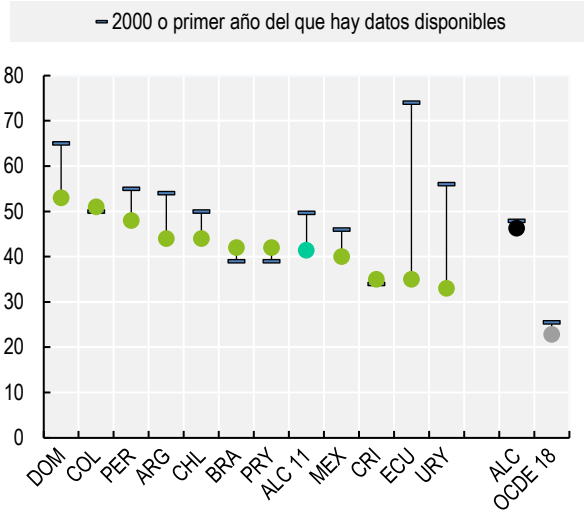
Suficiencia de ingresos

Es posible que incluso aquellas personas que viven por encima de la línea de pobreza se sientan económicamente limitadas según lo que sus ingresos puedan proporcionarles. En promedio, en 2018, en los 10 países del grupo analizado (ALC 10) sobre los cuales hay datos disponibles, 2 de cada 5 personas (41%) afirmaron tener dificultades para satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos familiares, mientras que en los países de la OCDE la proporción fue ligeramente inferior a 1 de cada 4 (23%) (Gráfico 2.7, panel A). Desde el año 2000 (cuando el nivel era del 50%), esta proporción se había reducido en 9 puntos porcentuales de media en los 10 países analizados, impulsada por una fuerte caída en Ecuador y Uruguay, y descensos menos pronunciados en Argentina, Chile, México y Perú, si bien los demás países analizados se mantuvieron estables o incluso registraron pequeños aumentos. En cambio, el promedio regional de ALC se mantuvo prácticamente sin variación a lo largo de ese mismo período. Los datos anuales muestran que la proporción media de personas con dificultades para satisfacer sus

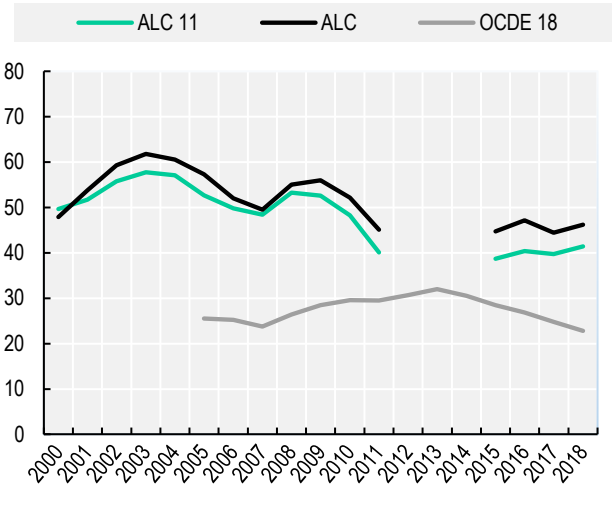
necesidades a partir de sus ingresos corrientes tanto en estos 10 países analizados como en el promedio regional de ALC ha aumentado con respecto a 2014 (Gráfico 2.7, panel B).

Gráfico 2.7. En el grupo de países analizados, 2 de cada 5 personas afirman tener dificultades para satisfacer sus necesidades a partir de los ingresos familiares, proporción que comenzó a aumentar en 2014

Panel A: Proporción de la población con dificultades o grandes dificultades para satisfacer sus necesidades con los ingresos disponibles, en porcentaje



Panel B: Proporción de la población con dificultades o grandes dificultades para satisfacer sus necesidades con los ingresos disponibles, en porcentaje, evolución regional



Nota: El gráfico se basa en la pregunta: "¿El salario o sueldo que Ud. percibe y el total del ingreso familiar le permiten cubrir satisfactoriamente sus necesidades? ¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.?". Las respuestas posibles son: "Les alcanza bien, pueden ahorrar", "Les alcanza justo, sin grandes dificultades", "No les alcanza, tienen dificultades" y "No les alcanza, tienen grandes dificultades". Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "No les alcanza, tienen dificultades" o "No les alcanza, tienen grandes dificultades". El promedio de la OCDE se refiere a la proporción de la población que afirma tener dificultades o grandes dificultades para llegar a fin de mes. La pregunta se dirige a la persona de referencia del hogar, y la información solo está disponible a nivel de hogares. El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. El promedio de OCDE 18 incluye a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Portugal, República Checa y República Eslovaca.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3256&idioma=i (hasta 2016), Latinobarómetro, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (2017 y 2018) y cálculos de la OCDE realizados a partir de la base de datos de Eurostat de estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida de la Unión Europea (EU-SILC), https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (promedio de la OCDE).

StatLink https://stat.link/38lpfn

Una de las formas más graves de privación material es la inseguridad alimentaria, es decir, el no saber si uno va a poder obtener alimentos suficientes para sí y para su familia. La inseguridad alimentaria ya iba en aumento antes de la pandemia, y en 2019 casi 1 de cada 3 personas (32%) vivía con inseguridad alimentaria moderada o severa (véase el Recuadro 2.2).

Recuadro 2.2. Inseguridad alimentaria

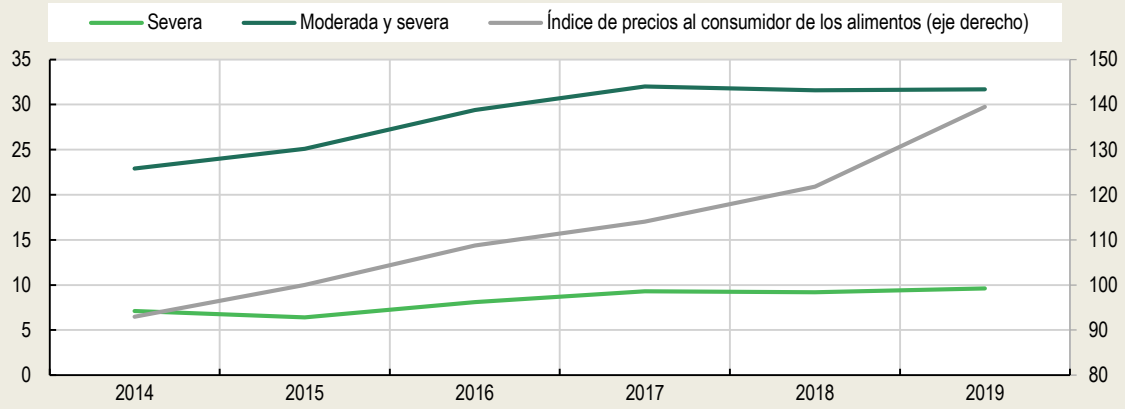
La inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la suficiencia de ingresos y constituye una medida directa de las posibilidades de consumo de los ciudadanos en su sentido más básico: si pueden o no permitirse o tener acceso a una nutrición adecuada. América Latina viene registrando un aumento de la malnutrición en los últimos años o, dicho de otra forma, de la proporción de la población cuyo consumo habitual de alimentos no es suficiente para cubrir el suministro de energía alimentaria necesario para tener una vida activa y saludable normal. En 2019, la región tenía 9 millones más de habitantes subalimentados que en 2015 (FAO, 2020[7]).

Hasta hace poco, la complejidad que entraña el concepto de inseguridad alimentaria, así como las diferencias en cuanto a su aplicación, complicaban el estudio de la "población con inseguridad alimentaria" (Smith, Kassa and Winters, 2017[8]). No obstante, la inclusión de una medida de la inseguridad alimentaria en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (dentro del indicador 2.1.2 de los ODS, relacionado con la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa) dio un fuerte impulso al desarrollo de una metodología más armonizada y sirvió de base a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para elaborar la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés). Si bien este método todavía no ha sido incorporado de forma generalizada a las encuestas nacionales oficiales, su uso en una encuesta global llevada a cabo conjuntamente por la FAO y Gallup deja entrever los primeros resultados.

El Gráfico 2.8 muestra la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa en la población, con arreglo a la escala de experiencia e inseguridad alimentaria (FIES). De acuerdo con esta escala, las personas que experimentan una inseguridad alimentaria moderada viven con la incertidumbre de si podrán obtener alimentos, y se han visto obligadas a hacer concesiones en cuanto a la calidad o la cantidad de los alimentos que consumen; las personas que experimentan una inseguridad alimentaria severa, por su parte, suelen quedarse sin comida y, en el peor de los casos, han pasado por lo menos un día sin comer. En general, en toda América Latina, en el año 2019 casi 1 de cada 3 personas (32%) vivían con inseguridad alimentaria ya sea moderada o severa, lo cual representa un aumento respecto al 23% (1 de cada 4) de 2014. En el plano mundial, aunque de media la prevalencia de la inseguridad alimentaria es superior en África, América Latina fue la región que registró el mayor incremento de esta prevalencia durante el período 2014-2019 (al compararla con la de África, Asia, y América del Norte y Europa). Este aumento de la inseguridad alimentaria (moderada y severa) es en general acorde con el incremento de los precios de los alimentos (según mediciones del índice de precios al consumidor de los alimentos de la FAO, Gráfico 2.8, eje derecho).

Gráfico 2.8. La inseguridad alimentaria creció en la región de ALC entre 2014 y 2019, y los precios de los alimentos siguen aumentando

Proporción de la población de ALC que declara tener inseguridad alimentaria moderada o severa



Nota: Los datos sobre inseguridad alimentaria se derivan del índice de experiencia de inseguridad alimentaria. Se consideran personas con inseguridad alimentaria moderada aquellas que declaran vivir con la incertidumbre de si podrán obtener alimentos o se han visto obligadas a reducir la cantidad y/o la calidad de los alimentos que consumen. Las personas con inseguridad alimentaria severa suelen quedarse sin comida y, en el peor de los casos, han pasado por lo menos uno o varios días sin comer. La proporción de la población que experimenta inseguridad alimentaria de estos dos tipos se representa en el eje izquierdo. El índice de precios al consumidor de los alimentos mide la variación en el tiempo del nivel general de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas que los hogares compran, utilizan o pagan para su consumo. El método utilizado consiste en medir el costo de compra de una canasta de consumo formada por alimentos y bebidas de calidad constante y características similares; los productos seleccionados para la canasta lo son por ser representativos del gasto de los hogares durante un período concreto. El año de referencia del índice de precios al consumidor de los alimentos es 2015 (2015 = 100). Todos los valores se refieren a promedios de la región de América Latina y el Caribe, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Fuente: (FAO, 2020[7]), "Food Security and Nutrition in the world", http://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf, y estadísticas de la FAO, http://www.fao.org/faostat/en/#data/CP

StatLink https://stat.link/j27leq

Efectos de la pandemia de COVID-19

Los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19 van a provocar un deterioro del nivel de vida material en la región, lo cual podría echar por tierra años (o décadas) de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y seguir ralentizando la convergencia con los países con ingresos más altos. Según las estimaciones de la CEPAL, en 2020 más de una tercera parte de los habitantes de América Latina vivían en situación de pobreza (33,7%), y más de una octava parte lo hacía en situación de pobreza extrema (12,5%).[5] De acuerdo con estas estimaciones, la cifra total de personas situadas por debajo de la línea de pobreza absoluta de la CEPAL era de 209 millones al final del año, lo cual supone un aumento de 22 millones con respecto a 2019 (CEPAL, 2021[9]). De este total, 78 millones de ciudadanos vivían en situación de pobreza extrema, lo cual representa un aumento de 8 millones con respecto a 2019 (CEPAL, 2021[9]). Es probable que estos cambios estén detrás de la subida de la tasa de pobreza absoluta hasta el nivel más alto desde 2008, y de la de pobreza extrema hasta el nivel más alto desde 2000 (FAO, 2020[7]).

No hay duda de que la pandemia ha intensificado el nivel de privación no solo de millones de personas que vivían ya al borde de la pobreza, sino también de la clase media vulnerable. En 2019, el 77% de la población de la región (470 millones de personas) pertenecía, según la CEPAL, al estrato de ingresos bajos o medios bajos, con ingresos per cápita de hasta tres veces la línea de pobreza regional, y sin

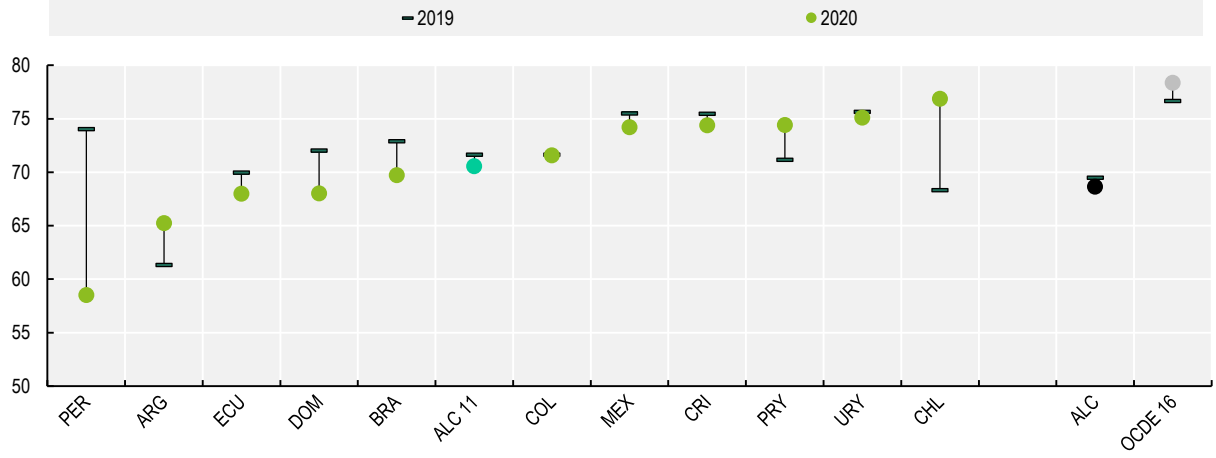
ahorros suficientes para capear la crisis (CEPAL, 2020[10]). La CEPAL calcula que el 15% de quienes pertenecen al estrato de ingresos bajos, pero que no son pobres (con un ingreso per cápita de entre 1 y 1,8 veces la línea de pobreza absoluta), habrán caído en la pobreza absoluta (20,8 millones de personas) o extrema (3 millones de personas) como consecuencia de la crisis (CEPAL, 2020[10]). La prevalencia de la inseguridad alimentaria en América Latina probablemente también habrá aumentado, debido a las perturbaciones en el suministro de alimentos y la pérdida de ingresos (FAO, 2020[7]).

Asimismo, las proyecciones de la CEPAL indican que la desigualdad en los ingresos por persona de los hogares (medida por el coeficiente de Gini) se incrementó en un 5,6% de media entre 2019 y 2020, y en un 2,9% si se tienen en cuenta las transferencias del gobierno (CEPAL, 2021[9]). Como ocurre con los niveles de pobreza, se prevé que la desigualdad en los ingresos se habrá agravado sobre todo en las principales economías de la región; se estima que el coeficiente de Gini habrá aumentado un 3% o más en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay, y entre el 0,5% y el 1,4% en Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y la República Dominicana (CEPAL, 2020[10]).

Si bien, en promedio, la satisfacción de las personas con su nivel de vida en el grupo analizado no ha variado mucho en los últimos dos años, los países presentan tendencias divergentes. Por ejemplo, la satisfacción con el nivel de vida se redujo ligeramente en 2020 en la República Dominicana (del 72% al 68%) y Brasil (del 73% al 70%) (Gráfico 2.9), pero de forma mucho más pronunciada en Perú (del 74% al 59%). En cambio, la satisfacción aumentó en 3 puntos porcentuales o más en Paraguay (del 71% al 74%), Argentina (del 61% al 65%) y Chile (del 68% al 77%).

Gráfico 2.9. Entre 2019 y 2020, en el grupo analizado, la satisfacción de la población con su nivel de vida evolucionó de forma distinta según el país

Proporción de la población satisfecha con su nivel de vida, en porcentaje



Nota: Los datos se refieren a la proporción de la población que respondió "Satisfecho/a" a la pregunta: "¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con su nivel de vida, todo lo que puede comprar y hacer?". El promedio de América Latina y el Caribe comprende 15 países, incluidos todos los países analizados en este documento. El promedio de OCDE 16 incluye a Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Lituania, México, Polonia, Reino Unido, Suecia y Turquía.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

StatLink https://stat.link/ojiys4

Aspectos para el desarrollo estadístico

De ser posible, las medidas del bienestar actual deben referirse a hogares o particulares. No obstante, la disponibilidad de información sobre ingresos, consumo y patrimonio de los hogares es limitada en los países de América Latina.[6] A falta de esta información, pueden utilizarse los datos compilados a partir de los sistemas de cuentas nacionales (SCN) de cada país como indicador sustitutivo de ingresos y consumo; de todos modos, como estos datos combinan información procedente de distintos sectores de la economía (p. ej., empresas, intermediarios financieros y el sector público), constituyen medidas incompletas de las condiciones reales de los hogares. En este capítulo se utilizan dos medidas distintas de las condiciones materiales promedias. La primera de ellas es el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, el indicador empleado por el Banco Mundial para clasificar los niveles de ingresos, que recoge los flujos de ingresos devengados por todos los sectores de la economía, en vez de limitarse a los hogares propiamente dichos. La segunda es una medida del gasto de consumo de los hogares basado en los SCN, un indicador que, si bien pertenece a los hogares, no tiene en cuenta la proporción de ingresos corrientes que estos ahorran, y que podrían servirles para financiar su nivel de vida en períodos posteriores. Este indicador incluye también los gastos de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, como son los hospitales y los centros educativos. A pesar de sus limitaciones (entre ellas, el hecho de que solo ofrecen información agregada, sin tener en cuenta los patrones de distribución dentro de un mismo país), el examen conjunto de estos indicadores sustitutivos permite evaluar de forma más completa las condiciones de vida material en América Latina a escala nacional.

Actualmente, en la región, la medición del patrimonio es muy limitada: solo Costa Rica, Chile, México y Uruguay han realizado encuestas sobre el patrimonio de los hogares, si bien no de forma sistemática.[7] Mejorar la información sobre el patrimonio no solo es importante para tener una idea más clara de los activos financieros y materiales de los hogares, sino también para entender mejor la inseguridad económica de estos. El grupo de expertos de alto nivel sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social consideró prioritaria la medición de la inseguridad económica (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[11]). La inseguridad financiera es un factor especialmente relevante a la hora de determinar qué personas sin pobreza de ingresos corren el peligro de caer en la pobreza por no disponer de recursos financieros suficientes. Por ejemplo, en la edición de 2020 de *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2020[1]) se incluye una medida de la proporción de la población que no tiene recursos financieros suficientes para protegerse de una pérdida de ingresos de tres meses.[8] Esta medida proporciona información valiosa sobre la suficiencia o insuficiencia de los activos que pueden servir de protección ante *shocks*, hace hincapié en la distribución de los recursos económicos y presenta información sobre ingresos y patrimonio de forma conjunta (aunque no sobre el consumo).

Con el fin de entender mejor la situación económica de los latinoamericanos desde el punto de vista del bienestar, es importante mejorar la disponibilidad y comparabilidad de las medidas directas del ingreso de los hogares, así como del patrimonio de estos. No es una tarea fácil, puesto que la definición de ingresos empleada en las encuestas nacionales de los países de la región suele variar de forma sustancial según el tratamiento que se da, en su caso, a los ingresos en especie, los alquileres imputados y la producción doméstica, por ejemplo, o según si otras fuentes de ingresos específicas, como las remesas, las transferencias privadas o las rentas de la propiedad se han capturado o no de forma adecuada. Asimismo, los ingresos pueden declararse netos o brutos de impuestos; en este último caso (como ocurre con los datos oficiales de Brasil y Colombia), es normal que las medidas de la desigualdad basadas en los ingresos antes de impuestos sean superiores a las que se obtienen tras declarar las desigualdades en ingresos disponibles (es decir, después de impuestos), puesto que no reflejan los efectos redistributivos de los impuestos. En algunos países (p. ej., México), incluso cuando las medidas se refieren al ingreso disponible, los datos sobre tributación no se declaran por separado, lo cual hace que sea imposible capturar la magnitud total de la redistribución (solo la de las transferencias públicas) (Balestra et al., 2018[12]). Además, las estimaciones de la desigualdad en los ingresos en los países de América Latina suelen no coincidir con el enfoque de la OCDE, que utiliza mediciones de los ingresos ajustados de forma

que reflejen las economías de escala de las necesidades de los hogares (los llamados "ingresos equivalentes de los hogares"[9]). Las fuentes latinoamericanas suelen utilizar de forma estándar el ingreso per cápita, que presupone que no existen economías de escala dentro de los hogares (Balestra et al., 2018[12]). Armonizar la forma de recolectar y declarar los datos en la región de ALC significaría un importante paso adelante hacia la disponibilidad de medidas directas comparables de los ingresos de los hogares y la distribución del ingreso.

La medición de las condiciones económicas de los hogares y su distribución también podría mejorarse en otros sentidos; por ejemplo, ampliando su frecuencia y cobertura. De ser posible, deberían realizarse encuestas sobre la distribución del ingreso por lo menos una vez al año, y la recolección de los datos sobre el ingreso debería efectuarse en relación con el año anterior (y no con el mes anterior, como ocurre en algunos de los países de la región). Asimismo, deberían tomarse medidas que garanticen que los datos abarcan la totalidad de la distribución del ingreso, en especial los situados en los límites superior e inferior, que suelen quedar subregistrados. En América Latina, la desigualdad viene impulsada normalmente por una excesiva concentración de los ingresos en manos de una pequeña élite en el 1% superior, o incluso en el 0,1% de la distribución, aún más que en otras regiones del mundo (Sánchez-Ancochea, 2021[13]). Complementar los datos de las encuestas con información adicional procedente de otras fuentes —como los registros tributarios, siempre que sea posible— puede ayudar a obtener cifras más precisas sobre los ricos ocultos ("*missing rich*") (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[11]). Los datos administrativos también pueden contribuir a la mejora de la calidad de la medición de los ingresos en el extremo inferior de la distribución del ingreso. Muchos países de la región, por ejemplo, han introducido en las últimas décadas las transferencias monetarias condicionadas, si bien no siempre se declaran debidamente en las encuestas sobre ingresos de los hogares.[10] Complementar las encuestas de hogares con datos administrativos de las transferencias monetarias condicionadas podría dar acceso a información más precisa sobre la situación de los hogares que cumplen los requisitos.

Por último, dada la importancia de la cuestión de la inseguridad alimentaria en la región, un uso más generalizado del índice de experiencia de inseguridad alimentaria en las encuestas nacionales proporcionaría valiosos datos concluyentes y comparables, que permitirían llevar un seguimiento de su prevalencia e intensidad.

Trabajo y calidad del empleo

La mayoría de los hogares con personas en edad de trabajar requieren ingresos periódicos por trabajo remunerado para incrementar y mantener las condiciones de vida material. Además, tanto el trabajo remunerado como el no remunerado pueden dar a las personas la oportunidad de hacer realidad sus ambiciones, desarrollar capacidades y habilidades, sentirse útiles dentro de la sociedad y fortalecer la autoestima. El trabajo conforma la identidad de las personas, proporciona estructura y puede generar oportunidades de relación social. El desempleo tiene importantes y persistentes efectos negativos sobre la salud tanto física como mental, así como sobre el bienestar subjetivo, efectos que van mucho más allá de la pérdida de ingresos generada por la falta de trabajo (OCDE, 2011[14]). Como la mayoría de las personas pasan gran parte de sus horas de vigilia en el trabajo, y trabajan durante gran parte de sus vidas, los organismos internacionales y las autoridades económicas reconocen cada vez más la necesidad de tener un empleo de gran calidad; es decir, trabajos que proporcionen salarios y prestaciones adecuados, sean razonablemente seguros y se desarrollen en entornos laborales seguros y propicios.[11]

En América Latina, las tasas de empleo son elevadas si se comparan con el promedio de la OCDE, algo que viene ocurriendo desde hace por lo menos 20 años. No obstante, las tasas de empleo empezaron a flaquear en 2016, y el desempleo también va en aumento. Además, el empleo latinoamericano se caracteriza por una elevada tasa de informalidad; se estima que más de la mitad de los trabajadores ocupan puestos de trabajo informales. Si bien puede argumentarse que es mejor tener trabajo informal

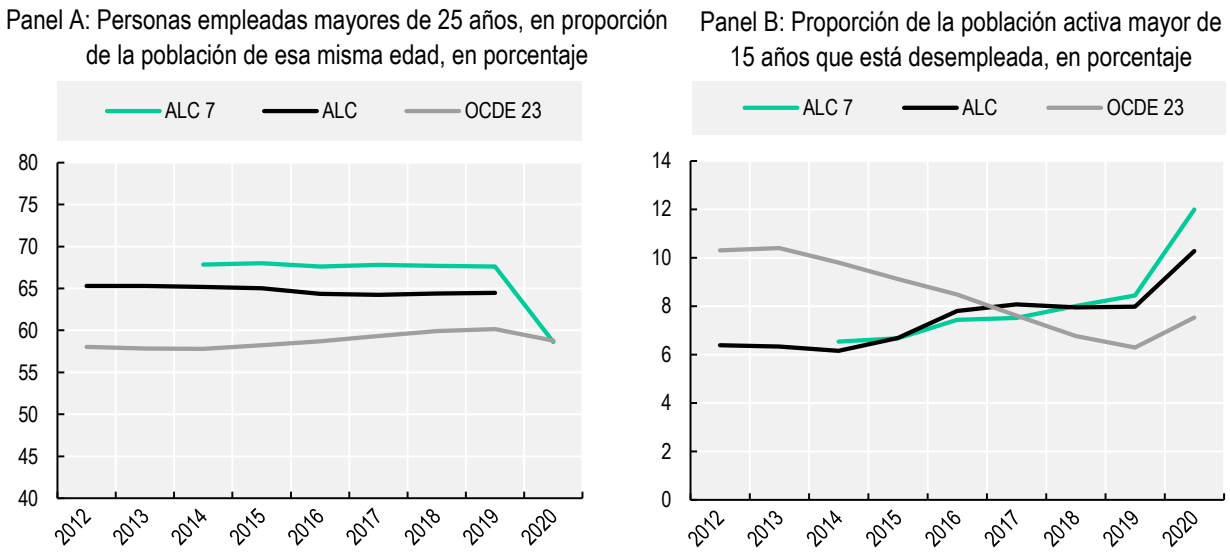
que no tener trabajo, la elevada prevalencia de la informalidad es motivo de preocupación desde el punto de vista de la calidad del empleo, puesto que los trabajos informales no están protegidos, ni regulados, reconocidos o valorados. Como en América Latina la protección social y el acceso a servicios de salud suelen estar vinculados a la situación laboral, los trabajadores informales son especialmente vulnerables. En este sentido, los efectos de la pandemia de COVID-19 pueden resultar devastadores y provocar un fuerte incremento del desempleo, un nuevo aumento de la informalidad en porcentaje del empleo total y pobreza generalizada.

Empleo y desempleo

El trabajo remunerado proporciona a las personas y las familias ingresos esenciales, pero también, y especialmente en el caso de América Latina, acceso a servicios de salud y otras formas de protección social vinculadas a la situación laboral. Un examen del promedio de los siete países analizados sobre los cuales existen series temporales comparables (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú) revela que, si bien la tasa de desempleo se mantuvo estable entre 2014 y 2019 (en el 68%), la de desempleo creció del 6,5% al 8,4% (Gráfico 2.10). A lo largo de ese mismo período, la tasa media de empleo de la OCDE registró un ligero aumento, del 58% al 60%, mientras que la de desempleo se redujo, pasando del 9,8% al 7,5%.

La pandemia ha afectado en gran medida los principales resultados del mercado laboral, como se aprecia en la fuerte variación de los niveles de empleo y desempleo entre 2019 y 2020. Esta cuestión es objeto de análisis detallado en la sección dedicada a los efectos del COVID-19, pero el Gráfico 2.10 ya deja entrever que el empleo ha disminuido y el desempleo ha aumentado, tanto en el grupo analizado de ALC como en los promedios regionales. Aunque lo mismo ha ocurrido en la OCDE, las consecuencias no son de la misma magnitud que en ALC. En el conjunto de los siete países analizados de la región sobre los cuales hay datos disponibles, el empleo registró un descenso de 9 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, hasta situarse en el 58% (mientras que la disminución en la OCDE fue de tan solo 1 punto), y el desempleo se incrementó en 3,6 puntos, hasta el 12% (comparado con el aumento de 1,2 puntos porcentuales de la OCDE).[12]

Gráfico 2.10. En los años previos a la pandemia, la tasa de empleo se mantuvo estable en los países analizados, mientras que la de desempleo fue en aumento



Nota: OCDE 23 excluye a Alemania, Bélgica, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Islandia, Israel, Japón, Luxemburgo, México, Suecia y Turquía por interrupciones en las series temporales o datos incompletos. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la OIT. En el panel A, ALC 7 excluye a Argentina, México, la República Dominicana y Uruguay. En el panel B, ALC 6 excluye a Argentina, Ecuador, México, la República Dominicana y Uruguay.
Fuente: OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer13/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2WAP_SEX_AGE_RT_A para los datos de país y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer34/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_DWAP_SEX_AGE_RT_A para el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel A) y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A (panel B).

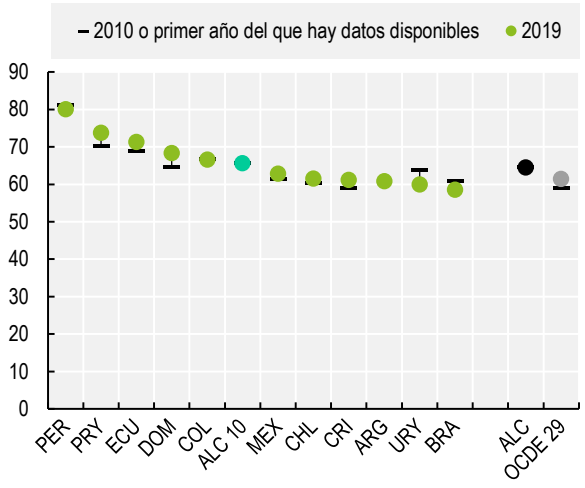
StatLink https://stat.link/dptc2v

En el momento de redactarse este informe, los indicadores del mercado laboral para 2020 no estaban disponibles en relación con todos los países analizados, por lo que el examen que figura a continuación se centra en la situación que había antes de la pandemia, en 2019. En promedio, en los 10 países analizados con datos comparables, la tasa de empleo fue del 66% de la población mayor de 25 años. Se trata de un nivel relativamente elevado, 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE en 2019 (61%). En 2019, las tasas de desempleo de los países analizados presentaron divergencias de más de 20 puntos, desde el 58,6% de Brasil hasta el 80,1% de Perú (Gráfico 2.11, panel A). Si bien la mayoría de los países registraron poca variación neta en el empleo entre 2010 y 2019, no fue así en todos los países: Uruguay experimentó un descenso de la tasa de empleo de casi 4 puntos en ese período, mientras que Paraguay registró un aumento de la misma magnitud.

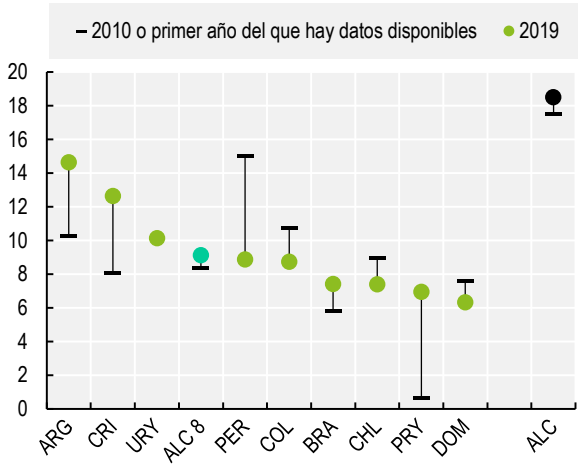
La tasa de empleo relativamente elevada de los países analizados enmascara problemas más profundos en cuanto a la calidad y la disponibilidad de oportunidades laborales en la región. Por ejemplo, en los ocho países analizados con series temporales comparables, en 2019, en promedio, el 9,2% de los trabajadores tenían empleos que no les proporcionaban horas de trabajo suficientes (Gráfico 2.11, panel B). En Argentina, 1 de cada 7 trabajadores (14,6%) trabajaba involuntariamente a tiempo parcial, y deseaba y podía trabajar más horas. No obstante, el subempleo por insuficiencia de horas es muy inferior en los países analizados que en el conjunto de la región de ALC, donde casi 1 de cada 5 trabajadores (18,5%) querría y podría trabajar más horas si tuviese la oportunidad.

Gráfico 2.11. La tasa de desempleo oscila entre el 60% y el 80% en los países analizados, pero, en promedio, aproximadamente 1 trabajador de cada 12 no trabaja tantas horas como querría

Panel A: Personas empleadas mayores de 25 años, en proporción de la población de esa misma edad, en porcentaje



Panel B: Proporción de la población empleada mayor de 15 años que se encuentra subempleada por insuficiencia de horas, en porcentaje



Nota: El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Costa Rica, 2012 en el caso de Brasil, 2014 en el de Ecuador y 2015 en el de la República Dominicana. ALC es el promedio regional calculado por la OIT. En el panel A, ALC 10 excluye a Argentina y OCDE 29 excluye a Bélgica, Corea, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y Turquía, por datos incompletos. En el panel B, ALC 8 excluye a Ecuador, México y Uruguay, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. Los subempleados por insuficiencia de horas son trabajadores que cumplen los tres criterios siguientes en el período de referencia: a) quieren trabajar más horas; b) están disponibles para trabajar más horas, es decir, en un período posterior específico, están dispuestos a trabajar más horas si se presenta la oportunidad de hacerlo, y c) trabajaron menos de lo que marca el umbral de jornada laboral, es decir, personas cuyas horas trabajadas efectivamente en todos sus empleos durante el período de referencia estaban por debajo del umbral pertinente, seleccionado según las circunstancias de cada país.
Fuente: OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer13/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2WAP_SEX_AGE_RT_A para los datos de país y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer34/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_DWAP_SEX_AGE_RT_A para el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel A);
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer43/?lang=en&segment=indicator&id=TRU_DEMP_SEX_AGE_RT_A para los datos de país,
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer27/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2TRU_SEX_AGE_RT_A para el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel B).

StatLink https://stat.link/nrdchx

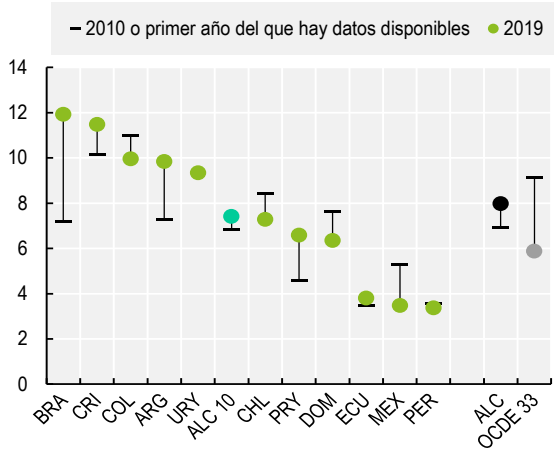
Dentro del grupo analizado, los niveles de desempleo fueron muy variados en 2019 (Gráfico 2.12, panel A). La tasa de desempleo más elevada, la de Brasil (11,9%) triplicó la más reducida del grupo analizado, la de Perú (3,4%). Tanto Perú como Ecuador y México registraron tasas de desempleo inferiores al promedio de la OCDE en 2019 (5,9%). La tasa media de desempleo del grupo analizado aumentó ligeramente, pasando del 6,9% de 2010 al 7,4% en 2019; en este período, los incrementos más fuertes a nivel nacional fueron los observados en Argentina (+2,5 puntos porcentuales) y Brasil (+4,7 puntos).

El desempleo puede tener repercusiones notables sobre el bienestar de los trabajadores, no solo en términos de pérdida de ingresos, sino también por los efectos estigmatizadores mucho más duraderos que el período de desempleo en sí (Mousteri, Daly and Delaney, 2018[15]). Los efectos negativos del desempleo aumentan conforme a su mayor duración: el desempleo de larga duración, aquel que se prolonga más allá de 12 meses, puede suponer una carga considerable para los afectados y sus familias. En promedio, en los ocho países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, el desempleo de larga duración representaba en 2019 el 15% del desempleo total, una tasa casi un 50% inferior al promedio

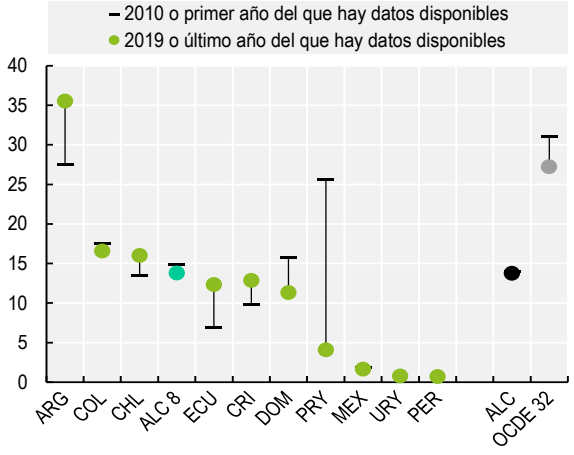
de la OCDE (Gráfico 2.12, panel B). Lo cierto es que casi todos los países, a excepción de Argentina, registraron tasas de desempleo de larga duración inferiores al promedio de la OCDE. No obstante, estos resultados relativamente positivos del mercado de trabajo en la región de ALC deben interpretarse en el contexto de la insuficiencia de redes de protección social. Ante la limitada cobertura de las prestaciones por desempleo, los trabajadores, en general, no pueden permitirse estar sin trabajo durante mucho tiempo y, por necesidad, se ven obligados a encontrar empleo sin demora, incluso si los únicos trabajos disponibles pertenecen al sector informal.

Gráfico 2.12. El grupo analizado presenta grandes diferencias entre países en materia de desempleo, si bien en la mayoría de ellos la proporción de desempleo de larga duración está por debajo del promedio de la OCDE

Panel A: Proporción de la población activa mayor de 15 años que está desempleada, en porcentaje



Panel B: Proporción de la población desempleada mayor de 15 años de edad que se encuentra en esta situación desde hace un año o más, en porcentaje



Nota: En el panel A, el primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Costa Rica, 2012 en el caso de Brasil, 2014 en el caso de Argentina y 2015 en el de la República Dominicana. ALC 10 excluye a Uruguay por una interrupción en las series temporales. ALC es el promedio regional calculado por la OIT. OCDE 33 excluye a Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Suecia, por interrupciones en las series temporales. En el panel B, el último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de Perú. El primer año del que hay datos disponibles es 2012 en el caso de Costa Rica, 2013 en el caso de Ecuador y 2015 en el de la República Dominicana. ALC 8 excluye a Brasil, Perú y Uruguay, por interrupciones en las series temporales. El promedio regional de ALC comprende 12 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 8 países analizados sobre los cuales hay datos disponibles. OCDE 32 excluye a Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Turquía, por interrupciones en las series temporales.

Fuente: OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A (panel A), Encuesta Continua de Empleo de Costa Rica y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer23/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_TUNE_SEX_AGE_DUR_DT_A en relación con todos los países excepto Costa Rica (panel B).

StatLink https://stat.link/g9j205

Informalidad

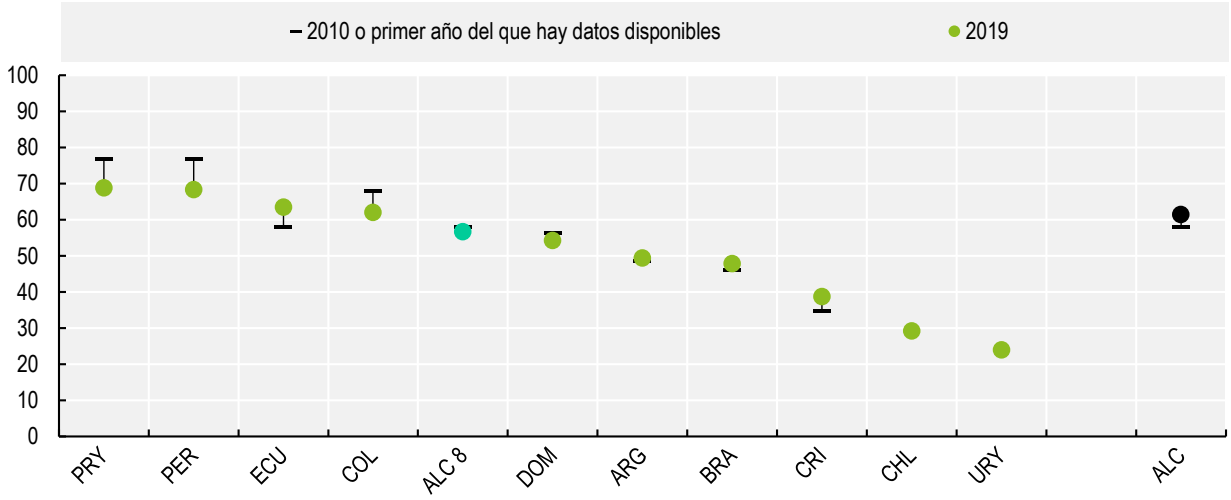
El trabajo informal[13] proporciona ingresos en los casos en los que puede que no haya puestos de trabajo disponibles en el sector formal, pero acarrea una falta de cobertura de protección social y un mayor grado de vulnerabilidad a la inseguridad laboral, malas condiciones de trabajo y una remuneración menor (OIT, 2018[16]). Cerca del 40% de los trabajadores de América Latina no están cubiertos por ninguna red de protección social, pero el porcentaje llega al 65% en el caso de los trabajadores informales (OCDE et al., 2020[17]).

En conjunto, más de la mitad de los trabajadores (57%) estaban empleados en el sector informal en los países analizados en 2019, un nivel que se acerca al registrado en 2010 (58%) (Gráfico 2.13, panel A). La prevalencia de la informalidad disminuyó en la última década en la mitad de los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, un descenso que fue especialmente importante en Perú, Paraguay y Colombia (9, 8 y 6 puntos porcentuales, respectivamente). Como hemos visto en el caso de otros indicadores del empleo examinados en esta sección, se aprecian importantes diferencias en cuanto a prevalencia de la informalidad en los países analizados, que oscila entre el 24% de Uruguay y el 69% de Ecuador.

A veces hay quien prefiere utilizar el empleo informal como proporción del empleo no agrícola para medir la informalidad, ya que el trabajo informal suele ser habitual en el empleo agrícola, con lo cual los resultados de los países con importantes sectores agrícolas podrían quedar distorsionados. Esta medida se incluye en el marco global de las Naciones Unidas para monitorear el ODS 8.3.1, relacionado con la creación de puestos de trabajo decentes y productivos. No obstante, al excluir al sector agrícola, el descenso en la prevalencia de la informalidad en los países analizados apenas es apreciable y se sitúa en promedio en una tasa del 52%, siendo las diferencias entre países bastante parecidas a las que se señalan en el Gráfico 2.13.

Gráfico 2.13. Más de la mitad de los trabajadores de los países analizados (57%) están empleados en el sector informal

Empleo informal como proporción del empleo total, en porcentaje



Nota: El indicador presenta la proporción de empleo clasificado como informal en la economía total. Véase una descripción completa de las categorías laborales que conforman el empleo informal aquí: https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-informality/
El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Brasil y Costa Rica, 2014 en el caso de Ecuador y 2015 en el de la República Dominicana. ALC 8 excluye a Chile, México y Uruguay, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. El promedio regional de ALC comprende 12 países, incluidos los 8 analizados sobre los cuales hay datos disponibles.
Fuente: OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer23/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_NIFL_SEX_ECO_RT_A.

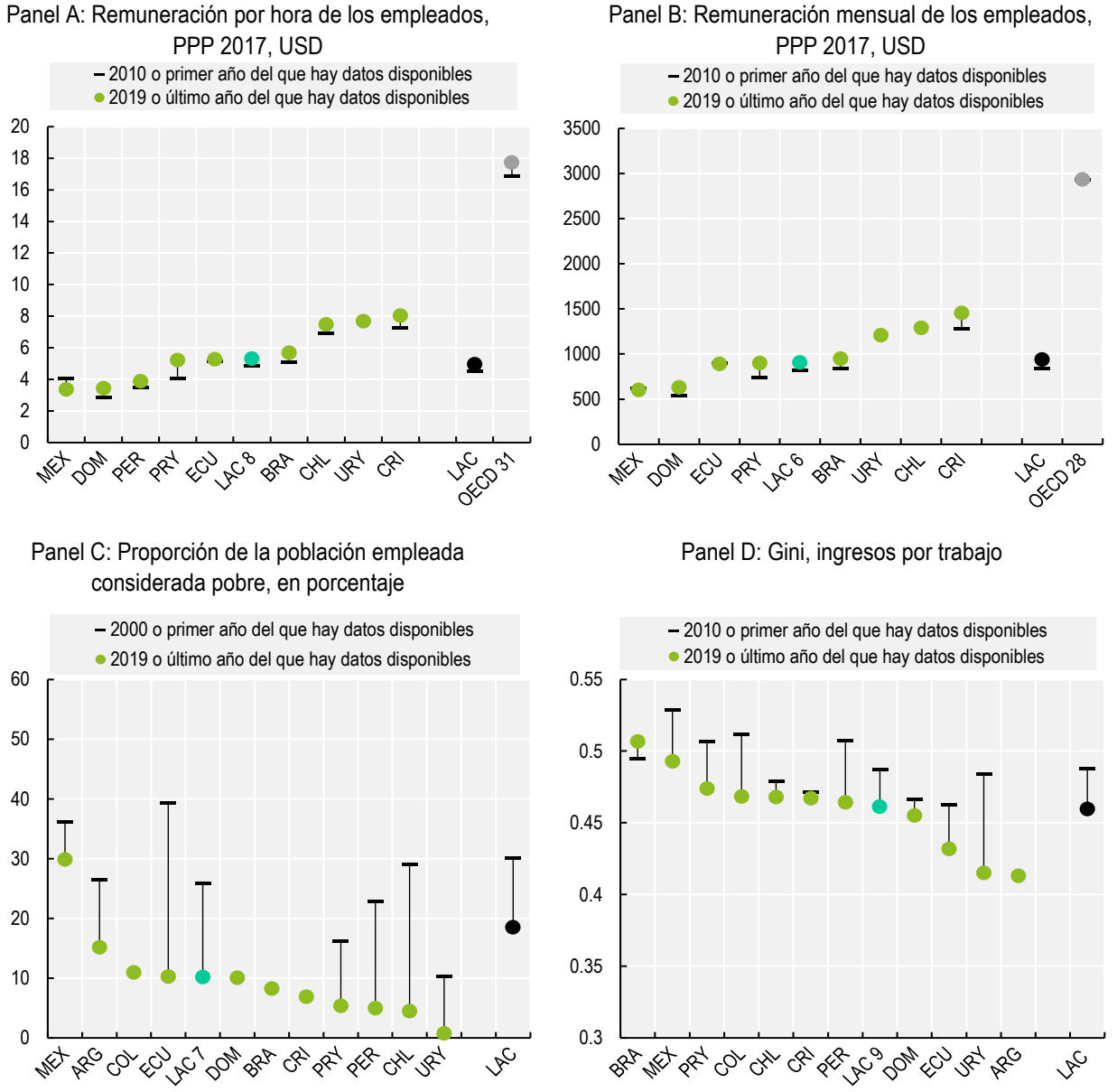
StatLink https://stat.link/rzghwp

Remuneración

La remuneración es un componente fundamental de la calidad del empleo y uno de los principales determinantes de los ingresos y la calidad de vida de las personas. En promedio, el incremento de los salarios reales en el grupo analizado fue mínimo entre 2010 y 2019; los salarios por hora pasaron de 4,9 USD a 5,3 USD, mientras que los salarios mensuales pasaron de 821 USD a 906 USD (conforme a la PPP de 2017) (Gráfico 2.14, paneles A y B).

Estas tendencias medias enmascaran el hecho de que los salarios de los trabajadores situados en el extremo inferior de la distribución han aumentado en general a un ritmo muy superior en América Latina durante las dos últimas décadas (Messina and Silva, 2017[18]). Ello ha provocado un descenso considerable tanto de la desigualdad salarial como de la pobreza activa (Gráfico 2.14, paneles C y D). En términos generales, en los siete países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, la proporción de empleados que viven por debajo del umbral de pobreza (según cálculos de la CEPAL) se redujo del 26% de 2000 hasta el 10% en 2019. En promedio, en los nueve países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, el coeficiente de Gini de los ingresos por trabajo se redujo de 0,49 en 2010 a 0,46 en 2019.

Gráfico 2.14. En los países analizados, los salarios reales aumentaron muy poco entre 2010 y 2019, pero su incremento fue mayor en el extremo inferior de la distribución, consiguiendo así rebajar la desigualdad salarial y la pobreza activa



Nota: En el panel A, el último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y 2016 en el de Perú. El primer año del que hay datos disponibles es 2012 en el caso de Brasil, 2014 en el de Ecuador y 2015 en el de la República Dominicana. ALC 8 excluye a Argentina,

Colombia y Uruguay, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. El promedio regional de ALC comprende 11 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 8 países analizados sobre los cuales hay datos disponibles. OCDE 31 excluye a Australia, Canadá, Colombia, Islandia, Japón y Nueva Zelanda, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. En el panel B, el último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Costa Rica y Uruguay; 2012 en el caso de Brasil; 2013 en el de México y 2014 en el de Ecuador. ALC 6 excluye a Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. El promedio regional de ALC comprende 9 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. OCDE 28 excluye a Australia, Canadá, Chile, Colombia, Hungría, Islandia, Japón, Lituania y Nueva Zelanda, por interrupciones en las series temporales o porque estas son incompletas. El panel C muestra la proporción de población empleada cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza absoluta, según cálculos de la CEPAL. En este panel, el último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de México y 2017 en el de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Ecuador; 2004 en el caso de Perú; 2005 en el caso de Paraguay y 2007 en el de Uruguay. ALC 7 excluye a Brasil, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, por interrupciones en las series temporales. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL. El panel D presenta el coeficiente de Gini de los ingresos por trabajo. Los ingresos por trabajo incluyen todas las fuentes de ingresos que los trabajadores declaran recibir en relación con su trabajo, lo cual incluye los ingresos monetarios por trabajo en pagos en efectivo y remuneración, y las prestaciones no monetarias en especie (transporte, vivienda, alimentos) recibidas en forma de retribuciones laborales y expresadas en términos monetarios (aunque se hayan recibido en especie). En Argentina, se utiliza el coeficiente de Gini de los ingresos monetarios urbanos en vez de los ingresos por trabajo totales, por datos incompletos. En este panel, el último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de todos los países excepto Argentina (2019) y Chile (2017). El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Chile; 2012 en el caso de Brasil y 2014 en el de México. ALC 9 excluye a Argentina y México, puesto que sus series temporales son incompletas. El promedio regional de ALC comprende 13 países, incluidos los 9 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. Los valores correspondientes a Chile se han ajustado por las cuentas nacionales.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data e Indicadores del Desarrollo Mundial, https://data.worldbank.org/ (paneles A y B), CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3336&idioma=e (panel C) y SEDLAC, véase https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/#1496165509975-36a05fb8-428b (panel D).

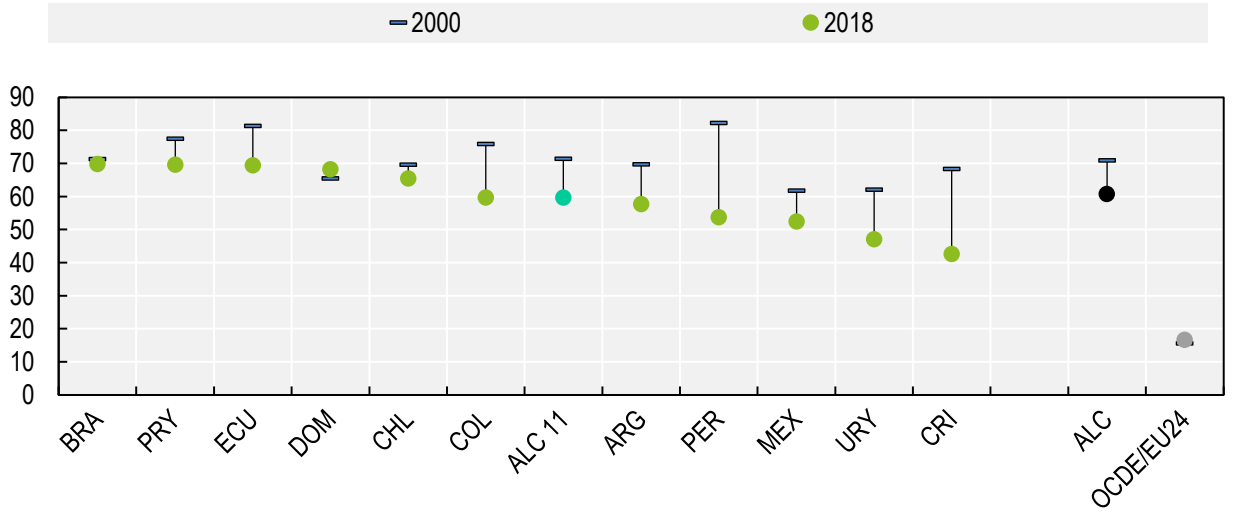
StatLink https://stat.link/zt98p2

Seguridad laboral

La seguridad en el mercado laboral —que captura los principales riesgos que enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo, así como sus repercusiones económicas— es uno de los tres aspectos principales de la calidad laboral en el marco de calidad del empleo de la OCDE, junto a la remuneración y el ambiente de trabajo (Cazes, Hijzen and Saint-Martin, 2015[19]). En este sentido, el grado de inseguridad laboral percibida por los trabajadores, o el nivel de preocupación de los ciudadanos por la posibilidad de perder el trabajo, son indicadores importantes.[14] El Gráfico 2.15 muestra que, si bien la inseguridad laboral percibida en los países analizados se ha reducido respecto de la del año 2000, esta sigue siendo generalizada, incluso antes de la pandemia. En 2018, en los países analizados, en promedio, 3 de cada 5 personas (60%) tenían miedo a perder su trabajo en los 12 meses siguientes. Pese a no existir datos del todo comparables sobre los países de la OCDE, los datos de Eurofound sobre 2015 indican que solo 1 de cada 5 europeos (16,6%) consideraba probable perder su trabajo en los 6 meses siguientes. El país con mayor inseguridad laboral percibida es Brasil, donde el 70% de los encuestados declararon haber tenido miedo de perder su trabajo en 2018, una proporción que prácticamente no ha variado respecto al nivel del año 2000 (71%).

Gráfico 2.15. A 3 de cada 5 ciudadanos de los países analizados les preocupa perder su trabajo, mientras que en Europa la cifra es de tan solo 1 de cada 5

Proporción de personas empleadas que declaran tener miedo o mucho miedo a perder su puesto de trabajo en los 12 meses siguientes, en porcentaje



Nota: El indicador refleja la proporción de personas que respondieron "preocupado" o "muy preocupado" a la pregunta: "¿Cuán preocupado diría Ud. que está de quedar sin trabajo o de estar desempleado durante los próximos doce meses?" Se incluye el promedio de OCDE/EU24 para proporcionar una indicación general de la situación en la OCDE. La formulación de la pregunta y el período temporal no coinciden con los de la pregunta del Latinobarómetro (p. ej., OCDE/UE 24 se refiere al porcentaje de personas que creen que podrían perder el trabajo en los seis próximos meses e incluye los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suiza y Turquía).
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp; cálculos de la OCDE basados en la Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS) de 2005, 2010 y 2015.

StatLink https://stat.link/07xltm

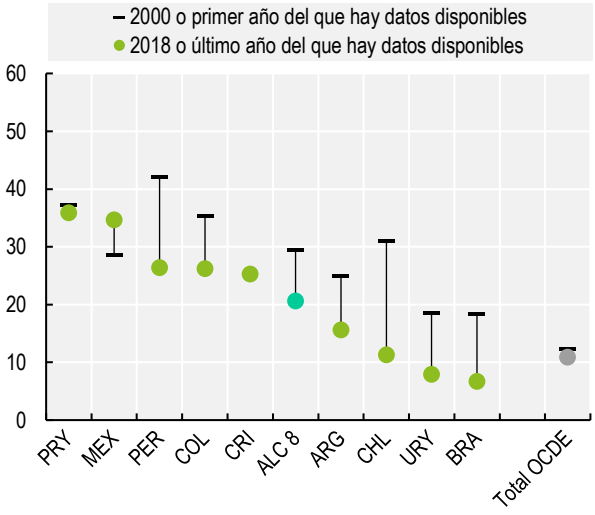
Ambiente de trabajo

La calidad del empleo engloba también un amplio abanico de aspectos no económicos del ambiente de trabajo de las personas, que van desde la naturaleza de las tareas laborales asignadas a cada trabajador hasta las condiciones físicas y sociales en las que dichas tareas se llevan a cabo, pasando por las características de la empresa u organismo en donde se realiza el trabajo, la programación del tiempo de trabajo, las perspectivas que el empleo ofrece a los trabajadores y las recompensas inherentes al puesto de trabajo ((OCDE, 2017[20]); (CEPAL, 2019[5])). Dos de los indicadores del ambiente de trabajo con particular relevancia en América Latina son las largas jornadas laborales y las lesiones profesionales.

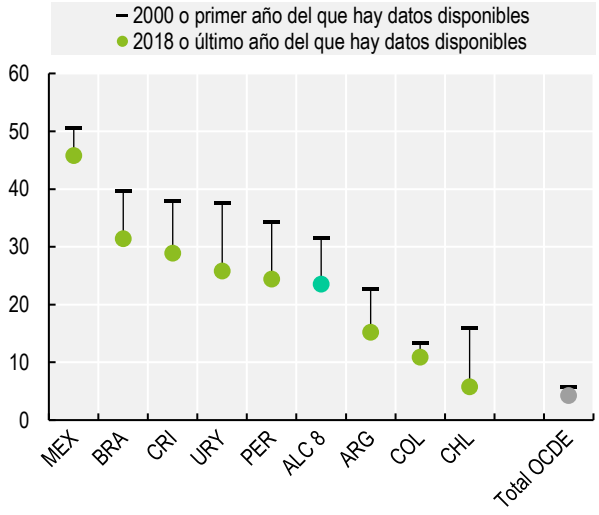
Las largas jornadas de trabajo pueden afectar negativamente la salud física y mental de las personas, así como la conciliación de la vida personal y laboral, al dejar poco tiempo para la familia, las relaciones sociales o el trabajo no remunerado en el hogar (OCDE, 2017[20]). En los países analizados, 1 de cada 5 empleados aproximadamente (20,6%) trabajaba 50 horas o más en su empleo principal en 2018, una proporción que prácticamente dobla la tasa media de la OCDE (10,9%) (Gráfico 2.16, panel A). Desde el año 2000, casi todos los países del grupo han registrado un sensible descenso de la proporción de personas que trabajan jornadas muy largas, a excepción de México, donde la tasa ha aumentado un 6%. Asimismo, en América Latina muchas personas tienen más de un empleo, lo cual incrementa todavía más la carga de la jornada laboral. En 2018, el 24% de los empleados del grupo analizado trabajaban 60 horas semanales o más en el cómputo global de sus trabajos (el porcentaje oscila entre el 45,8% de México y el 5,8% de Chile, Gráfico 2.16, panel B), lo cual viene a multiplicar por seis la tasa media de la OCDE, que es del 4,2%.

Gráfico 2.16. En el grupo analizado, aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores tiene una jornada laboral muy larga

Panel A: Proporción de trabajadores que trabajan 49 horas semanales o más en su empleo principal, en porcentaje



Panel B: Proporción de trabajadores que trabajan 60 horas semanales o más en el cómputo global de sus trabajos, en porcentaje



Nota: Los datos de países de América Latina se refieren al número de horas efectivamente trabajadas, mientras que los de la OCDE se refieren al número de horas habitualmente trabajadas. El último año del que hay datos disponibles es 2019 en el caso de Costa Rica, y 2017 en el de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Brasil, 2002 en el de Paraguay y 2004 en el de Argentina, Colombia y Perú. En el panel A, ALC 8 excluye a Costa Rica, Ecuador y la República Dominicana, por datos incompletos. Total OCDE se refiere al porcentaje de empleados que trabajan 50 horas o más a la semana. En el panel B, ALC 8 excluye a Ecuador, Paraguay y la República Dominicana, por datos incompletos.

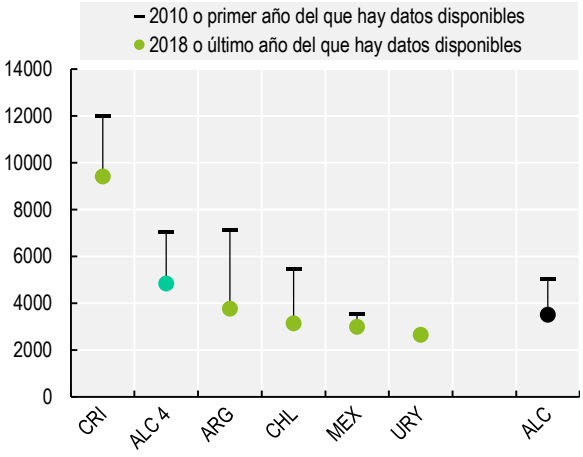
Fuente: Base de datos Key Indicators of Informality Based on Individuals and their Households (Indicadores clave de la informalidad en función de los individuos y sus hogares, KIIBIH), base de datos oe.cd/kiibih y base de datos de la OCDE sobre la incidencia del empleo según número de horas semanales trabajadas habitualmente, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=USLHRS_I.

StatLink https://stat.link/j63sb9

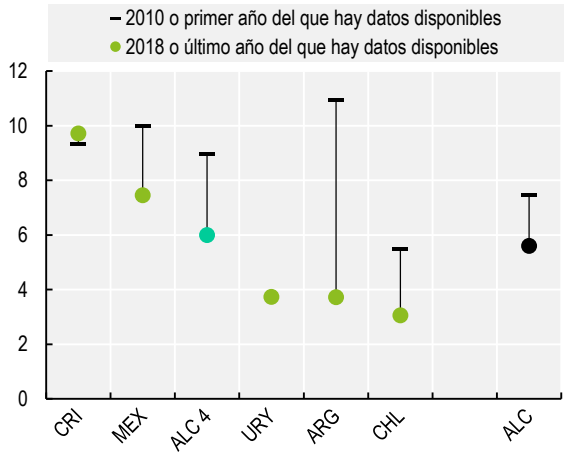
La seguridad de los trabajadores es un aspecto fundamental de la calidad del empleo. Según los datos disponibles, el nivel de seguridad y la tendencia subyacente difieren considerablemente entre los países analizados (Gráfico 2.17). Por ejemplo, mientras que Argentina y Chile registraron mejoras significativas de las tasas de lesiones tanto mortales como no mortales entre 2010 y 2018, Costa Rica asistió a un nuevo incremento de las lesiones mortales, ya elevadas, durante ese mismo período. En Costa Rica, pese a la mejora de la tasa de lesiones no mortales, casi 1 de cada 10 trabajadores sufrió una lesión no mortal en el puesto de trabajo durante 2018.

Gráfico 2.17. Las lesiones relacionadas con el trabajo varían de un país a otro en el grupo analizado

Panel A: Lesiones profesionales no mortales por 100.000 trabajadores



Panel B: Lesiones profesionales mortales por 100.000 trabajadores



Nota: Se considera lesión profesional toda lesión personal, enfermedad o muerte provocada por un accidente profesional. Una lesión profesional mortal es aquella que provoca la muerte en el plazo de un año a contar desde el día en el que se produce el accidente profesional. El primer año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de México, y 2016 en el de Costa Rica. El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Chile y Costa Rica. En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 6 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 4 países analizados sobre los cuales hay datos disponibles. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 5 países de América Latina y el Caribe, además de los países analizados en este documento.
Fuente: ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/topics/safety-and-health-at-work/.

StatLink https://stat.link/owc1ar

Estos datos se han incorporado al informe para subrayar la importancia de la seguridad de los trabajadores para la calidad del empleo en particular, y para el bienestar en general (lo cual queda reflejado también en el uso del indicador en la meta 8.8.1 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas). No obstante, cabe señalar que, como los datos se basan en registros administrativos, las diferencias entre países también pueden ser un reflejo de la calidad de los procesos de declaración subyacentes. Puede que exista subregistro y doble contabilización de casos de lesión profesional (cuando se combinan datos de varios registros) y, por tanto, es algo que debe tenerse en cuenta al comparar países.

Protección social

La protección social engloba un amplio abanico de políticas y programas diseñados para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores o las personas en todo su ciclo vital o en supuestos específicos y momentos determinados. En cuanto tales, los programas de protección social sustentan el desarrollo social de un país y, por ende, el bienestar de sus habitantes. La protección social es un tema transversal e incluye las prestaciones para los niños y las familias, así como de maternidad, desempleo, empleo, lesión, enfermedad, vejez, discapacidad y salud. La protección social guarda una estrecha relación con el trabajo y la calidad del empleo, en el sentido en que los sistemas de protección social se financian principalmente gracias a las contribuciones de la fuerza laboral, y el acceso a muchas prestaciones sociales suele estar vinculado a tener un empleo formal.

Entre 2002 y 2015, la cobertura de seguridad social ha mejorado constantemente en la región de ALC, gracias a las condiciones económicas favorables (que provocaron un incremento general del empleo, y

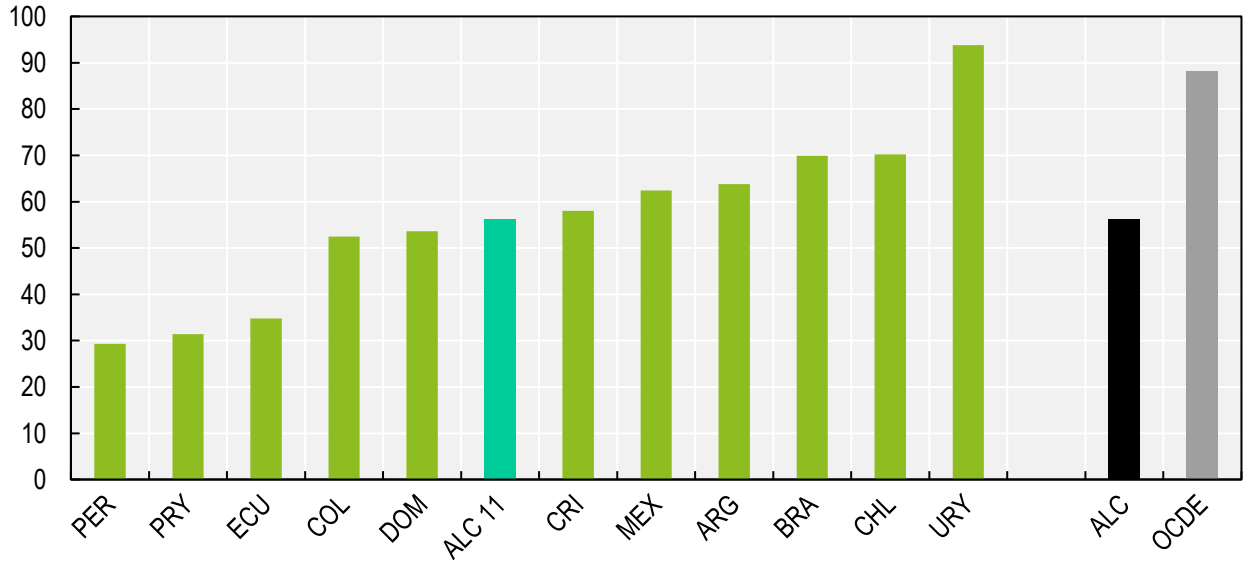
más concretamente del empleo formal) y de los esfuerzos de los gobiernos para priorizar la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad, si bien sigue habiendo enormes lagunas (CEPAL, 2018[2]).

Ante la amplitud y la heterogeneidad de los sistemas de protección social, se requieren varios indicadores para evaluar al detalle la cobertura. Por ejemplo, la base de datos de los ODS consta de 12 indicadores distintos para la medición de los avances en relación con la meta 1.3 de poner en práctica a nivel nacional sistemas de protección social para todos. Los datos más recientes no están disponibles en todos estos indicadores, pero sí que la medida de la proporción de la población incluida en por lo menos un programa de protección social incluye datos recientes y comparables sobre la mayoría de los países analizados (aunque, por lo general, las series temporales largas que permiten la comparación en el tiempo no están disponibles).

En promedio, en los países analizados, solo el 56% de la población tiene cobertura mediante, por lo menos, una prestación de protección social[15] (mientras que el promedio de la OCDE es del 88%), lo cual implica que un poco más de dos quintas partes de los habitantes de los países analizados no tienen ninguna cobertura de protección social (Gráfico 2.18). Las diferencias entre países son considerables: las tasas de cobertura de Uruguay son superiores a los niveles de la OCDE (93,8%), mientras que en Perú, Paraguay y Ecuador apenas un tercio de la población está cubierta por una prestación como mínimo.

Gráfico 2.18. En promedio, solo un poco más de la mitad de la población de los países analizados está cubierta por al menos un sistema de protección social

Proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social, en porcentaje, 2020



Nota: El indicador refleja la proporción de personas efectivamente amparadas por un sistema de protección social, incluidos los niveles mínimos de protección social. También incorpora los principales componentes de la protección social: prestaciones por hijos y de maternidad, ayudas a las personas sin trabajo, con discapacidades o víctimas de lesiones relacionadas con el trabajo, y personas mayores. La eficacia de la cobertura de protección social se calcula a partir del número de personas que o bien contribuyen de forma activa a un sistema de seguro social, o bien reciben prestaciones (contributivas o no contributivas). La OIT se encarga de recolectar los datos a partir del cuestionario de la Encuesta de seguridad social, en colaboración directa con distintos organismos gubernamentales: ministerios de Trabajo y Hacienda, instituciones de protección social, y otros.
Fuente: OIT, base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 1.3.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

StatLink https://stat.link/mk4i1u

Efectos de la pandemia de COVID-19

Como ya se ha expuesto en esta sección, la pandemia ha tenido efectos pronunciados sobre el empleo y el desempleo en la región, con una caída de 9 puntos porcentuales de la tasa media de empleo de los siete países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, y un incremento de 3,6 puntos del desempleo entre 2019 y 2020. En ambos indicadores, la magnitud de la variación ha sido muy superior en los países de ALC que en el promedio de la OCDE. En conjunto, el aumento del desempleo en la región es inferior a lo que cabría esperar habida cuenta de la magnitud de la contracción del PIB, ya que fueron muchas las personas en edad de trabajar que abandonaron la fuerza laboral (CEPAL/OIT, 2020[21]). Por lo tanto, la disminución de la fuerza laboral alivió la presión sobre el mercado de trabajo (CEPAL, 2021[9]).

La falta de protección social para trabajadores informales implica que, durante la pandemia, estos se han visto obligados a elegir entre obedecer las órdenes de quedarse en casa y ganar un sustento. Su riesgo de infección es mayor a causa de la naturaleza de su trabajo (p. ej., empleados domésticos en hogares privados, o trabajadores de los sectores minorista y de la hostelería) y su capacidad de afrontar sus efectos es menor, debido a la reducida cobertura sanitaria y falta de acceso a servicios de salud de calidad. Además, al tener ingresos bajos, su capacidad para soportar largos períodos de inactividad es limitada (CEPAL, 2020[22]; OCDE et al., 2020[17]). Por esta razón, la pandemia no solo agravará la vulnerabilidad y las privaciones de los trabajadores informales, sino que existe el riesgo de que la proporción de empleo informal dentro del empleo total aumente, a causa de los ceses y despidos en el sector informal. Las proyecciones elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo indican que la tasa de informalidad podría alcanzar el 62% en el conjunto de América Latina como consecuencia de la pandemia, frente al 54% de 2016 (OIT, 2018[16]; Altamirano et al., 2020[23]). Como en el marco de la pandemia de COVID-19 cada vez es más difícil encontrar empleo formal y son más las personas que se pasan al empleo informal (a menudo como trabajadores por cuenta propia), es probable que la pobreza activa aumente en el futuro más inmediato.

Aspectos para el desarrollo estadístico

Las encuestas sobre la fuerza laboral son de uso habitual en la región de ALC, y resulta relativamente sencillo acceder a datos comparables y de gran calidad sobre empleo, desempleo, duración del desempleo, subempleo, horas trabajadas y remuneración.

En general, la proporción de informalidad suele capturarse mediante preguntas incluidas en las encuestas a los hogares, aunque, por su propia índole, el trabajo informal cuesta más de medir, debido a su fluidez y falta de visibilidad. La OIT define la economía informal como “todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos —en la legislación o en la práctica— por acuerdos formales”. Asimismo, define el empleo informal como “el número total de empleos informales (...), ya se ocupen estos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en hogares, durante un período de referencia determinado” (OIT, 2012[24]). Esta amplia definición se ha utilizado para generar estimaciones multinacionales del tamaño de la informalidad, pero, al tratarse de una metodología flexible, los enfoques aplicados por cada país no son siempre comparables. Por ejemplo, en Colombia, la definición de “trabajadores informales” se basa en el tamaño de la empresa y la categoría profesional; en Perú, en si los trabajadores tienen o no acceso a servicios de salud, y en Argentina, Costa Rica y Paraguay, en el acceso a sistemas de protección social en general (INE, 2019[25]). Ante la importancia del trabajo informal en la región, aumentar la comparabilidad de las estadísticas permitiría respaldar la formulación de políticas más eficaces y focalizadas en apoyo a la transición de los trabajadores hacia la formalidad.

Asimismo, en relación con América Latina, es importante desarrollar otras medidas de la calidad del empleo. Por ejemplo, el marco de calidad del empleo de la OCDE se refiere a la seguridad del mercado laboral (Cazes, Hijzen and Saint-Martin, 2015[19]) y la calidad del entorno de trabajo, además de la

remuneración, como principales determinantes de la calidad del empleo. En él se insiste en que en aquellos países que no disponen de sistemas de seguro social, o en los que estos son deficientes, y en los que existe el riesgo de que el salario sea muy bajo (como ocurre en América Latina), la inseguridad general del mercado de trabajo queda subestimada si solo se tiene en cuenta el riesgo de desempleo. A fin de obtener una medición más apropiada y completa de la seguridad del mercado laboral, el marco propone medir tanto la pérdida de remuneración esperada vinculada al desempleo (incluido el grado de mitigación, en su caso, brindada por las redes de protección públicas) como la prevalencia de las pagas que no alcanzan un umbral determinado. La Estrategia de Empleo de la OCDE también considera que la calidad del empleo es una prioridad de política esencial, a la vez que destaca la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia a la hora de obtener buenos resultados económicos y del mercado de trabajo. La estrategia incluye las principales recomendaciones de política, organizadas alrededor de tres principios generales que conciernen a América Latina: 1) promover un entorno en el que puedan generarse abundantes empleos de alta calidad; 2) prevenir la exclusión del mercado laboral y proteger a las personas de los riesgos del mercado laboral, y 3) prepararse para oportunidades y retos futuros en un mercado laboral rápidamente cambiante (OCDE, 2018[26]).

Las condiciones de trabajo inseguras, representadas mediante la prevalencia de las lesiones profesionales en este apartado, son una manifestación extrema de un entorno de trabajo de baja calidad. En las directrices de la OCDE sobre la medición de la calidad del entorno laboral (*OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment*) se enumeran también otros factores (p. ej., el entorno social, la cultura institucional y la motivación intrínseca) como características importantes del entorno de trabajo (OCDE, 2017[20]); por su parte, el marco de bienestar de la OCDE incorpora una medida de la tensión laboral, la situación en la cual las exigencias del trabajo soportadas por los trabajadores (entre ellas, exigencias físicas, intensidad del trabajo, inflexibilidad de horarios) superan los recursos que tienen a su disposición (p. ej., facultad para decidir sobre las tareas, capacitación y promoción profesional) (OCDE, 2020[1]). Todas estas medidas parten de encuestas comparables en las que se pregunta a los trabajadores sobre distintos aspectos de su ambiente laboral. Según la base de datos de la OCDE sobre la calidad del empleo, aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores experimentó tensión laboral en México y Chile en 2015 (29% y 28% respectivamente), una cifra similar a la tasa media de la OCDE (OCDE, 2020[1]). Sería bueno elaborar esta clase de medidas de forma que pudiesen compararse entre los países de la región.

Por último, el uso de medidas subjetivas podría reportar información útil sobre la calidad de los puestos de trabajo de las personas. En este apartado se emplea una medida subjetiva para mostrar los niveles de inseguridad laboral percibida en la región. El uso de medidas comparables de la satisfacción laboral subjetiva también permitiría disponer de información valiosa sobre la calidad del empleo.

Vivienda

La vivienda es uno de los elementos principales del bienestar actual de las personas, identificado como tal en el derecho internacional (p. ej., la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La vivienda es fundamental para tener cobijo y sensación de seguridad, privacidad y espacio personal (OCDE, 2011[14]). Además, gozar de buenas condiciones habitacionales es esencial para la salud de las personas y repercute en el desarrollo durante la infancia (OMS, 2018[27]).

La vivienda es uno de los principales obstáculos que enfrenta América Latina en su camino hacia el desarrollo sostenible, tras décadas de rápida urbanización y expansión de los barrios marginales. La región es una de las más urbanizadas del planeta: en 2018, 4 de cada 5 personas (81%) vivían en zonas urbanas (ONU-DESA, 2018[28]).[16] También es la región con mayor proporción de la población aglutinada en megalópolis (ciudades de más de 10 millones de habitantes); seis de ellas (Buenos Aires, Ciudad de

México, São Paulo, Río de Janeiro, Bogotá y Lima) concentran al 14% de la población de la región (ONU-DESA, 2018[28]). En el período que abarca de 1950 a 1990, la proporción de la población residente en zonas urbanas pasó del 40% al 70%; desde entonces, el ritmo de urbanización ha ido disminuyendo, hasta situarse en una tasa de crecimiento anual inferior al 2%, equivalente a la tasa de crecimiento de la población (BID, 2016[29]). Los pronósticos de población indican que esta tendencia se mantendrá en las próximas décadas, y que la urbanización se situará en niveles cercanos al 85% en 2030, y posteriormente se estabilizará (ONU-Habitat, 2012[30]; BID, 2016[29]).

Como consecuencia de la incapacidad tanto del mercado inmobiliario formal como de las políticas públicas para hacer frente a esta situación, cada vez más habitantes urbanos viven en barrios marginales. La demanda de terrenos habilitados para acoger a habitantes urbanos ha sobrepasado la capacidad de la oferta (Gilbert, 2000[31]), y los gobiernos tienen dificultades para crear mecanismos para financiar estos terrenos o viviendas asequibles para los grupos de bajo ingreso. La falta de planificación y políticas territoriales también ha limitado considerablemente la oferta de vivienda de bajo costo. A raíz de ello, los precios inmobiliarios han aumentado hasta el punto de que gran parte de la población no puede permitirse una vivienda, en especial las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes (BID, 2016[29]).

Pese a este difícil contexto, los indicadores de condiciones habitacionales muestran signos de mejora, ya que en las dos últimas décadas tanto la proporción de la población que vive en barrios marginales como la densidad de vivienda han disminuido. En general, el acceso a servicios de agua potable gestionada de manera segura, saneamiento e Internet ha mejorado, pero siguen existiendo brechas significativas entre los países del grupo analizado. En América Latina, la privación en relación con la vivienda ha agravado las cargas y tensiones psicosociales generadas por el distanciamiento social y el confinamiento impuestos durante la pandemia de COVID-19 y, además, ha complicado el aislamiento de las personas sintomáticas respecto a otros hogares y miembros de la comunidad. Asimismo, ha situado en el punto de mira el problema persistente de la asequibilidad de la vivienda: la crisis podría incrementar el número de personas sin hogar, sobre todo en las grandes ciudades de la región. Por último, el acceso a Internet de alta velocidad en el hogar fue esencial para minimizar algunas de las perturbaciones generadas por la crisis sanitaria, pero la brecha digital entre los países del grupo analizado indica que hay personas que se están quedando atrás.

Condiciones habitacionales y hacinamiento

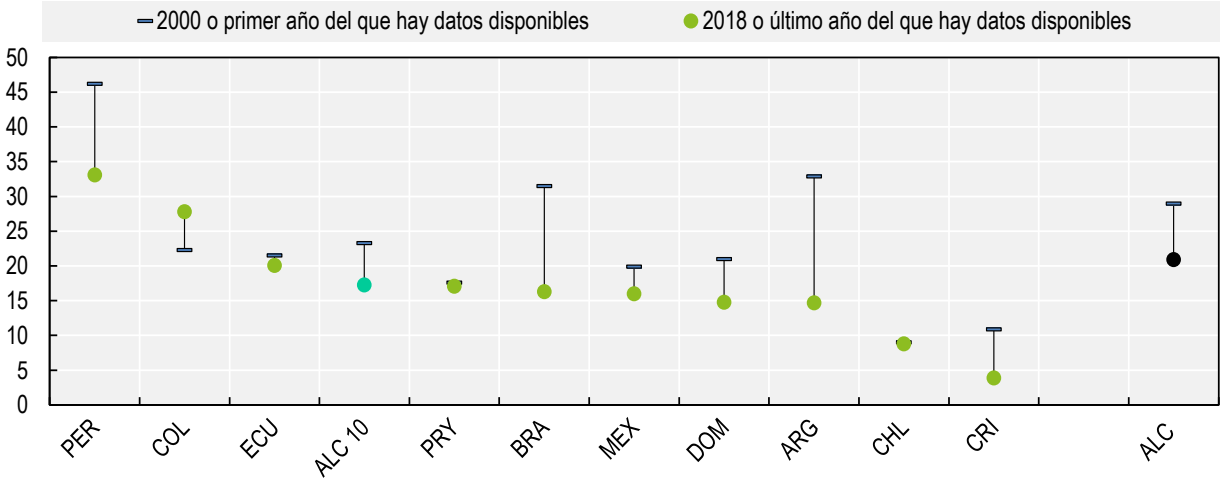
Pese a los importantes avances registrados desde el año 2000, la mala calidad de la vivienda es un síntoma de la desigualdad generalizada que reina en América Latina y el Caribe, y las ciudades de la región presentan una fuerte segregación por niveles socioeconómicos. Si bien la segregación urbana no es exclusiva de América Latina, el tamaño relativamente reducido de la clase media en la región, y el hecho de que la desigualdad en los ingresos viene caracterizada por una elevada concentración de ingresos en el límite superior de la distribución, y de que gran parte de la población vive en la pobreza, hace que las diferencias de condiciones habitacionales sean considerables incluso dentro de un mismo barrio, con exclusivas residencias protegidas que colindan con asentamientos informales (Sánchez-Ancochea, 2021[13]). Evidentemente, la calidad de la vivienda no solo es un problema en las zonas urbanas; las desigualdades habitacionales entre zonas urbanas y rurales se analizan con mayor detalle en el Capítulo 5.

Ya sea en Ciudad de México o en Buenos Aires, los barrios marginales y asentamientos informales suelen ser de construcción propia y estar situados en los únicos espacios urbanos disponibles, es decir, aquellos con mayor riesgo de desastres naturales y en los cuales la delincuencia, la vulnerabilidad y la pobreza son muy habituales, creando así obstáculos al mejoramiento de la vivienda (McTarnaghan et al., 2018[32]). Las viviendas de los barrios marginales suelen construirse con materiales de baja calidad o inseguros, y a menudo quedan excluidas del suministro de servicios esenciales y de saneamiento. El Gráfico 2.19 muestra cómo, en las dos últimas décadas, los países de América Latina han logrado reducir de forma

sustancial la proporción de habitantes que viven en barrios marginales. En 2018, en los ocho países de América Latina sobre los cuales hay datos disponibles, casi 1 de cada 5 personas (17%) vivía en un barrio marginal, mientras que en 2000 la relación era de aproximadamente 1 de cada 4 (23%). Argentina y Brasil han registrado un fuerte descenso de la proporción de personas que viven en barrios marginales, pasando el 30% del año 2000 a aproximadamente un 15% en 2018. Si bien la proporción de habitantes de un barrio marginal es menor, los valores absolutos superan a día de hoy las cifras de hace 20 años (BID, 2016[29]).[17] Asimismo, se aprecian diferencias significativas entre países: en Perú, 1 de cada 3 personas (33%) vivía en un barrio marginal o asentamiento informal en 2018, mientras que en Costa Rica esta cifra no llegaba a 1 de cada 20 (4%). Las tendencias también son distintas: mientras que la proporción de la población que vive en barrios marginales ha ido disminuyendo a lo largo de las dos últimas décadas (tanto en el conjunto de la región de América Latina como en la mayoría de los países analizados), en Chile, Paraguay y Ecuador apenas se aprecia variación, mientras que en Colombia la proporción de quienes viven en barrios marginales incluso ha aumentado (del 22% al 28%) (Gráfico 2.19).

Gráfico 2.19. Pese a la considerable reducción de la proporción de población urbana que vive en barrios marginales desde el año 2000, casi 1 de cada 6 habitantes urbanos vivía en un barrio marginal en 2018

Proporción de población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos informales, en porcentaje



Nota: El primer año del que hay datos disponibles es 2005 en el caso de Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. El promedio de ALC 10 excluye a Uruguay, porque no hay datos disponibles. ALC es el promedio regional calculado por el DAES de las Naciones Unidas. Los barrios marginales/asentamientos informales se definen como "hogares cuyos miembros sufren una o más de las siguientes privaciones en relación con la vivienda: 1) falta de acceso a un abastecimiento mejorado de agua, 2) falta de acceso a servicios mejorados de saneamiento, 3) falta de espacio habitable adecuado, 4) falta de durabilidad de la vivienda y 5) falta de seguridad de la tenencia" (ONU-Habitat, 2020[33]).
Fuente: base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 11.1.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

StatLink https://stat.link/9qh2m3

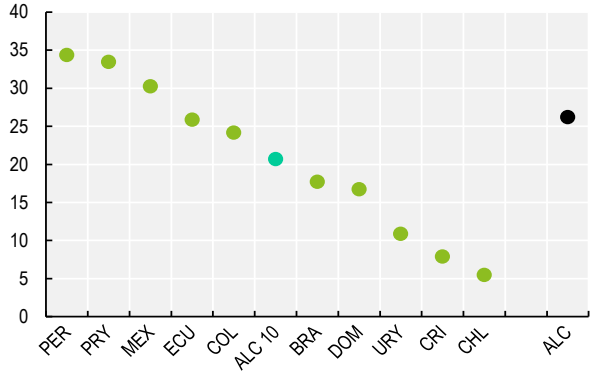
El hacinamiento es otro de los aspectos fundamentales de la privación relacionada con la vivienda que puede tener repercusiones negativas sobre la salud física (contribuye a la propagación de enfermedades respiratorias, tuberculosis y alergias), la salud mental y el desarrollo en la infancia. Por ejemplo, el hacinamiento puede influir en las dificultades de los niños para concentrarse a la hora de hacer deberes o incluso de jugar, lo cual afecta su rendimiento académico y contribuye al fracaso escolar (Santos, 2019[34]). No existe disponibilidad generalizada de series temporales comparables en la región (como ocurre con muchos otros indicadores de la calidad y asequibilidad de la vivienda), pero las medidas de la

densidad de vivienda pueden ofrecer una idea del nivel relativo de hacinamiento y sus tendencias generales (Gráfico 2.20). Sin tener en cuenta barrios marginales y asentamientos informales, la proporción media de hogares en los que más de dos personas comparten habitación es del 21% en los países del grupo analizado. El nivel es particularmente alto en Paraguay (33%) y Perú (34%) (Gráfico 2.20, panel A). En cambio, en Uruguay, Costa Rica y Chile, es por lo menos tres veces menor y se sitúa en torno al 10%, o en un nivel inferior.

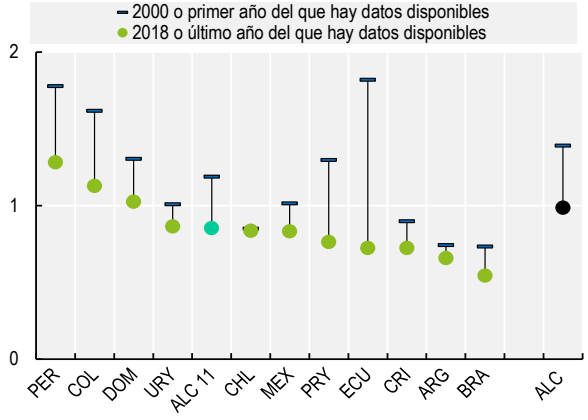
En los nueve países del grupo analizado sobre los cuales hay datos disponibles, el promedio es de 0,9 personas por habitación, nivel cercano al promedio del conjunto de la región (1,0) (Gráfico 2.20, panel B). Salvo en Chile, cuya densidad de vivienda se ha mantenido estable (0,8), el porcentaje ha disminuido en las dos últimas décadas, en algunos casos de forma significativa: el número de personas por habitación se ha reducido en un 60% en dos décadas en Ecuador, en un 41% en Paraguay y en un 30% en Colombia. En las fuentes de datos de la OCDE, la densidad de vivienda se calcula de forma diferente, para tener en cuenta las necesidades diversas de los hogares según su composición: en 2017, en promedio, el 12% de los hogares de la OCDE vivían en condiciones de hacinamiento, frente al 34% de México y el 9% de Chile (OCDE, 2020[1]). Otros datos contrastados indican que el tamaño de los hogares de América Latina se está reduciendo, y que ese fenómeno viene impulsado por el deseo de independizarse de los adultos más jóvenes, el descenso del número de hijos por hogar vinculado al aumento del costo de la vida y el aumento del número de personas mayores que viven solas (Euromonitor Internacional, 2018[35]). Además, la rápida urbanización de la región también ha hecho que las personas prefieran vivir en departamentos antes que en casas unifamiliares —anteriormente el tipo de vivienda más habitual en la región—, sobre todo en el caso de los más jóvenes (Euromonitor Internacional, 2018[35]).

Gráfico 2.20. La densidad de vivienda se ha reducido desde el año 2000 y las tasas de hacinamiento varían de forma considerable entre los países analizados; en promedio, afectan a 1 de cada 5 hogares

Panel A: Proporción de hogares en los que más de dos personas comparten una misma habitación, en porcentaje, 2019 o último año



Panel B: Número medio de personas por habitación



Nota: En el panel A, el último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y 2018 en el de México. ALC 10 excluye a Argentina, puesto que no existen datos a nivel nacional. El promedio regional de ALC comprende 14 países, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. Los barrios marginales de las ciudades y los asentamientos informales no están incluidos en el indicador. Si en un departamento de una habitación o un estudio viven una o dos personas, no se considera que sufren privaciones a los efectos del cálculo del indicador. Los niños menores de dos años no se incluyen en el recuento de personas por hogar, ya que es habitual que compartan habitación con sus padres. En el panel B, el primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay; 2003 en el caso de Ecuador y Perú; 2004 en el de Argentina y 2006 en el de Uruguay. El promedio regional de ALC comprende 14 países, incluidos los 11 analizados.

Fuente: Estadísticas de la CEPAL (no disponibles en Internet, panel A). Base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS y Banco Mundial), https://datacatalog.worldbank.org/dataset/socio-economic-database-latin-america-and-caribbean (panel B).

StatLink https://stat.link/g81e4c

Acceso a servicios

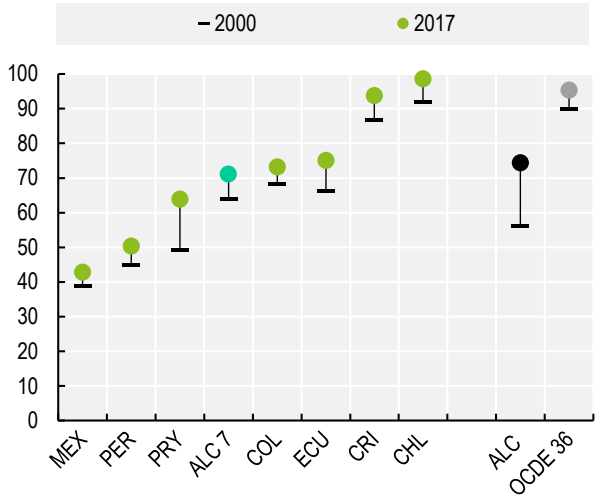
La falta de servicios básicos, como agua potable gestionada de manera segura o un lavamanos, es signo claro de mala calidad de la vivienda y puede suponer un gran riesgo para la salud. Pese a que se han logrado avances considerables en la ampliación del acceso a agua potable limpia y saneamiento, millones de ciudadanos de América Latina no disponen aún de estos servicios, sobre todo en zonas rurales (Banco Mundial, 2019[36]).

A pesar de las enormes divergencias entre los países analizados en cuanto al acceso a servicios de agua potable gestionada de manera segura, los países con mejor desempeño se sitúan en niveles cercanos al 100%, y aquellos con peor desempeño también mejoran, de forma lenta pero continua. En promedio, este indicador registró una mejora de aproximadamente 7 puntos porcentuales en los 7 países del grupo analizado sobre los cuales hay datos disponibles, lo cual representa una cobertura del 70% de la población de estos países, en promedio. De todos modos, este nivel sigue estando 25 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE, que es del 95%. La brecha entre Chile y Costa Rica, donde más del 90% de la población tiene acceso a servicios de agua potable gestionada de manera segura, y Perú y México, donde el porcentaje apenas llega al 50% y ha mejorado poco desde 2000, es considerable (Gráfico 2.21, panel A). Tanto Colombia como Ecuador rebasan ligeramente el promedio, aunque se sitúan por detrás de Costa Rica y Chile, con una diferencia mínima de 20 puntos. Al analizar las tendencias del grupo analizado, la proporción de la población que tiene acceso a agua potable segura ha aumentado el doble en Paraguay (15 puntos) que en el promedio de ALC 7 (7 puntos), mientras que Paraguay sigue situado por debajo de los promedios, tanto del regional como del de los países analizados.

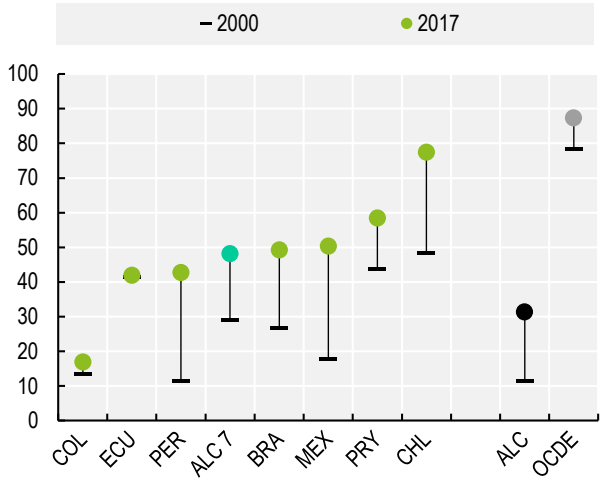
En la mayor parte de estos 7 países del grupo analizado, apenas la mitad de la población tiene acceso a servicios mejorados de saneamiento. El indicador que se representa en el panel B del Gráfico 2.21 monitorea la proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas; es decir, las que no son compartidas con otros hogares y en las cuales los excrementos generados o bien se tratan y eliminan *in situ*, o bien se almacenan temporalmente y después se vacían y transportan para su tratamiento en otro lugar, o se transportan a través del alcantarillado con aguas residuales y después se tratan en otro lugar. El promedio del grupo analizado (48%), situado casi 40 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (87%), oculta las diferencias en cuanto a desempeño entre los países: la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados es actualmente 60 puntos porcentuales superior en Chile (77%) que en Colombia (17%). México, Perú y Chile son los tres países que más avances han logrado en las dos últimas décadas, por bien que el nivel de Perú sigue sin alcanzar la mitad de la población (43%). Durante este período, el nivel no ha disminuido en ninguno de los países del grupo analizado, pero se ha mantenido relativamente estable en Ecuador (en torno al 42%); las mejoras registradas en Colombia han sido relativamente modestas si se comparan con las de otros países de la región.

Gráfico 2.21. En 2017, solo el 70% de la población de los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles tenía acceso a servicios de agua potable segura, y solo la mitad de la población tenía acceso a servicios de saneamiento

Panel A: Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionada de manera segura, en porcentaje



Panel B: Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento, en porcentaje



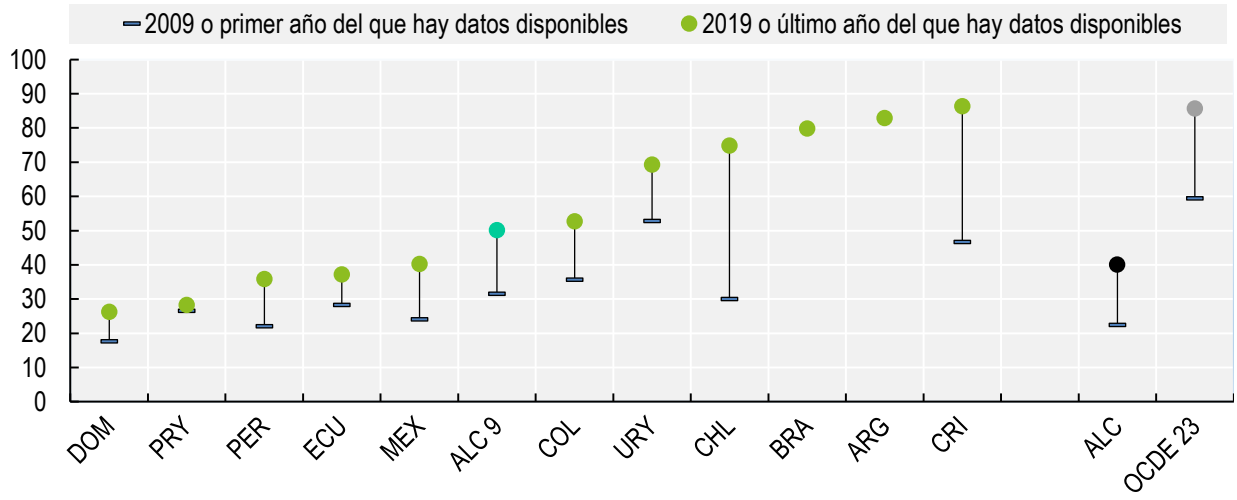
Nota: En el panel A, el promedio de ALC 7 excluye a Argentina, Brasil, la República Dominicana y Uruguay, puesto que no hay datos disponibles. En el panel B, el promedio de ALC 7 excluye a Argentina, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay, puesto que no hay datos disponibles. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas.
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene, según información facilitada por la base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 6.1.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (panel A) e indicador 6.2.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (panel B).

StatLink https://stat.link/rvg35q

Desde 2009, también se han logrado grandes avances en el acceso de los hogares a Internet, por bien que sigue habiendo enormes desigualdades entre los países del grupo analizado. El acceso a Internet en el hogar permite respaldar las relaciones sociales y ofrece acceso a oportunidades tanto laborales como de aprendizaje, así como a bienes y servicios públicos y privados (OCDE, 2020[1]). En 2019, el 50% de los hogares del grupo de países analizados tenía, en promedio, acceso a Internet en el hogar, si bien el nivel era tres veces más alto en Costa Rica que en la República Dominicana (Gráfico 2.22). La tendencia general del grupo analizado es indicativa de un progreso gradual en cuanto al acceso de los hogares a Internet, y se observa un salto considerable (16 puntos porcentuales) en 10 años. No obstante, la distribución de estas mejoras también ha sido muy desigual. Por ejemplo, en la última década, el nivel se ha mantenido relativamente estable en Paraguay. Chile, por su parte, es el país que ha registrado un mayor incremento del acceso a Internet, de casi 45 puntos.

Gráfico 2.22. La proporción de hogares con acceso a Internet en casa se ha incrementado en todos los países del grupo analizado desde 2005 pero, en promedio, solo aproximadamente la mitad de las casas tienen

Proporción de hogares con acceso a Internet en casa, en porcentaje



Nota: Los datos de Argentina se refieren solo a las zonas urbanas. El último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y Ecuador, y 2018 en el de Colombia y México. El primer año del que hay datos disponibles es 2012 en el caso de México, y 2013 en el de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. ALC 9 excluye a Argentina y Brasil, puesto que sus series temporales son incompletas. El promedio regional de ALC comprende 15 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 9 países analizados sobre los cuales hay datos disponibles. En los países cuya fuente es el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL: la edad a partir de la cual se miden los indicadores de TIC varía según el país. En Paraguay, se contabiliza la población mayor de 10 años; en Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador, a partir de los 5 años de edad; en Perú y Uruguay, a partir de los 6 años de edad. El período de medición del uso de Internet a partir de la fecha de la encuesta varía según el país. En Costa Rica, Paraguay y Uruguay, las preguntas se referían al uso de Internet en los últimos 3 meses; en Chile y Ecuador, en los últimos 12 meses.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL, en relación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; UIT, Base de Datos de Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones / TIC 2020, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx, en relación con todos los demás países.

StatLink https://stat.link/qjauev

Efectos de la pandemia de COVID-19

La privación relacionada con la vivienda es uno de los principales factores que condicionan la propagación del COVID-19 y afecta la capacidad de las personas de protegerse frente al virus. En América Latina, los primeros casos de la pandemia se asociaron principalmente a personas de estatus socioeconómico alto y a viajes al extranjero. No obstante, después de la fase inicial, quienes tuvieron un mayor riesgo de exposición al COVID-19 fueron las personas que vivían hacinadas, a menudo con poco o ningún acceso a saneamiento y agua (Lustig and Tommasi, 2020[37]). El acceso a servicios básicos de saneamiento sigue planteando dificultades en algunos países del grupo analizado (Colombia, Ecuador y Perú en particular, véase el Gráfico 2.21, panel B), pese a su importancia para contener la propagación del virus entre hogares que viven muy próximos los unos a los otros. Hacer cuarentena por miedo a transmitir el virus a los familiares plantea serias dificultades en condiciones de hacinamiento: de hecho, la exposición al virus a pesar del esfuerzo de la gente es una realidad en América Latina (ONU, 2020[38]), sobre todo si se tiene en cuenta la limitada capacidad de respetar las medidas de distanciamiento social. Según datos de junio de 2020, en Río de Janeiro la zona con mayor incidencia de casos de COVID-19 era *Cidade de Deus*, una de las principales favelas de Brasil, donde 1 de cada 4 personas que se hicieron la prueba dieron

positivo (28%). En *Rocinha*, otra gran favela de Río, hogar de casi 100.000 personas, se registró una tasa similar (24%) (Rio Prefeitura, 2020[39]).

Más allá de la calidad de la vivienda, la pandemia de COVID-19 también ha sacado a relucir las limitaciones en cuanto a su asequibilidad (OCDE, 2020[40]; OCDE, 2020[41]). Como se ha mencionado anteriormente, las personas que viven en construcciones de mala calidad o en condiciones de vida inseguras han enfrentado mayores riesgos para la salud y la seguridad, mientras que los trabajadores que han sufrido pérdidas económicas repentinas han tenido dificultades para pagar sin ayudas mensualmente el alquiler, la hipoteca y los servicios básicos (OCDE, 2020[41]). Ello podría generar embargos, desplazamientos o incluso sinhogarismo, aislando a la gente y aumentando su vulnerabilidad (Vera et al., 2020[42]). Las personas sin techo no tienen forma de autoaislarse, y en los casos en los que pueden cobijarse, lo hacen en albergues con medidas de aislamiento o protección limitadas.

Los datos indican que las áreas metropolitanas de América Latina exhiben un patrón de "excesiva concentración" de infecciones y muertes por COVID-19, si bien hay excepciones. En particular, es el caso de los países en los que el 30% o más de la población vive en divisiones administrativas mayores —es decir, territorios en los que están situados las ciudades más pobladas— como en el caso de Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú. Uruguay constituye una notable excepción (CEPAL, 2021[9]).

La reducción de la brecha digital entre hogares y países es uno de los principales retos que enfrenta América Latina y el Caribe (Gráfico 2.22). Disponer de acceso a Internet fiable y de alta velocidad en el hogar es esencial para el teletrabajo y la enseñanza a distancia a gran escala. Entre el primer y el segundo trimestre de 2020, el uso de aplicaciones de teletrabajo se triplicó en América Latina, y la educación a distancia aumentó más de un 60% (CEPAL, 2020[43]). Asimismo, el acceso a Internet de alta velocidad constituye una fuente importante de información pública y es un recurso vital para conectar a las personas vulnerables o aisladas socialmente, y que podrían necesitar asistencia médica remota o el apoyo de la comunidad (p. ej., entrega a domicilio de alimentos y medicamentos). Pese a que el 67% de la población de la región ya tenía conexión a Internet, el tercio restante tenía acceso limitado o no tenía acceso a las tecnologías digitales debido a su estatus social y económico; en particular, por motivos de ubicación y edad (CEPAL, 2020[43]). Por ejemplo, el 46% de los niños de edades comprendidas entre 5 y 12 años viven en hogares sin conectividad (CEPAL, 2020[43]). Así pues, existe el riesgo de que la pandemia de COVID-19 y la crisis posterior amplifiquen las desigualdades existentes; por su parte, siempre y cuando mejore la prestación de servicios, la conectividad digital puede minimizar algunas de las perturbaciones creadas (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[44]).

Los gobiernos pueden ofrecer apoyo inmediato en caso de pérdida de empleo e ingreso, ofrecer prestaciones por enfermedad a trabajadores excluidos y dar cobijo inmediato a la población sin hogar (OCDE, 2020[40]). Sin embargo, resolver a corto plazo el problema del hacinamiento y dar acceso a servicios básicos de saneamiento y digitales resulta mucho más difícil. En este sentido, las malas condiciones de la vivienda suponen un riesgo sistémico para los efectos de las crisis sanitarias y requieren una respuesta pública a más largo plazo para generar resiliencia. En el corto plazo, la hospitalización y otras formas de atención sanitaria fuera del hogar para personas que viven hacinadas y/o en condiciones insalubres deben ser prioritarias, para poder proteger a otros miembros vulnerables del hogar. Asimismo, las personas que viven solas y en circunstancias de enorme aislamiento probablemente requerirán algún tipo de apoyo y atención de la comunidad durante los períodos en los que se recomiende quedarse en casa (OCDE, 2020[45]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

Pese a que los censos y las encuestas de hogares de la región suelen incluir información sobre la calidad del material empleado para la construcción de la vivienda (en especial porque suele ser un componente de los índices de pobreza multidimensionales), en general las definiciones y métodos aplicados varían según el país (Santos, 2019[34]). Una mayor armonización es necesaria para poder calcular las tasas de hacinamiento a escala mundial. En el presente informe, el indicador de los países de América Latina se basa en el número de personas por habitación, mientras que los datos sobre densidad de vivienda de la OCDE se calculan a partir de una medida que refleja las necesidades diversas de los hogares según su composición. Con arreglo a la medida preferida por la OCDE, se considera que existe hacinamiento en una casa si se dispone de menos de una habitación: por cada pareja del hogar; por cada persona soltera mayor de 18 años; por cada dos personas del mismo género de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años; por cada persona soltera de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años no incluidas en las categorías anteriores, y por cada dos hijos menores de 12 años (Eurostat, 2019[46]; OCDE, 2020[1]). Además, existen diferencias entre países en cuanto a la definición de habitación, sobre todo por lo que se refiere a la cocina, y a la forma de aplicar las restricciones mínimas de espacio. Las cocinas cuentan como habitación en Chile y México, pero estas quedan excluidas en la mayoría de los países de la OCDE si se utilizan exclusivamente para cocinar. Por otro lado, los países europeos no tienen en cuenta los espacios de menos de 4 metros cuadrados. Esto implica que podría existir un sesgo al alza en las tasas de hacinamiento de las fuentes europeas en relación con las de Chile y México (al incluir menos espacios del hogar en el recuento de habitaciones) (OCDE, 2020[1]).

La OCDE está trabajando en la elaboración de datos armonizados sobre acceso a servicios y comodidades (como transporte, centros médicos, escuelas, etc.), pero estos todavía no están disponibles. Como se ha mencionado antes, tampoco existen datos comparables a nivel internacional sobre sinhogarismo (una medida de la privación extrema relacionada con la vivienda) y sobre la percepción de las propias condiciones de vivienda (OCDE, 2020[1]).

La asequibilidad de la vivienda es un determinante esencial del acceso a una buena vivienda. En América Latina, el nivel relativamente elevado de la relación precio de la vivienda/ingresos, combinado con la imposibilidad de acceder al financiamiento inmobiliario, es el principal motivo por el que los hogares recurren a soluciones informales, sin el beneficio de la planificación y las normas de seguridad (ONU-Habitat, 2016[47]). Desde el punto de vista conceptual, la falta de asequibilidad de la vivienda constituye una medida de las viviendas inadecuadas, ya que su costo no debería impedir que sus ocupantes pudiesen satisfacer sus necesidades diarias ni disfrutar de sus derechos humanos (ONU-Habitat, 2020[33]). En términos más generales, este sigue siendo un problema que puede afectar a personas de todos los niveles de ingreso, con fuertes efectos negativos sobre la desigualdad territorial. La meta 11.1.1 de los ODS establece una medida de las viviendas inadecuadas, definida como la proporción de hogares cuyos gastos mensuales netos en vivienda no superan el 30% de sus ingresos mensuales totales (ONU-Habitat, 2020[33]). No obstante, la asequibilidad de la vivienda también puede medirse a partir de la relación alquiler de la vivienda/ingresos mensuales del hogar (HRIR, por sus siglas en inglés) y la relación precio de la vivienda/ingresos anuales del hogar (HPIR, por sus siglas en inglés). Una vivienda se considera asequible cuando la HRIR no supera el 25% y la HPIR es de un máximo de 3,0 (ONU-Habitat, 2020[33]). Para enriquecer el conocimiento sobre la calidad de la vivienda en la región, sería bueno disponer de datos comparables sobre asequibilidad, precios y sobrecarga de costo (p. ej., la proporción de hogares cuyos costos habitacionales, como son el alquiler, la hipoteca y otros costos, superan una proporción determinada del ingreso).

Asimismo, el desarrollo de indicadores comparable sobre tenencia de vivienda y tierras ayudaría a conocer mejor la situación en cuanto a seguridad. La seguridad en la tenencia garantiza el acceso y disfrute del hogar sin miedo al desahucio forzoso y permite a las personas mejorar sus condiciones habitacionales y de vida. Asimismo, otorga a los padres el derecho a transmitir las tierras o la vivienda a

sus hijos y se considera que contribuye a la reducción de la pobreza y la mejora del desarrollo económico y el uso sostenible de recursos, así como a la estabilidad social (Santos, 2019[34]).

Capturar las desigualdades en la vivienda de los distintos grupos de población (p. ej., por género, edad o nivel de educación) es complicado, puesto que los datos suelen declararse a nivel de hogares. Una posibilidad sería tener en cuenta las diferencias entre los grupos en función del estatus del cabeza de familia. Las desigualdades regionales también son especialmente importantes en el ámbito de la vivienda, entre otros por la importancia de la ubicación a la hora de determinar el acceso a los servicios (OCDE, 2020[1]). Por tanto, debe hacerse todo lo posible por recolectar datos sobre la calidad de la vivienda a nivel subnacional que sean representativos de la población.

Referencias

Altamirano, A. et al. (2020), *¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo? Posibles escenarios para América Latina y el Caribe*, Inter-American Development Bank, Washington, D.C., http://dx.doi.org/10.18235/0002062. [23]

Balestra, C. et al. (2018), "Inequalities in emerging economies: Informing the policy dialogue on inclusive growth", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2018/13, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6c0db7fb-en. [12]

Banco Mundial (2019), *Understanding the "new rurality" in Latin America and what it means to the water and sanitation sector*, https://blogs.worldbank.org/water/understanding-new-rurality-latin-america-and-what-it-means-water-and-sanitation-sector. [36]

Banco Mundial (2016), *Poverty and Shared Prosperity 2016: Tackling Inequalities*, Banco Mundial, Washington, DC. [3]

Basto-Aguirre, N., P. Cerutti and S. Nieto-Parra (2020), *Is COVID-19 widening educational gaps in Latin America? Three lessons for urgent policy action*, OECD Development Centre, https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-urgent-policy-action/. [44]

BID (2016), *Slum upgrading and housing in Latin America*, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Slum-Upgrading-and-Housing-in-Latin-America.pdf. [29]

Cazes, S., A. Hijzen and A. Saint-Martin (2015), "Measuring and assessing job quality: The OECD Job Quality Framework", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 174, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jrp02kjw1mr-en. [19]

CEPAL (2021), *Panorama Social de America Latina*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020. [9]

CEPAL (2020), *Employment Situation in Latin America and the Caribbean: Work in times of pandemic: The challenges of the coronavirus disease (COVID-19)*, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45582. [22]

CEPAL (2020), *The social challenge in times of COVID-19*. [10]

CEPAL (2020), *Universalizing access to digital technologies to address the consequences of COVID-19*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45939/5/S2000549_en.pdf. [43]

CEPAL (2019), "Income poverty measurement: Updated methodology and results", *ECLAC Methodologies*, Vol. No. 2 (LC/PUB.2018/22-P). [4]

CEPAL (2019), *Report on the activities of the Statistical Coordination Group for the 2030 Agenda in Latin America and the Caribbean*, https://cea.cepal.org/10/en/documents/report-activities-statistical-coordination-group-2030-agenda-latin-america-and-caribbean. [5]

CEPAL (2018), *Social Panorama of Latin America 2018*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf. [2]

CEPAL/OIT (2020), *El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, https://www.cepal.org/es/presentaciones/trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente-la-enfermedad-coronavirus-covid-19. [21]

Euromonitor Internacional (2018), *Households in Latin America*, https://www.euromonitor.com/households-in-latin-america/report#executive-summary. [35]

Eurostat (2019), *Statistics Explained: Overcrowding rate*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Overcrowding_rate. [46]

FAO (2020), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*, FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, http://dx.doi.org/10.4060/ca9692en. [7]

Ferreira de Souza, P. (2021), "The Covid-19 pandemic and racial inequality of income [A Pandemia de Covid-19 e a Desigualdade Racial de Renda]", *Boletim de Análise Político-Institucional* 26, http://dx.doi.org/10.38116/bapi26art4. [50]

Gilbert, A. (2000), "Financing self-help housing: Evidence from Bogotá, Colombia", *International Planning Studies*, Vol. 5/2, pp. 165-190, http://dx.doi.org/10.1080/13563470050020176. [31]

Gruss, B. (2014), *After the boom: Commodity prices and economic growth in Latin America and the Caribbean*, IMF Working Paper 14/154, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14154.pdf. [49]

INE (2019), *Nuevas y antiguas formas de informalidad laboral y empleo precario*, https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/20190403_6.arellano.pdf. [25]

Lustig, N. and M. Tommasi (2020), *Covid-19 and social protection of poor and vulnerable groups in Latin America: A conceptual framework*, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html. [37]

McTarnaghan, S. et al. (2018), *Literature Review of Housing in Latin America and the Caribbean*, Urban Institute, https://www.urban.org/sites/default/files/publication/84806/2000957-Literature-Review-of-Housing-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf. [32]

Messina, J. and J. Silva (2017), *Wage Inequality in Latin America: Understanding the Past to Prepare for the Future*, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/ Banco Mundial, Washington, DC. [18]

Mousteri, V., M. Daly and L. Delaney (2018), "The scarring effect of unemployment on psychological well-being across Europe", *Social Science Research*, Vol. 72, pp. 146-169, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.01.007. [15]

OCDE (2020), *COVID-19: Protecting People and Societies*, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126985-nv145m3l96&title=COVID-19-Protecting-people-and-societies. [45]

OCDE (2020), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9870c393-en. [1]

OCDE (2020), *OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/1686c758-en. [41]

OCDE (2020), *Supporting people and companies to deal with the COVID-19 virus: Options for an immediate employment and social-policy response*, http://oe.cd/covid19briefsocial. [40]

OCDE (2018), *Good Jobs for All in a Changing World of Work*, OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264308817-en. [26]

OCDE (2017), *OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264278240-en. [20]

OCDE (2011), *How's Life?: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en. [14]

OCDE et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [17]

OCDE/OIT (2019), *Tackling Vulnerability in the Informal Economy*, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/939b7bcd-en. [51]

OIT (2018), *Women and men in the informal economy: A statistical picture (Third edition)*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf. [16]

OIT (2012), *Measurement of the Informal Economy*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_210443.pdf. [24]

OMS (2018), *Housing and Health Guidelines*, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1. [27]

ONU (2020), *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean*, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac.pdf. [38]

ONU-DESA (2018), *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition*, https://population.un.org/wup/Publications/. [28]

ONU-Habitat (2020), *https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files*, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf. [33]

ONU-Habitat (2016), *The fundamentals of urbanization: Evidence base for policy making"*, https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Global%20Report%20H%20III%20UN-Habitat%202016%C6%922.pdf. [47]

ONU-Habitat (2014), *Practical Guide to Designing, Planning and Implementing Citywide Slum Upgrading Programs*, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/UNHABITAT_A_PracticalGuidetoDesigningPlaningandExecutingCitywideSlum.pdf. [52]

ONU-Habitat (2012), *Global Urban Indicators Database*. [30]

Rio Prefeitura (2020), *Prefeitura divulga resultado da primeira etapa de pesquisa sobre covid-19 em comunidades cariocas [El Ayuntamiento publica los resultados de la primera fase de la investigación sobre el covid-19 en las comunidades de Río de Janeiro]*, https://prefeitura.rio/saude/prefeitura-divulga-resultado-da-primeira-etapa-de-pesquisa-sobre-covid-19-em-comunidades-cariocas/. [39]

Sánchez-Ancochea, D. (2021), *The Costs of Inequality in Latin America: Lessons and Warnings for the Rest of the World*, I. B. Tauris, London. [13]

Santos, M. (2019), "Non-monetary indicators to monitor SDG targets 1.2 and 1.4: Standards, availability, comparability and quality"*, Statistics series*, No. No. 99 (LC/TS.2019/4), CEPAL, Santiago. [34]

Smith, M., W. Kassa and P. Winters (2017), "Assessing food insecurity in Latin America and the Caribbean using FAO's Food Insecurity Experience Scale", *Food Policy*, Vol. 71, pp. 48-61, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.07.005. [8]

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (eds.) (2018), *For Good Measure: Advancing Research on Well-being Metrics Beyond GDP*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264307278-en. [11]

Stiglitz, J., A. Sen and J. Fitoussi (2009), *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm. [48]

Townsend, P. (1979), *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*, Penguin Books, http://dx.doi.org/10.1177/000271628145600134. [6]

Vera, F., V. Adler and M. Uribe (eds.) (2020), *¿Qué podemos hacer para responder al COVID-19 en la ciudad informal?*, Inter-American Development Bank, http://dx.doi.org/10.18235/0002348. [42]

Notas

[1] A lo largo del informe, la expresión “países analizados” se refiere a los 11 países siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. El ingreso nacional bruto (INB) se calcula como el producto interno bruto más los ingresos netos del exterior por remuneración de los asalariados, las rentas de la propiedad y los impuestos netos menos subvenciones a la producción. Para más información (en inglés), véase: https://data.oecd.org/natincome/gross-national-income.htm.

[2] Por ejemplo, una de las principales recomendaciones del informe de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (denominado también Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[48])) fue la medición conjunta de los ingresos, el consumo y el patrimonio, para poder entender mejor el bienestar individual y de los hogares. En el informe de seguimiento publicado en 2018 y titulado For Good Measure se repitió esta recomendación (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[11]). En la serie ¿Cómo va la vida?, que describe la aplicación del marco de bienestar de la OCDE a sus países miembros, la dimensión correspondiente se denomina “ingresos y patrimonio”, en vez de “ingresos y consumo”.

[3] La región es un importante proveedor de muchos productos para los sectores agrícola, minero y energético que constituyen la canasta de materias primas internacionales, cuyo valor nominal registró una subida considerable entre comienzos de la década de 2000 y mediados de la de 2010. Los precios del petróleo en dólares corrientes de Estados Unidos casi se cuadruplicaron entre 2003 y 2013; los precios del metal se triplicaron, los de los alimentos se duplicaron y los de los productos agrícolas aumentaron aproximadamente un 50% (Gruss, 2014[49]).

[4] La medición (según cuentas nacionales) del consumo de los hogares incorpora el gasto de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), como hospitales, universidades, etc.

[5] Las estimaciones se obtienen a partir de modelos basados en regresiones de series temporales en las que se utiliza el crecimiento del PIB per cápita como indicador de pobreza. Véase una descripción completa del método en el anexo I. A1 de (CEPAL, 2021[9]).

[6] Por ejemplo, la medida principal preferida del ingreso promedio utilizada en la serie *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2020[1]), el ingreso del hogar disponible neto ajustado, no puede calcularse de forma comparable. El ingreso disponible ajustado neto de los hogares es el ingreso per cápita de estos, después de descontar los impuestos y ajustarlo por el valor de los servicios en especie, como la educación y la salud, que los gobiernos ofrecen de forma gratuita o a precios subvencionados.

[7] El Banco Central de Costa Rica viene realizando desde 2007 y de forma periódica encuestas financieras de hogares; México llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNViH) en 2002, 2005-2006 y 2009-2012; Chile efectuó la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) en los años 2007, 2011-2012, 2014 y 2017, y Uruguay realizó la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU) sobre los años 2012-2014 y 2017 (CEPAL, 2018[2]).

[8] Para ello, se lleva a cabo una medición de los activos financieros líquidos de los hogares; estos últimos se considerarán afectos de inseguridad económica si sus activos financieros líquidos equivalen a menos del 25% de la línea de pobreza de ingresos relativa nacional (que, a su vez, se define como el 50% del ingreso nacional medio).

[9] Los ingresos equivalentes se refieren a los ingresos de los hogares calculados tras centralizar los flujos de ingresos de cada miembro del hogar y asignarlos después a cada miembro según un "ajuste" que refleje las distintas necesidades de los hogares según su tamaño y estructura.

[10] Por ejemplo, un estudio sobre las prestaciones de emergencia desembolsadas durante la pandemia constata que las encuestas de hogares capturaron un gasto general de entre 23.600 millones de BRL y 28.600 millones de BRL al mes, mientras que el Ministerio de Ciudadanía declaró un gasto de 46.000 millones de BRL (Ferreira de Souza, 2021[50]).

[11] Es lo que se reconoce en el concepto de "trabajo decente" de la OIT, así como en la definición de "calidad del empleo" de la OCDE, centrada en la remuneración, la seguridad del mercado laboral (es decir, los riesgos de pérdida de empleo y el costo económico para los trabajadores) y la calidad del entorno laboral (es decir, los aspectos no económicos del empleo, como la naturaleza y el contenido del trabajo realizado, la organización del tiempo de trabajo y las relaciones en el puesto de trabajo) (Cazes, Hijzen and Saint-Martin, 2015[19]). La Estrategia de Empleo de la OCDE de 2018 considera prioritario centrar las políticas en la cantidad y la calidad del empleo, así como en la inclusividad del mercado laboral (OCDE, 2018[26]) En este sentido, trabajar muchas horas (ya sea de forma remunerada o no remunerada) puede resultar perjudicial para el bienestar de las personas.

[12] Los valores correspondientes al promedio de la OCDE a los que se refiere esta sección son cálculos de la OIT y no de la OCDE, con el objetivo de asegurar su comparabilidad. En general, los datos sobre empleo de la OCDE se refieren a la población de edad comprendida entre los 25 y los 64 años, mientras que los datos de la OIT corresponden a los mayores de 25 años.

[13] En la Recomendación 204 de la OIT (2015) sobre la transición de la economía informal a la economía formal se describe la "economía informal" como aquella que hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que —en la legislación o en la práctica— están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. La economía informal no abarca las actividades ilícitas (OCDE/OIT, 2019[51]).

[14] La OCDE mide la inseguridad en el mercado laboral en términos de pérdidas monetarias esperadas en las que una persona empleada incurriría si se quedase y permaneciese sin empleo, expresadas como proporción de la remuneración previa. Estas pérdidas están supeditadas al riesgo de perder el empleo, la duración esperada de dicho desempleo y la mitigación que las prestaciones por desempleo ofrecen frente a tales pérdidas (seguro efectivo) (OCDE, 2020[1]).

[15] La definición de sistema de protección social en el indicador del ODS 1.3.1 es amplia e incluye esquemas contributivos y no contributivos para niños, mujeres embarazadas y con recién nacidos, personas en edad de trabajar, personas mayores, víctimas de lesiones relacionadas con el trabajo y personas con discapacidad.

[16] Las estimaciones sobre urbanización y ciudades presentadas en (ONU-DESA, 2018[28]) se basan en definiciones utilizadas por los países con fines estadísticos y, por tanto, los criterios para definir una zona como "urbana" pueden variar (desde denominaciones administrativas hasta características demográficas como el tamaño de la población o su densidad, y características más "funcionales" como la existencia de sistemas de alcantarillado) (ONU-DESA, 2018[28]).

[17] ONU-Habitat define el término “barrio marginal” como una zona que presenta una o más de las siguientes características: mala calidad estructural de la vivienda; hacinamiento; acceso inadecuado a agua potable; acceso inadecuado a saneamiento y otras infraestructuras, o inseguridad de la tenencia (ONU-Habitat, 2014[52]). Además, la Alianza de las Ciudades y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas consensuaron una definición más operativa del término “barrio marginal”, con el objetivo de medir el indicador de la meta 7.D de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (ONU-Habitat, 2020[33]). La definición consensuada, que también se utiliza para el indicador 11.1.1 de los ODS, clasifica como “hogar de barrio marginal” aquel cuyos habitantes sufren una o más de las siguientes privaciones en relación con la vivienda: falta de acceso a un abastecimiento mejorado de agua, falta de acceso a servicios mejorados de saneamiento, falta de espacio habitable adecuado, falta de durabilidad de la vivienda y falta de seguridad de la tenencia.

3 Calidad de vida en América Latina

En las dos últimas décadas, la calidad de vida de los países analizados ha mejorado en una serie de dimensiones, singularmente en lo que atañe a salud, conocimientos y competencias. Sin embargo, es preciso que este progreso se mantenga, a fin de garantizar que la mayoría de la población disfrute de una mejora de los resultados en materia de salud y educación, ya que el impacto de la pandemia está revirtiendo los logros alcanzados en estos dos ámbitos. La seguridad es motivo de gran preocupación en esta región, y las tendencias y los niveles promedio no reflejan las enormes diferencias que existen entre los países. Las tasas de votación apenas han registrado cambios, pero la cifra promedio de percepción del gobierno desde 2004 se ha deteriorado. Pese a que la calidad del aire ha mejorado en la última década, muchas personas siguen expuestas a niveles de partículas que resultan nocivos. Por último, la satisfacción con la vida y el apoyo de las redes sociales han descendido, mientras que la proporción de la población que experimenta emociones principalmente negativas aumentó entre 2019 y 2020, lo cual pone de relieve el perjudicial efecto que ha tenido el primer año de la pandemia.

Introducción

En el marco de bienestar de la OCDE, el indicador Calidad de vida abarca la salud, los conocimientos y las competencias, la seguridad, la calidad del medioambiente, el compromiso cívico, las relaciones sociales, la conciliación de la vida personal y laboral y el bienestar subjetivo. En relación con cada una de estas dimensiones, este capítulo ofrece un resumen de los niveles y las tendencias observadas en cada indicador cuando se dispone de datos relativos al grupo de países analizados, antes de comentar la posible repercusión de la pandemia de COVID-19 y los aspectos para el desarrollo estadístico. Las tendencias generales en cuanto a calidad de vida en el grupo de países analizados antes de la pandemia son alentadoras y señalan una mejora significativa del bienestar de la población durante las últimas dos décadas. Sin embargo, en una serie de resultados examinados en este capítulo, algunos países en los que las posibles consecuencias de la pandemia preocupan de manera especial lastran los niveles promedio del grupo de países analizados.

En materia de salud, los indicadores ponen de manifiesto un considerable avance dentro del grupo de países analizados[1], aunque la satisfacción con la atención sanitaria ha disminuido a lo largo del tiempo y los gastos directos siguen siendo elevados en cuatro de los seis países sobre los que hay datos disponibles. Pese a las mejoras registradas en las últimas dos décadas, los indicadores sobre conocimientos y competencias subrayan las disparidades existentes tanto entre determinados países del grupo de países analizados como dentro de estos. Esta esfera es también enormemente pertinente en el contexto de la transformación digital, ya que la trascendencia cada vez mayor de las competencias digitales implica que las desigualdades en cuanto a acceso a Internet y competencias TIC podrían empeorar las actuales desigualdades en materia de bienestar en toda la región. Aunque las cifras de homicidios siguen siendo relativamente elevadas en determinados países del grupo analizado y, en otros, han aumentado, en promedio en 2018, descendió el número de personas que denunciaron haber sido agredidas, atacadas o víctimas de delitos durante los 12 meses anteriores, con respecto a 2001. Sin embargo, los indicadores sobre percepción de seguridad y muertes en accidentes de tráfico aún no han mejorado. Por lo que se refiere a la calidad del medioambiente, en el grupo de países analizados, la exposición media promedio de la población a la contaminación atmosférica por $MP_{2.5}$ se ha mantenido razonablemente estable desde 2000, aunque en 2019, un 91% de la población de los países analizados seguía expuesta a niveles peligrosos (a saber, superiores a 10 microgramos/m3). En algunos países del grupo analizado, el descontento con la esfera pública ha sido motivo de agitación social en los últimos años y los indicadores utilizados en este informe para valorar el compromiso cívico muestran una marcada caída de la proporción de personas que declaran haber manifestado su opinión a un funcionario público, así como un aumento de quienes creen que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio. Entre 2006-2009 y 2017-2019, los indicadores de relaciones sociales y bienestar subjetivo se mantuvieron en niveles relativamente altos, próximos a los registrados en la OCDE.

La pandemia de COVID-19 ha afectado radicalmente la calidad de vida de las personas del grupo de países analizados, pues han tenido que lidiar de todas las formas posibles con las olas de incrementos en los fallecimientos y la incidencia de la enfermedad, con prolongados confinamientos y también con penurias económicas. Según los primeros datos contrastados comunicados en este capítulo, en América Latina la pandemia agravó carencias preexistentes en cuanto a acceso a la atención sanitaria, además de incrementar el sentimiento de soledad, la incidencia de la depresión y el abuso de sustancias entre la población. Los cierres de centros escolares podrían haber afectado a niños, niñas y adolescentes de manera desigual, pues los estudiantes de entornos socioeconómicos más pobres corren el riesgo de padecer consecuencias persistentes en el tiempo en cuanto a descenso de sus resultados académicos y de sus oportunidades laborales. Pese a que los confinamientos prolongados impuestos en la mayoría de países de América Latina y el Caribe mantuvieron a la población alejada de las calles, las consecuencias en términos de delincuencia y calidad ambiental fueron dispares. Sin embargo, el malestar social y la polarización política previos a la pandemia ponen de relieve que es urgente que los países generen

oportunidades para los ciudadanos y las partes interesadas, y que les permitan participar en actividades encaminadas a reconstruir la confianza, mejorar los servicios y aumentar la cohesión social.

Con respecto a los indicadores seleccionados de los que hay datos disponibles procedentes de la Encuesta Gallup Mundial, este capítulo analiza con mayor detenimiento su variación entre 2019 y 2020. En promedio, en el grupo de países analizados, el nivel de satisfacción con los servicios de atención sanitaria se mantuvo relativamente estable, aunque existen tendencias divergentes entre los distintos países. Por otra parte, la satisfacción con el sistema educativo cayó en la mayoría de los países, de modo que, en 2020, aumentaron las disparidades entre los del grupo analizado. Por último, en determinados países, los niveles promedio de apoyo de las redes sociales y satisfacción con la vida disminuyeron considerablemente entre 2019 y 2020 con respecto a años anteriores, al tiempo que el aumento del equilibrio de afecto negativo pone de manifiesto la carga que ha supuesto esta crisis para la salud mental de la población.

Salud

La salud es fundamental para el bienestar de la población y se considera sistemáticamente uno de los aspectos más valorados de las vida de las personas.[2] Las posibilidades de tener una vida larga y saludable no solo tienen un claro valor intrínseco, sino que además revisten una importancia instrumental para aumentar las oportunidades que tiene la población de participar en la educación, el mercado de trabajo y la vida de la comunidad. El término “salud” en su más amplio sentido se refiere a “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948[1]). Pese a que la salud se puede entender como un concepto multidimensional y positivo, las restricciones en materia de datos tienen como consecuencia que, en la mayor parte de los casos, se mida centrando el interés en las enfermedades, la discapacidad y la mortalidad, en lugar de hacerlo en la presencia de estados de salud más positivos. Para conocer el nivel de salud de la población en términos más generales, los marcos de bienestar suelen utilizar indicadores de longevidad, años vividos con buena salud, autoevaluación sobre la salud propia, síntomas de salud mental y, en ocasiones, conductas relacionadas con la salud.

Desde 2000, la esperanza de vida en el grupo de los 11 países analizados se ha incrementado en 3,5 años en promedio, y tanto la mortalidad infantil como la derivada de la maternidad han descendido. Sin embargo, los avances registrados en los diferentes países siguen siendo desiguales, y persisten las divergencias en cuanto a niveles. Por ejemplo, entre los países que presentan mejores y peores resultados sobre esperanza de vida al nacer de este grupo de 11 de América Latina y el Caribe (ALC), existe una diferencia de seis años, mientras que la mortalidad infantil del país con peores datos cuadruplica la cifra registrada en el país con mejores datos. Antes de la pandemia de COVID-19, la satisfacción de la población con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad ya estaba bajando en la mayoría de los países del grupo analizado, pese a la mejora general de la cobertura sanitaria. Casi 1 de cada 5 personas de los países del grupo analizado afirma ver limitadas sus actividades diarias debido a la mala salud, un dato próximo a los niveles promedio de la OCDE, aunque la prevalencia de suicidios registrados se mantiene considerablemente por debajo del promedio de la OCDE en la mayoría de estos países. El tabaquismo, el alcoholismo y, en especial, la prevalencia de sobrepeso y obesidad son factores de riesgo fundamentales de mala salud en América Latina, aunque estos indicadores se tratan en la sección relativa al “Capital humano” del Capítulo 4 sobre Recursos para el bienestar futuro.

América Latina se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19 y ha sido una de las regiones más golpeadas del mundo en términos de fallecimientos (Dong, Du and Gardner, 2020[2]). Además, las estimaciones indican que un 21% de su población tiene al menos un factor (p. ej., la obesidad) que incrementa su riesgo de que el COVID-19 les afecte de manera más grave en caso de contagiarse (LSHTM CMMID COVID-19 working group, 2020[3]). Estos datos son especialmente preocupantes en un

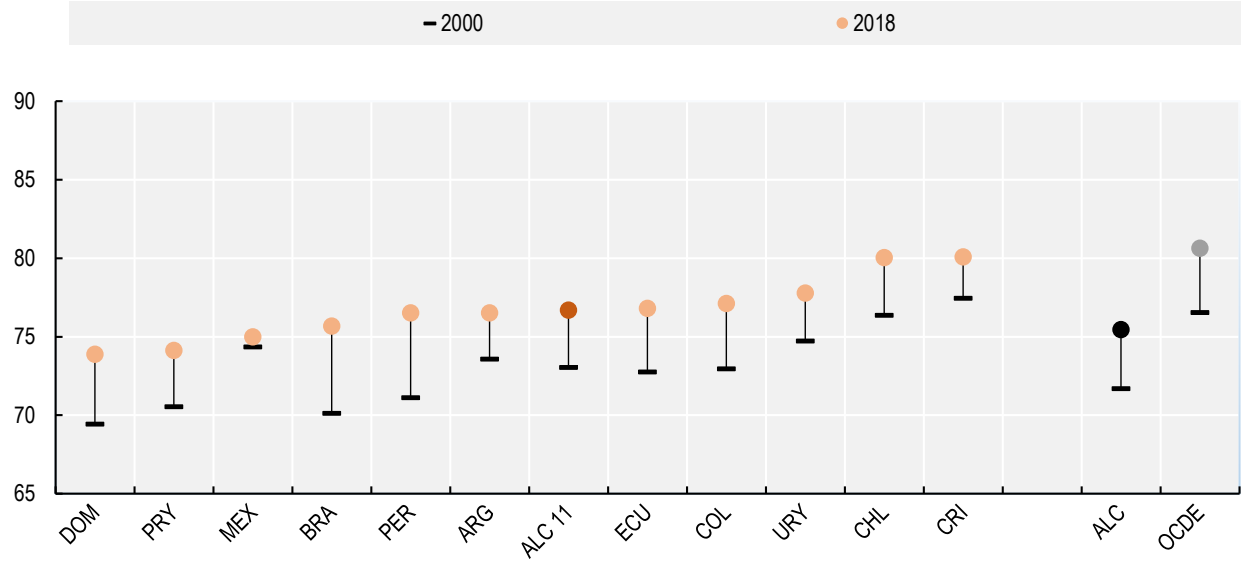
contexto en el que los países de América Latina tienen dificultades para ofrecer una atención sanitaria accesible, asequible y segura, debido a los altos niveles de informalidad y desigualdad.

Esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer es la medida más utilizada para resumir el estado de salud de la población y suele emplearse para valorar la salud general de un país. Este indicador mide durante cuánto tiempo se puede esperar, en promedio, que viva un recién nacido si las tasas de mortalidad actuales no varían. La esperanza de vida al nacer se ha incrementado en 3,7 años en todos los países del grupo analizado desde 2000, de los 73 años a los 76,7 años en promedio en 2018 (Gráfico 3.1). En general, este incremento se ha visto impulsado por la reducción constante de la mortalidad a todas las edades, en particular la mortalidad infantil y en la niñez (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]). La convergencia con los niveles alcanzados en países en los que la esperanza de vida es máxima ha sido relativamente lenta y la diferencia entre el grupo de países analizados y la OCDE ha aumentado ligeramente, en 0,4 años en promedio desde 2000. Entre los países del grupo analizado existen grandes divergencias: en Costa Rica, la esperanza de vida de un recién nacido es 6,2 años superior a la registrada en la República Dominicana, pese a la mejora de 4,5 años que ha experimentado este último país, uno de los que más han avanzado en este sentido desde 2000 junto con Colombia (4,2 años), Perú (5,4 años) y Brasil (5,6 años). Durante ese mismo período, la esperanza de vida al nacer se ha mantenido relativamente estable en México (Gráfico 3.1).

Gráfico 3.1. Desde el año 2000, la esperanza de vida se ha incrementado en 3,7 años en promedio en el grupo de países analizados

Esperanza de vida, total, años



Nota: El promedio regional de ALC lo calcula el Banco Mundial y abarca 35 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

StatLink https://stat.link/qh148w

Mortalidad materna e infantil

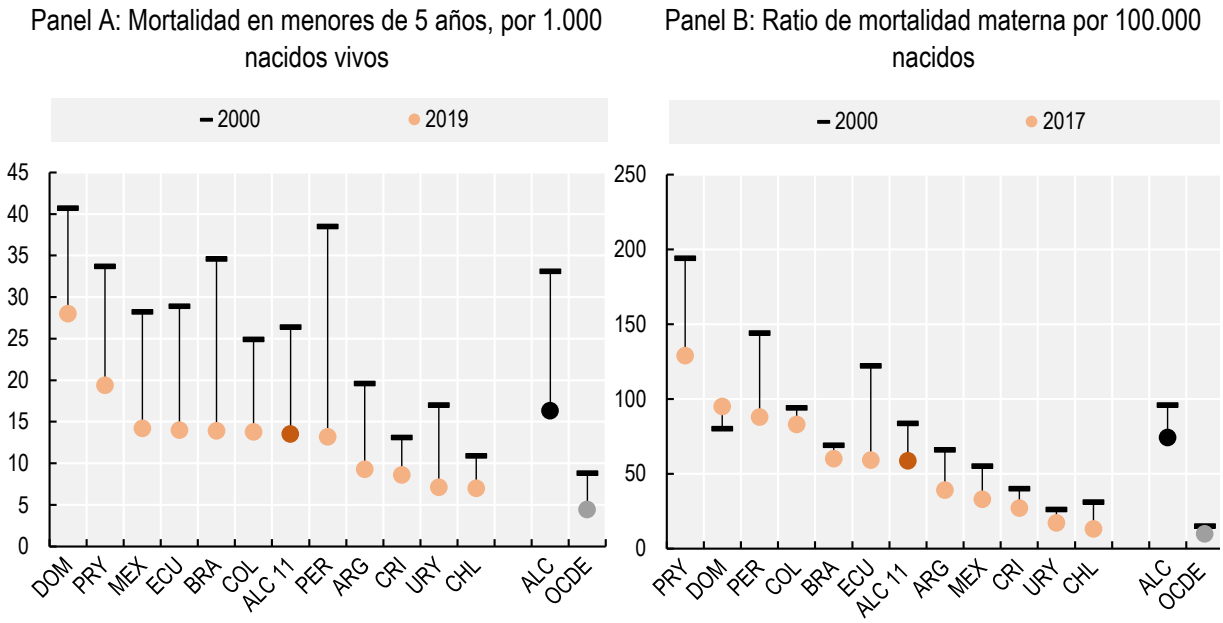
En muchos países de América Latina, las tasas de mortalidad infantil han sido históricamente muy elevadas, y las mejoras en los resultados de salud de los niños y las niñas durante sus primeros cinco años de vida han sido especialmente importantes para el aumento de la esperanza de vida en esta región durante las últimas dos décadas. Las tasas de mortalidad materna e infantil son indicadores de salud especialmente importantes, puesto que ponen de manifiesto las consecuencias de las condiciones económicas, sociales y ambientales en los niños, las niñas y las madres, además de constituir un indicio de la efectividad global de los sistemas de salud dentro de un país.

En promedio, en 2019 la tasa de mortalidad infantil (muertes por cada 1.000 nacidos vivos) era de 13,5, casi la mitad que en 2000 (26,4) y casi el triple de la tasa promedio de la OCDE en 2019 (4,4). Aunque todos los países han experimentado mejoras, entre los del grupo analizado son patentes las mismas diferencias, pues la tasa de la República Dominicana (28) cuadruplica la de Chile (7). Esta cifra supera en tres puntos el objetivo fijado por los ODS para 2030 (como mínimo de tan solo 25 por 1.000 nacidos vivos antes de 2030) (Gráfico 3.2, panel A).

La mortalidad materna —el fallecimiento de una mujer durante el embarazo o el parto o en el plazo de 42 días desde que ha terminado la gestación— es un indicador importante del estado de salud de las mujeres, pero también para valorar el funcionamiento del sistema de salud de un país. Esta cifra ha descendido de 84 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 2000 a 58 en 2017, en promedio, en el grupo de países analizados. Siete de los 11 países del grupo analizado han alcanzado ya la meta de los OSD, fijada en menos de 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, los niveles de 2017 se mantuvieron altos en comparación con los de los países de la OCDE (en promedio). Los mayores avances los han alcanzado los países que presentaban los niveles más elevados en 2000 y que, aún hoy, siguen por encima del promedio del grupo de países analizados: Paraguay, Perú y Ecuador. Por el contrario, la mortalidad materna aumentó casi un 20% en la República Dominicana, de modo que se han revertido las mejoras conseguidas a principios de la década de 2000 (Gráfico 3.2, panel B).

Los resultados nacionales entre los países del grupo analizado son muy similares en los dos indicadores que aparecen en el Gráfico 3.2, pues figuran los mismos países en los primeros y últimos puestos del grupo en ambos casos (Chile, Uruguay y Costa Rica en los primeros puestos; la República Dominicana y Paraguay, en los últimos). Esto pone de manifiesto la existencia de factores habituales que impulsan la mortalidad. Por ejemplo, los nacimientos no asistidos por profesionales de la salud son una causa tanto de mortalidad infantil como de mortalidad materna.

Gráfico 3.2. Desde 2000, la mortalidad infantil prácticamente se ha reducido a la mitad, en promedio, en los países analizados, mientras que la mortalidad materna ha disminuido en casi un tercio



Nota: La tasa de mortalidad infantil hace referencia a la probabilidad por 1.000 de que un bebé recién nacido muera antes de haber cumplido cinco años, de acuerdo con las tasas de mortalidad específicas para ese grupo de edad del año concreto. Las estimaciones elaboradas por el Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas (UNICEF, OMS, Banco Mundial, División de Población del DAES de las Naciones Unidas) se encuentran en www.childmortality.org. El ratio de mortalidad materna es el número de mujeres que fallece por causas relacionadas con el embarazo durante este o en el plazo de 42 días desde su término por cada 100.000 nacidos vivos. Los datos se calculan con un modelo de regresión que utiliza información sobre el porcentaje de muertes maternas entre los fallecimientos no relacionados con el sida de mujeres de entre 15 y 49 años, asistidas por personal de fertilidad, parteras o parteros, y el PIB se mide usando paridades de poder adquisitivo (PPA) (WDI, 2021[5]). En ambos paneles, el promedio regional de ALC lo calcula el Banco Mundial.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT (panel A) y https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (panel B)

StatLink https://stat.link/n7suoe

Muertes prematuras

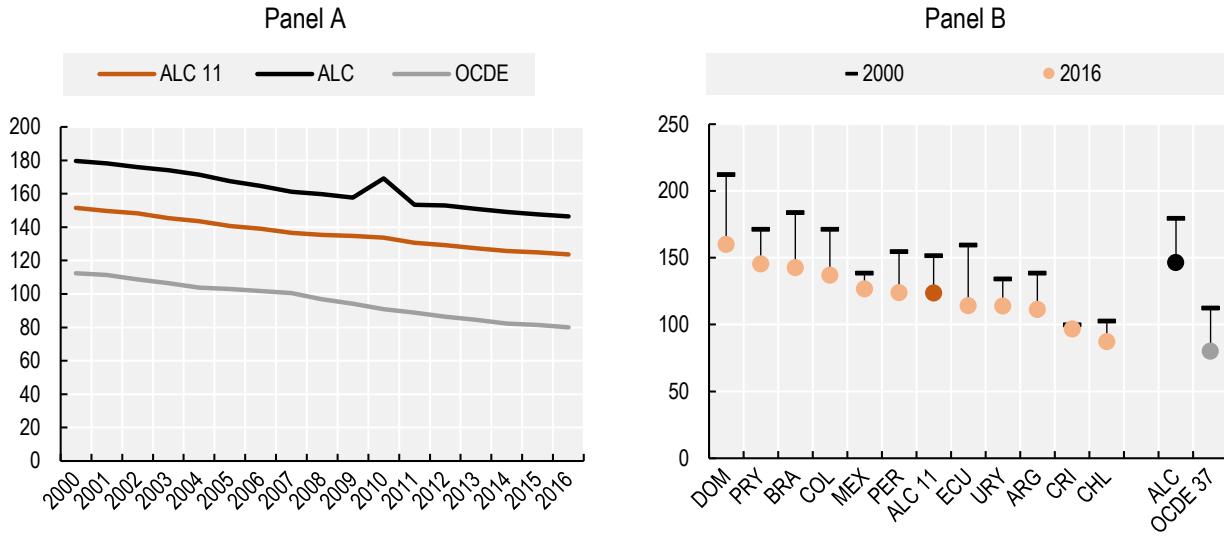
Las tasas de mortalidad prematura permiten una cierta percepción de la salud pública y el éxito de las políticas públicas en cuanto a erradicación de causas de muerte evitables y tratables entre la población no anciana, ya sean accidentes o suicidios, violencia, enfermedades contagiosas y parasitarias (transmisibles) o patologías no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias y diabetes. Así, por ejemplo, las políticas públicas y los sistemas de atención sanitaria efectivos pueden tener una incidencia considerable en la mitigación de ciertos factores de riesgo habituales de muerte prematura por enfermedades no transmisibles, como el tabaquismo, el alcoholismo, dietas poco saludables, el sedentarismo y la contaminación atmosférica (Khaltaev and Axelrod, 2019[6]). Los avances en la atención y la tecnología médicas, por su parte, pueden evitar en ocasiones que estas enfermedades crónicas causen una muerte prematura.

En promedio, en los países analizados, la mortalidad en adultos (definida como la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, obtenida a partir de tablas de vida) descendió en 2006 a 124 por 1.000, desde una tasa promedio de 152 por 1.000 en el año 2000 (Gráfico 3.3). Pese a que la mortalidad en adultos dentro del grupo de países analizados se mantuvo sistemáticamente por debajo del promedio regional de

ALC entre los años 2000 y 2016, esta diferencia se redujo ligeramente hacia el final del período, debido a un descenso de la tasa de mejora en el grupo de países analizados. Durante ese mismo período, la diferencia entre el promedio de la OCDE y el promedio del grupo de países analizados aumentó ligeramente.

Gráfico 3.3. La mortalidad prematura sigue siendo relativamente alta en los países del grupo analizado, aunque con grandes disparidades

Tasa de mortalidad en adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1.000 habitantes)



Nota: El promedio regional de ALC comprende 31 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento. Las tasas de mortalidad en adultos se derivan de tablas de vida que se basan en la revisión de las World Population Prospects de las Naciones Unidas, análisis recientes y no publicados sobre mortalidad por todas las causas y debido al VIH en países con una elevada prevalencia de este virus, datos de registros vitales y estimaciones de mortalidad infantil del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas (OMS, 2021[7]).
Fuente: Base de Datos de Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS, https://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHOSIS_000004?lang=es

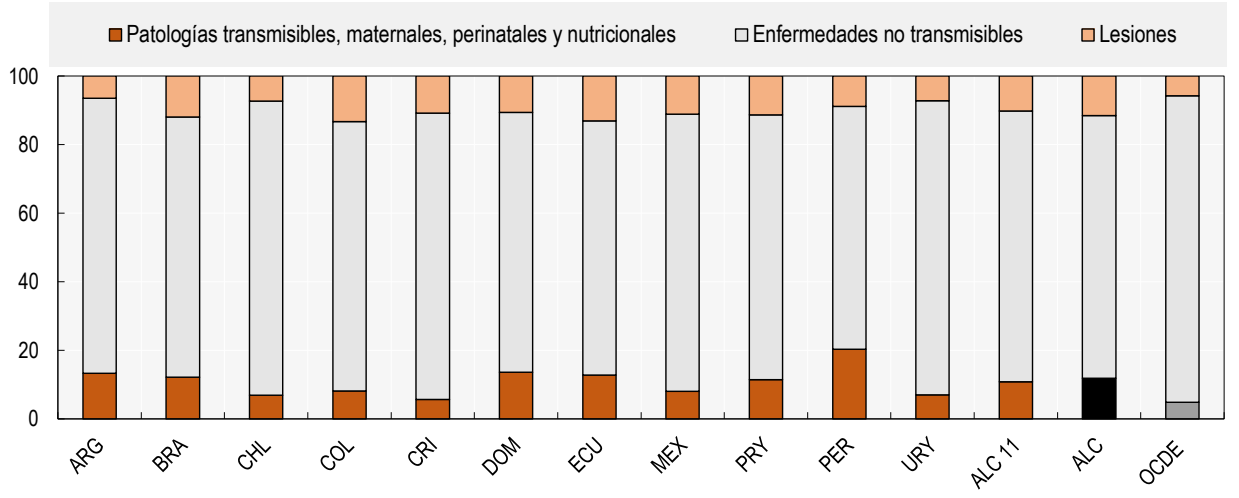
StatLink https://stat.link/dlsm28

Además de los niveles de mortalidad, resulta esencial conocer las causas de las muertes para evaluar la efectividad del sistema de atención sanitaria de un país, pero también para identificar prioridades nacionales en términos de salud pública y otras esferas políticas, como la seguridad (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]). El Gráfico 3.4 ofrece una imagen general de la carga que suponen las enfermedades, las lesiones y otros factores de riesgo para la salud de las personas en América Latina. Las enfermedades no transmisibles (entre otras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer) son la causa más habitual de muerte en el mundo, y el grupo de países analizados no es una excepción, pues en ellos este tipo de enfermedades son en promedio responsables del 79% de todas las muertes. El porcentaje más elevado se observa en Chile y Uruguay (86%), aunque se mantiene por debajo de los niveles promedio de la OCDE (89%). Sin embargo, las enfermedades transmisibles, entre otras infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y tuberculosis, así como patologías maternas y perinatales, siguen constituyendo causas importantes de muerte en muchos de los países analizados, al representar, en promedio, un 11% de todas las muertes. En Costa Rica, este porcentaje se sitúa tan solo en el 6%, pero en Perú es más del triple (20%). El 10% de muertes restante del grupo de países analizados se atribuye a lesiones y sucesos violentos, cuyos niveles van del 6% en Argentina al 13% en Colombia y Ecuador.[3] En la región de ALC,

en promedio, el porcentaje de muertes atribuido a lesiones y sucesos violentos (12%) duplica el de la OCDE en promedio (6%).

Gráfico 3.4. Las enfermedades no transmisibles son la causa más habitual de muerte en los países del grupo analizado

Proporción de muertes por todas las causas, porcentaje, 2019



Nota: El promedio regional de ALC lo calcula el Institute for Health Metrics and Evaluation.
Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (2020), *Global Burden of Disease Study 2019*, Global Burden of Disease Collaborative Network, Seattle, Estados Unidos (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool)

StatLink https://stat.link/dgz54l

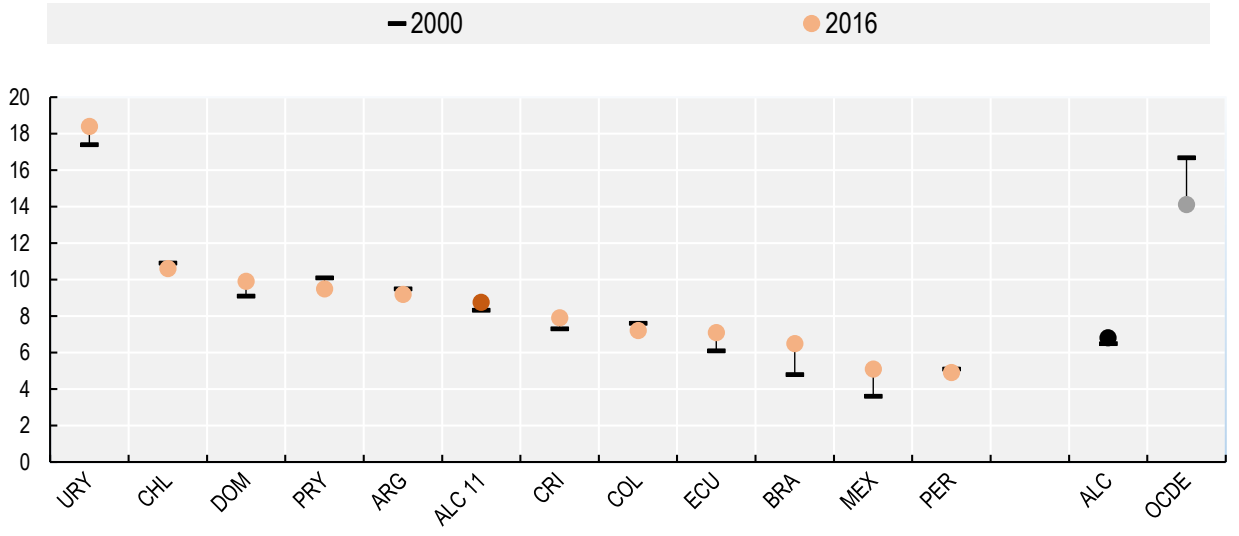
Salud mental

Los trastornos mentales y neurológicos (que van desde la depresión y la ansiedad hasta el trastorno bipolar) representan casi una cuarta parte de la carga de morbilidad en América Latina y el Caribe (OMS, 2013[8]).[4] Con frecuencia estos trastornos no se tratan adecuadamente: en 2016, el déficit en el tratamiento de trastornos mentales graves (es decir, el porcentaje de personas con trastornos que no recibía ningún tratamiento) en América Latina alcanzó prácticamente el 70% (Kohn et al., 2018[9]). Además del perjuicio directo que supone para la salud, el estado mental puede afectar a muchos otros aspectos del bienestar e interactuar con ellos, como ocurre en el caso del trabajo y la calidad del empleo (p. ej., debido a licencias por enfermedad, falta de implicación en el trabajo, discapacidad y desempleo) (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]) así como de los ingresos, la educación y las relaciones sociales. Existe una relación bidireccional entre los trastornos mentales y el estado socioeconómico. Los trastornos mentales suelen provocar un descenso del empleo y los ingresos, lo que consolida la pobreza, mientras que esta aumenta, a su vez, el riesgo de padecer un trastorno mental (OMS y Calouste Gulbekian Foundation, 2014[10]).

No se dispone de datos comparables sobre la prevalencia e intensidad de los problemas de salud mental en la región de América Latina. No obstante, existen datos contrastados sobre suicidios, que pueden considerarse una manifestación extrema de problemas de salud mental, en particular, de la depresión. En 2018, los suicidios fueron responsables de unas 800.000 muertes en todo el mundo, un 79% de los cuales se produjeron en países de ingresos medios bajos (OMS, 2019[11]). Al no disponer de medidas comparables sobre salud mental, las tasas de suicidio pueden ofrecer una cierta perspectiva sobre el nivel de problemas graves de salud mental en los diferentes países, pese a que puedan encontrarse dificultades al interpretar y comparar dichos datos (Gráfico 3.5).[5]

Gráfico 3.5. La prevalencia del suicidio sigue considerablemente por debajo del promedio de la OCDE en la mayoría de los países analizados de ALC

Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes



Nota: El promedio regional de ALC lo calcula el DAES de las Naciones Unidas.
Fuente: Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, https://unstats.un.org/sdgs/indicadores/base de datos/

StatLink https://stat.link/0pj8tq

La mayoría de los países analizados registra tasas de suicidio inferiores al promedio de la OCDE. A diferencia del promedio de la OCDE, que indica un descenso de los suicidios a lo largo del tiempo, las tendencias regionales y del grupo de países analizados desde 2000 se han mantenido relativamente estables, y se ha registrado un notable aumento en Brasil (1,7 muertes más por 100.000 hasta las 6,5 muertes en 2016) e incrementos de al menos un fallecimiento por 100.000 en México, Ecuador y Uruguay. Sin embargo, existen marcadas disparidades entre los países en lo que a niveles se refiere: en 2016, se registraron menos de cinco suicidios por 100.000 habitantes en Perú, pero más de 18 en Uruguay (Gráfico 3.5), una cifra que duplica el promedio regional de ALC y es considerablemente superior al promedio de la OCDE como consecuencia del constante incremento de las últimas décadas (Fachola et al., 2015[12]).

Acceso a la atención sanitaria

La cobertura sanitaria universal se consigue cuando todas las personas, comunidades y grupos sociales tienen acceso a los servicios sanitarios que necesitan, cuando estos tienen un alto nivel de calidad y cuando los usuarios pueden acceder a ellos sin incurrir en dificultades económicas (OCDE/OMS/Grupo del Banco Mundial, 2018[13]). De acuerdo con esta definición, los sistemas de salud de los países de América Latina presentan importantes deficiencias y, con frecuencia, carecen de financiación y están segmentados y fragmentados, lo que genera importantes obstáculos de acceso (CEPAL-OPS, 2020[14]).

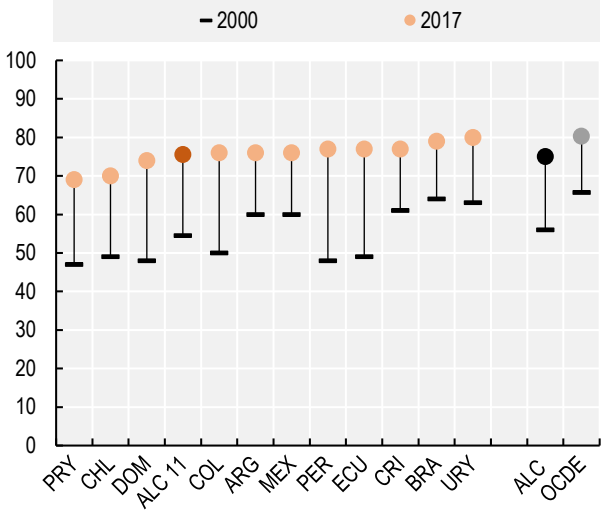
Una medida del acceso de la población a los servicios de atención sanitaria es el índice de cobertura sanitaria universal,[6] que mide el acceso de la población a 14 servicios sanitarios esenciales, utilizado por el DAES de las Naciones Unidas para determinar el avance hacia la consecución de la meta 3.8 de los ODS (“Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros,

eficaces, asequibles y de calidad para todos"). De acuerdo con esta métrica, el grupo de países analizados ha avanzado hacia la consecución de dicha meta pues, en 2017, un 76% de la población tenía acceso a estos "servicios esenciales" (panel A). En 2000, 8 de los 11 países analizados habían conseguido cobertura sanitaria para tan solo un 60% de la población o menos, mientras que, en 2017, todos los países salvo Paraguay habían llegado a una cobertura del 70%. Este avance es congruente con los logros registrados en la región de ALC en general, donde la cobertura sanitaria ha aumentado del 56% al 75% de la población. Sin embargo, el ritmo de progreso ha descendido desde 2010. En consecuencia, aunque la cobertura sanitaria en el promedio del grupo de países analizados aumentó más de 20 puntos porcentuales en las últimas dos décadas, el ritmo de mejora tendrá que duplicarse (como mínimo) para alcanzar la meta de los ODS de aquí a 2030 (Gráfico 3.6, panel A).

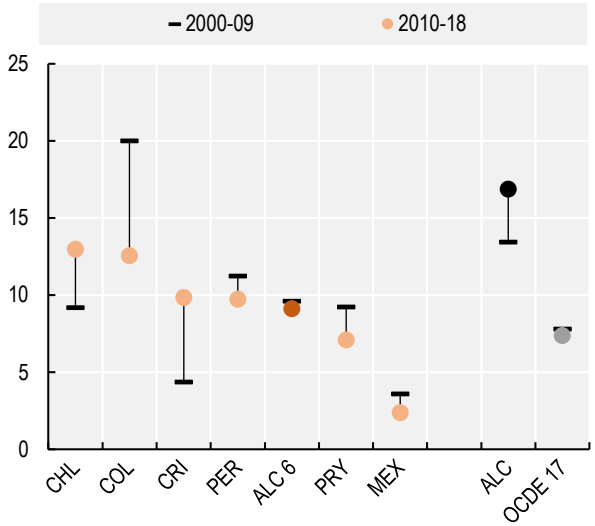
El acceso a la atención sanitaria también depende de si los hogares pueden permitirse hacer uso de los servicios de salud. La proporción de la población que destina más de un 10% de sus ingresos (o gastos) a servicios de atención sanitaria puede constituir un indicio de las dificultades económicas vinculadas a los pagos directos relacionados con la salud en los países analizados (ONU-DESA, 2019[15]). En el Gráfico 3.6, el panel B muestra que, en promedio, de los seis países analizados sobre los que se dispone de datos, en el período 2010-2018, aproximadamente el 9% de los hogares incurrió en gastos sanitarios directos superiores al 10% de sus ingresos, un porcentaje que se ha mantenido estable en términos generales en relación con la década anterior. Esta cifra ha ido descendiendo en Colombia pero ha aumentado cerca de 3 puntos porcentuales o más en Chile y Costa Rica. Algo menos del 2% de la población ha incurrido en gastos directos muy superiores (el 25% o más de sus ingresos o gastos totales en promedio en los países analizados), un porcentaje que se ha mantenido estable, en términos generales, con el paso del tiempo.

Gráfico 3.6. El acceso a la atención sanitaria ha mejorado desde 2000, aunque con un gran desembolso de gastos directos para algunos

Panel A: Proporción de la población con acceso a 14 intervenciones sanitarias esenciales, porcentaje



Panel B: Proporción de la población con gastos de atención sanitaria que superan el 10% de sus ingresos o gastos familiares, porcentaje



Nota: En el panel A, los datos se refieren al índice de cobertura de los servicios, medido según el índice de cobertura sanitaria universal (compuesto de 14 intervenciones esenciales). En el panel B, OCDE 17 incluye a Canadá, Chile, Colombia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Lituania, México, Polonia, la República Eslovaca, Eslovenia, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. En ambos paneles, el promedio regional de ALC lo calcula el DAES de las Naciones Unidas.

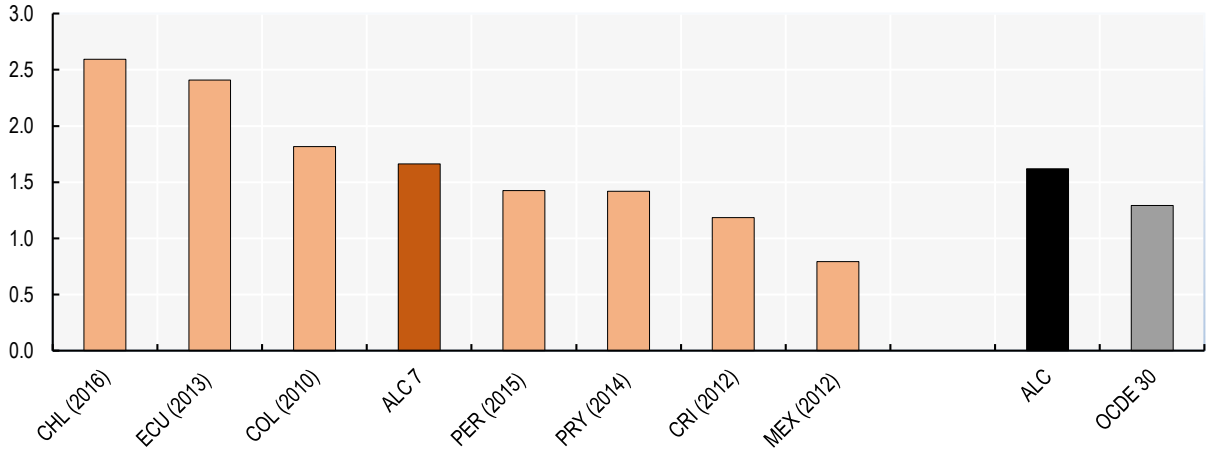
Fuente: Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, https://unstats.un.org/sdgs/indicadores/base de datos/

StatLink https://stat.link/rgqwzk

Algunos hogares se ven arrastrados a la pobreza como consecuencia de los gastos directos excesivos en que han de incurrir para hacer uso de servicios de atención sanitaria. En los países analizados sobre los que hay datos disponibles, un 1,7% de la población se ha visto arrastrada por debajo del "umbral de pobreza social debido a los gastos directos en atención sanitaria, en comparación con el 1,3% en los países de la OCDE (Gráfico 3.7). En el Gráfico 3.6, el panel B muestra que un porcentaje relativamente alto de la población cae en la pobreza en países en los que una proporción elevada de los hogares incurre en gastos directos superiores al 10% de sus ingresos o gastos (p. ej., en Chile y Colombia). De la misma manera, en México, donde los gastos directos en atención sanitaria son relativamente bajos, menos de un 1% de la población se ha situado por debajo del umbral de pobreza social a consecuencia de ellos.

Gráfico 3.7. En 2 de 6 países analizados, más de un 2% de la población ha pasado a situarse por debajo del umbral de la pobreza social debido a los gastos directos en atención sanitaria

Proporción de la población a la que los gastos directos en atención sanitaria han llevado a situarse por debajo del umbral de la pobreza social, porcentaje



Nota: En este Gráfico, el umbral de pobreza social se define como la cifra más alta entre el umbral de la pobreza de 1,90 USD (USD 2011 PPA) al día o un 50% del umbral de pobreza de consumo mediano. No se han incluido datos sobre Argentina, Brasil, la República Dominicana y Uruguay, porque los últimos años disponibles son anteriores a 2010. El promedio regional de ALC comprende 16 países, incluidos los 7 analizados sobre los que hay datos disponibles.

Fuente: Health Equity and Financial Protection 2019 del Banco Mundial, https://datatopics.worldbank.org/health-equity-and-financial-protection/

StatLink https://stat.link/m6qh0x

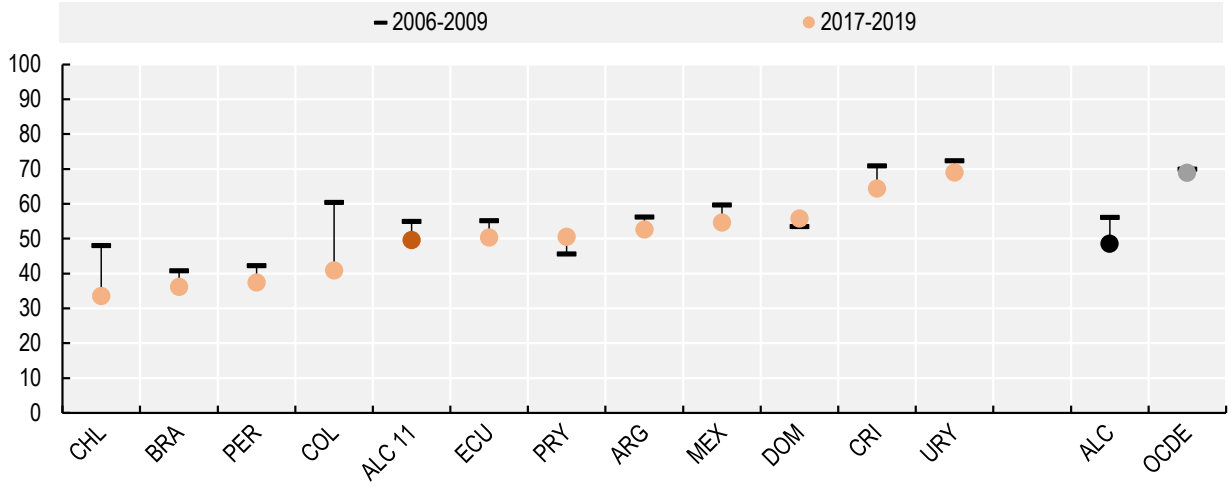
Satisfacción con la atención sanitaria

En todo el mundo, organizaciones, departamentos y organismos hacen un seguimiento periódico de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud públicos, para evaluar el impacto de las reformas e identificar ámbitos en los que es necesario adoptar más medidas. Los datos recopilados periódicamente mediante la Encuesta Gallup Mundial permiten un cierto análisis comparativo de la satisfacción de los ciudadanos con una serie de servicios públicos, incluida la atención sanitaria (OCDE, 2017[16]). En los países analizados, la mitad de la población (50%) estaba satisfecha con la disponibilidad de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que vivían en 2017-2019, una cifra próxima al promedio regional general (48%) y 20 puntos porcentuales inferior al promedio de la OCDE, del 69%. Más de 2 de cada 3 consultados declaró estar satisfecho en Uruguay (69%) y Costa Rica (64%). Sin embargo, en otros cuatro países, la mayoría de las personas consultadas no estaban satisfechas (Colombia, Perú, Brasil y Chile). En el grupo de países analizados, se encuentran tendencias dispares: en promedio, la satisfacción

con la atención sanitaria cayó 5 puntos porcentuales durante este período, con descensos que son entre 3 y 4 veces superiores en Chile y Colombia. Por otra parte, la satisfacción con la atención sanitaria aumentó ligeramente en Paraguay (del 46% al 51%), aunque se mantiene relativamente estable en la República Dominicana (56%) (Gráfico 3.8).

Gráfico 3.8. La satisfacción con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad disminuyó en promedio en los diferentes países analizados entre 2006-2009 y 2017-2019

Proporción de la población que manifiesta estar satisfecha con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que vive, porcentaje



Nota: Los datos hacen referencia al porcentaje de personas que respondió "satisfecho" a la pregunta: "En la ciudad o zona en la que vive, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad?". El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/njk4w5

Efectos de la pandemia de COVID-19

A lo largo del año 2020, la región de América Latina y el Caribe fue una de las más golpeadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19), en relación tanto con el número de casos detectados como de fallecimientos. Hasta abril de 2021, esta región representaba un 19% de los casos confirmados en todo el mundo, y un 28% de las muertes confirmadas, pese a constituir solo un 9% de la población mundial (Dong, Du and Gardner, 2020[2]; Worldometer, 2021[17]).[7] En Perú, las muertes confirmadas por 100.000 habitantes fueron superiores a las de cualquier otro país del mundo hasta mediados de 2021 (586,41), seguidas de Brasil (239,15), Colombia (201,24) y Argentina (200,90). Brasil (18,1 mill.), Argentina (4,3 mill.) y Colombia (4 mill.) también se situaron entre los diez primeros países del mundo por número de casos confirmados (Dong, Du and Gardner, 2020[2]). La pandemia ha afectado gravemente a adultos de todas las edades, incluidos los jóvenes (OPS, 2021[18]). Sin embargo, el número de fallecimientos confirmados por COVID-19 puede diferir del verdadero costo en vidas que ha tenido la pandemia, debido a la metodología utilizada para contabilizar las muertes y a que el COVID-19 ha influido en el número de fallecimientos que se deben a otras causas (Lopez-Calva, 2020[19]).

Las persistentes consecuencias de la pandemia podrían ser peores en el caso de los trabajadores informales y los hogares económicamente vulnerables de la región. Casi un 60% de los trabajadores de ALC realiza su actividad de manera informal (OCDE et al., 2020[20]). Muchos trabajan por cuenta propia en una economía de subsistencia, en la que viven al día y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza (OCDE et al., 2020[20]). Las personas que carecen de acceso a los sistemas de protección social deben seguir trabajando para ganarse la vida, independientemente de las medidas de distanciamiento social implantadas, lo que limita su capacidad para protegerse tanto ellos mismos como sus familias. Como se puede ver en el Gráfico 3.6, panel A, antes de la pandemia, aproximadamente el 25% del conjunto de la población de América Latina no tenía acceso a servicios sanitarios esenciales. Estas personas habrán visto su acceso aún más restringido a lo largo del año 2020. Además, en la región de ALC, casi un 8% de la población tiene 65 o más, más del 80% vive en entornos urbanos, y un 21% de la población urbana vive en suburbios, asentamientos informales o viviendas que no disponen de los servicios básicos (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]). La falta de acceso a información y atención sanitaria de calidad también es acuciante en zonas rurales remotas, donde vive un elevado porcentaje de la población indígena. Otra de las barreras que afecta al acceso de los pueblos indígenas a la atención sanitaria es la ausencia de un enfoque intercultural que incluya los idiomas y las costumbres nativas en la gestión y prestación de los servicios de salud (ONU, 2020[21]). Sin embargo, como puede verse en el Gráfico 3.6, panel B, de los seis países analizados sobre los que se dispone de datos, en el período 2010-2018, aproximadamente el 9% de los hogares incurrió en gastos sanitarios directos superiores al 10% de sus ingresos. Además, el Gráfico 3.8 destaca que la mayoría de los latinoamericanos no están satisfechos con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad, frente a un 69% de la población de la OCDE que, en promedio, sí está satisfecha. Estos factores, combinados, están acentuando los riesgos que plantea la pandemia. De cara al futuro, resolver la fragmentación, la mercantilización y la jerarquización de los sistemas sanitarios constituirá, por lo tanto, un desafío crucial para la región (CEPAL, 2020[22]).

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la labor tanto de prevención como de tratamiento de enfermedades crónicas y no transmisibles se ha visto enormemente perjudicada, lo cual significa que quienes conviven con tales dolencias corren un riesgo mucho mayor de que, en caso de contraer el COVID-19, les afecte de manera grave y mueran (CEPAL-OPS, 2020[14]; OMS, 2020[23]). Las estimaciones indican que un 21% de la población de América Latina presenta al menos un factor que incrementa su riesgo de que el coronavirus les afecte de manera más grave en caso de contagiarse (LSHTM CMMID COVID-19 working group, 2020[3]).[8] La obesidad es uno de esos factores de riesgo (Sattar, McInnes and McMurray, 2020[24]): en América Latina, un 60% de la población tiene sobrepeso y un 25% es obesa (véase la sección “Capital humano” del siguiente capítulo). Por otra parte, la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias en América Latina supera con creces el promedio de la OCDE, en particular en países analizados como Argentina, Brasil y Perú (OMS, 2018[25]). Durante la pandemia, también ha disminuido el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que son fundamentales para la salud de la mujer y pueden socavar los esfuerzos de los países por luchar contra la mortalidad materna (Banco Mundial, 2006[26]). Esta circunstancia podría dar lugar a una falta de atención en el caso de las enfermedades de transmisión sexual y, en consecuencia, a un aumento de los contagios (UNFPA, 2020[27]). Los embarazos no deseados también podrían convertirse en un problema de mayor importancia, en una región con la segunda mayor tasa de embarazos en adolescentes del mundo (se calcula que es de 66,5 nacimientos por 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años), después del África Subsahariana (OPS/FPNU/UNICEF, 2017[28]). Por último, la elevada proporción de adultos de avanzada edad que vive con generaciones más jóvenes en esta región (un 52% vive con uno o más hijos (ONU-DESA, 2017[29])) es un factor que aumenta el riesgo de contagio.

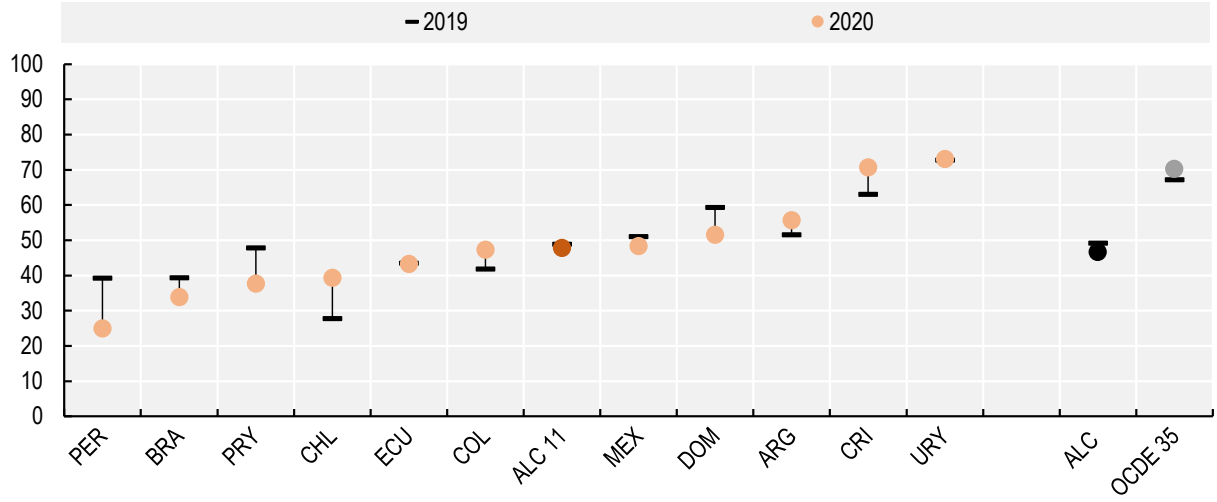
Si bien se ha prestado una gran atención a los efectos de la pandemia de COVID-19 en las patologías médicas físicas, también existe preocupación por su efecto en la salud mental, que puede manifestarse en forma de miedo, preocupación o inquietud por el contagio, entre la población en general y en grupos específicos. Por ejemplo, en un estudio global de YouGov, 1 de cada 2 mexicanos aseguró que la pandemia había incidido negativamente en su salud mental (51%), y casi 1 de cada 4 indicó sufrir al

menos un problema de salud mental (22%) (YouGov, 2020[30]). En términos más generales, el 27% de los jóvenes latinoamericanos (de 13 a 29 años) aseguró haber sentido ansiedad y el 15%, depresión en los siete días previos, durante los primeros meses de la pandemia (UNICEF, 2020[31]). Es probable que las medidas de confinamiento hayan incrementado la soledad de las personas, el abuso de sustancias adictivas y las autolesiones (OMS, 2020[32]). Por lo tanto, resulta esencial incluir la salud mental y el apoyo psicológico en los planes nacionales de respuesta a la pandemia. En una encuesta realizada a participantes designados en 29 países del continente americano (27 de los cuales pertenecen a América Latina y el Caribe), un 93% de los países manifestó que dichos sistemas de apoyo sí estaban incluidos en sus planes de respuesta, pero solo un 7% (2 países) garantizaba su plena financiación en el presupuesto gubernamental, mientras que un 31% (9 países) afirmaron carecer de financiación para las actividades relacionadas con la salud mental (PAHO, 2020[33]). Un país de la región que sí ha adoptado medidas es Chile. En 2018, era el que menor porcentaje del gasto sanitario asignaba a la salud mental de todos los países de la OCDE, un 2,1% del gasto público en sanidad. Sin embargo, en febrero de 2021 anunció un aumento del 310% en el presupuesto para salud mental con respecto al presupuesto anterior (Ministerio de Salud, 2021[34]; OCDE, 2021[35]). De cara al futuro, resultará crucial conocer en qué medida están los países prestando los servicios y aplicando las políticas pertinentes para conseguir buenos resultados en materia de salud mental de acuerdo con el Mental Health System Performance Benchmark de la OCDE, por ejemplo (OCDE, 2021[35]).

Por último, los datos de la Encuesta Gallup Mundial de 2020 muestran que durante el primer año de la pandemia de COVID-19, la satisfacción con la atención sanitaria se vio afectada de diferentes maneras en el grupo de países analizados en comparación con 2019. En promedio, el nivel de satisfacción se mantuvo relativamente estable en el 48% (Gráfico 3.9). No obstante, unos pocos países registraron descensos claros en el porcentaje de personas satisfechas con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que viven: algunos de los descensos más notables se produjeron en Brasil (-6 puntos porcentuales), la República Dominicana (-8), Paraguay (-10) y Perú (-14). Por el contrario, la proporción aumentó en Argentina (en 4 puntos porcentuales), Colombia (+5 puntos), Costa Rica (+8) y Chile (+12). En general, estas tendencias ampliaron las disparidades entre los países analizados, pues el nivel de satisfacción con la atención sanitaria de Costa Rica (71%) prácticamente triplica el de Perú (25%). Se facilitará un análisis más amplio de la satisfacción con la atención sanitaria en esta región después de la pandemia en (OCDE, a continuación[36]).

Gráfico 3.9. Entre 2019 y 2020, los cambios en la satisfacción con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad presentaron considerables variaciones entre los diferentes países analizados

Proporción de la población satisfecha con la disponibilidad de servicios de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que vive, porcentaje, 2019 y 2020



Nota: Entre los países del grupo analizado, el modo de recabar los datos varió entre 2019 y 2020 (se pasó de entrevistas personales a telefónicas). Como consecuencia, algunos países pueden haber modificado el conjunto de personas consultadas de maneras que no se pueden ajustar usando técnicas de ponderación (Srinivasan and Clifton, 2020[37]; Helliwell et al., 2021[38]). Se dispone de más de 500 observaciones con respecto a todos los países. Las fechas de recolección de datos de 2020 son las siguientes: 7 sep. – 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. – 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. – 16 nov. De 2020 en Chile; 21 ago. – 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 – 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 24 sep. – 23 oct. de 2020 en la República Dominicana; 26 ago. – 23 oct. de 2020 en Ecuador; 08 sep. – 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. - 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 – 6 ene. de 2021 en Perú; y 24 sep. – 30 nov. de 2020 en Uruguay. Los países se clasifican según los niveles de 2020, en orden ascendente (de izquierda a derecha). El promedio regional de ALC comprende 16 países, incluidos los 11 analizados. OCDE 35 excluye la República Checa y Luxemburgo, puesto que no hay datos disponibles con respecto a ambos años.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx

StatLink https://stat.link/43y0gl

Aspectos para el desarrollo estadístico

La frecuencia y puntualidad con la que se publiquen los datos sobre esperanza de vida, mortalidad y comorbilidad son fundamentales para conocer las tendencias en materia de salud de un país, aunque las prácticas difieren entre los distintos países de América Latina. Los datos tanto sobre esperanza de vida como sobre mortalidad se basan en sistemas de registros vitales que en muchos países en desarrollo están incompletos, pues un tercio de los países de América Latina carece de datos recientes. Las defunciones no certificadas son habituales en Perú y también abundan en Colombia y Ecuador (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]). Además, pese a encontrarse disponibles datos administrativos sobre patologías concretas como el cáncer y la diabetes, no abordan la comorbilidad (personas afectadas por diferentes patologías). Sin embargo, esta cuestión es esencial para conocer la prevalencia de diferentes enfermedades entre la población y facilitar información sobre la calidad de vida de las personas en relación con la salud (OCDE, 2020[39]).

La medida de la esperanza de vida que se utiliza en este capítulo hace referencia a la duración de la vida, independientemente del estado de salud del que se goce durante esos años. Existen medidas de la esperanza de vida “con salud” (denominada también “esperanza de vida sin discapacidades” pero todavía

no son comparables a nivel internacional (salvo en el caso de Europa). Por otra parte, aunque el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad ha recomendado medidas de la capacidad funcional de las personas (es decir, de su capacidad para realizar actividades cotidianas) y existen directrices internacionales al respecto, no se encuentran disponibles medidas armonizadas relativas a esta región (Naciones Unidas, 2005[40]; Washington Group on Disability Statistics, 2016[41]). Este ámbito de desarrollo estadístico es enormemente pertinente para los países de América Latina, puesto que estimaciones anteriores indican que cerca de 66 millones de personas de esta región conviven con una discapacidad, como mínimo (CEPAL, 2013[42]).

Las medidas comparables de los resultados en materia de salud mental son escasas en todo el mundo, también en América Latina. Identificar medidas comparables al nivel de la población (en oposición a las personas diagnosticadas o tratadas por profesionales médicos) sigue planteando un reto. Además, el estigma asociado a la salud mental puede generar otras dificultades, como el que no se facilite información al respecto, lo que podría repercutir en la comparabilidad entre países o en la interpretación de los cambios en las tasas de prevalencia a lo largo del tiempo (OCDE, 2020[39]). Los datos sobre suicidios, entre ellos los incluidos en el Gráfico 3.5, no reflejan con exactitud el alcance de este fenómeno, además de que no tienen en cuenta los intentos de suicido, que suelen constituir una cifra mucho más elevada. Las estimaciones indican que por cada adulto que se suicida en el mundo, puede haber más de 20 que intentan poner fin a su vida (OMS, 2021[43]). Asimismo, cuando los datos sobre intentos de suicido son facilitados por los propios afectados a través de encuestas, podrían presentar problemas considerables, por no reflejar la situación real y no resultar comparables, y puede presumirse que estos problemas se presentarán en mayor medida que en el caso de otros síntomas de trauma psicológico.

Por último, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se han elaborado estadísticas internacionales a un ritmo que no tiene precedentes. No obstante, las divergencias en cuanto a comunicación de datos estadísticos sobre mortalidad (mencionados anteriormente) resultan especialmente problemáticos para valorar la repercusión de la pandemia en la salud en América Latina. Pese a que la mayoría de los países han publicado estadísticas de mortalidad relacionadas con el COVID-19, los modelos de certificado de defunción varían entre unos y otros países, y las prácticas para realizar pruebas de detección del virus también son dispares. Como consecuencia, en algunas jurisdicciones se podrían clasificar algunos fallecimientos como decesos relacionados con la pandemia y en otras, no. Es más, algunos pacientes pueden haber muerto por los problemas que la pandemia ocasionó en los sistemas de atención sanitaria y no por el virus en sí. La comparabilidad de las estadísticas de mortalidad relacionadas con el COVID-19 a nivel internacional se ve dificultada por las diferencias en las prácticas de codificación e información, lo cual subraya la importancia de otras medidas, como que se comuniquen datos sobre el número de fallecimientos por todas las causas con una frecuencia elevada, a partir de los cuales se podrían extraer datos estadísticos sobre el exceso de mortandad (Morgan et al., 2020[44]). Comparando las cifras totales con el nivel de fallecimientos previsto en un país determinado de acuerdo con el mismo período de años anteriores, las estadísticas sobre exceso de mortandad pueden ofrecer una indicación de la repercusión global de la pandemia. Esto se puede conseguir teniendo en cuenta no solo los fallecimientos atribuidos directamente al COVID-19, sino también aquellos que pueden no haberse contado o que puedan estar indirectamente vinculados con la enfermedad, como los decesos provocados por el retraso o abandono de tratamientos debido a una sobrecarga del sistema de salud (Morgan et al., 2020[44]).

De cara al futuro, aprovechar las soluciones digitales y los datos para detectar, prevenir y responder mejor a la crisis sanitaria y económica, y para recuperarse de ella, constituirá un desafío principal para esta región. Además, será esencial gestionar de manera suficiente los riesgos que plantea desviar recursos para herramientas digitales ineficaces, el empeoramiento de las desigualdades y la vulneración de la privacidad, tanto durante el brote como después de este (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]).

Conocimientos y competencias

La educación y las competencias aportan una amplia serie de ventajas a la sociedad, entre otras, un aumento del crecimiento económico, una mayor cohesión social y un descenso de la delincuencia (OCDE, 2011[45]). A nivel personal, recibir una buena educación posee un valor intrínseco y responde a la necesidad básica de aprender y adaptarse a un entorno cambiante. Los conocimientos y las competencias tienen una influencia positiva en las condiciones materiales de vida, puesto que a mayor nivel educativo, mayores ingresos y mayor capacidad para obtener empleo, mejor estado de salud y más probabilidades de trabajar en un entorno que presente menos riesgos para la salud. Las personas que tienen un nivel de estudios más elevado también tienen más probabilidades de recibir mayor apoyo de amigos y familiares, y están más satisfechos con su vida en términos generales (OCDE, 2017[46]). Por último, la educación ofrece a las personas los conocimientos necesarios para disfrutar de algunas actividades de ocio, como la lectura y la participación en eventos culturales y, lo que es más importante, las competencias para integrarse plenamente en la sociedad, lo que promueve la conciencia cívica y la participación política (OCDE, 2011[45]; OCDE, 2016[47]).

En América Latina, el logro educativo ha mejorado en las dos últimas décadas, pero algunos indicadores muestran que la región está a la zaga en otras esferas, así como que persisten las disparidades tanto dentro de los países como entre estos. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE son un indicio del progreso alcanzado en todos los países analizados participantes, aunque las competencias de los alumnos de esta región siguen, en promedio, considerablemente por debajo de las adquiridas en países de la OCDE. El aumento en el porcentaje de alumnos con resultados deficientes de esta región (por debajo del Nivel 2), en particular entre los alumnos social y económicamente desfavorecidos, pone también de manifiesto dicha situación. Los datos contrastados muestran que las competencias de los adultos también han mejorado, como certifica la actual tasa de alfabetización, del 95%. Por último, la satisfacción con la educación varía enormemente entre unos países latinoamericanos y otros, incluidos los analizados, pues ha mejorado en algunos casos pero empeorado en otros.

La pandemia ha alterado el ciclo de aprendizaje de cerca de 154 millones de estudiantes en esta región, ya que la mayoría de centros escolares permanecieron cerrados en un empeño por contener el COVID-19 (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[48]; OCDE, a continuación[36]). Esta medida podría interrumpir el avance de los alumnos en cuanto a adquisición de competencias que se había registrado en el grupo de países analizados, además de aumentar las disparidades entre países y acentuar las desigualdades dentro de estos.

Logro educativo

Aumentar el logro educativo ha sido un objetivo importante tanto de la OCDE como de los países analizados. En la actualidad, se considera que la enseñanza secundaria de ciclo superior es el nivel mínimo de cualificación para la correcta integración en la sociedad y los mercados de trabajo (OCDE, 2017[49]). En promedio, la proporción de la población de 25 años en adelante que ha completado como mínimo la enseñanza secundaria de ciclo superior es 26 puntos porcentuales menor en el grupo de países analizados (46%) que en la OCDE (72%). Entre estos países, las disparidades son enormes: en Uruguay, solo el 30% de la población ha terminado la enseñanza secundaria de ciclo superior, una cifra que es prácticamente la mitad de la registrada en Chile (59%) (Gráfico 3.10, panel A).

Las tendencias en cuanto a logro educativo en la enseñanza secundaria de ciclo superior han sido positivas. Debido a las amplias mejoras observadas en seis países (en los que el logro educativo desde 2000 ha aumentado 15 puntos porcentuales o más), el promedio del grupo de países analizados ha aumentado 13 puntos porcentuales. A lo largo de este período, las tasas de logro educativo han mejorado en todos los países analizados, aunque algunos van a la zaga. Por ejemplo, tanto Argentina como Uruguay

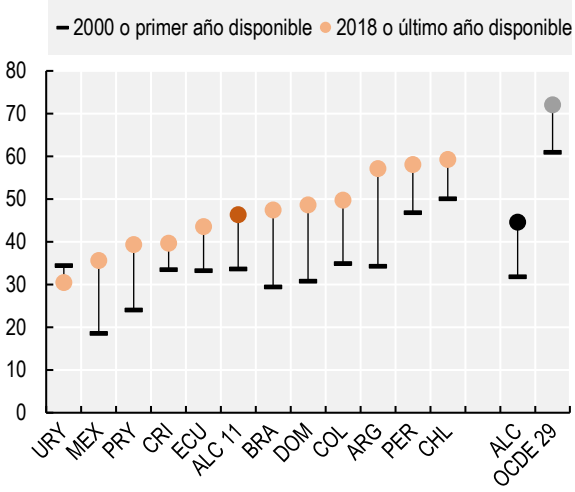
mostraban prácticamente la misma proporción de la población de 25 años o más que había terminado al menos una titulación de enseñanza secundaria de ciclo superior en los primeros años de este siglo. Sin embargo, desde entonces, el logro educativo en enseñanza secundaria de ciclo superior ha aumentado 23 puntos porcentuales en Argentina y bajado cuatro en Uruguay (Gráfico 3.10, panel A).

Los estudios universitarios brindan más oportunidades a la población. Por ejemplo, en los países de la OCDE, las probabilidades de conseguir un empleo son 10 puntos porcentuales más elevadas en el caso de los adultos con un grado universitario. Además, su esperanza de vida es superior a la de las personas con un bajo nivel educativo (8 años más en el caso de los hombres y 5 años más en el caso de las mujeres (Murtin et al., 2017[50]).[9] Las personas con un grado universitario también tienen menos probabilidades de sufrir depresión que sus homólogas con un nivel de estudios inferior (OCDE, 2019[51]). Asimismo, los alumnos que terminan los estudios universitarios llegan a cobrar salarios más altos: en Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, la remuneración anual relativa de los trabajadores de entre 25 y 64 años, a tiempo completo, con estudios universitarios duplica con creces la de aquellos que poseen un título de enseñanza secundaria de ciclo superior (frente al 54% en promedio en los países de la OCDE y los países asociados) (OCDE, 2020[52]).[10]

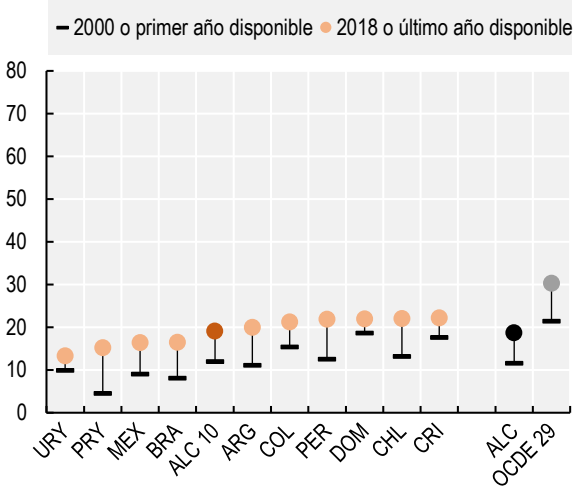
En seis países analizados, aproximadamente un 20% de los adultos de 25 años o más posee estudios universitarios, frente a un 30% en los países de la OCDE sobre los que se dispone de datos (Gráfico 3.10, panel B). Las disparidades entre países son ligeramente inferiores a las observadas en el caso de la enseñanza secundaria de ciclo superior, aunque los niveles generales son mucho más bajos: 9 puntos porcentuales separan a Uruguay (13%) de Costa Rica (22%). Al igual que ocurre con las tendencias en cuanto a logro en la enseñanza secundaria de ciclo superior, desde el año 2000, tanto el promedio de los países analizados como el promedio regional de América Latina han experimentado amplios avances en la proporción de la población que obtiene un título universitario, al alcanzar en promedio el 19% (un aumento de 7 puntos porcentuales en ambos casos). En Paraguay, se registraron avances importantes, ya que esta proporción aumentó 11 puntos porcentuales entre 2005 y 2018, pero el nivel se mantiene ligeramente por debajo del 15%.

Gráfico 3.10. Pese a las mejoras en cuanto a logro educativo, menos de la mitad de los adultos de 25 años o más ha terminado la enseñanza secundaria de ciclo superior en el grupo de países analizados

Panel A: Proporción de la población de 25 años o más que ha terminado, como mínimo, la enseñanza secundaria de ciclo superior, porcentaje



Panel B: Proporción de la población de 25 años o más que ha terminado, como mínimo, el ciclo corto de los estudios universitarios, porcentaje



Nota: Las encuestas a trabajadores son la fuente de datos más habitual sobre logro educativo. Los sondeos internacionales por muestreo, tales como las Encuestas Demográficas y de Salud (EDS, http://dhsprogram.com) o las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerado (MICS, http://mics.unicef.org), son otra de las fuentes utilizadas. Estas encuestas están diseñadas para satisfacer necesidades en materia de datos internacionales establecidas de mutuo acuerdo, además de facilitar datos para fines de formulación de políticas públicas nacionales. Los censos de población son otra importante fuente de información sobre logro educativo, pero se llevan a cabo con menor frecuencia que las encuestas a los trabajadores u otras encuestas por muestreo, ya que suelen realizarse cada diez años. Los datos sobre logro educativo recabados por medio de encuestas o censos se clasifican habitualmente de acuerdo con listados anteriores de niveles CINE (UIS, 2021[53]). En el panel A, la enseñanza secundaria de ciclo superior (CINE 3) se caracteriza por una mayor especialización que la enseñanza secundaria de ciclo inferior. Los programas que se ofrecen se diferencian por orientación, general o profesional, y su duración habitual es de tres años (OCDE, 2020[54]). El último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y Ecuador, y 2016 en el caso de la República Dominicana. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Argentina; 2003 en el de Paraguay y Uruguay; 2004 en el de Brasil, Chile, Colombia y Perú; y 2007 en el caso de Costa Rica, la República Dominicana y Ecuador. El promedio regional de ALC comprende 14 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento. En el panel B, la educación universitaria de ciclo corto (CINE 5) se diseña normalmente con el fin de dotar a los participantes de conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Por lo general, tienen un carácter práctico, específico de cada ocupación, y preparan a los alumnos para acceder directamente al mercado de trabajo. También pueden ofrecer una vía de acceso a otros programas de enseñanza universitaria (niveles CINE 6 o 7). La duración mínima es de 2 años (OCDE, 2020[54]). En este panel, no se incluye a Ecuador por falta de datos disponibles. El último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y 2016, en el de la República Dominicana. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Argentina; 2003 en el de Uruguay; 2004 en el de Brasil, Chile, Colombia y Perú; 2005 en el caso de Paraguay; y 2007 en el de Costa Rica y la República Dominicana. El promedio regional de ALC comprende 13 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. En OCDE 29 no se incluye a Islandia, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Suiza y el Reino Unido, debido a que sus series de tiempo están incompletas.
Fuente: UNESCO, base de datos UIS, http://data.uis.unesco.org/?lang=en&SubSessionId=c135923f-6971-48b9-8d43-e7f5cdfe39ce&themetreeid=-200

StatLink https://stat.link/dvgz0r

Competencias cognitivas

Pese a que el logro educativo es una medida de la cantidad de educación recibida, la calidad de las competencias adquiridas durante los años de escolarización también incide de forma importante en las posibilidades que las personas tienen en su vida. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE evalúa los conocimientos y las capacidades de los alumnos en lectura, matemáticas y ciencias, hacia el final del período de escolarización obligatoria (a los 15 años). Sus resultados se han utilizado para evaluar la calidad de los resultados de aprendizaje alcanzados por alumnos de todo el mundo, así como la forma en que dichos resultados difieren entre estudiantes con distintas características. De este modo, los educadores y los responsables de las políticas públicas pueden aprender a partir de las normas y prácticas aplicadas en otros países (OCDE, 2019[55]).

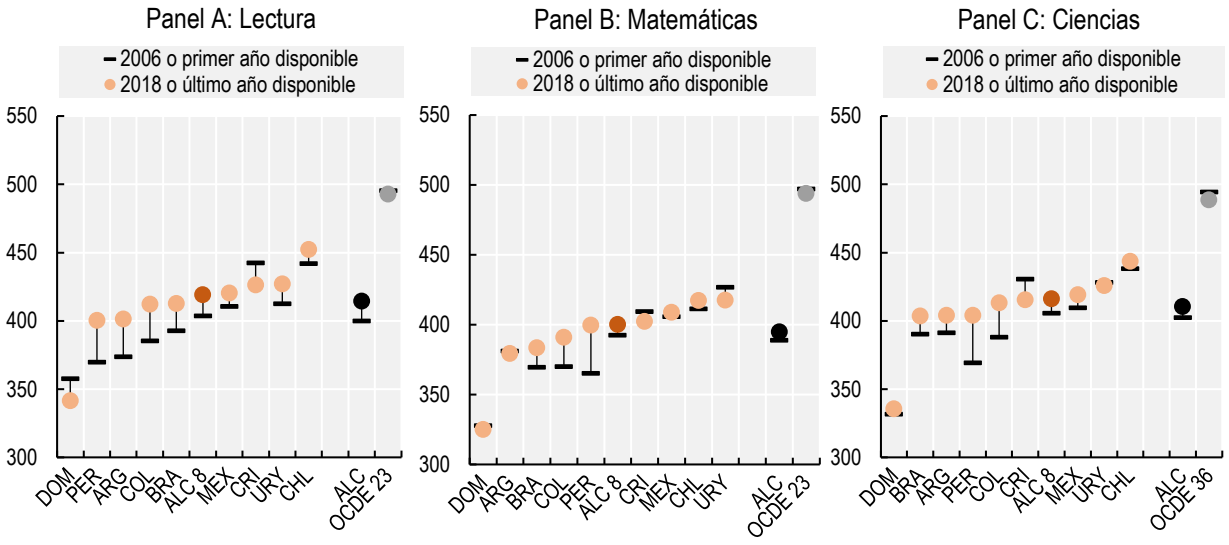
De los ocho países del grupo analizado que participaron en PISA 2018, los estudiantes de 15 años de Chile, Uruguay, México y Costa Rica alcanzaron normalmente las puntuaciones máximas en competencias cognitivas en las tres materias. Los resultados de República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil y Colombia, por su parte, se situaron por debajo del promedio del grupo de países analizados (Gráfico 3.11). Pese a la mejora general, los estudiantes de 15 años de América Latina todavía no han adquirido las competencias cognitivas de los países de la OCDE. Las diferencias en cuanto a desempeño son enormes, pues la República Dominicana se queda considerablemente rezagada respecto a otros países analizados (p. ej., las puntuaciones PISA relativas a competencia científica son casi un 25% más bajas que las de Chile, el país con mejores resultados).

En los países analizados, las tendencias de las puntuaciones PISA son positivas, en términos generales, en las tres materias (Gráfico 3.11). En promedio, la mejora de las puntuaciones ha sido mayor en el caso de la competencia lectora (un aumento de 16 puntos) y menor en el caso de la competencia matemática (+8 puntos). El mayor avance aproximadamente desde 2006 se ha registrado en Perú donde, en promedio, los estudiantes de 15 años han mejorado sus calificaciones 31 puntos en competencia lectora y 35 puntos en competencia matemática y científica —pero donde, sin embargo, las calificaciones se

mantienen por debajo del promedio ALC 8—. Los estudiantes de Brasil y Colombia mejoraron considerablemente en los tres tipos de competencias. En Costa Rica, los resultados de aprendizaje descendieron en las últimas dos décadas, en particular en relación con la competencia lectora y científica —en la República Dominicana se registró una tendencia similar con respecto a la competencia lectora y, en menor medida, en Uruguay con respecto a la competencia matemática—.[11]

Gráfico 3.11. En la mayoría de los países analizados, el desempeño de los estudiantes de 15 años en las pruebas normalizadas sobre competencia lectora, matemática y científica ha mejorado

Puntuaciones PISA medias



Nota: PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, que mide la capacidad de los estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos y competencias en lectura, matemáticas y ciencias a la resolución de problemas de la vida real. El promedio ALC 8 excluye a Ecuador y Paraguay por falta de datos disponibles, así como a la República Dominicana, cuyos últimos datos disponibles son de 2015. El promedio regional de ALC comprende 9 países, incluidos los 8 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. OCDE 23 excluye a Austria, Chile, Colombia, Estonia, Israel, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, la República Eslovaca, Eslovenia, España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos, y OCDE 36 excluye a España.

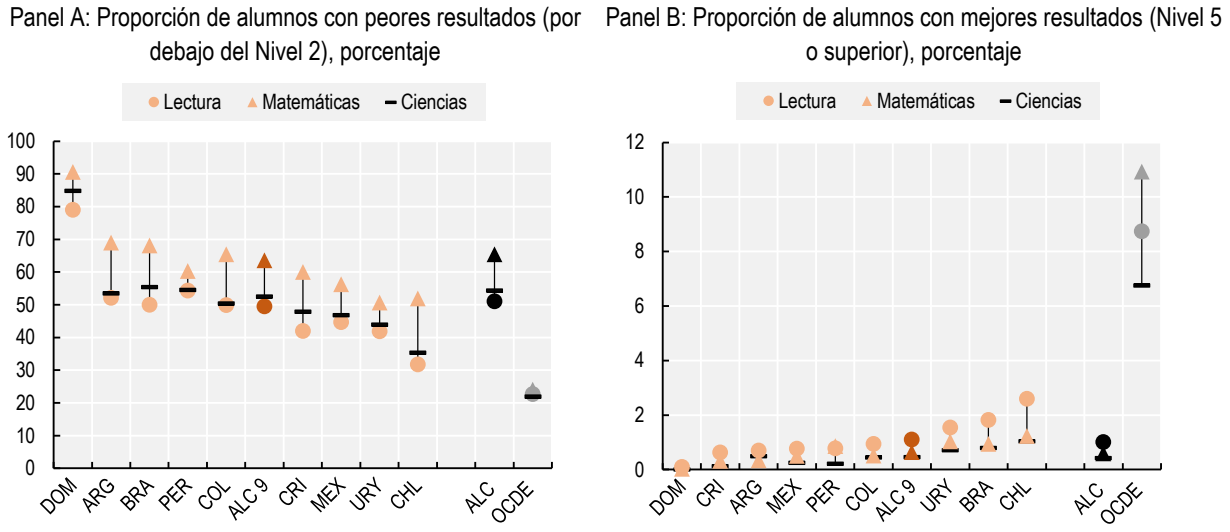
Fuente: OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do, PISA, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

StatLink https://stat.link/qh5cw4

El Gráfico 3.12 muestra la proporción de estudiantes de 15 años con mejores y peores resultados en la región de ALC.[12] Un dato sorprendente es que, en 7 de los 10 países de América Latina que participan en el PISA, menos del 1% de los alumnos alcanza el máximo nivel de competencia (Nivel 5 o superior) en matemáticas, lectura y ciencias.[13] En Chile, que presenta la mayor proporción de estudiantes que alcanza el Nivel 5 o superior en las tres materias, esta cifra fue tan solo del 3% en lectura, del 1% en matemáticas y del 1% en ciencias (frente al 9%, 11% y 7% del promedio de la OCDE, respectivamente) (Gráfico 3.12, panel B). En el PISA, se considera que el Nivel 2 es el nivel básico de competencia necesario para participar en la sociedad de forma productiva.[14] Dentro del grupo de países analizados, en promedio, un 50% de los estudiantes no alcanzó el Nivel 2 en lectura, un 64% en matemáticas y un 53% en ciencias (Gráfico 3.12, panel A). En la República Dominicana, al menos 8 de cada 10 estudiantes obtuvieron resultados inferiores al Nivel 2 en las tres materias. Esto plantea un problema importante para los países de América Latina que se encuentran en proceso de transición hacia economías basadas en el conocimiento, en las que las personas tienen que innovar, adaptarse y aprovechar el potencial de un capital humano avanzado (OCDE/CAF/ONU CEPAL, 2016[56]).

Gráfico 3.12. Un gran porcentaje de estudiantes latinoamericanos no alcanza el nivel mínimo de competencia necesario para participar de forma productiva en la sociedad

Proporción de estudiantes con peores y mejores resultados, PISA 2018, porcentaje



Nota: El promedio ALC 9 excluye a Ecuador y Paraguay, que no participaron en el estudio PISA. España no está incluida en el promedio de la OCDE correspondiente a Lectura por falta de datos comparables. El promedio regional de ALC comprende 10 países, incluidos los 9 analizados sobre los cuales hay datos disponibles.

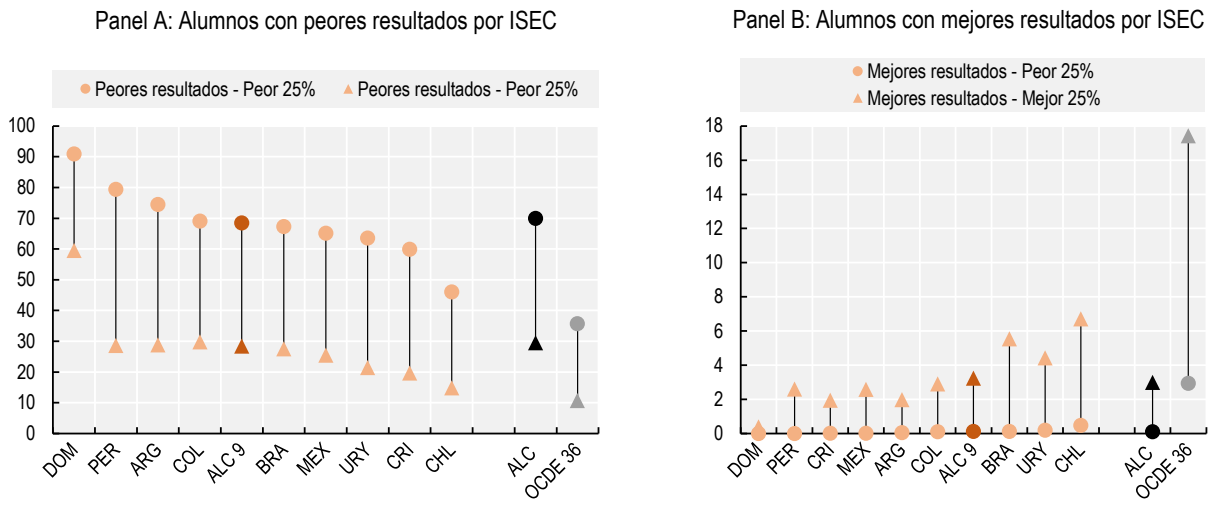
Fuente: OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do, PISA, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

StatLink https://stat.link/d7m0sg

Cuando se compara la competencia de los estudiantes de acuerdo con su condición socioeconómica, se observan profundas desigualdades. Los datos del PISA se pueden desglosar de acuerdo con el Índice de Estatus Social, Económico y Cultural (ISEC), en el cual el cuarto superior de puntuaciones representa a los estudiantes más pudientes y el cuarto inferior, a los más desfavorecidos. Este índice es una puntuación compuesta formada por indicadores como la educación de los padres, la profesión de más alto nivel de los padres y las posesiones en el hogar, por ejemplo, los libros que se tienen en casa (OCDE, 2017[57]). Las diferencias en cuanto a rendimiento de los alumnos son especialmente pronunciadas cuando se consideran los niveles máximos de competencia (Gráfico 3.13). En 8 de cada 9 países del grupo analizado sobre los que había datos disponibles, menos de un 0,5% de los estudiantes desfavorecidos alcanzaba las máximas competencias en lectura, salvo en Chile, donde igualmente era 6 veces inferior al promedio de la OCDE (Gráfico 3.13, panel B). En los países del grupo analizado, en promedio, el porcentaje de alumnos más pudientes que alcanzaba el Nivel 5 en lectura era 30 veces superior al porcentaje de alumnos más desfavorecidos que alcanzaba dicho nivel, mientras que en la OCDE ese porcentaje era 6 veces superior. Del mismo modo, en los países analizados, el porcentaje de alumnos desfavorecidos con peores resultados duplicaba con creces el de estudiantes de entornos más ricos con peores resultados, en promedio (un 68% frente al 28% respectivamente), mientras que en la OCDE lo triplicaba (un 36% frente a un 11%) (Gráfico 3.13, panel A).

Gráfico 3.13. En promedio, en los países analizados, los estudiantes desfavorecidos tienen más del doble de posibilidades de obtener malos resultados en lectura que sus homólogos de entornos ricos, y 30 veces menos posibilidades de situarse entre los alumnos con mejores resultados

Peores y mejores resultados en lectura, según la condición socioeconómica de los estudiantes, PISA 2018, porcentaje



Nota: ISEC se refiere al Índice de Estatus Social, Económico y Cultural. Este índice se obtiene a partir de diferentes variables relacionadas con el contexto familiar de los estudiantes: estudios de los padres, profesiones de los padres, una serie de posesiones existentes en el hogar que pueden considerarse representativas del patrimonio material y el número de libros y otros recursos educativos de los que disponen en casa (OCDE, 2016[58]). Los estudiantes con "mejores resultados" han alcanzado un Nivel 5 o superior, mientras que los "peores resultados" corresponden a quienes han alcanzado una puntuación inferior al Nivel 2 en competencia lectora. El promedio ALC 9 excluye a Ecuador y Paraguay, que no participaron en el estudio PISA. El promedio regional de ALC comprende 10 países, incluidos los 9 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. España no está incluida en el promedio de la OCDE en ninguno de los paneles por falta de datos comparables.
Fuente: OCDE (2019), *PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed*, PISA, Publicación de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en

StatLink https://stat.link/dha1nz

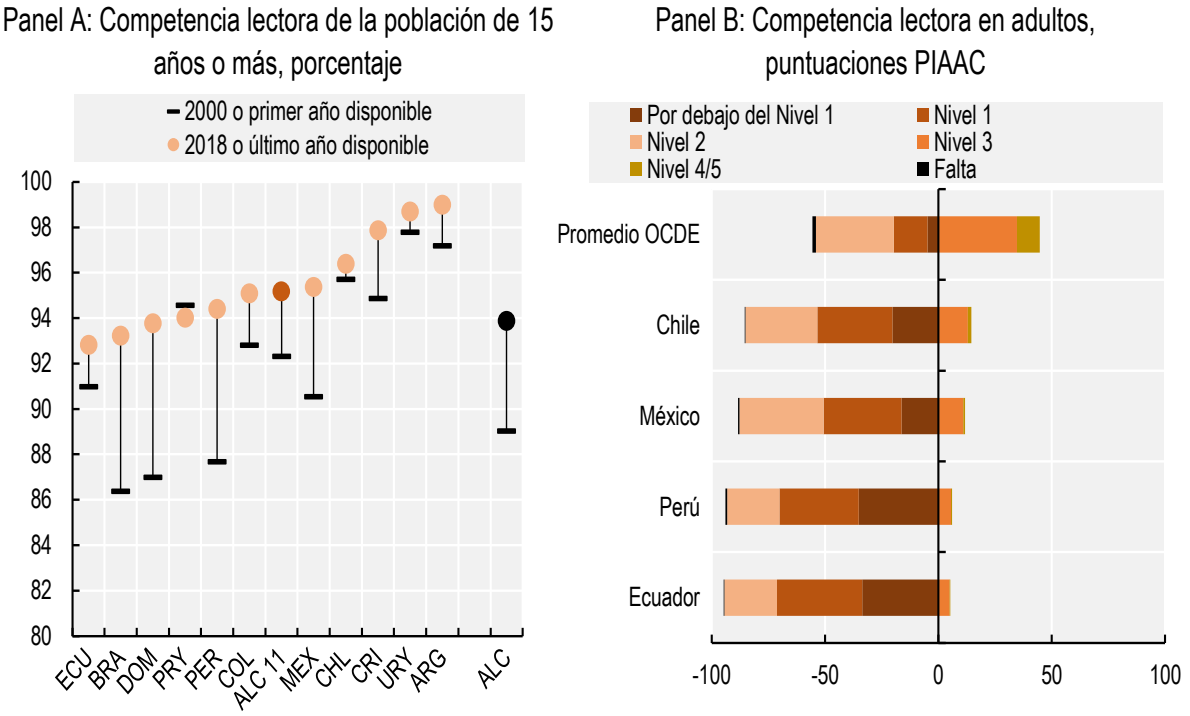
La escolarización es solo uno de los elementos de la adquisición de competencias cognitivas por parte de las personas (Hanushek, 2015[59]). Entre los diferentes países y dentro de estos, las personas que han alcanzado niveles educativos similares presentan diferentes niveles de competencias cuando alcanzan la edad adulta. Es más, la adquisición de competencias no depende exclusivamente de haber obtenido un determinado certificado o título, sino de otros factores, como la calidad de los sistemas educativos, los contextos socioeconómicos, las redes, las familias y diversas experiencias vitales (OCDE/CAF/ONU CEPAL, 2016[56]). La disponibilidad de medidas de las competencias cognitivas permite dibujar un panorama más nítido sobre lo que han aprendido a hacer los adultos a lo largo de sus años de escolarización en América Latina.

Hay dos formas diferentes de evaluar las competencias cognitivas de los adultos. La primera es a través de la tasa de alfabetización, definida como el porcentaje de personas de 15 años o más que saben leer y escribir una breve exposición sencilla sobre su vida diaria.[15] Se mide por medio del censo nacional y las encuestas a hogares, y generalmente se considera un indicador de resultados para evaluar el logro educativo. También se emplea como medida representativa de la efectividad de los sistemas educativos: una tasa de alfabetización alta indica que el sistema educativo ha dotado a un amplio porcentaje de la población de las competencias y los conocimientos básicos (Banco Mundial, 2020[60]).

De acuerdo con esta medida, cerca del 95% de la población adulta de los países analizados sabe leer y escribir, un porcentaje ligeramente superior al promedio de la región de América Latina en su conjunto (Gráfico 3.14, panel A). La tasa de alfabetización alcanzó el 99% en Argentina en 2018 y el 93% en Ecuador (en 2017). En todos los países, la tendencia desde 2000 ha sido principalmente positiva. En Brasil, Costa Rica, la República Dominicana, México y Perú, la tasa de alfabetización aumentó 3 puntos porcentuales o más, lo que le permitió equipararse a otros países analizados.

El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) de la OCDE ofrece una evaluación más detallada de los conocimientos y las competencias de los adultos de entre 16 y 65 años. Una parte central de este programa es la Evaluación de Competencias de Adultos, que ofrece una evaluación mediante calificaciones de la comprensión lectora, la capacidad de cálculo y la capacidad para resolver problemas. La escala de competencias de la PIAAC en materia de *capacidad lectora* se divide en seis niveles y se refiere a la capacidad de las personas para entender, evaluar, usar y manejar textos escritos (es decir, no tiene en cuenta la comprensión ni la producción de la lengua oral ni las competencias en materia de escritura). Las tareas por debajo del Nivel 1 (que corresponden a una puntuación inferior a 176 puntos) requieren saber leer un texto breve sobre un tema conocido y localizar en él información concreta y sencilla (OCDE, 2016[61]). El Nivel 5 (que refleja una puntuación igual o superior a 376 puntos de 500) (OCDE, 2019[62]) exige saber integrar información en textos variados y densos, construir síntesis de ideas similares y contradictorias o evaluar argumentos basados en datos empíricos (OCDE, 2013[63]). En los cuatro países del grupo analizado que participaron en la segunda y tercera edición de la PIAAC (realizadas en 2014-2015 y en 2017), menos de 1 de cada 8 adultos alcanzó el Nivel 3 o superior en Ecuador (5%), México (12%) y Perú (6%). En estos tres últimos países, más de la mitad de la población se situó en el Nivel 1 o menos: un 71% en Ecuador, un 51% en México y un 70% en Perú. Chile registró también un porcentaje relativamente elevado de adultos con resultados deficientes (53%). Por el contrario, en el promedio de la OCDE, prácticamente la mitad de todos los adultos (45%) se situaron en los tres niveles más altos (Nivel 3, 4 o 5) (Gráfico 3.14, panel B).

Gráfico 3.14. La tasa de competencia lectora en adultos ha mejorado en la mayoría de los países desde 2000

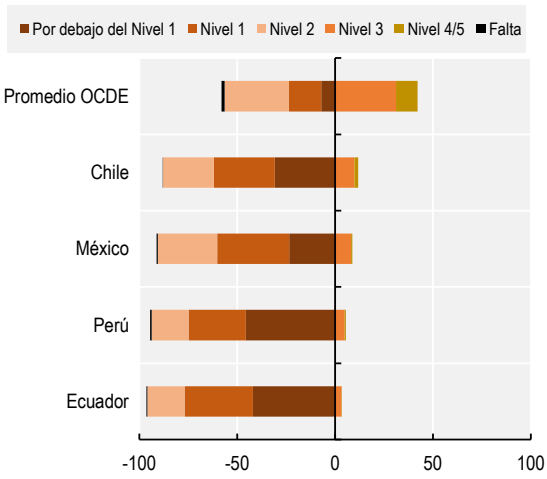


Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC lo calcula la CEPAL. En el panel B, los datos se refieren al período 2014-2015 en el caso de Chile y 2017 en el de Ecuador, México y Chile. Los adultos de la categoría "Falta" no pudieron proporcionar suficiente información sobre su contexto para valorar su competencia debido a dificultades lingüísticas o problemas de aprendizaje o psíquicos (denominados ausencia de respuesta relacionada con la alfabetización). Los países y las economías se clasifican en orden descendente según los porcentajes combinados de adultos que se situaron en los Niveles 3 y 4/5.
Fuente: CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2236&idioma=i (panel A) y Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015, 2018), https://www.oecd.org/skills/piaac/ (panel B)

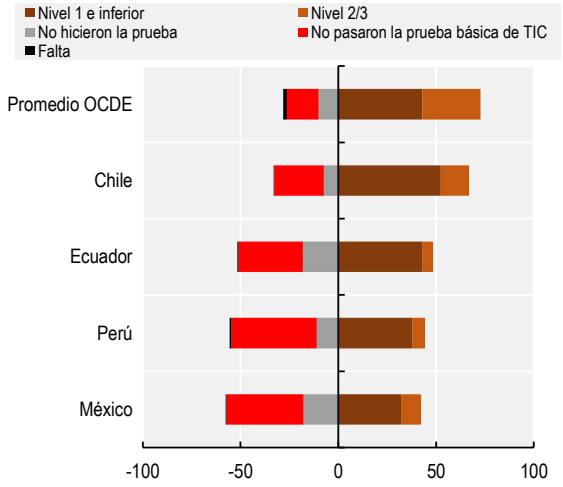
StatLink https://stat.link/re0bf3

Gráfico 3.15. En los países de América Latina sobre los que existen datos, los niveles de competencia en capacidad de cálculo y resolución de problemas en entornos tecnológicos de los adultos siguen siendo bajos

Panel A: Capacidad de cálculo en adultos (2017 o último año disponible)



Panel B: Capacidad de resolución de problemas en entornos tecnológicos en adultos (2017 o último año disponible)



Nota: En ambos paneles, los datos se refieren al período 2014-2015 en el caso de Chile y a 2017 en el de Ecuador, México y Chile. Los adultos de la categoría "Falta" no pudieron proporcionar suficiente información sobre su contexto para valorar su competencia debido a dificultades lingüísticas o problemas de aprendizaje o psíquicos (denominados ausencia de respuesta relacionada con la alfabetización). En el panel B, la categoría "Falta" también incluye a los adultos que no pudieron terminar la evaluación de resolución de problemas en entornos tecnológicos por problemas técnicos con la computadora utilizada para participar en la evaluación. La categoría "No pasan la prueba básica TIC" incluye a aquellos que no tienen experiencia informática (OCDE, 2019[62]).
Fuente: Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015, 2018), https://www.oecd.org/skills/piaac/

StatLink https://stat.link/hcdkrn

La Evaluación de Competencias de Adultos define la *capacidad de cálculo* como la capacidad para acceder, usar, interpretar y comunicar ideas e información matemática para manejar y gestionar las exigencias matemáticas de una serie de situaciones en la vida adulta (OCDE, 2019[62]).[16] En el Gráfico 3.15, el panel A muestra el porcentaje de adultos que se situó en cada uno de los seis niveles de competencia dentro de la escala de capacidad de cálculo, en los cuatro países del grupo analizado con datos disponibles. En México, el porcentaje de adultos que se situó por debajo del Nivel 1 (23%) triplica con creces el promedio de la OCDE (7%), mientras que en Ecuador y Perú, esta cifra es al menos seis veces más elevada (del 42% y el 46%, respectivamente). En Chile, aunque la proporción de la población que se sitúa por debajo del Nivel 1 también es elevado (31%), el porcentaje de adultos que alcanza los Niveles 3 (10%) y 4/5 (2%) es superior al de los otros tres países latinoamericanos que participaron en la

PIAAC. No obstante, si se compara con el promedio de la OCDE (un 31% en el Nivel 3 y un 11% en el Nivel 4/5), estos niveles siguen siendo relativamente bajos.

En la actualidad, resulta crucial saber resolver problemas en entornos tecnológicos —es decir, acceder a información, evaluarla, analizarla y comunicarla—. Las aplicaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en una prestación habitual en la mayoría de espacios de trabajo, pero también en los entornos educativos y en la vida cotidiana (OCDE, 2013[63]). En la Evaluación de Competencias de Adultos, la escala de resolución de problemas en entornos tecnológicos se divide en cuatro niveles de competencia (Niveles 1 a 3, y también por debajo del Nivel 1). En los diferentes países de la OCDE que participan, aproximadamente un tercio de los adultos (30%) se sitúa en los dos niveles más altos de competencia (Nivel 2 o Nivel 3), los cuales demuestran la capacidad para utilizar aplicaciones tecnológicas tanto genéricas como más específicas. Sin embargo, solo 1 de cada 10 adultos o menos consigue llegar a dichos niveles en Ecuador (5%), Perú (7%) y México (10%), en comparación con un 15% en Chile (Gráfico 3.15, panel B).

A pesar del número relativamente reducido de adultos de los países analizados que se sitúan en el Nivel 1 o menos con respecto a la resolución de problemas en entornos tecnológicos, un gran número carece de toda competencia en esta materia. En todos los países participantes en la evaluación PIAAC, un porcentaje considerable de adultos no pudo mostrar sus habilidades para resolver problemas en entornos tecnológicos, puesto que realizaron la evaluación en papel (OCDE, 2016[47]). En los países analizados sobre los que se dispone de datos, un porcentaje especialmente amplio de adultos prefirió no realizar la evaluación usando una computadora en Ecuador y México (aproximadamente 18%), en comparación con Perú (11%). Además, Ecuador (33%), México (39%) y Perú (44%) sobresalen como países en los que un porcentaje muy elevado de la población adulta carecía de experiencia informática previa o poseía unas competencias muy deficientes en TIC, en particular si se compara con el promedio de la OCDE (16%) (Gráfico 3.15, panel B). Esto significa que no superaron la prueba “básica de TIC” y, por lo tanto, carecían de las competencias informáticas básicas necesarias para realizar la evaluación usando una computadora. En consecuencia, en países como Perú y México, podrían situarse en el Nivel 1 e inferiores porcentajes más reducidos de adultos, porque estos países registraron porcentajes más amplios de adultos que no pudieron mostrar una competencia suficiente para resolver problemas y situarse al menos en los niveles mínimos (OCDE, 2019[62]; OCDE, a continuación[36]).

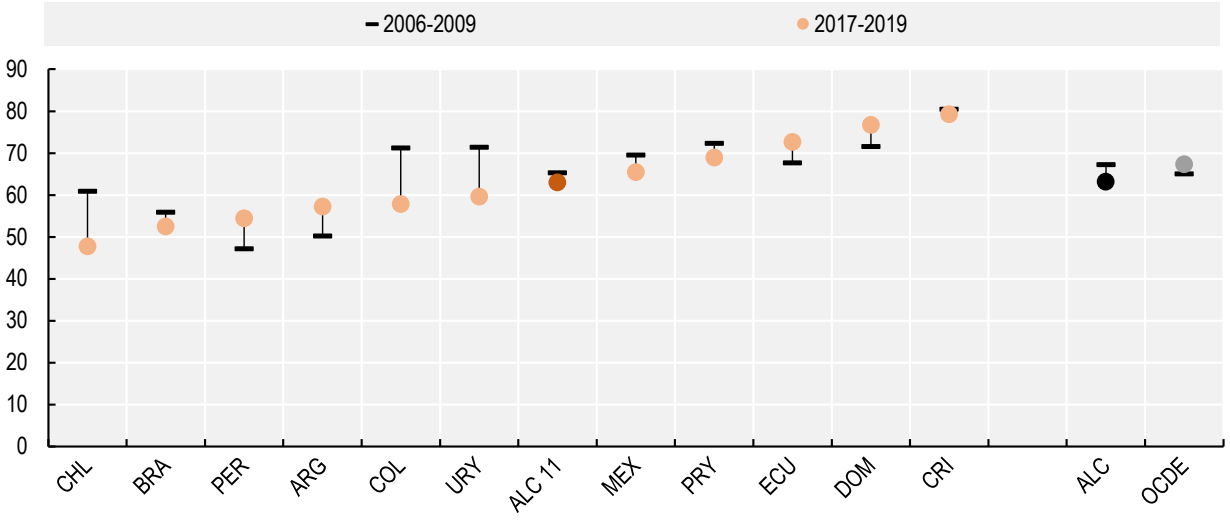
Satisfacción con el sistema educativo

Aunque las personas aprenden en diferentes contextos, el sistema educativo es el vehículo principal utilizado por las comunidades para atender las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Los sectores tanto público como privado han invertido importantes cantidades de recursos en el sistema educativo y la satisfacción de la población con los servicios prestados se define de acuerdo con diferentes características de este sistema (que van desde sus costos a la ubicación, la accesibilidad y la calidad de la docencia).

La Encuesta Gallup Mundial recaba datos sobre el porcentaje de personas que manifiestan estar satisfechas con el sistema educativo en la ciudad o zona en la que viven. En el grupo de países analizados, esta medida se mantuvo relativamente estable entre los períodos 2006-2009 y 2017-2019, en torno al 63% en promedio (Gráfico 3.16). Sin embargo, este promedio oculta importantes diferencias entre los distintos países, así como tendencias divergentes. Por ejemplo, en el período 2017-2019, la satisfacción con los servicios educativos aumentó 5 puntos porcentuales o más en Ecuador, la República Dominicana (en 5 puntos porcentuales), Argentina y Perú (7 puntos) desde 2006-2009, mientras que cayó más de 10 puntos en Uruguay (-11 puntos), Colombia y Chile (-13 puntos). El descenso registrado en Chile supone que menos de la mitad de la población estaba satisfecha con el sistema educativo en 2017-2019, lo que amplía la diferencia con países como Costa Rica, donde aproximadamente 8 de cada 10 personas estaba satisfecha en 2006-2009 y 2017-2019.

Gráfico 3.16. La proporción de la población satisfecha con el sistema educativo varía entre los diferentes países analizados, con tendencias divergentes

Proporción de la población satisfecha con el sistema educativo o los centros escolares de la ciudad o zona en la que vive, porcentaje



Nota: Los datos hacen referencia a la proporción de la población que respondió favorablemente a la pregunta: "En la ciudad o zona en la que vive, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con el sistema educativo o los centros escolares?". El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/p24eu7

Efectos de la pandemia de COVID-19

La crisis por la pandemia de COVID-19 tendrá un impacto profundamente negativo en la educación. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020, más de 160 millones de alumnos de América Latina y el Caribe de todos los niveles educativos vieron interrumpidas las clases presenciales. En general, el cierre de los centros escolares en el grupo de países analizados tuvo una duración total de más de 41 semanas, a excepción de Uruguay donde el cierre duró entre 31 y 40 semanas (UNESCO, 2021[64]). Las primeras estimaciones indican que, en todo el mundo, la pandemia podría ocasionar una pérdida de 0,6 años de escolarización, ajustada por calidad, lo que reducía los años efectivos de escolarización básica cursados por los estudiantes de 7,9 a 7,3 años. Con respecto al cohorte actual de educación primaria y secundaria, esto podría comportar además una reducción de la remuneración anual de 872 USD, al valor actual (Banco Mundial, 2020[65]). En las universidades de América Latina, la situación también es problemática, pues un 84% tiene previsto que se reduzcan las matriculaciones y la mitad de este porcentaje prevé descensos de entre un 10% y un 25% (Hershberg, Flinn-Palcic and Kambhu, 2020[66]). No asistir a los centros escolares y perder los medios de vida familiares debido a la pandemia puede dejar a las niñas en situación de especial vulnerabilidad (debido a un aumento de la carga de trabajo doméstico y/o a una mayor probabilidad de embarazos adolescentes ocasionados por abusos), además de agravar la exclusión y la privación, en especial en el caso de personas con discapacidad o miembros de otros grupos marginados (Banco Mundial, 2020[65]).

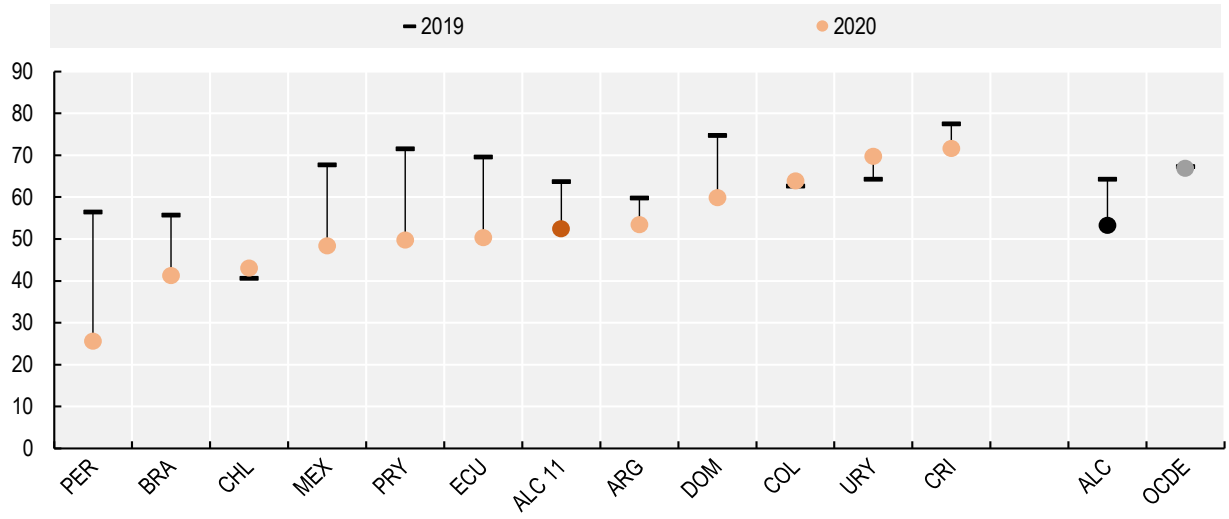
La mayoría de los países del grupo analizado ha pasado a utilizar tecnología educativa para ofrecer soluciones de aprendizaje a distancia. Sin embargo, muchos alumnos y centros escolares no están suficientemente preparados para esta transición, por lo que se han ampliado las brechas socioeconómicas en educación (Gropello, 2020[67]; OCDE et al., 2020[20]). Aunque la educación impartida a través de Internet puede ayudar a aliviar las consecuencias inmediatas de los cierres de centros escolares, solo un 34% del alumnado de educación primaria, el 41% de secundaria y el 68% de educación universitaria tienen acceso a una computadora con conexión a Internet en América Latina. La transición a la formación a través de Internet ha tenido como consecuencia la exclusión de muchos alumnos de hogares más pobres. Menos del 14% de los alumnos pobres (los que viven con menos de 5,5 USD al día, PPA 2011) de educación primaria cuentan con una computadora conectada a Internet en casa, dato que contrasta con el porcentaje registrado en el caso de los alumnos ricos (es decir, los que viven con más de 70 USD al día), que supera el 80% (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[48]). Además, las herramientas tecnológicas solo son efectivas si se utilizan adecuadamente. En promedio, el 58% de los jóvenes de 15 años de la región asistían a centros escolares cuyos directores consideraban que el cuerpo docente tenía los conocimientos técnicos y pedagógicos necesarios para integrar los dispositivos digitales en la programación (OCDE et al., 2020[20]). Los alumnos de procedencia socioeconómica más pobre corren, por lo tanto, el riesgo de sufrir consecuencias especialmente duraderas en lo que atañe a resultados de aprendizaje y oportunidades laborales, debido a la falta de recursos y apoyo en la transición al aprendizaje a distancia (tanto en el centro escolar como en casa) (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[48]; OCDE et al., 2020[20]).

La experiencia de Chile pone además de manifiesto la dificultad que supone sustituir el aprendizaje presencial, pese a los esfuerzos para facilitar el aprendizaje a distancia durante la pandemia. Al considerar indicadores de efectividad y cobertura, la educación a distancia de ese país compensa solo entre un 30% y un 12% de los perjuicios en materia de aprendizaje vinculados a los cierres escolares, y la efectividad descendió al 6% en centros escolares públicos, lo que afectó principalmente a alumnos desfavorecidos (Ministerio de Educación, Centro de Estudios, 2020[68]). Por otra parte, más allá de la repercusión en los resultados de aprendizaje, las relaciones sociales del alumnado pueden verse dañadas por el aislamiento (Loades et al., 2020[69]) y muchos pueden no estar recibiendo tampoco las comidas que se les proporcionan en los centros escolares, que en algunos casos son un recurso vital (WFP, 2020[70]).

Los datos de la Encuesta Gallup Mundial muestran un claro descenso de la proporción de población satisfecha con el sistema educativo en 2020 con respecto a 2019. El descenso interanual de 11 puntos porcentuales dejó el nivel promedio en los países del grupo analizado en el 52% en 2020 (Gráfico 3.17). Las caídas fueron limitadas en Uruguay, Costa Rica y Argentina (-6 puntos porcentuales.), mientras que en otros seis países superan los 10 puntos: Brasil (-14 puntos porcentuales), la República Dominicana (-15), Ecuador (-19), México (-19), Paraguay (-22) y Perú (-31). Como consecuencia, en Ecuador, Paraguay, México y Brasil apenas 1 de cada 2 personas manifiesta estar satisfecha con el sistema educativo o los centros escolares de la ciudad o zona en la que viven, y en Perú solo lo hace 1 de cada 4 (26%). Por otra parte, esta proporción aumentó 6 puntos porcentuales en Uruguay, al alcanzar el 70% en 2020.

Gráfico 3.17. En términos generales, la satisfacción con la educación cayó en el grupo de países analizados en 2020 con respecto a 2019

Proporción de la población satisfecha con el sistema educativo o los centros escolares de la ciudad o zona en la que vive, porcentaje



Nota: En todos los países del grupo analizado, el modo de recabar los datos varió entre 2019 y 2020 (se pasó de entrevistas personales a telefónicas). Como consecuencia, algunos países pueden haber modificado el conjunto de personas consultadas de maneras que no se pueden ajustar usando técnicas de ponderación (Srinivasan and Clifton, 2020[37]; Helliwell et al., 2021[38]). Se dispone de más de 500 observaciones con respecto a todos los países. Las fechas de recolección de datos de 2020 son las siguientes: 7 sep. – 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. – 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. – 16 nov. de 2020 en Chile; 21 ago. – 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 – 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 24 sep. – 23 oct. de 2020 en la República Dominicana; 26 ago. – 23 oct. de 2020 en Ecuador; 08 sep. – 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. - 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 – 6 ene. de 2021 en Perú; y 24 sep. – 30 nov. de 2020 en Uruguay. Los países se clasifican según los niveles de 2020, en orden ascendente (de izquierda a derecha). El promedio regional de ALC comprende 16 países, incluidos los 11 analizados.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx

StatLink https://stat.link/g9uxka

Aspectos para el desarrollo estadístico

En general, en América Latina y el Caribe, faltan datos comparables a nivel del país sobre competencias individuales, al existir relativamente pocos datos contrastados comparativos sobre capacidades lectora, de cálculo, para resolver problemas y técnica. También falta información sobre los tipos de competencias profesionales y técnicas de nivel superior que necesitan las empresas de la región tanto en la actualidad como de cara al futuro (OCDE/CAF/ONU CEPAL, 2016[56]). De manera muy similar a lo que ocurre en el resto del mundo, en el contexto de la transformación digital, la mayoría de los latinoamericanos tendrán que obtener acceso a Internet y adquirir conocimientos para resolver problemas con TIC —además de sólidas capacidades lectora, de cálculo y para resolver problemas generales—, a fin de poder aprovechar las tecnologías digitales en su vida cotidiana y en el trabajo. Asimismo, la importancia cada vez mayor de las competencias digitales supone que las divergencias en cuanto a acceso a Internet y competencias TIC podrían empeorar las actuales desigualdades en materia de bienestar (OCDE, 2019[71]). Pese a que el acceso a Internet se aborda en el capítulo anterior, actualmente solo hay métricas sobre competencias TIC disponibles (extraídas de estudios internacionales como la PIAAC) con respecto a un reducido subconjunto de países de esta región.

Una prioridad importante para el futuro trabajo estadístico es, por lo tanto, valorar otros aspectos de los conocimientos y las competencias de las personas, una vez que se haya consolidado la medición de los "componentes" básicos (competencias lectora, matemática, científica y digital). Por ejemplo, las capacidades no cognitivas, entre otras las competencias sociales y emocionales —como el ingenio, la perseverancia, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo— también pueden considerarse competencias esenciales. El Estudio sobre Competencias Sociales y Emocionales (*Study on Social and Emotional Skills o SSES*), de la OCDE, cuyo objetivo es reflejar las capacidades no cognitivas en la infancia y la adolescencia, muestra que se puede generar información válida, fiable y comparable sobre competencias sociales y emocionales, en contextos y poblaciones diversas. Bogotá y Manizales (Colombia) se encuentran entre las diez ciudades sobre las que pronto habrá datos disponibles (2023) (OCDE, 2020[72]). En la última edición de la PIAAC (2018), se incluyó además un nuevo módulo sobre competencias socioemocionales, con el objeto de facilitar información sobre atributos, comportamientos y creencias individuales como la diligencia, la mentalidad abierta y las relaciones con los demás (OCDE, 2021[73]).

Un grupo de indicadores idóneo de los conocimientos y las competencias también abordaría la dificultad que representan las tasas de abandono escolar en relación con los resultados académicos, tanto en primaria como en secundaria, en América Latina. Por lo general, el "camino que lleva a una falta de compromiso" con los estudios comienza durante la infancia, ya sea en el hogar o en el centro escolar (Lessard et al., 2008[74]). En el caso de los que terminan la educación primaria, los alumnos suelen tener la ilusión de conseguir unos resultados relativamente buenos. Sin embargo, al iniciar la enseñanza secundaria, pueden encontrar dificultades de aprendizaje y el rigor que se espera de ellos puede derivar en una falta de compromiso que obstaculice el proceso de aprendizaje (Bautier, 2003[75]; Blaya, Catherine; Hayden, Carol, 2003[76]). Los adultos jóvenes que han abandonado la enseñanza secundaria sin haber obtenido un título oficial corren un gran riesgo de terminar en empleos precarios, tener peor salud y representar un porcentaje demasiado elevado de los colectivos que se dedican a la delincuencia (Belfield and Levin, 2007[77]; Lochner, 2011[78]; Machin, Marie and Vujić, 2011[79]). Las tasas de abandono escolar acumuladas hasta el último grado de primaria y hasta el último grado de enseñanza secundaria de ciclo inferior se encontraban disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) con respecto a una mayoría de países analizados, hasta septiembre de 2020, año en el que dejan de presentarse estos indicadores para elaborar un menor número de indicadores principales basados en los ODS.[17] Otros indicadores elaborados por el UIS pueden ayudar a reflejar determinados elementos como las tasas de culminación de los estudios (educación primaria, enseñanza secundaria de ciclo inferior, enseñanza secundaria de ciclo superior) o la tasa de permanencia hasta el último grado de enseñanza primaria, a partir de lo cual puede derivarse la tasa de abandono acumulada hasta el último grado de enseñanza primaria.[18]

Seguridad

La seguridad personal o no sufrir daño es un componente esencial del bienestar de la población. El número de amenazas que existen para la vida de las personas es ingente, desde los conflictos políticos y étnicos a los peligros ambientales, pasando por accidentes industriales y actos de terrorismo. Sin embargo, una de las amenazas más habituales para la seguridad personal, tanto en los países emergentes como en los desarrollados, es la delincuencia. Esta amenaza engloba un gran número de delitos, por ejemplo, los delitos contra la propiedad (como robo de vehículos, robos en el hogar), delitos por contacto (agresión, atracos), delitos no convencionales (fraude al consumo, corrupción) y homicidios. Sin embargo, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS), "la ingente disparidad de enfoques y fuentes utilizados por diferentes países para formular leyes penales hace que resulte imposible crear una definición sistemática e integral de delito" (UNODC, 2016[80]). Por lo tanto, debe delimitarse el concepto para posibilitar la comparación y el análisis entre distintos países.

Reducir los elevados niveles de violencia delictiva es una prioridad máxima para muchos países de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la encuesta más reciente del Latinobarómetro (2018), la delincuencia y la seguridad pública eran la mayor preocupación de un 21% de los ciudadanos del grupo de países analizados —mayor que el desempleo, la economía o la corrupción— (Latinobarometro, 2020[81]). La tasa de homicidios de los países analizados (13 por cada 100.000 habitantes) es seis veces superior al promedio de la OCDE (3 por 100.000), y la proporción de la población que se siente segura al caminar a solas por la noche (44%) es muy baja en comparación con el promedio de la OCDE (72%). Entre los países del mundo con mayores tasas de homicidios, 17 de los primeros 20 y 40 de los primeros 50 se encuentran en América Latina (Muggah, 2018[82]). Pese a que los datos muestran cierto progreso en la última década, todavía queda mucho por hacer para estar a la altura de las expectativas de la población y cumplir con los compromisos internacionales. En general, las medidas de seguridad tanto objetivas como subjetivas de este informe apuntan a niveles muy elevados de inseguridad que no siempre han mejorado en todos los países. El elevado nivel de urbanización de esta región contribuye además a algunas de estas tendencias, pues las tasas de delincuencia suelen ser superiores en zonas urbanas y en la periferia de las ciudades (Muggah and Szabó, 2016[83]).

La violencia relacionada con los cárteles y las bandas es un importante factor que contribuye a las altas tasas de violencia en América Latina, aunque las manifestaciones y los factores que impulsan la actividad de las bandas difieren de un país a otro y los datos contrastados comparables sobre esta materia son escasos (Dammert, 2017[84]). Una medida clara, pero indirecta, del alcance de la violencia de las bandas es la mayor incidencia de homicidios entre los varones jóvenes, pues la inmensa mayoría de integrantes y víctimas de las bandas suelen ser hombres adolescentes y adultos jóvenes (Chioda, 2017[85]). Esta violencia incide en toda la sociedad, pero no solo por la pérdida de vidas en las familias y comunidades afectadas, sino también por el aumento de la sensibilización y del temor a los delitos violentos. Por ejemplo, 1 de cada 3 personas en México y Argentina, y 1 de cada 10 en Chile, manifiestan tener conocimiento con frecuencia de tiroteos en la zona en la que residen (UNODC, 2020[86]).

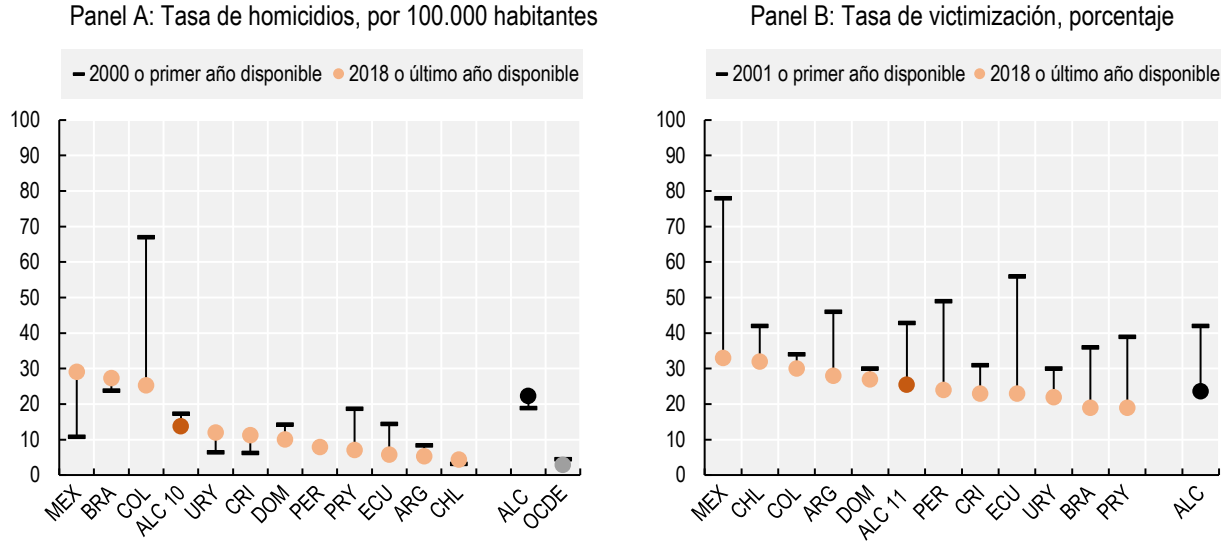
Las amenazas para la seguridad pueden tener también su origen en el hogar o la familia, en especial en el caso de las mujeres y los niños. Prácticamente en todos los países de ALC con datos de encuestas representativas a nivel nacional, más del 40% de los menores ha sido objeto de actos violentos en el último mes, que suelen afectar en mayor medida a los varones (Lenzer, 2017[87]). Por el contrario, las mujeres y las niñas tienen muchas más probabilidades de sufrir abusos físicos, sexuales o psicológicos (OCDE, a continuación[36]). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 30% de las mujeres del continente americano ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja, mientras que un 11% ha sido objeto de violencia sexual a manos de alguien distinto a su pareja (OMS, 2013[88]). En el Capítulo 5 de este informe se presentan más datos sobre este tema.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la naturaleza de los riesgos relacionados con la delincuencia a los que se enfrentan diariamente las personas, al tiempo que se han agravado los problemas económicos, lo que contribuye a las altas tasas de delincuencia de esta región (Crisis Group Latin America, 2020[89]; ONU, 2020[21]; UNODC, 2020[90]). Aunque los confinamientos prolongados hicieron descender la probabilidad de ciertos tipos de delitos (p. ej., aquellos contra la propiedad), los primeros datos contrastados del grupo de países analizados muestran que, en determinadas regiones, la violencia se ha mantenido o incluso ha aumentado. Las medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos para frenar el coronavirus proporcionaron además a las organizaciones delictivas una ventana de oportunidad para consolidar su poder, al competir con los gobiernos en la prestación de servicios básicos a grupos a los que resulta difícil llegar, con el fin de ganarse el apoyo de las poblaciones locales (Asmann, 2020[91]; Felbab-Brown, 2020[92]; Rivard Piché, 2020[93]). Durante los confinamientos impuestos por la pandemia, se ha disparado la delincuencia a través de Internet (Austin, 2020[94]), al igual que el riesgo de abusos o violencia doméstica (Statista, 2020[95]).

Homicidios y victimización

La tasa de homicidios en el grupo de países analizados (14 por 100.000 habitantes) prácticamente quintuplica el promedio de la OCDE (3 por 100.000 habitantes), aunque es menor que el promedio regional general (22 por 100.000 habitantes) (Gráfico 3.18, panel A). En la mayoría de los países analizados, la tasa de homicidios es de 10 por 100.000 habitantes o menos, aunque es más del doble en México (29), Brasil (27) y Colombia (25), mientras que en Chile es muy inferior y no se aleja del promedio de la OCDE (4 por 100.000 habitantes). Aunque la tasa de homicidios ha descendido cuatro puntos en promedio en el grupo de países analizados desde 2000, las tendencias difieren ampliamente entre unos y otros países, con un descenso drástico en Colombia (-42 puntos), caídas considerables en Paraguay (-12 puntos) y Ecuador (-9 puntos), y subidas importantes en México (+18 puntos), Perú (+8 puntos) y Uruguay (+6 puntos).

Gráfico 3.18. Las tendencias de las tasas de homicidios varían entre unos y otros países analizados, aunque la tasa de victimización obtenida a partir de datos facilitados en encuestas descendió en todos los países



Nota: En el panel A, el primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Argentina y 2003 en el de Chile. En el caso de Perú, no hay datos disponibles antes de 2011 y, por lo tanto, no se ha incluido en el Gráfico el primer año correspondiente a este país. El última año disponible es 2017 en el caso de Perú. Debido a que los datos están incompletos, Perú se ha excluido de los promedios regionales de ALC y del grupo de países analizados. El promedio regional de ALC comprende 19 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. En el panel B, los datos muestran la proporción de personas que respondieron "sí" a la pregunta: "¿Ha sido usted (o un miembro de su familia) agredido, atacado o víctima de un delito en los 12 meses anteriores?". El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Datos de la UNODC, https://dataunodc.un.org/GSH_app (Panel A) y la CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de la Encuesta de la Corporación Latinobarómetro (panel B)

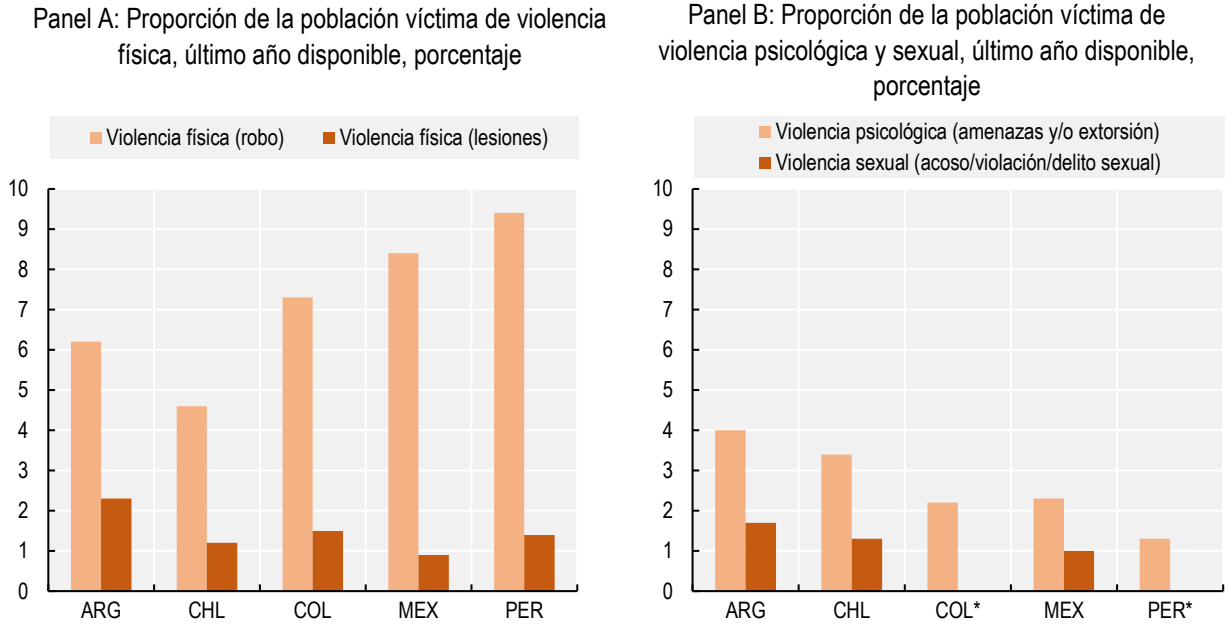
StatLink https://stat.link/afm3wl

Los homicidios solo representan una fracción de los riesgos de seguridad que encaran las personas y las tasas de victimización obtenidas a partir de datos facilitados en encuestas indican la prevalencia de otras amenazas para la seguridad que supone la delincuencia. Una medida de victimización, extraída de la encuesta del Latinobarómetro, considera la proporción de personas que respondieron "sí" a la pregunta: "¿Ha sido usted (o un miembro de su familia) agredido, atacado o víctima de un delito en los 12 meses anteriores?" De acuerdo con esta medida (Gráfico 3.18, panel B), México, Chile y Colombia se sitúan

entre los países con mayores tasas de victimización de la región, que van del 33% en México al 19% en Paraguay. La tasa de victimización en los países analizados cayó del 43% en 2001 al 25% en 2018, en promedio, con una elevada volatilidad en la mayoría de los países. La victimización declarada a través de encuestas ya era baja en la República Dominicana en 2004 y, desde entonces, ha disminuido 3 puntos porcentuales. Por el contrario, es máxima en México (seguido de cerca por Chile), donde sin embargo se ha reducido a menos de la mitad en el plazo de 17 años.

En esta región, no se encuentran disponibles de forma sistemática datos comparables y pormenorizados sobre tipos de delitos específicos, aunque algunas encuestas nacionales sobre victimización ofrecen información útil. La forma más habitual de violencia en los países del grupo analizado sobre los que hay datos disponibles es el robo, que afecta a 1 de cada 10 personas en Perú (9,4%) y México (8,4%). La violencia física vinculada a lesiones es más habitual en Argentina (2,3%), que también presenta los niveles más altos de violencia psicológica (4%) y sexual (1,7%) (Gráfico 3.19).

Gráfico 3.19. En los países analizados sobre los que hay datos disponibles, los robos son la forma más habitual de violencia



Nota: Los datos se refieren a las respuestas de los consultados con respecto a los 12 meses anteriores. En Colombia y Perú (*), no se encuentran disponibles datos sobre la proporción de la población que ha sido víctima de violencia sexual.
Fuente: Datos recabados por la UNODC a partir de las siguientes encuestas sobre victimización por delitos: Argentina (2017), INDEC Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV); Colombia (2018), DANE Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019 (ECSC); Chile (2017), INE Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 (ENUSC); México (2018), INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE); Perú (2017), INEI Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC).

StatLink https://stat.link/m8jh7c

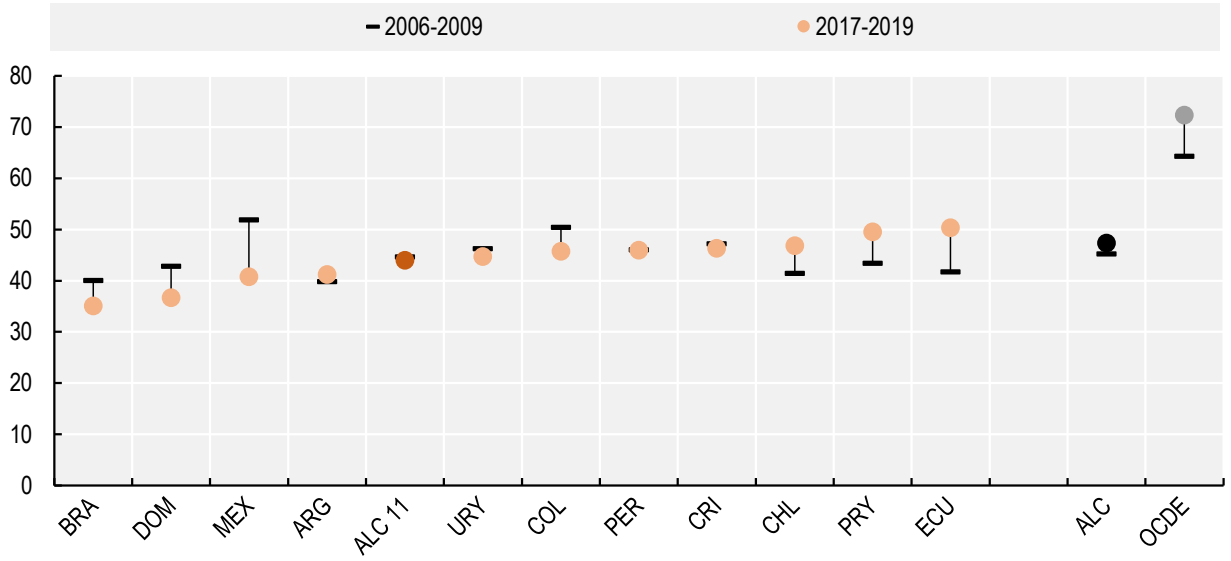
Percepción de seguridad

Además del riesgo de ser víctima de delincuencia y violencia, la percepción que tienen las personas sobre su propia seguridad puede tener una importante repercusión en su bienestar, debido al aumento de su inquietud y ansiedad (OCDE, 2015[96]). En 2017-2019, el porcentaje de personas que afirmó sentirse segura al caminar a solas por la noche en los países analizados (44% en promedio) fue relativamente

bajo en comparación con la OCDE (72%) (Gráfico 3.20). Antes de la pandemia de COVID-19, los datos más recientes disponibles mostraban que Ecuador y Paraguay eran los únicos países del grupo analizado en los que la mitad de la población declaraba sentirse segura al caminar a solas por la noche (50%), 15 puntos porcentuales más que en el país con peores resultados, Brasil (35%). La proporción de la población que se siente segura al caminar a solas por la noche se mantuvo prácticamente estable entre los períodos 2006-2009 y 2017-2019, aunque descendió en los países del grupo analizado en los que la situación ya era preocupante. Las tendencias a lo largo del tiempo varían según el país: se registraron descensos considerables en México (-11 puntos porcentuales), la República Dominicana (-6 puntos), Brasil y Colombia (-5 puntos), mientras que se observó una clara mejora en Ecuador (+9 puntos), Paraguay (+6 puntos) y Chile (+5 puntos). Los niveles se mantuvieron relativamente estables en Argentina, Uruguay, Perú y Costa Rica.

Gráfico 3.20. En promedio, la proporción de la población que se siente segura se ha mantenido relativamente estable, pero con tendencias divergentes entre los diferentes países

Proporción de la población que declara sentirse segura al caminar a solas por la noche en la ciudad o zona en la que vive, porcentaje



Nota: Los datos hacen referencia a la proporción de la población que respondió "sí" a la pregunta: "¿Se siente seguro/a al caminar a solas por la noche en la ciudad o zona en la que vive?". El promedio regional de ALC comprende 26 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), en https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

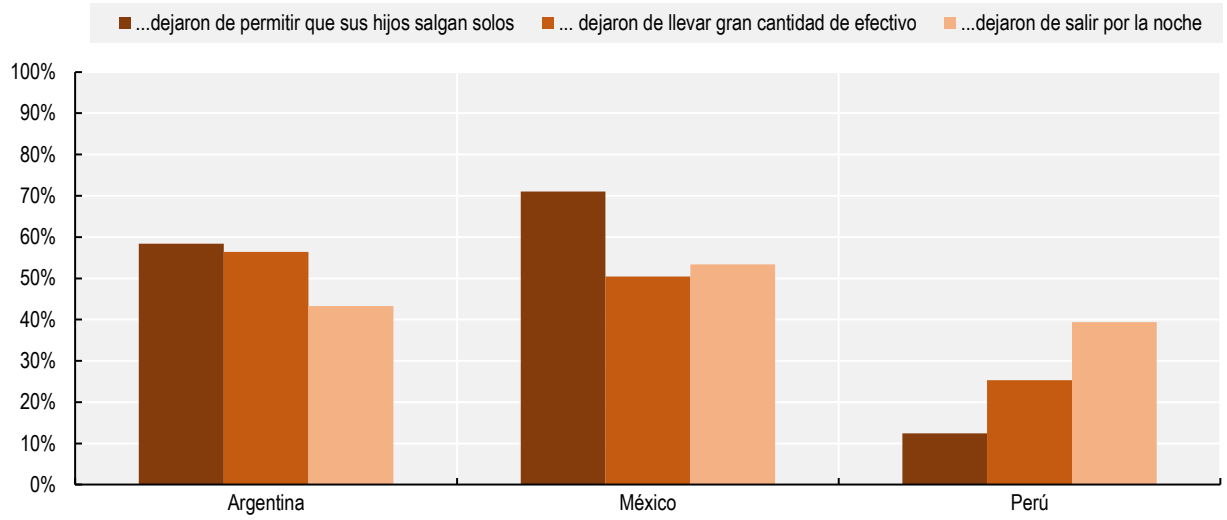
StatLink https://stat.link/h6uz15

El temor a ser víctima de un delito puede mermar el bienestar de una persona, al afectar su comportamiento y su percepción de libertad para hacer las cosas que le gustan. La proporción de la población del grupo de países analizados que declaró que la delincuencia era la mayor amenaza para su seguridad personal, del 55%, duplicaba el promedio de la OCDE (22%) en 2019 (Gallup World Poll, 2021[97]). Las tasas registradas van del 39% de los consultados en Chile al 68% en Brasil.[19] El Gráfico 3.21 muestra algunos de los comportamientos que se han visto frenados por el temor a la delincuencia en Argentina, México y Perú (los tres únicos países del grupo analizado sobre los que hay datos disponibles). En Argentina y México, la mayor parte de la población ha dejado de permitir que sus hijos salgan solos y

de llevar dinero en efectivo. En estos tres países, una gran proporción de personas ya no sale nunca por la noche, un porcentaje que va del 39% en Perú a un 53% en México.

Gráfico 3.21. En Argentina, México y Perú, el temor a la delincuencia influye de manera considerable en las actividades cotidianas de la población

Proporción de la población que, por temor a la delincuencia, ha dejado de permitir que sus hijos salgan solos, ha dejado de llevar gran cantidad de efectivo y ha dejado de salir por la noche, porcentaje, 2019 o último año disponible



Nota: Datos recabados por la UNODC a partir de las siguientes encuestas sobre victimización por delitos: Argentina (2017), INDEC, Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV), que se refiere a las personas que "han dejado de llevar gran cantidad de efectivo o tarjetas de crédito/débito"; México (2018), INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), que se refiere a las personas que "han dejado de llevar efectivo"; Perú (2017), INEI Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC), que se refiere a las personas que "han dejado de llevar gran cantidad de efectivo".
Fuente: UNODC, http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab11/

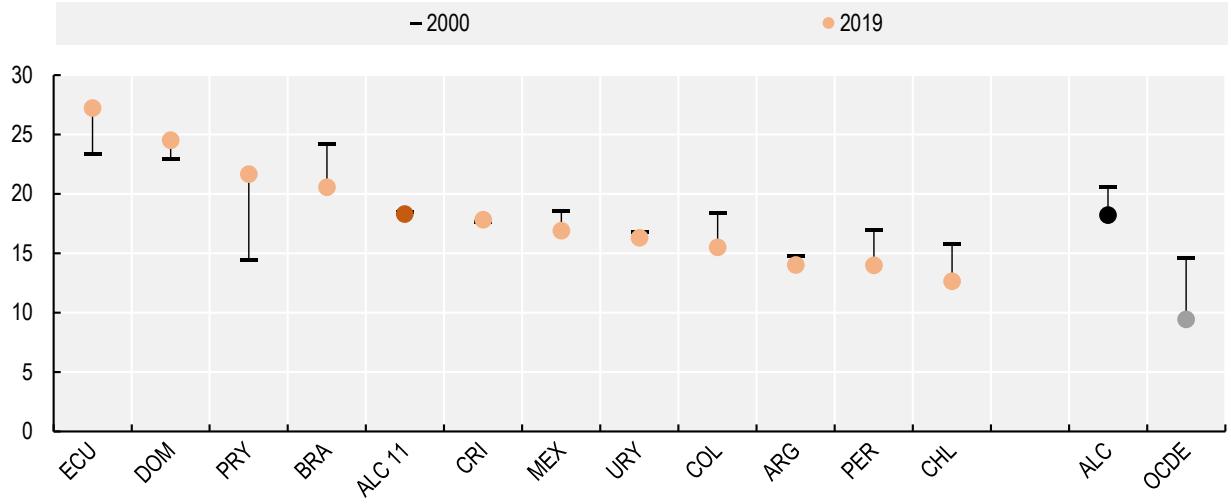
StatLink https://stat.link/bthd9r

Muertes por accidentes de tráfico

Cada año mueren en todo el mundo aproximadamente 1,35 millones de personas en accidentes de tráfico, y la mitad de estas muertes son de peatones, ciclistas y motociclistas, según la Organización Mundial de la Salud. Las tasas de mortalidad suelen ser más altas en los países de ingresos bajos y medios que en otros con ingresos superiores (OMS, 2020[98]). En 2019, el promedio del grupo de países analizados (18 muertes por 100.000 habitantes) duplicaba el promedio de la OCDE (9 muertes) (Gráfico 3.22). Ecuador fue el país que registró peores resultados, con 27 muertes por 100.000 habitantes que se debieron a las lesiones sufridas en accidentes de tráfico. La República Dominicana, Paraguay y Brasil también registraron más de 20 muertes por 100.000 habitantes. En el extremo opuesto, Argentina (14), Perú (14) y Chile (13) registraron las tasas de muertes por accidentes de tráfico más reducidas del grupo de países analizados, aproximadamente la mitad de la tasa observada en Ecuador. Las tendencias entre 2000 y 2019 han sido dispares entre los diferentes países, pues la mayoría de los que tienen mejores resultados (p. ej., Chile y Perú) sufrieron menos muertes por accidentes de tráfico que hace dos décadas, mientras que una serie de países con malos resultados (p. ej., Paraguay) sufrieron más. En Brasil, aunque descienden más que en cualquier otro país del grupo analizado, las muertes por accidentes de tráfico (21 por 100.000 habitantes) se mantienen por encima del promedio.

Gráfico 3.22. Las muertes por accidentes de tráfico en el grupo de países analizados duplican el promedio de la OCDE y la diferencia entre los que obtienen mejores y peores resultados es cada vez mayor

Tasa de muertes por accidentes de tráfico (muertes por accidentes de tráfico, tasa por 100.000 habitantes)



Nota: El promedio regional de ALC correspondiente a América Latina y el Caribe y el promedio de la OCDE los calcula el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).
Fuente: Global Burden of Disease Collaborative Network, Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results, Seattle, Estados Unidos: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020, http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

StatLink https://stat.link/rbunfh

Efectos de la pandemia de COVID-19

Los confinamientos prolongados en la región de América Latina y el Caribe mantuvieron a la población alejada de las calles, con consecuencias dispares en materia de delincuencia. Por una parte, redujeron la incidencia de algunos tipos de delitos (p. ej., los perpetrados contra la propiedad). El confinamiento obligatorio y el estricto control social en la región disminuyeron las oportunidades de comisión de delitos menores, como los atracos, además de que el riesgo de contagio disuadió a muchos delincuentes (Semple and Ahmed, 2020[99]). Durante el primer semestre de 2020, el 22% de los hogares de México sufrieron un robo, allanamiento o hurto, lo que contrasta con el 35% del año anterior (2019) (INEGI, 2020[100]), al tiempo que los delitos cometidos fuera de viviendas privadas se redujeron del 17% al 9%. Además, en enero de 2021, la población adulta manifestó un nivel de satisfacción con la seguridad más alto que un año antes, pese a mantenerse en una cifra relativamente baja (5,5 de 10 en 2021 frente a 5,2 en 2020) (INEGI, 2021[101]). En América Central, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes disminuyó prácticamente un tercio en promedio, de 31 a 21, lo que se tradujo en 2.607 homicidios menos (Infosegura, 2021[102]).[20] Sin embargo, los primeros datos contrastados muestran que, en otros países del grupo analizado, la violencia se mantiene como de costumbre. Por ejemplo, las comunidades rurales de Colombia fueron víctimas de conflictos armados incluso durante los confinamientos nacionales (El Espectador, 2020[103]), mientras que el número de homicidios se mantuvo estable en México tras la introducción de medidas de confinamiento, con niveles similares durante los primeros semestres de 2019 y 2020 (Gobierno de Mexico, 2020[104]; UNODC, 2020[90]).

La pandemia brindó además a los grupos que participan en actividades delictivas organizadas la oportunidad de consolidar su poder. En Brasil, México y Colombia, los cárteles y los grupos armados llevaron a cabo actividades de carácter benéfico (p. ej., entregar paquetes de comida básicos (Felbab-

Brown, 2020[92]) durante los confinamientos, en un intento por ampliar su base social, e impusieron sus propias restricciones a las comunidades —independientes de las instituidas por los gobiernos nacionales (Asmann, 2020[91]). Aprovechando su capacidad para aplicar medidas esenciales en el ámbito local, estos grupos pueden aumentar su arraigo en las comunidades, lo que dificultará la recuperación del poder por parte de los gobiernos. Otras consecuencias de la pandemia, como el aumento de los niveles de pobreza y del desempleo juvenil, también pueden ofrecer a estos grupos una coyuntura en la que poder prosperar, al aumentar el atractivo de las actividades ilegales para los grupos vulnerables (Nugent, 2020[105]).

Los datos de la Encuesta Gallup Mundial sobre la proporción de la población que se siente segura al caminar a solas por la noche muestran, en promedio, una escasa variación en términos interanuales en 2020 con respecto a 2019 en el grupo de países analizados (del 45% en 2019 al 46% en 2020) (Gallup World Poll, 2021[97]). Sin embargo, estas cifras no reflejan tendencias divergentes entre los diferentes países. Por ejemplo, una caída de 7 puntos porcentuales en Chile (del 48% al 41%) y un aumento de 6 puntos en la República Dominicana (del 39% al 45%) y en Uruguay (del 46% al 52%).

Por último, al encontrarse cerrados muchos servicios, tiendas y oficinas, y en situación de autoaislamiento un porcentaje importante de la población, aumentó el número de personas que recurrió a la adquisición de bienes y servicios a través de Internet. Como consecuencia, las organizaciones criminales han pasado a perpetrar ataques mediante el uso de programas de secuestro maliciosos (*ransomware)*, fraudes por Internet y métodos de suplantación de identidad a través del correo electrónico (*phishing*), que proliferaron por todos los países de América Latina durante la pandemia, y suponen un riesgo para la población, pero también para entidades bancarias y gobiernos (Austin, 2020[94]). Las denuncias de casos de violencia doméstica durante las primeras semanas de la cuarentena aumentaron en cuatro de los países del grupo analizado (Argentina, Chile, Colombia y México) (Statista, 2020[95]). Debido a las medidas de aislamiento y a la deficiencia de ingresos propiciada por las crisis sanitaria y económica, la situación podría agravar el riesgo de violencia y abusos en los hogares latinoamericanos. Los primeros datos contrastados indican que el número de llamadas a los servicios de ayuda de la región aumentó tras la cuarentena (López-Calva, 2020[106]): entre los ejemplos encontrados está el aumento del 32% en ese tipo de llamadas en Buenos Aires (Perez-Vincent et al., 2020[107]), tras la introducción de restricciones a la movilidad, y un aumento del 48% entre abril y julio de 2020 de las llamadas a los servicios de ayuda de Perú (Agüero, 2020[108]). Los datos de *Línea Mujeres* en Ciudad de México indican que el confinamiento tuvo una escasa repercusión en las llamadas relativas a casos de violencia interpersonal, pero sí que aumentaron las llamadas a los servicios de atención psicológica y descendieron las realizadas a los servicios jurídicos (Silverio-Murillo and Balmori de la Miyar, 2020[109]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

La tasa de homicidios es un indicador fundamental de los delitos con violencia, pero es solo la “punta del iceberg”. En el presente informe, esta cifra se ha complementado con la tasa de victimización obtenida a partir de datos facilitados en encuestas, para ofrecer una visión más amplia de cómo afecta la delincuencia a las personas. Se necesitan más datos de los registros policiales y las encuestas sobre victimización por delitos para abarcar una variedad más amplia de experiencias, puesto que la comparabilidad entre países de los datos existentes es limitada y actualmente no existe ningún repositorio central internacional. Además, las encuestas sobre victimización por delitos de la región muestran que pocas personas denuncian ante las autoridades competentes y que, cuando lo hacen, la mayoría de ellas afirman que su experiencia ha sido negativa. En Perú, por ejemplo, el porcentaje de delitos denunciados a la policía asciende a tan solo un 13% de todos los registrados y la insatisfacción al interponer dichas denuncias alcanza el 83%, siendo el motivo principal la inacción de las autoridades (UNODC, 2020[86]).

La percepción de seguridad afecta al bienestar y los comportamientos de la población. Sin embargo, los indicadores disponibles obtenidos a partir de la Encuesta Gallup Mundial tienen un reducido alcance (percepción de seguridad “al caminar a solas por la noche”). Tampoco existen indicios de los tipos de

amenazas que puede temer la población ni sobre indicadores contextuales (tales como cohesión social, comportamientos incívicos o altercados en barrios), lo que limita la identificación de posibles instrumentos para la formulación de políticas públicas. Habida cuenta del alcance de la violencia en esta región, la generación de datos estadísticos comparables sobre inseguridad que abarquen la sensación que tienen las personas al respecto es un aspecto prioritario de los planes de América Latina en materia de estadística. Por lo tanto, el indicador que se utiliza en este informe tiene tan solo un carácter representativo, hasta que haya disponibles mejores datos sobre la calidad.

El alcance del indicador sobre la seguridad en carretera que se utiliza en este informe podría mejorar si se amplía para incluir también las lesiones por accidentes de tráfico (no letales). Sin embargo, en algunos países de América Latina, la capacidad institucional para dar seguimiento a los datos sobre accidentes de tráfico y las lesiones ocasionadas por estos sigue siendo limitada. Tampoco se incluyen en el conjunto de datos de este informe las muertes ocasionadas por conflictos.

Los datos contrastados sobre la repercusión de la pandemia de COVID-19 ponen de relieve determinados ámbitos clave en los que podrían mejorarse las medidas de seguridad de la población. La violencia doméstica es un aspecto importante de la seguridad que se destaca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (la meta 5.2.1 se refiere a la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado). Sin embargo, los datos existentes a menudo proceden de encuestas especializadas que se llevan a cabo con una reducida periodicidad y se centran principalmente en las mujeres (y no en el conjunto de la población). Estas encuestas especializadas deben seguir además las medidas éticas y de seguridad necesarias para este tipo de investigación: los datos deben ser recabados por personal entrevistador que haya recibido formación y en un espacio privado en el que no se juzgue a las consultadas, haciendo las preguntas a una persona por hogar sin que esté presente su pareja (OMS, 2013[88]). En América Latina, solo cinco países (que también están en el grupo de países analizados para este informe) han realizado encuestas que se acercan al cumplimiento de estos criterios: Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay (PNUD, 2017[110]). Una alternativa que han usado los países para recabar información de muestras representativas de la población es incluir un módulo sobre violencia doméstica en una encuesta ya existente. Este método ha sido utilizado por un total de 12 países de América Latina —y Ecuador es el único que también tiene una encuesta especializada, la “Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra la Mujeres - ENVIGMU”— (PNUD, 2017[110]; INEC, 2019[111]).

Por último, la transformación digital en curso también conlleva nuevos riesgos para la seguridad de las personas. Tal como se ha mencionado anteriormente, cuando no existen marcos regulatorios, jurídicos y éticos efectivos, tanto los usuarios de Internet como las organizaciones pueden quedar expuestos a importantes riesgos económicos, sociales, emocionales e incluso físicos. Sin embargo, medir los riesgos de seguridad informática resulta difícil, porque los usuarios de Internet podrían no detectar actividades delictivas a través de la red y, en esta región, no existe actualmente ningún mecanismo de denuncia centralizado para las incidencias de seguridad en Internet de menor escala. Aunque es frecuente que los datos sobre delitos informáticos se obtengan a partir de encuestas, este sistema presenta límites metodológicos (OCDE, 2019[71]), lo cual implica que es necesario redoblar los esfuerzos para crear una medida más general y objetiva de los riesgos de seguridad informática.

Calidad del medioambiente

La calidad del medioambiente afecta directamente a la salud de las personas a través de la calidad del aire, el agua y el suelo, y también de la presencia, densidad y toxicidad de sustancias peligrosas. La calidad del medioambiente también tiene un relevancia intrínseca para las personas que dan importancia a su belleza y valoran servicios que afectan a sus opciones vitales (p. ej., un lugar para vivir) (Balestra and Dottori, 2011[112]). Las personas también se benefician de los activos y servicios ambientales. El acceso a zonas verdes, en particular, se ha vinculado a numerosas ventajas como la relajación

psicológica, la reducción del estrés, el aumento de la actividad física, la mitigación de la exposición a la contaminación atmosférica, del calor y del ruido excesivos, la mejora del capital social y las conductas respetuosas con el medioambiente (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2016[113]; Engemann et al., 2019[114]).

La calidad del medioambiente depende de cómo se usen los recursos naturales y el suelo, pues las actividades que realiza el ser humano pueden contaminar, a través de subproductos que terminan en el suelo o en los ríos o los lagos, el océano y la atmósfera (CEPAL, 2010[115]). Los países de América Latina y el Caribe están dotados de una amplia base de recursos naturales (véase el Capítulo 4), en concreto minerales, reservas de petróleo, superficie forestal y terreno cultivable (Solbrig, 1998[116]). Además, las costas del Pacífico y el Atlántico Sur son fuente de grandes cantidades de alimentos de origen marino. Sin embargo, la región también encara algunos de los desafíos ambientales más peligrosos. La mayoría de las ciudades se enfrentan a problemas de gran calado en cuanto a calidad del aire, a consecuencia del crecimiento urbano, las emisiones del transporte y el consumo de energía. Estos factores, junto con unos vehículos relativamente ineficientes, normas deficitarias sobre combustibles y la combustión de biomasa para cocinar y para los sistemas de calefacción, contribuyen aún más a la producción de niveles alarmantes de $MP_{2,5}$ (NRDC, 2014[117]; CAF, 2015[118]; IQ Air, 2019[119]). Otras de las dificultades son la contaminación del agua por la erosión del suelo y los residuos industriales (CEPAL, 2010[115]; UNEP, 2018[120]), además de la deforestación (que se trata en el Capítulo 4). Por último, aunque América Latina ha tenido una escasa responsabilidad histórica con respecto a las emisiones de gases invernadero, presenta una enorme exposición a algunas de sus consecuencias, entre ellas los fenómenos climáticos extremos. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, podría tener consecuencias dramáticas en las islas del Caribe durante el próximo siglo, además de que los ciclones tropicales de alta intensidad preocupan enormemente a los países de América Central. Asimismo, se prevé que la subida de las temperaturas agrave las sequías en zonas como el noroeste de Brasil (FIDA, 2020[121]). En esta sección se tratan los aspectos ambientales principales que inciden en el bienestar de la población según los datos disponibles en la región. Las mayores amenazas para el medioambiente vinculadas al capital natural, tales como las especies en peligro, el estrés hídrico y las emisiones de gases de efecto invernadero, se tratan en el Capítulo 4 sobre los recursos para el bienestar futuro.

Los primeros datos contrastados indican que la pandemia de COVID-19 ha mejorado la calidad del aire exterior en muchos sentidos, lo que podría beneficiar a un gran número de personas consideradas entre la población más vulnerable. No obstante, estos beneficios podrían tener un corto recorrido, ya que, conforme los países se recuperen de la pandemia, la reanudación de los viajes en avión, los desplazamientos de las personas dentro de las ciudades y entre estas, y la recuperación de los niveles de producción de las fábricas redundarán en un aumento de la contaminación atmosférica exterior. Los sistemas ineficientes de tratamiento de residuos de la región también son motivo de preocupación, habida cuenta de los nuevos residuos peligrosos que se han generado durante el brote.

Calidad del aire

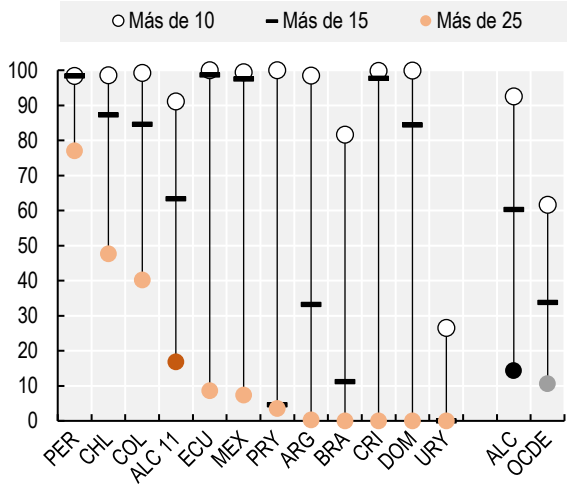
La contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales más inmediatos para la salud de las personas en el continente americano (OMS, 2016[122]). En América Latina y el Caribe, en particular, fenómenos como los incendios forestales descontrolados, el uso generalizado de madera para los sistemas de calefacción y para cocinar, así como el aumento del número de vehículos (CAF, 2019[123]) están generando una elevada exposición de la población a la contaminación atmosférica interna y externa. Las fuentes de contaminación atmosférica varían dentro de los países y también entre estos, al igual que la gravedad del riesgo que corre la población.[21] Entre los costos que puede acarrear tal coyuntura están un descenso de la esperanza de vida, un aumento de los costos de atención sanitaria y una menor productividad laboral. Otras consecuencias son una menor producción agrícola y daños a los ecosistemas (OCDE, 2017[124]).

La materia particulada fina ($PM_{2.5}$) es un contaminante atmosférico habitual que se inhala y puede provocar patologías graves, entre ellas enfermedades cardiovasculares y respiratorias (OCDE, 2020[39]). En el grupo de países analizados, cerca del 90% de la población está expuesta a niveles de $MP_{2.5}$ superiores al primer nivel umbral de la OMS de riesgo para la salud de las personas (10 microgramos por metro cúbico) (OMS, 2006[125]) (Gráfico 3.23, panel A). No obstante, se pueden usar diferentes umbrales de exposición para evaluar la contaminación atmosférica a distintos niveles de gravedad y descubrir así una imagen matizada de la situación que se vive en cada país. Por ejemplo, en Ecuador, México y Costa Rica, el porcentaje promedio de la población expuesta a niveles de contaminación atmosférica por materia particulada fina por encima de 15 microgramos/m^3 supera el 97%, aunque menos del 9% está expuesta a niveles superiores a 25 microgramos/m^3 (es decir, la cifra es menor que los promedios del grupo de países analizados y la OCDE, del 14% y el 11%, respectivamente). Por el contrario, en Perú, Chile y Colombia, más de un 40% de la población está expuesta al nivel umbral máximo —que afecta a menos de un 1% de la población en cinco de los otros siete países analizados—.

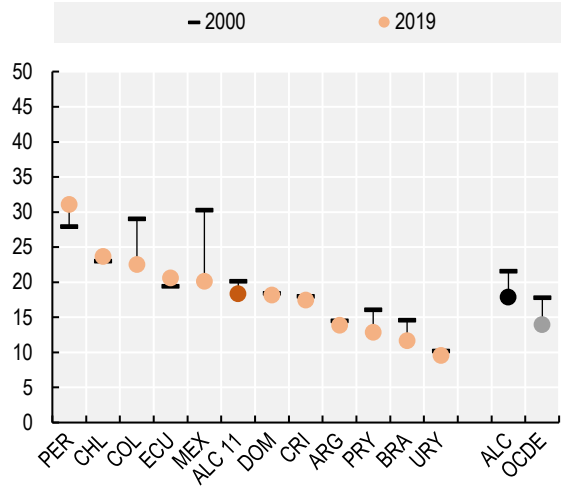
Aunque la exposición media promedio a $MP_{2,5}$ resulta menos sencilla de interpretar, constituye una medida útil para valorar los cambios en la contaminación atmosférica a lo largo del tiempo en oposición al porcentaje de la población expuesta a determinados umbrales, puesto que la proporción de la población que se traslada de un extremo de un umbral a otro puede alterar la tendencia de la exposición total. Entre los años 2000 y 2019, la exposición media a $MP_{2,5}$ cayó un 9% en promedio en el grupo de países analizados. La mayores mejoras se registraron en Brasil, Paraguay, México y Colombia, donde los niveles cayeron un 20% o más. Por el contrario, la exposición media promedio a $MP_{2,5}$ aumentó ligeramente en Perú (11%) y Ecuador (6%) (Gráfico 3.23, panel B).

Gráfico 3.23. La exposición a partículas finas en el aire ha mejorado en promedio desde 2010, pero las poblaciones de la mayoría de los países de ALC siguen expuestas a niveles nocivos

Panel A: Proporción de la población expuesta a $MP_{2.5}$ por encima de determinados umbrales (microgramos/m3), porcentaje, 2019 o último año disponible



Panel B: Exposición media a $MP_{2.5}$ (microgramos/m3), desde 2000



Nota: En el panel A, los países se clasifican por proporción de la población expuesta a $MP_{2,5}$ por encima de 25 microgramos/m^3, por encima de 15 microgramos/m^3 y por encima de 10 microgramos/m^3 —es decir, la población que vive en zonas con concentraciones anuales de partículas finas en el aire que superan los valores de las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire (OMS, 2006[125]). En el panel B, la variación a lo largo del tiempo se calcula usando la exposición media a $MP_{2,5}$ en microgramos/m^3, una medida derivada del estudio Global Burden of Disease (Wang et al., 2020[126]), y ponderada posteriormente con conjuntos de datos reticulares sobre la población del proyecto Global Human Settlement del Centro Común de Investigación (Comisión Europea/Joint Research Centre, 2015[127]). En ambos paneles, el promedio regional de ALC y el promedio de la OCDE los calcula la OCDE.
Fuente: OECD Exposición a $MP_{2.5}$ en los países y regiones (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EXP_PM2_5

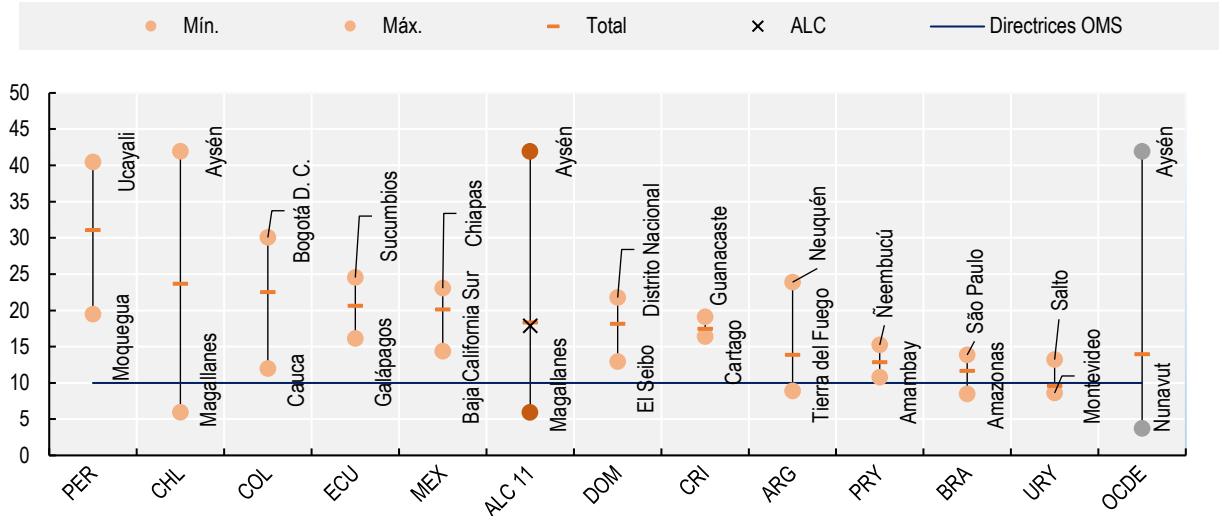
StatLink https://stat.link/o51x8v

La contaminación atmosférica se asocia generalmente con la urbanización, la industria y el transporte. Sin embargo, la combustión de biomasa procedente de las cocinas de los hogares y la agricultura contribuyen a la contaminación atmosférica local de forma considerable (Brezzi and Sanchez-Serra, 2014[128]). Por lo tanto, la exposición a la contaminación atmosférica y sus causas varían enormemente en función de si las personas viven en ciudades o en zonas rurales, o en países desarrollados o en desarrollo. El siguiente grupo de estimaciones se basa en fronteras políticas y administrativas establecidas por unidades de redes territoriales y en las Global Administrative Unit Layers (GAUL), elaboradas por la OCDE y la FAO respectivamente (OCDE, 2020[129]; FAO, 2021[130]).

Según las estimaciones de 2019, en el 90% de las regiones de los países seleccionados, la exposición anual promedio a la contaminación atmosférica fue superior al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 10 µg/m^3 (Gráfico 3.24). Del 10% de regiones restante, más de la mitad se encontraban en Uruguay, el único país del grupo analizado en el que la exposición total es inferior al umbral marcado por la OMS.[22] En algunas regiones de Perú se encuentran valores muy elevados de exposición a materia particulada, pues en ese país, 20 regiones tienen una exposición promedio anual superior a 25 µg/m^3, aunque ocurre lo mismo en Colombia (8) y Chile (6). Como muestra el Gráfico 3.24, se pueden observar disparidades regionales relativamente amplias en Chile, Perú, Colombia y Argentina (por encima de 15 µg/m^3), en oposición a países como Uruguay, Paraguay y Costa Rica (por debajo de 5 µg/m^3). Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, la región más contaminada de Chile, es también la región más contaminada de los países del grupo analizado y la OCDE, de acuerdo con esta medida. La región situada más al sur de Chile, Magallanes, es la menos contaminada del grupo de países analizados, con una exposición media de la población a $MP_{2,5}$ de 6 µg/m^3, es decir un tercio del promedio del grupo de países analizados (18 µg/m^3).[23]

Gráfico 3.24. Los niveles de contaminación atmosférica superan las directrices de la OMS en un 90% de las regiones del grupo de países analizados

Disparidades regionales de la exposición anual media de la población a $MP_{2,5}$ exterior en 2019, µg/m^3



Nota: La exposición media de la población a $MP_{2,5}$ exterior se calcula como una concentración de $MP_{2,5}$ exterior anual media, ponderada por población residente en la zona de la que se trate, es decir, el nivel de concentración, expresado en µg/m^3, al que se expone un residente habitual a lo largo de un año. La cifra "total" del país considera el país como una única entidad, a la que cada región contribuye proporcionalmente. El promedio regional de ALC lo calcula la OCDE.
Fuente: OCDE, Exposición a $MP_{2,5}$ en los países y regiones (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EXP_PM2_5

StatLink https://stat.link/ovux1d

Peligros naturales

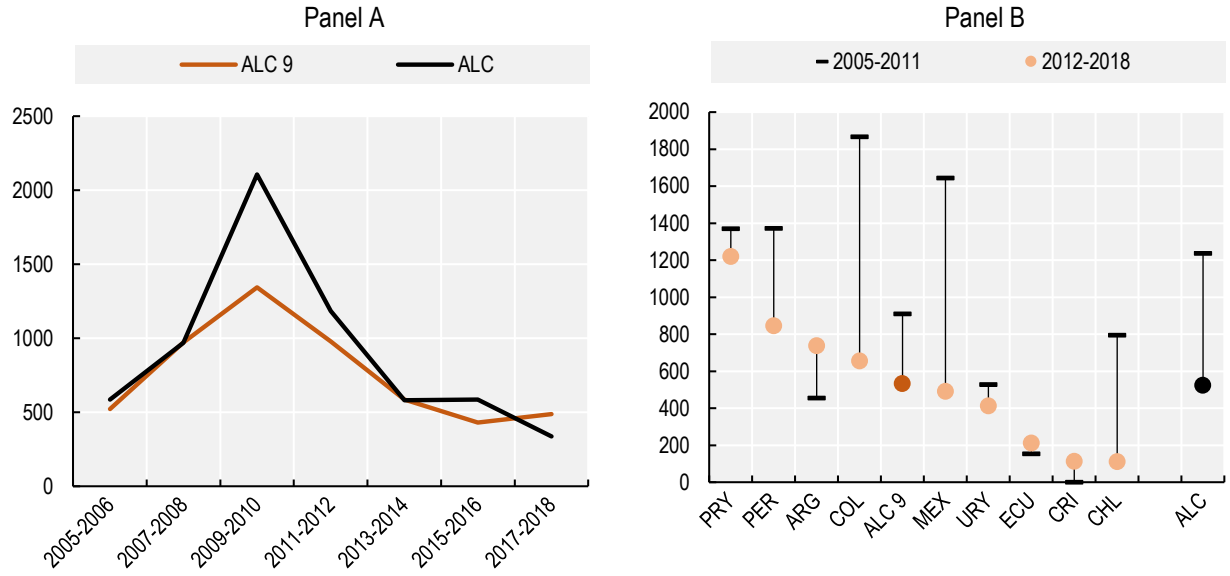
América Latina y el Caribe es una región vulnerable a los peligros naturales. Entre 2000 y 2019, fue la segunda región del mundo más golpeada por fenómenos naturales, con un total de 152 millones de personas afectadas por 1.205 catástrofes naturales, siendo las más habituales las inundaciones (OCHA, 2019[131]). La región se encuentra expuesta a una gran diversidad de catástrofes: entre 1990 y 2020, se registraron 1.412 catástrofes, provocadas por peligros naturales, un 87% de las cuales estaban relacionadas con el clima (a saber, desplazamientos de masas húmedas, tormentas, inundaciones, incendios y temperaturas extremas) y un 13% fueron geofísicas (desplazamientos de masas secas, erupciones volcánicas y terremotos).[24] Las inundaciones fueron las catástrofes más frecuentes y afectaron a cerca de 40 millones de personas. Pese a ser menos frecuentes, las sequías afectaron a cerca de 70 millones de personas (CEPAL, 2021[132]).[25]

Se ha demostrado que el cambio climático está empeorando una serie de fenómenos adversos relacionados con el clima en la región (OCDE, 2019[133]). Como se observa en la sección Vivienda del capítulo anterior, América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta y se prevé que sus áreas metropolitanas corran un mayor riesgo en los próximos años (Fisher and Gamper, 2017[134]). Las ciudades de esta región se sitúan además entre las más desiguales del mundo, al ser el hogar de una mayor concentración de población pobre y, por lo tanto, vulnerable, que puede estar expuesta a peligros naturales (Hardoy and Pandiella, 2009[135]; Fisher and Gamper, 2017[134]). Un amplio porcentaje de la expansión urbana que ha tenido lugar en América Latina en las últimas décadas se ha producido por laderas de montañas, planicies pluviales y otras zonas vulnerables a marejadas o tormentas estacionales (Warn and Adamo, 2014[136]). Algunos ejemplos son ciudades como Quito, en Ecuador (construida en empinadas pendientes al pie del volcán Pichincha) y Santa Fe, en Argentina (que se expande por la planicie pluvial del Río Salado) (Hardoy and Pandiella, 2009[135]). Dentro de las zonas urbanizadas, en muchos de los barrios más afectados residen grupos con bajos ingresos en asentamientos precarios que carecen de acceso a servicios e infraestructuras (OCDE, 2019[133]).

En 2017-2018, el número de fallecidos, personas desaparecidas y afectados directos por catástrofes fue ligeramente inferior al de 2005-2006, aunque durante el período 2009-2010, esta cifra registró un máximo (Gráfico 3.25, panel A), debido fenómenos reiterados de “El Niño-Oscilación del Sur” en los períodos 2006-2007 y 2009-2010 (Cai et al., 2020[137]), junto a fuertes terremotos en Haití y Chile en 2010. En un contexto en el que los datos son tan volátiles y experimentan repuntes frecuentes, analizar cambios puntuales en años concretos puede resultar confuso, motivo por el cual se han agrupado los datos en diferentes años en el Gráfico 3.25, panel B. Durante el período 2012-2018, el número de personas que fallecieron, desaparecieron o se vieron directamente afectadas por catástrofes se situó en 534 personas por 100.000 habitantes en los países analizados, una cifra próxima al promedio regional (524) (Gráfico 3.25, panel B). Sin embargo, esta cifra en Paraguay (1222) es 10 veces superior a la de Chile (112). Con todo, Chile es uno de los tres países del grupo analizado que ha registrado la mayor caída (junto con Colombia y México) si se comparan los datos de 2012-2018 con los de 2005-2011. Este descenso puede atribuirse a repuntes ocasionados por determinados sucesos acaecidos durante el período, como el terremoto de 2010 en Chile, o las inundaciones de Colombia y México (CERF, 2007[138]; IFRC, 2010[139]; IFRC, 2011[140]). Argentina puede sufrir intensas tormentas, con abundantes precipitaciones y episodios violentos de viento y granizo, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que pueden ocasionar incendios forestales. Es uno de los países del grupo analizado en el que el número de personas fallecidas, desaparecidas o directamente afectadas por catástrofes aumentó entre los períodos 2005-2011 y 2012-2018, al registrarse tormentas especialmente mortíferas en 2013 y 2015 (IFRC, 2013[141]; IFRC, 2013[141]; Penn State, 2020[142]). No obstante, los datos contrastados de este indicador deben interpretarse con cautela debido a diferencias metodológicas entre los sistemas de presentación de informes. Por tanto, los países en los que el cambio es más visible a lo largo del tiempo podrían tan solo informar de los datos de manera más precisa, y no estar más o menos preparados para hacer frente a catástrofes de origen natural.

Gráfico 3.25. En general, el número de personas fallecidas, desaparecidas o directamente afectadas por catástrofes en el grupo de países analizados ha disminuido

Personas fallecidas, desaparecidas y directamente afectadas por catástrofes por 100.000 habitantes



Nota: En relación con este indicador, el término "catástrofe" se aplica a "catástrofes repentinas y de inicio lento, frecuentes y no frecuentes, a pequeña y gran escala, provocadas por riesgos naturales o creados por el hombre, así como por peligros y riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados" (UNGA, 2016[143]). Los "fallecimientos" corresponden "al número de personas fallecidas durante la catástrofe o directamente después de esta, como consecuencia directa del suceso peligroso". "Desaparecidos" corresponde "al número de personas cuyo paradero se desconoce desde el suceso peligroso. Incluye a personas que se dan por muertas, de las que no se han encontrado restos físicos, por ejemplo su cadáver, y cuya desaparición se ha denunciado legal u oficialmente ante las autoridades competentes". "Directamente afectadas" corresponde "al número de personas que han sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud; que fueron evacuadas, desplazadas, reubicadas o que han visto dañados de manera directa sus medios de vida o sus activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales" (ONU, 2018[144]). El promedio de la OCDE no se incluye en este gráfico por falta de datos disponibles en relación con diferentes países miembros sobre este indicador en la Base de Datos de Indicadores de los ODS mundiales del DAES de las Naciones Unidas. El promedio ALC 9 excluye a Brasil y la República Dominicana por falta de datos disponibles. El promedio regional de ALC comprende 14 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 9 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. Las diferencias en los sistemas nacionales de presentación de informes pueden influir en las conclusiones que se muestran en relación con cada país.
Fuente: Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

StatLink https://stat.link/4r2qhy

Efectos de la pandemia de COVID-19

Prácticamente 9 de cada 10 latinoamericanos del grupo de países analizados se encuentran expuestos a un nivel de contaminación atmosférica por materia particulada que constituye un riesgo para su salud (Gráfico 3.24). Además, estos elevados niveles de contaminación atmosférica pueden ser un factor de riesgo que empeore los resultados en el caso de contraer el coronavirus (Pozzer et al., 2020[145]; Wu et al., 2020[146]). En 2010, la contaminación atmosférica exterior antes de la pandemia provocó más de tres millones de muertes prematuras en todo el mundo, con una mayor incidencia en ancianos y niños. Las proyecciones de la OCDE indican que esta cifra se duplicará, o incluso se triplicará, de aquí a 2060 (OCDE, 2016[147]). Los datos muestran que las concentraciones de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en la atmósfera en las ciudades de América Latina disminuyeron durante las cuarentenas —sobre todo al principio—, mientras que los niveles de $MP_{2,5}$ no muestran una tendencia general clara ni antes del período de restricciones ni durante este (CEPAL, 2020[148]). El descenso de la contaminación atmosférica aliviará temporalmente los problemas de las personas con afecciones respiratorias o asma, que se consideran

más susceptibles al COVID-19, además de reducir los efectos secundarios negativos de la contaminación, como son el aumento de la inflamación y el descenso de la inmunidad (Glencross et al., 2020[149]). No obstante, a medida que los países comiencen a recuperarse de la pandemia, la reanudación de los viajes en avión, los desplazamientos de las personas dentro de las ciudades y entre estas, y la recuperación de los niveles de producción de las fábricas redundarán en un aumento de la contaminación atmosférica exterior (OCDE, 2020[150]).

Aunque la contaminación del aire ambiente durante los confinamientos por la pandemia está bastante bien documentada (Amoatey et al., 2020[151]), los estudios sobre la contaminación atmosférica interior son relativamente escasos —en particular, en América Latina y el Caribe—. Sin embargo, constituye un importante problema en los países de ingresos bajos y medios, y si las personas pasan más tiempo en sus hogares, la importancia de la contaminación atmosférica interior adquiere nueva relevancia, pues la población estará más expuesta a ella (Du and Wang, 2020[152]). De acuerdo con los datos contrastados extraídos de estudios internacionales, entre los factores importantes que pueden incidir en la contaminación atmosférica interior están el consumo de combustibles en el hogar o de combustibles para la calefacción o para cocinar (Shen et al., 2017[153]; Du et al., 2018[154]), cocinar con aceite (Zhao et al., 2019[155]), fumar (Kanchongkittiphon et al., 2015[156]) y el uso de sistemas domésticos de ventilación o aire acondicionado (Zhang et al., 2011[157]; Liu et al., 2018[158]).

Un servicio básico, la gestión efectiva y sensata desde el punto de vista ambiental de los residuos, resulta especialmente importante a la hora de responder a emergencias como la pandemia de COVID-19. Durante el brote, surgieron diversos tipos de riesgos adicionales (como los residuos médicos), entre ellos guantes, mascarillas y equipos de protección. Las instalaciones de tratamiento de residuos de la región presentan importantes deficiencias y una gestión insensata de este tipo de residuos podría tener efectos colaterales imprevistos en el medioambiente, así como en la salud de la población. Se han identificado varias medidas como prioridades regionales en materia de política ambiental durante la fase de recuperación pos-COVID-19, entre ellas el cierre progresivo de vertederos, aumentar la capacidad de tratamiento de residuos sanitarios, fortalecer la resiliencia del sector de los residuos, dar prioridad a los enfoques circulares y promover marcos institucionales para una gestión sostenible de los residuos (UNEP, 2020[159]).

La protección de la biodiversidad de la región será esencial en el proceso de recuperación de la pandemia. Tal como se comenta de forma pormenorizada en el Capítulo 4 sobre recursos para el bienestar futuro, América Latina es una de las regiones más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y ecosistemas. La biodiversidad es un pilar del bienestar actual y futuro, así como de la prosperidad económica, y resulta fundamental que sea un componente clave de los planes regionales de respuesta al COVID-19 y posterior recuperación (OCDE, 2018[160]). Su protección también es vital para evitar la próxima pandemia, ya que cerca de tres cuartas partes de las enfermedades contagiosas que aparecen en los seres humanos proceden de otros animales. La explotación de los animales salvajes y el aumento de los cambios en el uso del terreno aumentan el riesgo de que surjan enfermedades contagiosas, al acercar los animales domésticos y las personas a animales salvajes portadores de patógenos y alterar procesos naturales que contribuyen a mantener las enfermedades bajo control (OCDE, 2020[161]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

Un conjunto idóneo de indicadores sobre la calidad del medioambiente en América Latina y el Caribe facilitaría información sobre el acceso de la población a servicios e infraestructuras ambientales (OCDE, 2020[39]), en particular en relación con la calidad del agua y con zonas verdes de recreo. Esto último es aún más pertinente en el contexto del COVID-19, puesto que debido a las condiciones de los confinamientos, se ha restringido la movilidad, y los parques y espacios públicos podrían estar cerrados. Tal como se menciona en la sección sobre Vivienda del Capítulo 2 de este informe, América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo y sus ciudades suelen verse afectadas por una

segregación social y espacial (Loret de Mola et al., 2017[162]). Durante la pandemia, muchas familias urbanas de América Latina se confinaron en apartamentos pequeños cuya construcción es, a menudo, deficiente. El acceso a servicios básicos en estas condiciones constituye claramente una preocupación principal, pero también el acceso a zonas verdes, puesto que se ha vinculado con numerosos beneficios para la salud y el bienestar, entre ellos la relajación psicológica, la reducción del estrés, el aumento de la actividad física, la mitigación de la exposición a la contaminación atmosférica, del calor y del ruido excesivos, la mejora del capital social y las conductas responsables con el medioambiente (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2016[113]; Engemann et al., 2019[114]). Pese a que actualmente no existe una definición universalmente aceptada de zona verde,[26] estudios recientes han ayudado a evaluar el acceso a zonas verdes en las ciudades europeas usando datos satelitales (Poelman, 2018[163]). El método en el que se basan determina una zona situada a una distancia que se pueda caminar fácilmente —a 10 minutos a pie (a una velocidad promedio de 5 km por hora)— cerca de un polígono habitado de Urban Atlas (Copernicus Land Monitoring Service, 2021[164]). Las zonas urbanas se definen como ciudades con un casco urbano de 50.000 habitantes como mínimo (Dijkstra and Poelman, 2012[165]).

La exactitud de las estimaciones sobre exposición a la contaminación atmosférica que se muestran en este capítulo fluctúa de manera considerable según el lugar del que se trate. En todo el mundo, la exactitud es especialmente deficiente en zonas con pocas estaciones de seguimiento y, en general, es buena en regiones con densas redes de estaciones de seguimiento (p. ej., en las economías más avanzadas) (Shaddick et al., 2018[166]). Por otra parte, en el caso de algunas regiones, singularmente zonas nevadas, las islas pequeñas y las zonas costeras, no hay estimaciones de la concentración de $MP_{2,5}$ relativas a parte de la región, porque las mediciones por satélite de la profundidad óptica de aerosoles no son fiables en zonas en las que la cubierta terrestre dominante es muy reflectante (Mackie, Haščič and Cárdenas Rodríguez, 2016[167]).

Las desigualdades en cuanto a exposición a la contaminación atmosférica, en especial en función del género, la edad y la educación, son difíciles de presentar debido a la naturaleza de los datos —que se recaban a niveles espaciales cada vez más precisos, pero no pueden atribuirse a personas u hogares específicos (y, por lo tanto, no se pueden desglosar de acuerdo con las características de los hogares y las personas)—. En 2018, la OCDE puso en marcha el proyecto “The Geography of Well-Being”, destinado a crear una completa base de datos con la exposición a riesgos ambientales desglosada por condición socioeconómica, usando métricas armonizadas entre diferentes países, y que puede considerarse un primer paso en este sentido (OCDE, 2020[39]).

Compromiso cívico

El compromiso cívico permite a la población manifestar su opinión y contribuir a la vida política de su sociedad. La manifestación de las ideas políticas es una de las libertades y los derechos básicos que la población tiene motivos para valorar (Sen, 1999[168]). Es más probable que las personas respalden una decisión y la consideren justa cuando han tenido la oportunidad de participar en ella (Stutzer and Frey, 2006[169]). El compromiso cívico también puede aumentar la sensación que tiene la población de eficacia personal y control sobre sus vidas (Barber, 1984[170]), además de conferirles un sentido de pertenencia a su comunidad, confianza en los demás y un sentimiento de inclusión social.

Con algunas excepciones, América Latina ha avanzado de manera considerable en lo que se refiere a otorgar a los ciudadanos la posibilidad de manifestar su opinión política, al alejarse en las últimas dos décadas de las dictaduras militares, las violaciones de los derechos humanos y los conflictos internos. De hecho, la mayoría de la población de América Latina vive actualmente en una democracia y, según una evaluación reciente de *Economist Intelligence Unit*, las democracias de Costa Rica y Uruguay se sitúan entre las más sólidas del mundo (EIU, 2020[171]).

No obstante, la insatisfacción con la esfera pública ha sido motivo de disturbios sociales en los últimos años, a menudo en relación con la limitada capacidad del Estado para garantizar su monopolio de la violencia y dirigir sus instituciones de acuerdo con el imperio de la ley (CEPAL, 2021[172]) Esta insatisfacción podría socavar la gobernanza y la forma en que funcionan las democracias: por ejemplo, la proporción de la población que ha manifestado su opinión a un funcionario público ha caído desde aproximadamente 1 de cada 5 personas a 1 de cada 6 en los países del grupo analizado durante la pasada década. Tal como se describe en la sección sobre Ingresos y consumo del Capítulo 2, el escaso avance en la reducción de la desigualdad durante la pasada década ha afectado la percepción que tiene la población sobre la justicia en sus sociedades, así como su confianza en las instituciones públicas (CEPAL, 2013[42]; Busso and Messina, 2020[173]). Esta percepción de ausencia de justicia y legitimidad en las democracias de América Latina contribuye a la creencia de que las élites económicas y políticas disfrutan de privilegios que se le niegan a la mayoría de los ciudadanos, y que las instituciones públicas son coto de unos pocos grupos poderosos que las emplean en su propio beneficio.

Desde 2019, varios países de la región experimentaron una oleada de movilizaciones y protestas ciudadanas, lideradas normalmente por jóvenes que exigían un cambio, en particular con respecto a las desigualdades estructurales persistentes y a la sensación de que los gobiernos no atendían las necesidades de todos los ciudadanos. Actualmente, reviste suma importancia satisfacer las expectativas ciudadanas, puesto que los segmentos más vulnerables de la sociedad han sido los más golpeados por la crisis. Los gobiernos deben dar prioridad a una participación del público efectiva, inclusiva y no discriminatoria en la toma de decisiones, a fin de garantizar la legitimidad institucional, la manifestación de las ideas políticas y la estabilidad a largo plazo.

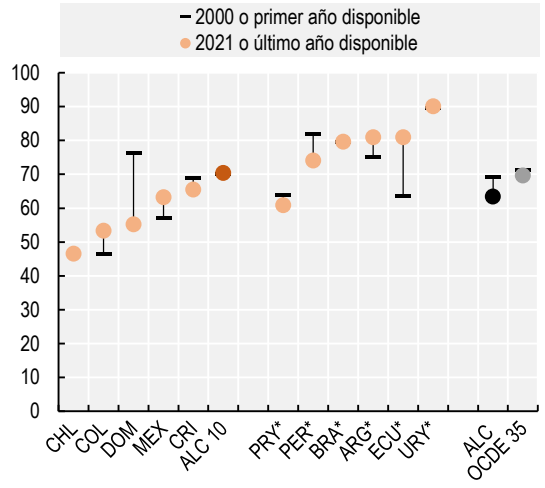
Participación política

La forma más fundamental de implicación democrática es la participación en las elecciones nacionales. La participación electoral difiere enormemente entre los diferentes países analizados, lo cual refleja en parte las divergencias entre los sistemas electorales, entre otras la imposición del voto obligatorio.[27] En los últimos años, la participación electoral osciló entre el 47% de Chile (donde no es obligatorio votar desde 2012) y el 90% de Uruguay (donde sí es obligatorio e incluso se imponen sanciones) (Gráfico 3.26, panel. A). En promedio, 7 de cada 10 personas inscritas en el censo electoral en el grupo de países analizados participaron en las últimas elecciones (70%), una proporción que se ha mantenido relativamente estable durante las últimas dos décadas. Esta estabilidad enmascara incrementos de entre 6 y 7 puntos porcentuales en Argentina, México y Colombia, y un aumento de 17 puntos en Ecuador. Aunque en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, la participación electoral en Ecuador superó considerablemente la registrada hace 20 años, fue muy inferior en Perú (-8 puntos porcentuales) y la República Dominicana (-21) (IDEA, 2021[174]).[28]

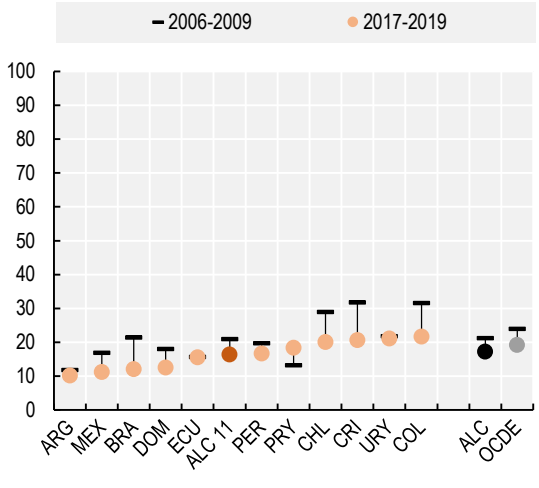
No obstante, el voto es solo un elemento de expresión política y el contacto con los funcionarios públicos también es una forma importante de compromiso cívico (OCDE, 2020[39]). En el grupo de países analizados, la proporción de la población que declara haber manifestado su opinión a un funcionario público era 3 puntos porcentuales inferior a la de los países de la OCDE en 2017-2019, del 16% en promedio (Gráfico 3.26, panel. B). Durante este período, las proporciones se situaron entre el 10% de Argentina y el 22% de Colombia. Desde 2006-2009, el único país que registró un aumento fue Paraguay (de 5 puntos porcentuales), lo que elevó su proporción ligeramente por encima del promedio del grupo de países analizados. La proporción de la población que declara haber manifestado su opinión a un funcionario público se mantuvo relativamente estable en Ecuador y Uruguay, así como en Argentina, cuya cifra se situó entre las más bajas del grupo de países analizados. En el resto del grupo analizado, la proporción de la población que manifestó su opinión a un funcionario descendió considerablemente entre 2006-2009 y 2017-2019, en particular en Colombia y Costa Rica, donde cayó 10 puntos porcentuales o más y, aun así, siguió siendo relativamente elevada.

Gráfico 3.26. La participación electoral se ha mantenido estable en términos generales en la mayoría de los países del grupo analizado, aunque la proporción de la población que manifestó su opinión a un funcionario público ha descendido significativamente en los últimos años

Panel A: Votos emitidos entre la población inscrita en el censo electoral, porcentaje



Panel B: Proporción de la población que declara haber manifestado su opinión a un funcionario, porcentaje



Nota: En el panel A, no se incluye a Chile en el promedio de ALC por un cambio en la legislación nacional en 2012 (Ley n.° 20.568) debido al cual los resultados anteriores no son comparables. El último año del que hay datos disponibles es 2020 en el caso de la República Dominicana y Perú, 2019 en el de Argentina y Uruguay, 2018 en el de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay, y 2017 en el caso de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Argentina; 2002 en el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador; 2003 en el de Paraguay; 2004 en el de Uruguay; y 2013 en el de Chile. El término "elecciones nacionales" se refiere a elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y la República Dominicana, y a elecciones parlamentarias en todos los demás países considerados. Los países en los que es obligatorio votar se han marcado con un "*". El promedio regional de ALC comprende 32 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. OCDE 35 excluye a Chile y Japón, por interrupciones en las series. En el panel B, los datos hacen referencia a la proporción de población que respondió "sí" a la pregunta: "¿Ha incurrido en alguna de las siguientes acciones durante el pasado mes? ¿Manifestar su opinión a un funcionario público?". El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Base de datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2020, https://www.idea.int/ (panel A) y Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel B)

StatLink https://stat.link/kv96za

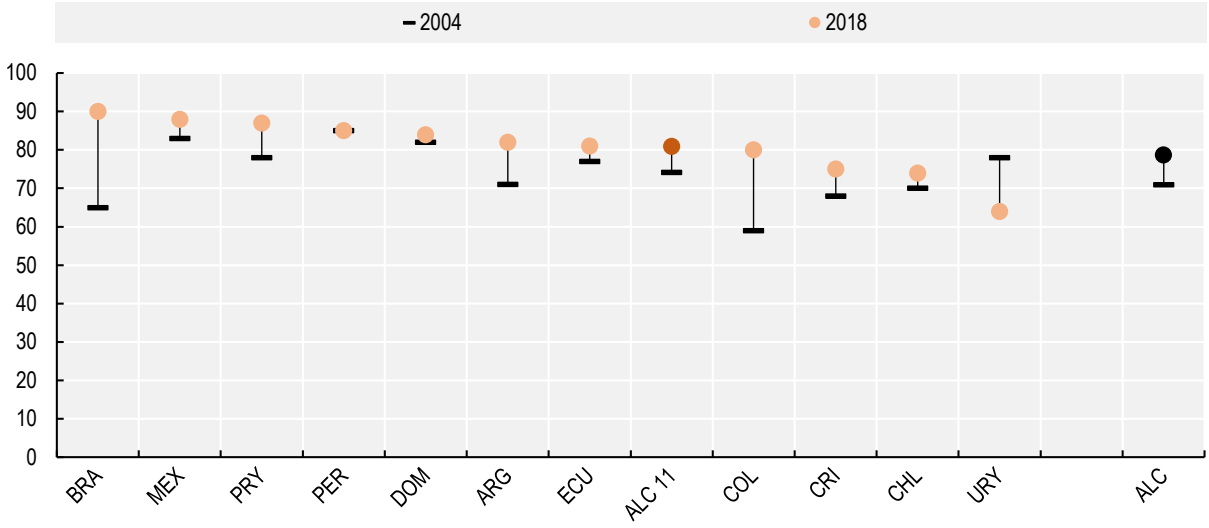
Gobierno inclusivo

Pese a que los 11 países del grupo analizado son democracias electorales, su experiencia democrática suele ser relativamente reciente y sigue existiendo la sensación de que el proceso político está dominado por grupos poderosos que pocas veces rinden cuentas sobre las decisiones que adoptan. Ante la pregunta "En términos generales, ¿diría que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio o que se gobierna en beneficio de toda la población?", 4 de cada 5 personas (81%) del grupo de países analizados se decanta por la primera opción, en promedio y, en el caso de Brasil, este porcentaje alcanza prácticamente el 90%. Chile, Costa Rica y Uruguay son los únicos países en los que esta cifra se sitúa en el 75% o menos (Gráfico 3.27).

La proporción de la población que considera que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio aumentó en ocho países del grupo analizado entre 2004 y 2018 y se mantuvo relativamente estable (en niveles altos) en la República Dominicana y Perú, mientras que en Uruguay descendió del 78% al 64%. Entre los aumentos más destacados que se registraron entre estos dos años están los casos de Argentina (11 puntos porcentuales), Colombia (21 puntos) y Brasil (25 puntos) (Gráfico 3.27).

Gráfico 3.27. En los países del grupo analizado, la mayoría de las personas considera que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio

Proporción de la población que considera que su país está gobernado en beneficio de los poderosos, porcentaje



Nota: El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

StatLink https://stat.link/ic8bfn

Efectos de la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha alterado los procesos electorales de una serie de países latinoamericanos y ha provocado el aplazamiento de las citas electorales en Chile, la República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Incluso en los casos en los que llegaron a celebrarse elecciones, hubo perturbaciónes importantes, desde cambios en la participación electoral hasta dificultades para que los candidatos hiciesen campaña (Querido, 2020[175]). Además, cada país adoptó su propio método de introducción de medidas de seguridad cautelares, que generalmente incluían el mantenimiento de la distancia social, el uso de mascarillas, la desinfección, el control de la temperatura y los lápices de un solo uso para votar (IDEA, 2020[176]). Algunos países también ampliaron el horario de votación, aumentaron el número de colegios electorales, ofrecieron colegios electorales móviles o incluso realizaron los preparativos necesarios para que se pudiese votar de manera anticipada, en especial en el caso de determinados grupos en situación de riesgo (Asplund et al., 2021[177]; López-Calva, 2021[178]).

Aunque estos preparativos especiales para votar resultaron útiles para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en los calendarios electorales, no se aplicaron de manera sistemática en los distintos países de América Latina. Los casos en los que esto resultó especialmente problemático fueron, entre otros, los períodos de cuarentena para los votantes que recientemente habían regresado del extranjero o habían dado positivo en una prueba y a los que, en consecuencia, se privó de su derecho de voto (Asplund et al., 2020[179]).

Según los primeros datos contrastados, obtenidos de 14 elecciones parlamentarias y presidenciales, la pandemia puede haber afectado la conducta de voto de la región (López-Calva, 2021[178]). Si se comparan las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia con los promedios históricos, la participación electoral mostró un leve incremento en la mitad de los países, y se redujo en la otra mitad. Sin embargo, si se comparan con elecciones anteriores, la mayoría de estos países (11) vieron reducida la participación electoral y, si se comparan con los promedios históricos o elecciones anteriores, estos descensos fueron

superiores a los incrementos (López-Calva, 2021[178]). Sería importante que, cuando corresponda, se analicen también más detenidamente los datos desglosados, para valorar los cambios en el comportamiento de los votantes de diferentes grupos de población.

Pese a que puede haber varios factores transversales subyacentes a estas conclusiones, un punto de partida para la reflexión es que la confianza en los procesos electorales ya era frágil antes de la pandemia (LAPOP, 2021[180]), en un contexto de creciente malestar social. Aunque en el período 2009-2013 hubo indicios de un mayor optimismo y confianza, el desencanto y la polarización política han ido en aumento en los últimos años (CEPAL, 2021[172]). Los países que han reducido las oportunidades de participación del público en la adopción de decisiones deberían invertir dicha tendencia, observando las ventajas que ofrece una gobernanza más inclusiva, el empoderamiento de los ciudadanos y, en consecuencia, una mayor legitimidad del gobierno.

El espacio cívico está considerado como un componente central de cualquier sociedad democrática y abierta, y está protegido por las libertades fundamentales de asociación, reunión y expresión (OCDE, 2020[181]; CIVICUS, 2021[182]). En toda la región, determinadas respuestas de emergencia para contener la pandemia han derivado, en ocasiones, en una restricción de las libertades (OCDE, 2020[181]; ICNL, 2021[183]). Resulta fundamental que estas medidas se sometan a cláusulas de extinción (es decir, que se limiten en el tiempo) y sean estrictamente proporcionales, a fin de proteger el espacio cívico y permitir que se restaure la participación pública cuando corresponda. Los datos contrastados indican que existe una correlación positiva entre la protección del espacio cívico y los niveles de desarrollo económico y humano de un país (BTEAM, 2021[184]). Entre los ejemplos de posibles amenazas para el espacio cívico durante la pandemia en América Latina están la menor capacidad de los ciudadanos para manifestar colectivamente su opinión sobre las respuestas del gobierno —puesta de manifiesto por las denuncias de abuso de la fuerza—, así como las restrictivas normas en materia de desinformación en relación con el COVID-19 sobre la libertad de expresión (OCDE, 2020[181]; CIVICUS, 2021[185]; ICNL, 2021[183]).

Por último, los datos de 2020 de la Encuesta Gallup Mundial sobre la proporción de la población que ha manifestado su opinión a un funcionario muestran, en promedio, una variación relativamente escasa en términos interanuales con respecto a 2019 en el grupo de países analizados (del 17% ambos años) . Este indicador aumentó 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 21%, en Brasil, pero descendió en esa misma medida en Colombia y Costa Rica, hasta el 19% y el 16%, respectivamente (Gallup World Poll, 2021[97]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

Un grupo idóneo de indicadores sobre compromiso cívico mediría si los ciudadanos participan en una serie de actividades cívicas y políticas importantes que les permitan definir la sociedad en la que viven. En democracias que funcionan correctamente, el compromiso cívico configura las instituciones que rigen la vida de las personas. La calidad de estas instituciones *per se* se trata en la sección sobre Capital social del Capítulo 4.

Ejercer el voto es la forma más tradicional de expresión política. Al igual que expresar la opinión propia ante un funcionario público, también son importantes otros métodos de expresión ciudadana, como firmar una petición, asistir a una reunión o manifestación política y participar en campañas o protestas a través de las redes sociales (Boarini and Díaz, 2015[186]). El *Manual del Grupo de Praia de Estadísticas sobre Gobernanza* de 2020 (ONU, 2020[187]) ofrece pautas para las oficinas de estadística sobre cómo medir la participación política, así como sobre otros aspectos de la gobernanza. Sin embargo, los datos oficiales comparables en este ámbito todavía están muy poco desarrollados. Con respecto a los países europeos, se encuentran disponibles medidas comparables de estas formas de participación (gracias a la Encuesta Europea sobre Calidad de Vida) y, de cara al futuro, serían enormemente pertinentes medias similares relativas a América Latina y el Caribe, en particular tras los disturbios sociales registrados en 2019. Análisis basados en 30 países europeos muestran que las actitudes de la población con respecto a su

capacidad para influir en la vida política y participar en ella —o a su "eficacia política"— inciden en su comportamiento político, que abarca distintas formas de participación (Prats and Meunier, 2021[188]).

Otros datos utilizados en países de la OCDE en relación con este campo de estudio proceden de encuestas acerca de "tener influencia sobre la acción del gobierno". El indicador utilizado en la publicación de referencia *¿Cómo va la vida?* (OCDE, 2020[39]) se ha obtenido de la PIAAC, que solo se realiza cada 10 años y cuyas últimas ediciones principales fueron llevadas a cabo por la OCDE en 2012. La Encuesta Social Europea (ESS), que se realiza cada dos años, incluye una pregunta similar ("¿En qué medida diría usted que el sistema político en *[país]* permite que las personas como usted tengan algo que decir en lo que hace el gobierno?"), pero solo abarca los países europeos. En futuras ediciones, la PIAAC empleará también una pregunta con una redacción similar para aumentar la comparabilidad. Hasta ahora, la medida sobre tener influencia en la acción del gobierno incluida en el informe *¿Cómo va la vida?* se refiere únicamente a una creencia en la capacidad de respuesta (externa) de las instituciones públicas y los funcionarios públicos a las demandas de los ciudadanos, pero dejando al margen la sensación (interna) de tener competencia personal para participar en la política (Hoskins, Janmaat and Melis, 2017[189]). Sin embargo, el informe *Panorama de las Administraciones Públicas* de la OCDE también incluye una medición de la eficacia política interna de los países europeos (OCDE, 2019[190]). En la revisión de 2019 de la lista del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se añadieron aspectos tanto internos como externos en el marco del Objetivo 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) (OCDE, 2020[39]; ONU, 2020[191]). Los análisis de la exactitud y la validez de las medidas de eficacia política disponibles mostraron que estos indicadores podían expandirse a otras regiones fuera de Europa (González, 2020[192]).

Relaciones sociales

Las relaciones sociales son esenciales para el bienestar de la población. Más allá del placer intrínseco que sienten las personas al pasar tiempo con otras, quienes cuentan con amplias redes de apoyo tienen mejor salud, suelen vivir más tiempo y tienen más probabilidades de conseguir un empleo. La ausencia de relaciones sociales, por el contrario, empeora la salud física y mental de las personas (Cacioppo, Hawkley and Thisted, 2010[193]).

Estudios sobre las relaciones sociales en América Latina destacan la relevancia de la amistad para las personas en su empeño por salir de la pobreza (Garcia et al., 2016[194]). Más concretamente, las relaciones sociales inciden de manera importante en las estrategias de supervivencia de los hogares vulnerables para mitigar la pobreza. El sentido de comunidad y "unión" en las sociedades de América Latina queda demostrado por el gran valor que se le otorga a la familia y los amigos, y su influencia en las decisiones vitales de las personas (Husted, 2002[195]). De igual manera, las redes informales suelen ser un vector en relación con la transferencia de recursos entre amigos y familiares (Uthoff and Beccaria, 2007[196]). En términos de comportamiento económico, los autores mencionan además que los latinoamericanos prefieren entablar amistad a participar en operaciones comerciales (Ogliastri, 1997[197]). En otras esferas de la vida como la salud, el apoyo social de los amigos tiene una influencia positiva en el cuidado de las enfermedades crónicas, por medio de apoyo informativo, material, emocional y afectivo (Vega Angarita and González Escobar, 2009[198]).

Las conclusiones de esta sección indican que el apoyo de las redes sociales en los países del grupo analizado es relativamente alto y próximo al promedio de la OCDE, con una escasa variación a lo largo del tiempo. Durante la pandemia de COVID-19, muchos latinoamericanos soportaron prolongadas restricciones debido a los confinamientos, lo que influyó en su capacidad para mantener relaciones sociales con personas diferentes a los familiares inmediatos. Aunque durante una pandemia se pueden aprovechar las tecnologías en línea para prestar apoyo social y tener un sentido de pertenencia, las

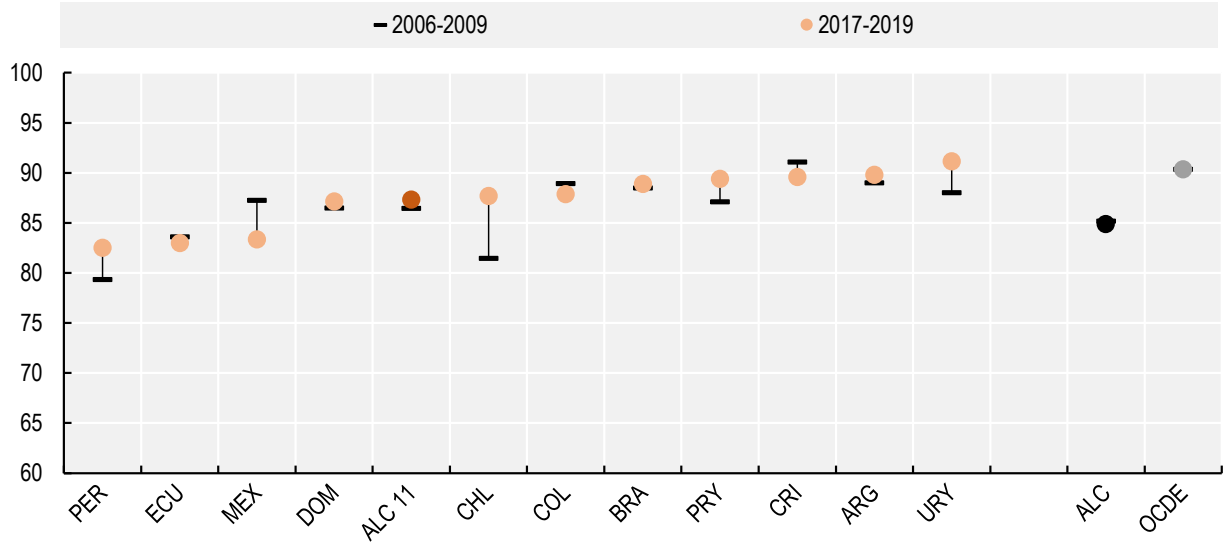
disparidades en cuanto a acceso o dominio de los recursos digitales siguen siendo motivo de preocupación importante en esta región.

Apoyo de las redes sociales

La proporción de la población que afirma tener familiares o amigos con los que puede contar para que le ayuden cuando lo necesite experimentó pocos cambios en el grupo de países analizados entre 2006-2009 y 2017-2019, en gran medida igual que el promedio de la OCDE. Esta cifra, que en 2017-2019 era del 87%, se mantuvo 3 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE y fue similar al promedio regional, del 85% (Gráfico 3.28). El porcentaje de apoyo de las redes sociales más elevado se registró en Uruguay (un 91%), aunque fue considerablemente inferior en Perú, Ecuador y México (un 83%). La estabilidad general de esta medida del apoyo social en los diferentes países del grupo analizado durante este período oculta patrones divergentes a nivel nacional. En Chile, el apoyo de las redes sociales aumentó 6 puntos porcentuales, más que en ningún otro país del grupo analizado. Por otra parte, en México descendió 4 puntos (Gráfico 3.28).

Gráfico 3.28. El apoyo de las redes sociales ha experimentado pocos cambios en el grupo de países analizados desde 2006-2009 y sigue siendo ligeramente inferior al promedio de la OCDE

Proporción de la población que afirma tener familiares o amigos con los que puede contar para que le ayuden cuando lo necesita, porcentaje



Nota: Los datos hacen referencia a la proporción de consultados que respondieron "sí" a la pregunta: "Si estuviera usted en dificultades, ¿tiene familiares o amigos con los que poder contar para que lo ayuden cuando lo necesite, o no?". El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/r0mdt9

Pese a estas conclusiones, otros datos contrastados indican que además de las redes de apoyo, hay otros aspectos de las relaciones sociales que son importantes para el bienestar de la población y se encuentran especialmente presentes en determinados países de América Latina. Según Rojas (2019[199]), las personas encuentran un sentido de identidad y propósito a través de "relaciones interpersonales cercanas y cordiales basadas en la persona" (calidad) y transmiten emociones positivas a otras personas gracias al número y la frecuencia de sus relaciones (cantidad). Encuestas representativas realizadas en

2018 en Colombia, Costa Rica, México y a población blanca o caucásica de los Estados Unidos indican también que la calidad de las relaciones interpersonales es más alta en los países de América Latina que en los Estados Unidos (Rojas, 2019[199]). Un 65% de los consultados de países participantes de América Latina estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: "En esta sociedad, las relaciones interpersonales son cordiales y cercanas", frente a solo un 38% de los blancos o caucásicos de los Estados Unidos. Al centrar la atención en tipos específicos de relaciones personales, como tener una familia extensa, un 62% de los latinoamericanos afirmó haber visitado a sus abuelos a menudo o muy a menudo durante su infancia, frente a solo un 42% de los blancos o caucásicos de los Estados Unidos (Rojas, 2019[199]).

Además, la calidad de las relaciones sociales de las personas está vinculada a su sensación de soledad, un patrón que se mantiene independientemente de la edad de las personas (OCDE, 2019[200]). La soledad y el aislamiento están relacionados con una serie de factores, como el descenso del nivel de movilidad y actividad diaria, el aumento de la incidencia de la depresión y el riesgo de fallecimiento (OCDE, 2019[200]). Pese a que no existen datos oficiales comparables sobre estos temas en América Latina, estudios *ad-hoc* han permitido evaluar la percepción de soledad entre determinados grupos de edad de esta región. La Encuesta Mundial de Salud Escolar, por ejemplo, concluyó que aproximadamente 1 de cada 6 alumnos de América Latina y el Caribe manifestaba estar solo la mayoría o la totalidad del tiempo o no tener amigos cercanos (Sauter, Kim and Jacobsen, 2019[201]) —a pesar del hecho de que una proporción relativamente amplia de latinoamericanos en comparación con los países anglosajones o de Europa occidental suele vivir con sus padres— (Helliwell, Layard and & Sachs, 2018[202]). La prevalencia de la soledad entre los adultos de edad más avanzada (de 65 años o más) es en América Latina de entre un 25% y un 32%, cifras considerablemente superiores en el caso de las mujeres, viudas, personas con un menor nivel de formación y quienes menos propiedades poseen en su hogar (Gao et al., 2020[203]). Según (Gerst-Emerson and Jayawardhana, 2015[204]), el aislamiento social de los adultos de edad más avanzada constituye un "grave problema de salud pública" debido a su mayor riesgo de padecer problemas de salud cardiovasculares, del sistema autoinmune, neurocognitivos y mentales.

La digitalización ya está influyendo en la forma en que interactúan entre sí las personas. La frecuencia de las interacciones a través de las redes sociales ha aumentado, y podría seguir haciéndolo conforme aumenta el acceso a tecnologías de interacción social. Estas tecnologías promueven la creación de una red más amplia, pero con vínculos más débiles, en lugar de redes más pequeñas con vínculos más fuertes (OCDE, 2019[71]). Solo unas pocas encuestas sobre uso del tiempo piden a los consultados que informen del uso de tecnología de la información (OCDE, 2020[39]). Sin embargo, existen datos contrastados que demuestran que el uso de las redes sociales en Internet en América Latina es mayor que en cualquier otra región del mundo (en el segundo trimestre de 2019, el 100% de las personas de entre 16 y 64 años había usado o visitado una red social en Internet durante el mes anterior (Global Web Index, 2019[205]) y un 54% declaró "estar en contacto con lo que hacían sus amigos" como el motivo principal para usarlas, mientras que un 66% declaró seguir a personas que conocían en la vida real, más que a marcas (51%), cantantes, músicos y grupos (49%) (Global Web Index, 2019[205]).

Así pues, estas conclusiones implican que se necesitan esfuerzos mucho mayores para obtener datos comparables y nacionalmente representativos de alta calidad sobre las relaciones sociales y las diferentes facetas de apoyo social que se encuentran actualmente a disposición de las personas. Las medidas oficiales sobre estos temas son deficientes no solo en la región de América Latina y el Caribe, sino también en los diferentes países de la OCDE (véase más adelante una disertación al respecto).

Efectos de la pandemia de COVID-19

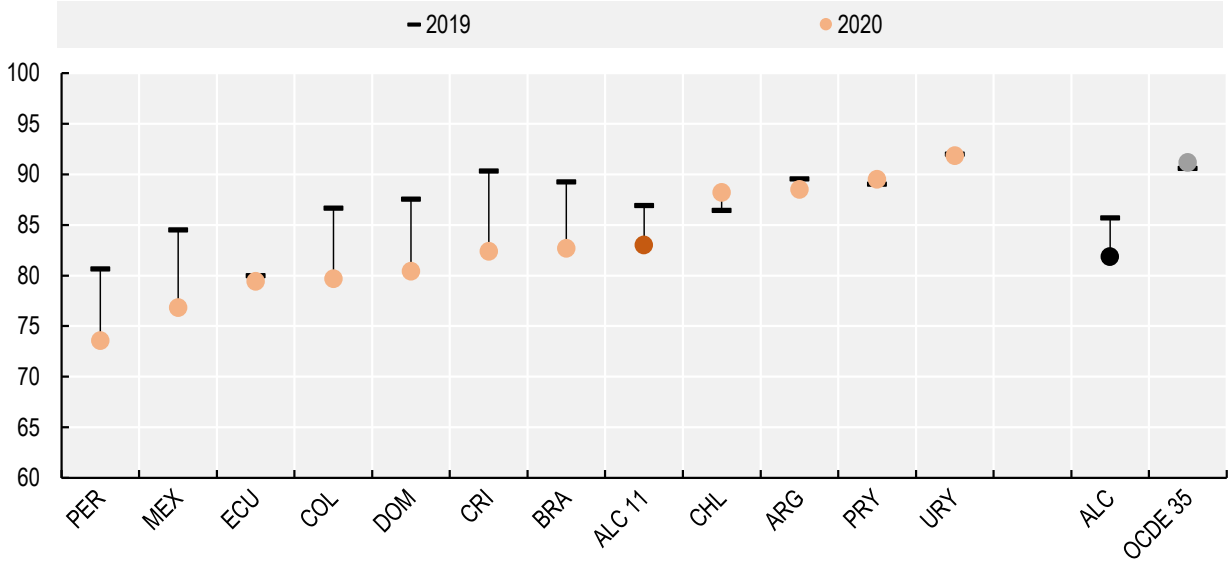
Durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, los latinoamericanos soportaron algunos de los confinamientos más largos del mundo (Parkin, Phillips and Agren, 2020[206]). Además, estuvieron sujetos a algunas de las restricciones más estrictas en términos de movilidad y contacto con otras personas durante la primavera del año 2020, cuando cerca del 85% de la población de esta región se mantuvo

distanciada de amigos y familiares (Hale et al., 2021[207]; Alicea-Planas, Trudeau and Vásquez Mazariegos, 2021[208]). Tanto el distanciamiento social voluntario como las políticas de confinamiento obligatorio han tenido repercusiones en la capacidad de las personas para mantener las relaciones sociales, más allá de los miembros de la familia más próximos, ya fuera en busca de apoyo instrumental o emocional, o sencillamente para tener compañía (OCDE, 2020[209]).

El Gráfico 3.29 muestra que, en 2020, una mayoría de la población consideraba que tenía personas con las que contar cuando lo necesitaban y el promedio se situó en el grupo de países analizados en un 83%, desde el 74% de Perú al 92% de Uruguay. Sin embargo, esta proporción desciende considerablemente (en 4 puntos porcentuales) con respecto a 2019, con fuertes caídas en México y Costa Rica (-8 puntos porcentuales), así como en Brasil, Colombia, la República Dominicana y Perú (-7 puntos), (Gráfico 3.29).[29]

Gráfico 3.29. En el grupo de países analizados, la mayoría de la población considera que puede contar con otras personas cuando lo necesita, aunque este porcentaje disminuyó tras la pandemia

Proporción de la población que afirma tener familiares o amigos con los que puede contar para que le ayuden cuando lo necesita, porcentaje



Nota: En todos los países del grupo analizado, el modo de recabar los datos varió entre 2019 y 2020 (se pasó de entrevistas personales a telefónicas). Como consecuencia, algunos países pueden haber modificado el conjunto de personas consultadas de maneras que no se pueden ajustar usando técnicas de ponderación (Srinivasan and Clifton, 2020[37]; Helliwell et al., 2021[38]). Se dispone de más de 500 observaciones con respecto a todos los países. Las fechas de recolección de datos en 2020 son las siguientes: 7 sep. – 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. – 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. – 16 nov. de 2020 en Chile; 21 ago. – 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 – 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 24 sep. – 23 oct. de 2020 en la República Dominicana; 26 ago. – 23 oct. de 2020 en Ecuador; 08 sep. – 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. - 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 – 6 ene. de 2021 en Perú; y 24 sep. – 30 nov. de 2020 en Uruguay. Los países se clasifican según los niveles de 2020, en orden ascendente (de izquierda a derecha). El promedio regional de ALC comprende 16 países, incluidos los 11 analizados.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx

StatLink https://stat.link/nedyvw

En general, descendió el número de personas que corrían el riesgo de confinarse solas en América Latina con respecto a Europa o América del Norte (Esteve et al., 2020[210]). En Colombia, los datos sobre las expectativas y sensaciones de la población durante la pandemia recabados a través de la "Encuesta Pulso Social" que lleva a cabo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, muestran que más de dos tercios (68%) de la población de las 23 ciudades principales del país habían hablado con familiares o

amigos para sentirse mejor durante los siete días previos, entre el mes de septiembre de 2020 y febrero de 2021. Esta cifra se situó entre el 38% de Cúcuta y el 97% de Quibdó (DANE, 2021[211]). Las conclusiones de la última edición de esta encuesta, de febrero de 2021, también muestran que los sentimientos de soledad eran mayores entre las mujeres (12%) que entre los hombres (9%).

Tal como se ha señalado anteriormente, aunque se pudieron aprovechar las tecnologías en línea para prestar apoyo social y tener un sentido de pertenencia (Newman and Zainal, 2020[212]), las disparidades en cuanto a acceso o dominio de los recursos digitales siguen siendo un problema importante en América Latina. La diferencia en cuanto a uso de Internet entre los más ricos y los más pobres en esta región es casi de 40 puntos porcentuales y, entre los hogares urbanos y rurales, es superior a 25 puntos (OCDE et al., 2020[20]). Corregir estas brechas digitales será esencial para reducir el aislamiento y la soledad que sufren muchas personas de grupos vulnerables. El aislamiento social y la soledad comportan grandes riesgos para la salud física y mental, y han de abordarse mediante intervenciones que tengan su origen en las comunidades, la sociedad civil, los servicios sociales y el voluntariado (House, Landis and Umberson, 1988[213]; Holt-Lunstad, Smith and Layton, 2010[214]; Pantell et al., 2013[215]; Klinenberg, 2016[216]; Sauter, Kim and Jacobsen, 2019[201]).

Informes circunstanciales indican que la pandemia puede haber suscitado mayor solidaridad en todo el mundo (Foro Económico Mundial, 2020[217]) y que los confinamientos en América Latina generaron una elevada movilización social en el ámbito digital (Duque Franco et al., 2020[218]).[30] La función mitigadora que puede desempeñar el apoyo social en momentos de estrés se ha documentado en un gran número de publicaciones psicológicas (Cohen and Wills, 1985[219]; Cohen, 2005[220]; Cohen et al., 2014[221]; Bowen et al., 2014[222]). Habida cuenta de las prolongadas medidas de distanciamiento social, resulta fundamental mantener las relaciones sociales y la solidaridad, en particular durante períodos de confinamiento prolongado (OCDE, 2020[209]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

La medida de apoyo social incluida en este informe presenta ciertas limitaciones, pues se trata de una pregunta a la que se ha de responder con un “sí” o un “no”, por lo que no ofrece información sobre la frecuencia, la intensidad, la calidad ni el tipo de apoyo recibido (a saber, económico o emocional). Además, a partir de una pregunta de este tipo, no es posible valorar las brechas en relación con el apoyo registradas entre los mejor y los peor colocados en la distribución. Por último, el reducido tamaño de las muestras de la Encuesta Gallup Mundial plantea problemas con respecto a errores de medición, en especial al analizar la variación a lo largo del tiempo.

Un gran número de publicaciones psicológicas, que se remontan varias décadas atrás y en las que se hace una medición del apoyo social y las oficinas nacionales de estadística, muestran un interés cada vez mayor en estas medidas. Sin embargo, a excepción de Europa, actualmente existe poca congruencia entre las prácticas utilizadas por las oficinas nacionales de estadística para configurar estas medidas (Fleischer, Smith and Viac, 2016[223]). La medición del apoyo social, como una dimensión del marco de bienestar utilizada en este informe, se encuentra poco desarrollada actualmente y, en consecuencia, rara vez está presente en los debates políticos, lo que significa que se necesitan más estudios. En América Latina, se han producido avances en este sentido en Colombia, donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha creado un módulo sobre capital social como parte de su Encuesta de Cultura Política (ECP). Dicho módulo permite evaluar varias esferas del capital social, como la importancia de los vínculos familiares o poder contar con una red próxima de apoyo social (DANE, 2020[224]).

Un grupo de indicadores idóneo relativo a las relaciones sociales también proporcionaría información sobre el número de interacciones sociales, tanto presencialmente (p. ej., la frecuencia y la cantidad de tiempo que pasan las personas con los integrantes de la unidad familiar, sus familiares y amigos, compañeros y otros conocidos) como a través de las redes sociales.[31] En la región de ALC, se hace un uso generalizado de las encuestas sobre uso del tiempo, pues hasta 2019, 19 países habían introducido

algún formato de encuesta de este tipo (CEPAL, 2019[225]). Sin embargo, pese a la existencia de una Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) (CEPAL et al., 2016[226]), este sistema todavía no se aplica de forma universal en los distintos países. Una recolección de datos sobre el uso del tiempo puntual, armonizada y más frecuente aumentaría las posibilidades de mejorar las estadísticas sobre actividades sociales.

También es relevante la calidad de las relaciones sociales (p. ej., la satisfacción con las interacciones sociales, la sensación de soledad), como se ha comentado anteriormente. Sin embargo, las preguntas de las encuestas sobre satisfacción con las relaciones personales son poco comunes y poco habituales. Un ejemplo del tipo de indicador que podría mejorarse es el de "Satisfacción con las relaciones personales" que se incluye en la publicación de la OCDE *¿Cómo va la vida?* de *2020*, el cual muestra valores medios en una escala de 11 puntos, con respuestas que van de 0 (nada satisfecho) a 10 (completamente satisfecho). Los datos se han obtenido de los módulos *ad hoc* (bienestar) de las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) de 2013 y 2018, así como de la Encuesta Social General Canadiense y la encuesta sobre bienestar de México (OCDE, 2020[39]). La información sobre si las interacciones sociales se producen presencialmente o a través de las redes sociales también es escasa. Como se ha mencionado anteriormente, la frecuencia de estas últimas ha aumentado y podría seguir haciéndolo conforme avance la digitalización.

Conciliación de la vida personal y laboral

La forma en la que las personas ocupan diariamente el tiempo del que disponen es un factor clave determinante de su bienestar. En el marco de la OCDE para la medición del bienestar, la dimensión Conciliación de la vida personal y laboral se refiere a un "nivel de equilibrio satisfactorio entre el trabajo y la vida privada de una persona". Por lo tanto, consiste en evaluar la capacidad de las personas para conciliar compromisos familiares, ocio y trabajo —incluyendo el trabajo, sea remunerado o no— (OCDE, 2011[45]; OCDE, 2020[39]). Por otra parte, no trabajar lo suficiente puede impedir que las personas consigan los ingresos necesarios o desarrollen su profesión e incluso reducir su sentido de propósito vital. Asimismo, trabajar demasiado reduce el tiempo que las personas pueden dedicarse a sí mismas, a sus familiares y a sus amigos, y contribuye al empeoramiento de su salud, en particular cuando se combina con condiciones de trabajo inadecuadas (Wong, Chan and Ngan, 2019[227]).

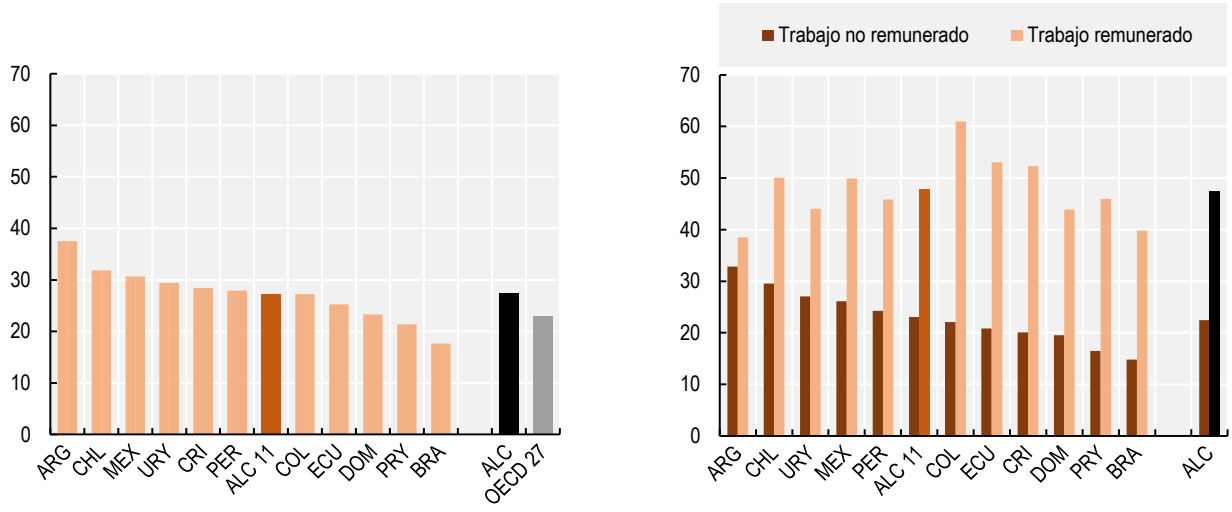
Establecer lo que se considera "demasiado poco" o "demasiado" resulta clave para valorar la conciliación entra la vida personal y laboral, pues esto puede depender de características particulares como la edad, los ingresos, la calidad del empleo, el tamaño de la familia y las preferencias personales. En cierta medida, la sección sobre Trabajo y calidad del empleo del Capítulo 2 ofrece información sobre estas cuestiones en América Latina, ya que trata sobre el desempleo y las personas que realizan jornadas de trabajo muy largas. No obstante, una larga jornada de trabajo incide en el bienestar tanto en relación con el trabajo remunerado (p. ej., en empleos remunerados, tal como se indica en el Capítulo 2) como con el no remunerado (p. ej., la responsabilidad de cuidar de otras personas, cocinar y limpiar en el hogar). El Gráfico 3.30, panel A, muestra que, en promedio, la población total del grupo de países analizados realiza 27 horas semanales de trabajo no remunerado, una cifra muy superior al promedio de la OCDE, que es de 23 horas. El trabajo no remunerado asciende a 37 horas por semana en Argentina, más del doble que la cifra registrada en Brasil (18 horas). Como consecuencia, la población asalariada de estos dos países se enfrenta a jornadas de trabajo muy diferentes cada semana: en el caso de los brasileños asalariados, las horas semanales de trabajo no remunerado (15 horas) representan más de un tercio de las horas semanales de trabajo remunerado (40 horas), mientras que en Argentina realizan prácticamente una "jornada doble" entre trabajo remunerado (39 horas) y no remunerado (33 horas) (Gráfico 3.30, panel B).

El problema del trabajo no remunerado es especialmente importante desde una perspectiva de género, puesto que las mujeres y las niñas suelen asumir una carga desproporcionada. Este tema se analiza en mayor profundidad en el Capítulo 5.

Gráfico 3.30. En promedio, la carga de trabajo no remunerado es relativamente elevada en el grupo de países analizados, pues la población asalariada de determinados países realiza una "doble jornada" de trabajo remunerado y no remunerado

Panel A: Horas semanales promedio de trabajo no remunerado de la población total de 15 años o más, último año disponible

Panel B: Horas semanales promedio de trabajo remunerado y no remunerado de la población asalariada de 15 años o más, último año disponible



Nota: Los datos se refieren a 2019 en el caso de México; 2017 en el caso de Brasil, Colombia y Costa Rica; 2016 en el de la República Dominicana y Paraguay; 2015 en el de Chile; 2013 en el de Argentina y Uruguay; y 2012 en el de Ecuador. El promedio regional de ALC comprende 15 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento. OCDE 27 no incluye a Australia, Chile, Colombia, la República Checa, Islandia, Israel, Lituania, México, la República Eslovaca y Suiza, porque no hay datos disponibles o por diferencias metodológicas en la recolección de los datos. Los datos de los países de la OCDE se recogen en formato de minutos por día dedicados a cada actividad y se refieren al grupo de edad de entre 15 y 64 años. Los datos son armonizados *ex post* por la OCDE. El promedio de la OCDE de horas semanales de trabajo no remunerado se calcula tomando los datos disponibles sobre uso del tiempo en minutos diarios y multiplicando por siete.
Fuente: CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp y la Base de Datos de la Familia de la OCDE, http://www.oecd.org/social/family/database.htm

StatLink https://stat.link/ehirj4

Bienestar subjetivo

Las Directrices sobre medición del bienestar subjetivo (*Guidelines on Measuring Subjective Well-Being)* de la OCDE definen este concepto como "buenas condiciones mentales, incluidas todas las evaluaciones diversas, tanto positivas como negativas, que las personas hacen de sus vidas y de las reacciones afectivas de la gente a sus experiencias" (OCDE, 2013[228]). Esta definición comprende tres elementos clave: la evaluación de la vida (una evaluación reflexiva sobre la vida de una persona o sobre algún aspecto específico de esta); el afecto (sentimientos, emociones y estados de una persona, medidos normalmente en relación con un momento concreto en el tiempo); y la eudaimonia (un sentido de significado y propósito vital o buen funcionamiento psicológico).

En términos generales, tanto las puntuaciones sobre afecto como las evaluaciones de la vida registradas en América Latina suelen ser relativamente altas —en particular teniendo en cuenta no solo lo que pronosticarían los niveles de ingreso promedio (Rojas, 2018[229]), sino también lo que cabría esperar de acuerdo con medidas objetivas de salud o expresión política—. A este respecto, los estudios han llamado la atención sobre la existencia de una "paradoja latinoamericana" (Cuadro 3.1). En cierta medida, estos resultados favorables reflejan las deficiencias de las medidas tradicionales del bienestar a la hora de valorar los avances en esta materia, así como la necesidad de dirigir una mayor atención a medidas que muestren la calidad de vida de las personas. Al tener en cuenta los valores de las personas y reconocer la universalidad humana de la experiencia en materia de bienestar, las medidas de bienestar subjetivo adquieren una pertinencia máxima en una serie de debates políticos y estrategias para lograr un desarrollo sostenible.

Satisfacción con la vida

La satisfacción con la vida pone de manifiesto la evaluación que la población hace de su vida en términos generales, y se mide por medio de preguntas de encuestas. En los países de la OCDE, la información sobre los niveles actuales de satisfacción con la vida puede basarse en estimaciones proporcionadas por las Oficinas Nacionales de Estadística, a partir de encuestas nacionales que utilizan preguntas generalmente comparables (OCDE, 2017[46]). Sin embargo, para evaluar los cambios a lo largo del tiempo en el grupo de países analizados y en América Latina en general, la Encuesta Gallup Mundial constituye una mejor fuente de información, puesto que ofrece series de tiempo más largas y permite valorar a la mayoría de los países de manera comparable.[32] La puntuación promedio de satisfacción con la vida en el grupo de países analizados durante el período 2017-2019 fue ligeramente superior a 6, frente a valores próximos a 7 en los países de la OCDE. Las puntuaciones promedio se situaron entre menos de 5,7 en la República Dominicana y 7,1 en Costa Rica. La satisfacción promedio en el grupo de países analizados en 2017-2019 fue muy similar a la registrada en 2006-2009. Lo mismo ha ocurrido con el promedio de la OCDE, aunque varios países miembros experimentaron marcados descensos de la satisfacción con la vida durante la crisis financiera mundial de 2008 (OCDE, 2013[230]; OCDE, 2017[46]). Cinco países (la República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) registraron un aumento de la satisfacción con la vida del 8% o más entre 2006-2009 y 2017-2019, mientras que los consultados de Argentina y México (-4% cada uno) y Brasil (-5%) manifestaron un ligero descenso en este indicador en 2017-2019 (Gráfico 3.31, panel A).

En el nivel bajo de la escala, un 19% de los consultados de los países analizados afirmó que su satisfacción con la vida era de 4 o menos en 2017-2019, frente al 11% del promedio de la OCDE (Gráfico 3.31, panel B). Sin embargo, el porcentaje de la República Dominicana (33%) prácticamente cuadruplica el de Costa Rica (9%). No obstante, este indicador descendió en la mayoría de los países, a saber, en Ecuador (-10 puntos porcentuales), Perú (-9 puntos), la República Dominicana (-6 puntos) y Chile (-5 puntos), mientras que aumentó en Argentina (5 puntos).

Afecto

El término "afecto" suele utilizarse en psicología para describir los sentimientos de una persona. Por lo tanto, las distintas medidas del afecto ponen de manifiesto estados emocionales concretos, que suelen hacer referencia a un punto específico en el tiempo (OCDE, 2013[228]). La medida del equilibrio de afecto negativo que se muestra a continuación es un resumen calculado a partir de una serie de elementos, en los que los consultados responden "sí" o "no" a haber experimentado en gran medida cada emoción o estado durante el día anterior. Los elementos negativos considerados en este informe están relacionados con la ira, la tristeza y la preocupación; y los elementos positivos, con la diversión, el sentirse descansado y reír o sonreír. Con el término "equilibrio de afecto negativo" se hace referencia a los consultados que manifiestan haber experimentado más sentimientos o estados negativos que positivos durante el día

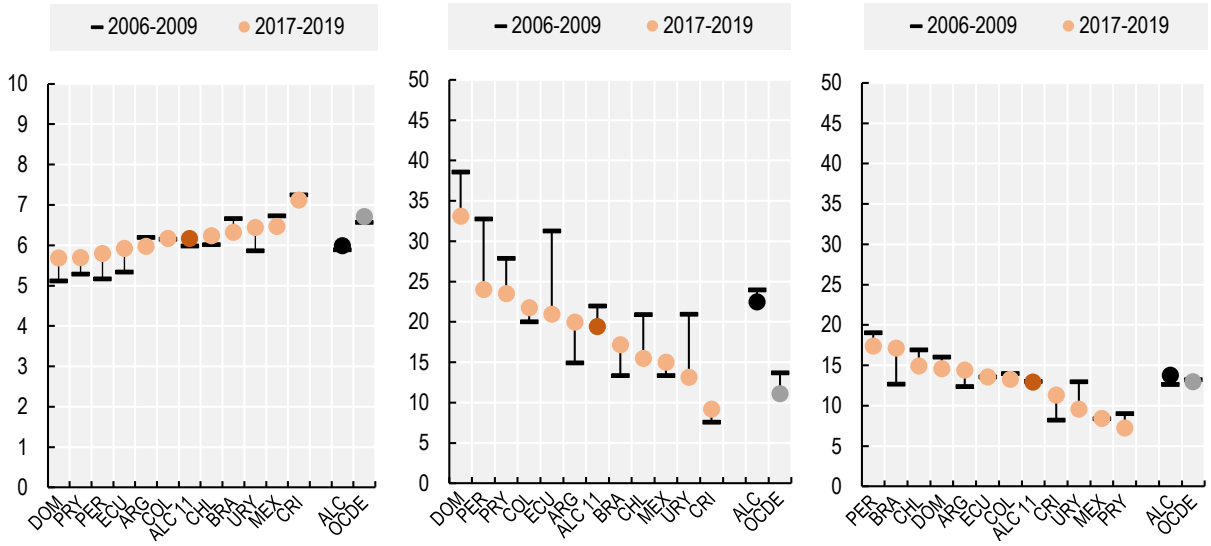
anterior (OCDE, 2020[39]). El equilibrio de los estados emocionales en el grupo de países analizados fue, en promedio, ligeramente más positivo que entre los países de la OCDE en 2017-2019, ya que solo un 13% de las personas del grupo de países analizados presenta un equilibrio de afecto negativo, una tasa similar a la registrada en los países de la OCDE, en promedio. En el grupo de países analizados, la tasa se sitúa entre el 17% de Brasil y Perú y el 8% o menos de México y Paraguay. Entre los períodos 2006-2009 y 2017-2019, el equilibrio de afecto negativo se mantuvo relativamente estable en el promedio de la OCDE y el grupo de países analizados. El equilibrio de afecto negativo aumentó (lo que implica un deterioro de la situación) 3 puntos porcentuales o más en Costa Rica y Brasil, y descendió en Uruguay algo más de 3 puntos (Gráfico 3.31, panel C).

Gráfico 3.31. Los niveles de satisfacción con la vida y afecto negativo se mantuvieron relativamente estables, en promedio, en el grupo de países analizados entre 2006-2009 y 2017-2019

Panel A: Valores medios de satisfacción con la vida, escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible

Panel B: Proporción de la población que asigna una puntuación de 4 o menos en una escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible, porcentaje

Panel C: Proporción de la población que experimentó un equilibrio de afecto negativo durante el día de ayer, porcentaje



Nota: En los paneles A y B, los datos corresponden a las respuestas a las preguntas siguientes: "Imagine una escalera con escalones numerados de 0 en la parte inferior a 10 en la parte superior. Suponga que la parte de arriba de la escalera representa la mejor vida posible para usted, y la parte de abajo representa la peor vida posible para usted. ¿En qué escalón diría que siente que se encuentra en lo personal en este momento, suponiendo que cuanto más arriba esté el escalón, mejor se sentirá respecto a su vida, y cuanto más abajo esté el escalón, peor se sentirá respecto a su vida? ¿Qué escalón se aproxima más a la forma en que se siente?". En el panel C, los estados negativos se refieren a haber experimentado ira, tristeza o preocupación; los estados positivos se refieren a haberse sentido descansado, divertido o reído o sonreído mucho durante el día anterior. Se registra un equilibrio de afecto negativo cuando un consultado manifiesta haber experimentado más sentimientos o estados negativos que positivos durante el día anterior. En estos tres paneles, el promedio regional de ALC comprende 23 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 11 analizados en este documento.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/7ayl1e

Cuadro 3.1. Bienestar subjetivo: la paradoja latinoamericana

Uno de los motivos más importantes por los que comparar el bienestar subjetivo de los diferentes países es para conseguir información pormenorizada sobre las condiciones sociales que determinan cómo se sienten las personas con su vida (Exton, Smith and Vandendriessche, 2015[231]). Se ha averiguado que una serie de circunstancias vitales están vinculadas de manera significativa a patrones de bienestar subjetivo, tanto dentro de los países como entre estos, y que van desde los ingresos y el empleo a la salud, pasando por las relaciones sociales, la confianza y la libertad (OCDE, 2013[228]). De hecho, solo tres variables —registro de PIB per cápita, esperanza de vida y desempleo— son responsables de algo más del 60% de la variación de los patrones nacionales promedio de satisfacción con la vida en todo el mundo (Exton, Smith and Vandendriessche, 2015[231]). Las seis variables[a] analizadas de manera rutinaria en el informe *World Happiness Report*, por su parte, explican cerca de un 75% de la variación registrada entre 2005 y 2017 en la satisfacción con la vida nacional promedio[b], a nivel mundial (Helliwell et al., 2018[232]). Por lo general, los países más ricos, más equitativos y más estables políticamente (p. ej., los países escandinavos y del norte de Europa) suelen encabezar las clasificaciones por países, y los países menos ricos, normalmente con experiencias recientes de disturbios o conflictos (como es el caso de Afganistán y Yemen) suelen situarse a la cola en esas clasificaciones (Helliwell et al., 2021[233]). No obstante, las clasificaciones mundiales de dichos indicadores pueden arrojar algunos resultados sorprendentes. En concreto, países con niveles de PIB per cápita similares pueden presentar, en ocasiones, clasificaciones diferentes en materia de bienestar subjetivo. Por ejemplo, los PIB per cápita de México y Bielorrusia son muy parecidos, pero en la edición de 2021 del informe *World Happiness Report*, México se sitúa en el puesto 36 de 149 países por satisfacción con la vida[b] y Bielorrusia, en el puesto 75 (Helliwell et al., 2021[233]).

En términos generales, los latinoamericanos presentan niveles relativamente altos de bienestar subjetivo en comparación con el promedio mundial. Rojas (2020[234]), por ejemplo, concluye que la satisfacción con la vida, medida de acuerdo con la Encuesta Mundial sobre Valores, es mayor en América Latina que en cualquier otra región del mundo[c.] Entre todas las ediciones de 2006 a 2016 de la Encuesta Gallup Mundial, la satisfacción con la vida promedio en la región de América Latina en su conjunto fue de 6,07 en una escala de 0 a 10. Esta cifra es considerablemente inferior a la de Europa Occidental (6,95 en promedio) y los países anglófonos (7,38), aunque se mantiene por encima del promedio simple nacional (5,42) de las más de 150 naciones incluidas (Rojas, 2018[229]). Rojas (2020[234]) también afirma que el afecto positivo marcó su máximo promedio en el mundo durante el período 2006-2016, aunque el número de emociones negativas manifestadas en esta región también fue muy elevado[d].

Los resultados de América Latina en materia de bienestar subjetivo contrastan con la situación de la región en cuanto a condiciones materiales. Por ejemplo, mientras que la satisfacción con la vida y el afecto positivo se sitúan por encima de los niveles mundiales promedio, el INB per cápita en 2019 de la región de ALC se situó en torno a los 15.800 (dólares internacionales, a PPA de 2017), en comparación con los 16.900 a nivel mundial (Banco Mundial, 2021[235]). Tal como se muestra en este informe, el conjunto de América Latina también está afectado por elevados niveles de desigualdad en los ingresos, pobreza e inseguridad. Se ha acuñado el término “paradoja” latinoamericana para describir la aparente desconexión entre los niveles promedio de riqueza material de la región y las clasificaciones mundiales de satisfacción con la vida —que persisten pese al hecho de que, dentro de la región, unos niveles de vida más elevados en cuanto a condiciones materiales se asocian con mayores niveles de satisfacción con la vida (p. ej., Graham y Lora (2009[236]).

¿Qué podría explicar esta aparente paradoja? Una posibilidad es que algún aspecto no material de las condiciones de vida de América Latina pudiera ayudar a explicar la diferencia entre los valores de

bienestar subjetivo observados y aquellos que cabría esperar si únicamente se tuviesen en cuenta los niveles de desarrollo económico. Expertos regionales como Rojas (2018[229]; 2020[234]) han planteado, en concreto, que las estrechas relaciones interpersonales y los fuertes lazos familiares y comunitarios podrían influir en este sentido. Pese a que la medición de estas facetas de la vida en encuestas internacionales suele ser muy deficiente, los datos contrastados que se han mostrado en la sección anterior de este capítulo sobre Relaciones sociales indican que el apoyo de las redes sociales en la región es relativamente alto (próximo a los niveles promedio de la OCDE). Además de ser un factor directo importante para impulsar el bienestar subjetivo (véase a continuación), unas relaciones sociales sólidas también pueden ayudar a movilizar recursos tanto materiales como psicológicos que contribuyan a la mitigación del sufrimiento provocado por las privaciones materiales. La religiosidad y las prácticas religiosas que redundan en el establecimiento de relaciones comunitarias sólidas se han vinculado también con un bienestar subjetivo más resiliente ante la adversidad (Helliwell and Putnam, 2004[237]; Deaton and Stone, 2013[238]).

En todo el mundo, las relaciones sociales son un factor determinante fundamental de los resultados de bienestar subjetivo (Diener and Biswas-Diener, 2018[239]; Helliwell et al., 2018[232]). Algunos datos contrastados indican además que en la región de América Latina se produce un mayor número de relaciones sociales y que podrían tener una mayor trascendencia como factor determinante de la felicidad en este continente. Por ejemplo, aunque factores tales como los ingresos per cápita y la corrupción influyen de manera considerable en la variación del afecto positivo en los países de América Latina, el porcentaje de variación que se debe a dichos factores es menor que en Europa Occidental (Rojas, 2018[229]). Al comentar el enorme impacto del COVID-19 en las evaluaciones de la vida de América Latina, Helliwell señala que la felicidad en esta región se sustenta en las estrechas relaciones sociales y que la pandemia ha restringido este aspecto del bienestar de la población de manera especialmente importante (The Economist, 2021[240]). Este fenómeno puede verse en la marcada caída registrada en el apoyo de las redes sociales en América Latina entre 2019 y 2020 (véase la sección sobre Relaciones sociales de este capítulo) —una caída que no se ha producido en la mayoría de los países de la OCDE, en los que la satisfacción con la vida también fue más resiliente durante los primeros seis a nueve meses de la pandemia— (OCDE, a continuación[241]). De hecho, según estudios realizados en el Reino Unido, quienes dedicaban más tiempo a socializar antes de la pandemia (en particular las mujeres y los jóvenes) se sitúan entre los más golpeados en términos de bienestar mental (Etheridge and Spantig, 2020[242]).

Notas

1. Estas seis variables son: PIB per cápita, apoyo social, buena esperanza de vida, libertad para elegir opciones vitales, generosidad y ausencia de corrupción.
2. La medida de satisfacción con la vida utilizada en el informe *World Happiness Report* se refiere a la pregunta de la "escalera de Cantril" (0-10, de peor a mejor vida posible).
3. América Latina sigue ocupando el primer puesto en la clasificaciones por regiones del mundo en términos de satisfacción con la vida, según la edición más reciente (7) de la Encuesta Mundial sobre Valores (WVS Database, 2020[243])
4. De hecho, las diferencias tanto individuales como regionales sobre el número de emociones que suelen expresarse en términos generales son un motivo fundamental por el cual el trabajo de la OCDE considera una medida de equilibrio de afecto negativo (es decir, la proporción de la población que manifiesta más experiencias negativas que positivas), en lugar de tener en cuenta la cantidad de emociones positivas y negativas manifestadas. Las medidas del equilibrio de afecto ayudan a compensar las diferencias en materia de expresión, conservando al mismo tiempo información sobre el equilibrio general (tono) de la experiencia positiva y negativa (OCDE, 2013[228]; Exton, Smith and Vandendriessche, 2015[231]; OCDE, 2020[39]).

Efectos de la pandemia de COVID-19

Aunque los primeros datos contrastados de la región indican que la pandemia tuvo una determinada repercusión en el nerviosismo y la tensión de la población, las tendencias de la satisfacción con la vida en América Latina actualmente no están definidas con claridad. En Colombia, por ejemplo, los datos oficiales indican que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, algo menos de la mitad de la población (43%) se sentía preocupada o nerviosa en las 23 ciudades principales y que, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, aproximadamente un 16% se sentía triste. No obstante, estos datos proceden de una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística en 2020 para dar seguimiento a las percepciones y expectativas de la población durante la crisis, y no hay ningún punto de referencia disponible de años anteriores (DANE, 2021[211]). En Uruguay, por otra parte, una encuesta web indicaba que un 32% de la población se sentía triste y un 67% se sentía nerviosa a finales de 2020 (es decir, en los primeros momentos de la pandemia, cuando se implantaron las primeras restricciones) —cifras que fueron respectivamente 20 y 37 puntos porcentuales más altas que el año anterior (Bericat and Acosta, 2020[244]). En Argentina, una encuesta telefónica llevada a cabo durante el confinamiento en Buenos Aires, en el mes de mayo de 2020, concluyó que 1 de cada 5 personas (21%) manifestó síntomas de ansiedad o depresión, denominados “malestar psicológico” (Rodríguez Espínola, Filgueira and Paternó Manavella, 2020[245]).

Por el contrario, en México, donde la Oficina Nacional de Estadística ha medido la satisfacción con la vida de manera comparable a lo largo del tiempo, la satisfacción con la vida de la población urbana en enero de 2021 fue similar a la de enero de 2015 y enero de 2018 (8,2 en la “escalera de Cantril”). No obstante, esta cifra representa un descenso muy ligero con relación a enero de 2019 (8,4) y enero de 2020 (8,3) (INEGI, 2021[101]). A este respecto, cabe señalar que los promedios de satisfacción con la vida pueden ocultar disparidades dentro del conjunto de la población nacional. En México, por ejemplo, las mujeres declararon una satisfacción con la vida ligeramente inferior (8) a la de los hombres (8,3).

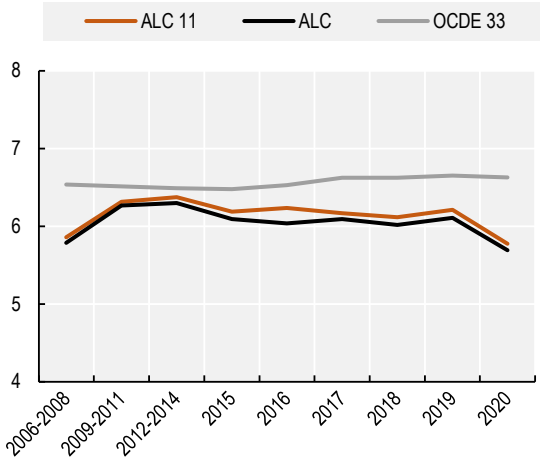
Los datos de la Encuesta Gallup Mundial muestran una clara influencia de la pandemia de COVID-19 en los diferentes indicadores del bienestar subjetivo. Con el surgimiento de la pandemia, la satisfacción con la vida descendió 0,4 puntos en el grupo de países analizados, en promedio, lo que representa un descenso del 7% (Gráfico 3.32, panel A). Esta caída, la mayor registrada desde 2015, ha llevado la satisfacción con la vida a niveles inferiores a los registrados en 2006-2008. La caída afectó a todos los países del grupo analizado, a excepción de Argentina, Chile y Paraguay, donde la satisfacción con la vida se mantuvo relativamente estable. En México, Ecuador, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, la satisfacción con la vida ha caído de 0,5 a 0,8 puntos, lo que se traduce en una variación del -7% al -14% (Gráfico 3.32, panel B). La mayor caída se produjo en Perú, donde la satisfacción con la vida descendió de un 6 a un 5 (-17%), una cifra más baja que la de cualquier otro país del grupo de analizado.[33]

Entre 2019 y 2020, la proporción de la población que afirmaba tener una baja satisfacción con la vida aumentó en promedio en el grupo de países analizados, lo que pone de manifiesto los perjudiciales efectos de la pandemia antes mencionados. En 2020, 1 de cada 4 personas indicó una puntuación de 4 o menos en una escala de 0 a 10, frente a 1 de cada 5 aproximadamente justo un año antes. En 9 de los 11 países del grupo analizado, el porcentaje aumentó 3 puntos porcentuales o más, en particular México y Ecuador (9 puntos) y Perú (13 puntos). Por otra parte, este porcentaje descendió ligeramente en Paraguay, mientras que en Chile se mantuvo estable (Gráfico 3.32, panel C).

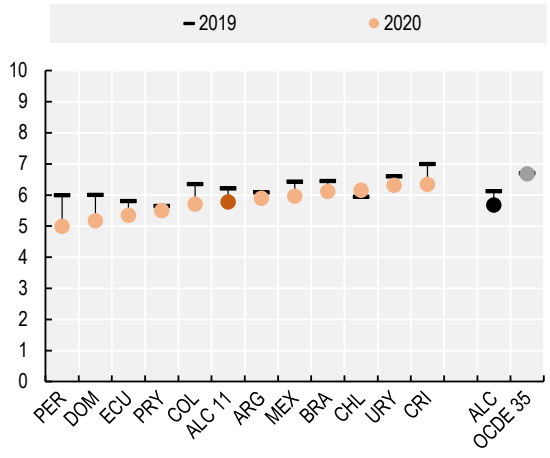
La pandemia ha aumentado además la proporción de la población que presenta un equilibrio de afecto negativo. En promedio, el 17% de los encuestados de los países del grupo analizado experimentaron más sentimientos negativos que positivos en un día normal de 2020, aproximadamente 4 puntos porcentuales más que un año antes. En 6 de los 11 países del grupo analizado, el porcentaje aumentó 3 puntos o más, en particular en Costa Rica y México (6 puntos) y Perú (11 puntos) (Gráfico 3.32, panel D). En los demás países del grupo analizado, los niveles se mantuvieron generalmente estables durante los dos últimos años.

Gráfico 3.32. Los indicadores de bienestar subjetivo muestran un cambio significativo en algunos países entre 2019 y 2020

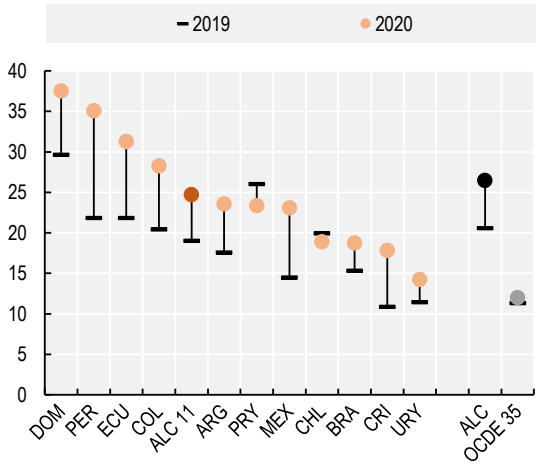
Panel A: Valores medios de satisfacción con la vida, escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible, avances regionales



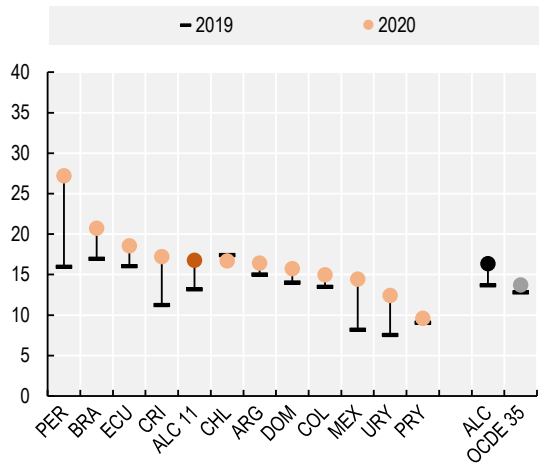
Panel B: Valores medios de satisfacción con la vida, escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible



Panel C: Proporción de la población que asigna una puntuación de 4 o menos en una escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible, porcentaje



Panel D: Proporción de la población que experimentó un equilibrio de afecto negativo durante el día de ayer, porcentaje



Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 15 países, incluidos los 11 analizados. OCDE 33 excluye a la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En los paneles B, C y D, el promedio regional de ALC comprende 16 países, incluidos los 11 analizados. OCDE 35 excluye la República Checa y Luxemburgo, puesto que no hay datos disponibles con respecto a ambos años. Los países se clasifican por fecha de inicio de los trabajos sobre el terreno (de la primera a la última) en 2020.
En todos los países del grupo analizado, el modo de recabar los datos varió entre 2019 y 2020 (se pasó de entrevistas personales a telefónicas). Como consecuencia, algunos países pueden haber modificado el conjunto de personas consultadas de maneras que no se pueden ajustar usando técnicas de ponderación (Srinivasan and Clifton, 2020[37]; Helliwell et al., 2021[38]). Se dispone de más de 500 observaciones con respecto a cada país. Las fechas de recolección de datos en 2020 son las siguientes: 7 sep. – 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. – 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. – 16 nov. de 2020 en Chile; 21 ago. – 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 – 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 24 sep. – 23 oct. de 2020 en la República Dominicana; 26 ago. – 23 oct. de 2020 en Ecuador; 8 sep. – 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. - 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 – 6 ene. de 2021 en Perú; y 24 sep. – 30 nov. de 2020 en Uruguay.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

StatLink https://stat.link/dob5yv

Aspectos para el desarrollo estadístico

Un conjunto idóneo de indicadores de bienestar subjetivo englobaría diferentes medidas de las evaluaciones de la vida, el afecto y la eudaimonia.[34] Por ejemplo, las *Directrices de la OCDE* propusieron un módulo central de cinco preguntas, consideradas el mínimo necesario para reflejar estos tres elementos (OCDE, 2013[228]). Dentro de ese módulo central, se seleccionó como medida primordial la pregunta sobre evaluación de la vida (en este caso, una pregunta sobre la satisfacción con la vida, valorada según una escala de 0 a 10) —es decir, en una situación en la que solo se pudiese incluir una pregunta en una encuesta, esta sería la única pregunta recomendada—. Esto se debe en gran medida al hecho de que es la pregunta respecto a la cual existe un mayor grado de consenso internacional, tanto sobre su construcción como sobre su uso, así como la base de datos contrastados más sólida en cuanto a validez, pertinencia y fiabilidad.

La mayoría de las oficinas nacionales de estadística de la OCDE recaban actualmente medidas de la satisfacción con la vida de manera armonizada a nivel internacional, aunque persisten algunas variaciones metodológicas (OCDE, 2020[39]). En Chile, por ejemplo, los datos sobre la satisfacción con la vida han sido recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), usando un formato de escala en las respuestas que no se puede comparar con el utilizado en otros países de la OCDE. México también informa sobre la satisfacción con la vida con carácter semestral, como parte del módulo "BIARE" ("Bienestar Autorreportado") incluido en la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del INEGI; mientras que en Colombia, la oficina de estadística también ha adoptado medidas en este sentido en los últimos años. No obstante, pese a los avances hacia la armonización, los datos sobre satisfacción con la vida recabados en las estadísticas oficiales siguen siendo escasos en América Latina y, allí donde existen, sigue sin haber series de tiempo amplias.

Los datos tanto sobre satisfacción con la vida como sobre el equilibrio de afecto negativo facilitados en esta sección se han obtenido de la Encuesta Gallup Mundial, debido a la falta de datos armonizados en las distintas oficinas de estadística de esta región. La Encuesta Mundial ofrece un método de medición normalizado que abarca todos los países del grupo analizado y facilita una serie de tiempo coherente, además de recabarse anualmente, en la mayoría de casos desde 2005/2006. Tal como se ha mencionado anteriormente, la medición de la Encuesta Gallup Mundial se basa en los sentimientos de las personas y sus estados afectivos durante "el día anterior", en lugar de durante un período de tiempo más largo, para reducir el riesgo de sesgo que puede generar un recuerdo retrospectivo. Ocurre lo mismo con el módulo BIARE que utiliza el INEGI (INEGI, 2021[246]). Si se adopta este marco de preguntas junto con tamaños de muestras amplios, debería bastar para extraer información sobre las experiencias registradas en un día habitual, aunque las estimaciones puedan ser más volátiles con respecto a desgloses por diferentes grupos de población o muestras más pequeñas de índole más general. Un marco alternativo de preguntas para encuestas consiste en consultar a las personas por sus estados y sentimientos durante varias semanas, de modo que se reduce el impacto de sucesos poco habituales, pese a aumentar la importancia de tendencias predispositivas que influyen en los datos y el riesgo de sesgo por recuerdos retrospectivos. Los datos sobre experiencias afectivas recabados a través de encuestas sobre el uso del tiempo podrían arrojar resultados más exactos y útiles (OCDE, 2013[228]), pero todavía no se han incluido en las llevadas a cabo en el grupo de países analizados, como Chile o Costa Rica (INE, 2015[247]; INEC, 2017[248]).

No se han incorporado en esta sección las mediciones de la eudaimonia, por la falta de datos armonizados internacionalmente en intervalos periódicos. No obstante, el módulo BIARE desarrollado por el INEGI es un ejemplo de cómo se podría incluir esta medida en las encuestas nacionales de toda la región de cara al futuro. Incluye varias sentencias positivas y una negativa y se pide a los consultados que indiquen en qué medida están de acuerdo con cada una de ellas en una escala de 0 a 10 (INEGI, 2021[101]).

Los progresos recientes en materia de estadística en el ámbito del bienestar subjetivo en América Latina están contribuyendo al avance de este programa en la región. La oficina nacional de estadística colombiana ha avanzado de manera considerable en la creación de nuevas herramientas para medir las

percepciones de las personas, en particular en materia de bienestar subjetivo, en el módulo sobre Capital social de su Encuesta de Cultura Política (ECP). Durante la pandemia de COVID-19, también ha llevado a cabo su encuesta "Pulso Social" de forma más frecuente, en la que ha incluido medidas de afecto (DANE, 2021[211]). Por otra parte, la oficina de estadística mexicana está trabajando para crear una nueva encuesta nacional sobre ingresos y bienestar, en estrecha coordinación con expertos externos. Esta encuesta incluirá tres dimensiones principales del bienestar, entre ellas el bienestar subjetivo. Por último, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile ha tratado de medir el bienestar mediante la Encuesta Complementaria de Bienestar Social para complementar la encuesta nacional socioeconómica actual (la "Encuesta de Caracterización Económica Nacional", CASEN), que se basa en el marco de la OCDE.

Referencias

Agüero, J. (2020), *COVID-19 and The Rise of Intimate Partner Violence*, University of Connecticut, Department of Economics, https://ideas.repec.org/p/uct/uconnp/2020-05.html. [108]

Alicea-Planas, J., J. Trudeau and W. Vásquez Mazariegos (2021), "COVID-19 risk perceptions and social distancing practice in Latin America", *Hispanic Health Care International*, p. 154041532098514, http://dx.doi.org/10.1177/1540415320985141. [208]

Amoatey, P. et al. (2020), "Impact of building ventilation systems and habitual indoor incense burning on SARS-CoV-2 virus transmissions in Middle Eastern countries", *Science of The Total Environment*, Vol. 733, p. 139356, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139356. [151]

Asmann, P. (2020), *What Does Coronavirus Mean for Criminal Governance in Latin America?*, https://www.insightcrime.org/news/analysis/criminal-governance-latin-america-coronavirus/. [91]

Asplund, E. et al. (2021), *Elections and Covid-19: How special voting arrangements were expanded in 2020*, IDEA, https://www.idea.int/news-media/news/elections-and-covid-19-how-special-voting-arrangements-were-expanded-2020. [177]

Asplund, E. et al. (2020), *People with COVID-19 and those self-isolating must not be denied the vote*, London School of Economics, https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2020/10/23/people-with-covid-19-and-those-self-isolating-must-not-be-denied-the-vote/. [179]

Austin, A. (2020), *Latin America Under Threat of Cybercrime Amid Coronavirus*, https://www.insightcrime.org/news/analysis/threat-cyber-crime-coronavirus/. [94]

Balestra, C., R. Boarini and E. Tosetto (2018), "What matters the most to people? : Evidence from the OECD Better Life Index users' responses", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2018/3, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/edf9a89a-en. [261]

Balestra, C. and D. Dottori (2011), "Aging society, health and the environment", *Journal of Population Economics*, Vol. 25/3, pp. 1045-1076, http://dx.doi.org/10.1007/s00148-011-0380-x. [112]

Banco Mundial (2021), *GNI per capita, PPP (constant 2017 international $)*, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD. [235]

Banco Mundial (2020), *Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)*, https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS. [60]

Banco Mundial (2020), *Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: a set of global estimates*, http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf. [65]

Banco Mundial (2006), *Maternal Mortality at a Glance*, http://hdl.handle.net/10986/9617. [26]

Barber, B. (1984), *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, University of California Press. [170]

Basto-Aguirre, N., P. Cerutti and S. Nieto-Parra (2020), *Is COVID-19 widening educational gaps in Latin America? Three lessons for urgent policy action*, OECD Development Centre, https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-urgent-policy-action/. [48]

Bautier, E. (2003), "Décrochage scolaire : Genèse et logique des parcours", *Ville-école-intégration Enjeux*, Vol. 132, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00808806/document. [75]

Belfield, C. and H. Levin (2007), "The Price We Pay: Economic and Social Consequences of Inadequate Education", p. 273, https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt126269. [77]

Bericat, E. and M. Acosta (2020), *El impacto del COVID-19 en el bienestar emocional de los trabajadores en Uruguay*, https://fes-sociologia.com/uploads/public/Bericat%20&%20Acosta%20(2020)%20Impacto%20del%20COVID-19%20en%20el%20bienestar%20emocional%20de%20los%20trabajadores%20en%20Uruguay.pdf. [244]

Blaya, Catherine; Hayden, Carol (2003), *Constructions Sociales des Absenteismes et des Decrochages Scolaires en France et en Angleterre*, https://pdfs.semanticscholar.org/73e9/dc77b35362b53a372057a7971f61cce249f8.pdf. [76]

Boarini, R. and M. Díaz (2015), "Cast a ballot or protest in the street - did our grandparents do more of both?: An age-period-cohort analysis in political participation", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2015/2, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5js636gn50jb-en. [186]

Bond, T. and K. Lang (2019), "The sad truth about happiness scales", *Journal of Political Economy*, Vol. 127/4, pp. 1629-1640, http://dx.doi.org/10.1086/701679. [260]

Bowen, K. et al. (2014), "The stress-buffering effects of functional social support on ambulatory blood pressure.", *Health Psychology*, Vol. 33/11, pp. 1440-1443, http://dx.doi.org/10.1037/hea0000005. [222]

Brezzi, M. and D. Sanchez-Serra (2014), "Breathing the same air? Measuring air pollution in cities and regions", *OECD Regional Development Working Papers*, No. 2014/11, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jxrb7rkxf21-en. [128]

BTEAM (2021), *The Business case for protecting civic rights*, https://bteam.org/assets/reports/The-Business-Case-for-Protecting-Civic-Rights.pdf. [184]

Busso, M. and J. Messina (eds.) (2020), *The Inequality Crisis: Latin America and the Caribbean at the Crossroads*, Inter-American Development Bank, http://dx.doi.org/10.18235/0002629. [173]

Cacioppo, J., L. Hawkley and R. Thisted (2010), "Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study", *Psychol Aging*, Vol. 25/2, pp. 453-63, https://doi.org/10.1037/a0017216. [193]

CAF (2019), *Infraestructura en el desarrollo de América Latina*, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1465/IDEAL_2017-2018_Infraestructura_en_el_Desarrollo_de_Am%c3%a9rica_Latina_%28documento_principal%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y. [123]

CAF (2015), *Transporte en América Latina, vital para frenar el calentamiento global*, https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/11/transporte-en-america-latina-vital-para-frenar-el-calentamiento-global/. [118]

Cai, W. et al. (2020), "Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America", *Nature Reviews Earth & Environment*, Vol. 1/4, pp. 215-231, http://dx.doi.org/10.1038/s43017-020-0040-3. [137]

CEPAL (2021), *Building forward better: action to strengthen the 2030 Agenda for Sustainable Development t (LC/FDS.4/3/Rev.1).*, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46696/S2100124_en.pdf. [132]

CEPAL (2021), *Environmental Statistics and Indicators: Natural extreme events and disasters*, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/SisGen_MuestraFicha_puntual.asp?id_aplicacion=1&id_estudio=1&indicador=1837&idioma=i. [266]

CEPAL (2021), *Social Panorama of Latin America, 2020*, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46688/S2100149_en.pdf. [172]

CEPAL (2020), *Effects of the quarantines and activity restrictions related to the coronavirus disease (COVID-19) on air quality in Latin America's cities*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45885/4/S2000475_en.pdf. [148]

CEPAL (2020), *The Social Challenge in Times of COVID-19*, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45544/S2000324_en.pdf. [22]

CEPAL (2019), *Time-use measurements in Latin America and the Caribbean*, https://oig.cepal.org/sites/default/files/time_use-measurement_in_lac_0.pdf. [225]

CEPAL (2013), *Social Panorama of Latin America 2012*, CEPAL, https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl#. [42]

CEPAL (2010), *Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Trends, progress and challenges in sustainable consumption and production, mining, transport, chemicals and waste management*, United Nations, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/LAC_background_eng.pdf. [115]

CEPAL et al. (2016), *Classification of Time-Use Activities for Latin America and the Caribbean (CAUTAL)*, https://www.cepal.org/en/publications/40170-classification-time-use-activities-latin-america-and-caribbean-cautal. [226]

CEPAL-OPS (2020), *Health and the economy: A convergence needed to address COVID-19 and retake the path of sustainable development in Latin America and the Carbbean*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45841/4/S2000461_en.pdf. [14]

CERF (2007), *Annual Report of the Humanitarian/Resident Coordinator on the use of CERF grants, Mexico, 2007*, https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/2007%20Mexico%20final%20slr.pdf. [138]

Chen, L. et al. (2019), *Have Econometric Analyses of Happiness Data Been Futile? A Simple Truth About Happiness Scales*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3390139. [259]

Chioda, L. (2017), *Stop the Violence in Latin America: A look at prevention from cradle to adulthood*, Grupo del Banco Mundial. [85]

CIVICUS (2021), *Civic Space in Numbers*, https://monitor.civicus.org/quickfacts/. [182]

CIVICUS (2021), *Freedom of expression and the COVID-19 pandemic: a snapshot of restrictions and attacks*, https://monitor.civicus.org/COVID19May2021/. [185]

Cohen, S. (2005), "Keynote presentation at the eight international congress of behavioral medicine Mainz, Germany August 25–28, 2004", *International Journal of Behavioral Medicine*, Vol. 12/3, pp. 123-131, http://dx.doi.org/10.1207/s15327558ijbm1203_1. [220]

Cohen, S. et al. (2014), "Does Hugging Provide Stress-Buffering Social Support? A Study of Susceptibility to Upper Respiratory Infection and Illness", *Psychological Science*, Vol. 26/2, pp. 135-147, http://dx.doi.org/10.1177/0956797614559284. [221]

Cohen, S. and T. Wills (1985), "Stress, social support, and the buffering hypothesis", *Psychological Bulletin*, Vol. 98/2, pp. 310-357, http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310. [219]

Comisión Europea/Joint Research Centre (2015), *Dataset: Global Human Settlement Layer (GHSL) project, archived*, https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/jrc-ghsl-ghs_pop_gpw4_globe_r2015a. [127]

Copernicus Land Monitoring Service (2021), *Urban Atlas*, https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas. [164]

Crisis Group Latin America (2020), *Virus-proof Violence: Crime and COVID-19 in Mexico and the Northern Triangle*, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/083-virus-proof-violence.pdf. [89]

Dammert, L. (2017), *Gang Violence in Latin America*, Wiley - Blackwell, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119057574.whbva102. [84]

DANE (2021), *Encuesta Pulso Social: Históricos [Social Pulse Survey: Historical]*, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social/encuesta-pulso-social-historicos. [211]

DANE (2020), *Encuesta de cultura política [Political Culture Survey]*, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/cultura-politica-encuesta#modulo-capital-social. [224]

Deaton, A. and A. Stone (2013), "Two happiness puzzles", *American Economic Review*, Vol. 103/3, pp. 591-597, http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.3.591. [238]

Diener, E. and R. Biswas-Diener (2018), *Social Well-being: Research and Policy Recommendations*, Sustainable Development Solutions Network, https://s3.amazonaws.com/ghc-2018/UAE/GHPR_Ch6.pdf. [239]

Dijkstra, L. and H. Poelman (2012), *Cities in Europe, the new OECD-EC definition*, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf. [165]

Dong, E., H. Du and L. Gardner (2020), "An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time", *The Lancet Infectious Diseases*, Vol. 20/5, pp. 533-534, http://dx.doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30120-1. [2]

Duque Franco, I. et al. (2020), "Mapping repertoires of collective action facing the COVID-19 pandemic in informal settlements in Latin American cities", *Environment and Urbanization*, Vol. 32/2, pp. 523-546, http://dx.doi.org/10.1177/0956247820944823. [218]

Du, W. and G. Wang (2020), "Indoor air pollution was nonnegligible during COVID-19 lockdown", *Aerosol and Air Quality Research*, Vol. 20/9, pp. 1851-1855, http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2020.06.0281. [152]

Du, W. et al. (2018), "Field-based emission measurements of biomass burning in typical Chinese built-in-place stoves", *Environmental Pollution*, Vol. 242, pp. 1587-1597, http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.121. [154]

EIU (2020), *Democracy Index 2019:*, http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index-2019.pdf&mode=wp&campaignid=democracyindex2019. [171]

El Espectador (2020), *La guerra en Colombia no se detiene, a pesar del coronavirus [The war in Colombia does not stop, despite the coronavirus]*, https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-guerra-en-colombia-no-se-detiene-pesar-del-coronavirus-articulo-911860/. [103]

Engemann, K. et al. (2019), "Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 116/11, pp. 5188-5193, http://dx.doi.org/10.1073/PNAS.1807504116. [114]

Esteve, A. et al. (2020), "Living alone over the life course: Cross-national variations on an emerging issue", *Population and Development Review*, Vol. 46/1, pp. 169-189, http://dx.doi.org/10.1111/padr.12311. [210]

Etheridge, B. and L. Spantig (2020), "The gender gap in mental well-being during the Covid-19 outbreak: Evidence from the UK", *ISER Working Paper Series*, https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-papers/iser/2020-08.pdf. [242]

Exton, C. and L. Fleischer (a continuación), *The Future of the OECD Well-being Dashboard*, OECD Publishing, Paris. [268]

Exton, C., C. Smith and D. Vandendriessche (2015), "Comparing happiness across the world: Does culture matter?", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2015/4, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jrqppzd9bs2-en. [231]

Fachola, M. et al. (2015), “Tentativa e ideación de suicidio en adultos mayores en Uruguay”, *Ciência & Saúde Coletiva*, Vol. 20/6, pp. 1693-1702, http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015206.02252015. [12]

FAO (2021), *The Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2014 dataset*, http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home. [130]

Feigelman, W., B. Gorman and J. Jordan (2009), “Stigmatization and Suicide Bereavement”, *Death Studies*, Vol. 33/7, pp. 591-608, http://dx.doi.org/10.1080/07481180902979973. [257]

Felbab-Brown, V. (2020), “Mexican cartels and the COVID-19 pandemic.”, in *Mexican cartels are providing COVID-19 assistance. Why that’s not surprising.*, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/27/mexican-cartels-are-providing-covid-19-assistance-why-thats-not-surprising/. [92]

Ferré-Grau, C. et al. (2011), “El estigma del suicidio vivencias de pacientes y familiares con intentos de autolisis”, *Index de Enfermería*, Vol. 20/3, pp. 155-159, http://dx.doi.org/10.4321/s1132-12962011000200004. [256]

Ferrer-i-Carbonell, A. and P. Frijters (2004), “How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness?”, *The Economic Journal*, Vol. 114/497, pp. 641-659, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00235.x. [255]

FIDA (2020), “Spotlight on climate and environment: Latin America and the Caribbean”, https://www.ifad.org/fr/web/latest/photo/asset/39019826. [121]

Fisher, M. and C. Gamper (2017), *Policy Evaluation Framework on The Governance of Critical Infrastructure Resilience in Latin America*, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Policy-Evaluation-Framework-on-the-Governance-of-Critical-Infrastructure-Resilience-in-Latin-America.pdf. [134]

Fleischer, L., C. Smith and C. Viac (2016), “A review of general social surveys”*, OECD Statistics Working Papers*, No. 2016/9, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/bb54d16f-en. [223]

Foro Económico Mundial (2020), *A pandemic of solidarity? This is how people are supporting one another as coronavirus spreads*, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-coronavirus-solidarity-help-pandemic/ (accessed on 20 October 2020). [217]

Frey, B. and A. Stutzer (2000), “Happiness, economy and institutions”, *The Economic Journal*, Vol. 110/466, pp. 918-938, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0297.00570. [254]

Gallup World Poll (2021), *Gallup World Poll*, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx. [97]

Gao, Q. et al. (2020), *Loneliness among older adults in Latin America, China, and India: prevalence, correlates and association with mortality*, Research Square, http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-19700/v1. [203]

Garcia, A. et al. (2016), “Friendship in Latin American social comparative studies”, *Interpersona: An International Journal on Personal Relationships*, Vol. 10/1, pp. 1-12, http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v10i1.227. [194]

Gerst-Emerson, K. and J. Jayawardhana (2015), “Loneliness as a public health issue: The impact of loneliness on health care utilization among older adults”, *American Journal of Public Health*, Vol. 105/5, pp. 1013-1019, http://dx.doi.org/10.2105/ajph.2014.302427. [204]

Glencross, D. et al. (2020), “Air pollution and its effects on the immune system”, *Free Radical Biology and Medicine*, Vol. 151, pp. 56-68, http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.01.179. [149]

Global Web Index (2019), *Global Web Index: Global Social Media Landscape*, https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/The_Global_Social_Media_Landscape.pdf?utm_campaign=Global%20Social%20Media%20Landscape%202019&utm_medium=email&_hsmi=79595728&_hsenc=p2ANqtz-9el-TBd7FK6mv-u3j664Ei7Ic716cRTPHRhldj_g8T9_DpScyc-j85pSyxQ5bpecVTi. [205]

Gobierno de Mexico (2020), *Informe Anual de Seguridad 2020*, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603367/CPM_Informe_Anual_de_Seguridad_2020__31dic20.pdf. [104]

González, S. (2020), “Testing the evidence, how good are public sector responsiveness measures and how to improve them?”*, OECD Working Papers on Public Governance*, No. 38, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/c1b10334-en. [192]

Graham, C. and E. Lora (2009), *Paradox and Perception: Measuring Quality of Life in Latin America*, Brookings Institution Press, http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt12805r. [236]

Gropello, D. (2020), *The costs of COVID-19 in education in Latin America. Acting now to protect the future of our children*, https://blogs.worldbank.org/education/costs-covid-19-education-latin-america-acting-now-protect-future-our-children. [67]

Hale, T. et al. (2021), “A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)”, *Nature Human Behaviour*, http://dx.doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8. [207]

Hanushek, E. (2015), “Why standard measures of human capital are misleading”, *KDI Journal of Economic Policy*, Vol. vol. 37(2), pp. 22-37, https://ideas.repec.org/a/zbw/kdijep/v37y2015i2p22-39.html. [59]

Hardoy, J. and G. Pandiella (2009), “Urban poverty and vulnerability to climate change in Latin America”, *Environment and Urbanization*, Vol. 21/1, pp. 203-224, http://dx.doi.org/10.1177/0956247809103019. [135]

Helliwell, J. et al. (2021), *World Happiness, Trust and Deaths under COVID-19*, Sustainable Development Solutions Network, https://worldhappiness.report/ed/2021/. [38]

Helliwell, J. et al. (2018), *International Migration and World Happiness*, Sustainable Development Solutions Network, https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/CH2-WHR-lr.pdf. [232]

Helliwell, J., R. Layard and J. & Sachs (2018), *Latin American Happiness has Social Foundations*, Sustainable Development Solutions Network., https://worldhappiness.report/ed/2018/. [202]

Helliwell, J., R. Layard and J. Sachs (eds.) (2018), *Happiness in Latin America Has Social Foundations*, Sustainable Development Solutions Network., https://worldhappiness.report/ed/2018/. [229]

Helliwell, J. et al. (2021), *World Happiness Report 2021*, https://worldhappiness.report/ed/2021/. [233]

Helliwell, J. and R. Putnam (2004), "The social context of well-being", *Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences*, Vol. 359/1449, https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2004.1522. [237]

Hershberg, Flinn-Palcic and Kambhu (2020), *The COVID-19 Pandemic and Latin American Universities*, https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/la-higher-ed-covid-final.pdf. [66]

Holt-Lunstad, J., T. Smith and J. Layton (2010), "Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review", *PLoS Medicine*, Vol. 7/7, p. e1000316, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316. [214]

Hoskins, B., J. Janmaat and G. Melis (2017), "Tackling inequalities in political socialisation: A systematic analysis of access to and mitigation effects of learning citizenship at school", *Social Science Research*, Vol. 68, pp. 88-101, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.09.001. [189]

House, J., K. Landis and D. Umberson (1988), "Social relationships and health", *Science*, Vol. 241/4865, pp. 540-545, http://dx.doi.org/10.1126/science.3399889. [213]

Husted, B. (2002), "Culture and international anti-corruption agreements in Latin America", *Journal of Business Ethics*, Vol. 37/413–422, https://doi.org/10.1023/A:1015248921716. [195]

ICNL (2021), *COVID-19 Civic Freedom Tracker*, https://www.icnl.org/covid19tracker/. [183]

IDEA (2021), *Compulsory voting*, https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting. [174]

IDEA (2020), *Elecciones y COVID-19: lecciones de América Latina*, https://www.idea.int/es/news-media/news/es/elecciones-y-covid-19-lecciones-de-am%C3%A9rica-latina. [176]

IFRC (2013), *Argentina: Floods*, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Argentina%20Floods%20DREF%20operation%20n%20MDRAR007.pdf. [141]

IFRC (2011), *Colombia: Floods and Landslides*, https://reliefweb.int/disaster/fl-2011-000042-col. [140]

IFRC (2010), *Factsheet Chile earthquake*, https://reliefweb.int/report/chile/factsheet-chile-earthquake-08032010. [139]

INE (2015), *Síntesis de Resultados. La dimensión personal del tiempo*, https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-actividades-personales-enut.pdf?sfvrsn=fd9a7cea_6. [247]

INEC (2019), *Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra la Mujeres - Boletin*, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf. [111]

INEC (2017), *Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2017). Resultados Generales*, https://www.inec.cr/multimedia/enut-2017-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo. [248]

INEGI (2021), *Bienestar subjetivo - BIARE Ampliado [Subjective well-being - extended BIARE]*, https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/ampliado/. [246]

INEGI (2021), *Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Poblacion Urbana. Cifras de Enero 2021*, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/biare/biare2021_02.pdf. [101]

INEGI (2020), *Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (Septiembre 2020)*, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/ensu2020_10.docx. [100]

Infosegura (2021), *Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana*. [102]

IQ Air (2019), *2019 Air Quality Report*, https://www.iqair.com/. [119]

Jaen-Varas, D. et al. (2014), "Mental health and psychiatric care in Bolivia: what do we know?", *International Journal of Mental Health Systems*, Vol. 8/1, http://dx.doi.org/10.1186/1752-4458-8-18. [253]

JCE (2020), *Junta central electoral*, https://jce.gob.do/. [263]

Kanchongkittiphon, W. et al. (2015), "Indoor environmental exposures and exacerbation of asthma: An update to the 2000 review by the Institute of Medicine", *Environmental Health Perspectives*, Vol. 123/1, pp. 6-20, http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307922. [156]

Kenneth C. Land, M. (ed.) (2012), *National Accounts of Well-being*, https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=2309&context=soss_research. [258]

Khaltaev, N. and S. Axelrod (2019), "Chronic respiratory diseases global mortality trends, treatment guidelines, life style modifications, and air pollution: preliminary analysis", *Journal of Thoracic Disease*, Vol. 11/6, pp. 2643-2655, http://dx.doi.org/10.21037/jtd.2019.06.08. [6]

Klinenberg, E. (2016), "Social isolation, loneliness, and living alone: Identifying the risks for public health", *American Journal of Public Health*, Vol. 106/5, pp. 786-787, http://dx.doi.org/10.2105/ajph.2016.303166. [216]

Kohn, R. et al. (2018), "Mental health in the Americas: An overview of the treatment gap", *Revista Panamericana de Salud Pública*, Vol. 42, http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2018.165. [9]

LAPOP (2021), *Latin American Public Opinion Project: Data*, https://www.vanderbilt.edu/lapop/interactive-data.php. [180]

Latinobarometro (2020), *Latinobarómetro: Data*, http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. [81]

Lau, J. et al. (2006), "Positive mental health-related impacts of the SARS epidemic on the general public in Hong Kong and their associations with other negative impacts", *Journal of Infection*, Vol. 53/2, pp. 114-124, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2005.10.019. [252]

Lenzer, G. (2017), *Violence against children: Making human rights real*, Taylor and Francis, http://dx.doi.org/10.4324/9781351248433. [87]

Lessard, A. et al. (2008), "Cheminement de décrocheurs et de décrocheuses", *Dossier thématique, Revue des sciences de l'éducation*, Vol. 33/3, pp. 647-662, http://dx.doi.org/10.7202/018962ar. [74]

Liu, J. et al. (2018), “Indoor air quality and occupants’ ventilation habits in China: Seasonal measurement and long-term monitoring”, *Building and Environment*, Vol. 142, pp. 119-129, http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.06.002. [158]

Loades, M. et al. (2020), “Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19”, *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, Vol. 59/11, pp. 1218-1239.e3, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009. [69]

Lochner, L. (2011), *Non-Production Benefits of Education: Crime, Health, and Good Citizenship*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, http://dx.doi.org/10.3386/w16722. [78]

Lopez-Calva (2020), *A greater tragedy than we know: Excess mortality rates suggest that COVID-19 death toll is vastly underestimated in LAC*, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/a-greater-tragedy-than-we-know--excess-mortality-rates-suggest-t.html. [19]

López-Calva, L. (2021), *The Virus and the Votes: How is COVID-19 changing voter turnout in LAC?*, UNDP, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/the-virus-and-the-votes--how-is-covid-19-changing-voter-turnout-.html. [178]

López-Calva, L. (2020), *No safer place than home?: The increase in domestic and gender-based violenceduring COVID-19 lockdowns in LAC*, UNDP, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/no-safer-place-than-home---the-increase-in-domestic-and-gender-b.html. [106]

Loret de Mola, U. et al. (2017), “On the use of hedonic price indices to understand ecosystem service provision from urban green space in five Latin American megacities”, *Forests*, Vol. 8/12, p. 478, http://dx.doi.org/10.3390/f8120478. [162]

LSHTM CMMID COVID-19 working group (2020), *How many are at increased risk of severe COVID-19 disease? Rapid global, regional and national estimates for 2020*, Cold Spring Harbor Laboratory, http://dx.doi.org/10.1101/2020.04.18.20064774. [3]

Machin, S., O. Marie and S. Vujić (2011), “The Crime Reducing Effect of Education”, *The Economic Journal*, Vol. 121/552, pp. 463-484, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02430.x. [79]

Mackie, A., I. Haščič and M. Cárdenas Rodríguez (2016), “Population exposure to fine particles: Methodology and results for OECD and G20 countries”*, OECD Green Growth Papers*, No. 2016/2, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jlsqs8g1t9r-en. [167]

Mascayano, F. et al. (2015), “Suicide in Latin America: A growing public health issue”, *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas*, https://www.researchgate.net/publication/298213467_SUICIDE_IN_LATIN_AMERICA_A_GROWING_PUBLIC_HEALTH_ISSUE_SUICIDIO_EN_LATINO_AMERICA_UN_CRECIENTE_PROBLEMA_DE_SALUD_PUBLICA (accessed on 30 April 2021). [251]

Ministerio de Educación, Centro de Estudios (2020), *Impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile*, http://documents1.worldbank.org/curated/en/112721598898527225/pdf/Impacto-del-COVID-19-en-los-Resultados-de-Aprendizaje-y-Escolaridad-en-Chile-Analisis-con-Base-en-Herramienta-de-Simulacion-Proporcionada-por-el-Banco-Mundial.pdf. [68]

Ministerio de Salud (2021), *Subsecretaria de Salud Pública detalla aumento de 310% del presupuesto para Salud Mental*, https://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-detalla-aumento-de-310-del-presupuesto-para-salud-mental/. [34]

Morgan, D. et al. (2020), "Excess mortality: Measuring the direct and indirect impact of COVID-19", *OECD Health Working Papers*, No. 122, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/c5dc0c50-en. [44]

Muggah, R. (2018), *Citizen Security in Latin America: Facts and Figures*, Igarapé Institute. [82]

Muggah and Szabó (2016), *Latin America's cities: Unequal, dangerous and fragile. But that can change*, https://www.weforum.org/agenda/2016/06/latin-america-s-cities-unequal-dangerous-and-fragile-but-that-can-change/. [83]

Murtin, F. et al. (2017), "Inequalities in longevity by education in OECD countries: Insights from new OECD estimates", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2017/2, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6b64d9cf-en. [50]

Naciones Unidas (2005), *Budapest Initiative Task Force on Measurement of Health Status: Survey module for measuring health state*. [40]

Newman, M. and N. Zainal (2020), "The value of maintaining social connections for mental health in older people", *The Lancet Public Health*, Vol. 5/1, pp. e12-e13, http://dx.doi.org/10.1016/s2468-2667(19)30253-1. [212]

NRDC (2014), *Limpiando el aire de América Latina: la reducción de las emisiones de carbono negro puede beneficiar rápidamente al clima y la salud pública*, https://www.nrdc.org/sites/default/files/latin-america-diesel-pollution-IB-sp.pdf. [117]

Nugent, C. (2020), *Why Armed Groups in Latin America Are Enforcing COVID-19 Lockdowns*, https://time.com/5870054/coronavirus-latin-america-armed-groups/. [105]

OCDE (2021), *A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health*, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4ed890f6-en. [35]

OCDE (2021), *OECD Skills Surveys: PIAAC*, https://www.oecd.org/fr/sites/evaluationdescompetencesdesadultespiaac/programme/. [73]

OCDE (2020), "Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient recovery", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/d98b5a09-en. [161]

OCDE (2020), "COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/0a2dee41-en. [181]

OCDE (2020), "COVID-19: Protecting people and societies", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e5c9de1a-en. [209]

OCDE (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/69096873-en. [52]

OCDE (2020), “Environmental health and strengthening resilience to pandemics”, *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/73784e04-en. [150]

OCDE (2020), *How’s Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9870c393-en. [39]

OCDE (2020), *OECD Territorial grids*, OECD, Paris, http://www.oecd.org/regional/regional-statistics/territorial-grid.pdf (accessed on 9 March 2021). [129]

OCDE (2020), “Sources, methods and technical notes”, in *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/442eac2f-en. [54]

OCDE (2020), “The OECD Survey on Social and Emotional Skills”, OECD, Paris, https://www.oecd.org/education/ceri/social-emotional-skills-study/. [72]

OCDE (2019), *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/f8d7880d-en. [51]

OCDE (2019), *Government at a Glance 2019*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/8ccf5c38-en. [190]

OCDE (2019), *How’s Life in the Digital Age?: Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311800-en. [71]

OCDE (2019), *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*, PISA, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-en. [55]

OCDE (2019), *PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed*, PISA, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en. [264]

OCDE (2019), *Risk Governance Scan of Colombia*, OECD Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eeb81954-en. [133]

OCDE (2019), *Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/1f029d8f-en. [62]

OCDE (2019), *Trends Shaping Education 2019*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en. [200]

OCDE (2018), *Biodiversity Conservation and Sustainable Use in Latin America: Evidence from Environmental Performance Reviews*, OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264309630-en. [160]

OCDE (2018), “PISA for Development Science Framework”, in *PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264305274-6-en. [265]

OCDE (2017), *Education in Costa Rica*, Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264277335-en. [49]

OCDE (2017), *Government at a Glance 2017*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en. [16]

OCDE (2017), *Green Growth Indicators 2017*, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264268586-en. [124]

OCDE (2017), *How's Life? 2017: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en. [46]

OCDE (2017), "PISA 2015 Technical Background", in *PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-19-en. [57]

OCDE (2016), *PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en. [58]

OCDE (2016), *Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en. [47]

OCDE (2016), *The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264257474-en. [147]

OCDE (2016), "What does low proficiency in literacy really mean?", *Adult Skills in Focus*, No. 2, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jm0v427jl9p-en. [61]

OCDE (2015), *How's Life? 2015: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en. [96]

OCDE (2013), *How's Life? 2013: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en. [230]

OCDE (2013), *OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en. [228]

OCDE (2013), *OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en. [63]

OCDE (2011), *How's Life?: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en. [45]

OCDE (a continuación), *Latin American Economic Outlook (LEO) 2021*. [36]

OCDE (a continuación), *Life in the first year of the pandemic: Evidence on COVID-19 and Well-Being*, OECD Publishing. [241]

OCDE/Banco Mundial (2020), *Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6089164f-en. [4]

OCDE/CAF/ONU CEPAL (2016), *Latin American Economic Outlook 2017: Youth, Skills and Entrepreneurship*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-en. [56]

OCDE et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [20]

OCDE/OMS/Grupo del Banco Mundial (2018), *Delivering Quality Health Services: A Global Imperative*, Organización Mundial de la Salud, Geneva 27, https://dx.doi.org/10.1787/9789264300309-en. [13]

OCHA (2019), *Natural disasters in Latin America and the Caribbean*, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20191202-ocha-desastres_naturales2.pdf. [131]

Oficina Regional para Europa de la OMS (2016), *Urban green space and health: a review of evidence*, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1. [113]

Ogliastri, E. (1997), *Una introducción a la negociación internacional: La cultura latinoamericana frente a la angloamericana, japonesa, francesa y del Medio Oriente*, http://conocimiento.incae.edu/~ogliaste/mono-49%20intro%20n%20int%20%5B1%5D.pdf. [197]

OMS (2021), *Adult mortality rate (probability of dying between 15 and 60 years per 1000 population), metadata*, https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/64. [7]

OMS (2021), *Ambient (outdoor) air pollution*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (accessed on 16 March 2021). [267]

OMS (2021), *Mental health and substance use data*, https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health. [43]

OMS (2020), *Mental health and COVID-19*, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/mental-health-and-covid-19. [32]

OMS (2020), *Rapid assessment of service delivery for noncommunicable diseases (NCDs) during the COVID-19 pandemic*, https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic. [23]

OMS (2020), *Road traffic injuries*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries. [98]

OMS (2019), *Suicide*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide. [11]

OMS (2018), *Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016*, http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/. [25]

OMS (2016), *Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks*. [122]

OMS (2013), *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, https://apps.who.int/iris/handle/10665/85239. [88]

OMS (2013), *WHO-AIMS Report on Mental Health Systems in Latin America and the Caribbean*, https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/ENG-WHOAIMSREG-(For-Web-Apr-2013).pdf. [8]

OMS (2006), *WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005 - Summary of risk assessment.*, http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHOSDEPHEOEH06.02_eng.pdf. [125]

OMS (1948), *Constitution*, https://www.who.int/about/who-we-are/constitution. [1]

OMS y Calouste Gulbekian Foundation (2014), *Social determinants of mental health*, https://www.who.int/mental_health/publications/gulbenkian_paper_social_determinants_of_mental_health/en/. [10]

ONU (2020), *Handbook on Governance Statistics*, https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation-E.pdf. [187]

ONU (2020), *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean*, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac.pdf. [21]

ONU (2020), *SDG Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*, https://sdgs.un.org/goals/goal16. [191]

ONU (2018), *SDG Indicator 11.5.1: Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100 000 population, metadata*, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-01.pdf. [144]

ONU-DESA (2019), *Indicator 3.8.2: Proportion of population with large household expenditure on health as a share of total, metadata file*, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-02.pdf. [15]

ONU-DESA (2017), *Living Arrangements of Older Persons: A Report on an Expanded International Dataset*, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/LivingArrangements.pdf. [29]

OPS (2021), *Hospitalizations and deaths of younger people soar due to COVID-19, PAHO Director reports*, https://www.paho.org/en/news/5-5-2021-hospitalizations-and-deaths-younger-people-soar-due-covid-19-paho-director-reports. [18]

OPS/FPNU/UNICEF (2017), *Accelerating progress toward the reduction of adolescent pregnancy in Latin America and the Caribbean*, https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34493/9789275119761-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1. [28]

PAHO (2020), *The Impact of COVID-19 on Mental Neurological and Substance Use Services in the Americas: Results of a Rapid Assessment*, https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52999/PAHONMHMHCovid-19200044_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [33]

Pantell, M. et al. (2013), "Social isolation: A predictor of mortality comparable to traditional clinical risk factors", *American Journal of Public Health*, Vol. 103/11, pp. 2056-2062, http://dx.doi.org/10.2105/ajph.2013.301261. [215]

Parkin, J., D. Phillips and D. Agren (2020), *Covid warnings ring out as Latin America bids to return to normality*, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/sep/19/latin-america-covid-coronavirus-warnings. [206]

Penn State (2020), "'Gargantuan' hail in Argentina may have smashed world record", https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200429191903.htm. [142]

Perez-Vincent, S. et al. (2020), *COVID-19 lockdowns and domestic violence: Evidence from two studies in Argentina*, IADB, p. 48, https://publications.iadb.org/publications/english/document/COVID-19-Lockdowns-and-Domestic-Violence-Evidence-from-Two-Studies-in-Argentina.pdf. [107]

PNUD (2017), *Comparing policy interventions on domestic violence in Latin America: criminalization, female empowerment and male engagement*, http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-08-17/FUNDAR_Domestic%20Violence_final.pdf. [110]

Poelman, H. (2018), *A walk to the park? Assessing access to green areas in Europe's cities, update using completed Copernicus urban atlas data"*, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2018_01_green_urban_area.pdf. [163]

Pozzer, A. et al. (2020), "Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19", *Cardiovascular Research*, Vol. 116/14, pp. 2247-2253, http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvaa288. [145]

Prats, M. and A. Meunier (2021), "Political efficacy and participation: An empirical analysis in European countries", *OECD Working Papers on Public Governance*, No. 46, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4548cad8-en. [188]

Querido, L. (2020), "Elections under the stress of the pandemic", *Transparencia Electoral*, https://www.transparenciaelectoral.org/elections-under-the-stress-of-the-pandemic/. [175]

Rivard Piché, G. (2020), *In El Salvador, criminal gangs are enforcing virus-related restrictions. Here's why.*, https://www.washingtonpost.com/politics/2020/06/01/el-salvador-criminal-gangs-are-enforcing-coronavirus-curfews-heres-why/. [93]

Rodríguez Espínola, S., P. Filgueira and M. Paternó Manavella (2020), *Acceso a Servicios de Salud y Efectos en el Bienestar Subjetivo en Tiempos de Aislamiento*, https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/10218/1/acceso-servicios-salud-efectos.pdf. [245]

Rojas, M. (2020), *Well-Being in Latin America*, Springer International Publishing, Cham, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-33498-7. [234]

Rojas, M. (2019), "High subjective well-being in Latin America: Person-based interpersonal relations and public-policy lessons", Paper presented during Parallel Session 2A of the International Conference on the Policy Uses of Well-being and Sustainable Development Indicators in Latin America and the Caribbean, 23-24 October 2019, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia., https://www.oecd.org/statistics/lac-well-being-metrics.htm. [199]

Sattar, N., I. McInnes and J. McMurray (2020), "Obesity Is a risk factor for severe COVID-19 infection", *Circulation*, Vol. 142/1, pp. 4-6, http://dx.doi.org/10.1161/circulationaha.120.047659. [24]

Sauter, S., L. Kim and K. Jacobsen (2019), "Loneliness and friendlessness among adolescents in 25 countries in Latin America and the Caribbean", *Child and Adolescent Mental Health*, Vol. 25/1, pp. 21-27, http://dx.doi.org/10.1111/camh.12358. [201]

Semple, K. and A. Ahmed (2020), *Murder Rates Were Staggering. The Virus Has Brought Some Quiet, for Now.*, https://www.nytimes.com/2020/04/11/world/americas/coronavirus-murder-latin-america-crime.html. [99]

Sen, A. (1999), *Development as Freedom*, Alfred Knopf. [168]

Shaddick, G. et al. (2018), "Data integration for the assessment of population exposure to ambient air pollution for global burden of disease assessment", *Environmental Science & Technology*, Vol. 52/16, pp. 9069-9078, http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.8b02864. [166]

Shen, G. et al. (2017), "A laboratory comparison of emission factors, number size distributions, and morphology of ultrafine particles from 11 different household cookstove-fuel systems", *Environmental Science & Technology*, Vol. 51/11, pp. 6522-6532, http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b05928. [153]

Silverio-Murillo, A. and J. Balmori de la Miyar (2020), *Families under Confinement: COVID-19, Domestic Violence, and Alcohol Consumption*, p. 28, https://www.adansilveriomurillo.com/uploads/6/9/2/9/69299595/ipv_covid_19.pdf. [109]

Solbrig, O. (1998), "The environmental agenda in Latin America - The issue of the 21st century", *Harvard Review of Latin America*, https://revista.drclas.harvard.edu/book/environmental-agenda-latin-america#:~:text=Yet%20Latin%20America%20also%20has,alarming%3B%20soil%20erosion%20is%20severely. [116]

Srinivasan, R. and J. Clifton (2020), *Gallup Keeps Listening to the World Amid the Pandemic*, Gallup Worl Poll, https://news.gallup.com/opinion/gallup/316016/gallup-keeps-listening-world-amid-pandemic.aspx. [37]

Statista (2020), *"Growth of domestic violence and sexual abuse reports during the COVID-19 lockdown in selected Latin American countries as of April 2020"*, https://www.statista.com/statistics/1113975/gender-violence-growth-coronavirus-latin-america/. [95]

Stutzer, A. and B. Frey (2006), "Political participation and procedural utility: An empirical study", *European Journal of Policital Research*, Vol. 45/3, https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00303.x. [169]

The Economist (2021), *The pandemic has changed the shape of global happiness*, https://www.economist.com/international/2021/03/20/the-pandemic-has-changed-the-shape-of-global-happiness. [240]

UIS (2021), *Youth/adult educational attainment rates by age group and level of education*, http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SDG_DS&Coords=%5bSDG_IND%5d.%5bEA_3T8_AG25T99%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en. [53]

UIS (2021), *Youth/adult literacy rate*, http://uis.unesco.org/en/glossary-term/youthadult-literacy-rate (accessed on 23 June 2021). [262]

UNEP (2020), *Waste management as an essential service in Latin America and the Caribbean*, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32615/COVID19_WASTE_LAC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [159]

UNEP (2018), *Waste Management Outlook for Latin America and the Caribbean*, https://www.unep.org/resources/report/waste-management-outlook-latin-america-and-caribbean. [120]

UNESCO (2021), *Education: From disruption to recovery*, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures. [64]

UNFPA (2020), *Provision of Sexual and Reproductive Health care and Family Planning during the COVID-19 pandemic health emergency*, https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3-Covid-SSRyPF_ENG%20%281%29.pdf. [27]

UNGA (2016), *Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction (OEIWG)*, https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf. [143]

UNICEF (2020), *The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth*, https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth. [31]

UNODC (2020), *Research brief: Effect of the COVID-19 pandemic and related restrictions on homicide and property crime*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Property_Crime_Brief_2020.pdf. [90]

UNODC (2020), *UNODC-INEGI Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia*, http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab11/. [86]

UNODC (2016), *International Classification of Crime for Statistical Purposes, Version 1.0*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf. [80]

Uthoff, A. and L. Beccaria (2007), *Panorama social de América Latina 2007*. [196]

Vega Angarita and González Escobar (2009), "Social support key element in confronting chronic illness", *Enfermería Global*, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000200021. [198]

Voßemer, J. et al. (2017), "The effects of unemployment and insecure jobs on well-being and health: The moderating role of labor market policies", *Social Indicators Research*, Vol. 138/3, pp. 1229-1257, http://dx.doi.org/10.1007/s11205-017-1697-y. [250]

Wang, H. et al. (2020), "Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950–2019: A comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019", *The Lancet*, Vol. 396/10258, pp. 1160-1203, http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30977-6. [126]

Warn, E. and S. Adamo (2014), *The Impact of Climate Change: Migration and Cities in South America*, https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/impact-of-climate-change-migration-and-cities-south-america. [136]

Washington Group on Disability Statistics (2016), *The Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS)*. [41]

WDI (2021), *World Bank Development Indicators*, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. [5]

WFP (2020), *World Food Programme gears up to support children left without meals due to COVID-19 school closures*, https://www.wfp.org/news/world-food-programme-gears-support-children-left-without-meals-due-covid-19-school-closures. [70]

Wong, K., A. Chan and S. Ngan (2019), "The effect of long working hours and overtime on occupational health: A meta-analysis of evidence from 1998 to 2018", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 16/12, p. 2102, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16122102. [227]

Worldometer (2021), *Latin America and the Caribbean Population*, https://www.worldometers.info/world-population/latin-america-and-the-caribbean-population/. [17]

Wulfgramm, M. (2014), "Life satisfaction effects of unemployment in Europe: The moderating influence of labour market policy", *Journal of European Social Policy*, Vol. 24/3, pp. 258-272, http://dx.doi.org/10.1177/0958928714525817. [249]

Wu, X. et al. (2020), *Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study*, Cold Spring Harbor Laboratory, http://dx.doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502. [146]

WVS Database (2020), *World Values Survey*, https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp. [243]

YouGov (2020), *How COVID-19 is affecting mental health across the globe*, https://today.yougov.com/topics/health/articles-reports/2020/12/10/covid-19-mental-health-global. [30]

Zhang, Y. et al. (2011), "Can commonly-used fan-driven air cleaning technologies improve indoor air quality? A literature review", *Atmospheric Environment*, Vol. 45/26, pp. 4329-4343, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.05.041. [157]

Zhao, Y. et al. (2019), "Characterization of particulate matter from heating and cooling several edible oils", *Building and Environment*, Vol. 152, pp. 204-213, http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.02.007. [155]

Notas

[1] En el presente informe, los 11 países analizados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay.

[2] El estado de salud se clasifica sistemáticamente como uno de los aspectos más valorados de la vida de las personas en consultas públicas que han servido de base para la construcción de marcos nacionales de bienestar en países de la OCDE (por ejemplo, en Italia, Alemania, Israel y Escocia) y por los usuarios del Índice para una Vida Mejor de la OCDE (Balestra, Boarini and Tosetto, 2018[261]).

[3] La "transición epidemiológica" (de enfermedades transmisibles a no transmisibles) observada en muchos países de la OCDE también está afectando a América Latina y el Caribe, donde la carga que suponen las enfermedades no transmisibles entre los adultos ha ido en aumento con el paso del tiempo (OCDE/Banco Mundial, 2020[4]).

[4] Según las Global Health Estimates de la OMS, los trastornos mentales y las afecciones neurológicas incluyen, entre otras cosas, lo siguiente: trastornos depresivos, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, autismo y síndrome de Asperger, discapacidad intelectual idiopática, enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, enfermedad de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, migraña y cefaleas distintas a la migraña (OMS, 2018[25]).

[5] Las comparaciones entre países de los datos sobre suicidios deben gestionarse con cuidado: las estimaciones dependen en gran medida de la calidad del sistema de registros vitales, que puede variar de un país a otro, lo que afecta a los niveles actuales y también a las tendencias. Por otra parte, es habitual que no se informe adecuadamente de los casos de suicido, lo cual significa que en países en los que hay una escasa cobertura de los fallecimientos en general (es decir, donde un elevado porcentaje de las muertes no llega al sistema de registros vitales), una elevada proporción podría deberse a casos de suicidio (Mascayano et al., 2015[251]). El estigma social que rodea a los casos de suicidio y trastornos mentales también puede perjudicar los niveles de información al respecto, lo que afecta a la comparabilidad de los datos entre los diferentes países. En la práctica, esta situación constituye además un factor de riesgo, pues podría impedir un acceso efectivo y oportuno a servicios de atención sanitaria cuando más se necesitan (Feigelman, Gorman and Jordan, 2009[257]; Ferré-Grau et al., 2011[256]; Jaen-Varas et al., 2014[253]).

[6] Es importante destacar que la cobertura sanitaria universal es un índice compuesto, que combina indicadores de acceso con indicadores de resultados (p. ej., la prevalencia de una presión sanguínea por encima de determinados niveles). El índice de cobertura sanitaria universal también incluye determinados indicadores de recursos disponibles (disponibilidad de camas en hospitales y de personal sanitario). En los indicadores de resultados no solo influye la política sanitaria, sino también las preferencias individuales y los comportamientos, por lo tanto, no son medidas directas de acceso a los servicios sanitarios. Del mismo modo, tampoco los indicadores de recursos disponibles son medidas directas de acceso a los servicios sanitarios. Además, no todos los indicadores incluidos en el índice de cobertura sanitaria universal se encuentran adaptados en la misma medida a los diferentes contextos (p. ej., la prevención de la malaria en países no tropicales). Por último, los datos del índice de cobertura sanitaria universal deben interpretarse con cautela en este informe, pues la principal fuente de datos con respecto a algunas áreas de seguimiento son archivos administrativos sanitarios cuya cobertura y calidad son diferentes según el país analizado del que se trate. Un ejemplo de estas salvedades es el hecho de que, en 2017, el acceso a servicios esenciales en Chile según la cobertura sanitaria universal (la segunda más baja del grupo de países analizados) contradice en cierto modo la lógica si se tienen en cuenta los niveles de esperanza de vida o mortalidad infantil o materna.

[7] Estos porcentajes representan prácticamente 26,7 millones de casos confirmados y más de 846.000 muertes hasta el 14 de abril de 2021 (Dong, Du and Gardner, 2020[2]).

[8] Se extrajeron estimaciones de la prevalencia en relación con las siguientes categorías de enfermedades por edad, sexo y país: (1) enfermedades cardiovasculares, incluidas aquellas provocadas por la hipertensión; (2) enfermedad renal crónica, incluida la enfermedad renal crónica provocada por la hipertensión; (3) enfermedad respiratoria crónica; (4) enfermedad hepática crónica; (5) diabetes; (6) cánceres con inmunosupresión directa; (7) cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión provocada por el tratamiento; (8) VIH/Sida; (9) tuberculosis; (10) trastornos neurológicos crónicos; y (11) drepanocitosis.

[9] Para el cómputo de los datos estadísticos que resumen la desigualdad en materia de longevidad, la categoría “Sin escolarizar” se fusionó con “Primaria y secundaria de ciclo inferior” para formar la categoría “Bajo nivel educativo” (Murtin et al., 2017[50]).

[10] En todos estos países, la proporción de adultos con estudios universitarios se sitúa entre las más bajas de los países de la OCDE y los países asociados (menos del 25%), lo que podría explicar en parte la amplia ventaja que poseen los trabajadores con estudios universitarios en cuanto a ingresos.

[11] El PISA solo mide el desempeño de los estudiantes de 15 años que siguen escolarizados. En el caso de Costa Rica, la ausencia de progresos en las puntuaciones promedio desde 2009 oculta el hecho de que ha aumentado el porcentaje del cohorte de jóvenes escolarizados (incluido un mayor número de estudiantes de entornos desfavorecidos) y que, por lo tanto, también participan en el PISA. Sin embargo, otros países de la región, como Perú, han conseguido escolarizar a más niños y mejorar simultáneamente los resultados de aprendizaje promedio en el PISA (OCDE, 2017[49]).

[12] En 2018, realizaron la prueba PISA, que tiene una duración de dos horas, 600.000 estudiantes, en representación de cerca de 32 millones de estudiantes de 15 años de centros escolares de los 79 países participantes. Los “Mejores resultados” corresponden a quienes alcanzaron el Nivel 5 o 6 en una materia determinada, mientras que los “Peores resultados” corresponden a aquellos con puntuaciones inferiores al Nivel 2 (OCDE, 2019[55]).

[13] En el Nivel 5 o superior, los alumnos comprenden textos de gran extensión, manejan conceptos abstractos o contradictorios, y establecen distinciones entre hechos y opiniones, a partir de indicaciones implícitas pertenecientes al contenido o la fuente de la información (OCDE, 2019[264]).

[14] En lo que atañe a la competencia lectora, en el Nivel 2, los estudiantes comienzan a mostrar la habilidad de utilizar su capacidad de lectura para adquirir conocimientos y resolver problemas prácticos. Los estudiantes que no alcanzan el Nivel 2 en competencia lectora suelen encontrar dificultades cuando se enfrentan a material con el que no están familiarizados o que presenta una longitud y una complejidad moderadas. Lo habitual es que haya que guiarles con instrucciones o indicios para que puedan captar el significado de un texto. En el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se ha identificado la competencia de Nivel 2 como el “nivel de competencia mínimo” que deberían haber adquirido todos los alumnos al finalizar la educación secundaria (OCDE, 2019[55]). En lo que se refiere a la competencia matemática, en el Nivel 2, los alumnos comienzan a mostrar iniciativa y capacidad para aplicar las matemáticas a situaciones sencillas de la vida real. Pese a que puede considerarse que los alumnos que obtienen calificaciones inferiores a este nivel mínimo se encuentran en situación de especial riesgo, la competencia de Nivel 2 no constituye necesariamente un nivel "suficiente" de competencia matemática para tomar decisiones y hacer valoraciones fundadas en situaciones personales o profesionales para las que es necesario manejar unos conocimientos matemáticos básicos (OCDE, 2019[55]). No obstante, es también el nivel de competencia que se tiene en cuenta en relación con los ODS de las Naciones Unidas. El Nivel 2 de competencia científica constituye asimismo una referencia importante de desempeño escolar. En la escala de PISA, representa el nivel de rendimiento al que los estudiantes comienzan a mostrar las competencias científicas que les permiten realizar un discurso razonado sobre ciencia y tecnología (OCDE, 2018[265]). En el Nivel 2, las competencias y actitudes necesarias para dialogar de manera efectiva sobre temas relacionados con la ciencia se encuentran tan solo en una fase incipiente. Los estudiantes demuestran conocimientos científicos cotidianos, así como una comprensión básica de investigaciones científicas que pueden aplicar principalmente en contextos que les resultan familiares (OCDE, 2019[55]).

[15] Las preguntas planteadas en las encuestas varían entre unos y otros países, y no todos ellos emplean la definición de alfabetización “saber leer y escribir una exposición sencilla” (UIS, 2021[262]).

[16] Un adulto con conocimientos matemáticos responderá de forma adecuada al contenido, las ideas y la información matemáticas representadas de diferentes formas para resolver problemas y gestionar situaciones en la vida real. Aunque los resultados de las tareas de cálculo dependen, en parte, de la

capacidad lectora y de comprensión de textos, la capacidad de cálculo comporta algo más que aplicar los conocimientos aritméticos a la información incluida en el texto (OCDE, 2019[62]). Al igual que ocurre con la escala empleada para la competencia lectora, la escala de cálculo matemático también se divide en seis niveles: Niveles 1 a 5 y por debajo del Nivel 1. En las tareas inferiores al Nivel 1 se exige a los participantes que realicen procesos sencillos (contar, clasificar, realizar operaciones aritméticas básicas con números enteros o dinero) o reconocer representaciones espaciales habituales en contextos familiares concretos en los que hay contenido matemático explícito, es decir, con pocos o ningún elemento de distracción o texto. En las tareas de Nivel 5, por otra parte, los participantes han de entender representaciones complejas e ideas estadísticas y matemáticas abstractas y formales, posiblemente insertadas en textos complejos (OCDE, 2019[62]).

[17] Véase: http://uis.unesco.org/en/news/uis-sdg-core-indicators-refocusing-efforts-attain-sdg-4.

[18] Cálculo: Tasa de abandono acumulada hasta el último grado de enseñanza primaria = 100% - Tasa de permanencia hasta el último grado de enseñanza primaria.

La tasa de abandono acumulada hasta el último grado de enseñanza secundaria no se puede derivar de ningún otro dato de la base de datos del UIS.

[19] Este indicador se incluyó en la Encuesta Gallup Mundial a partir de 2019, por lo que no hay ninguna serie de tiempo disponible.

[20] Países tenidos en cuenta: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

[21] La materia particulada fina ($MP_{2,5}$) es el contaminante atmosférico que plantea mayor riesgo para la salud en el mundo, ya que afecta a más personas que cualquier otro contaminante (OMS, 2021[267]).

[22] En la actualidad, no es posible calcular ningún resultado ambiental, a excepción de la contaminación atmosférica, a nivel subnacional usando un método internacional armonizado (OCDE, 2015[96]). Resulta prioritario aumentar el número de indicadores ambientales disponibles tanto en el caso de América Latina como de los países de la OCDE.

[23] Los datos sobre exposición anual promedio a materia particulada fina por región que se muestran en el Gráfico 3.24 no se limitan a las zonas urbanas, sino que abarcan todas las partes del país (aunque se ponderan por población, de modo que las zonas rurales representan una proporción mucho más reducida de la estimación promedio en la mayoría de los países de ALC, debido a la enorme urbanización de la población). Esto significa que la exposición anual promedio puede ser considerablemente más elevada en las ciudades, y en determinados lugares de las ciudades, pero si una gran proporción de la población vive en zonas rurales, dicha circunstancia compensará el promedio regional.

[24] Una catástrofe es un suceso desastroso y repentino que altera gravemente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y provoca pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales que superan la capacidad de la sociedad o la comunidad afectada para hacer frente a la situación con sus propios recursos (CEPAL, 2021[266]).

[25] En esta oración específica, el término “afectaron” se refiere a la población que “necesita asistencia básica inmediata, entre otras cosas comida, agua, cobijo, sistemas de saneamiento y asistencia médica durante un período de emergencia provocado por una catástrofe natural. Corresponde a la suma de todas las personas heridas, sin hogar y afectadas” (CEPAL, 2021[266]).

[26] En los marcos de medición del bienestar de todo el mundo, los conceptos utilizados varían y van desde zonas de proximidad a espacios naturales (Japón, Escocia), pasando por percepción de accesibilidad (Nueva Zelanda, Australia, Escocia), densidad (Corea) y número de visitas a exteriores (Australia, Canadá, Israel, Escocia, el Reino Unido) (Exton and Fleischer, a continuación[268]).

[27] Para consultar más información acerca del voto obligatorio que se menciona en esta sección, consúltese: https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting.

[28] La República Dominicana derogó oficialmente el voto obligatorio en 2010, aunque no se imponían sanciones al respecto (IDEA, 2021[174]). En las elecciones presidenciales de 2020, la abstención alcanzó un 45%, según la Junta Central Electoral (JCE, 2020[263]).

[29] Basándose en el umbral de +/- 3.0 pp para valorar la variación a lo largo del tiempo de este indicador, establecido en el anexo 5.A del informe *¿Cómo va la vida? 2017* (OCDE, 2017[46]).

[30] El incremento del apoyo social se documentó también en una muestra aleatoria de la población general de Hong Kong tras el brote de SARS de 2003 (Lau et al., 2006[252]).

[31] Puesto que la tecnología informática puede fomentar la creación de una red más amplia, pero con vínculos más débiles, en lugar de una red más pequeña con vínculos fuertes, su repercusión en las relaciones sociales puede ser considerable (OCDE, 2019[71]).

[32] En la bibliografía, sigue existiendo cierta controversia sobre si las medidas obtenidas a partir de respuestas a encuestas pueden analizarse como si fuesen datos de una escala de intervalo (p. ej., (Frey and Stutzer, 2000[254]; Ferrer-i-Carbonell and Frijters, 2004[255]; Diener and Tov, 2012[258]; Bond and Lang, 2019[260]; Chen et al., 2019[259])). Gran parte de esta controversia se centra en el análisis de los elementos de los cuestionarios que utilizan valores de respuestas categóricas cortas (p. ej., "no demasiado satisfecho/ bastante satisfecho/ muy satisfecho"), a partir de las cuales se obtienen datos de escala ordinal discreta. Este informe utiliza valores de respuesta numéricos del 0 al 10, con los que se pretende trasladar intervalos iguales a los consultados desde el principio, y se configuran de manera que el cero se refiera al valor mínimo absoluto (es decir, el "peor posible"). Las respuestas mediante estos valores numéricos del 0 al 10 suelen analizarse como si fueran datos de intervalo (p. ej., resumidos en un promedio medio; analizados usando un método de regresión de mínimos cuadrados ordinarios o MCO). Aunque la representación de los datos sea imperfecta, en este caso se indica la media por diversos motivos prácticos. En primer lugar, la media ofrece un resumen simple de la tendencia central, que puede ofrecer una imagen "rápida" de los resultados en un gran número de países y a lo largo del tiempo (algo esencial para obtener un informe comparativo). En comparación con el valor de la mediana, la media es más sensible a cambios en la distribución de valores de una escala delimitada del 0 al 10 y presenta un sesgo inferior al valor de la mediana cuando se sitúa en el umbral entre dos categorías de respuesta (OCDE, 2013[228]). Una representación ideal de los datos consistiría en una serie de histogramas que mostrasen la distribución total de las respuestas entre las 11 categorías de respuesta con respecto a cada país y en cada punto temporal, pero no es una opción práctica por limitaciones de espacio. A efectos de comunicación y para valorar las carencias, puede resultar útil imponer umbrales binarios a los datos (es decir, informar de la proporción de la población que ha respondido por encima o por debajo de un determinado valor umbral), aunque esto también implica hacer suposiciones sólidas sobre cómo traducir la distribución en segmentos significativos, y, lo que es crucial, puede exagerar la importancia de una diferencia o cambio cuando estos se produzcan cerca del umbral, aparte de obviar las diferencias o los cambios que tienen lugar en otras partes de la distribución [véase (OCDE, 2013[228])]. Por último, indicar la media promedio se ha convertido en algo habitual en la mayor parte de la bibliografía que utiliza medidas de evaluación de la vida de 0 a 10, lo que facilita las comparaciones entre los resultados comunicados en este informe y en otros estudios sobre esta materia.

[33] Para situar estos datos en contexto, los datos contrastados indican que el desempleo ha perjudicado la satisfacción con la vida aproximadamente 1 punto (controlando las características particulares) (Wulfgramm, 2014[249]; Voßemer et al., 2017[250]).

[34] Dentro del ámbito del bienestar subjetivo, no se tienen en cuenta medidas obtenidas a partir de encuestas sobre conceptos objetivos, tales como la autoevaluación sobre la propia salud o sobre las dificultades económicas manifestada a través de encuestas. Aunque la herramienta de medición utilizada con respecto a este tipo de cuestiones son encuestas a las que responden los propios afectados, el tema investigado no es intrínsecamente subjetivo, es decir, puede ser observado por un tercero. La satisfacción de la población con dominios específicos de la vida, tales como su satisfacción con su situación financiera o sus relaciones sociales, podría considerarse a modo de subconjuntos de evaluaciones de la vida —aunque dentro del contexto del cuadro de indicadores de *¿Cómo va la vida?*, lo más lógico sería que apareciesen como medidas subjetivas dentro de sus respectivos dominios (ingresos y patrimonio; relaciones sociales)—. Lo que es específico del concepto de bienestar subjetivo es que solo la persona consultada puede facilitar información sobre sus evaluaciones, emociones y funcionamiento psicológico. Por lo tanto, el interés se centra en las opiniones propias de la población sobre sus sentimientos (y no en sus respuestas a encuestas sobre fenómenos objetivos) (OCDE, 2020[39]).

4 Recursos para el bienestar futuro en América Latina

América Latina alberga gran parte de la biodiversidad del planeta. No obstante, esta se reduce a un ritmo dos veces superior al promedio de la OCDE, en lo que supone una erosión del capital natural del cual depende el bienestar presente y futuro de la región. Entre los riesgos para el capital humano destacan el rápido aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como el gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El lento crecimiento de la inversión debilita los cimientos del bienestar futuro, mientras que el enorme lastre que representa el reembolso de la deuda externa es un riesgo persistente. Las múltiples revueltas sociales de 2019 son una clara señal de la fragilidad del contrato social en la región, corroborada por el apoyo menguante a la democracia electoral, la escasa confianza en los gobiernos y en los demás, y los elevados niveles de percepción de la corrupción, la discriminación y la distribución injusta del ingreso. La pandemia de COVID-19 está agravando las presiones que soportan los distintos tipos de capital en los que se fundamenta el bienestar futuro.

Introducción

Este capítulo describe cuatro tipos distintos de recursos que ayudan a respaldar el bienestar en el tiempo. De acuerdo con el marco de bienestar de la OCDE (OCDE, 2020[1]), estos recursos se expresan en términos de cuatro clases de capital (es decir, reservas que permanecen en el tiempo pero también se ven afectadas por las decisiones que se toman a día de hoy). El *capital natural* engloba los activos naturales tanto renovables (p. ej., bosques, peces) como no renovables (p. ej., minerales), así como los ecosistemas (p. ej., arrecifes coralinos oceánicos, humedales, bosques, tierra y atmósfera) y los servicios que proporcionan. El *capital económico* incluye los activos antropogénicos y financieros. El *capital humano* se refiere a las competencias y la salud futura de las personas. Por último, el *capital social* engloba las normas sociales, los valores compartidos y las disposiciones institucionales que promueven la cooperación (OCDE, 2020[1]). Además de examinar los saldos y flujos de capitales, también se analizan algunos de los principales factores de riesgo y resiliencia que podrían afectar el valor de bienestar de los saldos y flujos en el futuro. Las distintas secciones hacen hincapié en las principales brechas estadísticas que deben corregirse para mejorar la medición de recursos para el bienestar futuro.[1]

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un cambio radical en la vida de las personas. Nuevas vulnerabilidades han quedado al descubierto, otras se han agravado; además, la pandemia ha centrado nuevamente la atención en la necesidad de "construir un futuro mejor", a través de formas de desarrollo más resilientes y sostenibles. En el momento de redactarse este informe, los datos disponibles no reflejan todavía el impacto total de la crisis y sus consecuencias a largo plazo. Siempre que están disponibles, el capítulo presenta también datos contrastados sobre la manera en que la crisis del COVID-19 está afectando estos recursos.

Capital natural

El *capital natural* está formado por los activos de origen natural y los ecosistemas (OCDE, 2020[1]). Los "activos ambientales" son los distintos componentes del medioambiente, mientras que los "ecosistemas" hacen referencia al funcionamiento conjunto o las interacciones entre distintos activos ambientales presentes en un territorio determinado. Con arreglo al Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, cuyo marco central constituye una norma internacional (UNSC, 2014[2]), existen siete conjuntos de activos naturales y ambientales: los recursos minerales y energéticos, la tierra, los recursos del suelo, los recursos madereros, los recursos acuáticos, otros recursos biológicos (distintos de los madereros y acuáticos) y los recursos hídricos.

Algunos de los beneficios aportados por los recursos naturales se sienten "aquí y ahora" (p. ej., respirar aire limpio o beber agua potable), y algunos de ellos se incluyen en la dimensión relativa a la "calidad del medioambiente" abordada en el Capítulo 3 (sobre calidad de vida). De todos modos, muchos de los beneficios que aportan los activos naturales se deben a su papel generador de servicios para las generaciones futuras, así como para otros capitales (p. ej., suministro de espacio físico, energía y materias primas para actividades económicas, o agua y alimentos en apoyo al capital humano) (OCDE, 2015[3]).

América Latina reúne el 60% de la biodiversidad mundial (UNEP-WCMC, 2016[4]), así como gran variedad de regiones climáticas, topografías y modalidades de uso de la tierra. La cuenca amazónica alberga nada menos que en torno al 40% de los bosques tropicales que quedan en el mundo y una de las colecciones de biodiversidad más ricas de la Tierra (UNFCCC, 2007[5]). La biodiversidad es la base de los servicios ecosistémicos de los cuales dependen las personas, y contribuye a garantizar la resiliencia (es decir, una mayor diversidad ayuda a los ecosistemas a seguir prestando servicios y mostrarse más resilientes a las presiones). Gracias a la abundancia de recursos naturales, América Latina es uno de los principales actores del desarrollo de energías renovables, en particular de la hidroeléctrica, si bien el peso de esta en la matriz energética de la región viene disminuyendo desde 2020. A pesar de ello, las emisiones de gases

de efecto invernadero (GEI), cuando incluyen los cambios de uso de la tierra, se sitúan en niveles cercanos al promedio mundial: con el 8,5% de la población, la región es responsable del 8,3% de las emisiones mundiales de GEI. Además, la región es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, en particular en los sectores hídrico, agrícola y sanitario, los glaciares andinos, el Amazonas y otras regiones vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos y la variabilidad climática (los cambios de temperatura, tiempos de lluvia, etc. perturban las interacciones en el seno de las comunidades ecológicas). El reto decisivo es proteger esta riqueza natural única de los efectos del cambio climático, las formas perjudiciales de explotación comercial, la expansión urbana, la agricultura de subsistencia, los cambios en el uso de la tierra, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasivas.

Los indicadores que aquí se presentan incluyen cuatro medidas de las reservas (ocupación del suelo con vegetación natural y seminatural, paisajes forestales intactos, y zonas terrestres y marinas protegidas); una medida de flujos (huella material per cápita), un factor de resiliencia (consumo de energía renovable), y tres factores de riesgo que ejercen presión sobre las reservas naturales (especies amenazadas, emisiones de gases de efecto invernadero per cápita y estrés hídrico).

Recursos biológicos y biodiversidad

La “diversidad biológica” —o “biodiversidad”— se define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (UNEP, 2006[6]). El uso actual de los ecosistemas terrestres no es sostenible (Naciones Unidas, 2020[7]; OCDE, 2021[8]). La pérdida de biodiversidad y las presiones a las que se someten los servicios ecosistémicos son dos de los retos ambientales más acuciantes a escala mundial; los cambios en la ocupación del suelo y el uso de las tierras son dos de los principales factores de la pérdida de biodiversidad terrestre (Haščič and Mackie, 2018[9]). El ritmo de destrucción mundial sin precedentes del capital natural plantea una serie de riesgos significativos, a menudo ignorados, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, la economía y el sector financiero. La aparición de enfermedades infecciosas como la del COVID-19, de las cuales son artífices, entre otros, el cambio en el uso de la tierra y la explotación de la fauna y flora silvestres, es solo un ejemplo de los riesgos diversos asociados a la mala gestión del capital natural (OCDE, 2021[8]). El Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por 150 jefes de gobierno en la Cumbre para la Tierra de Río en 1992, fue diseñado como herramienta práctica para traducir en hechos los principios del Programa 21. En él se reconoce que la diversidad biológica no se refiere únicamente al hecho de preservar plantas, animales y microorganismos y sus ecosistemas, sino también a las personas y sus necesidades en materia de seguridad alimentaria, medicamentos, aire y agua limpios, vivienda y un entorno limpio y saludable donde vivir. Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 aborda la necesidad de “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”; el Objetivo 14, por su parte, insiste en la necesidad de “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”.

Cubierta terrestre natural

La cubierta terrestre es la ocupación física y biológica observada de la superficie de la Tierra, e incluye la vegetación natural, las superficies abióticas (no biológicas) y las aguas interiores (UNSC, 2014[2]). En 2018, el 76% de las tierras de América Latina estaban cubiertas por vegetación natural o seminatural, un porcentaje ligeramente superior al promedio de la OCDE, que era del 75% (Gráfico 4.1, panel A). No obstante, en Colombia, Ecuador y Perú, la vegetación natural o seminatural cubre más del 80% de la superficie terrestre total, mientras que en Chile y la República Dominicana el porcentaje es inferior al 70%. En líneas generales, entre 2004 y 2018, la superficie terrestre total cubierta por vegetación natural y

seminatural se mantuvo estable. La mayor ganancia neta se produjo en Costa Rica, con un incremento superior a los 3 puntos porcentuales; en Paraguay, sin embargo, se observó una reducción de 2 puntos.

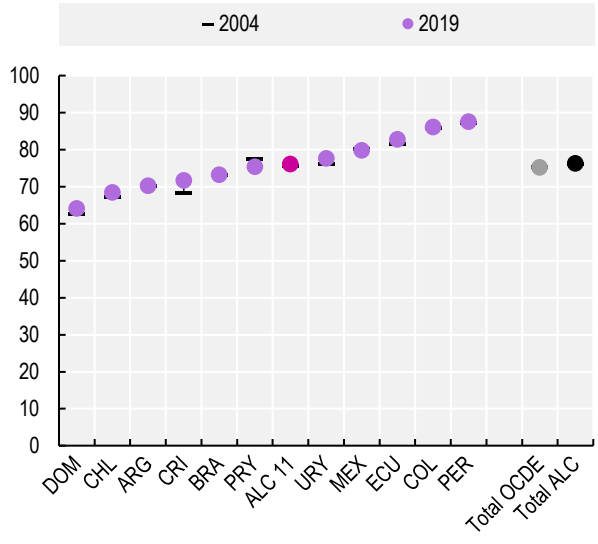
Cambios en el uso de la tierra

Los cambios en el uso de la tierra son uno de los principales factores impulsores de la degradación de los suelos. Más allá de la variación en las reservas netas de cubierta terrestre natural, las pérdidas y ganancias de vegetación natural y seminatural deben considerarse por separado, puesto que las ganancias en zonas seminaturales (con una biodiversidad pobre) podrían no compensar las pérdidas en áreas naturales ricas en biodiversidad (p. ej., la pérdida de un bosque primario o de edad madura) (OCDE, 2020[1]). La pérdida de tierras con vegetación natural y seminatural puede medirse por el porcentaje de cubierta forestal, pastizales, humedales, monte y vegetación rala convertida en cualquier otro tipo de cubierta terrestre. Las ganancias de superficie terrestre con vegetación natural y seminatural son el resultado de efectuar la conversión en el sentido contrario. El denominador utilizado son las "reservas" de superficie terrestre natural y seminatural al inicio del período. La pérdida de tierras con vegetación natural y seminatural es un buen indicador de las presiones que soportan la biodiversidad y los ecosistemas.

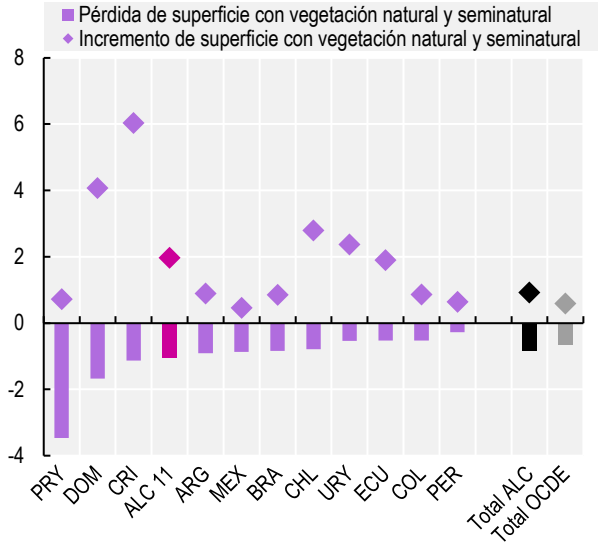
Esta estabilidad regional de la cubierta terrestre enmascara la divergencia de patrones entre los países de América Latina. Brasil, Argentina, México y Paraguay son algunos de los países que han registrado cambios especialmente alarmantes en la cubierta terrestre:[2] desde 2004, la pérdida de vegetación natural y seminatural ha sido superior a 10.000 kilómetros cuadrados en cada uno de ellos. Las pérdidas también son relativamente elevadas en Costa Rica y la República Dominicana, aunque estuvieron acompañadas de las mayores ganancias en vegetación natural y seminatural (superiores al 4%) de los países analizados,[3] lo cual se consiguió mediante forestación y reforestación[4] (Gráfico 4.1, panel B).

Gráfico 4.1. La estabilidad regional de la cubierta terrestre enmascara la divergencia de patrones en los países de América Latina

Panel A: Proporción de superficie terrestre total con cubierta terrestre de vegetación natural y seminatural, porcentaje



Panel B: Conversión de y a superficie con vegetación seminatural, porcentaje, 2004-2019



Nota: Total OCDE excluye a Costa Rica, puesto que se publicó antes de que este país se incorporase a la OCDE.
Fuente: Base de datos de la OCDE sobre la cubierta terrestre en países y regiones, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAND_COVER (panel A) y base de datos de la OCDE sobre los cambios en la cubierta terrestre en países y regiones, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAND_COVER_CHANGE (panel B).

StatLink https://stat.link/rcgq19

Paisajes forestales intactos

Los indicadores de alto nivel de la cubierta terrestre no ofrecen información sobre el valor de las zonas perdidas y ganadas en términos de biodiversidad. Los paisajes forestales intactos son ecosistemas muy valiosos, caracterizados por las extensiones continuas de ecosistemas naturales dentro de los límites actuales del bosque, sin señales de actividad humana detectadas a distancia, y lo suficientemente grandes para que toda la biodiversidad autóctona, incluidas las poblaciones de un vasto número de especies, pueda mantenerse (Potapov et al., 2017[10]). América Latina y el Caribe albergan el 36% de los paisajes forestales intactos del mundo. Diez de los países analizados cuentan todavía con paisajes forestales intactos. Brasil tiene el tercer paisaje forestal intacto más grande del mundo (por detrás de Canadá y la Federación de Rusia); en 2016, estos tres países juntos reunían dos terceras partes de las zonas de paisajes forestales intactos del mundo. En comparación con el año 2000, las zonas forestales intactas se han reducido en torno a un 9% (unos 400.000 kilómetros cuadrados) en América Latina y el Caribe; la mitad de estas pérdidas se han producido en Brasil. Las pérdidas también han sido significativas en Perú (más de 44.000 kilómetros cuadrados) y Paraguay (una reducción del 80%, lo que suponen unos 36.000 kilómetros cuadrados); el país que menos pérdidas ha registrado ha sido Colombia (0,2 kilómetros cuadrados).

Otros ecosistemas terrestres y marinos, como los pastizales y los humedales, también son importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y sufren presiones considerables en América Latina (p. ej., las pampas). Lamentablemente, los datos comparables aparecen dispersos.

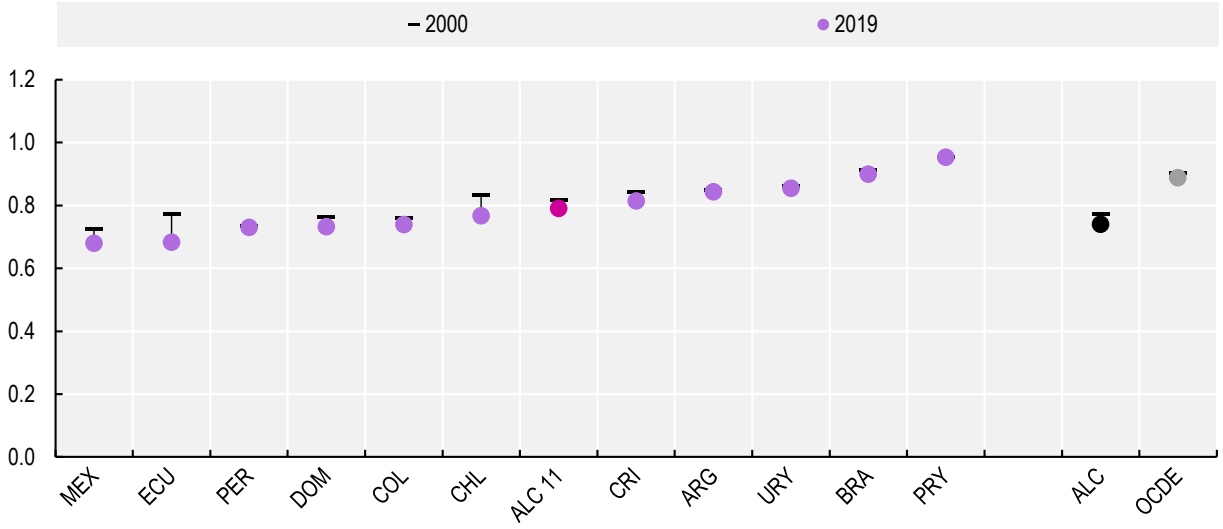
Especies amenazadas

La extinción de especies altera el equilibrio en la naturaleza y aumenta la fragilidad y la falta de resistencia de los ecosistemas ante las perturbaciones (Naciones Unidas, 2020[7]). La importancia del control de las especies amenazadas está reconocida internacionalmente por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (UNEP, 2006[6]) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15; de su supervisión se encarga el Índice de la Lista Roja (Indicador 15.5.1), para el cual se tiene en cuenta el riesgo de extinción combinado de aves, mamíferos, anfibios, cícadas y corales.

El Índice de la Lista Roja de los países analizados ha registrado un descenso del 3% desde el año 2000, un ritmo que dobla el descenso medio de la OCDE (Gráfico 4.2). La principal reducción se ha observado en Chile, Ecuador y México, todos ellos países con una tasa de riesgo ya elevada.

Gráfico 4.2. En América Latina y el Caribe, la biodiversidad se está reduciendo a un ritmo que dobla el promedio de la OCDE

Índice de la Lista Roja (a más alto valor, mayor riesgo de extinción)



Nota: El Índice de la Lista Roja (ILR) es un indicador combinado del riesgo de extinción de aves, mamíferos, anfibios, cícadas y corales. Un valor de 1,0 en la ILR implica que todas las especies se engloban en la categoría "preocupación menor"; es decir, no se prevé que se extingan en un futuro próximo. Un valor de 0 significa que todas las especies se han extinguido. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas.
Fuente: Base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 15.5.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

StatLink https://stat.link/8nkux4

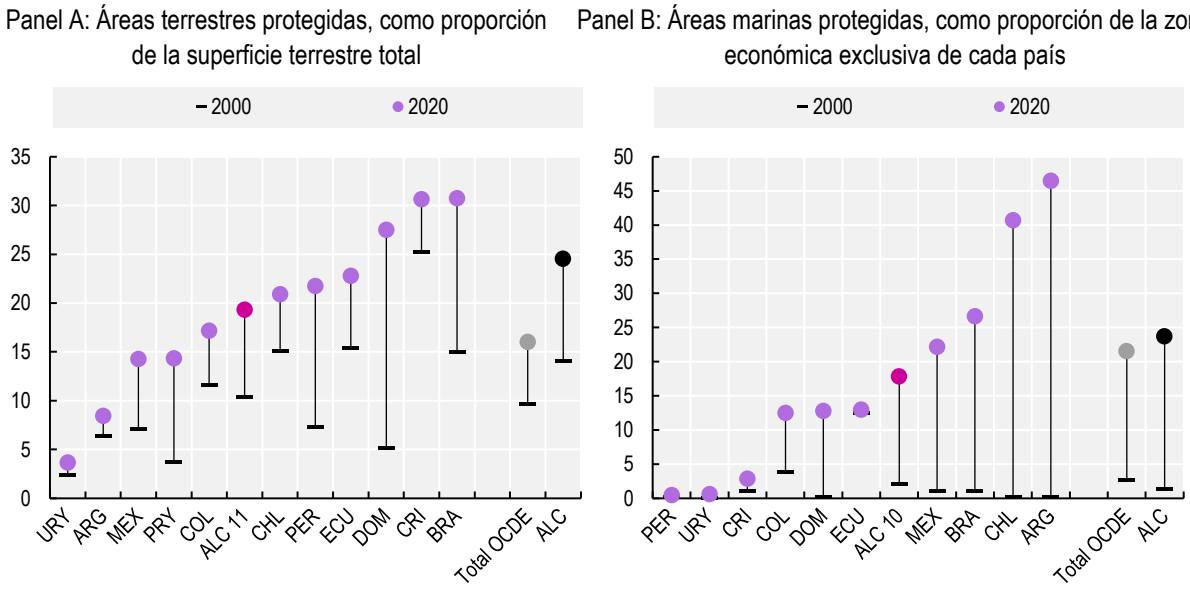
Zonas terrestres y marinas protegidas

La expansión de la producción agrícola y las incursiones humanas en zonas naturales para desarrollar actividades de explotación forestal y minera, entre otros, han provocado la pérdida y fragmentación de hábitats, así como un aumento del contacto entre personas, ganado, y fauna y flora silvestres. Este mayor contacto también facilita que la fauna transmita a los humanos enfermedades frente a las cuales tienen poca o nula resistencia, como es el COVID-19 (UICN (La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2020[11]). Uno de los instrumentos de política que promueven la conservación de especies y ecosistemas (entre los cuales se cuentan los impuestos, las tasas, los cánones, las compensaciones de la biodiversidad y los pagos por servicios ecosistémicos) es la creación de áreas protegidas, cuya importancia para la sostenibilidad también está reconocida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15.[5]

Los países de América Latina y el Caribe están ampliando la protección de los entornos terrestres y marinos, si bien no al mismo ritmo en toda la región. En el conjunto de ALC, el 25% de las áreas terrestres y el 24% de las marinas están protegidas[6] (Gráfico 4.3). Este porcentaje supera el promedio de la OCDE, que es del 16% y el 22%, respectivamente, y la Meta de Aichi para la Diversidad Biológica[7] 11 para 2020, que prevé una cobertura mínima del 17% para áreas terrestres protegidas y del 10% para áreas costeras y marinas (UNEP-WCMC, 2016[4]). En 2000, la proporción de áreas terrestres protegidas en los países analizados y la OCDE era muy parecida (10,4% y 9,7%, respectivamente). En cambio, entre 2000 y 2020, la cobertura de áreas terrestres protegidas se incrementó en casi 9 puntos porcentuales, en promedio, en los países analizados, situándose por encima de la tasa media de crecimiento de la OCDE (6,3 puntos).

Los aumentos más significativos (superiores a 14 puntos) se registraron en Brasil, Perú y la República Dominicana. Durante el mismo período, la proporción de áreas marinas protegidas se duplicó con creces en 10 de los países analizados, con la excepción de Ecuador, cuyo porcentaje era el más elevado de los países analizados en 2000 y se mantuvo estable en el tiempo. La mayoría de los países analizados han alcanzado la Meta de Aichi para la Diversidad Biológica 11 en cuanto a cobertura,[8] excepto Uruguay (en relación con las áreas terrestres y marinas), Argentina, México y Paraguay (en relación con las áreas terrestres), y Costa Rica y Perú (en relación con las áreas marinas).

Gráfico 4.3. La protección de los entornos terrestres y marinos está aumentando en América Latina y el Caribe, si bien no al mismo ritmo en toda la región



Nota: El total de la OCDE incluye Costa Rica y excluye a Turquía, puesto que Turquía no declara datos sobre áreas protegidas ni al CMVC-PNUMA, ni a la base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) de la UICN. En el panel B, ALC 10 y Total ALC excluyen a Paraguay, puesto que no tiene área marina. Además de Turquía, Total OCDE excluye a Austria, Hungría, Luxemburgo, la República Checa, la República Eslovaca y Suiza, puesto que no tienen área marina.
Fuente: Base de datos sobre áreas protegidas de la OCDE, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS.

StatLink https://stat.link/dzje9b

Cambio climático

El cambio climático amenaza el bienestar futuro y su urgencia se reconoce internacionalmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: "Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos". Por su geografía, clima, estructuras socioeconómicas, demografía y activos naturales (como son los bosques y la biodiversidad), todos los países de América Latina y el Caribe, y en particular los de América Central y el Caribe, se ven seriamente afectados por las variaciones del clima, la subida de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y el aumento de la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales relacionados con el clima (CEPAL/ACNUDH, 2019[12]). El año 2019 fue el segundo más cálido de los que se tienen registro y cerró la década más cálida (2010-2019), marcada por enormes incendios forestales, huracanes, sequías, inundaciones y otras catástrofes climáticas en todos los continentes. Para ceñirse al objetivo de un aumento de la temperatura de 1,5 °C —o incluso 2 °C — estipulado en el Acuerdo de París, las emisiones

mundiales de gases de efecto invernadero deben comenzar a reducirse un 7,6% cada año a partir de 2020 (Naciones Unidas, 2020[7]).

Emisiones de gases de efecto invernadero

En los seis países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita derivadas de la producción interna (excluidas las emisiones por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura [UTS]) se sitúan en torno a las 5 toneladas de CO_2 equivalente, la mitad del nivel medio de la OCDE (Gráfico 4.4, panel A). Las emisiones de GEI en los países con el peor desempeño (Argentina y Chile) doblan con creces las de los países con mejor desempeño (Costa Rica y Colombia). Desde el año 2000, Chile (1,1 toneladas) y Brasil (0,8 toneladas) vienen impulsando el moderado aumento del promedio de los países analizados, mientras que las emisiones de GEI atribuibles a la producción interna se han mantenido en general estables en los demás países analizados sobre los cuales hay datos disponibles.

Las emisiones totales de la región, incluidas las derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTS), registraron una subida considerable entre mediados del siglo XIX y 1992, año en que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde entonces, la tasa de crecimiento de las emisiones se ha moderado, y el período posterior al Protocolo de Kioto[9] (a partir de 2012) viene registrando la tasa de crecimiento de las emisiones más baja hasta la fecha. Según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), América Latina y el Caribe fue responsable del 8,3% de las emisiones mundiales, un nivel en general acorde con la proporción de la población mundial que vive en la región (8,5%). No obstante, muchos de los países de la región se encuentran en una situación asimétrica en lo que al cambio climático se refiere: su responsabilidad histórica en cuanto a las causas es menor, pero su vulnerabilidad a los efectos es muy elevada (Bárcena et al., 2020[13]).

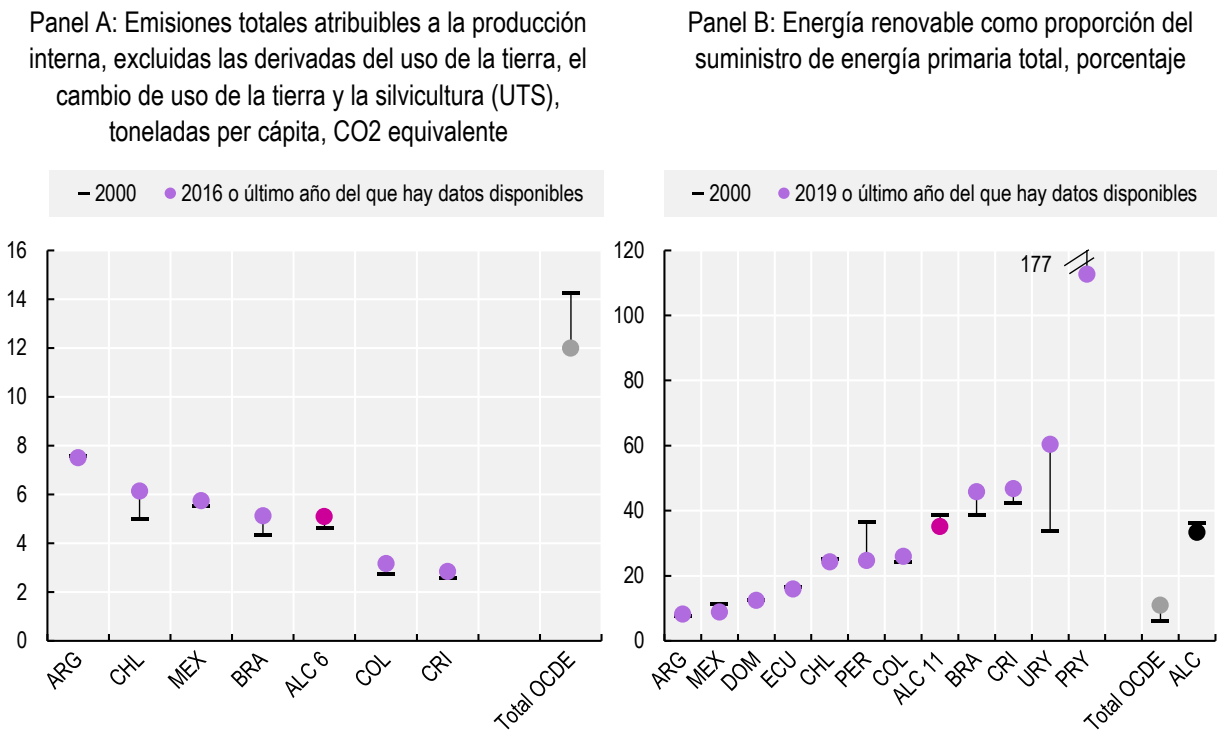
La estructura de las emisiones de la región también es distinta de la de las emisiones mundiales. Mientras que el 70% de estas provienen del sector de la energía, esa proporción apenas alcanza el 45% en la región, seguida de la agricultura y ganadería (23%) y el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (19%). Las variaciones en las emisiones por uso de la tierra contribuyen de forma considerable al total de emisiones; además, los resultados en cuanto a promedio por cápita coinciden con el promedio mundial, a pesar de que la matriz energética interna de la región es limpia, con un uso limitado del carbón y el uso generalizado de la energía hidroeléctrica (Bárcena et al., 2020[13]).

Suministro de energía renovable

La generación de electricidad, principalmente por medio de combustibles fósiles, es el factor que más contribuye a las emisiones de GEI mundiales (OCDE, 2019[14]). Por tanto, es indispensable catalizar el cambio a través de un sector energético sostenible para alcanzar las metas de reducción de GEI. Gracias a su riqueza de recursos hídricos, el 35% del suministro de energía primaria total en los países analizados proviene de fuentes renovables, un porcentaje muy superior al promedio de la OCDE (11%) (Gráfico 4.4, panel B). En Paraguay y Uruguay, más del 50% del suministro de energía primaria total se obtiene de fuentes renovables. En particular, el 100% de la energía primaria generada en Paraguay es renovable (y el 100% de las exportaciones de energía tienen su origen en fuentes de energía renovables: energía hidroeléctrica y carbón vegetal producido en carboneras, razón por la cual el valor de Paraguay supera el 100%) (UNCTAD, 2018[15]). En el extremo opuesto del espectro, la proporción de renovables en Argentina y México apenas se sitúa en torno al 8%. Entre 2000 y 2019, la proporción de energías renovables con respecto al suministro de energía primaria total cayó casi 4 puntos porcentuales; en cambio, el promedio de la OCDE registró un ascenso de casi 5 puntos. Se observaron incrementos de más de 4 puntos en Costa Rica (4,4 puntos), Brasil (7 puntos) y Uruguay (con un aumento de casi 27 puntos porcentuales). Por el contrario, en la mayoría de los países analizados, la tónica dominante ha sido una combinación de

estabilidad y disminución de la proporción de renovables en el suministro de energía primaria total. El descenso más pronunciado se produjo en Perú (casi 12 puntos) y Paraguay (casi 65 puntos). En el conjunto de la región, la energía hidroeléctrica está perdiendo peso, aun habiendo recibido cuantiosas inversiones. Ello se debe en parte a la reducción de las precipitaciones, pero también a la inversión en combustibles fósiles (sobre todo en gas de esquisto); algunos países de la región se están carbonizando, en vez de descarbonizarse. Los costos irrecuperables,[10] la inexistencia de infraestructura para la transmisión y el almacenamiento de energías renovables, los retrasos en la internalización de los factores externos y la importancia de los hidrocarburos en las exportaciones de algunos países son los principales obstáculos para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles (Bárcena et al., 2020[13]).

Gráfico 4.4. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma moderada en la región, mientras que la proporción de renovables en el suministro de energía se ha reducido casi 4 puntos porcentuales desde 2000



Nota: Total OCDE excluye a Costa Rica, puesto que se publicó antes de que este país se incorporara a la OCDE. En el panel A, el último año del que hay datos disponibles es 2015 en el caso de México, 2014 en el caso de Argentina y Colombia, y 2012 en el de Brasil y Costa Rica. ALC 6 excluye a Ecuador, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Uruguay. En el panel B, ALC comprende 23 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados.
Fuente: OCDE, emisiones de gases de efecto invernadero (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG (panel A) e Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE: Productividad medioambiental y de los recursos (base de datos), https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=77867 (panel B).

StatLink https://stat.link/l16j0d

Recursos de agua dulce: Estrés hídrico

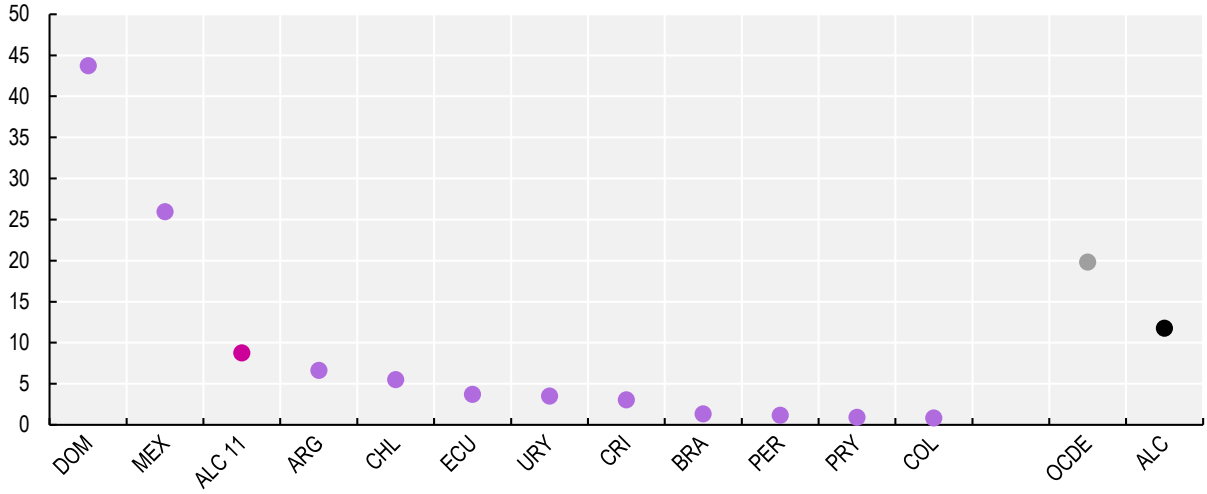
El agua es fundamental no solo para la salud, sino también para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la paz y los derechos humanos, los ecosistemas y la educación, como se reconoce internacionalmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: “Agua limpia y saneamiento: Garantizar la

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos" (Naciones Unidas, 2020[7]). El estrés hídrico —que se produce cuando la relación entre el agua dulce retirada y el conjunto de los recursos de agua dulce renovables supera el umbral del 25%— puede tener consecuencias devastadoras para el medioambiente, así como limitar o revertir el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2020[7]). El promedio mundial de estrés hídrico se sitúa en el 17%, un nivel considerado "seguro" en el informe de los ODS de 2020. En la región de América Latina, el agua abunda en cantidades importantes, pero su distribución es desigual entre los países y dentro de ellos. En los países analizados, el promedio de estrés hídrico es de solo el 9%, nivel inferior al promedio de la OCDE, que es del 20% (Gráfico 4.5). De todos modos, el coeficiente regional medio oculta los elevados niveles de estrés hídrico de México y la República Dominicana (26% y 44%, respectivamente), que pueden provocar escasez de agua. Además, los recursos hídricos corren peligro de contaminación patógena grave, sobre todo por las aguas residuales domésticas, y de contaminación salina o por nutrientes relacionada con prácticas agrícolas inapropiadas. En la región andina, los glaciares están perdiendo superficie, y algunos de ellos ya han desaparecido, lo cual afecta importantes zonas urbanas y rurales. El cambio climático y la mala gestión climática están provocando la pérdida de reservas de agua dulce estratégicas (CEPAL, 2021[16]).

En cuanto a los recursos hídricos, el acceso a agua potable es el principal reto que enfrenta ALC; en la región, solo el 71% de la población tiene acceso a agua potable salubre, un porcentaje muy inferior al 95% registrado por los países de la OCDE (Capítulo 2). Dentro de la región, se observan amplias diferencias: México es el país con menor acceso a agua potable salubre, con una cobertura de tan solo el 43% de la población, mientras que en Chile casi todo el mundo tiene acceso a ella. Según las Naciones Unidas, la implementación de una gestión integrada de los recursos hídricos (es decir, un marco global que abarque políticas, instituciones, instrumentos de gestión y financiamiento para la gestión integral y colaborativa de los recursos hídricos) es especialmente lenta (entre muy baja y media-baja) en un 90% de los países de América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2020[7]).

Gráfico 4.5. En los países analizados, el estrés hídrico es inferior al promedio de la OCDE, pero algunos países registran niveles muy superiores

Extracción de agua dulce en proporción de los recursos de agua dulce disponibles, porcentaje, 2015 o último año del que hay datos disponibles



Nota: Los datos se refieren a 2014, excepto en el caso de México (2015). ALC comprende 32 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (base de datos), https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWST.ZS.

StatLink https://stat.link/k8oz5e

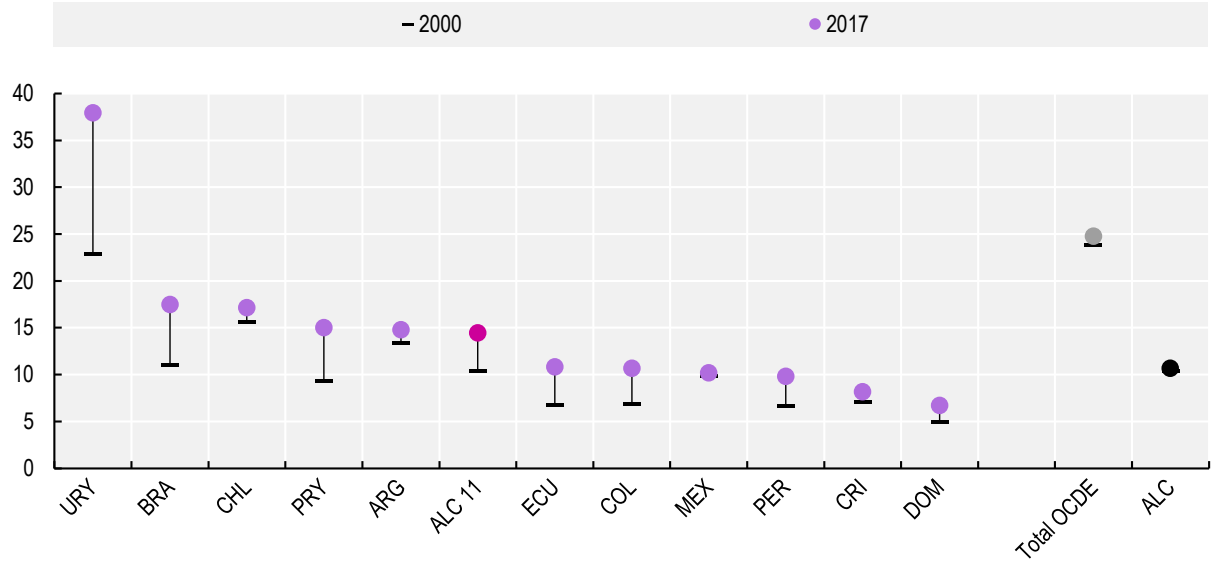
Huella material per cápita

La huella material se refiere a la asignación mundial de materias primas extraídas para satisfacer la demanda final de una economía, e incluye los materiales utilizados en la fabricación de productos importados. Estos datos corresponden a recursos materiales, es decir, materiales procedentes de los recursos naturales que constituyen la base material de la economía: metales (ferrosos y no ferrosos), minerales no metálicos (minerales para la construcción, minerales industriales), biomasa (madera, alimentos) y vectores energéticos fósiles. En términos per cápita, la huella material de los países analizados es más o menos la mitad de la que registran los países de la OCDE (14,4 y 24,8 toneladas, respectivamente) (Gráfico 4.6). Sin embargo, en todos los países analizados, la huella material aumentó entre 2000 y 2018. Los incrementos más importantes (superiores a 15 toneladas) se registraron en Uruguay (el país con la huella material per cápita más elevada del grupo analizado), Brasil y Paraguay. En cambio, el menor incremento (0,3 toneladas) se registró en México.

El uso de materiales en procesos de producción y consumo acarrea un gran número de consecuencias económicas, sociales y ambientales (p. ej., contaminación, desechos, perturbaciones de los hábitats, pérdida de biodiversidad). Las consecuencias son distintas según los materiales y el punto del ciclo de vida de los recursos (extracción, procesamiento, uso, transporte, gestión al final de la vida útil) y suelen sobrepasar las fronteras de países y regiones, en especial cuando esos materiales son objeto de comercio internacional.

Gráfico 4.6. Entre 2000 y 2017, la huella material per cápita ha aumentado en casi dos tercios de los países analizados

Huella material per cápita, toneladas



Nota: Total OCDE incluye a Costa Rica.
Fuente: OCDE, recursos materiales (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MATERIAL_RESOURCES.

StatLink https://stat.link/j5twvp

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el capital natural

Las medidas de prevención y contención de la pandemia, y en especial el confinamiento y el distanciamiento social, han cambiado radicalmente el comportamiento de la población mundial, sobre todo en las ciudades. Como más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas, las variaciones en la actividad económica y social de las ciudades han tenido importantes repercusiones sobre el uso del transporte público y privado, la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones a masas de agua, el consumo energético y la generación de residuos.

El cese de las actividades cotidianas ha limitado el consumo de energía. Durante el primer trimestre de 2020, la demanda mundial de energía se redujo en un 3,8% (150 millones de toneladas equivalentes de petróleo (eMtp)) con respecto al primer trimestre de 2019, revirtiendo el crecimiento de la demanda de energía de 2019 (IEA, 2020[17]). Pese a que el consumo de energía por actividades domésticas se ha incrementado, esto se ha visto compensado con creces por el descenso del consumo energético en otros sectores, como el transporte y la industria. Durante la pandemia, dos de los principales mercados de biocombustible, Argentina y Brasil, han enfrentado una caída de la demanda y los precios en sus mercados nacionales y externos, lo cual ha afectado a un sector cuya tecnología es relativamente costosa. Al mismo tiempo, se ha producido un descenso de los precios de los combustibles fósiles, mermando la competitividad de los biocombustibles y cuestionando el modelo de matriz energética limpia de la región (PNUD América Latina y el Caribe, 2020[18]).

La brusca caída del transporte y la actividad industrial ha provocado que las emisiones a masas de agua y la atmósfera, sobre todo en las ciudades, se hayan reducido significativamente en un breve período de tiempo. Las emisiones de CO_2 mundiales disminuyeron en más del 5% en el primer trimestre de 2020 con respecto al mismo período en 2019. La razón principal de esta reducción ha sido el descenso del 8% de las emisiones procedentes del carbón, del 4,5% de las de petróleo, y del 2,3% de las de gas natural. La bajada de las emisiones de CO_2 fue superior a la de la demanda de energía, y los combustibles con alto contenido de carbono fueron los que registraron una mayor caída de la demanda durante el primer trimestre de 2020 (IEA, 2020[17]). Las proyecciones de emisiones de GEI para todo el año 2020 apuntan a una disminución del orden del 7% a nivel mundial (Friedlingstein et al., 2020[19]) y, según la CEPAL, todavía superior en la región de América Latina, debido al fuerte descenso de su producto en comparación con el resto del mundo (CEPAL, 2021[16]).

A la vez, las políticas de aislamiento preventivo y distanciamiento social aplicadas en la región no han detenido la deforestación en América Latina (PNUD América Latina y el Caribe, 2020[18]). En el último decenio, han aumentado considerablemente las amenazas externas para los bosques de la región causadas por las empresas mineras, petrolíferas, agrícolas y madereras, los ganaderos, los agricultores, los grupos ilegales y los especuladores de tierras (Walker et al., 2020[20]; Ellis et al., 2017[21]). Mientras tanto, los esfuerzos de los gobiernos por controlar las incursiones ilegales en territorios indígenas han disminuido en varios países. Esta situación ha empeorado todavía más con la pandemia, ya que los gobiernos se vieron obligados a reducir sus esfuerzos de vigilancia por motivos tanto de salud como presupuestarios, lo que agravó la vulnerabilidad de los bosques, el agua y otros recursos naturales en territorios indígenas (CEPAL, 2020[22]). Un análisis llevado a cabo por Open Democracy (2020) señala que los incendios forestales han crecido más de un 200% en 2020 en Colombia respecto del mismo período en 2019, debido a que las mafias de tráfico ilícito y los *garimpeiros* (mineros ilegales) han aprovechado la emergencia sanitaria para quemar la selva sin impedimentos ni restricciones; este aumento de los incendios forestales se produce después de que en 2018 y 2019 se registrara un significativo descenso de la deforestación (López-Feldman et al., 2020[23]). Asimismo, basándose en los datos del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), Open Democracy indica que la deforestación de la selva amazónica de Brasil aumentó un 64% en abril de 2020, coincidiendo con la estación de las lluvias, durante la cual la crecida del río dificulta la expansión de los incendios y la intervención humana (Open Democracy, 2020[24]). La deforestación de la selva amazónica de Brasil también se mantuvo en los meses siguientes

(Escobar, 2020[25]). Según Rajão et al. (Rajão et al., 2020[26]), el 2% de las haciendas agrícolas de El Cerrado y Amazonía son responsables del 62% de la deforestación ilegal.

Entre 2019 y 2021, no se han registrado cambios sustanciales en la proporción de áreas terrestres y marinas protegidas, ni en América Latina, ni en la OCDE.

Pese a los enormes esfuerzos por alcanzar el componente de cobertura de la Meta 11 de Aichi para la Biodiversidad[11] del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de áreas específicas no es representativa desde el punto de vista ecológico.[12] Solo la mitad de los biomas (grandes comunidades de flora y fauna presentes de forma natural que ocupan un hábitat amplio) que existen en América Latina y el Caribe cumplen o rebasan la protección del 17% (Meta de Aichi 11 para la Biodiversidad). Algunos biomas, como el bosque y matorral mediterráneo, o los pastizales y sabanas templadas, están particularmente subrepresentados en la región. Evaluar la representatividad de las regiones protegidas —en términos de estatus de protección de las especies regionales y endemismo— es esencial para preservar la biodiversidad. El Índice de la Lista Roja, una medida amplia de la pérdida de biodiversidad, se mantuvo en general estable en los países de América Latina y la OCDE, si bien registró un descenso del 1% en Ecuador, México y Chile. En lo relacionado con la conectividad, la gran mayoría de los países de América Latina todavía están trabajando en el cumplimiento de los criterios de conectividad de la Meta de Aichi 11 para la Diversidad Biológica. De los 51 países y territorios de la región, solo nueve tienen más del 17% de su superficie terrestre protegida y conectada (Meta de Aichi 11 para la Diversidad Biológica). En promedio, el 33% de la extensión de estas áreas protegidas no está bien conectado (es decir, un tercio de las áreas protegidas de América Latina y el Caribe) (RedParques et al., 2021[27]).

La pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados incrementa enormemente el peligro de que varios organismos transporten patógenos infecciosos que terminen afectando a las personas, como ha ocurrido con el COVID-19 (Naciones Unidas, 2020[7]; Gottdenker et al., 2014[28]). El cambio de uso de la tierra y la explotación de la flora y fauna silvestres aumentan el riesgo de enfermedad infecciosa, al poner en contacto directo a las personas y los animales domésticos con fauna silvestre portadora de agentes patógenos, y perturbar los procesos ecológicos que mantienen a raya las enfermedades (OCDE, 2020[29]). Un nivel de diversidad de especies elevado, característica de los ecosistemas sanos, permite regular la población de aquellas especies que actúan como reservorio primario de virus, conteniendo así la transmisión de patógenos. Datos contrastados (IPBES, 2020[30]; OCDE, 2020[29]) indican que la conservación de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos es necesaria para proteger la salud de las personas, tanto directa como indirectamente (CEPAL, 2020[22]), y evitar una nueva pandemia (cerca de tres cuartas partes de las nuevas enfermedades infecciosas en humanos provienen de otros animales) (OCDE, 2020[29]). Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 es un toque de atención para reconocer la importancia del capital natural y la necesidad de preservarlo. Las iniciativas para construir un futuro mejor son acordes con los objetivos relativos al cambio climático. En este sentido, los gobiernos de América Latina y el Caribe vienen reconociendo cada vez más la urgencia de la necesidad de integrar las medidas climáticas y la diversidad biológica en las actividades de recuperación tras la pandemia.[13]

Aspectos para el desarrollo estadístico

Los indicadores presentados en esta sección han sido seleccionados porque cumplen una serie de requisitos mínimos en cuanto a cobertura de países, longitud de las series temporales y oportunidad (véase el capítulo 1). Sin embargo, en todos estos ámbitos podrían lograrse progresos. Algunos indicadores claves no se han incluido porque no cumplen los requisitos mínimos (p. ej., recursos del suelo) o por falta de datos disponibles (p. ej., tasas municipales de recuperación de desechos). El conjunto de indicadores puede terminar de pulirse o complementarse con datos sobre la calidad de los recursos naturales (p. ej., suelo, agua), en términos de contaminación (p. ej., uso de fertilizantes total, contaminación de lagos y ríos, acidificación de los océanos) y gestión sostenible (p. ej., reservas

pesqueras, reciclaje y compostaje total), diversidad de especies, gestión y ejecución efectiva de las áreas protegidas, y los beneficios que los servicios ecosistémicos tienen para el bienestar de las personas. Debido a la gran variabilidad de los patrones de estrés hídrico a nivel subnacional, sería útil elaborar un indicador adicional de la proporción de la población expuesta a escasez de agua, como complemento de las tasas medias nacionales. Lo ideal sería mostrar el desglose de los distintos gases de efecto invernadero (GEI), en vez de sumarlos todos en carbono equivalente ponderado, ya que cada gas tiene sus propios efectos sobre la atmósfera. Asimismo, deberían elaborarse datos de mejor calidad sobre los desastres naturales.

Capital económico

El capital económico —saldo de activos económicos y financieros producidos de un país— es un factor esencial de apoyo al bienestar material (p. ej., vivienda, empleo, salud e ingresos) y a la producción de bienes y servicios para el consumo privado. Además, el capital económico actúa como reserva de valor y ofrece un colchón para cuando se producen *shocks* inesperados del ingreso, lo cual permite a hogares, empresas y gobiernos planificar su futuro, así como garantizar el mantenimiento en el tiempo de las condiciones de vida material (OCDE, 2015[3]).

El capital producido abarca los activos antropogénicos tangibles como las carreteras, el ferrocarril, los edificios y la maquinaria; los activos de propiedad intelectual obtenidos a partir del gasto en la investigación y el desarrollo (I+D), la inversión en *software* y las obras de arte, y las existencias de bienes finales e intermedios. El capital financiero engloba los activos financieros como dinero legal y depósitos, acciones y participaciones de capital, títulos y derivados, tras descontar los pasivos en forma de préstamos y títulos de deuda (OCDE, 2020[1]). La posición crediticia exterior neta de un país, según se deriva de la acumulación de superávits o déficits en cuenta corriente, puede provocar presiones sobre el tipo de cambio si se produce una reversión repentina de los flujos financieros, algo que con frecuencia ha tenido un papel importante en la región de América Latina.

La información sobre saldos (de activos fijos producidos, incluidos los activos de propiedad intelectual), flujos (inversiones en la formación bruta de capital fijo, infraestructura del transporte e I+D) y los factores de riesgo específicos de determinados sectores de la economía (como la deuda pública y privada, o la suficiencia de capital en el sector bancario) repercute en la sostenibilidad del conjunto del sistema económico. En comparación con los países de la OCDE, la disponibilidad general de indicadores comparables y detallados sobre saldos, flujos y riesgos para el capital económico en América Latina es menor. En particular, los indicadores de la distribución de activos entre sectores institucionales y en el seno de estos (hogares, gobiernos, sociedades no financieras y financieras), relevantes para la sostenibilidad del bienestar (CEPE, 2013[31]), no suelen estar disponibles en relación con ALC.

El panorama general del capital económico en América Latina no es uniforme. Después del notable progreso experimentado a principios del siglo XXI, el crecimiento económico disminuyó a partir de 2011 (OCDE et al., 2019[32]). Desde 2014, la región viene experimentando el período de mayor debilidad del crecimiento desde 1950, situándose incluso por debajo del promedio de la OCDE, prácticamente sin expansión económica en 2019 (OCDE et al., 2020[33]). El ya de por sí reducido crecimiento potencial ha venido impulsado principalmente por el aumento del empleo, mientras que la contribución de la productividad ha sido escasa.[14] La competitividad de la mayoría de los países de la región es reflejo de la abundancia de recursos naturales y la baja cualificación de la mano de obra. Este es el origen de la "trampa de la productividad", una estructura productiva mal diversificada, con poco valor agregado y exportaciones especializadas en bienes de baja tecnología (OCDE et al., 2019[32]). Si bien el valor total de los activos fijos producidos en el grupo analizado ha registrado un aumento, la brecha respecto del valor promedio de la OCDE viene ampliándose desde el año 2000. En la década de 2009-2019, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) se redujo a más de la mitad con respecto al período 2000-

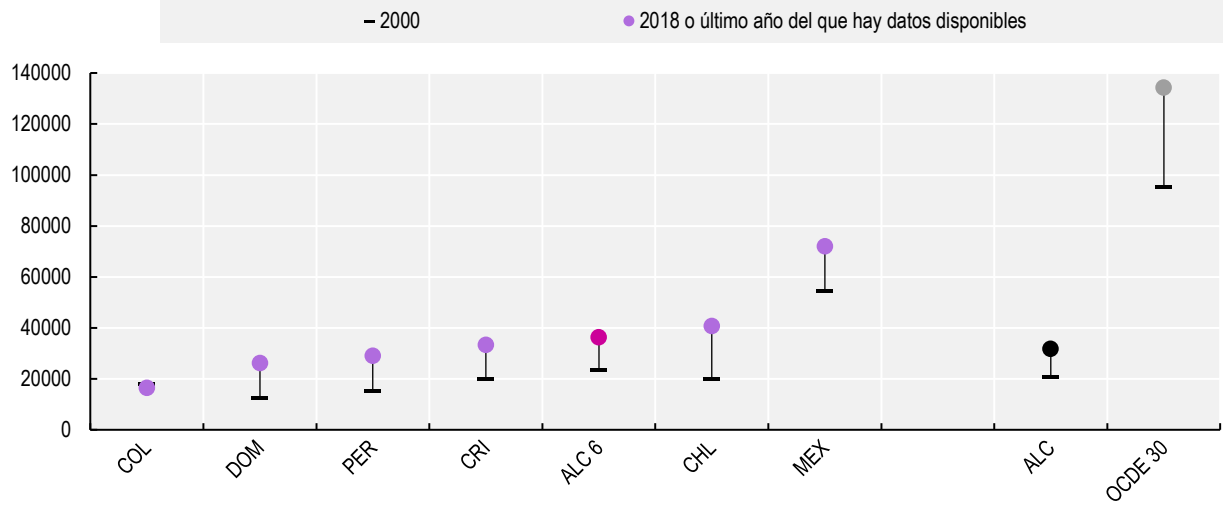
2008. Además, la inversión en tipos de capital económico que podrían contribuir al crecimiento de la productividad y la reducción de la dependencia de los recursos naturales y la mano de obra poco cualificada, anteriormente mencionada, como son la investigación y el desarrollo (I+D) y la infraestructura del transporte, sigue siendo baja. Por lo que se refiere a los activos financieros, no se dispone de información sobre el patrimonio financiero neto del gobierno, o el valor de la riqueza total o la deuda total a nivel de los hogares. Aun así, los indicadores disponibles muestran que, pese a que la relación servicio de la deuda pública/PIB se ha reducido considerablemente desde 2000, los ingresos tributarios de los gobiernos siguen siendo bajos si se comparan con los de los países de la OCDE, poniendo de manifiesto las limitaciones de los gobiernos de la región a la hora de movilizar recursos financieros.

Activos fijos producidos

Los activos fijos producidos —como edificios, maquinaria, infraestructura y activos de propiedad intelectual— conforman la capacidad de producción de bienes y servicios de un país. El valor medio del saldo de activos fijos producidos en los países analizados sobre los cuales hay información disponible fue de 36.350 USD per cápita en 2018 (Gráfico 4.7), valor que representa aproximadamente un tercio del nivel medio de la OCDE (unos 134.200 USD); esta brecha es en general acorde con la del INB per cápita (véase el Capítulo 2). El saldo de activos fijos producidos per cápita oscila entre los menos de 20.000 USD de Colombia y los más de 70.000 USD de México. Desde el año 2000, este saldo se ha incrementado en un 55% de media, siendo la República Dominicana y Chile los países donde el crecimiento ha sido mayor (se ha doblado con creces), mientras que Colombia ha registrado una caída (del 8%). Si bien entre 2000 y 2011 el crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe se debió principalmente a la inversión, a partir de 2012 es el consumo quien tira de él (privado y público en 2012-2013, público en 2014-2016, y privado entre 2017 y 2019) (Banco Mundial, 2020[34]; Banco Mundial, 2018[35]; Banco Mundial, 2015[36]).

Gráfico 4.7. Se observan amplias diferencias en cuanto al valor de los activos fijos producidos per cápita en los países de América Latina, aunque con el paso del tiempo van disminuyendo

USD per cápita en PPA de 2015



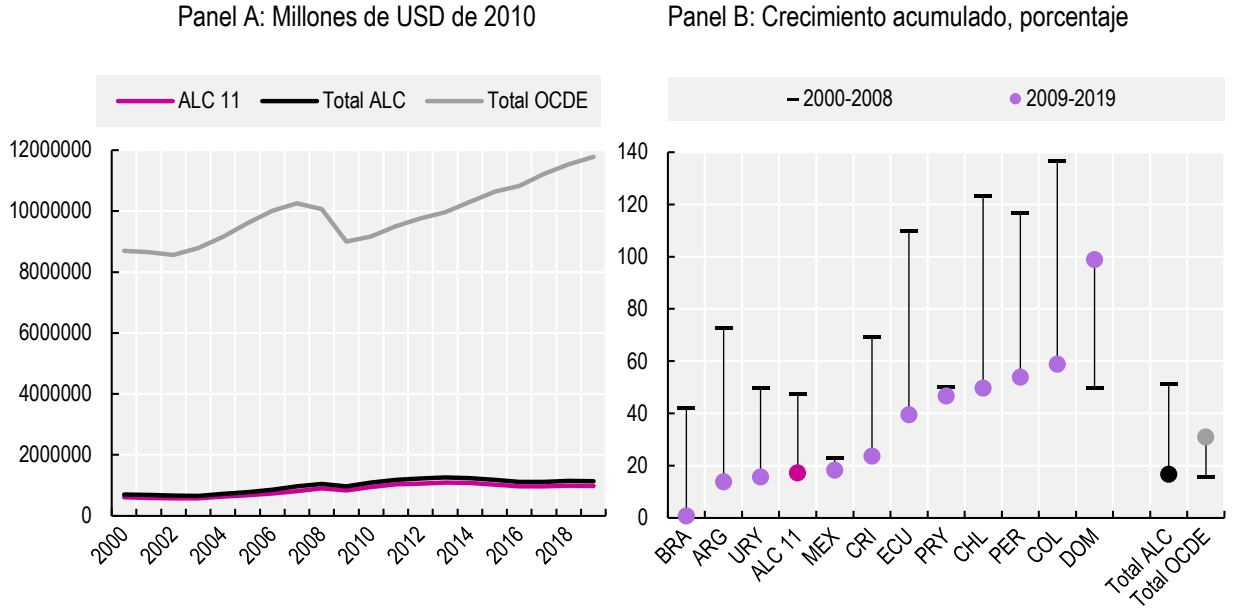
Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile, Colombia y Perú, y 2016 en el de Costa Rica y la República Dominicana. ALC 6 excluye a Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El promedio regional de ALC comprende 8 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 6 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. OCDE 30 excluye a Colombia, Islandia, Israel, México, Nueva Zelanda; Suiza y Turquía, por falta de datos.
Fuente: LAKLEMS, Crecimiento Económico y Productividad en América Latina 2019 (base de datos), http://www.laklems.net/stats/result.

StatLink https://stat.link/6souix

Formación bruta de capital fijo

La formación bruta de capital fijo se refiere a la inversión tanto en activos tangibles (como vivienda, edificios y otras estructuras, equipo de transporte, maquinaria y bienes de equipo, activos biológicos cultivados , incluidos los animales de reproducción, de producción de leche, de tiro, etc., y viñedos, huertos y otras plantaciones permanentes de árboles cuyo crecimiento natural y/o regeneración están bajo control, responsabilidad y gestión directa de unidades institucionales (UNECE et al., 2005[37]) como en activos intangibles (como la propiedad intelectual, el *software* y las obras de arte) dentro de un país (OCDE, 2020[1]). En 2019, la formación bruta de capital fijo (FBCF) se situó en torno a los 1.100 millones de USD (en precios de 2010) en América Latina y el Caribe, un nivel diez veces inferior al de la OCDE (aproximadamente 11.000 millones de USD), pero de magnitud similar si se expresa en proporción del PIB (18% y 21%, respectivamente). Entre 2009 y 2019, la FBCF ha registrado un aumento del 17% en América Latina y el Caribe, por debajo del 31% observado en los países de la OCDE durante ese mismo período. Entre 2009 y 2019, el crecimiento de la inversión fue solo una tercera parte del crecimiento acumulado entre 2000 y 2008 (si bien este triplicó el de la OCDE en este mismo período, 2000-2008) (Gráfico 4.8). La FBCF más elevada se observa en Brasil y México (entre 200 y 400 millones de USD); la más reducida, en Costa Rica, Paraguay y Uruguay (inferior a 10 millones de USD). Pese a la desaceleración general del crecimiento de la inversión entre 2009 y 2019 respecto del período 2000-2008, la FBCF se ha doblado en la República Dominicana, donde en proporción del PIB siempre ha sido una de las más altas de los países analizados (aproximadamente del 27% en 2019). El crecimiento de la FBCF ha sido menor en los países que ya presentaban un nivel elevado (es decir, Brasil y México) en los dos períodos.

Gráfico 4.8. La formación bruta de capital fijo siguió creciendo en América Latina, aunque desde 2009 ha aminorado el ritmo



Nota: ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial. OCDE se refiere al promedio de la OCDE calculado por el Banco Mundial. Las regiones se consideran una sola entidad, a cuya suma contribuye cada país proporcionalmente.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.KD?locations=ZJ.

StatLink https://stat.link/1hf96g

Inversión en infraestructura del transporte

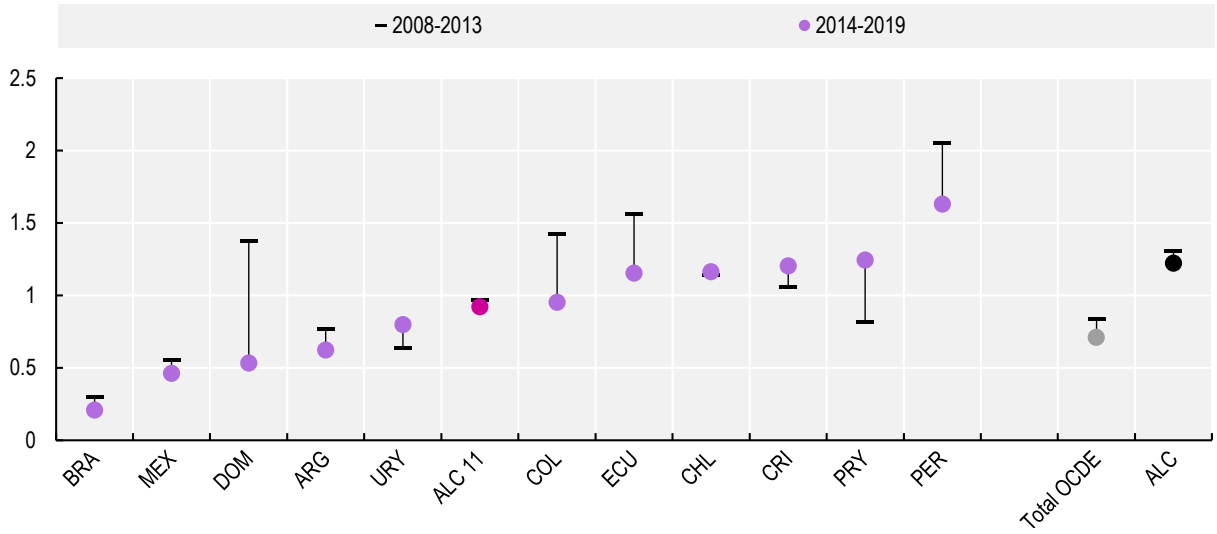
La infraestructura del transporte es un activo fijo producido que permite la movilidad de las personas y resulta esencial para la producción y distribución de bienes. Aunque no existe una definición consensuada a nivel internacional, la Comisión Europea ha adoptado medidas para definir la infraestructura del transporte como la totalidad de las vías e instalaciones fijas del transporte por ferrocarril, carretera y vías navegables en la medida en que sean necesarias para garantizar la circulación de los vehículos y la seguridad de dicha circulación (Reglamento CE n.° 851/2006). A nivel internacional no existen reglamentos o definiciones de alcance similares para la infraestructura de puertos y aeropuertos (ITF, 2013[38]). Habitualmente, los datos sobre el saldo de infraestructura del transporte, así como sobre la calidad de esta, no se encuentran disponibles en relación con los países de la región, pero existe consenso en cuanto a que la infraestructura del transporte está relativamente subdesarrollada en América Latina, si se compara con la de otras regiones del mundo (Fay et al., 2017[39]; Foro Económico Mundial, 2020[40]). Por ejemplo, el índice de competitividad del transporte y el turismo elaborado por el Foro Económico Mundial muestra que el desempeño de la región es un 9% inferior a la media mundial en el subíndice de infraestructura (Foro Económico Mundial, 2020[40]). Más importante todavía, la capacidad de infraestructura del transporte de la región se considera que está muy por debajo de sus necesidades, teniendo en cuenta la importancia del turismo para muchas de las economías de la región y la necesidad de aumentar la movilidad de productos y personas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, así como para satisfacer las aspiraciones de la creciente clase media (Fay et al., 2017[39]; Foro Económico Mundial, 2020[40]). Se estima que la región enfrenta una brecha de inversión en infraestructura del transporte superior a los 2,0 trillones de USD para los próximos 20 años.[15]

El desarrollo de la infraestructura del transporte no es tarea sencilla en América Latina, puesto que la población se encuentra relativamente dispersa y existen vastas zonas de terreno difícil de transitar (como cordilleras y bosques tropicales). Además, la región registra niveles reducidos de inversión en infraestructura comparado con la mayoría de las demás regiones en desarrollo. Si se tienen en cuenta todos los tipos de infraestructura (incluidos agua, servicios y transporte) y la inversión tanto pública como privada, se calcula que América Latina invierte en ella en torno al 3% del PIB en promedio, un nivel bastante inferior a los registrados en los países en desarrollo (que oscilan entre el 4% y el 8%), a excepción únicamente de África subsahariana.[16] El aumento de la inversión no es de por sí suficiente; igual de importante es que el gasto (en particular de los recursos públicos escasos) esté bien focalizado a las necesidades del país, y que sea eficiente (Foro Económico Mundial, 2020[40]).

A falta de medidas de los saldos de infraestructura del transporte en la región, los datos sobre niveles de inversión pueden dar una idea de la prioridad relativa asignada a la cuestión en cada país. La inversión en infraestructura del transporte comprende los gastos de capital en infraestructura nueva y en ampliación de la existente, lo cual incluye la reconstrucción, la renovación (importantes trabajos de sustitución de la infraestructura existente, sin modificar su desempeño general) y las mejoras (importantes trabajos de modificación para mejorar el desempeño original o la capacidad de la infraestructura). En los países analizados, la inversión en infraestructura del transporte, expresada como porcentaje del PIB, se redujo hasta el 0,92%, en promedio, durante el período 2014-2019, registrando un nivel superior al promedio de la OCDE (0,71%), pero inferior al promedio del 0,97% correspondiente al período 2008-2013 (Gráfico 4.9). Perú, Paraguay y Costa Rica son los países de ALC que más invirtieron en infraestructura del transporte (más del 1,2% del PIB), doblando los montos invertidos por Brasil (menos del 0,2%) y México (0,46%). En comparación con el período 2008-2013, la inversión se ha reducido a más de la mitad en la República Dominicana, y ha disminuido en una tercera parte en Brasil y Colombia. En cambio, la inversión aumentó en un 50% en Paraguay, y en un 25% en Uruguay, con respecto al período 2008-2013.

Gráfico 4.9. La inversión en infraestructura del transporte como proporción del PIB es mayor en América Latina que en los países de la OCDE, pese a que la infraestructura del transporte sigue estando subdesarrollada

Porcentaje



Nota: El promedio regional de ALC comprende 20 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. Total OCDE excluye a Chile, Colombia, Corea, Irlanda, Israel, los Países Bajos y Portugal, puesto que no hay datos disponibles. La inversión pública (a nivel nacional, regional o de gobiernos locales, incluida la de empresas estatales) en infraestructura del transporte tiene en cuenta los gastos de capital (en particular, los gastos en formación bruta de capital fijo), medido según el principio de devengo siempre que es posible, en la mejora, la ampliación y el reabastecimiento, así como los proyectos nuevos, incluidos los gastos de preinversión (como los estudios de viabilidad previa y viabilidad). Los datos de la OCDE corresponden a la inversión total en infraestructura continental (es decir, gastos por inversión en ferrocarril, vías terrestres y vías de navegación interior). Los datos de los países de América Latina incorporan también información sobre inversión en transporte aéreo y material rodante para el transporte ferroviario.
Fuente: Base de datos INFRALATAM, http://infralatam.info/en/home/ e indicadores sobre desempeño de la infraestructura del transporte (ITF) (base de datos) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INDICATORS.

StatLink https://stat.link/pvzajf

Activos de propiedad intelectual: Software y bases de datos

Los activos de propiedad intelectual (el capital de conocimientos de un país) pueden mejorar el futuro nivel de vida material a través, por ejemplo, de un uso más eficaz de los recursos (aumento de la productividad) o al permitir que un país participe en actividades de mayor valor agregado. En el conjunto de los países analizados, los únicos datos comparables sobre el saldo de activos de propiedad intelectual se refieren a gasto acumulado en *software* y bases de datos (lo cual excluye, pues, la investigación y el desarrollo, la exploración minera, el ocio, los originales literarios y artísticos, y otros activos de propiedad intelectual no especificados en otra categoría). En 2018, el valor per cápita de estos activos ascendía a 170 USD (Gráfico 4.10, panel A), lo cual representa solo el 9% del nivel medio de la OCDE (casi 1.900 USD). El país con un mayor gasto en este tipo de activos fue Chile (más de 600 USD), mientras que la República Dominicana, Perú, Colombia y México registraron un gasto mucho menor (inferior a 50 USD). Entre 2000 y 2018, el saldo medio de activos de *software* y bases de datos per cápita prácticamente se triplicó en los países analizados, y se cuadruplicó con creces en Chile, mientras que en Colombia se redujo en una tercera parte, y en la República Dominicana lo hizo en una décima parte.

En relación únicamente con Costa Rica y Perú, existe un panorama más completo de los activos de propiedad intelectual, que incluye el valor de I+D y otros activos de propiedad intelectual más allá del

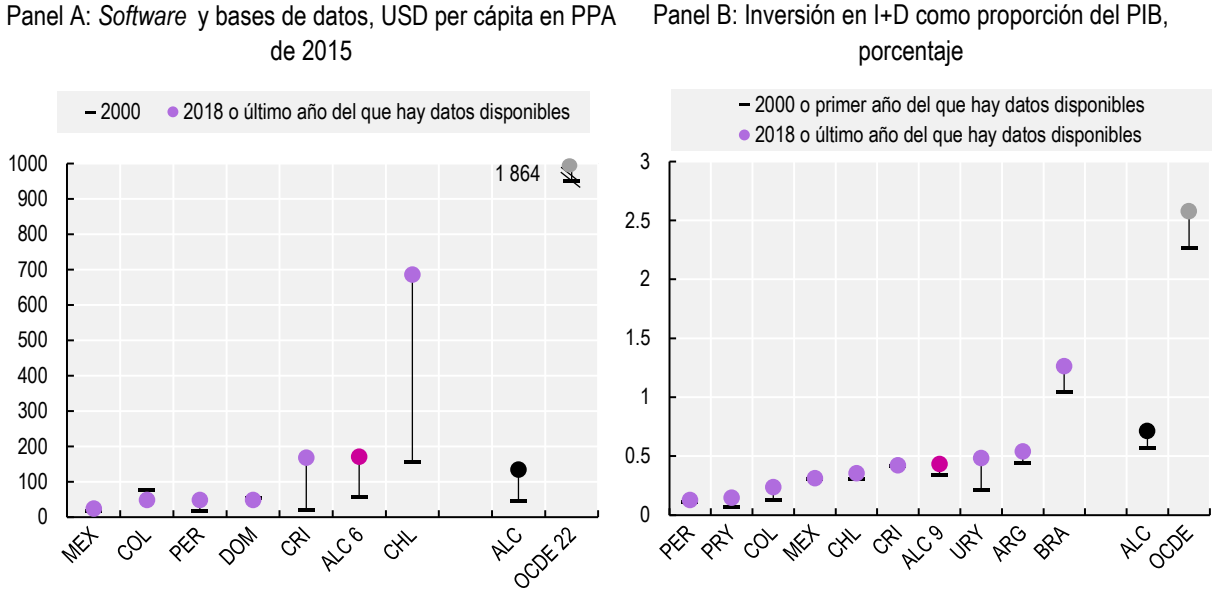
software y las bases de datos, así como el gasto en exploración minera, ocio y originales literarios y artísticos. Tras incorporar estos componentes adicionales, el saldo per cápita de activos de propiedad intelectual de Costa Rica y Perú asciende a 388 USD y 456 USD, respectivamente, un nivel dos y nueve veces superior al obtenido al tener en cuenta únicamente el *software* y las bases de datos.

Inversión en activos de propiedad intelectual: Inversión en I+D

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es motor de cambios en el saldo de activos de propiedad intelectual.[17] En los países analizados, la inversión media en I+D fue del 0,43% del PIB en 2018, tan solo una sexta parte del nivel medio de la OCDE (2,56%). El crecimiento de la proporción de I+D a partir del año 2000 ha sido mínimo en estos países (0,1 puntos porcentuales, Gráfico 4.10, panel B), y muy inferior a la subida registrada en el promedio de la OCDE (0,3 puntos porcentuales). Excepto en Brasil, donde el crecimiento de la inversión en I+D alcanzó el 1% en 2019, en los demás países analizados las inversiones anuales oscilaron entre el 0,1% y el 0,6%.[18] Entre 2000 y 2018, el principal aumento de la proporción de inversión en I+D en el PIB se observó en Uruguay (subida de 0,3 puntos, respecto del 0,2% de 2000), mientras que en Chile, Costa Rica, México y Perú el incremento fue imperceptible.

Al aplicar una medición por solicitudes de patente, en América Latina cada punto porcentual de PIB invertido en I+D genera, en promedio, seis nuevas solicitudes de patente a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un nivel muy inferior al promedio de la OCDE, que es de 43 solicitudes de patente por cada punto de PIB invertido en I+D (OCDE et al., 2019[32]).

Gráfico 4.10. El saldo per cápita de *software* y bases de datos de América Latina representa únicamente el 9% del promedio de la OCDE, mientras que la inversión en I+D anual sigue siendo limitada



Nota: En el panel A, ALC 6 excluye a Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, puesto que no hay datos disponibles. OCDE 22 excluye a Canadá, Chile, Colombia, Corea, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, Polonia, el Reino Unido, la República Eslovaca, Suiza y Turquía, puesto que los datos o bien no están disponibles, o bien son incompletos. El promedio regional de ALC comprende 8 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 6 analizados sobre los cuales hay datos disponibles. En el panel B, ALC 9 excluye a Ecuador y la República Dominicana, puesto que no hay datos disponibles. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial. Las diferencias en cuanto a gastos de "propensión a la capitalización" en *software* y bases de datos, así como las dificultades que plantea la medición de la inversión en I+D, pueden explicar las divergencias entre países en lo que se refiere a la inversión de estos en activos de propiedad intelectual. Véase el análisis incluido en (Ahmad, 2004[41]), (OCDE, 2010[42]) y (Eurostat/OCDE, 2020[43])
Fuente: LAKLEMS Crecimiento Económico y Productividad en América Latina 2019 (base de datos), http://www.laklems.net/stats/result (panel A) y base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (panel B).

StatLink https://stat.link/u2zb09

Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios

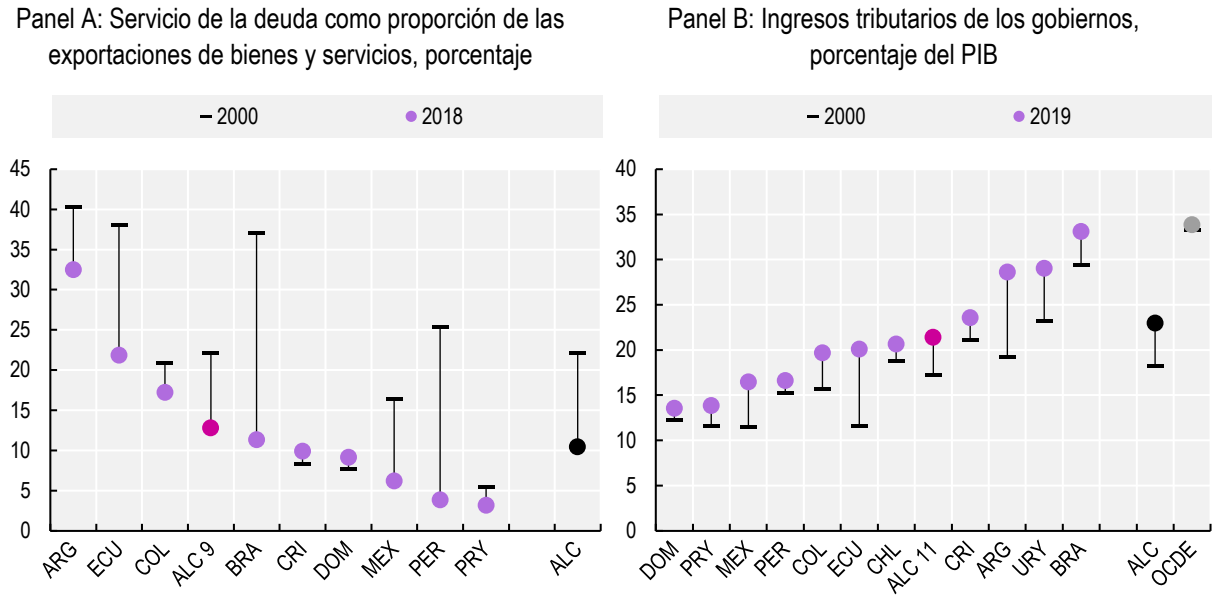
El servicio de la deuda (pagos del principal y los intereses de la deuda pública y con garantía pública), expresado como proporción de las exportaciones de bienes y servicios, constituye una buena medida de la sostenibilidad de la deuda pública, en particular en los países en desarrollo, como son los de América Latina.[19] El crecimiento en el tiempo de la relación deuda/exportaciones, respecto de una tasa de interés determinada, implica que el crecimiento de la deuda es más rápido que el de la fuente básica de ingresos externos de la economía, lo cual significa que el país podría tener dificultades para satisfacer sus obligaciones de servicio de la deuda en el futuro (FMI, 2003[44]). En 2018, el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios fue del 13%, en promedio, en los países analizados, y de aproximadamente el 11% en la región de América Latina (Gráfico 4.11, panel A). El país con mayor servicio de la deuda fue Argentina (33%); los países con menor servicio de la deuda fueron Paraguay y Perú (menos del 4%). Comparado con el año 2000, el servicio de la deuda sufrió un descenso de más de 9 puntos porcentuales en los países analizados, siendo Brasil y Perú los que registraron una caída más fuerte (superior a los 20 puntos); en cambio, en Costa Rica y la República Dominicana se observaron ligeros incrementos. En términos generales, el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios descendió entre 2000 y 2016, para repuntar después.

Ingresos tributarios de los gobiernos

Los ingresos tributarios de los gobiernos no constituyen de por sí “capital”, pero sí son una herramienta esencial que les permite prestar un amplio abanico de bienes y servicios públicos (algunos de los cuales contribuyen al capital humano y social). En los países analizados, los ingresos tributarios de los gobiernos expresados como porcentaje del PIB fueron del 21,4% en 2019, lo cual representa un incremento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al año 2000 (Gráfico 4.11, panel B), aunque sigue siendo solo un 60% del promedio de la OCDE (33,8%). Los ingresos tributarios como proporción del PIB oscilan entre el 13,5% de la República Dominicana y el 33% de Brasil, nivel muy similar al promedio de la OCDE. Desde el año 2000, los países que registran un incremento mayor son Argentina (9,4 puntos porcentuales), Ecuador (8,5 puntos) y Uruguay (5,8 puntos), mientras que los que registran un incremento menor son Perú y la República Dominicana (menos de 1,5 puntos). En los países analizados, la proporción del PIB es 1,6 puntos porcentuales inferior al promedio regional de América Latina y el Caribe, que incluye países con una proporción de ingresos tributarios del gobierno superior al 23% (Bolivia, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago) o incluso superior al 30% (Barbados, Belice) y el 40% (Cuba).

La estructura tributaria (composición del ingreso tributario según los distintos tipos de impuestos) también informa sobre las repercusiones económicas y sociales de los sistemas tributarios en la región de ALC. Los impuestos sobre bienes y servicios fueron los que más contribuyeron a los ingresos tributarios totales en la región de ALC en 2019, y representaron en promedio la mitad de los impuestos totales, mientras que esta proporción fue de aproximadamente un tercio en las economías de la OCDE. Por contra, la proporción combinada de impuestos sobre la renta y los beneficios, y las contribuciones a la seguridad social (cada vez más de origen privado) en la región de ALC fue muy inferior a la de la OCDE. La región de ALC presenta mayor dependencia de los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de sociedades que los países de la OCDE, y una dependencia significativamente menor del impuesto sobre la renta de las personas físicas (9,1% de los ingresos tributarios totales en la región de ALC, frente al promedio del 23,5% de la OCDE en 2018). Los ingresos tributarios relacionados con el medioambiente supusieron en promedio un 1,2% del PIB en 2019 en los 25 países de ALC sobre los cuales hay datos disponibles, porcentaje inferior al 2,1% de la OCDE (5,7% de los ingresos tributarios totales en la región de ALC, frente al 6,4% de la OCDE en 2019) (OCDE et al., 2021[45]).

Gráfico 4.11. Los gobiernos redujeron los pagos de la deuda pública en un 40% en comparación con el año 2000, mientras que los ingresos tributarios representan solo el 60% del promedio de la OCDE



Nota: En el panel A, ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas. En el panel B, ALC corresponde al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la OCDE que, además de los países analizados, incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.

Fuente: Base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 17.4.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (panel A) y Estadísticas Tributarias de la OCDE - América Latina y el Caribe: Cuadros comparativos (base de datos), https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=RSLACT (panel B).

StatLink https://stat.link/h8y962

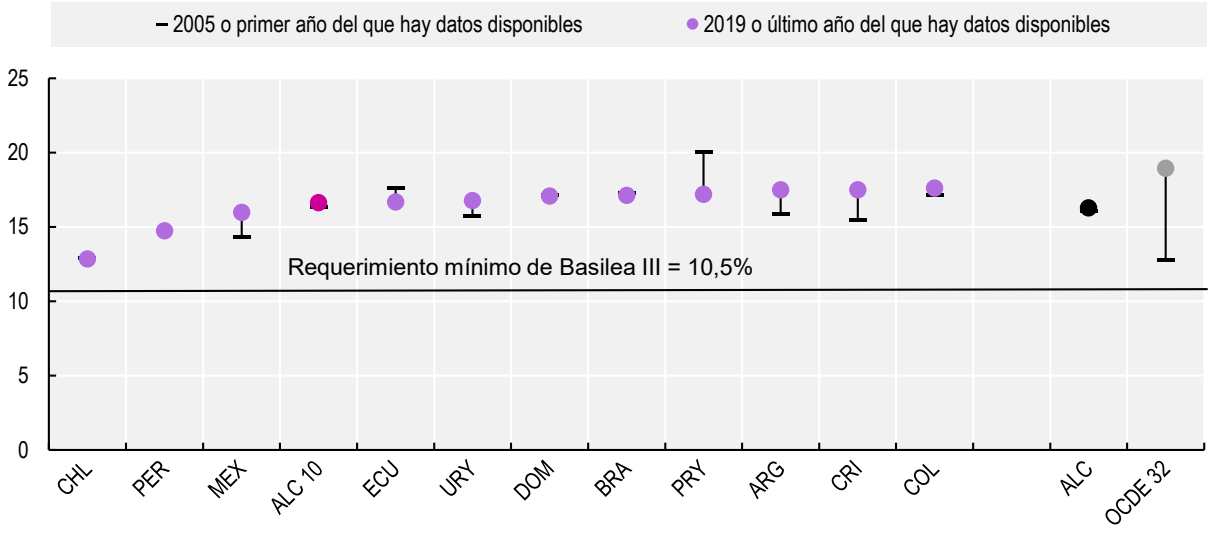
Coeficiente de suficiencia de capital del sector bancario

El coeficiente de suficiencia de capital ayuda a determinar si el sector bancario dispone de fondos propios suficientes para cubrir las posibles pérdidas y no volverse insolvente. La vigilancia de este coeficiente, así como el cumplimiento de los requerimientos regulatorios para evitar la insolvencia, son importantes para evitar los riesgos que el sector financiero podría generar para la sostenibilidad económica de un país (Fondo Monetario Internacional, 2020[46]). Tras la crisis financiera de 2008-2009, se adoptaron nuevas normas bancarias internacionales en el marco del Acuerdo de Basilea III, por el cual se estableció el requerimiento mínimo de una relación capital/activos ponderados por riesgo del 10,5%, unida a un requerimiento para el capital total del 8% y un colchón de conservación del capital del 2,5% (un nivel adicional de capital disponible para utilizarse cuando se incurre en pérdidas) (Bank for International Settlements, 2019[47]).

En los 10 países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, el coeficiente de suficiencia de capital se ha mantenido bastante estable desde mediados de los años 2000, en torno al 16,6%, un nivel muy por encima del requerimiento mínimo de Basilea III. Esta estabilidad contrasta con el incremento del 50% del promedio de la OCDE más o menos durante el mismo período (del 12,7% en 2008 al 19% en 2019, [Gráfico 4.12]). Los países con un coeficiente de suficiencia de capital más elevado son Colombia (17,6%), Argentina y Costa Rica (17,5%), todavía por debajo del promedio de la OCDE; el país con el coeficiente más bajo es Chile (12,8%). La estabilidad regional de este coeficiente desde 2005 oculta la divergencia

de patrones según el país analizado, con descensos en Paraguay (de casi 3 puntos porcentuales) e incrementos en Costa Rica (de 2 puntos).

Gráfico 4.12. En los países analizados, el coeficiente de suficiencia de capital del sector bancario supera el requerimiento mínimo de Basilea III, pero se sitúa por debajo del promedio de la OCDE



Nota: El primer año del que hay datos disponibles es 2008 en el caso de Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay. Los últimos datos disponibles para Perú y la República Dominicana son de 2018. El promedio regional de ALC comprende 13 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. El promedio de OCDE 32 excluye a Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Japón y Nueva Zelanda, puesto que los datos o bien no están disponibles, o bien son incompletos. El coeficiente de suficiencia de capital (o relación capital/activos ponderados por riesgo) constituye una medida del capital disponible de un banco expresada como porcentaje de las exposiciones crediticias ponderadas por riesgo de un banco. Con este indicador se miden dos tipos de capital: El capital de Nivel 1 puede absorber un monto de pérdidas considerable sin obligar al banco a detener su actividad, mientras que el capital de Nivel 2 permite afrontar la pérdida en caso de liquidación. Tras la crisis financiera de 2008-2009, las normas bancarias internacionales en el marco del Acuerdo de Basilea III acordaron el requerimiento mínimo de una relación capital/activos ponderados por riesgo del 10,5%, unida a un requerimiento para el capital total del 8% y un colchón de conservación del capital del 2,5% (un nivel adicional de capital disponible para utilizarse cuando se incurre en pérdidas).
Fuente: Indicadores de solidez financiera (ISF), https://data.imf.org/regular.aspx?key=61404590.

StatLink https://stat.link/l13g5z

Más allá de evitar la insolvencia bancaria, el acceso al crédito y a una mayor liquidez en los mercados financieros son fundamentales para que la región de ALC pueda escapar de la "trampa del ingreso medio" (es decir, la desaceleración prolongada del crecimiento de las economías que alcanzan niveles de ingreso medio). Es necesario que el desarrollo financiero de América Latina siga avanzando para incrementar la inversión en determinados sectores productivos (en particular, con uso más intensivo de conocimientos y tecnología), así como para promover el crecimiento inclusivo. Es crucial ampliar el acceso al sistema bancario de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los hogares, así como aumentar la eficiencia de la regulación de los mercados financieros, para promover el desarrollo inclusivo en la región (Arellano et al., 2018[48]).

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el capital económico

Cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a afectar a América Latina y el Caribe, se adoptaron políticas de mitigación estrictas y multidimensionales. Los principales elementos de los programas de estímulo fiscal han incluido pagos directos a las familias, desgravaciones y aplazamientos fiscales, programas de préstamos a empresas y gasto adicional en salud. Durante el primer semestre de 2020, los ingresos

tributarios registraron una caída drástica, si bien al final del año ya mostraban señales de recuperación (OCDE et al., 2021[45]). El aumento del gasto público se ha financiado mayoritariamente mediante deuda pública y préstamos oficiales. La respuesta de política monetaria también ha tenido varias facetas, entre las que se ha incluido el suministro de liquidez; el relajamiento temporal del coeficiente de encaje; las rebajas de la tasa de interés de política monetaria; la intervención en los mercados de divisas y, en el caso de Chile y Colombia, programas de expansión cuantitativa. A pesar de estas medidas, la pandemia provocó en 2020 una contracción del PIB del 6,9% en Argentina, Brasil y México, la más grave de las registradas en las seis regiones de economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) identificadas por el Banco Mundial[20] (Banco Mundial, 2021[49]). Los programas de estímulo fiscal necesarios para amortiguar el golpe que la pandemia ha supuesto para la economía casi han agotado el ya de por sí limitado espacio fiscal disponible en los países de la región. La deuda pública en la economía media de ALC pasó del 53% del PIB en 2019 al 69% en 2020 (Banco Mundial, 2021[49]), lo que convirtió a América Latina y el Caribe en la región en desarrollo más endeudada (CEPAL, 2021[50]). La gran incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento durante la pandemia han provocado demoras en el gasto en infraestructura y recortes en investigación y desarrollo, obstaculizando la productividad futura (Banco Mundial, 2021[49]). Para abordar las brechas de desarrollo de la región, será esencial aplicar políticas fiscales activas, que den impulso a la tributación progresiva, con arreglo a una secuencia de políticas bien definida, que pueda adaptarse a las distintas fases de recuperación, y con el respaldo de un marco de sostenibilidad fiscal para financiar el desarrollo sostenible (sobre todo en relación con la vulnerabilidad social y la estructura de producción) (OCDE et al., 2021[45]; Nieto-Parra, Orozco and Mora, 2021[51]).

La no aplicación de políticas que den impulso a la productividad, actualmente reducida, como son la inversión en nuevas tecnologías e infraestructura, podría mermar y prolongar la recuperación económica tras la pandemia (Beylis et al., 2020[52]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

La disponibilidad de los indicadores de capital económico de América Latina y el Caribe es limitada. Es habitual que falte información esencial, como el patrimonio financiero neto del conjunto de la economía o del gobierno general, o el nivel de deuda de los hogares, o que esta sea incompleta. Pese a que anteriormente se han presentado algunas medidas de saldos, flujos de inversión y factores de riesgo, la cobertura de países, las series temporales y la oportunidad son limitadas. Además, en su mayoría, estos indicadores solo proporcionan una perspectiva de alto nivel del estado del capital económico de un país. Normalmente, los datos sobre la posición financiera de los distintos sectores de la economía (hogares, gobierno general, sociedades financieras), así como la información sobre la distribución de activos en los distintos grupos, no están disponibles. Para poder elaborar un panorama más completo de la resiliencia económica y la estabilidad financiera de la región, sería necesario contar con un cuadro de indicadores más detallado (Consejo de Estabilidad Financiera; Fondo Monetario Internacional, 2019[53]).

Capital humano

El capital humano se refiere a la salud, las competencias (tanto educación formal como conocimiento tácito) y las habilidades de las personas (OCDE, 2015[3]). La salud, los conocimientos y las competencias tienen un valor intrínseco para el bienestar de las personas. Además de contribuir a la creación de otros resultados de bienestar en un momento dado (OCDE, 2020[1]), también forjan el bienestar futuro de las personas (Exton and Fleischer, a continuación[54]). Algunos de los indicadores de la salud y las competencias de la población se describen en el Capítulo 3, mientras que esta sección se centra en las competencias de los jóvenes y los factores de riesgo y resiliencia en materia de salud como determinantes del desarrollo futuro. Invertir en los niños y jóvenes de hoy es la forma más rápida de garantizar el

bienestar de las generaciones futuras. La proporción de población joven en América Latina y el Caribe (unos 160 millones) seguirá siendo muy significativa en las próximas décadas en la mayoría de los países, y estos jóvenes enfrentan retos específicos (CEPAL, 2020[55]).[21]

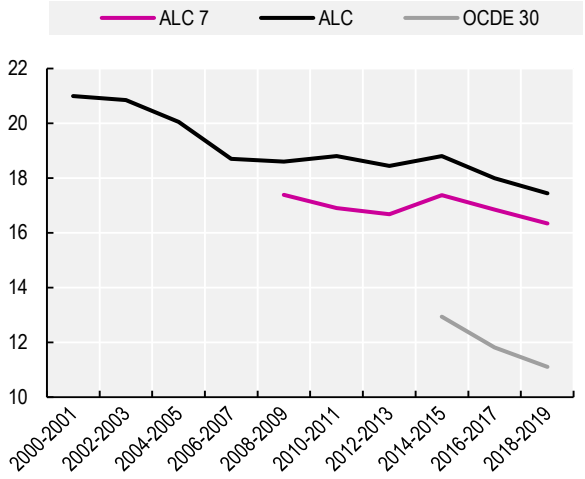
Conocimientos y competencias de los jóvenes

El seguimiento de la participación de los jóvenes en la educación o el empleo, y su transición de la escuela al trabajo, permite hacerse una idea de los conocimientos y competencias que estarán disponibles en el futuro. La población juvenil que ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación no está desarrollando las competencias y conocimientos necesarios para asegurar su participación activa en la sociedad futura, lo cual significa una pérdida de oportunidades y recursos para el bienestar futuro.

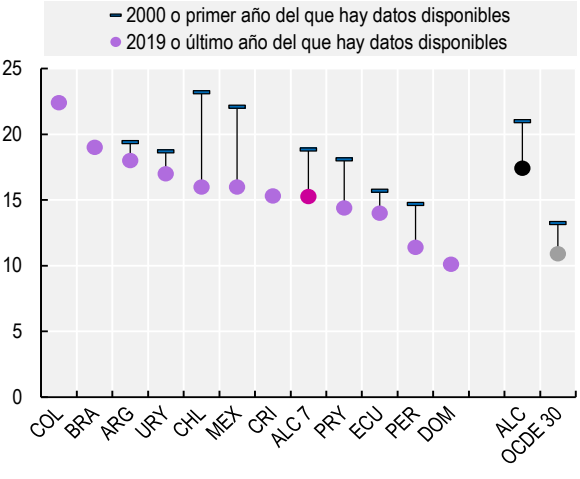
La proporción de jóvenes (personas de 15 a 24 años) que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) se ha reducido muy ligeramente en los países analizados (hasta el 16% en 2018-2019, respecto del 17% de 2008-2009) (Gráfico 4.13, panel A), situándose en un nivel 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. La disminución no ha sido uniforme en el tiempo. Un examen del promedio de América Latina revela que, tras la caída registrada en 2006-2007, que coincidió con un período de fuerte crecimiento del PIB, la proporción aumentó durante la crisis mundial de 2009 y, con mayor fuerza, en torno a 2014-2015, en paralelo a la caída de la productividad causada por el final del auge de los precios de las materias primas. La proporción de ninis varía enormemente dentro de los 11 países analizados, siendo superior al 20% en Colombia y situándose en el 10% en la República Dominicana (por debajo del promedio de la OCDE, que es del 11% (Gráfico 4.13, panel B)). Chile fue el país que registró la mayor caída de la tasa de ninis (unos 7 puntos porcentuales menos en 2019 comparado con 2000), seguido de México (6 puntos menos), mientras que la disminución fue apenas perceptible en Argentina, Ecuador y Uruguay (inferior a 2 puntos).

Gráfico 4.13. En los países de ALC, 1 de cada 6 jóvenes ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación

Panel A: Proporción de jóvenes de 15 a 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, porcentaje, evolución regional



Panel B: Proporción de jóvenes de 15 a 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, porcentaje



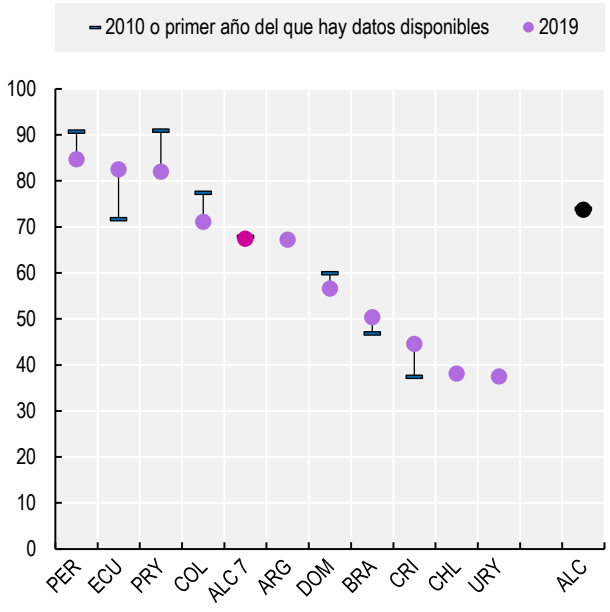
Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de México, y 2017 en el de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Ecuador; 2004 en el caso de Perú; 2005 en el de Paraguay; 2007 en el de Uruguay, y 2014 en el del promedio de la OCDE. Los datos de Argentina se refieren únicamente a zonas urbanas. El promedio de ALC 7 excluye a Brasil, Chile, Costa Rica y la República Dominicana. ALC es el promedio regional calculado por la CEPAL. El promedio de la OCDE excluye a Chile, Corea, Irlanda, Islandia, Japón, Luxemburgo y Suiza, debido a que sus series temporales están incompletas. Los datos sobre ninis se refieren al porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni se dedican a cuidados domésticos (o no se incluyen en la población en edad de trabajar). La CEPAL ha armonizado los datos, obtenidos mediante encuestas de hogares, a fin de garantizar la comparabilidad entre países, por lo que pueden no coincidir con las estimaciones nacionales. Para más información, consulte https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/SisGen_MuestraFicha_puntual.asp?id_aplicacion=1&id_estudio=1&indicador=3469&idioma=i.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3469&idioma=I y cálculos de la OCDE basados en Transición de la escuela al trabajo (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_TRANS.

StatLink https://stat.link/4m81ie

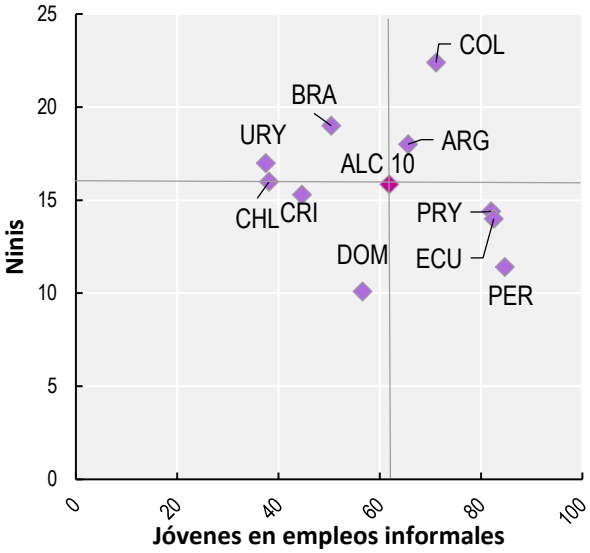
La transición de los jóvenes de la escuela a la vida laboral es una función de las oportunidades educativas y los contextos social y económico. Para entender mejor la situación de la población juvenil en el mercado de trabajo, es importante también tener en cuenta la proporción de jóvenes en empleos vulnerables e informales (OIT, 2015[56]; OCDE, 2014[57]; OCDE, 2019[58]). Como sucede con la tasa de ninis, la proporción de jóvenes en empleos informales se ha reducido, en promedio, en los países analizados (hasta el 67% en 2019, una reducción de 1 punto porcentual respecto de 2010). La proporción sigue siendo muy elevada en Perú, Ecuador y Paraguay, donde más del 80% de los jóvenes empleados tienen trabajos informales; este porcentaje no llega al 40% en el caso de Uruguay y Chile. La proporción de jóvenes en empleos informales ha aumentado sobre todo en Ecuador (casi 11 puntos porcentuales), mientras que los países que han registrado una reducción mayor han sido Paraguay (casi 9 puntos), Colombia y Perú (6 puntos, respectivamente) (Gráfico 4.14, panel A). No existe correlación entre la tasa de ninis y la proporción de jóvenes en empleos informales. Un nivel reducido de la tasa de ninis se asocia a una proporción de jóvenes en empleos informales relativamente elevada en Perú, Ecuador y Paraguay, lo cual indicaría que la informalidad puede ser percibida como un trampolín en la transición de la escuela al trabajo en algunos países. Por otro lado, en Chile y Uruguay, las tasas de ninis se sitúan en niveles cercanos al promedio regional y están vinculadas a una proporción relativamente baja de jóvenes en empleos informales (inferior al 40%). La proporción tanto de ninis como de jóvenes en empleos informales supera el promedio regional en Argentina y Colombia (Gráfico 4.14, panel B).

Gráfico 4.14. Pese a que el empleo informal entre los jóvenes ha ido disminuyendo, todavía incumbe a más del 50%

Panel A: Proporción de jóvenes empleados (de entre 15 y 24 años) en trabajos informales, porcentaje



Panel B: Relación entre la proporción de jóvenes (de entre 15 y 24 años) en empleos informales y la proporción de los que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), porcentajes



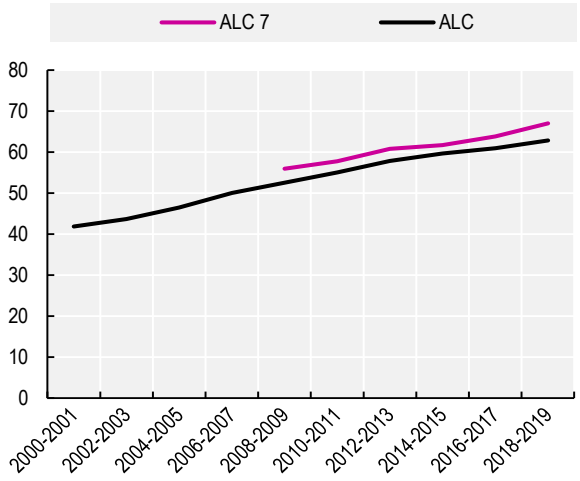
Nota: En el panel A, el primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Brasil y Colombia, y 2015 en el de Ecuador. El promedio regional de ALC comprende 12 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. En el panel B, los datos sobre ninis se refieren a 2019, excepto en el caso de México (2018) y Chile (2017). Los datos sobre ninis se refieren al porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni se dedican a cuidados domésticos (o no se incluyen en la población en edad de trabajar). La CEPAL ha armonizado los datos, obtenidos mediante encuestas de hogares, a fin de garantizar la comparabilidad entre países, por lo que pueden no coincidir con las estimaciones nacionales. Para más información, consulte https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/SisGen_MuestraFicha_puntual.asp?id_aplicacion=1&id_estudio=1&indicador=3469&idioma=i.
Fuente: ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/, y Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3469&idioma=I.

StatLink https://stat.link/8vlp4s

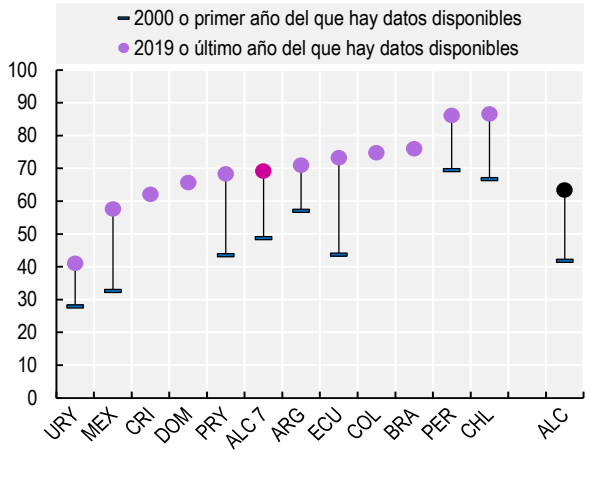
El examen de los logros educativos pone de manifiesto que el 70% de los adultos jóvenes (de entre 20 y 24 años) de los países analizados habían completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria en 2019, nivel que casi dobla el observado en 2000 (Gráfico 4.15). La proporción de adultos jóvenes con el segundo ciclo de enseñanza secundaria oscilaba entre menos del 60% en México y más del 80% en Chile y Perú. Sin embargo, en Uruguay, solo 4 de cada 10 adultos jóvenes han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria. En general, todos los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles registraron una mejora sustancial de los logros educativos de los jóvenes. Esta fue de casi 30 puntos porcentuales en Ecuador, mientras que en Argentina y Uruguay fue un 50% inferior (en torno a 13-14 puntos).

Gráfico 4.15. En promedio, el 70% de los jóvenes han completado la enseñanza secundaria en los países de ALC 11, porcentaje que casi dobla el de 2000

Panel A: Proporción de jóvenes de entre 20 y 24 años con el segundo ciclo de enseñanza secundaria, porcentaje, evolución regional



Panel B: Proporción de jóvenes de entre 20 y 24 años con el segundo ciclo de enseñanza secundaria, porcentaje



Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile, y 2018 en el de México. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Ecuador; 2004 en el caso de Perú; 2005 en el caso de Paraguay y 2007 en el de Uruguay. El promedio de ALC 7 excluye a Brasil, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, debido a que las series temporales están incompletas. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2119&idioma=i.

StatLink https://stat.link/tdz7a5

Riesgos para la salud: Sobrepeso, retraso del crecimiento, tabaquismo y consumo de alcohol

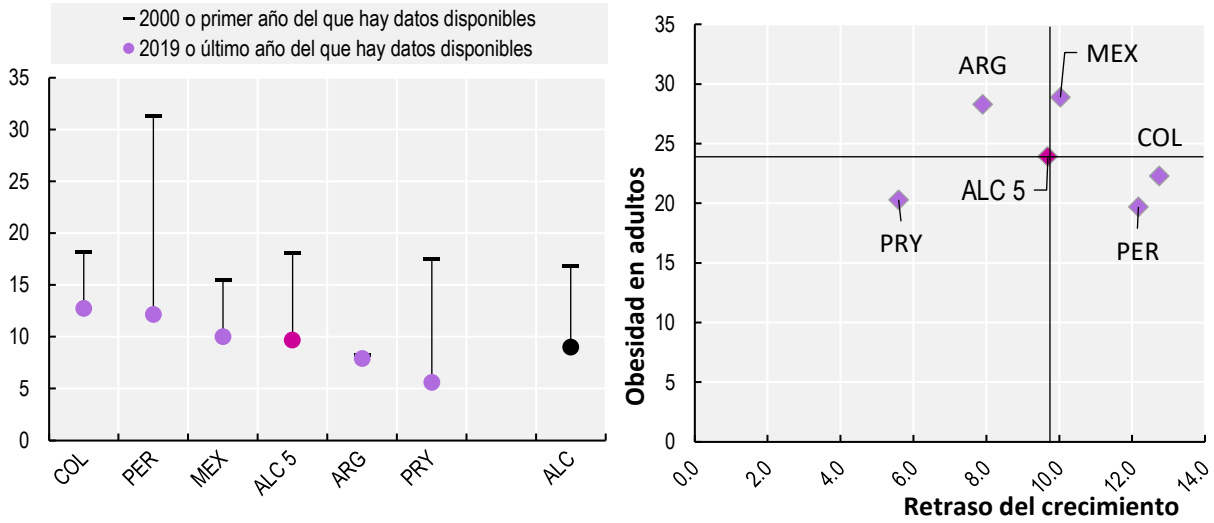
El sobrepeso, el tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo clave para la salud futura en América Latina (OCDE/Banco Mundial, 2020[59]). En particular, una nutrición suficiente y segura, y una dieta equilibrada, son necesarias para una vida sana (OCDE/Banco Mundial, 2020[59]). La malnutrición puede afectar la salud y provocar retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) o emaciación (pérdida de peso reciente y grave) si la alimentación es insuficiente y desequilibrada, o sobrepeso y obesidad cuando es excesiva y desequilibrada.

Por lo general, las tasas de retraso del crecimiento de América Latina son inferiores a las de Asia Oriental y Sudoriental, Asia Central, Oriente Medio y África del Norte, y África Subsahariana, y han ido disminuyendo con el paso del tiempo. En los países analizados, 1 de cada 10 niños menores de cinco años sufre retraso del crecimiento (Gráfico 4.16, panel A), en porcentajes que van desde menos del 2% en Chile y casi el 13% en Colombia. En promedio, las tasas de retraso del crecimiento se han reducido casi a la mitad con respecto a 2000; Paraguay y Perú son los países donde la disminución ha sido más pronunciada (más de 10 puntos porcentuales), mientras que la menor reducción se registra en Argentina y Chile (1 punto o menos), donde las tasas ya estaban situadas por debajo del promedio regional.

Gráfico 4.16. Uno de cada 10 niños menores de 5 años sufre retraso del crecimiento en los países analizados, proporción que se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2000

Panel A: Proporción de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento moderado o grave, porcentaje

Panel B: Retraso del crecimiento y tasas de obesidad en adultos, porcentajes



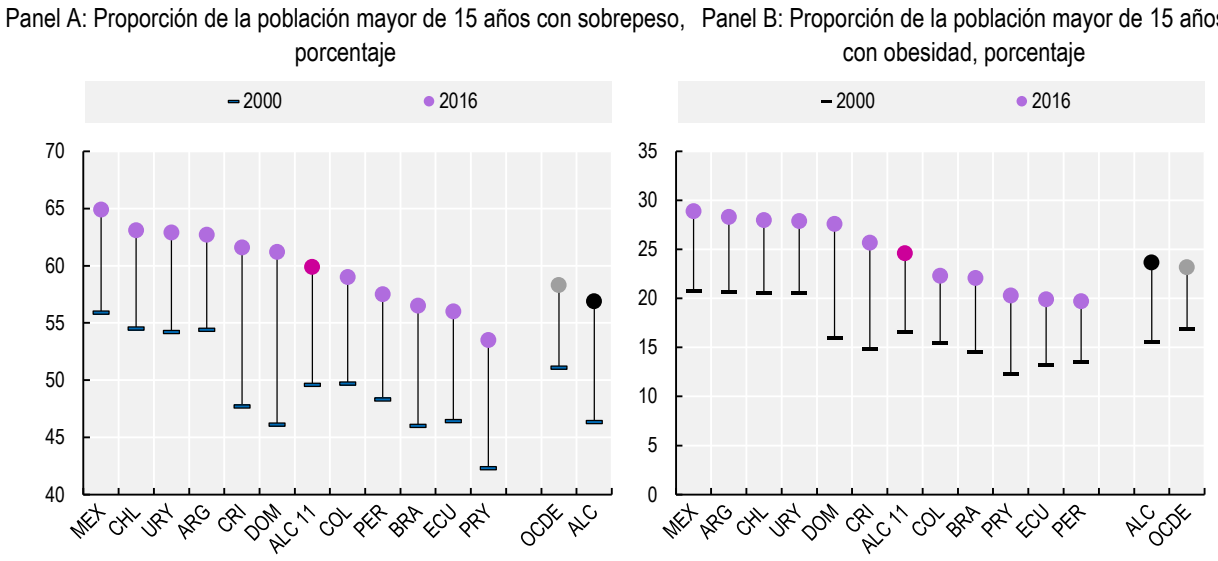
Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de Perú, y 2016 en el de Colombia, México y Paraguay. El primer año del que hay datos disponibles es 2005 en el caso de Argentina y Paraguay, y 2006 en el de México. El promedio de ALC 9 excluye a Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, la República Dominicana y Uruguay. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas. En el panel B, los datos sobre obesidad corresponden a 2016.

Fuente: Base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 2.2.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ y GHO de la OMS (base de datos), https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-).

StatLink https://stat.link/5j7b1t

El sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo para la salud en América Latina (OCDE/Banco Mundial, 2020[59]). En estos países, el 60% de la población tiene sobrepeso, y el 25% obesidad, porcentajes ligeramente superiores al promedio de la OCDE, que es del 58% y el 23%, respectivamente (Gráfico 4.17). El problema es especialmente grave en México, donde casi el 65% de la población tiene sobrepeso, y el 30% obesidad (las tasas más elevadas de la región), pero no lo es tanto en Paraguay (con un 54% de población con sobrepeso), o en Ecuador y Perú (con un porcentaje de población obesa del 20%, aproximadamente). Pese a que el aumento del sobrepeso y la obesidad son fenómenos globales, su frecuencia ha aumentado en aquellos países que, en los últimos tiempos, han registrado una rápida urbanización y han pasado de una dieta rica en proteínas a una dieta rica en grasas y azúcares. En los países de América Latina, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado desde el año 2000 (en 10 y 8 puntos porcentuales), y lo ha hecho a un ritmo superior al de la OCDE (7 y 6 puntos, respectivamente), sobre todo la obesidad.[22]

Gráfico 4.17. En los países de ALC, casi el 60% de la población tiene sobrepeso y el 25% es obeso, porcentajes que vienen aumentando desde 2000



Nota: Los datos se han obtenido de exámenes sanitarios. El promedio regional de ALC comprende 33 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento.
Fuente: GHO de la OMS (base de datos), https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-overweight-among-adults-bmi-=-25-(age-standardized-estimate)-(-) y https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-).

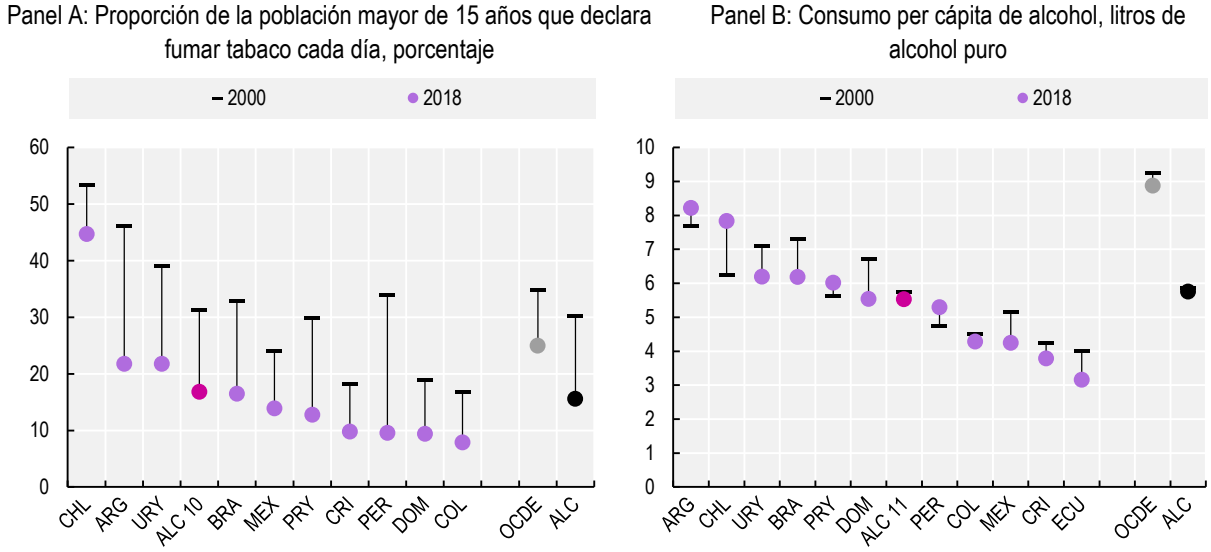
StatLink https://stat.link/xwvlni

Estos dos fenómenos (retraso del crecimiento entre los más jóvenes y sobrepeso en los adultos) no son casuales. En los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, una tasa elevada de retraso del crecimiento se asocia a tasas de obesidad adulta reducidas (Colombia y Perú). Argentina y México presentan tasas de retraso del crecimiento cercanas al promedio y tasas de obesidad de la población adulta relativamente elevadas, mientras que Paraguay registra tasas reducidas tanto del retraso del crecimiento en niños como de obesidad en adultos (Gráfico 4.16, panel B). La relación entre desnutrición y sobrepeso no se debe a la simple coexistencia de fenómenos no vinculados, ya que la desnutrición en los primeros años de vida —e incluso en el vientre materno— podría predisponer al sobrepeso y enfermedades no transmisibles como la diabetes y las cardiopatías en etapas posteriores de la vida. Asimismo, también existe relación entre el sobrepeso de la madre y el sobrepeso y la obesidad de sus hijos (OMS, 2017[60]). Por otro lado, el descenso de las tasas de retraso del crecimiento y el incremento del sobrepeso en adultos en América Latina y el Caribe reflejan también el desplazamiento hacia dietas más calóricas y un aumento general de la disponibilidad de alimentos.

El consumo de tabaco es el segundo factor de riesgo principal de muerte prematura y discapacidad en todo el mundo, por detrás de la dieta[23] (OCDE/Banco Mundial, 2020[59]). En el grupo analizado, prácticamente 1 de cada 6 personas mayores de 15 años fumaba a diario en 2018. Esta proporción se ha reducido casi a la mitad con respecto a 2000 y se sitúa ahora muy por debajo del promedio de la OCDE (1 de cada 4 personas). La proporción de consumidores habituales de tabaco varía considerablemente según el país: en Chile el 45% de la población es fumadora habitual, mientras que en Colombia y la República Dominicana el porcentaje no alcanza el 10% (Gráfico 4.18, panel A). Desde el año 2000, la reducción más significativa del tabaquismo se observa en Argentina y Perú, donde la proporción de fumadores se ha reducido en más de 24 puntos porcentuales.

En comparación con el promedio de la OCDE, América Latina registra también tasas medias de consumo de alcohol inferiores (5,5 litros per cápita en 2018, casi la mitad de los 9 litros por cápita de los países de la OCDE), en parte como consecuencia de los ingresos más reducidos de los latinoamericanos (OMS, 2018[61]). El país con un menor consumo de alcohol es Ecuador (ligeramente por encima de 3 litros per cápita), mientras que el país con mayor consumo es Argentina (más de 8 litros per cápita) (Gráfico 4.18, panel B). El promedio de los países analizados ha fluctuado entre 5,4 y 5,8 litros per cápita en el período 2000-2018, estabilizándose en 5,5 en los últimos tres años. Durante este período, el consumo de alcohol ha descendido en torno a 1 litro per cápita en Brasil, Ecuador, México, la República Dominicana y Uruguay, mientras que en Chile ha aumentado en 1,6 litros per cápita (26%).

Gráfico 4.18. La prevalencia del consumo tanto de tabaco como de alcohol en la región de ALC es inferior al promedio de la OCDE



Nota: ALC 10 excluye a Ecuador, por falta de datos. En el panel A, ALC se refiere al promedio de América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 33 países, incluidos los analizados en este documento.
Fuente: Base de datos de indicadores ODS mundiales, DAES, Naciones Unidas, indicador 3.a.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ y GHO de la OMS (base de datos), https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol).

StatLink https://stat.link/qrp36c

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el capital humano

La pandemia tiene un profundo impacto en el capital humano, con consecuencias para el desempeño en educación y salud. Estas se analizan con mayor detalle en secciones específicas del Capítulo 3 (Conocimientos y competencias, y Salud). Tales efectos tienen, además, repercusiones a largo plazo. Se ha estimado que las pérdidas de aprendizaje, capital humano y productividad podrían traducirse en un descenso de aproximadamente 1,7 trillones de USD en los ingresos agregados de la región de América Latina y el Caribe, un 10% de los niveles de la línea de base (World Bank, 2021[62]).

Los efectos del COVID-19 han azotado con especial fuerza a los jóvenes trabajadores, sobrerrepresentados en los sectores que más perjudicados se han visto por la pandemia, como el comercio minorista, la hostelería y el turismo, y que ya tenían dificultades para acceder al mercado de trabajo formal. Los países de ALC deben prestar apoyo prioritario a la búsqueda de empleo y la orientación profesional, así como a los programas formativos y de aprendizaje que habilitan la capacitación de los

jóvenes y les ayudan a encontrar oportunidades de empleo adecuadas en un mundo cambiante (OCDE, 2020[63]).

Debido al confinamiento y al cierre de los centros educativos, las actividades se han realizado a distancia, siempre que ha sido posible. No obstante, a pesar de las mejoras considerables registradas en los últimos años, la insuficiencia de las competencias y las divergencias en cuanto a acceso y uso de Internet de los distintos grupos socioeconómicos persisten, y el COVID-19 no ha hecho sino agrandar las disparidades. Por ejemplo, menos de la mitad de los latinoamericanos tenía experiencia suficiente en el uso de computadoras y herramientas digitales para realizar tareas profesionales, lo cual excluye de forma tácita a más de la mitad de la población de la región del desempeño de actividades a distancia (OCDE et al., 2020[33]).

Los datos contrastados disponibles indican que una proporción significativa de los adultos aumentaron de peso durante los confinamientos, aunque no todos; un estudio concluye que los adultos mayores (más de 60 años) tenían un riesgo superior de pérdida de peso y posible malnutrición.[24] Debido al aumento del peso corporal, es posible que los confinamientos aplicados durante la pandemia provoquen una subida de la incidencia de sobrepeso, obesidad y riesgos para la salud relacionados, así como de otras enfermedades no transmisibles. Se requieren estudios adicionales para evaluar los efectos específicos sobre cada grupo, en especial por lo que se refiere al aumento de peso entre los jóvenes y el riesgo de pérdida de peso, malnutrición y sarcopenia en adultos mayores.

Los riesgos para la salud observados a día de hoy en la población podrían elevar el costo humano de la pandemia: por ejemplo, es posible que la población con sobrepeso y obesidad tenga mayor propensión a desarrollar complicaciones graves, en particular vinculadas a enfermedades respiratorias, como la neumonía. La obesidad afecta negativamente tanto la función respiratoria como la función inmunitaria, que se ven amenazadas con el COVID-19. La disfunción del tejido adiposo en caso de sobrepeso y obesidad puede hacer que este actúe como un órgano enfermo (a través de la inflamación crónica) (Rancourt, Schellong and Plagemann, 2020[64]). En un estudio de pacientes franceses ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por COVID-19 y que requerían ventilación mecánica invasiva (VMI), la proporción de pacientes obesos era superior a la del conjunto de la población;[25] los hombres con un índice de masa corporal (IMC) elevado fueron los que presentaron una tasa de VMI superior (Simonnet et al., 2020[65]). Un metanálisis de los resultados de obesidad y COVID-19 en PubMed (incluido MEDLINE) y Google Scholar de mayo de 2020 indica que la obesidad estaría relacionada con una mayor gravedad de la enfermedad por COVID-19, pero no con una mayor mortalidad (Zhang et al., 2021[66]).

Además de la obesidad, otro factor de riesgo es un peso inferior al normal (Gaiha, Cheng and Halpern-Felsher, 2020[67]), puesto que las personas con bajo peso presentan deficiencias en las funciones pulmonares dinámicas (Azad and Zamani, 2014[68]). Según datos clínicos contrastados, los fumadores de tabaco tienen mayor predisposición (1,4 veces) a desarrollar síntomas graves de COVID-19, y su probabilidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI), necesitar ventilación mecánica o morir es aproximadamente 2,4 veces superior a la de los no fumadores (Vardavas and Nikitara, 2020[69]). Las conclusiones extraídas de una muestra nacional de adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos, el consumo de cigarrillos electrónicos y el consumo combinado de estos y cigarrillos normales constituyen importantes factores de riesgo subyacentes en la enfermedad por COVID-19 (Gaiha, Cheng and Halpern-Felsher, 2020[67]). Todavía existen muchos interrogantes en torno al mecanismo que influye en la gravedad de las infecciones de las vías respiratorias cuando se combinan factores de riesgo.

Aspectos para el desarrollo estadístico

Los datos contrastados sobre educación y retraso del crecimiento están dispersos, tanto en términos de países como de cobertura temporal. En cuanto al consumo de alcohol, es posible que la metodología utilizada para convertir las bebidas alcohólicas en alcohol puro no sea la misma en todos los países. Además, los datos hacen referencia a estimaciones anuales de la producción y el comercio de bebidas

alcohólicas, suministrados por los ministerios nacionales de Agricultura y Comercio a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (es decir, alcohol registrado), y excluyen las fuentes caseras, las compras transfronterizas y otras fuentes no registradas (OCDE/Banco Mundial, 2020[59]). La proporción de jóvenes (de entre 15 y 24 años) que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) no constituye una medida perfecta de la infrautilización de las competencias, puesto que muchos jóvenes trabajan en empleos informales o sin remuneración (p. ej., en voluntariado para la comunidad, o como cuidadores familiares).

Capital social

En términos generales, el capital social se refiere a las redes, normas, entendimientos y valores compartidos que facilitan la cooperación dentro de un grupo o entre grupos de población en el seno de una sociedad (OCDE, 2020[1]). La literatura dedicada al capital social es muy amplia y engloba las relaciones personales entre ciudadanos (redes y conducta social de las personas que contribuyen a establecer y mantener estas relaciones), el apoyo social (recursos emocionales, materiales, prácticos, financieros, intelectuales y profesionales a disposición de las personas a través de las redes personales de estas), el compromiso cívico (actividades a través de las cuales las personas participan en la vida cívica y comunitaria) y la confianza y las normas de cooperación (valores y expectativas compartidos sobre los que se basa el funcionamiento de la sociedad, y que permiten una cooperación mutuamente beneficiosa) (Scrivens and Smith, 2013[70]). Los dos tipos de confianza más importantes para el capital social son la confianza interpersonal generalizada (es decir, la confianza en “los demás”, también en los desconocidos) y la confianza institucional (es decir, la confianza en las instituciones públicas).

El marco de bienestar de la OCDE, y este informe también, distingue entre aquellos activos sociales facilitados y de “propiedad” a título individual (como las relaciones personales y el apoyo de la red social) y los bienes públicos relacionales que el conjunto de la sociedad comparte y tiene a su disposición, y pueden transmitirse de generación en generación (confianza y normas de cooperación). Los primeros se abordan en la dimensión “Relaciones sociales” del capítulo 3; los segundos son objeto de análisis en esta sección.

La confianza y las normas de cooperación tienen un valor instrumental sólido y amplio, y contribuyen al buen funcionamiento de los sistemas sociales —mercado, infraestructura estatal, estabilidad social— esenciales para muchos aspectos del bienestar (OCDE, 2017[71]). Las normas, valores y expectativas que fomentan la cooperación —como la solidaridad, la honestidad, la generosidad, la amabilidad, la buena educación, la equidad, la justicia social o la tolerancia— permiten generar una serie de beneficios para la sociedad, que van desde un aumento de la productividad hasta la mejora de los resultados de bienestar. Otras normas y expectativas, como la corrupción o la discriminación, tienen el efecto contrario (Scrivens and Smith, 2013[70]). Esta sección presenta información sobre el voluntariado, la confianza interpersonal, la confianza institucional, la percepción de la corrupción en el gobierno nacional, el apoyo a la democracia, la moral tributaria (voluntad de pagar impuestos) y la percepción de la discriminación y la desigualdad en los ingresos.

En general, según varios indicadores, los países analizados (y el conjunto de América Latina) muestran señales de debilitamiento del capital social, cuyo punto de partida ya era bajo. Las tasas de voluntariado, confianza en el gobierno, apoyo a la democracia y moral tributaria han registrado todas una disminución con respecto a los años 2000, mientras que la percepción de la corrupción en el gobierno ha aumentado. En otros indicadores, como los de confianza interpersonal, confianza en la policía y proporción de personas que afirman pertenecer a un grupo discriminado, la estabilidad observada en el grupo analizado o el promedio regional oculta amplias divergencias entre países. El único indicador que muestra una mejora clara (aunque moderada) es el de la proporción de personas que declaran que la desigualdad en los ingresos es injusta. Los indicadores correspondientes a la confianza en los sistemas e instituciones

políticas obtienen resultados particularmente preocupantes. Las revueltas sociales de 2019 en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador constituyen un claro ejemplo de pérdida de confianza en el gobierno, cuyos riesgos se ven agravados por la crisis del COVID-19.

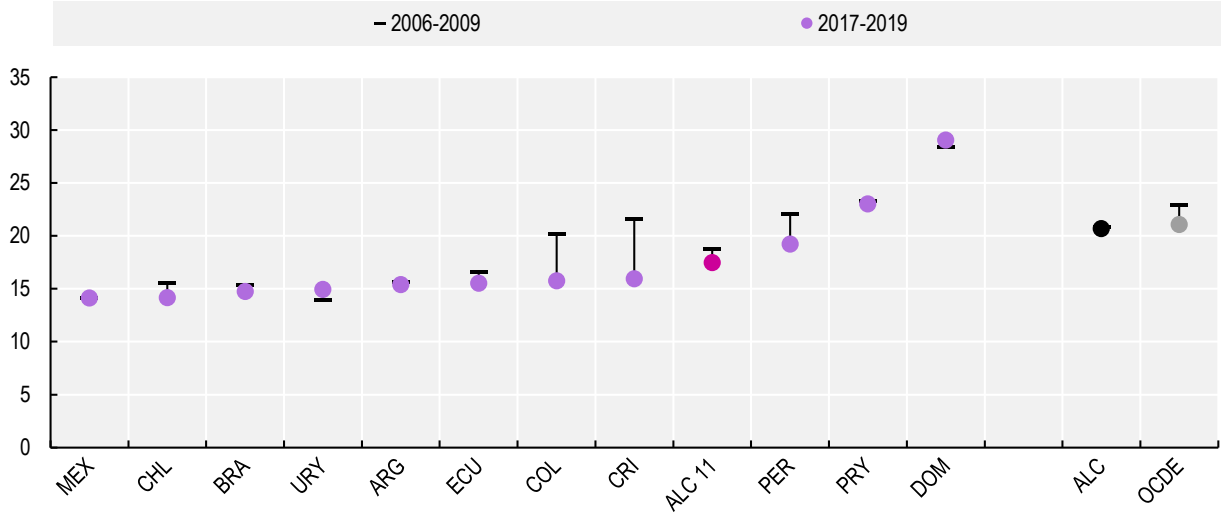
Voluntariado

El voluntariado se refiere a la provisión de tiempo y mano de obra no remunerada a personas que no forman parte del núcleo familiar. Puede ser formal (si se realiza en el seno de una organización o grupo legalmente constituido) o informal (si se realiza de forma no estructurada, fuera del contexto de las organizaciones o grupos legalmente constituidos) (Scrivens and Smith, 2013[70]). En los países de América Latina solo existen datos armonizados sobre el voluntariado formal realizado a través de organizaciones.

En 2017-2019, alrededor de 1 de cada 6 ciudadanos de los países analizados habían donado voluntariamente su tiempo a una organización durante el mes anterior, un nivel similar al promedio de la OCDE (Gráfico 4.19). Este porcentaje oscila entre el 14% de Chile y México, aproximadamente el 20% de Paraguay y Perú, y hasta el 30% de la República Dominicana. En el conjunto de la región, el voluntariado formal ha perdido un poco de fuerza (1,4 puntos porcentuales en los países analizados) desde 2006-2009, una evolución similar a la de los países de la OCDE; el descenso más pronunciado ha sido el de Colombia y Costa Rica (más de 4 puntos porcentuales), mientras que algunos países registran incrementos modestos (1 punto en Uruguay y 0,6 puntos en la República Dominicana).

Gráfico 4.19. Alrededor de 1 de cada 6 ciudadanos de los países analizados habían donado voluntariamente su tiempo a una organización durante el mes anterior, un nivel ligeramente inferior al de 2006-2009

Proporción de personas que han donado voluntariamente su tiempo a una organización durante el mes anterior, porcentaje



Nota: Basado en la pregunta: "¿Ha realizado alguna de las opciones siguientes durante el último mes? ¿Ha trabajado como voluntario para alguna organización?" Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras posibles respuestas eran "no" y "no sabe"), y se promedia un período de cuatro (2006-2009) y tres (2017-2019) años. El promedio regional de ALC comprende 23 países, incluidos los analizados en este documento.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

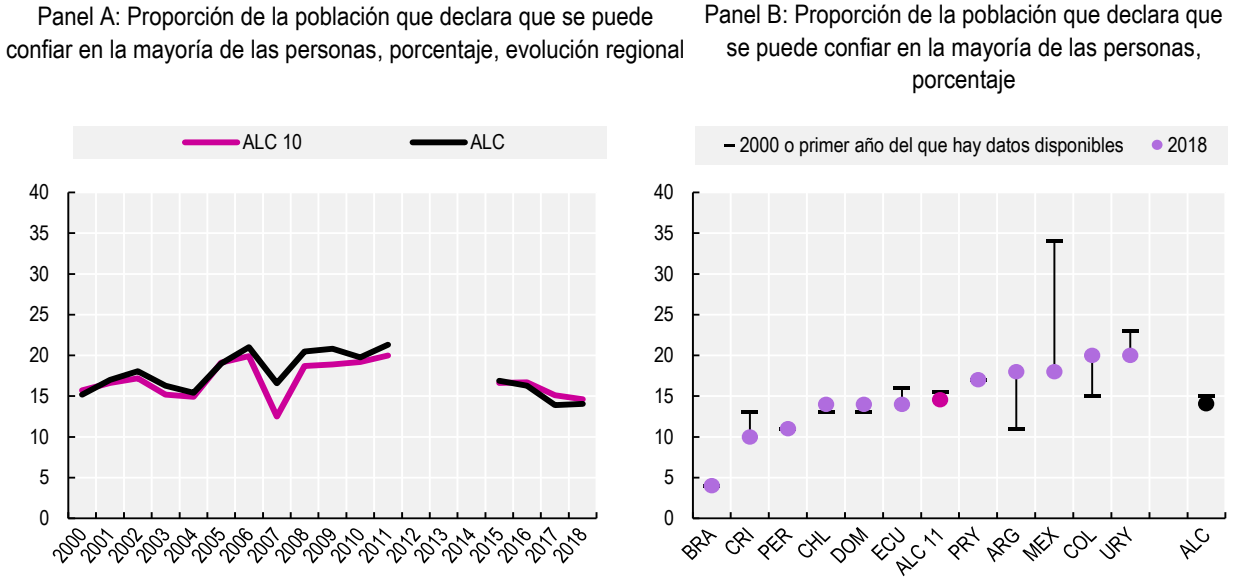
StatLink https://stat.link/dok4cl

Confianza en los demás

La confianza en los demás es la base de la cooperación (Scrivens and Smith, 2013[70]) y se refiere a la percepción y las expectativas de que los demás se comportarán de forma confiable. Pese a que la mayoría de las medidas de la confianza disponibles se basan en las autoevaluaciones de los encuestados, datos contrastados indican que estas medidas están estrechamente relacionadas con la credibilidad de la conducta de las personas en modelos semiexperimentales.[26]

En los países analizados, solo el 14% de personas declararon que se puede confiar en la mayoría de la gente (Gráfico 4.20). La confianza en los demás es especialmente escasa en Brasil, donde solo el 4% de la población considera que se puede confiar en la mayoría de la gente, mientras que en Colombia y Uruguay el porcentaje es cinco veces mayor. En comparación con el año 2000, México es el país que registra la caída acumulada más importante (16 puntos porcentuales menos), si bien sigue mostrando niveles relativamente elevados, seguido de Costa Rica y Uruguay (3 puntos menos). En el extremo opuesto del espectro, el mayor incremento acumulado se registra en Argentina (7 puntos porcentuales), seguido de Colombia (5 puntos). Otros datos disponibles obtenidos de la Encuesta Mundial de Valores (no representados) en relación con siete de los países analizados y 30 países de la OCDE indican que la confianza media en los demás en la OCDE es cuatro veces superior a la del grupo analizado (en torno al 38% y el 9%, respectivamente) (World Values Survey, 2021[72]).

Gráfico 4.20. En los países analizados, solo 1 de cada 7 ciudadanos considera que se puede confiar en la mayoría de las personas



Nota: Los datos se basan en la pregunta: "Hablando en general, ¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?", siendo las posibles respuestas "se puede confiar en la mayoría de las personas", "uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?" y "no sabe". ALC 10 excluye a la República Dominicana, puesto que sus series temporales están incompletas. En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 17 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 países analizados sobre los cuales hay series temporales disponibles. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 18 países, incluidos los analizados en este documento. Los primeros datos disponibles para la República Dominicana son de 2004.
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

StatLink https://stat.link/rzjvd4

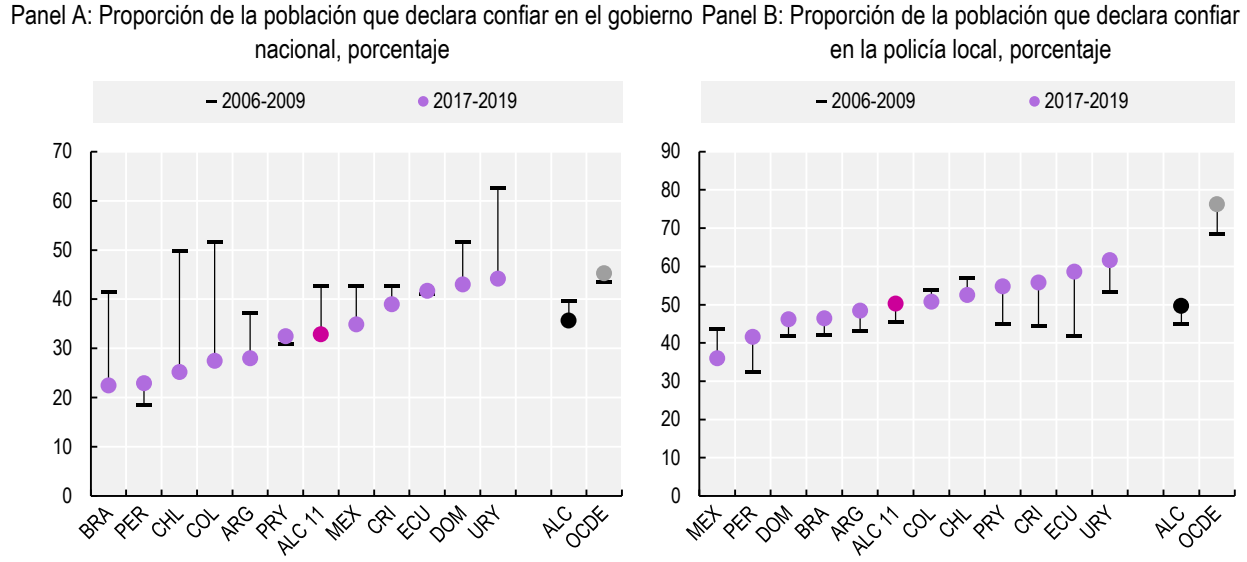
Confianza en las instituciones: Gobierno y policía

La confianza en las instituciones es un aspecto fundamental de la gobernanza pública y afecta la voluntad de cooperación de los ciudadanos con las instituciones públicas en pos del bien común (Praia Group on Governance Statistics, 2020[73]). La percepción que la población tiene de las distintas dimensiones del buen gobierno (como la calidad de los servicios y la integridad de los funcionarios) también influye en la confianza en las instituciones, así que puede utilizarse como medida para "tomar la temperatura" al conjunto de relaciones entre los ciudadanos y los responsables políticos.

Un tercio de la población de los países analizados confía en el gobierno de la nación (Gráfico 4.21, panel A), 10 puntos porcentuales menos que en 2006-2009, y nivel muy inferior al promedio de la OCDE (45%). Los países con menos confianza en el gobierno son Brasil y Perú, donde menos del 25% de los ciudadanos confían en el gobierno nacional; los índices de confianza más elevados son los de Ecuador, la República Dominicana y Uruguay, donde más del 40% de la población confía en el gobierno nacional. En Brasil, Chile y Colombia, la confianza en el gobierno de la nación se ha reducido a la mitad con respecto a 2006-2009. En cambio, Perú es el país que registra un mayor incremento de la confianza en el gobierno (4,5 puntos porcentuales).

La mitad de la población de los países analizados confía en la policía local, un nivel 5 puntos porcentuales superior al de 2006-2009 (Gráfico 4.21, panel B). Los índices de confianza en la policía más elevados son los de Ecuador y Uruguay, donde en torno al 60% de la población confía en la policía; los más bajos son los de México, donde menos del 40% de la población confía en ella. En comparación con 2006-2009, la confianza en la policía ha aumentado sobre todo en Ecuador, Costa Rica y Paraguay (10 puntos porcentuales o más), mientras que la principal caída (7,5 puntos) se ha observado en México, situado anteriormente justo por debajo del promedio regional y que ahora es el farolillo rojo.

Gráfico 4.21. En los países analizados, menos de un tercio de la población confía en el gobierno de la nación, y la mitad confía en la policía local



Nota: El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los países analizados en este documento. El panel A se basa en la pregunta de la encuesta: "En este país, ¿tiene usted confianza en cada uno de los siguientes puntos o no? ¿En cuanto al gobierno nacional?" Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras posibles respuestas eran "no" y "no sabe"), y se promedia un período de cuatro (2006-2009) y tres (2017-2019) años. El panel B se basa en la pregunta de la encuesta: "En la ciudad o zona en la que usted vive, ¿tiene usted confianza en cada uno de los siguientes puntos o no?". Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras posibles respuestas eran "no" y "no sabe"), y se promedia un período de cuatro (2006-2009) y tres (2017-2019) años.

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/187wjm

Corrupción

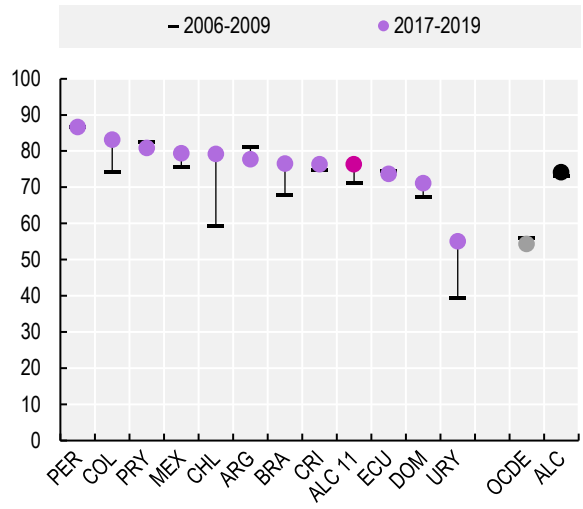
La integridad es la piedra angular del buen gobierno y garantiza a los ciudadanos que el gobierno trabaja en interés de todos, y no de unos pocos (OCDE, 2020[74]). La medición de la corrupción plantea dificultades, y los indicadores disponibles —principalmente basados en evaluaciones de expertos o encuestas de hogares— suelen centrarse en distintos aspectos de esta. Si bien las distintas medidas, de forma aislada, podrían ofrecer un panorama parcial aunque posiblemente distorsionado del asunto en cuestión, el uso combinado de distintas medidas de la corrupción nos permite entender sus múltiples facetas (Exton and Fleischer, a continuación[54]).

En los países analizados, el 76% de la población considera que la corrupción es generalizada en el gobierno de la nación (Gráfico 4.22, panel A); esta proporción ha registrado un incremento de 5 puntos porcentuales con respecto a 2006-2009 y se sitúa muy por encima de los niveles observados en los países de la OCDE (55%). La percepción de la corrupción en el gobierno es elevada sobre todo en Perú (87%), Colombia y Paraguay (en ambos, superior al 80%), y más reducida en Uruguay (55%), donde es acorde con el promedio de la OCDE.

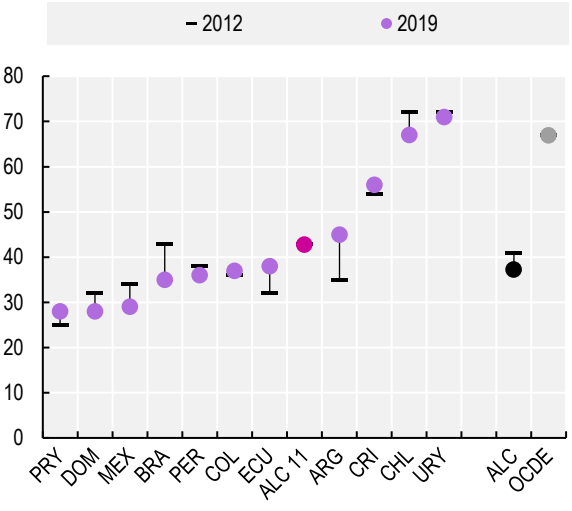
Las medidas de la corrupción obtenidas a partir de las encuestas de hogares capturan solo la corrupción a pequeña escala y no revelan otros aspectos menos visibles para los hogares, como la corrupción política, la presión o la manipulación del proceso político por parte de grupos de interés especial (UNODC, 2018[75]). Para recabar información sobre estos otros aspectos, pueden emplearse medidas basadas en evaluaciones de expertos, aunque estas también tienen sus propios sesgos. El examen de las evaluaciones de expertos y empresarios incluidas en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency Internacional (2019) revela que el nivel medio de corrupción en el sector público de los países analizados era de 43, en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (ausencia total de corrupción), inferior al nivel medio de la OCDE, que es de 67 (Gráfico 4.22, panel B). Esto significa que en el grupo analizado existe más corrupción. De acuerdo con esta medida, la integridad percibida del sector público más elevada es la de Chile y Uruguay (cuyos resultados son acordes con el promedio de la OCDE, o ligeramente superiores), mientras que la más reducida es la de México, Paraguay y la República Dominicana (con resultados por debajo de 30). El promedio regional de Transparency International se ha mantenido estable desde 2012, con mejoras en Argentina y Ecuador (aumento de 10 y 6 puntos, respectivamente) y descensos en Brasil (una caída de 8 puntos), seguido de Chile y México (5 puntos).

Gráfico 4.22. La percepción de la corrupción tanto de la población como de los expertos en los países analizados es superior al promedio de la OCDE

Panel A: Proporción de la población que considera que la corrupción es generalizada en el gobierno de la nación, porcentaje



Panel B: Índice de Percepción de la Corrupción, escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio)



Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. Se basa en la pregunta: "¿Es generalizada la corrupción en el gobierno en este país o no?" Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras posibles respuestas eran "no" y "no sabe"), y se promedia un período de cuatro (2006-2009) y tres (2017-2019) años. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 27 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. El Índice anual de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International clasifica los países según el grado de corrupción del sector público, de acuerdo con la percepción de expertos y ejecutivos de negocios. El IPC es un índice compuesto que combina información de 13 encuestas y evaluaciones de expertos de 12 organismos independientes especializados en el análisis de la gobernanza y el clima empresarial; la puntuación obtenida oscila entre 0 (altamente corrupto) y 100 (muy limpio).
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y en el Índice de Percepción de la Corrupción (2020) de Transparency Internacional (base de datos), https://transparency.org/cpi2020 (panel B).

StatLink https://stat.link/2cr8yi

Apoyo a la democracia y moral tributaria

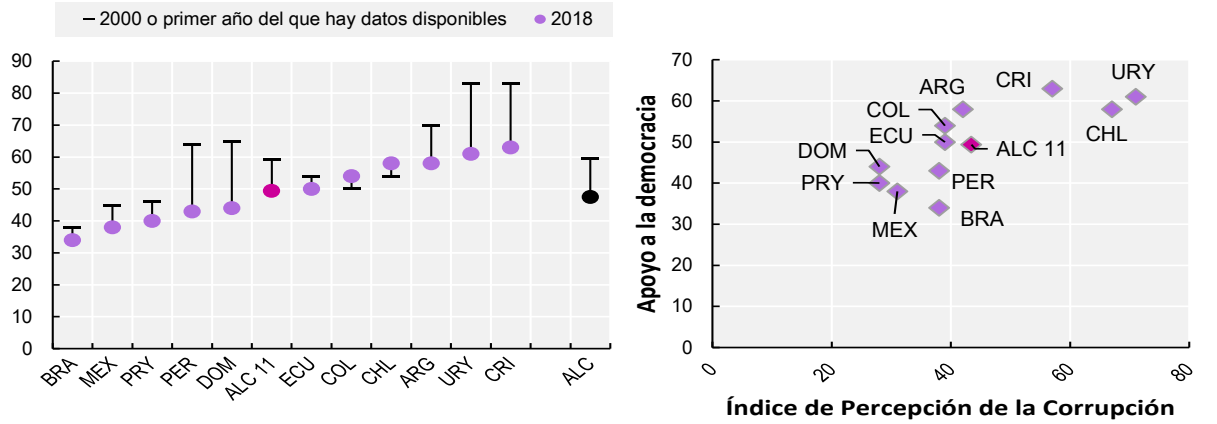
En muchos países de América Latina, la democracia electoral es un fenómeno relativamente reciente. El legado de los regímenes autoritarios, los golpes militares y las injerencias exteriores de épocas pasadas aún perdura en la opinión pública: casi la mitad (49%) de la población de los países analizados apoya la democracia por encima de todas las demás formas de gobierno, porcentaje que se ha reducido en 10 puntos desde el año 2000 (Gráfico 4.23, panel A). El respaldo a la democracia más bajo se registra en Brasil y México (inferior al 40%), mientras que el más alto se observa en Costa Rica y Uruguay (superior al 60%). En los últimos años, el apoyo a la democracia ha perdido fuerza sobre todo en Perú, la República Dominicana y Uruguay (más de 20 puntos porcentuales). Entre los demás países analizados, solo ha aumentado en Chile y Colombia (4 puntos).

En los países de América Latina, el apoyo a la democracia está estrechamente vinculado a las medidas de la integridad gubernamental: la correlación con el Índice de Percepción de la Corrupción es de 0,80 (Gráfico 4.23, panel B). Ambas medidas son comparativamente elevadas en Chile, Costa Rica y Uruguay, pero bastante inferiores en Brasil, México y Paraguay. El apoyo a la democracia también suele ir acompañado de la confianza en la policía, pero no es estadísticamente significativa su relación con la confianza en los gobiernos nacionales.[27]

Gráfico 4.23. El apoyo a la democracia está estrechamente vinculado a las medidas de la integridad gubernamental

Panel A: Proporción de la población que declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, porcentaje

Panel B: Índice de Percepción de la Corrupción, escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio) (eje de abscisas), y proporción de la población que declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, porcentaje (eje de ordenadas)



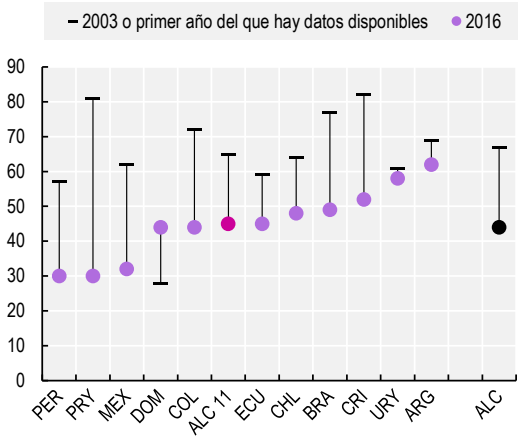
Nota: El gráfico se basa en la pregunta: "¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo?" Las posibles respuestas eran: "La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno"; "En ciertas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático"; "A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático", y "No sabe". Los datos representados reflejan el porcentaje de encuestados que respondieron: "La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno". El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. Los primeros datos disponibles para la República Dominicana son de 2004. En el panel B, los datos sobre apoyo a la democracia son de 2018, y los del Índice de Percepción de la Corrupción corresponden a 2019. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un índice compuesto que combina información de 13 encuestas y evaluaciones de expertos de 12 organismos independientes especializados en el análisis de la gobernanza y el clima empresarial; la puntuación obtenida oscila entre 0 (altamente corrupto) y 100 (muy limpio).
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp e Índice de Percepción de la Corrupción (2020) de Transparency International (base de datos), https://transparency.org/cpi2020.

StatLink https://stat.link/vwzpui

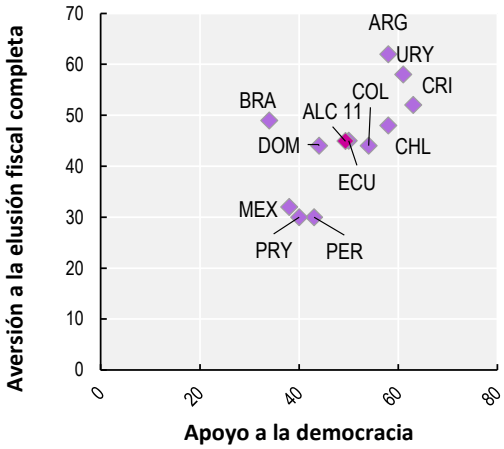
Como en el caso del apoyo a la democracia, menos de la mitad (45%) de la población de los países analizados está de acuerdo con la afirmación de que nunca está justificado no pagar los impuestos que a uno le corresponden, porcentaje que en 2003 todavía era del 65% (Gráfico 4.24, panel A). La aversión a la elusión fiscal completa más elevada se registra en Argentina y Uruguay (superior al 55%), mientras que la más reducida se observa en México, Paraguay y Perú (inferior al 40%). En comparación con 2003, solo la República Dominicana experimenta una mejora (16 puntos porcentuales), mientras que la caída de mayor envergadura se observa en Costa Rica y México (30 puntos porcentuales menos) y Paraguay (51 puntos menos). La aversión a la elusión fiscal completa está estrechamente vinculada con el apoyo a la democracia (0,69) (Gráfico 4.24, panel B), la confianza en la policía (0,65) y la integridad gubernamental (IPC) (0,64). Estos datos coinciden con los de estudios anteriores (OCDE, 2019[76]), que también vinculan la reducción de la moral tributaria (definida como la motivación intrínseca para pagar impuestos) con la desaceleración económica, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y el descontento social en América Latina.

Gráfico 4.24. Solo la mitad de la población considera del todo injustificable eludir el pago de impuestos, proporción que se ha reducido con respecto a comienzos de la década de 2000 y que guarda relación con el apoyo a la democracia

Panel A: Proporción de la población que declara que es totalmente injustificable no pagar los impuestos que a uno le corresponden, porcentaje



Panel B: Proporción de la población que apoya la democracia, porcentaje (eje de abscisas), y proporción de la población que declara sentir aversión a la elusión fiscal completa, porcentaje (eje de ordenadas)



Nota: Se basa en la pregunta: "En una escala de 1 a 10, donde 1 es 'totalmente injustificable' y 10 es 'totalmente justificable', ¿hasta qué punto considera Ud. justificable evadir impuestos?" Los datos representados corresponden al porcentaje de encuestados que respondieron "totalmente injustificable". El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. Los primeros datos disponibles para la República Dominicana son de 2005. En el panel B, los datos sobre aversión a la elusión fiscal completa son de 2016, mientras que los del apoyo a la democracia se refieren a 2018. El apoyo a la democracia se basa en la pregunta: "¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo?" Las posibles respuestas eran: "La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno"; "En ciertas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático"; "A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático", y "No sabe". Los datos representados reflejan el porcentaje de encuestados que respondieron: "La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno".
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

StatLink https://stat.link/fxm4bi

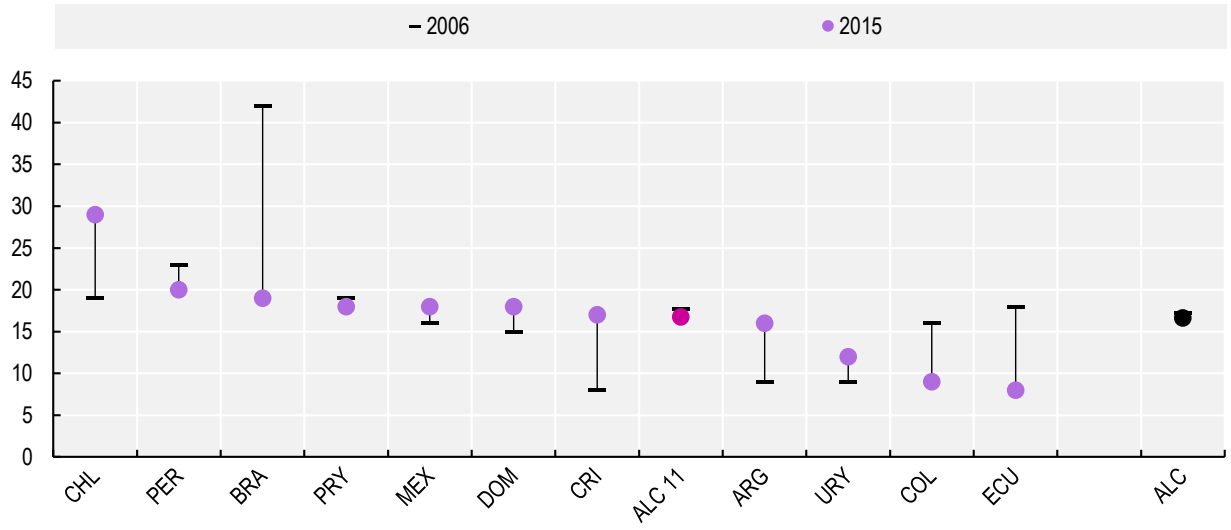
Percepción de la discriminación y la desigualdad injusta

Las normas de tolerancia y no discriminación de personas y grupos que pertenecen a grupos de procedencia, aspecto o creencias distintas son esenciales para la cooperación justa e inclusiva (Scrivens and Smith, 2013[70]). Además, constituyen elementos fundamentales del capital social.

En los países analizados, la proporción de la población que declara pertenecer a un grupo discriminado es del 17%, porcentaje que no ha variado sustancialmente con respecto al nivel de 2006 (Gráfico 4.25). La proporción oscila entre menos del 10% en Colombia y Ecuador, y casi el 30% en Chile. En el conjunto de países analizados, la percepción media de la discriminación se incrementó en 2010 y 2011, pero volvió a situarse en los niveles anteriores (2006 y 2009) en 2015. Comparado con 2006, Brasil registró el descenso más fuerte (23 puntos porcentuales), si bien allí la percepción de la discriminación sigue siendo de las más altas de la región, seguido de Colombia y Ecuador, cuya percepción de la discriminación es de las más bajas. Chile (país con mayor percepción de la discriminación), así como Costa Rica y Argentina, registraron los incrementos más destacados (10, 9 y 7 puntos porcentuales, respectivamente).

Gráfico 4.25. Casi 1 de cada 5 habitantes de América Latina declara pertenecer a un grupo discriminado

Proporción de la población que declara pertenecer a un grupo discriminado, porcentaje



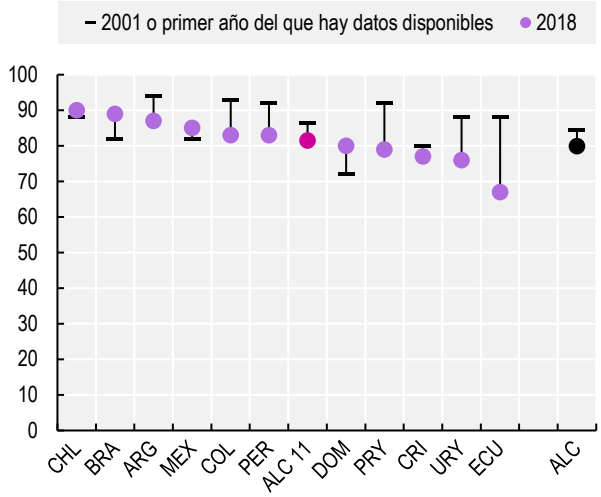
Nota: Se basa en la pregunta: "¿Se describiría Ud. como parte de un grupo que es discriminado en el país, o no?" Los datos representan el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras dos posibles respuestas eran "no" y "no sabe"). El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2258&idioma=i

StatLink https://stat.link/l3xdi5

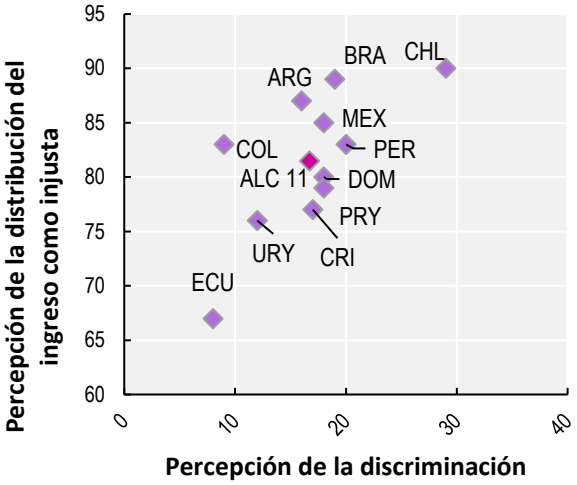
Los sentimientos de discriminación por motivos que escapan al control de uno mismo se traducen en insatisfacción con la desigualdad en los ingresos; el 81% de los latinoamericanos encuestados declaran que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta, un porcentaje inferior al 86% de 2001 (Gráfico 4.26, panel A). Los países donde el porcentaje es más elevado son Brasil y Chile (en torno al 90%), mientras que el porcentaje más bajo se observa en Ecuador (70%), país que registró una caída de más de 20 puntos porcentuales respecto de 2001, la más importante de la región. La percepción de que la desigualdad en los ingresos es injusta se redujo en más de 10 puntos porcentuales en Paraguay y Uruguay, pero aumentó en 7 y 8 puntos, respectivamente, en Brasil y la República Dominicana. La percepción de la discriminación y la de la desigualdad en los ingresos están estrechamente relacionadas (Gráfico 4.26, panel B); ambas medidas son especialmente elevadas en Chile y Brasil, pero relativamente reducidas en Ecuador y Uruguay.

Gráfico 4.26. Más del 80% de la población de América Latina cree que la distribución del ingreso es injusta

Panel A: Proporción de la población que declara que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta, porcentaje



Panel B: Proporción de la población que declara pertenecer a un grupo que es discriminado, en porcentaje (eje de abscisas), y proporción de la población que declara que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta, porcentaje (eje de ordenadas)



Nota: Se basa en la pregunta: "Cuán justa cree Ud. que es la distribución del ingreso en el país?"; las posibles respuestas eran "muy justa", "justa", "injusta", "muy injusta" y "no sabe". Los datos representados ilustran el porcentaje de población que respondió "injusta" o "muy injusta". El promedio regional de ALC comprende 18 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. Los primeros datos disponibles para la República Dominicana son de 2007. En el panel B, la percepción de la discriminación corresponde a 2015, mientras que la percepción de la injusticia de la desigualdad del ingreso es de 2018. La percepción de la discriminación se basa en la pregunta: "¿Se describiría Ud. como parte de un grupo que es discriminado en el país, o no?". Los datos representados ilustran el porcentaje de encuestados que respondieron "sí" (las otras dos posibles respuestas eran "no" y "no sabe").
Fuente: Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp y Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2258&idioma=i.

StatLink https://stat.link/2xq65h

El impacto de la pandemia COVID-19 en el capital social

Para poder responder de forma efectiva a la pandemia de coronavirus (COVID-19), se requieren medidas coordinadas y la voluntad de los ciudadanos de respetar las restricciones e introducir los cambios de comportamiento necesarios, por el bien común. Los reducidos niveles de capital social puestos de manifiesto por muchos de los indicadores analizados en esta sección señalan la fragilidad del contrato social entre gobierno y ciudadanos en la región: antes de la pandemia, existía una importante insatisfacción con las permanentes desigualdades y con el funcionamiento del sistema político, además de una creciente desconfianza en las instituciones y un decreciente apoyo a la democracia (Zechmeister, 2019[77]; CEPAL, 2021[78]). En algunos casos, las demandas por mayor igualdad y no discriminación han derivado en movilizaciones y protestas sociales que exigen transformaciones sustantivas para construir sociedades más justas e inclusivas[28] (CEPAL, 2021[78]).

La ampliación de los estratos de ingresos medios y la consolidación de una ciudadanía más demandante de espacios de participación y menos tolerante frente a las desigualdades y la corrupción contribuyó a los procesos de movilización y protesta. En toda la región, la ciudadanía cuestiona crecientemente los patrones de discriminación y desigualdad que permean las instituciones y las relaciones sociales. Estas

características cristalizan en la cultura del privilegio de origen colonial que naturaliza las profundas desigualdades socioeconómicas, de género, étnicas y raciales (CEPAL, 2021[78]; OCDE, a continuación[79]).

La tendencia a la pérdida de apoyo a la democracia observada en la región es especialmente preocupante. En un Informe de las Naciones Unidas (ONU, 2020[80]), se explican las tres maneras en que la pandemia amenaza la democracia en la región. En primer lugar, al incrementar las desigualdades y ampliar aún más las diferencias en cuanto a resultados de bienestar de los distintos grupos sociales, reforzando la apreciación de que los gobiernos democráticos no han respondido de forma adecuada a las necesidades de los más vulnerables. En segundo lugar, en algunos casos, las medidas de emergencia adoptadas para limitar la interacción social podrían haber infringido los derechos humanos, al reducir la capacidad de los actores de la sociedad civil para movilizarse y exigir responsabilidades a los gobiernos. También podrían haber creado oportunidades para que agentes ilegítimos (como grupos armados y organizaciones delictivas) reafirmen el control sobre los territorios. En tercer lugar, la liberación de grandes cantidades de fondos públicos para las medidas de lucha contra el virus, a menudo de manera poco transparente, ha provocado un aumento de las acusaciones de corrupción y malversación de fondos, lo cual probablemente minará todavía más la confianza en los gobiernos democráticos.

La percepción del desempeño de los gobiernos de la región durante la pandemia es muy diversa. Los resultados de una encuesta de opinión basada en las respuestas de 317 líderes de opinión y destacados periodistas que suelen publicar periódicamente sus opiniones en los medios de comunicación de América Latina revelan que, entre abril y agosto de 2020, el respaldo de los líderes de opinión a la forma en que el gobierno abordaba la crisis del COVID-19 en general disminuyó en casi todos los países de la región sobre los cuales hay datos disponibles. El descenso más pronunciado se produjo en Perú: mientras que en abril de 2020 el 91% de los encuestados respaldaban su gestión en 2020, en agosto de ese año el porcentaje cayó al 23%. México es el único país que registró un aumento del respaldo de los líderes de opinión, pasando del 7% de abril de 2020 a un todavía reducido 28% en agosto de ese mismo año. El porcentaje de respaldo más elevado fue el de Argentina y Colombia (superior al 70%), mientras que el más reducido fue el de Brasil (17%), el país con el mayor número de muertes por COVID-19 (CEPAL, 2021[78]).

Aunque no se observan cambios estadísticamente significativos entre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2019 y el IPC de 2020, los datos contrastados procedentes de la Encuesta Gallup Mundial —principalmente en relación con el período que va de finales de agosto de 2020 y noviembre o diciembre de 2020— indican un ligero aumento de la confianza en el gobierno nacional (aumento de 5 puntos porcentuales respecto de 2019) y una caída de la percepción de la corrupción (disminución de similar magnitud) en los países analizados (Gráfico 4.27, paneles A y B), en línea con la evolución observada en los países de la OCDE.

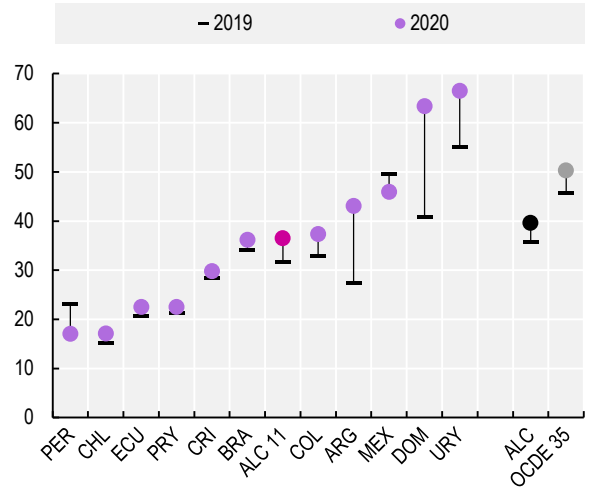
En 2020, la confianza en el gobierno nacional y la percepción de la corrupción mostraban una fuerte correlación (-0,92) (Gráfico 4.27, panel C). Cuanto más elevada es la percepción de la corrupción, menor es la confianza en el gobierno nacional: en Perú, menos de 1 de cada 5 personas confían en el gobierno, y más del 90% de la población considera que la corrupción es generalizada en todos los niveles de la administración pública. A la inversa, cuanto menor es la percepción de la corrupción, mayor es la confianza en el gobierno nacional: en la República Dominicana y Uruguay, más del 60% de la población confía en el gobierno, y menos del 55% considera que la corrupción es generalizada en todos los niveles de la administración pública.

El incremento de la confianza en las instituciones, también observado en los países de la OCDE, lleva implícitos muchos elementos de un efecto de unión en torno a la bandera, es decir, de unidad nacional ante una amenaza común. Este efecto se caracteriza por un incremento repentino del respaldo público a los gobiernos nacionales o los líderes políticos durante períodos de crisis o guerra (OCDE, 2021[81]).

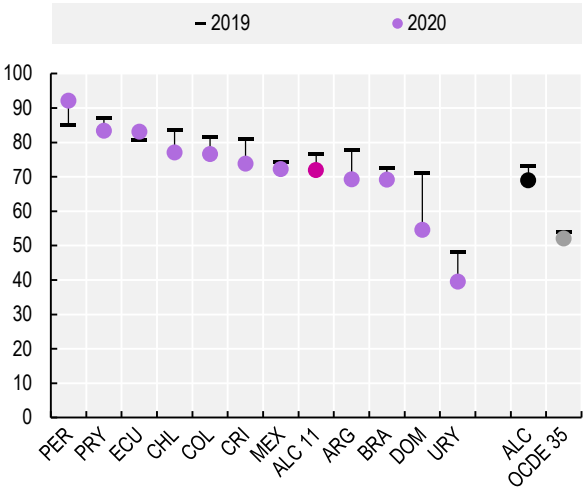
El ligero incremento medio de la confianza en la política local en el grupo de países analizados (3 puntos porcentuales) oculta la divergencia de patrones (Gráfico 4.27, panel D). La confianza en la policía aumentó sobre todo en Costa Rica (en 13 puntos porcentuales), Uruguay (en 9 puntos) y Chile (en 7,3 puntos), pero se redujo en Paraguay (en 7 puntos).

Gráfico 4.27. En 2020, la confianza en el gobierno nacional y la percepción de la corrupción mostraban una fuerte correlación

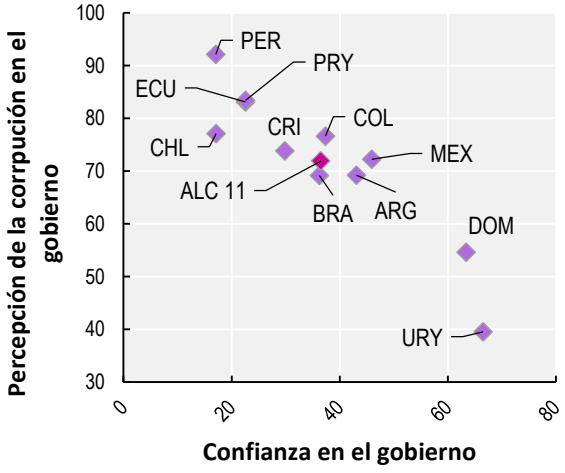
Panel A: Proporción de la población que declara confiar en el gobierno nacional, porcentaje



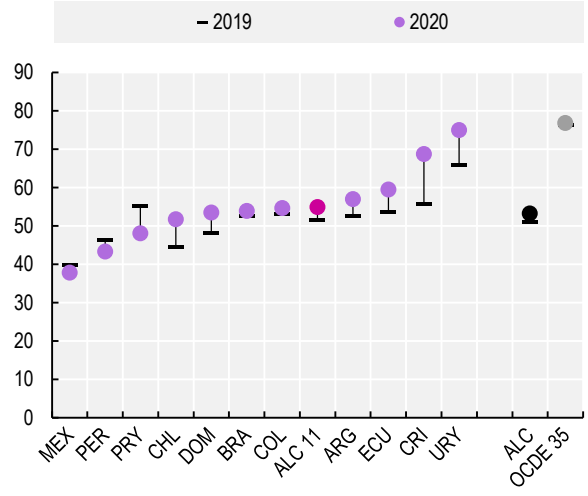
Panel B: Proporción de la población que considera que la corrupción es generalizada en el gobierno de la nación, porcentaje



Panel C: Proporción de la población que declara confiar en el gobierno nacional, porcentaje (eje de abscisas) y proporción de la población que considera que la corrupción es generalizada en el gobierno de la nación, porcentaje (eje de ordenadas)



Panel D: Proporción de la población que declara confiar en la policía local, porcentaje



Nota: La confianza en el gobierno se basa en la pregunta de la encuesta: “En este país, ¿tiene usted confianza en cada uno de los siguientes puntos o no? ¿En cuanto al gobierno nacional?”. Los datos representados ilustran el porcentaje de encuestados que respondieron “sí” (las otras dos posibles respuestas eran “no” y “no sabe”). La percepción de la corrupción en el gobierno se basa en la pregunta: “¿Es generalizada la corrupción en el gobierno en este país o no?” Los datos representados ilustran el porcentaje de encuestados que respondieron “sí” (las otras dos posibles respuestas eran “no” y “no sabe”). La confianza en la policía se basa en la pregunta de la encuesta: “En la ciudad o zona en la que usted vive, ¿tiene usted confianza en cada uno de los siguientes puntos o no?” Los datos representados ilustran el porcentaje de encuestados que respondieron “sí” (las otras dos posibles respuestas eran “no” y “no sabe”). El promedio regional de ALC comprende 21 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. OCDE 35 excluye a Luxemburgo y la República Checa, por datos incompletos. En todos los países del grupo analizado, la forma de recolectar los datos sufrió modificaciones entre 2019 y 2020 (dejó de ser cara a cara para basarse en entrevistas telefónicas). Por ese motivo, algunos países podrían haber modificado la muestra de encuestados de forma que no pueda ajustarse aplicando las técnicas de ponderación (Srinivasan and Clifton, 2020[82]), (Helliwell et al., 2021[83]). Existen más de 500 observaciones sobre cada país. Las fechas de recolección de datos en 2020 son las siguientes: 7 sep. - 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. - 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. - 16 nov. de 2020 en Chile; 21 ago. - 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 - 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 26 ago. - 23 oct. de 2020 en Ecuador; 8 sep. - 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. - 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 - 6 ene. de 2021 en Perú; 24 sep. - 23 oct. de 2020 en la República Dominicana, y 24 sep. - 30 nov. de 2020 en Uruguay.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

StatLink https://stat.link/rag2yj

Aspectos para el desarrollo estadístico

En los países de América Latina solo existen datos armonizados sobre el voluntariado formal realizado a través de organizaciones. Esto significa que el voluntariado informal se ha omitido por completo. Tampoco está disponible la información sobre la cantidad de tiempo dedicado a actividades de voluntariado, o su frecuencia. Sí hay datos disponibles sobre la confianza interpersonal, pero la formulación de la pregunta no es acorde con las recomendaciones incluidas en las Directrices de la OCDE sobre la medición de la confianza (OECD Guidelines on Measuring Trust) (OCDE, 2017[71]) De acuerdo con las Directrices, el conjunto de datos ideal para medir la confianza institucional debe tener en cuenta no solo la confianza en el sistema político (es decir, el gobierno, los partidos políticos, el parlamento) y el sistema judicial (es decir, la policía, las fuerzas armadas, los tribunales), sino también la confianza en las instituciones no políticas (es decir, la administración pública). Actualmente, no se dispone de información sobre esta dimensión particular de la confianza institucional en los países de América Latina y el Caribe.

La recolección de datos sobre corrupción se lleva a cabo mediante evaluaciones de expertos o encuestas de hogares centradas en la percepción de la corrupción o experiencias de soborno. Las encuestas de hogares están orientadas a la corrupción a pequeña escala y dejan de lado otros aspectos menos visibles, como el fenómeno de las “puertas giratorias” y las presiones indebidas, mientras que las evaluaciones de expertos carecen de transparencia y no tienen en cuenta el punto de vista del ciudadano (Exton and Fleischer, a continuación[54]). El grupo de estudio de Praia de las Naciones Unidas recomienda elaborar varias medidas de la corrupción para entender sus diferentes facetas (Praia Group on Governance Statistics, 2020[73]).

El incremento de la frecuencia de recolección de datos sobre normas, valores y expectativas fenómeno bastante reciente en la región. La cobertura de países sigue siendo limitada (a 17 países, en la mayoría de los indicadores) y, en algunos casos, es urgente mejorar la oportunidad (por ejemplo, cuando los últimos datos disponibles son de 4 o 5 años atrás).

Aunque la medición de la no discriminación ha sido reconocida como principio y norma fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos, su desarrollo sigue planteando dificultades, como que la discriminación solo es directamente observable en contadas ocasiones. Esto ha hecho que para su medición se empleen metodologías diversas. Una de ellas es la autoevaluación de las propias experiencias de discriminación capturadas a través de encuestas, que tienen la ventaja de que aproximan la prevalencia de la discriminación en la sociedad con niveles de validez aceptables, y permiten identificar los grupos que más se ven afectados por esta (CEPAL, 2021[84]). Las Naciones Unidas supervisan los

progresos en el logro de la meta 10.3 de los ODS a partir de una medida de la proporción de adultos que declaran haberse sentido personalmente discriminados o acosados en los últimos 12 meses.

Actualmente, la mayoría de las oficinas nacionales de estadística (ONE) de América Latina y el Caribe no recolectan la información necesaria para elaborar indicadores basados en las experiencias de discriminación declaradas por los propios encuestados. En una serie de seminarios virtuales organizados por la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea[29] en septiembre de 2020, se compararon experiencias acerca de las metodologías más adecuadas para medir la discriminación a través de encuestas, haciendo hincapié en la importancia de utilizar módulos breves en las encuestas de hogares de propósitos múltiples llevadas a cabo por las ONE de la región.

Las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las experiencias recabadas en estudios académicos, estudios de la opinión pública y encuestas realizadas por algunos países de la región son elementos esenciales para avanzar en la medición de la discriminación. La discriminación no se manifiesta de la misma manera en todos los contextos, por lo que es inevitable que existan diferencias de medición, aunque ello no debería impedir la creación de un indicador construido sobre la base de preguntas comparables. La escasez de países que recopilan esta clase de información indica que existen oportunidades para generar un diálogo que permita alcanzar el consenso sobre una medida regional armonizada (CEPAL, 2021[84]).

Por último, también es fundamental que las ONE avancen en la producción de datos que permitan elaborar medidas de la discriminación desagregadas en función de un atributo determinado, para identificar de forma adecuada los grupos especialmente vulnerables a la discriminación, como los pueblos indígenas y los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los inmigrantes y otras minorías, así como los contextos en los que se produce tal discriminación. Pese a que cada vez hay más información sobre discriminación, todavía queda mucho por mejorar (CEPAL, 2021[84]).

Referencias

Ahmad, N. (2004), "Towards More Harmonised Estimates of Investment in Software", *OECD Economic Studies*, https://dx.doi.org/10.1787/eco_studies-v2003-art12-en. [41]

Álvarez Malvido, M. et al. (eds.) (2021), *Informe Planeta Protegido 2020: Latinoamérica y el Caribe*, https://redparques.com/modules/ecom/documentos/publicacion/INFORME-2020-final.pdf. [27]

Arellano, A. et al. (2018), *Policy priorities to promote financial development in the context of the Middle-Income Trap: The cases of Argentina, Colombia, Mexico and Peru*, BBVA Bank, Economic Research Department, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/12/Financial_development_BBVA_OECD.pdf. [48]

Azad, A. and A. Zamani (2014), "Lean body mass can predict lung function in underweight and normal weight sedentary female young adults", *Tanaffos*, Vol. 13/2, pp. 20-26, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84924905441&origin=inward&txGid=4097733a546e0ac46026698f0fb29780. [68]

Bakaloudi, D. et al. (2021), "Impact of the first COVID-19 lockdown on body weight: A combined systematic review and a meta-analysis", *Clinical Nutrition*, http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2021.04.015. [87]

Banco Mundial (2021), *Global Economic Prospects*, https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. [49]

Banco Mundial (2020), *Global Economic Prospects, June 2020*, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1553-9. [34]

Banco Mundial (2018), *Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn, but for How Long?, January 2018*, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1163-0. [35]

Banco Mundial (2015), *Global Economic Prospects, January 2015: Having Fiscal Space and Using It*, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0444-1. [36]

Bank for International Settlements (2019), *The capital buffers in Basel III - Executive Summary*, Financial Stability Institute, https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/b3_capital.htm. [47]

Bárcena, A. et al. (2020), *The climate emergency in Latin America and the Caribbean: the path ahead – resignation or action?*, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45678/4/S1900710_en.pdf. [13]

Beylis, G. et al. (2020), *Going Viral: COVID-19 and the Accelerated Transformation of Jobs in Latin America and the Caribbean*, World Bank Latin American and Caribbean Studies, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1448-8. [52]

Caussy, C. et al. (2020), *Obesity is Associated with Severe Forms of COVID-19*, Blackwell Publishing Inc., http://dx.doi.org/10.1002/oby.22842. [86]

CEPAL (2021), *Building forward better: Action to strengthen the 2030 Agenda for Sustainable Development*, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46696/S2100124_en.pdf. [16]

CEPAL (2021), *COVID-19 Special Report No. 10: Financing for development in the era of COVID-19 and beyond: priorities of Latin America and the Caribbean in relation to financing for development policy agenda*, United Nations, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46711/S2100063_en.pdf. [50]

CEPAL (2021), *Measurement of discrimination based on self-report. State of affairs and challenges*, https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/la-medicion-de-la-discriminacion-en-base-al-auto-reporte-estado-de-situacion-y-desafios. [84]

CEPAL (2021), *Social Panorama of Latin America 2020*, https://www.cepal.org/en/publications/46688-social-panorama-latin-america-2020?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210309_social_panorama_2020. [78]

CEPAL (2020), *The part played by natural resources in addressing the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean | Insights | Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, https://www.cepal.org/en/insights/part-played-natural-resources-addressing-covid-19-pandemic-latin-america-and-caribbean?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200914_natural_resources_bulletin_1. [22]

CEPAL (2020), *Youth | Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, https://www.cepal.org/en/topics/youth (accessed on 16 September 2020). [55]

CEPAL/ACNUDH (2019), *Climate change and human rights: Contributions by and for Latin America and the Caribbean*, United Nations publication, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44971/1/S1900999_en.pdf. [12]

CEPE (2013), *Framework and suggested indicators to measure sustainable development Prepared by the Joint UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development*, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. [31]

Consejo de Estabilidad Financiera; Fondo Monetario Internacional (2019), *G20 Data Gaps Initiative (DGI-2): The Fourth Progress Report — Countdown to 2021*, Consejo de Estabilidad Financiera, Basel, https://www.fsb.org/2019/10/g20-data-gaps-initiative-dgi-2-the-fourth-progress-report-countdown-to-2021/. [53]

Ellis, E. et al. (2017), "Private property and Mennonites are major drivers of forest cover loss in central Yucatan Peninsula, Mexico", *Land Use Policy*, Vol. 69, pp. 474-484, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.048. [21]

Escobar, H. (2020), "Deforestation in the Brazilian Amazon is still rising sharply", *Science*, Vol. 369/6504, p. 613, http://dx.doi.org/10.1126/science.369.6504.613. [25]

Eurostat/OCDE (2020), *Report on Intellectual Property Products*, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/CSSP/WPNA(2020)1&docLanguage=En. [43]

Exton, C. and L. Fleischer (a continuación), "The Future of the OECD Well-being Dashboard", *OECD Statistics Working Papers* OECD Publishing, Paris. [54]

Fay, M. et al. (2017), *Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean Spending Better to Achieve More*, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26390/114110-REVISED-PUBLIC-RethinkingInfrastructureFull.pdf. [39]

FMI (2003), *PART III - Use of External Debt Statistics*, Fondo Monetario Internacional, https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/file4.pdf. [44]

Fondo Monetario Internacional (2020), *Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19*, https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020. [46]

Foro Económico Mundial (2020), *Latin America and Caribbean Travel & Tourism Competitiveness Landscape Report: Assessing Regional Opportunities and Challenges in the Context of COVID-19*, http://www3.weforum.org/docs/WEF_LAC_Tourism_Compet_Report_2020.pdf. [40]

Friedlingstein, P. et al. (2020), "Global Carbon Budget 2020", *Earth System Science Data*, Vol. 12/4, pp. 3269-3340, http://dx.doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020. [19]

Gaiha, S., J. Cheng and B. Halpern-Felsher (2020), "Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and COVID-19", *Journal of Adolescent Health*, Vol. 67/4, pp. 519-523, http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.002. [67]

Gottdenker, N. et al. (2014), "Anthropogenic Land Use Change and Infectious Diseases: A Review of the Evidence", http://dx.doi.org/10.1007/s10393-014-0941-z. [28]

Haščič, I. and A. Mackie (2018), "Land Cover Change and Conversions: Methodology and Results for OECD and G20 Countries", *OECD Green Growth Papers*, No. 2018/04, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/72a9e331-en. [9]

Helliwell, J. et al. (2021), *World Happiness, Trust and Deaths under COVID-19*, Sustainable Development Solutions Network, https://worldhappiness.report/ed/2021/. [83]

IEA (2020), *Global Energy Review 2020*, https://iea.blob.core.windows.net/assets/7e802f6a-0b30-4714-abb1-46f21a7a9530/Global_Energy_Review_2020.pdf. [17]

IPBES (2020), "Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services", http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4147317. [30]

ITF (2013), *Understanding the value of transport infrastructure - Guidelines for macro-level measurement of spending and assets*, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/13value.pdf. [38]

Knack, S. and P. Keefer (1997), "Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation", pp. 1251-1288, https://www.jstor.org/stable/2951271. [85]

López-Feldman, A. et al. (2020), "Environmental Impacts and Policy Responses to Covid-19: A View from Latin America JEL Classification H12 · Q22 · Q23 · Q53 · Q56", *Environmental and Resource Economics*, http://dx.doi.org/10.1007/s10640-020-00460-x. [23]

Naciones Unidas (2020), *The Sustainable Development Goals Report*, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf. [7]

Nieto-Parra, S., R. Orozco and S. Mora (2021), *Fiscal policy to drive the recovery in Latin America: the "when" and "how" are key*, http://vox.lacea.org/?q=blog/fiscal_policy_latam. [51]

OCDE (2021), "Biodiversity, natural capital and the economy: A policy guide for finance, economic and environment ministers"*, OECD Environment Policy Papers*, No. 26, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/1a1ae114-en. [8]

OCDE (2021), *COVID-19 and well-being evidence scan (a continuación)*, OECD Publishing, Paris. [81]

OCDE (2020), "Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient recovery"*, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d98b5a09-en. [29]

OCDE (2020), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9870c393-en. [1]

OCDE (2020), *Informality & Social Inclusion in the Times of COVID-19 - Conclusions and Policy Considerations of the OECD-LAC Virtual social inclusion ministerial summit*, OECD, Paris, https://www.oecd.org/latin-america/events/lac-ministerial-on-social-inclusion/LAC-Ministerial-2020-Conclusions-and-Policy-Considerations.pdf. [63]

OCDE (2020), *OECD Public Integrity Handbook*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en. [74]

OCDE (2019), *Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/2f4c8c9a-en. [14]

OCDE (2019), *Investing in Youth: Peru*, Investing in Youth, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264305823-en. [58]

OCDE (2019), *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/f3d8ea10-en. [76]

OCDE (2017), *OECD Guidelines on Measuring Trust*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264278219-en. [71]

OCDE (2015), *How's Life? 2015: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en. [3]

OCDE (2014), *Investing in Youth: Brazil*, Investing in Youth, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264208988-en. [57]

OCDE (2010), *Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products*, OECD, Paris, https://www.oecd.org/sdd/na/44312350.pdf. [42]

OCDE (a continuación), *Latin American Economic Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris. [79]

OCDE/Banco Mundial (2020), *Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6089164f-en. [59]

OCDE et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [33]

OCDE et al. (2019), *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/g2g9ff18-en. [32]

OCDE et al. (2021), *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2021*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/96ce5287-en-es. [45]

OIT (2015), "What does NEETs mean and why is the concept so easily misinterpreted?", OIT, Youth Employment Programme, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf. [56]

OMS (2018), *Alcohol*, Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol. [61]

OMS (2017), *The double burden of malnutrition. Policy brief.*, Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/nutrition/publications/doubleburdenmalnutrition-policybrief/en/. [60]

ONU (2020), *The Impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean*, Naciones Unidas, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac.pdf. [80]

Open Democracy (2020), *As the pandemic continues to accelerate, so does the deforestation of the Amazon*, https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/se-acelera-la-pandemia-y-se-acelera-la-deforestacion-del-amazonas-en/. [24]

PNUD América Latina y el Caribe (2020), *Lessons from COVID-19 for a Sustainability Agenda in Latin America and the Caribbean*, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/lecciones-del-covid-19-para-una-agenda-de-sostenibilidad-en-amer.html. [18]

Potapov, P. et al. (2017), "The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013", *Science Advances*, Vol. 3/1, p. e1600821, http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600821. [10]

Praia Group on Governance Statistics (2020), *Handbook on governance statistics*, https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/handbook_governance_statistics.pdf. [73]

Rajão, R. et al. (2020), "The rotten apples of Brazil's agribusiness", *Science*, Vol. 369/6501, pp. 246-248, http://dx.doi.org/10.1126/science.aba6646. [26]

Rancourt, R., K. Schellong and A. Plagemann (2020), "COVID-19 and Obesity: One pandemic meets another.", *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2020.08.044. [64]

Scrivens, K. and C. Smith (2013), "Four Interpretations of Social Capital: An Agenda for Measurement", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2013/6, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jzbcx010wmt-en. [70]

Simonnet, A. et al. (2020), "High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation", *Obesity*, Vol. 28/7, pp. 1195-1199, http://dx.doi.org/10.1002/oby.22831. [65]

Srinivasan, R. and J. Clifton (2020), *Gallup Keeps Listening to the World Amid the Pandemic*, Gallup Worl Poll, https://news.gallup.com/opinion/gallup/316016/gallup-keeps-listening-world-amid-pandemic.aspx. [82]

UICN (La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (2020), *Conserving Nature in a time of crisis: Protected Areas and COVID-19*, https://www.iucn.org/news/world-commission-protected-areas/202005/conserving-nature-a-time-crisis-protected-areas-and-covid-19. [11]

UNCTAD (2018), *Multi-year Expert Meeting on Trade, Services and Development - Water and Sanitation, Energy and Food-related Logistics Services, Country paper: Paraguay*, Naciones Unidas UNCTAD, https://unctad.org/system/files/non-official-document/c1mem2018_Country%20paper_Paraguay_EN.pdf. [15]

UNECE et al. (2005), *Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003*, https://unstats.un.org/unsd/environment/seea2003.pdf. [37]

UNEP (2006), "Convention on Biological Diversity" Article 2, https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02. [6]

UNEP-WCMC (2016), *The State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean: A mid-term review of progress towards the Aichi Biodiversity Targets*, UNEP-WCMC, Cambridge, UK, https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-en.pdf. [4]

UNFCCC (2021), *Closing Press Conference of Latin America and Caribbean Climate Week - YouTube*, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, https://www.youtube.com/watch?v=C0jLOOkfldE. [89]

UNFCCC (2021), *Latin America and the Caribbean Climate Week 2021*, https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/latin-america-and-caribbean-climate-week-2021. [88]

UNFCCC (2007), *Climate change: Impacts, vulnerabilities and adaptation in developing countries*, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, https://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf. [5]

UNODC (2018), *MANUAL ON CORRUPTION SURVEYS Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf. [75]

UNSC (2014), *System of Environmental-Economic Accounting 2012 Central Framework*, https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf. [2]

Vardavas, C. and K. Nikitara (2020), *COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence*, International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases, http://dx.doi.org/10.18332/tid/119324. [69]

Walker, W. et al. (2020), "The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 117/6, pp. 3015-3025, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1913321117. [20]

World Bank (2021), *Acting Now to Protect the Human Capital of Our Children : The Costs of and Response to COVID-19 Pandemic's Impact on the Education Sector in Latin America and the Caribbean*, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276. [62]

World Values Survey (2021), *WVS Database*, https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp. [72]

Zechmeister, E. (ed.) (2019), *Pulse of Democracy*, https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/2018-19_AmericasBarometer_Regional_Report_10.13.19.pdf. [77]

Zhang, X. et al. (2021), "A systematic review and meta-analysis of obesity and COVID-19 outcomes", *Scientific Reports*, Vol. 11/1, http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-86694-1. [66]

Notas

[1] Pese a que el análisis de estos cuatro capitales se efectúa principalmente a nivel nacional, cabe señalar que, por definición, son sistémicos y sus repercusiones van más allá de las fronteras de cada país (p. ej., biodiversidad, cambio climático). Los acuerdos multilaterales y las normas internacionales también tienen un papel decisivo en la conservación de estos cuatro tipos de capital, interconectados a nivel mundial.

[2] Estos resultados son acordes con el Indicador 15.3.1 de los ODS (Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total). Los indicadores de la cubierta terrestre natural y los cambios en el uso de la tierra son de uso preferente debido a la elevada comparabilidad entre países, la transparencia de su diseño y que incorporan series temporales más largas y actualizadas.

[3] A lo largo del informe, la expresión "países analizados" se refiere a los 11 países siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay.

[4] La forestación es el acto de plantar árboles en una zona terrestre con el objetivo de crear un bosque. La reforestación es el acto de plantar árboles en una zona terrestre que ha quedado vacía o se ha deteriorado.

[5] Un área protegida es "un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados" (definición de la UICN, 2008).

[6] Los indicadores de áreas terrestres y marinas protegidas no resuelven algunos importantes interrogantes de relevancia para las políticas, como hasta qué punto estas áreas están protegiendo la biodiversidad nacional o mundial (puesto que las áreas protegidas no necesariamente se establecen de forma óptima con arreglo a los objetivos de conservación de la diversidad biológica) o cuán efectiva es su gestión y aplicación.

[7] Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica son un conjunto de 20 objetivos mundiales definidos con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 10) celebrada en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, del 18 al 29 de octubre de 2010. La Conferencia de las Partes (CP) es el órgano decisorio responsable de supervisar y examinar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Un total de 197 naciones y territorios, denominados Partes, se han adherido a la Convención.

[8] Estos indicadores ofrecen información sobre cobertura, pero no sobre eficacia, equitabilidad, representatividad y conectividad, aspectos a los cuales también se refiere la Meta.

[9] https://unfccc.int/kyoto_protocol

[10] Los costos irrecuperables son inversiones realizadas en el pasado que ya no se tienen en cuenta a efectos contables, pero que eran gastos esenciales para la rentabilidad actual.

[11] https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/

[12] La Meta de Aichi 11 para la Diversidad Biológica estipula lo siguiente: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.”

[13] Por ejemplo, este reconocimiento se produjo durante la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2021 (LACCW21), organizada en formato virtual por el gobierno de la República Dominicana en mayo de 2021 (UNFCCC, 2021[89]). Este evento, coorganizado por ONU Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo Banco Mundial (BM) y sus socios comerciales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tenía por objetivo acelerar la respuesta de la región al cambio climático y aprovechar el dinamismo regional en el período previo a la Conferencia sobre Cambio Climático CP26 de noviembre de 2021 en Glasgow (UNFCCC, 2021[88]).

[14] En promedio, a lo largo de las dos últimas décadas, el 76% del crecimiento del PIB se ha atribuido al empleo (y no a la productividad); este porcentaje es del 54% en Europa, del 36% en Estados Unidos y del 4% en China (OCDE et al., 2020[33]).

[15] Basado en la suma de las necesidades de inversión en aeropuertos, puertos, ferrocarril y carreteras en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, según cálculos de la edición de febrero de 2020 de las Perspectivas de la infraestructura mundial del Centro Global de Infraestructura (Foro Económico Mundial, 2020[40]).

[16] La proporción estimada de PIB (en porcentaje) destinado a todas las infraestructuras mediante inversión tanto pública como privada es del 7,7% en Asia Oriental y el Pacífico, del 4,0% en Asia Central, del 2,8% en América Latina y el Caribe, del 6,9% en Oriente Medio y África del Norte, del 5,0% en Asia Meridional, y del 1,9% en África Subsahariana (Fay et al., 2017[39]).

[17] Las estimaciones de los recursos asignados a I+D facilitadas por el Banco Mundial se ven afectadas por las características del país (periodicidad y cobertura de las encuestas de I+D nacionales a sectores institucionales e industrias, uso de diferentes metodologías de muestreo y estimación). Pueden no coincidir con los datos de las cuentas nacionales, en parte debido al tratamiento diferente que se da a la I+D en *software* en los totales.

[18] Estos niveles están muy por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe (0,71%). La última medida está ponderada por la población y, como tal, asigna mayor peso a Brasil, el país con mejor desempeño de la región.

[19] Esta medida es uno de los indicadores (17.4.1) elaborados por el Grupo Interinstitucional y de Expertos para vigilar el desempeño de los países en relación con la meta 17.4 de los ODS de las Naciones Unidas: "Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo".

[20] Las seis economías de mercados emergentes y en desarrollo identificadas por el Banco Mundial son las siguientes: Asia Oriental y el Pacífico (que incluye a China, Indonesia y Tailandia), Europa y Asia Central (que incluye a Polonia, la Federación de Rusia y Turquía), América Latina y el Caribe (que incluye a Argentina, Brasil y México), Oriente Medio y África del Norte (que incluye a Egipto, Irán y Arabia Saudita), Asia Meridional (que incluye a Bangladesh, India y Pakistán) y África Subsahariana (que incluye a Angola, Nigeria y Sudáfrica).

[21] Como se explica en CEPAL (2020): "Para esa población se requiere un mayor nivel educativo, una formación pertinente y mejor preparación para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Junto a las persistentes brechas estructurales, hay desigualdades en el desarrollo de capacidades y en el mundo laboral. Esas inequidades, que afectan especialmente a los y las jóvenes, requieren de respuesta si se desea avanzar en el camino de la sostenibilidad con igualdad."

[22] La OMS define el sobrepeso y la obesidad en adultos a partir del índice de masa corporal (IMC). El IMC es un número simple que evalúa la relación entre peso y altura de una persona, y se calcula como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Se considera que los adultos con un IMC de entre 25 y 30 tienen sobrepeso. Los adultos con un IMC de 30 o superior se consideran obesos.

[23] La mala alimentación se define a partir de un conjunto de 14 factores de riesgo que incluyen el bajo consumo de fruta, frutos secos y semillas; una ingesta elevada de sodio; bajo consumo de verdura; elevado consumo de carnes procesadas, y otros elementos. (OCDE/Banco Mundial, 2020[59])

[24] El examen sistemático y el metanálisis de las bases de datos PubMed®, Scopus®, Web of Science® y EMBASE® y 36 estudios observacionales (35 transversales y 1 de cohorte) para evaluar los efectos del primer período de confinamiento (marzo-mayo de 2020) sobre el peso corporal y el índice de masa corporal (IMC) tanto de adultos como de adolescentes (>16 años) reveló que una parte significativa de las personas (11,1%-72,4%) ganaron peso corporal, si bien entre un 7,2% y un 51,4% declararon haber perdido peso (Bakaloudi et al., 2021[87]). Durante el período posterior al confinamiento y en comparación con el período previo a este, se observó un peso corporal significativamente superior con una diferencia entre grupos de la media ponderada. Contrariamente a la tendencia general, un estudio de adultos mayores (>60 años de edad) reveló una pérdida de peso corporal significativa, lo cual revela la existencia de un mayor riesgo de pérdida de peso y posible malnutrición, provocadas por el confinamiento, entre la población anciana.

[25] Pese a que seguramente los resultados no son generalizables a otros centros de Francia, ni a otros países, con arreglo a los criterios aplicados a la indicación de VMI en otros centros, otro estudio del Hospital Universitario de Lyon, en Francia, tiende a confirmar la observación realizada en el Centro Hospitalario Universitario de Lille, según la cual la obesidad severa aumenta la necesidad de recurrir a VMI en comparación, respecto de los pacientes delgados (Caussy et al., 2020[86]).

[26] Por ejemplo, (Knack and Keefer, 1997[85]) habla de la alta correlación que existe entre los niveles de confianza de la Encuesta Mundial de Valores y que la gente devuelva las carteras que encuentra por la calle, en el marco de un experimento para medir la credibilidad de las personas.

[27] La correlación con la percepción de la corrupción en el gobierno por parte de los ciudadanos no es estadísticamente significativa.

[28] En Chile, si bien las protestas comenzaron en octubre de 2019 por un aumento en el precio del transporte público, desde 2006 ya se observaban varias movilizaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. En Ecuador, las movilizaciones se desencadenaron a raíz de la molestia causada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, una de las medidas gubernamentales para reducir el déficit fiscal, adoptadas para acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y solventar la deuda externa del país. En un contexto en el que ya existía una insatisfacción ciudadana con las políticas de austeridad, las protestas se enmarcaron en un malestar originado a partir de la apreciación de que el gobierno estaba retrocediendo en la entrega de garantías sociales y económicas. Tras el acuerdo político de dejar sin efecto la eliminación al subsidio a la gasolina y establecer mecanismos para localizar los recursos hacia quienes más los necesitan, las protestas disminuyeron. Sin embargo, estas se reanudaron por la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, que contenía una serie de nuevas políticas de austeridad, y tras el anuncio del proceso de cierre de ocho empresas públicas (CEPAL, 2021[78]).

[29] https://www.cepal.org/es/eventos/webinar-la-medicion-la-discriminacion-cuestiones-metodologicas-programa-estadistico-cara-al

5 Desigualdades en el bienestar entre grupos sociales y territorios

Resulta imposible evaluar por completo la situación del bienestar de una sociedad sin tener en cuenta las desigualdades. En capítulos anteriores hemos incluido varios indicadores de desigualdad “vertical” (como el coeficiente de Gini) y de carencias (como las tasas de pobreza), pero en este nos centraremos en las desigualdades “horizontales”, o en las desigualdades entre los distintos grupos de población, por género, edad, ámbito territorial (urbano frente a rural), origen étnico y raza, así como logro educativo. En conjunto, si bien los países analizados han avanzado en la reducción de las desigualdades en varios ámbitos del bienestar, como la educación y el empleo, todavía persisten brechas importantes. Es probable que las consecuencias de la pandemia agraven las desventajas de los grupos vulnerables, y amplíen las desigualdades en los resultados de bienestar. En general, las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas que viven en zonas rurales, las personas indígenas y afrodescendientes, y aquellas con menor educación suelen padecer unas condiciones materiales peores, aunque el panorama es más dispar cuando se analizan los indicadores de calidad de vida y capital humano y social.

Introducción

Resulta imposible evaluar por completo la situación de bienestar de un país sin tener en cuenta las desigualdades. Esto se aplica en especial a América Latina y el Caribe (ALC), ya que, durante siglos, la desigualdad ha sido una característica histórica y estructural de la sociedad de esta región, y ha persistido incluso en períodos de notable crecimiento económico y desarrollo social (Sánchez-Ancochea, 2021[1]). La esencia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es combatir las desigualdades de oportunidades y resultados, y su objetivo de "no dejar a nadie atrás" reconoce que el desarrollo al servicio únicamente de unos pocos privilegiados no puede ser sostenible. Asimismo, la Agenda 2030 reconoce que las desigualdades son multidimensionales y están interrelacionadas, y van mucho más allá de la desigualdad en los ingresos. Además es importante reconocer que hacer frente a las desigualdades consiste en atender la situación no solo de las personas que se encuentran en el segmento más bajo en la distribución, sino también de aquellas de las clases medias vulnerables (OCDE, 2019[2]). Esto cobra especial importancia en el contexto latinoamericano, en el que el aumento de la insatisfacción con las desigualdades y el nivel de vida fue una de las principales causas que impulsó la ola de protestas sociales de finales de 2019 (CEPAL, 2021[3]; Ferreira and Schoch, 2020[4]; Langman, 2019[5]).

Las desigualdades en materia de bienestar pueden conceptualizarse y medirse de distintas formas. El marco de bienestar de la OCDE, por ejemplo, analiza las desigualdades desde tres perspectivas: las desigualdades verticales, las desigualdades horizontales y las carencias (OCDE, 2017[6]). Las medidas de desigualdades "verticales" abordan la forma en la que los resultados de desigualdad se distribuyen por toda la sociedad —por ejemplo, analizando la magnitud de la diferencia entre las personas que se encuentran en el segmento más bajo y las que están en el más alto con relación a todas las dimensiones de la vida de las personas—. En contraste, las medidas de desigualdades "horizontales" se centran en la diferencia entre los grupos de población definidos por características concretas (como hombres y mujeres o jóvenes y mayores). Las medidas de "carencias" se concentran en las personas que viven por debajo de determinado nivel de bienestar (como aquellas que habitan viviendas hacinadas, o cuyos ingresos son insuficientes para atender las necesidades básicas). En capítulos anteriores ya se han abordado varios indicadores tanto de desigualdad vertical (p. ej., el coeficiente de Gini de desigualdad en los ingresos) como de carencias (p. ej., la pobreza y el hacinamiento). De hecho, toda descripción de alto nivel de los resultados de bienestar que se concentre únicamente en el promedio de resultados será incompleta, ya que la desigualdad y las carencias forman parte del panorama completo. La integración de estas medidas de las desigualdades verticales y las carencias en capítulos anteriores pone de relieve que no se trata de una cuestión secundaria: no solo afectan en cierto modo a las personas que se ven excluidas o con carencias, sino que socaban el desarrollo general dentro de una sociedad.

El presente capítulo se centra en el tipo de desigualdad que queda por analizar, es decir, la desigualdad horizontal entre los grupos sociales y territorios. La importancia de estas desigualdades horizontales es a la vez intrínseca e instrumental, ya que las características comunes de varios grupos puede servir de firme base para su identidad y constituir una fuente de movilización política.[1] Comprender las diferencias de bienestar entre los distintos grupos resulta fundamental para diseñar políticas públicas eficaces que no dejen a nadie atrás y que mejoren el bienestar general de la población de un país. Tener una idea más clara de las desventajas que afectan a determinados grupos es especialmente importante en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha agravado las vulnerabilidades que ya padecían varios grupos de población.

Las desigualdades horizontales y las carencias arrojaron luz sobre el problema de la desigualdad de oportunidades, que en gran medida se determina al nacer, en función de aspectos que son una característica inherente de la vida de las personas. La desigualdad de oportunidades en todas las dimensiones de la vida puede entenderse como la proporción de desigualdades en los resultados debido a circunstancias ajenas al control de la persona. Si bien no es posible observar todas estas circunstancias, sí es posible hacerlo con respecto a algunas de ellas, como el género, el origen étnico y la raza, la edad

o el lugar de residencia. François Bourguignon (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[7]) plantea la interesante analogía de una maratón en la que los corredores no parten del mismo punto; en este contexto, la desigualdad *ex post* (es decir, la desigualdad de resultados) sería en esencia la distribución de los tiempos de llegada, mientras que la desigualdad *ex ante* se referiría a la distancia que deben recorrer los competidores hasta llegar a la línea de meta. Los dos conceptos de desigualdades *ex post* (es decir, desigualdades verticales y carencias) y desigualdades *ex ante* son distintos, aunque están muy interrelacionados: siendo iguales las restantes condiciones, un aumento de la desigualdad *ex ante* incrementará la desigualdad *ex post*. Del mismo modo, la desigualdad de resultados en un momento o en una generación puede afectar la desigualdad de oportunidades en el futuro o en la siguiente generación (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[7]). Comprender las diferencias de bienestar entre los distintos grupos resulta fundamental para diseñar políticas públicas eficaces que no dejen a nadie atrás y que mejoren el bienestar general de la población de un país. En el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha agravado las desigualdades tanto de resultados como de oportunidades, así como las observaciones negativas entre ambos tipos de desigualdad, es especialmente importante obtener una idea más clara de las desventajas que experimentan determinados grupos.

En este capítulo se analiza la desigualdad entre grupos desde las perspectivas de género, origen étnico y raza, edad (centrándose en los grupos de edad especialmente vulnerables de los niños, los jóvenes y las personas mayores) y territorio (concentrándose en las desigualdades entre zonas urbanas y rurales) con arreglo a la matriz de la desigualdad social de la CEPAL (CEPAL, 2016[8]). Además, analiza las desigualdades en función del nivel educativo, un aspecto importante del nivel socioeconómico. Este no es un análisis exhaustivo de las desigualdades horizontales, ya que existen muchas otras características personales y sociales que pueden agravar la desventaja de determinadas personas o grupos, como la condición de migrante, la discapacidad o la orientación sexual. Sin embargo, los datos necesarios para analizar los resultados de estas otras dimensiones simplemente no están disponibles,[2] lo que implica que mejorar la recopilación de datos de forma que permita evaluarlos sigue siendo prioritario para la agenda futura en materia de estadística (sobre todo en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas). A fin de identificar a las personas más vulnerables, resulta especialmente importante mejorar la disponibilidad de datos que pueden demostrar la confluencia de múltiples fuentes de desventajas (p. ej., género, origen étnico o raza y nivel socioeconómico). En este capítulo se ponen de relieve algunos ejemplos de confluencia de varias desigualdades, aunque no ha sido posible hacerlo sistemáticamente en todos los casos.

Desigualdades entre géneros

En las últimas décadas se han hecho importantes avances en la mejora de los resultados de bienestar de las mujeres en América Latina, entre los que se incluyen la reducción de la mortalidad materna (como se muestra en el Capítulo 3), el aumento de la participación de la fuerza de trabajo y la representación política (a las que se refiere esta sección). No obstante, en todos los países de la región siguen existiendo desigualdades persistentes entre los géneros, que contienen el desarrollo económico y social adicional. En la región de ALC se han identificado cuatro barreras estructurales que es prioritario superar para lograr la igualdad de género: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales discriminatorios, violentos y patriarcales y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; además de la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público (CEPAL, 2017[9]).

En el Gráfico 5.1 se recogen las ratios de desempeño de determinados resultados de bienestar correspondientes a las mujeres comparados con los de los hombres, en promedio, en los 11 países de ALC analizados.[3] A fin de facilitar su interpretación, todos los indicadores se han codificado en la misma dirección, de forma que 1 indica la paridad entre hombres y mujeres, las ratios superiores a 1 denotan

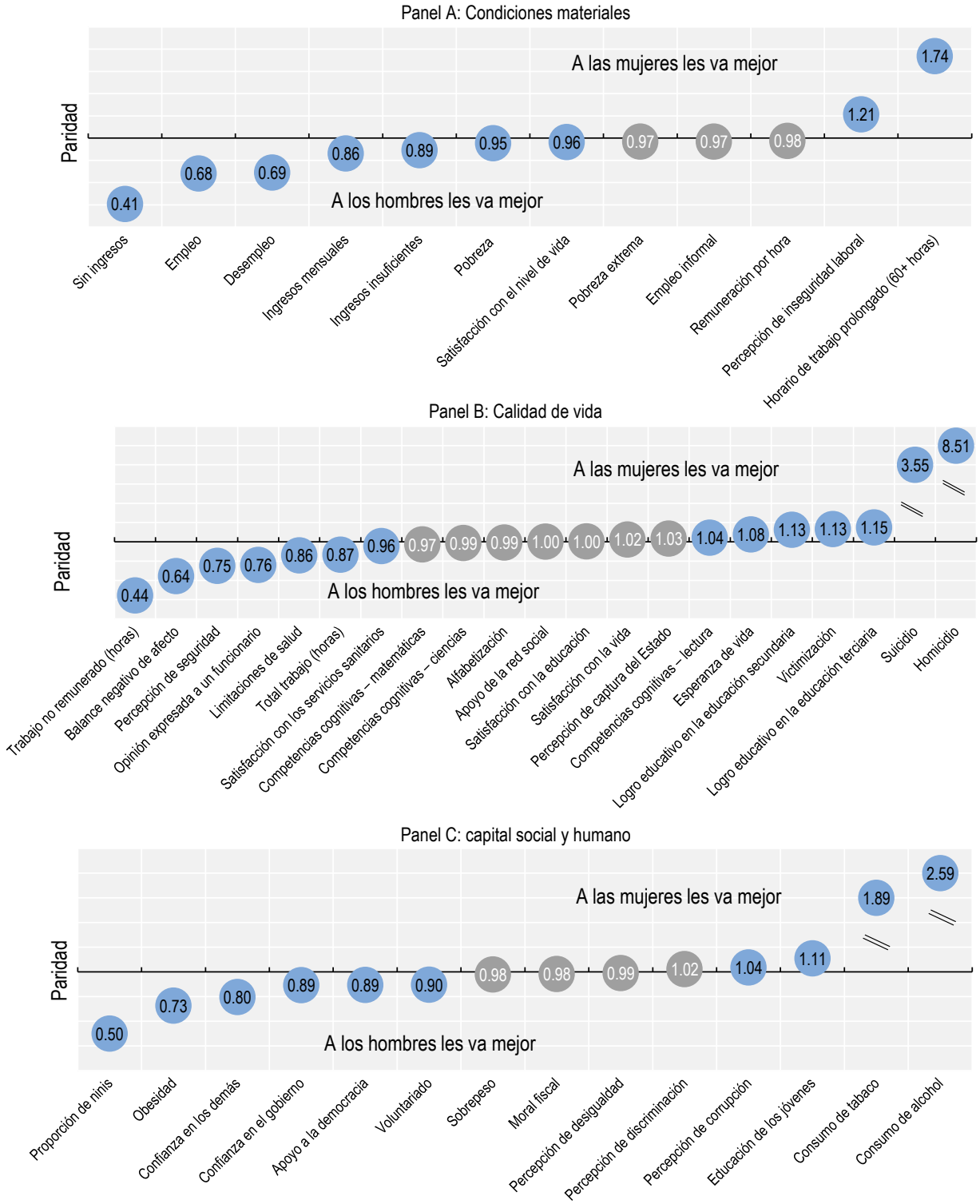
unos mejores resultados de bienestar para las mujeres que para los hombres y las inferiores a 1 denotan peores resultados para las mujeres.

En promedio, en los países analizados las mujeres salen mucho peor paradas que los hombres en prácticamente todos los indicadores de condiciones materiales seleccionados (Gráfico 5.1, panel A). Las mujeres tienen muchas menos probabilidades de estar empleadas, casi un tercio más de probabilidades de estar desempleadas y son más propensas a ocupar un empleo informal. Tan solo se aplica lo contrario con relación a la percepción de inseguridad laboral y las horas extras, en cuyos casos los hombres son más propensos a dedicar más de 60 horas semanales al trabajo remunerado y de estar preocupados por perder su trabajo en los próximos 12 meses. Sin embargo, incluso estos indicadores "positivos" para las mujeres deben entenderse como parte de un contexto más amplio. Por ejemplo, la carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado (como se explica más adelante) que asumen las mujeres constituye un importante obstáculo a su participación en el mercado laboral y aumenten las horas de trabajo remunerado, lo cual explica su menor tendencia a trabajar jornadas prolongadas.

La marginación de las mujeres en el mercado laboral se ve reflejada, al menos en parte, en unos ingresos menores —sobre todo si se analizan los ingresos mensuales (que presentan una brecha salarial de género del 14%)—. En general, las mujeres son algo más propensas a vivir en la pobreza y la pobreza extrema (con diferencias todavía más acusadas cuando se analiza la población de 20 a 59 años, véase el Gráfico 5.2) tienen menos probabilidades de considerar que sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades, y tienen más del doble de probabilidades que los hombres de no contar con ingresos propios.

Gráfico 5.1. Las diferencias de bienestar entre los géneros son dispares, aunque en general las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas, vivir en la pobreza y dedicar más tiempo al trabajo no remunerado

Ratios de género (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de bienestar actual, capital humano y social, 2019 o último año disponible



Nota: Cada índice de desempeño constituye la proporción de la media simple para hombres y mujeres calculada en los 11 países analizados de los que existen datos disponibles. Debido a esto, los índices de desempeño pueden comprender un conjunto de los 11 países analizados, en función de la disponibilidad de datos. Los índices de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, un mayor bienestar) para las mujeres, mientras que los índices de desempeño por debajo de 1 señalan mejores resultados (es decir, un mayor bienestar) para los hombres —indicadores negativos (p. ej., desempleo) para los que la puntuación se considera a la inversa—. Los círculos grises denotan que no existe una diferencia clara entre hombres y mujeres, lo que se define como ratios de género a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad. En Panel B, 'Percepción de captura del Estado' refiere a la percepción de captura del Estado por parte de las élites y 'Victimización' refiere a la victimización reportada por la propia persona.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes en inglés consúltese la pestaña “Sources and Methods” (Fuentes y métodos) del archivo Statlink.

StatLink https://stat.link/bak64e

En el caso de los indicadores seleccionados de calidad de vida (Gráfico 5.1, panel B), en promedio, la mayor brecha de género en los países analizados se refiere al homicidio. Los hombres tienen más de ocho veces más probabilidades de morir por esta causa. Además, también tienen un 13% más de probabilidades que las mujeres de indicar que ellos o sus familias han sido víctimas de un delito. De manera conjunta, estos indicadores podrían sugerir que en general las mujeres son menos vulnerables que los hombres a los resultados violentos, aunque la realidad es mucho más compleja, como se explica en la última sección dedicada a la violencia contra las mujeres. El Gráfico 5.1 también muestra que, en lo que a percepción de seguridad se refiere, las mujeres registran peores datos que los hombres y sus probabilidades de sentirse seguras al caminar a solas de noche por su vecindad son menores. Por lo general, las mujeres son más vulnerables que los hombres desde el punto de vista físico, y aunque su probabilidad de verse implicadas en prácticas de riesgo —como la delincuencia o las actividades de bandas que pueden provocar muertes violentas— es menor, se enfrentan a amenazas generalizadas relacionadas con agresiones sexuales o la violencia doméstica o de pareja, que no es posible medir con tanta precisión mediante estadísticas oficiales comparables (como se detalla más adelante en esta sección).

En general, en promedio las mujeres viven casi 6 años más que los hombres en los países analizados, con una esperanza de vida media de 79,8 años, que contrasta con los 74 años de los hombres. En lo que se refiere al bienestar mental y emocional, los indicadores son dispares. Los hombres tienen más de tres veces más probabilidades de morir a causa de suicidio que las mujeres.[4] Sin embargo, las mujeres presentan más probabilidades que los hombres de experimentar un balance negativo de afecto, en el que, en un día normal, las emociones negativas (como la preocupación, la tristeza, el estrés o la ira) superan a las positivas (como el disfrute o la risa). En cuanto a la satisfacción general con la vida, no existe una diferencia clara, ya que las mujeres muestran unos niveles tan solo ligeramente mayores.

Las mujeres del grupo analizado tienen más probabilidades de haber completado la educación secundaria y terciaria, y las chicas muestran unos resultados marginalmente mejores en las pruebas cognitivas de lectura a los 15 años que los chicos (con una puntuación media de PISA de 419,5 en el caso de las primeras, frente a 401,5 en el de los segundos). Por otro lado, a los 15 años, los chicos suelen obtener puntuaciones ligeramente más altas que las chicas en las pruebas cognitivas de matemáticas y ciencias. Si bien las diferencias son muy pequeñas, las brechas de género en estos campos han tendido a ampliarse con el tiempo. Prácticamente en todos los países del mundo que participan en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) se ha observado el patrón consistente en una fortaleza relativa de los chicos en ciencias. Este se asocia con unas menores tasas de titulación y empleo de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) en etapas posteriores de la vida (Mostafa, 2019[10]).[5]

Por último, aunque no existe una diferencia clara entre géneros en cuanto a la percepción de captura del Estado por parte de las élites, ya que las mujeres solo muestran una tendencia algo mayor que los hombres a creer que su país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio, la probabilidad de que ellas manifiesten su opinión a un funcionario es mucho menor que la de los hombres.

También está disponible una selección de indicadores del capital social y humano por género (Gráfico 5.1, panel C). Estos muestran que, en promedio, en los países analizados los hombres son más proclives que las mujeres a confiar en los demás y en el gobierno, así como a labores de voluntariado y a creer que la democracia es preferible a otro tipo de gobiernos. Por otra parte, la diferencia entre géneros es escasa en cuanto a la probabilidad de que hombres y mujeres consideren que el gobierno es corrupto, o aseguren pertenecer a un grupo discriminado. Este último resultado es poco lógico si se tienen en cuenta las diversas manifestaciones de discriminación de género contra las mujeres.[6] En lo que a los indicadores de capital humano se refiere, los hombres jóvenes tienen aproximadamente la mitad de probabilidades que las mujeres de no estudiar ni trabajar ni recibir formación (ninis),[7] y menos probabilidades de ser obesos, aunque existe poca diferencia en la prevalencia del sobrepeso entre ambos sexos. Por otra parte, es más probable que las mujeres jóvenes hayan completado el segundo ciclo de educación secundaria y los hombres tienen prácticamente el doble de probabilidades de consumir tabaco y más de 2,5 veces de consumir alcohol.

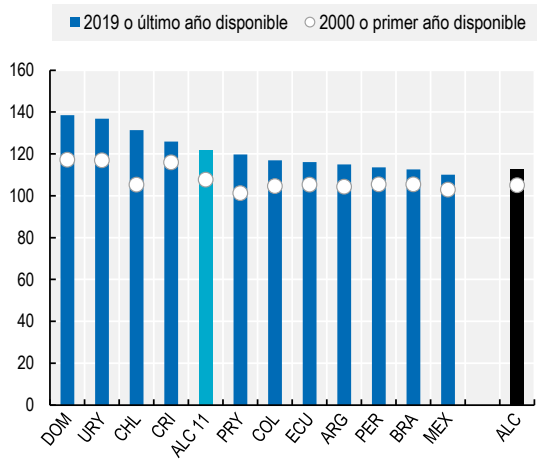
En el resto de esta sección se analiza más detenidamente una selección de indicadores, entre ellos algunos que no figuran en otras partes del informe pero que son especialmente significativos para entender las desigualdades entre los géneros (como la violencia contra las mujeres).

Pobreza

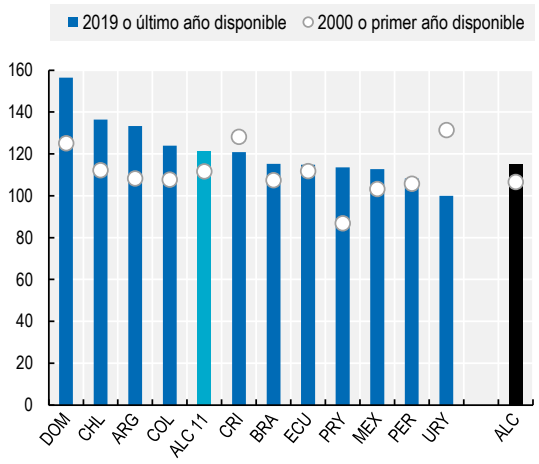
Las mujeres de América Latina no solo tienen más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza,[8] sino que la brecha de género se ha ampliado todavía más en las últimas dos décadas. Las diferencias entre los géneros son incluso mayores para la población en edad de trabajar que para el total de la población. En el Gráfico 5.2, los paneles A y B muestran los datos del Índice de feminidad de la pobreza y de la pobreza extrema, calculado por la CEPAL, que se centra en la población de 20 a 59 años. Según esta medida, en 2019, por cada 100 hombres que vivían en hogares (totalmente) pobres de la región había al menos 112 mujeres en una situación similar (véase el Gráfico 5.2, panel A), frente a un promedio regional de 105 mujeres en 2002. La feminización de la pobreza extrema incluso era mayor, de 115,3 en 2019, frente a 106,6 en 2002. En Chile, la República Dominicana y Uruguay, las mujeres de 20 a 59 años tenían más de un 30% de probabilidades de vivir en hogares pobres que los hombres de su misma franja de edad.[9]

Gráfico 5.2. La feminización tanto de la pobreza absoluta como de la pobreza extrema ha aumentado en la mayoría de los países analizados en las dos últimas décadas

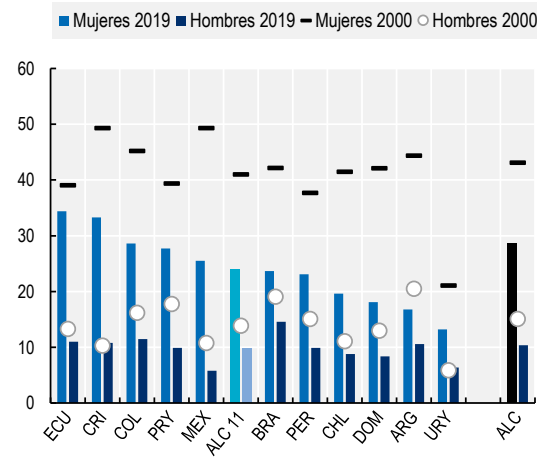
Panel A: Relación de mujeres de 20 a 59 años que viven en la pobreza absoluta comparada con la de los hombres de su misma



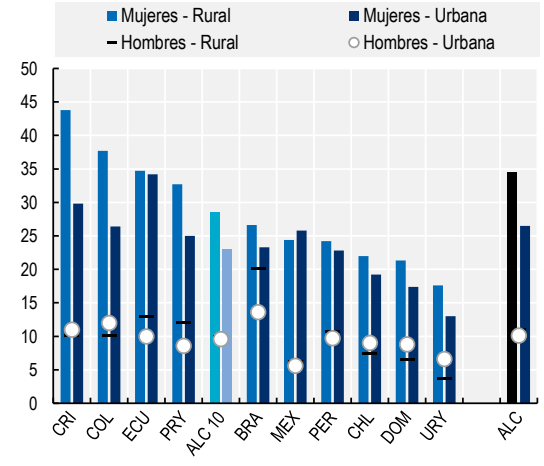
Panel B: Relación de mujeres de 20 a 59 años que viven en la pobreza extrema comparada con la de los hombres de su misma



Panel C: Proporción de personas sin ingresos, porcentaje, por sexo



Panel D: Proporción de personas sin ingresos, porcentaje, por sexo y zona de residencia, 2019 o último año disponible



Nota: los paneles A y B muestran la proporción de mujeres de 20 a 59 años que viven en la pobreza absoluta (o la pobreza extrema) como ratio de las proporciones de hombres de 20 a 59 años. Los valores superiores a 100 indican que la pobreza es más habitual entre las mujeres, y los inferiores a 100 que los hombres se ven más afectados por la pobreza media. ALC corresponde al promedio regional calculado por la CEPAL. En el caso de los paneles A y B, el último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de la República Dominicana y 2017 en el de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú; 2002 en el de Colombia; y 2007 en el de Uruguay. En los paneles C y D, el último año del que hay datos disponibles es 2018 para México y 2017 para Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2001 en el caso de Brasil, Paraguay y Perú; 2002 en el de Colombia; y 2007 en el de Uruguay. En los paneles A y B, los datos correspondientes a Argentina únicamente se refieren a la población urbana.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp

StatLink https://stat.link/oi9gbp

Las medidas de pobreza de ingresos que aquí se recogen se calculan partiendo del supuesto de que el ingreso familiar se reparte equitativamente entre todos los miembros del hogar. Una forma de captar las desigualdades dentro de los hogares consiste en analizar la proporción de personas que no tienen ingresos propios. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a no disponer de ingresos propios[10] (Gráfico 5.2, panel C). En promedio, en los países analizados, prácticamente una cuarta parte de las mujeres (el 24%) no disponía de ingresos propios, en comparación con el 10% de los hombres. La autonomía de las mujeres que carecen de ingresos se ve gravemente comprometida, y su supervivencia depende de que pertenezcan a un hogar en el que los recursos a los que tienen acceso los restantes miembros se compartan entre todos (Amarante, Colacce and Scalese, a continuación[11]).

Pese a que las causas de las desigualdades entre los géneros en materia de pobreza de ingresos y autonomía económica son complejas, la reducción de las diferencias entre los géneros depende en gran medida de dos factores interrelacionados: por una parte, la mejora del acceso de las mujeres al trabajo remunerado de calidad y, por otra, la introducción de políticas públicas destinadas a reducir la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que ellas soportan (CEPAL, 2014[12]). Estas cuestiones se analizan más adelante.

Trabajo y calidad del empleo

En 2019, la tasa de empleo femenino era del 54%, muy por debajo de la tasa de empleo masculino del 79% (véase Statlink con relación al Gráfico 5.1). Las tasas de empleo femenino de la región aumentaron considerablemente a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000 (en 5,3 puntos porcentuales entre 1997 y 2007), pero desde 2007 apenas ha cambiado el nivel de participación femenina o la magnitud de la brecha de participación entre los géneros (CEPAL, 2018[13]). Esta desaceleración de la participación femenina en la fuerza de trabajo ha afectado a todos los grupos de mujeres, pero en especial a las casadas y a las de hogares más vulnerables (Gasparini et al., 2015[14]). En general, los latinoamericanos suelen mostrar actitudes favorables hacia el derecho de las mujeres a trabajar. En la región, el 89% de los hombres y el 92% de las mujeres están de acuerdo en que cualquier mujer debe tener un trabajo remunerado fuera de casa si lo desea (Gallup Inc./OIT, 2017[15]). De las 11 regiones del mundo, tan solo América del Norte y Europa (excepto Europa Oriental) presentan actitudes más favorables hacia el empleo femenino. Sin embargo, la aceptación del derecho o el deseo de una mujer de trabajar está muy condicionada por su papel y su poder de negociación en el hogar y por las circunstancias de los demás miembros de este. En 2015, un tercio de los encuestados de los 11 países analizados (33,7%) estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que las mujeres únicamente debían trabajar si su pareja no tenía ingresos suficientes.[11] Es probable que esto refleje las expectativas de que las mujeres asuman roles de género más tradicionales dentro del hogar, lo que incluye una mayor responsabilidad en el cuidado de los niños y otras formas de trabajo no remunerado (véase más abajo).

Las mujeres de la región de ALC se enfrentan a la segregación tanto horizontal como vertical en el mercado laboral. Por segregación horizontal se hace referencia a la concentración de mujeres en trabajos de baja productividad en determinados sectores u ocupaciones que suelen pagar salarios más bajos, ofrecen una escasa o nula protección social y presentan una deficiente seguridad laboral (CEPAL, 2021[3]). Por ejemplo, en los 17 países de ALC para los que se dispone de datos, en 2018, aproximadamente cuatro quintas partes de las trabajadoras (79,2%) estaban empleadas en sectores de baja productividad como la agricultura, el comercio y los servicios, frente al 58,3% de los trabajadores varones (Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean, 2021[16]). Además, las mujeres están empleadas de forma desproporcionada como trabajadoras domésticas, con un 14,3% de mujeres en este sector en la región en 2018, que contrasta con tan solo el 1% de los hombres (OIT, 2019[17]). La concentración de mujeres en el comercio, el servicio doméstico y las actividades de alojamiento y alimentación se ha asociado con una elevada incidencia del trabajo a tiempo parcial y a unos salarios relativamente bajos entre las mujeres (OIT, 2016[18]). Según un análisis de la OIT realizado en 10 regiones del mundo, el 37,7% de las mujeres empleadas en América Latina y el Caribe trabajaban pocas horas a

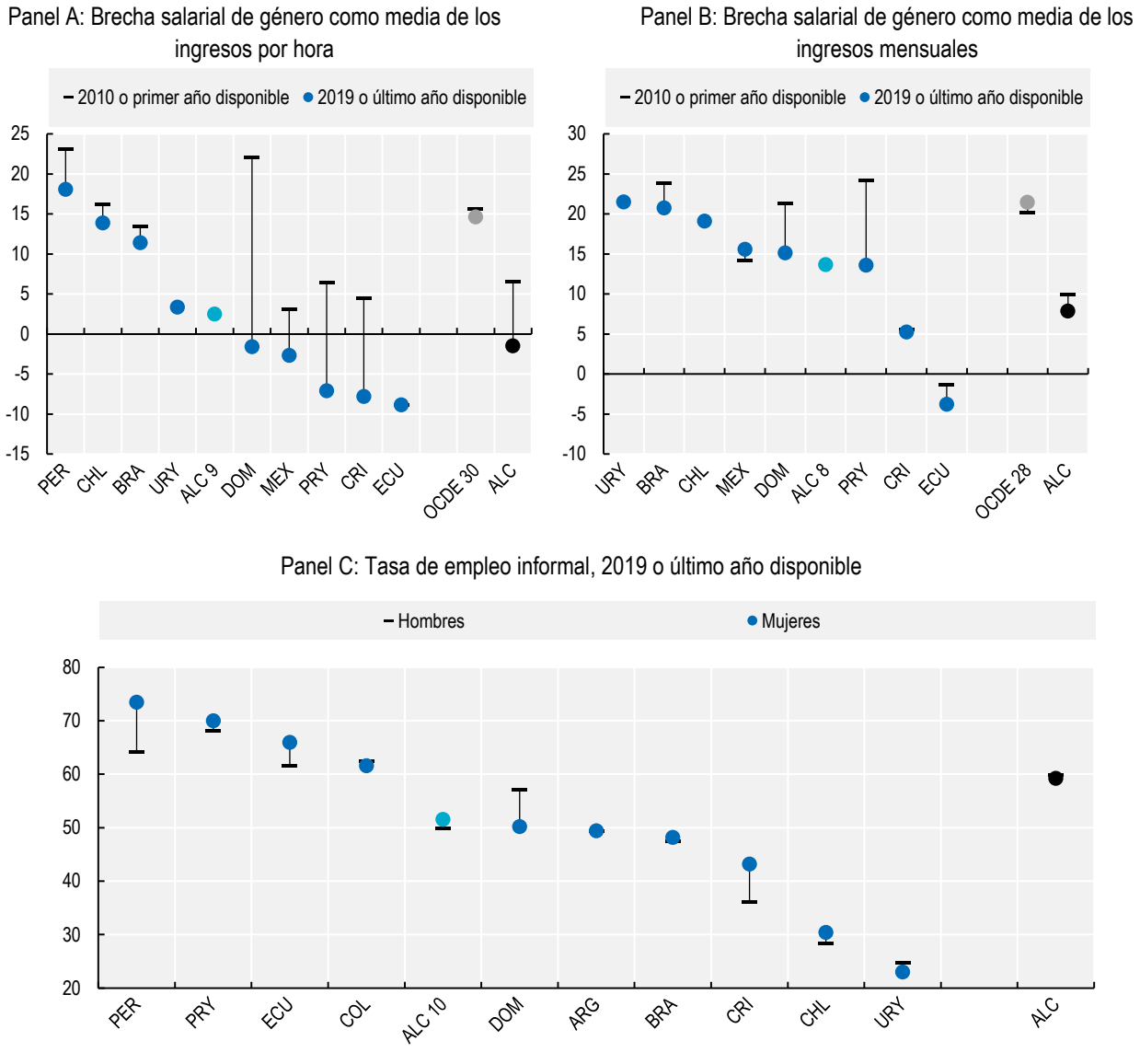
la semana (35 horas o menos), una proporción mayor que el promedio mundial del 34,2% (OIT, 2016[18]). La desigualdad entre los géneros en las horas de trabajo semanales también fue mucho mayor que el promedio mundial, con una brecha de género de 19,6 puntos porcentuales en la región de ALC (en la que solo el 18,1% de los hombres trabajan 35 horas semanales o menos), casi el doble que la brecha mundial de 11 puntos porcentuales (OIT, 2016[18]).

En cambio, la segregación vertical se refiere a las dificultades que tienen las mujeres para desarrollarse profesionalmente y acceder a puestos con mayor poder de toma de decisiones y mejor remunerados. Debido a factores que influyen entre sí, como los estereotipos y prejuicios de género, las políticas de los empleadores que no les prestan apoyo y la falta de oportunidades para adquirir experiencia directiva, las mujeres suelen trabajar en los niveles más bajos de la estructura jerárquica y, dentro de esta, suelen quedarse atrapadas en los puestos peor remunerados, de menor rango o con menor responsabilidad. Esto provoca un círculo vicioso en el que una gran proporción de mujeres queda excluida de la influencia y la toma de decisiones económicas, lo que dificulta aún más el avance hacia la igualdad de género (CEPAL, 2018[13]).

Tanto estos como otros factores conllevan, en general, que las mujeres de América Latina suelan ganar menos y sean más propensas a ocupar empleos informales. Por término medio, en los países considerados, existe una brecha salarial de género tanto en los ingresos por hora (Gráfico 5.3, panel A) como en los ingresos mensuales (Gráfico 5.3, panel B) de los empleados. La diferencia es más llamativa y más sistemática entre países concretos con respecto a los ingresos mensuales, una pauta coherente con el hecho de que las mujeres tienden a trabajar menos horas en general. La brecha salarial de género es menor para el promedio regional (ALC) que para la media del grupo analizado (ALC 10 en el Gráfico 5.3, panel A, y ALC 9 en el panel B), que a su vez es menor que para el promedio de la OCDE. Las tendencias en el tiempo son dispares: de los seis países para los que se dispone de series de tiempo comparables sobre ingresos mensuales, la mitad (Uruguay, Brasil y Paraguay) experimentaron una marcada reducción de la brecha de género entre 2010 y 2019, y la otra mitad (Argentina, Costa Rica y México) registraron escasos cambios o incluso un leve aumento (Gráfico 5.3, panel B).

Cabe señalar que estos datos se basan únicamente en los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena, y que los niveles de remuneración son más bajos, y las diferencias entre los géneros son mayores cuando se examinan los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia. En promedio, los ingresos relativos de las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia de toda la región de ALC en 2017 se indexaron en 81,6 y 87,6 respectivamente, frente a una línea de base de 100 correspondiente a los ingresos laborales promedios totales de las mujeres (OIT, 2019[19]). La diferencia con la línea de base correspondiente a las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena fue menor (104,7 y 107,3, respectivamente). En general, es más probable que las mujeres con importantes responsabilidades de trabajo no remunerado y de cuidado doméstico trabajen por cuenta propia que las que carecen de estas (OIT, 2019[19]).

Gráfico 5.3. En la mayoría de los países analizados, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ocupar un empleo informal, y sus ingresos mensuales medios son un 14% inferiores a los de ellos



Nota: La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los ingresos medios por hora (mensuales) de los hombres y las mujeres, con relación a los ingresos medios por hora (mensuales) de los hombres. Los ingresos de los empleados tienen que ver con la remuneración bruta en efectivo y en especie abonada a los empleados, por lo general a intervalos regulares, por el tiempo trabajado o el trabajo realizado, además de la remuneración correspondiente al tiempo no trabajado, como las vacaciones anuales, otro tipo de permiso remunerado o vacaciones. En lo que a los ingresos mensuales se refiere, los datos notificados como semanales y anuales se convierten a mensuales en las series en divisa locales, empleando datos sobre las jornadas semanales promedias, si están disponibles. La conversión de los datos de ingresos a dólares internacionales constantes de 2017 se efectúa mediante aplicación de las tasas de paridad de poder adquisitivo al consumo privado. En el panel A, el último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile y 2016 en el de Perú. El primer año del que hay datos disponibles es 2012 en el caso de Brasil, 2014 en el de Ecuador y 2015 en el de Chile y la República Dominicana. ALC 9 excluye a Argentina y Colombia, ya que no existen datos disponibles. El promedio regional de ALC comprende 11 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 8 analizados de los que hay datos disponibles tanto para los primeros como para los últimos años disponibles. OCDE 30 excluye a Australia, Canadá, Colombia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, por interrupciones en las series de tiempo o porque están incompletas. En el panel B, el último año del que hay datos disponibles es 2017 en el caso de Chile. El primer año del que hay datos disponibles es 2011 en el caso de Costa Rica; 2012 en el caso de Brasil; 2013 en el de México y 2014 en el de Ecuador. ALC 8 excluye a Argentina, Colombia y Perú, ya que no existen datos disponibles. El promedio regional de ALC comprende 9 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 6 analizados de los que hay datos disponibles tanto para los primeros como para los últimos años disponibles. El promedio de la OCDE 28 excluye a Australia, Canadá, Chile, Colombia, Hungría, Islandia, Japón, Lituania y Nueva Zelanda, por interrupciones en la serie de tiempo o porque está incompleta. En el panel C, el último año del que hay datos disponibles es 2015 en el caso de Brasil. ALC 10 excluye a México, debido a que su serie de tiempo está incompleta. El promedio regional de ALC comprende 20 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles.
Fuente: Cálculos de la OCDE a partir de ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/

StatLink https://stat.link/j6z3c2

Mientras que, a nivel mundial, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de ocupar un empleo informal, en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, incluida la mayoría de los países de ALC, ocurre lo contrario (OIT, 2018[20]). En promedio, en todos los países analizados, el 51,6% del empleo total femenino era informal en 2019, en comparación con el 49,2% del masculino (ALC 11, Gráfico 5.3, panel C).[12] Estos promedios ocultan grandes diferencias entre países en las tasas de informalidad, que ya se señalaron en el Capítulo 2. Aunque los trabajadores informales de ambos sexos se enfrentan a una mayor variedad de riesgos generales y laborales que los trabajadores formales, por lo general las mujeres y los hombres suelen enfrentarse a distintos tipos de vulnerabilidades a la hora de trabajar en el sector informal (OCDE/OIT, 2019[21]). Por ejemplo, los hombres son más propensos a sufrir los riesgos físicos de trabajar con las condiciones inseguras y no reguladas que se asocian con el trabajo informal, por lo que padecen tasas mucho mayores de lesiones ocupacionales (tanto mortales como no mortales) que las mujeres (OIT, 2021[22]). El riesgo de lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo se ve agravado por las bajas tasas de cobertura sanitaria y de protección social entre los trabajadores informales. Sin embargo, es más probable que los hombres trabajen en empleos informales de alto nivel (p. ej., como empleadores), mientras que las mujeres son más propensas a encontrarse en el extremo inferior de la jerarquía (Jutting and de Laiglesia, 2009[23]). Las mujeres también tienen más probabilidades de trabajar en empleos de baja categoría que les otorgan un escaso control sobre sus condiciones de trabajo o el trato que reciben, como el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio o la contribución al trabajo familiar, que los hombres (OIT, 2018[20]). Estas mujeres pueden enfrentarse a problemas concretos relacionados con el trabajo en domicilios particulares, es decir, a menudo en situaciones menos protegidas por la normativa del Estado y fuera del alcance de los inspectores de trabajo (OIT, 2016[24]). El desequilibrio de poder al que se enfrentan las mujeres que trabajan en condiciones de vulnerabilidad en el sector informal implica que, además de las desventajas habituales del trabajo informal (baja remuneración, entornos de trabajo inseguros, precariedad laboral, etc.), también tienen más probabilidades de sufrir acoso sexual y otras formas de violencia y discriminación por motivos de género (ONU-Mujeres, 2020[25]).

Trabajo de cuidados y doméstico no remunerado

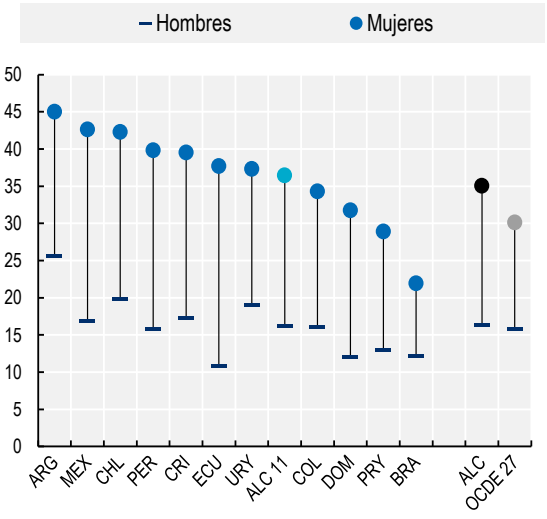
La participación relativamente baja de las mujeres en el empleo remunerado contrasta con su elevada participación en el trabajo no remunerado en sus propios hogares. En América Latina, las mujeres asumen más de las tres cuartas partes (77%) del trabajo no remunerado en el hogar, en el que las tareas de cuidados y mantenimiento del hogar son las más frecuentes (CEPAL, 2018[13]). En general, en los países analizados, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, con un promedio de 36,5 horas semanales, frente a 16,2 horas en el caso de los hombres (ALC 11, Gráfico 5.4, panel A). La brecha de género en el tiempo de trabajo no remunerado en los 11 países analizados, de 20,3 horas, es mayor que el promedio de ALC (18,7 horas) y el promedio de la OCDE (14,8).[13]

El valor económico del trabajo no remunerado es sustancial: se calcula que en promedio equivale al 20% del PIB en 10 países latinoamericanos, y las mujeres representan el 70% de esta contribución (CEPAL, 2021[26]). Este trabajo constituye un aporte fundamental al bienestar individual y social, en especial en lo que se refiere a dar apoyo a las necesidades de los miembros vulnerables de los hogares (los niños, las personas mayores y las personas discapacitadas) cuando no existen estructuras públicas adecuadas para la atención y el cuidado de los niños. No obstante, sigue siendo un aspecto del trabajo en gran medida invisible y nada reconocido, cuya carga recae de forma desproporcionada en las mujeres, y se presenta como una barrera para una mayor participación de ellas en el empleo remunerado. Los factores que impulsan los desequilibrios de género dentro del trabajo no remunerado son diversos, pero sobre todo guardan relación con aspectos culturales (normas sociales que refuerzan los estereotipos tradicionales de género) y con los menores incentivos del mercado laboral para las mujeres (dada la relativa falta de oportunidades laborales bien remuneradas, seguras y satisfactorias). La carga de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado es mayor en el caso de las mujeres que se encuentran en el segmento inferior de la distribución de los ingresos. Según datos recientes sobre el uso del tiempo correspondientes a 11 países de ALC,[14] las mujeres del quintil más pobre destinan aproximadamente 6 horas al trabajo de cuidados y doméstico no remunerado al día, lo cual contrasta con las 2,5 horas que dedican las mujeres del quintil más rico (ONU-Mujeres, 2019[27]).

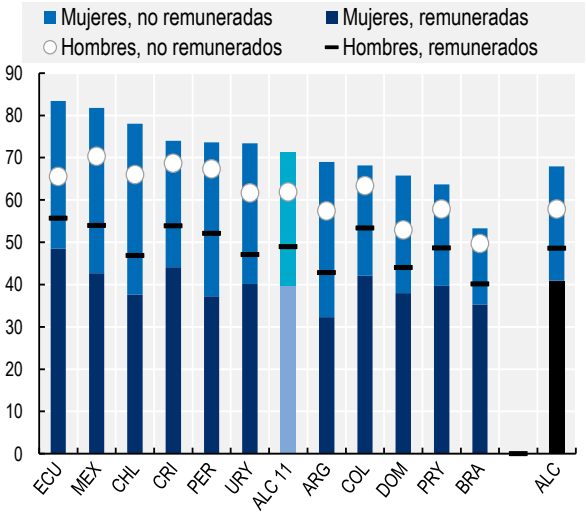
Las trabajadoras se enfrentan a una doble carga, ya que deben afrontar una mayor proporción de trabajo no remunerado además de su empleo remunerado (Gráfico 5.4, panel B). En promedio, en los países analizados, las mujeres trabajadoras dedican al menos 10 horas más de su tiempo de trabajo total (incluido el trabajo remunerado y no remunerado) que los hombres, con 71,3 horas de trabajo semanales, en comparación con las 61,9 horas que dedican los hombres. Esta brecha de género es muy similar al promedio de la brecha regional de ALC, aunque el promedio del total de horas de trabajo para esta región es ligeramente inferior (67,9 horas semanales totales en el caso de las mujeres y 57,9 en el de los hombres).

Gráfico 5.4. Las mujeres dedican más del doble de horas semanales que los hombres al trabajo no remunerado, y las mujeres trabajadoras dedican casi 10 horas más al trabajo semanal remunerado y no remunerado

Panel A: Promedio de horas semanales de trabajo no remunerado por sexo, total población de 15 años o mayor, último año disponible



Panel B: Promedio total de horas semanales de trabajo (remunerado y no remunerado) de la población activa, por sexo, último año disponible



Nota: Los datos se refieren a 2019 en el caso de México, 2017 en el de Brasil, Colombia y Costa Rica, 2016 en el de la República Dominicana y Paraguay, 2015 en el de Chile, 2013 en el de Argentina y Uruguay, y 2012 en el de Ecuador. El promedio regional de ALC incluye 11 países de América Latina y el Caribe en el panel A y 10 países de América Latina y el Caribe en el panel B, además de los países analizados. OCDE 30 excluye a Chile, Colombia, la República Checa, Islandia, Israel, la República Eslovaca y Suiza, ya que no existen datos disponibles. Los datos de los países de la OCDE se recogen en un formato de minutos al día dedicados a cada actividad y se refieren al grupo de edad de 15 a 64 años. La OCDE armoniza estos datos *ex post*. El promedio de la OCDE de horas semanales de trabajo no remunerado se ha calculado a partir de los datos disponibles sobre el uso del tiempo en horas diarias, que se han multiplicado por 7. En el panel B se representan los datos de los totales acumulados correspondientes a mujeres y hombres.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp y sobre uso del tiempo de la OCDE (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIME_USE

StatLink https://stat.link/qca5f0

Violencia contra las mujeres y autonomía sexual

América Latina es una de las regiones más inseguras del mundo en lo que se refiere a delitos violentos. En esta, los hombres del grupo analizado tienen 8,5 más probabilidades que las mujeres de morir por homicidio (Gráfico 5.1). Sin embargo, hay otros tipos de violencia que no se reflejan en las estadísticas sobre homicidios. Aunque, en general, las mujeres tienen menos probabilidades de ser objeto de violencia en el contexto de un conflicto armado o de una actividad delictiva, sus probabilidades de sufrir violencia y lesiones a manos de sus parejas y otras personas cercanas son mayores (Heise L and Garcia Moreno C, 2002[28]). Asimismo, en general las niñas y las mujeres también tienen más probabilidades de sufrir violencia y acoso sexual (Jewkes, Sen and Garcia Moreno, 2002[29]), incluso fuera del hogar —en el trabajo, la escuela y otros lugares públicos— (Gherardi, 2016[30]). Aunque no se dispone de datos oportunos y comparables a nivel internacional sobre los distintos tipos de violencia y acoso que sufren las mujeres, en general se reconoce que la violencia de género constituye un problema urgente en América Latina (CEPAL, 2020[31]). Este problema es cada vez más acuciante con la llegada de la pandemia y las

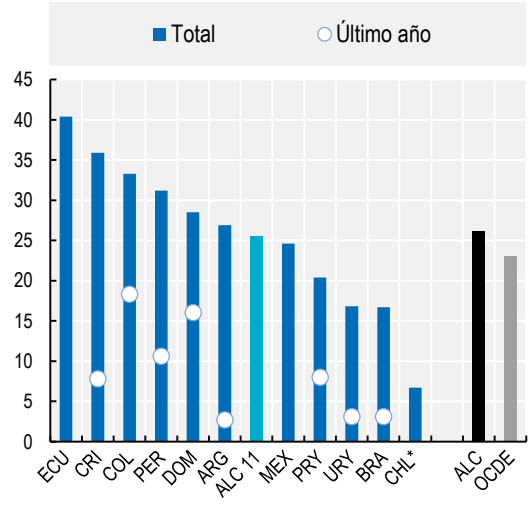
medidas de confinamiento que trajo consigo han agravado la exposición y el riesgo de las mujeres en este ámbito (véase más abajo).

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres difieren considerablemente de las que se aplican a los hombres. La violencia física y sexual contra las mujeres conlleva una serie de consecuencias para la salud reproductiva, como las infecciones de transmisión sexual, los partos prematuros, los abortos y los embarazos en la adolescencia[15] (OMS, 2013[32]; Bott et al., 2012[33]). A fin de evitar situaciones de peligro fuera del hogar, las mujeres pueden restringir su comportamiento, como por ejemplo, ausentarse con mayor frecuencia de la escuela o el trabajo, lo que incide directamente en sus resultados académicos y en el mercado laboral, y en su bienestar general (Gherardi, 2016[30]). Incluso la amenaza de posible violencia es suficiente para reducir las libertades, las oportunidades económicas y la calidad de vida de las mujeres. El trauma de haber sufrido violencia también puede conducir a una mayor incidencia de problemas de salud mental, como la depresión y el abuso del alcohol o de sustancias (OMS, 2013[32]). Por último, la violencia doméstica tiene además un importante componente familiar e intergeneracional, ya que en los hogares en los que las mujeres sufren violencia a manos de su pareja, los niños también tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia, tanto durante la infancia como en etapas posteriores de la vida[16] (Bott et al., 2012[33]).

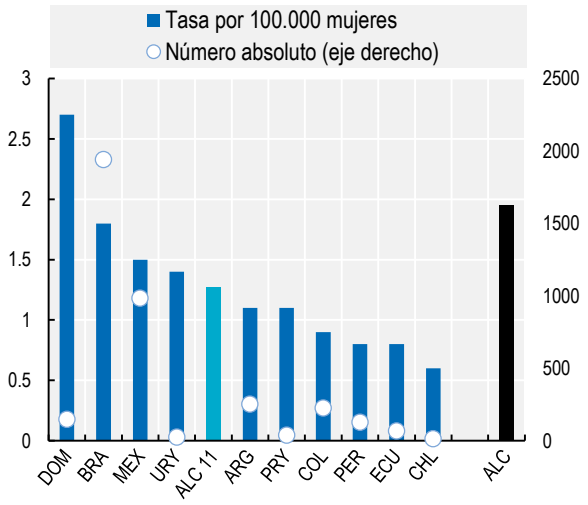
En general, en los 11 países analizados, 1 de cada 4 mujeres de 15 a 49 años (25,6%) ha experimentado alguna forma de violencia de pareja (ya sea sexual, física o de ambos tipos) a lo largo de su vida (Gráfico 5.5, panel A). Pese a que esta cifra es ligeramente superior al promedio de la OCDE (23,1%), las estimaciones no son directamente comparables, ya que el promedio de la OCDE se refiere a una población de mayor tamaño (mujeres de 18 a 74 años). Algunos países analizados disponen además de datos sobre la incidencia de violencia de pareja correspondientes al año anterior (indicador 5.2.1 de los ODS); tanto en Colombia como en la República Dominicana más de la mitad de las personas que declararon haber tenido alguna experiencia de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida aseguraron haberla sufrido también en los últimos 12 meses. Sin duda, estas cifras infravaloran la verdadera preponderancia de la violencia doméstica, ya que, según los datos contrastados, la mayoría de los casos no se denuncia (Gracia, 2004[34]).

Gráfico 5.5. En los países analizados, 1 de cada 4 mujeres de 15 a 49 años ha experimentado violencia de pareja a lo largo de su vida, mientras que cada año miles de mujeres son víctimas de feminicidios

Panel A: Porcentaje de mujeres que notificaron violencia doméstica o de pareja, entre mujeres de 15 a 49 años que se han casado o cohabitado alguna vez, último año



Panel B: Feminicidio, tasas por 100.000 mujeres y cifras absolutas, 2019



Nota: El gráfico del panel A muestra la incidencia de violencia doméstica o de pareja a manos de cualquier pareja a lo largo de la vida, salvo en el caso de Colombia y Perú, en el que se indica este tipo de violencia cometida por la última pareja o más reciente. El asterisco indica que los datos correspondientes a Chile no son directamente comparables, ya que únicamente se refieren a agresión sexual. Los datos se refieren a 2017 en el caso de Brasil y Perú, 2016-2017 en el de Chile, 2016 en el de México, 2015 en el de Argentina y Colombia, 2013 en el de la República Dominicana y Uruguay, 2011 en el de Ecuador, 2008 en el de Paraguay y 2003 en el de Costa Rica. No están disponibles los datos del año pasado correspondientes a Ecuador, México, Chile y el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE se refiere a la población de 18 a 74 años. El promedio regional de ALC incluye 22 países de América Latina y el Caribe, además de los analizados en este documento. El gráfico del panel B muestra los datos correspondientes a muertes consideradas feminicidios. En el eje izquierdo se indican las tasas por 100.000 mujeres, mientras que el eje derecho indica las cifras absolutas. El promedio regional de ALC incluye 19 países de América Latina y el Caribe, además de los analizados en este documento.
Fuente: Encuestas nacionales según datos armonizados de (Bott et al., 2012[33]) y Base de datos de la OCDE sobre la familia, http://www.oecd.org/social/family/database.htm (panel A); CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp (panel B)

StatLink https://stat.link/nthv6e

El feminicidio constituye la forma de violencia más extrema contra las mujeres. Refuerza las divisiones de género, mantiene el dominio masculino y desempodera a las mujeres, al volverlas crónica y profundamente inseguras (GHRC - USA, s.f.[35]). Si bien no existe una definición internacional de feminicidio, sí existe la idea compartida de que no se refiere simplemente al asesinato de mujeres, sino a su asesinato por parte de hombres *debido a que* son mujeres (Russell, 1976[36]). Los feminicidios pueden estar motivados por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres (Caputi and Russell, 1990[37]). Además, existen datos contrastados que indican que, pese a que las armas de fuego constituyen el método más extendido para cometer asesinatos intencionados en América Latina, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de morir por asfixia, estrangulamiento o golpeadas (INEGI, 2019[38]).

Según los datos de que se dispone, en 2019, al menos 4.676 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 18 países latinoamericanos, y se produjeron al menos 3.821 feminicidios en los 11 países del grupo analizado (CEPAL, 2019[39]). Esto corresponde a una tasa media de feminicidios de 1,3 por cada 100.000

mujeres en el grupo analizado de ALC 11 y 2,6 por cada 100.000 en la región de ALC. La tasa superior que presenta el promedio de ALC es un reflejo de los niveles excepcionalmente altos de feminicidio observados en los últimos años en varios países centroamericanos y caribeños, como El Salvador, Honduras y Santa Lucía. La comparación de las tasas de feminicidio entre regiones no es directa, ya que pueden existir divergencias entre definiciones y fuentes de datos. Sin embargo, a fin de proporcionar cierto contexto, en promedio, en los 16 países europeos de los que se dispone de datos, 0,53 mujeres de cada 100.000 murieron a manos de su pareja o de un miembro de su familia en 2018 (Eurostat, 2021[40]) (aunque este dato se basa en una definición más estricta de feminicidio que excluye las muertes relacionadas con el género fuera del hogar o la familia).

La violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial cuyas causas son complejas. No se trata de un problema privado y personal en el que únicamente influyen factores individuales, sino un problema social arraigado y urgente. Entre las realidades sociales que propician la violencia de género se incluyen aspectos estructurales como el conflicto, la pobreza o la falta de oportunidades económicas para las mujeres y las niñas), factores culturales (como las normas de género dañinas) y las instituciones tanto formales como informales discriminatorias (como el racismo, los marcos jurídicos inadecuados, la falta de acceso a la justicia y las normas sobre la propiedad) (Michaeljon, Bell and Holden, 2016[41]). El índice de instituciones sociales y género del Centro de Desarrollo de la OCDE proporciona datos contrastados sobre el papel de las instituciones sociales formales e informales en la configuración de la desigualdad entre los géneros (Recuadro 5.1) en América Latina.

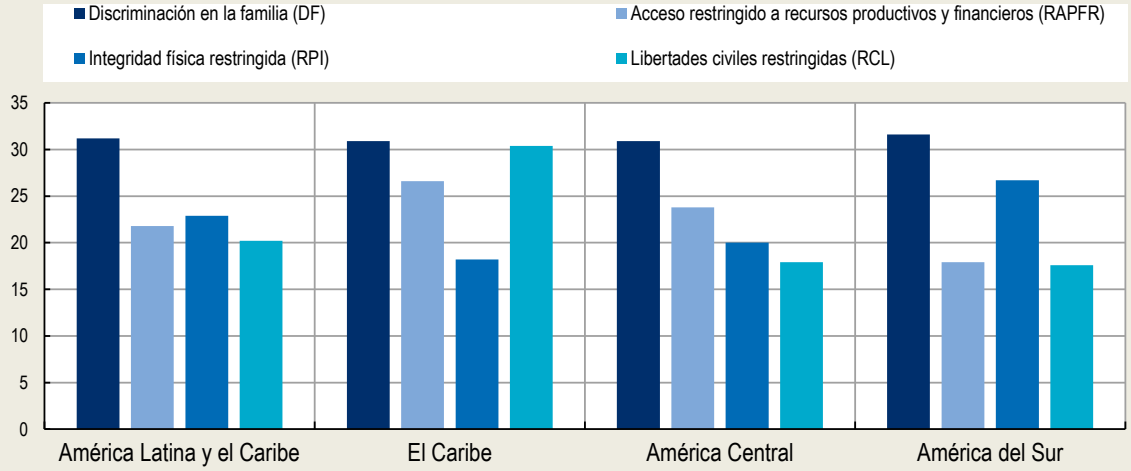
Recuadro 5.1. Conclusiones del índice de instituciones sociales y género (SIGI)

El índice de instituciones sociales y género (SIGI), elaborado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, mide la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales de 180 países. Teniendo en cuenta las leyes, las normas y las prácticas sociales, el SIGI capta los factores subyacentes de la desigualdad entre los géneros, a fin de promover políticas públicas transformadoras de género basadas en datos y datos contrastados. Además, constituye una de las fuentes de datos oficiales para monitorear el indicador 5.1.1. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El SIGI y sus dimensiones analizan las diferencias que crean la legislación, las actitudes y las prácticas entre los derechos y las oportunidades de las mujeres y los hombres. El SIGI comprende cuatro dimensiones, que abarcan los principales ámbitos socioeconómicos que afectan la vida entera de las mujeres y las niñas:

- La dimensión de “discriminación en la familia” refleja las instituciones sociales que limitan el poder de toma de decisiones de las mujeres y subestiman su estatus en el hogar y la familia.
- La dimensión de “integridad física restringida” capta las instituciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a numerosas formas de violencia y limitan el control de estas sobre sus cuerpos y su autonomía reproductiva.
- La dimensión de “acceso restringido a recursos productivos y financieros” recoge el acceso restringido de las mujeres a los recursos y activos productivos y económicos más importantes, así como su control sobre estos.
- La dimensión de “libertades civiles restringidas” plasma las leyes y prácticas discriminatorias que limitan la capacidad de las mujeres para acceder a los ámbitos público y privado, y participar y manifestar su opinión en ellos.

Gráfico 5.6. Puntuaciones de las dimensiones del SIGI en la región de ALC y sus subregiones



Nota: Las puntuaciones van de 0 a 100, en donde 0 indica que no existe discriminación y 100 que la discriminación es absoluta.
Fuente: Índice de instituciones sociales y género, http://stats.oecd.org

StatLink https://stat.link/wd72jo

El SIGI es un índice compuesto, en el que las puntuaciones correspondientes al índice global, sus dimensiones e indicadores van de 0 (en caso de que no haya discriminación) a 100 (en caso de que la discriminación contra las mujeres sea total). En el Gráfico 5.6, que recoge un resumen de las puntuaciones de las distintas dimensiones del SIGI en la región de ALC y sus subregiones, se muestra que "discriminación en la familia" es la dimensión que peores resultados registra, lo cual pone de relieve la existencia de una profunda discriminación entre hombres y mujeres en la dinámica del hogar. Las tres subregiones muestran una puntuación similar en las restantes dimensiones, con las excepciones del Caribe en "libertades civiles restringidas" y de América del Sur en "acceso restringido a recursos productivos y financieros". Los malos resultados de la región del Caribe en "libertades civiles restringidas" se debe principalmente a los deficientes marcos jurídicos que rigen la capacidad de las mujeres para otorgar su nacionalidad a su marido o sus hijos; los escasos incentivos a la participación y representación política de las mujeres; y las deficientes garantías de igualdad de derechos para las mujeres que solicitan pasaportes y documentación de viaje. El mal comportamiento de América del Sur en la dimensión de "acceso restringido a recursos productivos y financieros" se deriva de la insuficiencia de los marcos jurídicos que regulan los derechos de las mujeres en el trabajo y la prohibición de que estas accedan a determinadas profesiones en algunos países.

En lo que se refiere al desempeño de la región en el contexto mundial, la puntuación global del SIGI para ALC es de 25,4, es decir, mayor (lo que implica un resultado peor) que la de Europa (17) y la de América del Norte (18,1, excepto México), pero menor que la de África (40,3) y la de Asia (35,9).

Fuente: OCDE (2020[42]), *SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean*, Social Institutions and Gender Index.

A pesar de que no se trata de un indicador de violencia per se, las altas tasas de fecundidad de las adolescentes de ALC afectan al bienestar de las mujeres de diversas maneras. Aunque las tasas de fecundidad se han reducido drásticamente en la región, siguen siendo muy elevadas entre las adolescentes (Ullman, 2018[43]). La maternidad en la adolescencia tiene consecuencias en diversas dimensiones del bienestar de las jóvenes de América Latina, ya que agrava la transmisión intergeneracional de la pobreza y las carencias de logro educativo (CEPAL, 2014[44]; CEPAL/UNICEF,

2007[45]), e implica que se vulnera el acceso de los jóvenes a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva. Otra vulneración asociada de los derechos humanos es el matrimonio infantil, contemplado en el ODS 5.3 y que afecta de forma desproporcionada a las niñas. La situación en América Latina y el Caribe varía considerablemente de una subregión a otra: en el Caribe, el 15% de las niñas de 15 a 19 años están o han estado casadas o en una unión informal, cifra que contrasta con el 20% en América Central. Las tasas de matrimonio infantil se han mantenido estables en los últimos 30 años en el conjunto de la región, en la que la República Dominicana figura entre los 20 países con mayor incidencia de matrimonio infantil a nivel internacional (OCDE, 2019[46]). El matrimonio infantil y las tasas de fecundidad adolescentes presentan una importante correlación en la región de ALC y a nivel mundial: allí donde el matrimonio infantil está más extendido, las tasas de fecundidad de las adolescentes también son más altas (OCDE, 2020[42]).

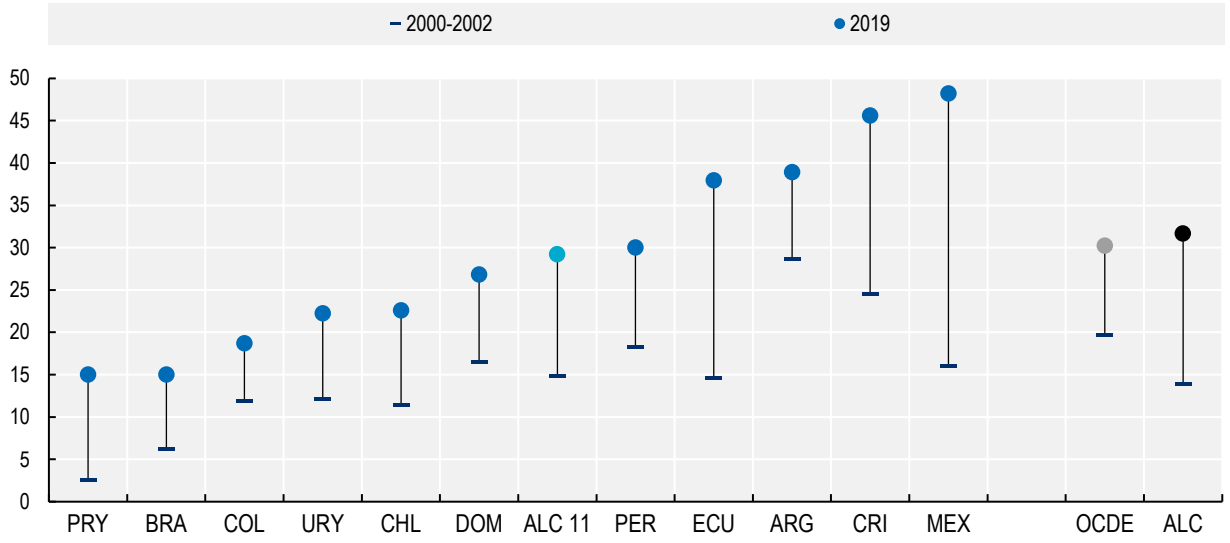
Participación de las mujeres en política

La representación en la toma de decisiones políticas es fundamental para lograr una sociedad inclusiva y con igualdad de género. Los países del grupo analizado han hecho avances sustanciales en este sentido, ya que el promedio de la proporción de mujeres diputadas prácticamente se ha duplicado desde 2000, del 14,8% al 29,2% registrado en 2019 (Gráfico 5.7). México y Costa Rica estuvieron a punto de lograr la total paridad de género en 2019 (con una representación de mujeres en el parlamento de 48,2% en México y del 45,6% en Costa Rica). El aumento de la representación femenina en los parlamentos fue mayor durante el período de referencia en el conjunto del grupo analizado que en el promedio de la OCDE, lo que significa que, aunque la representación de mujeres era mayor en los países de la OCDE a comienzos de la década de 2000 (del 19,6%), en 2019, el nivel de representación promedio de mujeres en los parlamentos de la OCDE era similar al del grupo focal (del 30,2%).

La legislación constituye una forma eficaz de aumentar la participación de las mujeres en la esfera política, y cada vez son más los países de América Latina (no tantos en el Caribe) que han establecido leyes de paridad de género en el ámbito político-electoral. En la actualidad es posible identificar tres grupos en lo referente al avance en las cuotas de género: en el primero, un total de 10 países (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, Honduras, Panamá, Argentina, Perú y Colombia) han promulgado normativas que estipulan la total paridad de género en los cargos de elección popular; en el segundo (Brasil, Chile, El Salvador, Haití, Paraguay, la República Dominicana, Uruguay y Guyana) han aplicado diversas cuotas de género con porcentajes para los cargos que oscilan entre el 20% y el 40%; y en el tercero no disponen de estipulaciones relativas a la paridad ni cuotas para los cargos de elección popular (UN Women, 2021[47]). Aunque, en función de cómo se hayan aplicado y ejecutado estas medidas, esto ha contribuido a normalizar la participación de las mujeres en la esfera pública y facilitado su acceso a la representación política, este avance no puede darse por sentado. En realidad, el propio hecho de que sea necesario disponer de mecanismos legales demuestra que las mejoras en la equidad de género no son automáticas en este ámbito y, en los casos en que se han promulgado leyes al efecto, a continuación suelen surgir iniciativas de resistencia a su aplicación o para limitar su eficacia (UN Women, 2021[47]). Por ejemplo, a nivel local, en el que las cuotas se aplican y exigen en menor medida, las mujeres tan solo obtuvieron el 15,2% de los cargos de alcalde en las elecciones de 2018-2019 en toda la región de ALC, lo que contrasta con el 5% en la década de 1990 (UN Women, 2021[47]). Además, las mejoras en el acceso de las mujeres a los cargos públicos o de elección popular no se han traducido en una presencia que refleje su diversidad en lo que se refiere a la condición de indígena o afrodescendiente, la orientación sexual u otras identidades o condiciones marginales, y se requieren más esfuerzos para que esta situación mejore (UN Women, 2021[47]). Por último, como sucede en otros lugares, las mujeres presentes en el ámbito político público de la región de ALC todavía se enfrentan a amenazas a modo de violencia física e intimidación a través de Internet. Estos riesgos se han visto agravados con el auge de la retórica abiertamente discriminatoria del discurso ultraconservador (UN Women, 2021[47]).

Gráfico 5.7. El promedio de la proporción de mujeres en los parlamentos del grupo analizado se ha duplicado (hasta aproximarse al 30%) en las dos últimas décadas

Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, porcentaje



Nota: ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=I, y Unión Interparlamentaria (UIP), mujeres en los parlamentos, para el promedio de la OCDE, http://archive.ipu.org/wmn-e/world-arc.htm

StatLink https://stat.link/cudeog

Impacto de la pandemia de COVID-19 en las desigualdades entre los géneros

Hombres y mujeres se han enfrentado a repercusiones económicas, sociales y sanitarias muy distintas a consecuencia de la pandemia. Así pues, la integración de la perspectiva de género en las respuestas políticas públicas será fundamental para la eficacia de los esfuerzos de mitigación y recuperación (ONU-Mujeres, 2020[48]).

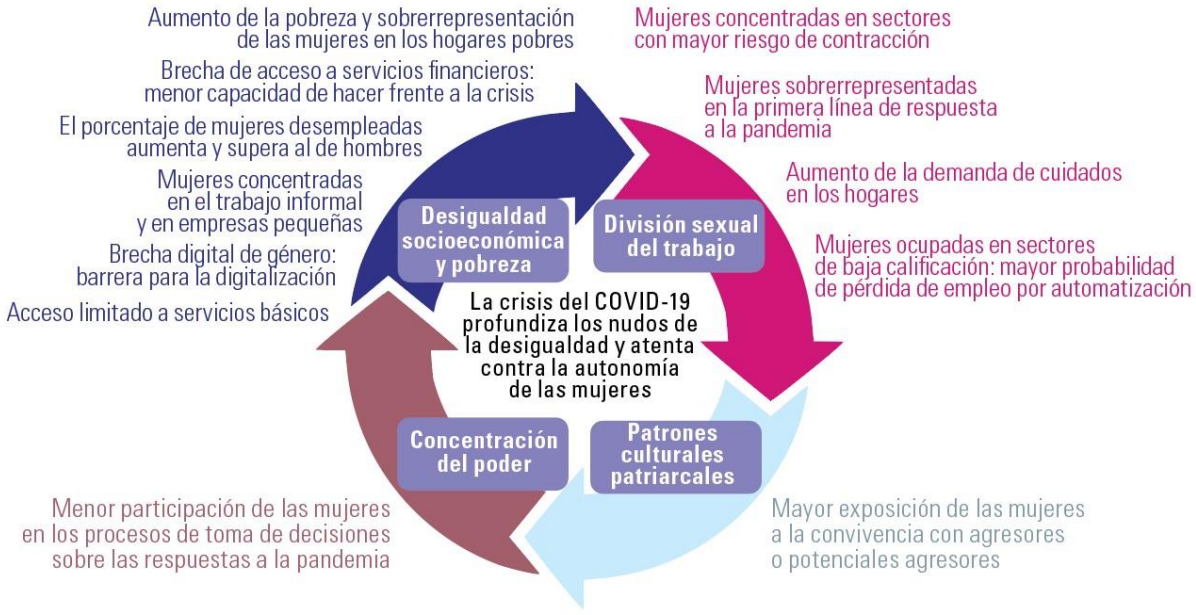
En cuanto a las consecuencias para la salud, durante la pandemia de COVID-19 han surgido claras disparidades entre los géneros. A fecha de febrero de 2021, se habían realizado pruebas a más mujeres (57%) que hombres en todo el mundo, y estas representaban algo más de la mitad del total de casos confirmados (51%). Sin embargo, los hombres representaban una mayor proporción de las hospitalizaciones notificadas (53%), ingresos en cuidados intensivos (68%) y muertes (57%) a nivel mundial (Global Health 50/50; APHRC; ICRW, 2021[49]), lo que refleja una mayor incidencia de enfermedades crónicas (es decir, hipertensión) y de comportamientos de riesgo o que reducen la salud (es decir, el tabaquismo), así como diferencias inmunológicas (Banco Mundial, 2020[50]). No obstante, todavía quedan muchas incógnitas, y aunque la disponibilidad de datos por género ha mejorado durante la pandemia, a fecha de febrero de 2021, tan solo el 51% de los países habían notificado los datos de casos desglosados por sexo, y únicamente el 41% había comunicado datos de fallecimientos desglosados por sexo (Global Health 50/50; APHRC; ICRW, 2021[49]).[17]

Si bien en general las mujeres presentan unas mayores tasas de mortalidad, tienen más probabilidades de trabajar en puestos tanto remunerados como no remunerados con altos niveles de exposición al virus, como los puestos sanitarios en la primera línea y los trabajos en sectores que requieren que las mujeres interactúen con otras personas durante el confinamiento (como la agricultura o el trabajo doméstico)

(Banco Mundial, 2020[51]). Esto se aplica en especial en América Latina, que registra la mayor proporción mundial de trabajadoras en la atención sanitaria (la mitad de los doctores y más del 80% de los enfermeros) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018[52]), además de la altísima proporción de mujeres que trabajan en la agricultura y el servicio doméstico.

Más allá de los impactos directos en la salud provocados por la pandemia, las consecuencias económicas y sociales difieren por género en varios ámbitos fundamentales. Como se ha indicado anteriormente, las mujeres de la región ya afrontaban vulnerabilidades en varios frentes antes del inicio de la pandemia; de ahí el peligro de que las posteriores crisis económica y social socaven todavía más la autonomía de las mujeres y ahonden las desigualdades estructurales (véase el Gráfico 5.8).

Gráfico 5.8. El impacto de la crisis del COVID-19 en la desigualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres



Fuente: (CEPAL, 2021[53])

En general, en la región, las mujeres han registrado unos resultados desproporcionadamente negativos en los indicadores del mercado laboral, debido a que están sobrerrepresentadas en sectores que se han visto más afectados por las medidas de control de la pandemia (como los restaurantes y los hoteles, las actividades comerciales y el servicio doméstico (CEPAL/OIT, 2020[54]). Se prevé que la tasa de desempleo femenino alcance el 22,2% en 2020, lo que supone un incremento interanual de 12,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2021[53]). Las mujeres de América Latina han experimentado un mayor descenso proporcional del empleo (del 18,1%, que contrasta con el 15,1% registrado por los hombres), así como más salidas del mercado laboral (15,4%, en comparación con el 11,8% de los hombres) (CEPAL/OIT, 2020[54]). Se prevé que, en total, el efecto negativo de la pandemia suponga eliminar una década de avances en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina (CEPAL, 2021[53]).

La elevada tasa de abandono del mercado laboral por parte de las mujeres probablemente se debió a que estas debieron asumir una carga de trabajo no remunerado aún mayor asociada con el aumento de las responsabilidades de cuidados, educación en el hogar y otras tareas durante la pandemia (CEPAL/OIT, 2020[54]; OCDE, 2020[42]). Además de agravar las desigualdades entre los géneros en el tiempo de trabajo no remunerado y remunerado, sin duda, el aumento de la carga de trabajo no remunerado está incidiendo

en la salud mental, y expone a las mujeres a mayores niveles de estrés y ansiedad. Según una encuesta realizada durante la cuarentena en Chile, las mujeres experimentaron una mayor prevalencia de síntomas de problemas de salud mental que los hombres, y se sintieron más abrumadas y estresadas (63,3%, frente al 46,3% de los hombres) (CEPAL, 2021[3]). Las mayores tasas de pobreza que registraban las mujeres antes de la pandemia también pueden agravar las desigualdades entre los géneros en cuanto a los ingresos y la pobreza. Se estima que, tras la crisis, 118 millones de mujeres de la región vivirán en la pobreza absoluta (cifra que contrasta con la población total de pobres de 187 millones registrada en 2019) (CEPAL, 2021[53]; CEPAL, 2021[3]).

Las medidas de confinamiento adoptadas para limitar la propagación del virus probablemente han aumentado el riesgo de violencia, explotación y acoso al que se enfrentan las mujeres. La frustración y la incertidumbre provocadas por las situaciones de confinamiento pueden provocar la ira de los hombres, que se manifiesta en un aumento de la violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar (OCDE, 2021[55]; OCDE, 2020[56]). Además, las restricciones de viaje, el aumento de la dependencia económica y la interrupción de los servicios de apoyo hacen que las mujeres víctimas de abusos puedan verse atrapadas en situaciones peligrosas (OCDE, 2020[57]). Existe la percepción generalizada de que la magnitud de la violencia contra las mujeres en América Latina se ha convertido en una “pandemia en la sombra”, aunque no se dispone de datos oportunos y de calidad para comprender plenamente el alcance de este problema (ONU-Mujeres, 2020[58]). La información disponible muestra resultados dispares entre los distintos países. Por ejemplo, entre aquellos de la región que han comunicado los datos de llamadas a los centros de ayuda correspondientes al período de marzo a junio de 2020, su número aumentó en términos interanuales con respecto a 2019 en México, Paraguay y Perú, mientras que disminuyó en otros países, como Ecuador y la República Dominicana (CEPAL, 2021[3]). Sin embargo, estas tendencias deben interpretarse con cautela, ya que un descenso de las llamadas puede no corresponderse con una reducción de las tasas de violencia, ya que es posible que las mujeres afronten mayores limitaciones en el uso de las líneas de atención durante los períodos de confinamiento. Los datos disponibles sobre feminicidios también son dispares, pero muestran una disminución en el número de casos reportados en 8 de los 10 países de los que existen datos disponibles (Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú). Los datos correspondientes a Panamá se mantienen estables, y los de México apuntan a un aumento entre marzo y junio de 2020 con respecto al mismo período de 2019 (CEPAL, 2021[3]).

En el momento de redactar este informe, la encuesta mundial de Gallup (correspondientes a 2020) arroja algo de luz sobre el impacto de los primeros meses de la pandemia en el bienestar de las personas con relación a varias dimensiones (véase el Recuadro 5.2). Entre 2019 y 2020, la proporción de mujeres que aseguraban estar satisfechas con su nivel de vida o que tenían a alguien con quien contar para obtener apoyo se redujo en mayor medida que la de los hombres; la satisfacción de las mujeres con la vida también disminuyó más que la de los hombres (Gráfico 5.9).

Recuadro 5.2. Desigualdades en el efecto de la pandemia en función del bienestar reportado por la propia persona

En el momento de redactar este informe se disponía de muy pocos datos comparables a nivel internacional para contrastar los resultados de bienestar antes y después del inicio de la pandemia, y los datos que permitían establecer comparaciones entre diferentes grupos de población eran todavía más escasos. Sin embargo, estaban disponibles los resultados de la Encuesta Gallup Mundial correspondientes a 2020 para todos los países analizados y para la mayoría de los de la OCDE, lo que proporciona cierta indicación sobre el impacto del primer año de la pandemia en varios aspectos del bienestar reportado por las propias personas. Habida cuenta de la evolución de la pandemia a lo largo del año, con picos y descensos de la tasa de infección del virus en distintos momentos y en diferentes países, resulta fundamental el momento

en el que se desarrolló el trabajo de campo de la encuesta (OCDE, a continuación[59]). En los países analizados, la recopilación de datos correspondientes a 2020 la hizo Gallup entre el 21 de agosto de 2020 y el 6 de enero de 2021[1]. Aunque esto comprende un prolongado período de tiempo, la pandemia ya estaba muy avanzada incluso en el momento en que se realizaron las primeras encuestas. Pese a que puede que durante años no sea posible comprender el verdadero impacto de la pandemia en los distintos aspectos del bienestar de las personas, los datos disponibles de la Encuesta Gallup Mundial pueden proporcionar algunas ideas iniciales sobre una serie de dimensiones subjetivas de la vida de las personas con arreglo a una serie de indicadores reportados por ellas mismas. El Gráfico 5.9 muestra el efecto diferenciado de los primeros meses de la pandemia correspondiente a tres variables: la satisfacción con el nivel de vida (panel A), la satisfacción con la vida (panel B) y el apoyo de la red social (panel C).

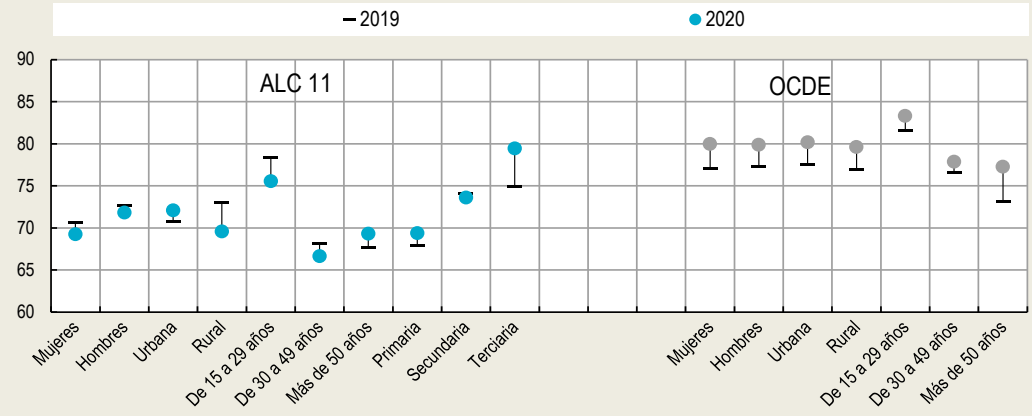
Con arreglo a los tres indicadores que aquí se muestran, la magnitud del efecto y el nivel de diferenciación entre los grupos fue mayor en el caso de los países analizados que en el promedio de la OCDE. En los países de la OCDE, la satisfacción con el nivel de vida aumentó en todos los grupos de los que se dispone de datos entre 2019 y 2020 (los desgloses por nivel educativo correspondientes al promedio de la OCDE no estaban disponibles con una cobertura de datos suficiente para ser incluidos en el análisis), lo cual refleja el papel amortiguador que han tenido las políticas públicas en la protección de las condiciones materiales de las personas (mediante planes para conservar el empleo, prestaciones de desempleo y asistencia social más generosas, etc.) durante el primer año de la crisis (OCDE, a continuación[59]).

No obstante, en los países del grupo analizado, el promedio de la proporción de personas satisfechas con su nivel de vida se redujo muy poco (del 72% en 2019 al 71% en 2020). Si bien las variaciones en la satisfacción con el nivel de vida fueron pequeñas en el caso de todos los grupos, el Gráfico 5.9 destaca algunas referencias tanto en la magnitud como en la dirección de los distintos indicadores. En general, entre los países analizados, la proporción de personas satisfechas con sus condiciones de vida se redujo algo más en el caso de las mujeres que en el de los hombres; cayó en las zonas rurales, mientras que aumentó ligeramente en las zonas urbanas; se contrajo entre los jóvenes, mientras que avanzó levemente entre los adultos de mediana edad y los adultos mayores; por último, aumentó en 5 puntos porcentuales (del 75% en 2019 al 80% en 2020) entre las personas con educación terciaria, mientras que se mantuvo prácticamente estable en el caso de aquellas con educación primaria (subió 1 punto porcentual) y en el de aquellas con educación secundaria.

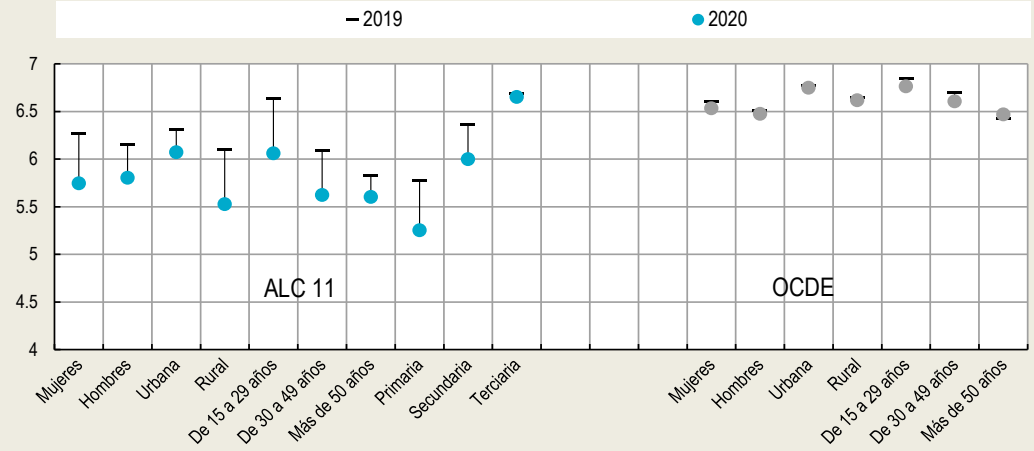
Las diferencias en satisfacción con la vida y apoyo de la red social son más marcadas. Mientras que, en los países de la OCDE, ambos indicadores experimentaron variaciones marginales entre 2019 y 2020, los cambios fueron mucho mayores entre los países analizados: las disminuciones en la satisfacción con la vida fueron mayores para las mujeres (-0,5 puntos) que para los hombres (-0,3), para quienes viven en zonas rurales (-0,6) que para quienes viven en centros urbanos (-0,2), para los jóvenes (-0,6) que para las personas del grupo de máximo rendimiento (-0,5) y para las personas mayores (-0,2), y para los que tienen un bajo nivel educativo (-0,5) que para los que han completado la educación terciaria (-0,04). Las mujeres y las personas que viven en zonas rurales también experimentaron los mayores descensos en el apoyo de su red social, mientras que se observan patrones ligeramente distintos si se tienen en cuenta la edad (las personas de 30 a 49 años muestran la mayor reducción) y la educación (las personas con educación secundaria muestran un mayor descenso que las demás).

Gráfico 5.9. Impactos diferenciados de la pandemia en distintas medidas de bienestar reportado por las propias personas

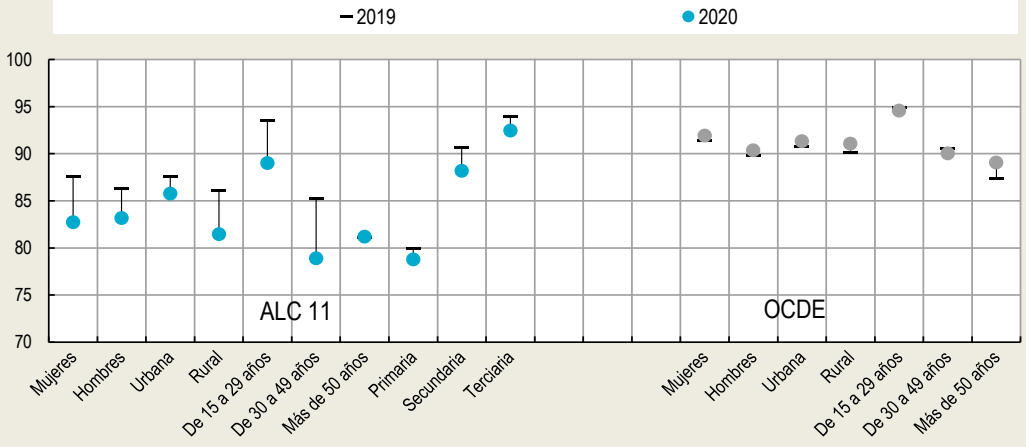
Panel A: Proporción de personas satisfechas con su nivel de vida, porcentaje 2019 comparado con 2020



Panel B: Valores medios de satisfacción con la vida, escala de 11 puntos de la "peor" (0) a la "mejor" (10) vida posible, 2019 comparado con 2020



Panel C: Proporción de personas que tienen a alguien con quien contar en caso de necesidad, porcentaje, 2019 comparado con 2020



Nota: Indicadores seleccionados de la Encuesta Gallup Mundial.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx

StatLink https://stat.link/862oxl

Notas:
1. Las fechas de recopilación de datos en 2020 son las siguientes: 7 sep. - 20 nov. de 2020 en Argentina; 10 sep. – 11 nov. de 2020 en Brasil; 11 sep. – 16 nov. de 2020 en Chile; 21 ago. – 27 oct. de 2020 en Colombia; 15 sep. de 2020 – 4 ene. de 2021 en Costa Rica; 26 de ago. – 23 oct. de 2020 en Ecuador; 8 sep. – 18 nov. de 2020 en México; 28 nov. – 28 dic. de 2020 en Paraguay; 29 oct. de 2020 – 6 ene. de 2021 en Perú; 24 sep. – 23 oct. de 2020 en la República Dominicana, y 24 sep. – 30 nov. de 2020 en Uruguay.

Aspectos para el desarrollo estadístico en materia de estadísticas sobre género

Para poder comprender mejor las realidades de las mujeres y las niñas, y diseñar políticas que atiendan eficazmente sus necesidades, resulta fundamental aumentar la disponibilidad de estadísticas de género de gran calidad que sean comparables. Tanto los gobiernos como las oficinas de estadística de la región de ALC han reconocido la importancia de las estadísticas de género para monitorear el bienestar y el desarrollo sostenible, especialmente en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.[18] La pandemia ha subrayado aún más la necesidad de disponer de información específica por géneros para fundamentar las respuestas de las políticas públicas y las estrategias de recuperación eficaces. Muchas oficinas de estadística de América Latina han dado prioridad a la recopilación de datos desglosados por sexo (por ejemplo, sobre los resultados del mercado laboral) pese a las presiones y limitaciones adicionales a las que se han enfrentado debido a la pandemia, con frecuencia mediante enfoques innovadores como la adaptación de las operaciones existentes, la generación de nuevas operaciones estadísticas o la mejora de las fuentes alternativas y los registros administrativos (CEPAL/ONU-Mujeres, 2021[60]).

Además de mejorar la disponibilidad de los datos desglosados por sexo siempre que sea posible, se requieren datos mejores sobre varios aspectos concretos e infracuantificados que afectan solamente o de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas, como la discriminación en el lugar de trabajo, el acoso sexual, el trabajo no remunerado, la salud y la autonomía reproductiva, la autonomía económica y las distintas formas de violencia de género.

Las encuestas sobre el uso del tiempo son una fuente de información especialmente rica sobre las actividades que realizan hombres y mujeres, así como sobre la distribución del tiempo que dedica cada género a estas actividades. La medición del uso del tiempo cuenta con una larga trayectoria en la región, en la que en las últimas cuatro décadas se ha ido desarrollando gradualmente un trabajo centrado en el género sobre cuestiones de uso del tiempo mediante la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019[61]). En 2015, los Estados miembros de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe adoptaron la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) con el fin de armonizar las encuestas sobre el uso del tiempo en la región (CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres, 2016[62]). A fecha de 2019, 19 países de la región habían realizado al menos una encuesta sobre el uso del tiempo (CEPAL, 2019[61]).

Sin embargo, no todas estas encuestas están plenamente incorporadas en el sistema de estadísticas oficiales a modo de herramienta habitual de recopilación de datos, y los países todavía no aplican de forma universal el sistema de clasificación CAUTAL (CEPAL, 2016[63]). Además, los grupos vulnerables, como la población rural y las minorías étnicas y raciales, suelen estar infrarrepresentados en las muestras de las encuestas (CEPAL, 2016[63]). También deben tenerse en cuenta aspectos relacionados con la forma más eficaz de recopilar datos sobre el uso del tiempo. En los últimos años se han empleado dos enfoques principales: incluir una breve lista de preguntas sobre el uso del tiempo a modo de módulo dentro de las encuestas a los hogares existentes, o realizar una encuesta independiente que recoja información más detallada sobre la amplitud de las actividades de uso del tiempo. La ventaja de la primera es que es más eficiente en función de los costos y permite hacer un análisis conjunto del uso del tiempo con otros módulos de la encuesta. La segunda proporciona mucha más información, aunque a un costo mayor. Lo ideal sería emplear ambas modalidades, incluyendo repetidamente un número limitado de preguntas en las encuestas periódicas a los hogares, complementadas con encuestas de menor frecuencia para proporcionar más contexto. Para que esto suceda, la medición del uso del tiempo debe integrarse como aspecto fundamental de la planificación y la elaboración de presupuestos de estadísticas a nivel nacional (Villatoro, 2017[64]). Además, debe aplicarse un enfoque armonizado para medir el uso del tiempo de manera coherente, a fin de garantizar que los resultados sean comparables entre países y en el tiempo. Por último, en la medida de lo posible, la inclusión de una muestra representativa de las poblaciones más

vulnerables podría arrojar luz sobre las relaciones entre las carencias en el uso del tiempo y otras formas de desventajas que experimentan las mujeres vulnerables.

Desigualdades a lo largo del ciclo de vida

El ciclo de vida puede dividirse en cuatro etapas básicas: infancia, juventud, edad adulta y vejez. Aunque en lo que a bienestar se refiere, cada una de estas etapas plantea sus propias oportunidades, riesgos y dificultades, la infancia, la juventud y la vejez constituyen períodos de especial vulnerabilidad. El bienestar de los niños depende en gran medida de su familia y su entorno, y las experiencias de los primeros años de vida pueden ser fundamentales para determinar los resultados a lo largo de la vida (OCDE, 2021[65]). A medida que los niños se transforman en jóvenes adultos, adquieren independencia, pero su capacidad para prosperar con más autonomía suele depender del éxito en su transición a la vida laboral y de las competencias y oportunidades en que se sustenta. También deben hacer frente a las exigencias de pasar de un papel de dependencia en el seno de sus familias a fundar las suyas propias (estos roles, a su vez, dependen en gran medida del género). Por último, cuando las personas pasan de la edad adulta a la vejez, comienzan nuevamente una etapa de mayor dependencia, y aumentan sus necesidades de atención sanitaria y otro tipo de apoyo (OCDE, 2017[66]; Cecchini et al., 2015[67]).

En esta sección se examinarán más detenidamente estas diferencias que se producen en el ciclo de vida, prestando especial atención a la infancia, la juventud y la vejez, en comparación con la edad adulta. En capítulos anteriores ya se han abordado varios indicadores relativos al bienestar de los niños y los jóvenes adultos, dada su importancia para los resultados sociales en su conjunto.[19] Estos indicadores, relativos a la mortalidad infantil, la malnutrición infantil, el empleo de los jóvenes y el logro educativo, no se abordarán en detalle aquí, aunque se proporcionarán referencias a los gráficos incluidos en otras secciones de este informe cuando proceda.

La pandemia de COVID-19 podría agravar las diferencias intergeneracionales en los resultados de bienestar de América Latina. Los niños se encuentran entre las “víctimas ocultas” de la pandemia. Pese a haberse librado de las elevadas tasas de mortalidad causadas por el virus, se han visto muy afectados por las perturbaciones a todos los niveles, sobre los niños de hogares en los que los factores de estrés preexistentes se han visto agravados por la crisis. La pandemia también ha hecho que los adolescentes y los jóvenes adultos vulnerables se vean expuestos a un mayor riesgo de desvinculación y abandono de la educación y la formación, en una región en la que el desempleo juvenil ya es elevado. Por último, el brote de COVID-19 ha planteado graves problemas a las personas mayores. Estas no solo se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir graves complicaciones de salud en caso de infección, sino que también se ven afectadas de forma desproporcionada por las medidas de confinamiento que limitan su acceso a la atención y el apoyo.

Los datos que se recogen en esta sección relativos a los jóvenes y las personas mayores resumen los resultados en relación con la población adulta de “mediana edad”. En general, el grupo de jóvenes comprende la población de entre 15 y 29 años (por lo que existe cierto solapamiento con los niños), mientras que el grupo de mediana edad abarca la población de entre 30 y 55 años, y la población de personas mayores quienes superan los 55 años. Sin embargo, el rango de edad exacto empleado difiere para cada uno de los indicadores en función de la información disponible. En el Statlink de cada gráfico se incluyen más detalles.

Desigualdades durante el ciclo de vida: niños

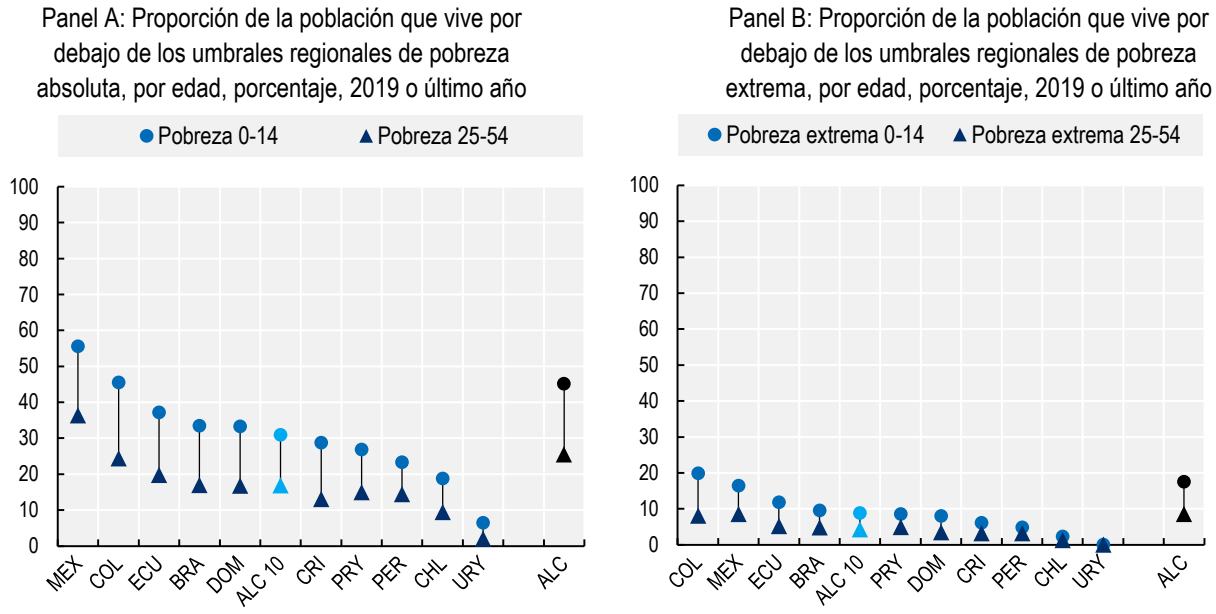
La infancia constituye un período crítico para factores determinantes que intervienen en el desarrollo individual y que seguirán condicionando el bienestar a lo largo de la vida. En este sentido, las experiencias

de la infancia son importantes tanto para el bienestar que disfrutan los niños en la actualidad como para los recursos que ayudarán a mantener el bienestar social en el tiempo. En 2019, los niños de 0 a 14 años no alcanzaban la cuarta parte (24%) de la población de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2020[68]). Existen numerosas investigaciones que ponen de relieve las relaciones entre el bienestar en la infancia y en la edad adulta, especialmente en lo que respecta a la influencia de las condiciones de la familia y las experiencias tempranas de los niños en los resultados académicos en etapas posteriores de la vida (OCDE, 2021[65]; OCDE, 2015[69]). Dado que los niños son miembros dependientes de la sociedad, en gran medida su bienestar está condicionado por el bienestar de sus familias y comunidades.

Pobreza infantil

Crecer en la pobreza es perjudicial para el bienestar y el desarrollo de los niños, tanto a corto como a largo plazo en la edad adulta (Thévenon et al., 2018[70]). La pobreza en la infancia presenta algunas particularidades que incrementan la vulnerabilidad de los niños. A causa de la dependencia que tienen ellos de sus familias, la pobreza también puede ser acumulativa para los niños y los adolescentes, y la pobreza infantil presenta un importante componente intergeneracional. Existen abundantes datos contrastados relativos a que las personas que viven en condiciones precarias a una edad temprana tienen más probabilidades de experimentar la pobreza como adultos (Kendig, Mattingly and Bianchi, 2014[71]). Por último, los efectos de la pobreza en la infancia pueden ser irreversibles, como sucede con la malnutrición o la recuperación de discapacidades evitables (UNICEF/CEPAL, 2019[72]). Por lo general, en América Latina y el Caribe, cuanto más joven es el grupo de edad, mayor es la incidencia de pobreza (CEPAL, 2018[13]). En 2019, el 31% de los niños de 0 a 14 años vivía en la pobreza de ingresos absoluta en el grupo de países analizados, en comparación con el 17% de los de 25 a 54 años (Gráfico 5.10, panel A). Las tasas de pobreza extrema seguían un patrón similar, y afectaban al 9% de los niños de 0 a 14 años, en comparación con el 4% de la población de 25 a 54 años (Gráfico 5.10, panel B). Los resultados del grupo analizado son muy dispares, pero en general son acordes a los niveles nacionales que se describen en el Capítulo 2. Así pues, en México, la proporción de niños de 0 a 14 años que viven en la pobreza absoluta es prácticamente 9 veces mayor que en Uruguay (Gráfico 5.10, panel A).

Gráfico 5.10. Los niños experimentan niveles muy elevados de pobreza absoluta y extrema en comparación con la población en edad de trabajar



Nota: Los datos sobre pobreza absoluta y extrema se refieren a las tasas regionales de pobreza y pobreza extrema según los cálculos de la CEPAL. Los datos se refieren a 2019 en el caso de todos los países latinoamericanos, excepto México (2018) y Chile (2017). ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL. El promedio de ALC 10 excluye Argentina, ya que no hay datos disponibles.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp

StatLink https://stat.link/5aefd2

Trabajo infantil

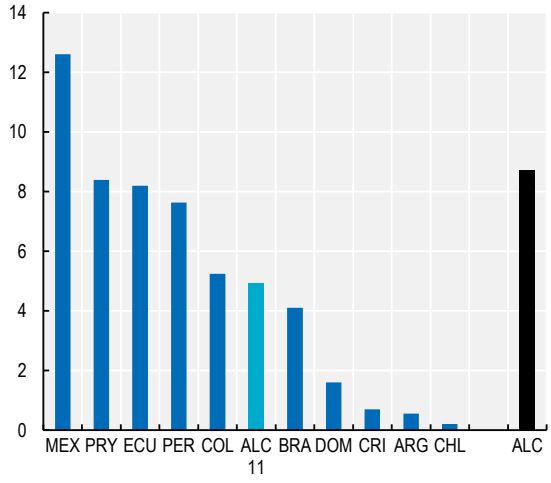
Una de las principales consecuencias de la pobreza infantil es que empuja a los niños a trabajar (Thévenon et al., 2018[70]). Por lo general, los niños suelen trabajar porque sus propias condiciones materiales y las de sus familias dependen de ello, ya que el trabajo infantil forma parte del modo en que las familias —sobre todo las pobres— atenúan los impactos negativos en sus ingresos (Thévenon et al., 2018[70]). El trabajo infantil parece más sensible a los cambios en el ingreso familiar permanente y los salarios de los adultos que a las variaciones en los sueldos de los niños. Por si fuera poco, los niños son vulnerables por naturaleza, y los adultos podrían aprovecharse de esto. Las consecuencias del trabajo infantil afectan prácticamente a todas las dimensiones de la vida. Además de los impactos en su salud física y psicológica y su desarrollo social, los niños que trabajan suelen tener un acceso limitado a la escuela, menos seguridad y menos tiempo para el ocio y las interacciones con sus amigos y familia (Santana, Kiss and Andermann, 2019[73]).

Varios países latinoamericanos deben continuar avanzando para lograr la meta que establece el ODS 8.7 de erradicar el trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025 (ONU-DESA, 2020[74]). Según los datos más recientes, en promedio, en el grupo analizado, el 5% de los niños de 10 a 14 años trabajan. En México, más de 1 de cada 10 niños de 10 a 14 años trabaja, dato que contrasta con 1 de cada 5.000 en Chile (Gráfico 5.11, panel A). En el grupo analizado, la incidencia del trabajo infantil remunerado es el doble de alto entre los niños (11%) que entre las niñas (Gráfico 5.11, panel B).[20]

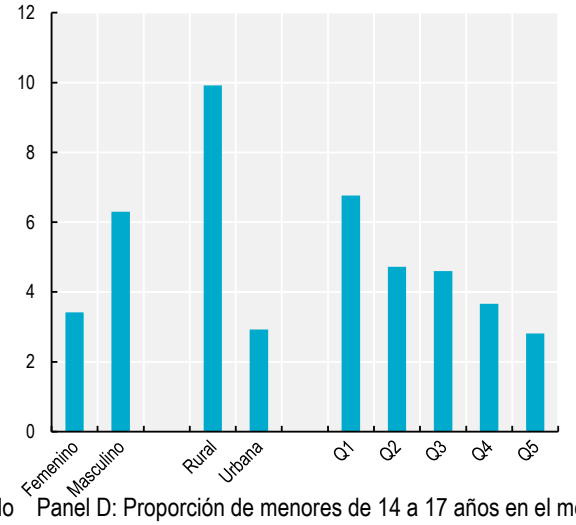
El trabajo infantil es asimismo más común en las zonas rurales (10%) que en las zonas urbanas (3%) en el grupo analizado, y más de la mitad de todo el trabajo infantil (52%) se concentra en la agricultura (OIT, 2017[75]). El trabajo infantil se concentra en el quintil con menores ingresos en el grupo analizado (7%). No obstante, también está presente en los quintiles con ingresos más altos (3,7% en el quintil 4 y 2,8% en el quintil 5) del grupo analizado, lo que indica que la pobreza no es el único factor que lo determina (Gráfico 5.11, panel B). Por último, pese a que únicamente se dispone de datos para una selección limitada de países, el trabajo infantil presenta una incidencia mucho mayor en las comunidades indígenas en torno a los 15 años (Gráfico 5.11, paneles C y D). En Ecuador, Perú, Brasil y México, trabajan entre el 30,4% y el 43,5% de los niños indígenas de 14 a 17 años. Estas proporciones son muy superiores a las observadas entre los no indígenas.[21]

Gráfico 5.11. Los niños varones, así como los niños de zonas rurales, más pobres e indígenas tienen más probabilidades de ocupar un trabajo infantil

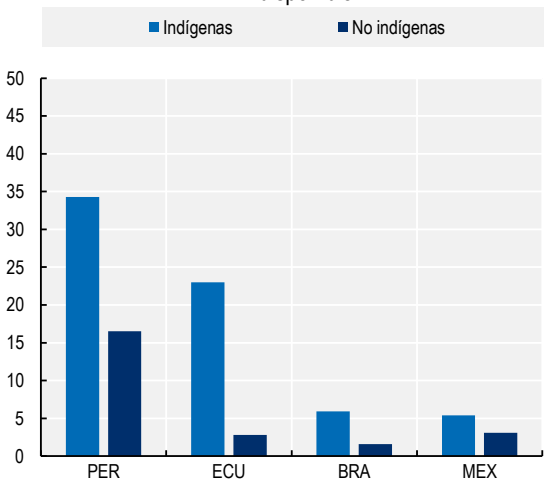
Panel A: Proporción de niños empleados de 10 a 14 años, porcentaje, 2018 o último año disponible



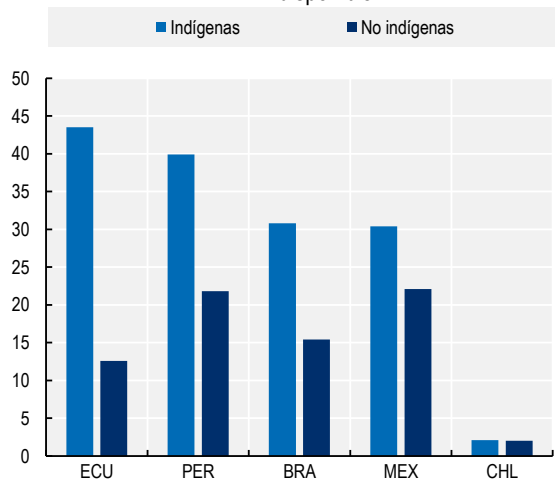
Panel B: Promedio de la proporción de niños empleados de 10 a 14 años por género, zona en la que viven y quintil de renta equivalente en el grupo analizado de ALC 11, porcentaje, 2018 o último año disponible



Panel C: Proporción de menores de 5 a 14 años en el mercado laboral por origen étnico, porcentaje, 2016 o último año disponible



Panel D: Proporción de menores de 14 a 17 años en el mercado laboral por origen étnico, porcentaje, 2016 o último año disponible



Nota: En los paneles A y B, el último año del que hay datos disponibles es 2019 en el caso de Argentina y 2015 en el de Chile y Perú. En los paneles C y D, el último año del que hay datos disponibles es 2015 en el caso de Brasil y Chile.
Fuente: Base de datos SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial), https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/, y CEPAL (2020), "Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: desafíos desde una perspectiva territorial".

StatLink https://stat.link/1uzf4r

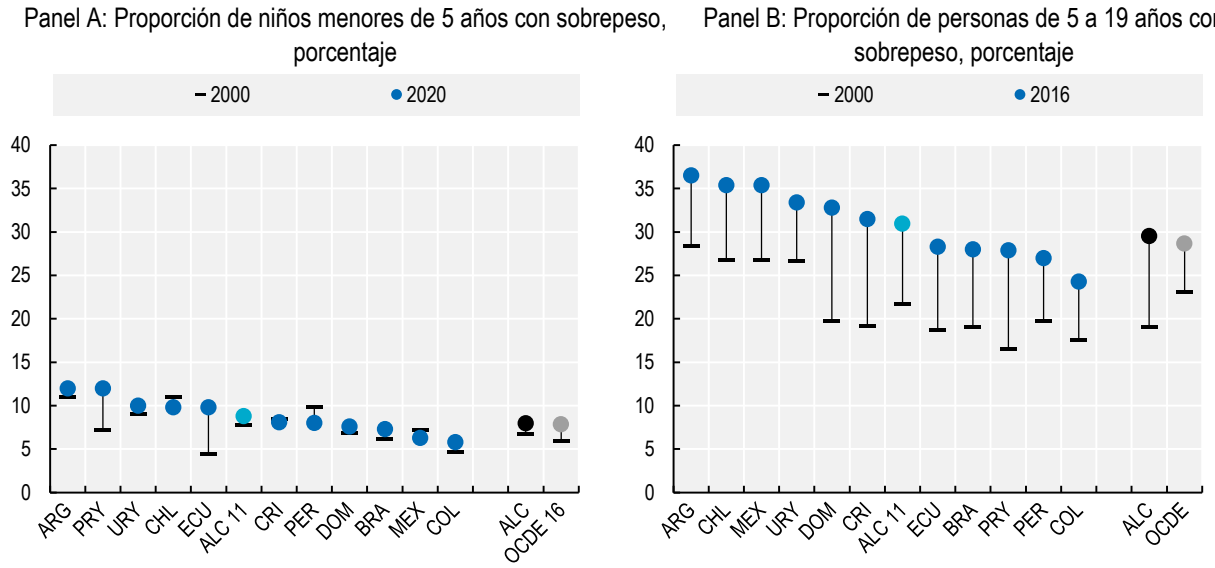
Malnutrición infantil

Aunque la salud infantil ha mejorado en numerosos aspectos, muchos niños de América Latina siguen siendo vulnerables y se enfrentan a graves riesgos —algunos específicos de su grupo de edad—. Iniciativas de desarrollo internacionales como los ODS han contribuido a la mejora de la salud infantil y al monitoreo del efecto de las medidas concretas en América Latina, (Arnesen et al., 2016[76]; Grove et al., 2015[77]), y en las dos últimas décadas la región ha avanzado en la reducción de la mortalidad infantil. Esto se refleja en un descenso no solo del número de niños que fallece antes de cumplir los 5 años (véase el Capítulo 3), sino también en el número de niños afectados por enfermedades diarreicas y neumonía (OPS, 2017[78]). Un componente fundamental del capital humano consiste en que las personas estén bien alimentadas a lo largo de su vida, pero muchos niños de América Latina no pueden acceder a una alimentación suficiente y nutritiva ni logran una dieta equilibrada que satisfaga sus necesidades para un desarrollo y un crecimiento óptimos, lo que en última instancia les permitirá tener una vida sana y activa (OCDE/Banco Mundial, 2020[79]). La malnutrición a una edad temprana acarrea consecuencias en otros ámbitos del bienestar, como los resultados académicos y cognitivos en etapas posteriores de la vida, lo cual condiciona el nivel socioeconómico de la persona a largo plazo (OCDE/Banco Mundial, 2020[79]). Como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la meta 2.2 de los ODS pretende poner fin a todas las formas de malnutrición de aquí a 2030 (ONU-DESA, 2020[74]).

Como se expone en el Capítulo 4, en los cinco países analizados para los que se disponía de datos (Argentina, Colombia, México, Perú y Paraguay), en promedio, 1 de cada 10 niños menores de 5 años sufre retraso del crecimiento (Gráfico 4.18, panel A), con porcentajes que van desde menos del 2% en Chile a casi el 13% en Colombia. En promedio, las tasas de retraso del crecimiento se han reducido casi a la mitad con respecto a 2000. La disminución más pronunciada se ha registrado en Paraguay y Perú (más de 10 puntos porcentuales) y la menos pronunciada en Argentina y Chile (1 punto porcentual o menos). En estos países las tasas de retraso del crecimiento ya se encontraban por debajo del promedio regional.

El sobrepeso y la obesidad son otra de las consecuencias de la malnutrición. El Capítulo 4 puso de relieve que, en promedio, en los países analizados casi el 60% de la población adulta presenta sobrepeso y el 25% es obesa, lo que supone un aumento respectivo del 50% y el 21% con relación a 2000. Si bien la prevalencia de sobrepeso suele aumentar con la edad, en la infancia es significativo en la región de ALC. Pese a que la proporción de niños menores de 5 años con sobrepeso varió muy poco entre 2000 y 2020 en los países analizados (del 7,8% al 8,8%), entre los niños de 5 a 19 años se produjo un aumento mucho mayor (Gráfico 5.12, panel A), ya que pasó del 22% en 2000 al 31% en 2016, un nivel que supera en 1,5 puntos porcentuales el promedio regional de ALC (29,5%) y en 3 puntos el promedio de la OCDE (29%).

Gráfico 5.12. La proporción de personas de 5 a 19 años con sobrepeso aumentó de 1 de cada 5 en 2000 a casi 1 de cada 3 en 2016



Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC comprende 27 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. OCDE 16 incluye a Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, la República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Japón, México, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Eslovaca y los Estados Unidos, debido a la falta de datos de otros países de la OCDE. En el panel B, el promedio regional de ALC comprende 33 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento.
Fuente: OMS, https://apps.who.int/gho/data/view.main.CHILDOVERWEIGHTv (panel A) y https://apps.who.int/gho/data/node.imr.NUTOVERWEIGHTPREV?lang=es (panel B).

StatLink https://stat.link/vtbesq

Resultados de bienestar de los jóvenes adultos

Una cuarta parte de la población latinoamericana tiene edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, y dos tercios de este grupo de edad (más de 100 millones de jóvenes) vive en hogares pobres o vulnerables (OCDE/CAF/CEPAL, 2016[80]). Además, la mayoría de los jóvenes, sobre todo de hogares que se encuentran en el segmento inferior de la distribución de los ingresos, tan solo tienen acceso a servicios de mala calidad y trabajos precarios, al tiempo que su ahorro es escaso y su movilidad social es limitada. Esta fuerte desconexión entre las expectativas y demandas de la sociedad, por un lado, y los resultados socioeconómicos reales, por otro, ha alimentado el descontento social y debilitado la confianza en las instituciones democráticas (OCDE/CAF/CEPAL, 2016[80]). En el Gráfico 5.13 se resumen algunas de estas disparidades intergeneracionales en el grupo de países analizados. Como ya se ha indicado, la categoría de los jóvenes se concentra en las personas de entre 15 y 29 años y la de mediana edad en los adultos de entre 30 y 55 años, aunque el rango de edad exacto es distinto para cada indicador (para obtener más información véase el Statlink correspondiente al Gráfico 5.13).

En los indicadores seleccionados de condiciones materiales (Gráfico 5.13, panel A), en promedio, en 2019 los jóvenes de los países analizados solo tenían la mitad de probabilidades de trabajar que los adultos de mediana edad (con una tasa de empleo del 39% para los jóvenes de 15 a 24 años, frente al 77% para los de 25 a 54 años). Aunque esto puede reflejar el hecho de que los más jóvenes tienen más probabilidades de dedicarse a la educación o a otras actividades, su tasa de desempleo es tres veces mayor (18,8%, frente al 6,1% del grupo comparativo), lo que sugiere que los jóvenes que buscan activamente empleo tienen más dificultades para acceder al mercado laboral que las personas de más edad. Los jóvenes también son más propensos a trabajar en el empleo informal que el grupo comparativo de mediana edad

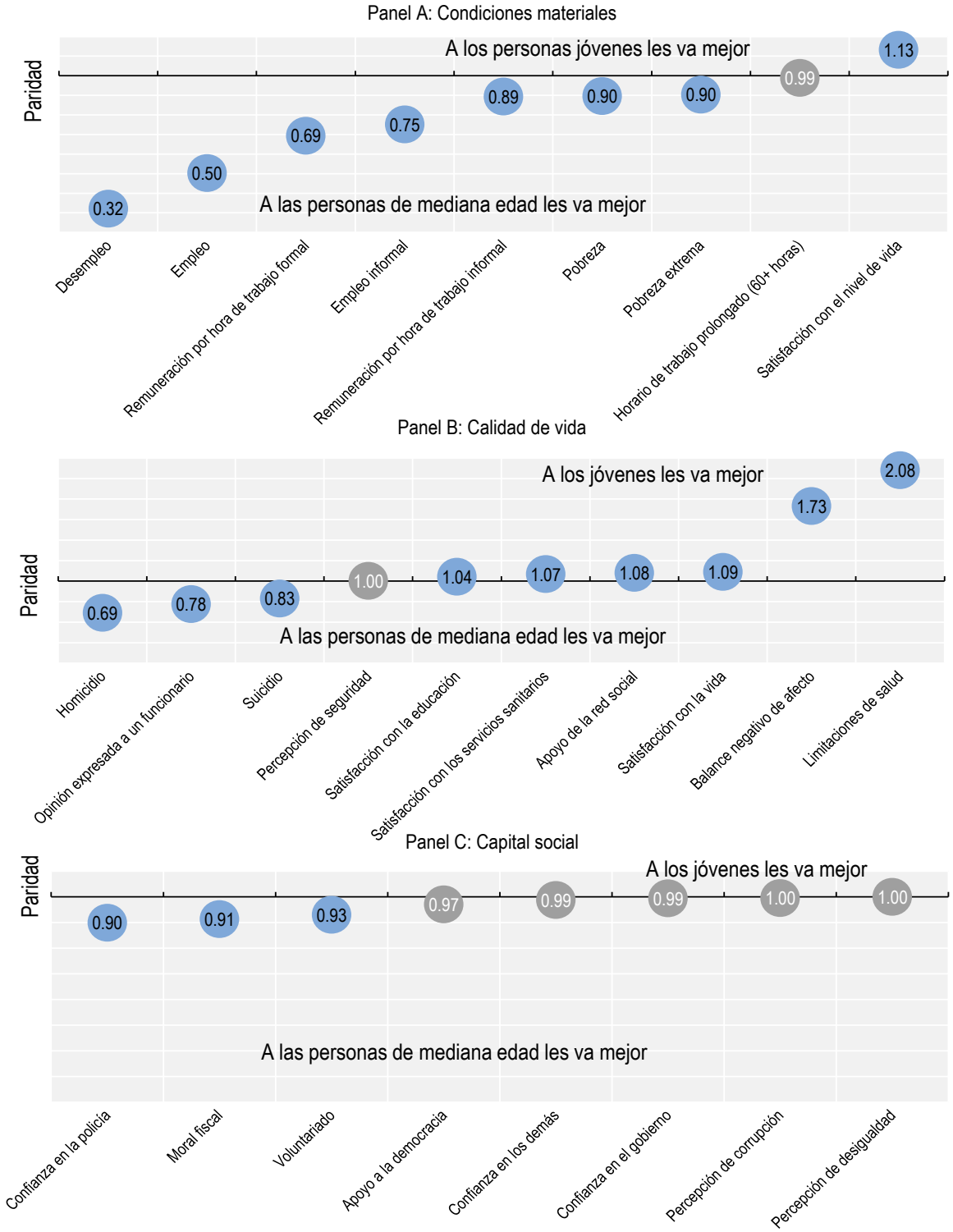
(con una tasa de empleo informal del 64% para los jóvenes de 15 a 24 años, frente al 48% para los de 25 a 54 años en 2019). La falta de oportunidades de empleo decentes es uno de los principales factores que afectan a la inclusión de los jóvenes en los países del grupo analizado y en el conjunto de la región, y existen estrechos vínculos entre el empleo informal, la pobreza y la exclusión social (OIT, 2015[81]). De hecho, es más probable que los jóvenes vivan en la pobreza absoluta y la pobreza extrema que los adultos de mediana edad. Sin embargo, los jóvenes tienen un 13% más de probabilidades de estar satisfechos con su nivel de vida que los adultos de mediana edad.

En lo que a calidad de vida se refiere, el panorama está más equilibrado. Dado que la salud se deteriora con la edad, los jóvenes tienen una salud mucho mejor que las personas de mediana edad en todos los países analizados. Por ejemplo, presentan la mitad de probabilidades de asegurar tener limitaciones de salud que les impiden desarrollar sus actividades habituales y un 73% menos de probabilidades de que su balance de emociones sea negativo (es decir, experimentar más emociones negativas que positivas en un día concreto), e indican mayores niveles de satisfacción con la vida, apoyo de la red social y satisfacción con la educación y los servicios sanitarios. Sin embargo, pese a que no existen diferencias entre los niveles de percepción de seguridad que declaran los jóvenes y las personas de mediana edad, los primeros tienen un 31% más de probabilidades de ser víctimas de homicidio, sobre todo los hombres jóvenes (véase más abajo). En los países analizados, los jóvenes también tienen un 17% más de probabilidades de suicidarse que las personas de mediana edad.

Por último, con respecto a los indicadores de capital social seleccionados, los jóvenes se muestran menos propensos a manifestar su opinión a un funcionario, a confiar en la policía, a considerar la evasión fiscal totalmente injustificada y a las labores de voluntariado. Sin embargo, es ligeramente más probable (8%) que confíen en su gobierno nacional. Por último, existen escasas diferencias claras entre los jóvenes y las personas de mediana edad en cuanto a la confianza en los demás, la percepción de corrupción, la percepción de desigualdad (la proporción de personas que piensan que la distribución de los ingresos es injusta) y el apoyo a la democracia sobre las demás formas de gobierno.

Gráfico 5.13. Las diferencias en los resultados de bienestar son dispares si se comparan los jóvenes con las personas de mediana edad, aunque los primeros tienen más probabilidades de estar desempleados, ocupar empleos informales y ser víctimas de homicidio

Ratios de edad (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de bienestar actual y capital social, 2019 o último año disponible



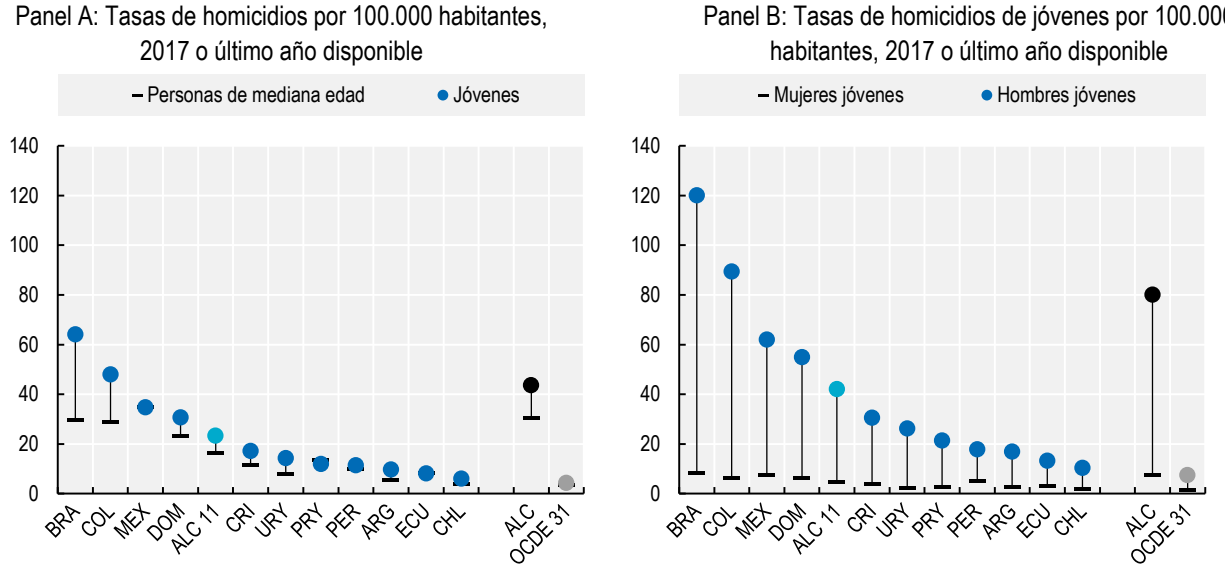
Nota: Cada ratio de desempeño constituye la media simple por grupo de edad calculada en los 11 países analizados de los que existen datos disponibles para todos los grupos de desigualdad que se han tenido en cuenta. Debido a esto, las ratios de desempeño pueden comprender un subconjunto de los 11 países analizados. Las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para los jóvenes, mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las personas de mediana edad —incluidos los indicadores negativos, en los que se ha invertido la puntuación—. Los círculos grises denotan que no existe una diferencia clara entre los jóvenes y las personas de mediana edad, lo que se define como ratios de edad a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes en inglés consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink

StatLink https://stat.link/iehnju

Homicidios y violencia

El homicidio es, con diferencia, la principal causa de muerte entre los jóvenes en América Latina, y los hombres jóvenes representan la gran mayoría tanto entre las víctimas como entre los autores (UNODC, 2019[82]). La tasa media de homicidios correspondiente a los jóvenes fue de 23 por 100.000 habitantes en 2017 en los países analizados, muy inferior al promedio regional de ALC (44 por 100.000) aunque sigue siendo 5 veces superior al promedio de la OCDE (4,3 por 100.000) (Gráfico 5.14, panel A). En los países analizados, los hombres jóvenes tienen 9 veces más probabilidades que las mujeres jóvenes de morir por homicidio, y la tasa de homicidios en los hombres jóvenes es de 42 por 100.000, en contraste con 4,5 por 100.000 en el caso de las mujeres jóvenes.

Gráfico 5.14. En los países analizados, los hombres jóvenes tienen 9 veces más probabilidades que las mujeres jóvenes de morir por homicidio



Nota: Por jóvenes se entiende las personas de 15 a 29 años. Por personas de mediana edad se entiende las personas de 30 a 59 años. Los datos se refieren a 2016 en el caso de todos los países, salvo Argentina y México (2017) y Costa Rica, la República Dominicana y Paraguay (2014). El promedio regional de ALC comprende 25 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento. OCDE 31 excluye a Bélgica, Irlanda, Corea, Lituania, la República Eslovaca y Turquía debido a la falta de datos.
Fuente: UNODC, https://dataunodc.un.org/data/homicide/Homicide%20by%20sex%20and%20age%20group

StatLink https://stat.link/lk9owj

Los factores del aumento de la violencia, en especial la relacionada con la delincuencia organizada, en la región de ALC son complejos. No obstante, la pobreza suele aumentar la probabilidad de que los jóvenes se involucren en actividades delictivas con un mayor riesgo de violencia. Las organizaciones delictivas como las bandas proporcionan a los jóvenes latinoamericanos un sentido de identidad y pertenencia: cuando la pobreza es generalizada, las opciones de empleo son limitadas y el Estado está ausente, muchos jóvenes recurren a las bandas del *barrio* para adquirir poder, ingresos en efectivo, espacio y un sentimiento de pertenencia que no les da ninguna otra institución social (OCDE/CAF/CEPAL, 2016[80]; Escotto, 2015[83]; Soto and Trucco, 2015[84]).

La violencia suele producirse de forma desigual en los territorios de los países latinoamericanos, en los que se registran niveles elevados en las zonas urbanas desfavorecidas. Los barrios marginales y las barriadas de chabolas son a la vez violentos y pobres, un escenario que reproduce y agrava la exclusión social. Los jóvenes de estas zonas soportan la carga de la estigmatización por un modo de vida que se considera violento, por lo que es frecuente que se les niegue la dignidad y la solidaridad. Como consecuencia, muchos son marginados y acaban siendo explotados en prácticas delictivas dirigidas por adultos, en parte porque no pueden exigirse responsabilidades penales a los menores de 18 años (CEPAL, 2014[12]). Los jóvenes también pueden ser víctimas o autores de la violencia colectiva en entornos escolares o comunitarios, ya sea ejercida por grupos de jóvenes contra individuos concretos (jóvenes o no) o por autoridades o grupos de la vecindad contra individuos o grupos de jóvenes. En el ámbito juvenil han cobrado relevancia dos casos de este tipo: el enfrentamiento violento entre grupos de jóvenes, cuyas repercusiones sociales pueden ser graves —en el caso de las bandas, por ejemplo—; y el acoso escolar ejercido a través de las redes sociales —incluido el ciberacoso, del que las chicas son más propensas a ser víctimas— (UNESCO, 2017[85]; OCDE/CAF/CEPAL, 2016[80]).

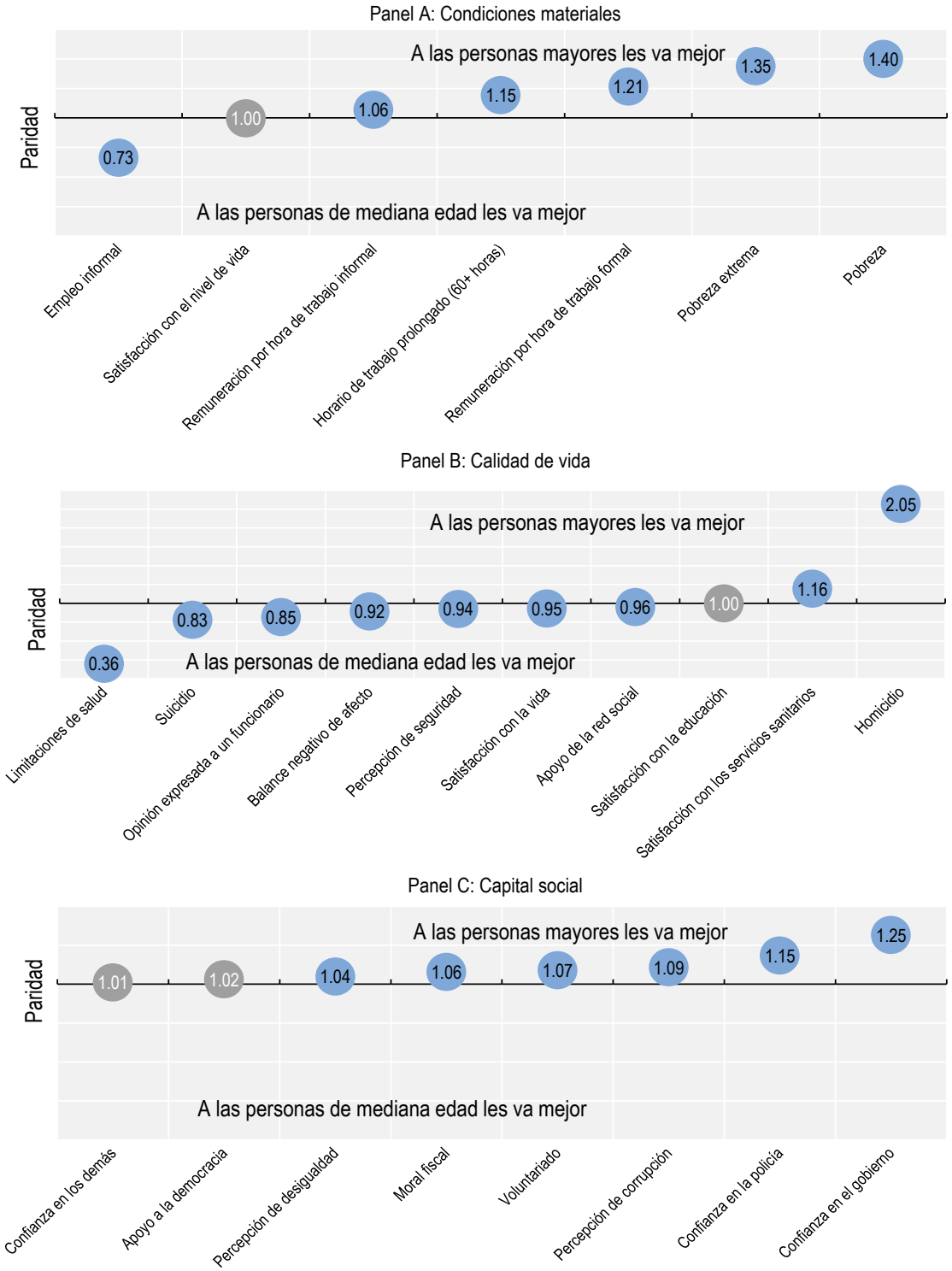
Resultados de bienestar de las personas mayores

América Latina está experimentando una profunda transformación demográfica. A medida que aumenta la esperanza de vida, también lo hace la proporción de personas mayores en la población, así como su edad. Comprender mejor sus necesidades y aprovechar su contribución activa a la sociedad se convierten en retos fundamentales (CEPAL, 2016[8]; Huenchan, 2013[86]). En el Gráfico 5.15 se recoge un resumen de los resultados de bienestar seleccionados correspondientes a la población mayor (en torno a los 55 y mayores), en comparación con la población de mediana edad (entre 29 y 54 años). En lo que se refiere a las condiciones materiales, las personas mayores son un 35% menos propensas a vivir en la pobreza extrema que los adultos de mediana edad y un 40% menos propensas a vivir en la pobreza absoluta. Sus ingresos son superiores a los de su grupo comparativo, con independencia de que trabajen en el sector formal (+21%) o informal (+5%). Sin embargo, no existen diferencias en la satisfacción con el nivel de vida entre los dos grupos, y las personas mayores tienen un 15% menos de probabilidades de trabajar más horas que el grupo comparativo de mediana edad, pero tienen muchas más probabilidades de ocupar un empleo informal, como se detalla más adelante.

No obstante, en lo que se refiere a calidad de vida, la mayoría de los indicadores muestran peores resultados para las personas mayores en los países analizados, con la excepción de la satisfacción con los servicios (salud y educación) y los homicidios. Las personas mayores son casi dos tercios más propensas que el grupo comparativo de mediana edad a indicar limitaciones físicas por motivos de salud, menos propensas a expresar su opinión a un funcionario, más propensas a experimentar más emociones negativas que positivas en un día concreto, menos propensas a sentirse seguras al caminar por su zona, menos propensas a tener a alguien con quien contar en caso de necesidad, más propensas a suicidarse e indican una satisfacción vital ligeramente menor (con una puntuación media de 5,8 en una escala de 11 puntos, frente a 6,1 del grupo comparativo de mediana edad). Estos resultados contrastan con la experiencia de los países de la OCDE, en los que, por lo general, las personas mayores registran unos mejores resultados que las personas del grupo de máximo rendimiento, en especial en lo que se refiere a satisfacción con la vida, lo cual tiene mucho que ver con los problemas de salud mental, los vínculos sociales y el apoyo de la red social [(Gigantesco et al., 2019[87]; Costa and Ludermir, 2005[88]; Kawachi, 2001[89]).

Gráfico 5.15. Mientras que las personas mayores suelen tener menos probabilidades de vivir en la pobreza que el grupo comparativo de mediana edad, sus resultados son inferiores en varios indicadores de calidad de vida

Ratios de edad (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de bienestar actual y capital social, 2019 o último año disponible



Nota: Cada ratio de desempeño constituye la media simple por grupo de edad calculada en los 11 países analizados de los que existen datos disponibles para todos los grupos de desigualdad que se han tenido en cuenta. Debido a esto, las ratios de desempeño pueden comprender un subconjunto de los 11 países analizados. Las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las personas mayores, mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las de mediana edad —incluidos los indicadores negativos, en los que se ha invertido la puntuación—. Los círculos grises denotan que no existe una diferencia clara entre las personas mayores y las de mediana edad, lo que se define como ratios de edad a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink

StatLink https://stat.link/phmlvr

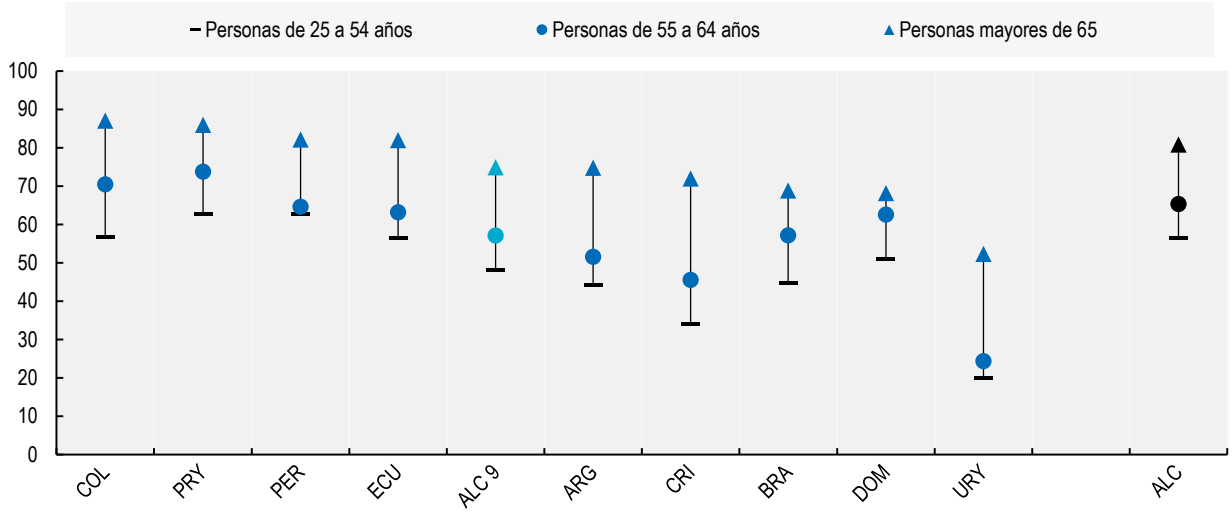
A pesar de este panorama dispar, las personas mayores suelen confiar más en la capacidad de la acción colectiva para atender sus propias necesidades, así como los problemas sociales más amplios a los que se enfrenta América Latina. El grupo de mayor edad es un 25% más propenso a confiar en el gobierno, un 15% más propenso a confiar en la policía, un 9% menos propenso a pensar que el gobierno es corrupto, un 7% más propenso a las labores de voluntariado, un 6% más propenso a creer que la evasión fiscal no está justificada en ningún caso y un 4% menos propenso a creer que la distribución de los ingresos es injusta. Entre la población de personas mayores y de mediana edad no hay una diferencia clara respecto a la confianza en los demás y el apoyo a la democracia frente a otras formas de gobierno.

Empleo informal

Como puede observarse en el Gráfico 5.15, las personas mayores tienen muchas más probabilidades de ocupar un trabajo informal que las de mediana edad. La proporción de personas mayores que desarrollan un empleo informal es especialmente alta en Perú, Paraguay y Colombia, en donde supera el 80% del empleo total entre las personas de 55 años o mayores (Gráfico 5.16). Pese a los avances de la última década en la formalización del empleo en toda América Latina, una importante proporción de personas mayores sigue sin tener cobertura de seguridad social (CEPAL, 2015[90]; CEPAL, 2015[91]), lo que contribuye a niveles más altos de vulnerabilidad y desigualdad. Por ejemplo, la pobreza en la vejez en Colombia es elevada, ya que los trabajadores de escasa cualificación dedican gran parte de su vida laboral al empleo informal y no cotizan para su pensión (OCDE, 2019[92]). En Brasil y Argentina, los trabajadores informales se retiran más tarde que otros por el mismo motivo, hasta que alcanzan la edad para beneficiarse de una pensión no contributiva (OCDE, 2019[93]; OCDE, 2018[94]).

Gráfico 5.16. Las personas de 55 a 64 años del grupo analizado presentan mayores tasas de empleo informal que los trabajadores del grupo de máximo rendimiento, sobre todo después de los 65 años

Empleo informal como proporción del empleo total, en porcentaje, 2019



Fuente: OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer23/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_NIFL_SEX_ECO_RT_A

StatLink https://stat.link/u1r36p

Es probable que la transición demográfica en América Latina afecte a los sistemas de pensiones, haciendo peligrar su sostenibilidad. Este es el caso tanto de los planes de ahorro individual (debido al desequilibrio entre los años de cotización y los de percepción de las prestaciones) como de los regímenes de capitalización-distribución (debido a una mayor proporción de jubilados respecto a las personas en edad de trabajar). Estos dos procesos podrían dar lugar a medidas que promuevan la prolongación de la vida laboral (p. ej., retrasando la edad legal de jubilación) (CEPAL/OIT, 2018[95]). Por lo tanto, en un contexto en el que se están reduciendo los hogares multigeneracionales, puede que a muchas personas mayores no les quede más remedio que seguir trabajando hasta una edad de jubilación más avanzada para atender sus propias necesidades. Las personas mayores que llegan a esta etapa de la vida con menos protección son aquellas que sufrieron carencias en etapas anteriores (CEPAL, 2016[8]).

Cobertura de las pensiones

La escasa cobertura de las pensiones supone un importante reto político para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tanto en lo que se refiere a la proporción de trabajadores que hacen aportaciones a planes de pensiones como a la proporción de personas mayores que perciben algún tipo de ingreso en concepto de pensión. El debate de las políticas públicas en la región se centra en los esfuerzos por reducir el déficit de cobertura mediante pensiones no contributivas (o "sociales"). Sin embargo, estas políticas pueden plantear importantes retos fiscales (OCDE/BID/Banco Mundial, 2014[96]). El tipo de empleo que tienen las personas es un factor clave que determina la cobertura de las pensiones en la región. Las frecuentes transiciones entre la formalidad, la informalidad y la inactividad generan importantes lagunas de cotización en los historiales profesionales de los trabajadores, que hacen peligrar la suficiencia de los ingresos futuros por jubilación. Prácticamente en todos los sistemas, un historial de cotización incompleto genera un derecho una pensión menor o incluso impide poder percibirla (OCDE/BID/Banco Mundial, 2014[96]). Por ello, una importante proporción de las personas mayores de

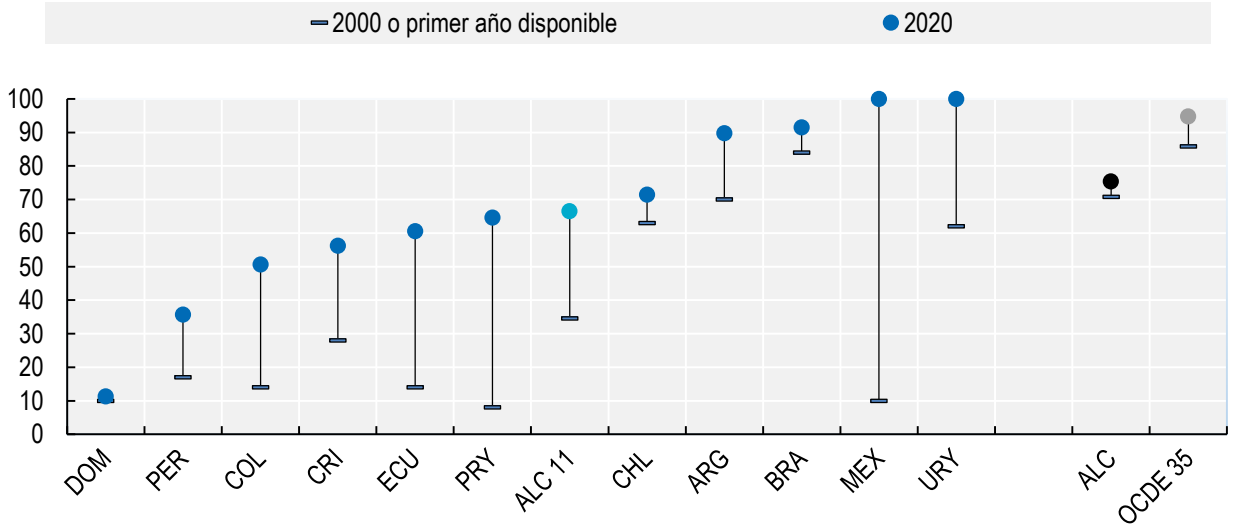
América Latina deben recurrir a fuentes de ingresos distintas a las pensiones contributivas, entre las que se incluyen ingresos procedentes del trabajo informal (Gráfico 5.16) y las pensiones sociales.

En el Gráfico 5.17 se observan los enormes progresos logrados en la cobertura de las pensiones en los países analizados en las últimas dos décadas, con tasas de cobertura media que prácticamente se han duplicado, del 35% en 2000 al 67% en 2020. La mejora de México es especialmente admirable, ya que ha pasado de una cobertura de tan solo el 10% en 2000 a la cobertura universal en 2020. Sin embargo, las tasas de cobertura muestran sustanciales variaciones entre los países analizados —de tan solo el 11% en la República Dominicana en 2020 al 100% en México y Uruguay— y, en promedio, casi un tercio de la población que supera la edad legal para recibir una pensión y cumple los requisitos no la percibe.

La cobertura de pensiones de las mujeres suele ser menor que la de los hombres, y el valor también suele ser inferior. Esto agrava la desventaja socioeconómica a la que se enfrentan las mujeres mayores, y refleja las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado de trabajo y en otros ámbitos a lo largo de su vida laboral (CEPAL, 2018[97]). En el período 2014-2015, la cobertura de pensiones en los países analizados tan solo fue ligeramente mayor para las mujeres que para los hombres en Ecuador y Uruguay, y el valor de los ingresos en concepto de pensiones fue entre un 20% y un 42% inferior para las mujeres que para los hombres en la mayoría de los países analizados (la diferencia fue inferior al 20% únicamente en Argentina, Brasil y Colombia, y tan solo en la República Dominicana no se observó una diferencia sustancial entre hombres y mujeres) (CEPAL, 2018[97]).

Gráfico 5.17. En las últimas dos décadas, tan solo dos países del grupo analizado alcanzaron la total cobertura de las pensiones, y una tercera parte de la población que cumple los requisitos no percibe una pensión

Proporción de la población mayor de la edad legal para recibir una pensión que la percibe, porcentaje



Nota: Este indicador muestra la proporción de personas mayores que reciben una pensión, medida en función de la proporción de personas mayores de la edad legal de jubilación que reciben una pensión respecto a las personas que superan la edad legal de jubilación (ya sea contributiva o no contributiva). El primer año del que hay datos disponibles es 2003 en el caso de Chile y 2004 en el de la República Dominicana. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas. OCDE 35 excluye a Irlanda y Corea, debido a que su serie de tiempo está incompleta.
Fuente: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 1.3.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

StatLink https://stat.link/s9cvrx

El impacto de la pandemia de COVID-19

Niños

La pandemia de COVID-19 podría tener efectos devastadores para el bienestar de los niños a corto, medio y largo plazo, con repercusiones a nivel físico, mental o socioeconómico, pese a haberse librado relativamente de los efectos directos de la mortalidad que provoca (UNICEF, 2021[98]; OCDE, 2020[99]). Desde el punto de vista epidemiológico los niños se han visto menos afectados, aunque en el momento de elaborar este informe todavía existe gran incertidumbre sobre cómo infecta y se propaga exactamente esta enfermedad entre ellos (Hobbs et al., 2020[100]). Cuando en el segundo semestre de 2020 América Latina se convirtió en el epicentro de los casos de COVID-19 (OPS, 2020[101]), millones de niños de la región vivían en hogares pobres con acceso nulo o escaso a la atención sanitaria, a la vez que habían dejado de recibir una educación y se veían expuestos a la violencia y el conflicto de forma continuada (UNICEF, 2020[102]).

Las tensiones especialmente intensas en la vida de los niños durante los prolongados períodos de confinamiento pueden tener repercusiones a medio y largo plazo. El cierre de las escuelas puede tener graves efectos sobre todo en las familias y los niños vulnerables, más allá del estrés soportado durante los confinamientos. Se estima que durante la primera ola de la pandemia, aproximadamente el 95% de los niños matriculados en el sistema educativo en América Latina no asistió a la escuela (UNICEF, 2020[103]). En primer lugar, el éxito de las medidas educativas provisionales aplicadas durante el cierre de las escuelas, como el aprendizaje a distancia, depende en gran medida de la calidad del entorno de aprendizaje en el hogar (OCDE, 2020[104]). En América Latina, esto provocó que las consecuencias para el aprendizaje de los niños fuesen especialmente graves, ya que algunos alumnos nunca regresarán a la escuela (UNICEF, 2020[102]). En segundo lugar, su cierre supuso la interrupción de varios servicios paralelos, como los comedores escolares, las enfermerías, el agua potable e incluso el apoyo psicosocial fuera de su hogar. Desde el comienzo de la pandemia, 80 millones de niños de la región de América Latina se han visto privados de comidas calientes (WFP, 2020[105]). Los niños con discapacidades también se han visto afectados de forma desproporcionada (CEPAL, 2020[106]), ya que es incluso más probable que vean desatendidas sus necesidades educativas especiales, al tiempo que se compromete la capacidad de los padres para satisfacer las nuevas exigencias de la educación en casa de otros hijos. Por lo tanto, la interrupción de los servicios educativos tiene graves consecuencias en el bienestar actual de los niños y puede dejar a decenas de ellos mal preparados para aspirar a un futuro mejor (OCDE, 2020[104]).

Las medidas impuestas por los confinamientos que se produjeron durante 2020 provocaron un aumento de las tensiones dentro del hogar, incertidumbre económica, aislamiento social y un estrés añadido para los cuidadores (UNICEF, 2020[107]; OCDE, 2020[99]). El 21% de los adolescentes de entre 13 y 17 años de América Latina aseguró tener más discusiones con sus padres y otros miembros de la familia durante la cuarentena, lo que aumentó el riesgo de violencia doméstica (UNICEF, 2020[108]). Los servicios de protección de la infancia ya eran relativamente escasos en América Latina tras una década de deterioro gradual (CEPAL, 2020[109]). Según investigaciones recientes, se calcula que el 55% de los niños de la región sufre agresiones físicas y el 48% sufre agresiones psicológicas (Cuartas et al., 2019[110]). Entre las posibles repercusiones para las víctimas se incluye un deterioro de las capacidades emocionales y cognitivas para toda la vida, además de un comportamiento antisocial o de alto riesgo (Cuartas et al., 2019[110]). La crisis de la pandemia también podría provocar el primer aumento del trabajo infantil en la región tras casi 20 años de avances (CEPAL, 2020[109]). Como se ha expuesto en el Capítulo 2, uno de los principales efectos del COVID-19 ha sido el incremento de los niveles de pobreza, que obliga a las familias vulnerables a hacer uso de todos sus recursos disponibles para aumentar el ingreso familiar y garantizar la supervivencia, lo que incluye enviar a los niños a trabajar.

Jóvenes adultos

La pandemia expone a los jóvenes de la región a mayores riesgos de desinterés y abandono de la educación y la formación, y puede incrementar el número global de quienes no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis). Si bien los motivos del desinterés y el abandono son complejos y evolucionan con el tiempo (Aarkrog et al., 2018[111]), la crisis por COVID-19 puede tener un potente efecto multiplicador a través de varios vectores. Entre estos se incluyen las interrupciones de la educación y la formación que provocan un descenso del rendimiento y la pérdida de motivación, la pérdida de conexiones con adultos que proporcionan apoyo y las interacciones positivas entre iguales, así como los incrementos de la pobreza en los hogares y un mayor estrés en el hogar (OCDE, 2020[104]). Por otra parte, los componentes de aprendizaje práctico o en el lugar de trabajo que conlleva la formación profesional se adaptan en menor medida al aprendizaje a distancia. Puede que muchos jóvenes hayan sido los primeros en perder sus empleos en 2020 —en especial los que trabajan en la economía informal y en sectores como el turismo, el comercio no electrónico, el transporte y otros servicios en los que el teletrabajo no es una opción— (OIT, 2020[112]). Estos períodos prolongados de inactividad o desempleo pueden provocar un mayor desánimo y exclusión.

El impacto sin precedentes del COVID-19 en la región podría tener efectos a largo plazo sobre el desempleo juvenil. Como muestra el Gráfico 5.9, las oportunidades laborales para los jóvenes del grupo analizado ya eran escasas antes de la llegada de la crisis, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes (cuya tasa de desempleo en 2020, del 22%, supera en casi 7 puntos porcentuales la de los hombres), y cuya proporción de ninis, del 29%, es el doble. De manera conjunta, estos elementos esbozan un panorama sombrío para el bienestar de los jóvenes de América Latina, caracterizado por un peligroso patrón de carencias en sus aspiraciones que se retroalimentan.

Personas mayores

El brote del COVID-19 plantea importantes problemas para las personas mayores. En primer lugar, estas (en especial los hombres) presentan mayores riesgos de desarrollar graves complicaciones en caso de infección. En segundo lugar, la evolución de la enfermedad en la vejez tiene un mayor potencial de deteriorar de forma significativa el estado de salud general. En tercer lugar, las medidas de confinamiento más rigurosas suelen afectar de forma desproporcionada a las personas mayores, ya que alteran considerablemente su vida cotidiana y limitan su independencia. Estas dificultades serán incluso mayores para las personas con problemas de salud, que viven solas o que requieren atención de larga duración, así como las que cuidan de un miembro de la familia (OCDE, 2020[104]).

La pandemia tendrá importantes repercusiones en las relaciones sociales de las personas mayores. Limitar su exposición al COVID-19 requiere que se autoaíslen y dependan de sus redes de apoyo y de los servicios locales para atender sus necesidades, como hacer la compra y las comidas preparadas. En momentos de necesidad, las personas mayores tienden más que las de mediana edad a indicar que no cuentan con un familiar o amigo al que recurrir. Además, muchas personas mayores viven solas. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay prácticamente una tercera parte de la población de 80 años o mayor vive sola (34% y 32%, respectivamente) (BID, 2017[113]). Por otra parte, los cambios que han experimentado las estructuras familiares y la participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado laboral en las últimas décadas en América Latina han menguado la capacidad de las familias para atender a las personas con dependencias.

Además, el COVID-19 está alterando la atención sanitaria regular de muchas personas mayores con problemas de salud crónicos, pese a que en muchos países se permitía cuidar de estas personas y de los familiares enfermos durante el confinamiento. Esta enfermedad plantea especiales riesgos para las personas mayores residentes en instalaciones de atención de larga duración, en cuanto a mayor mortalidad y menor bienestar subjetivo (OCDE, 2020[104]). Una importante proporción de las personas mayores de América Latina depende de cuidados (el 12% de los mayores de 60 años y el 27% de los

mayores de 80 años), y de aquí a 2050 más de 27 millones de personas mayores de 60 años podrían necesitar atención de larga duración (Cafagna et al., 2019[114]). Además, el entorno de vida en común que se da en estos centros de cuidados de larga duración y la vulnerabilidad de sus residentes favorecen la rápida propagación del virus de la gripe y otros patógenos respiratorios (OCDE, 2019[115]; Lansbury, Brown and Nguyen-Van-Tam, 2017[116]). A fin de proteger a sus residentes, en algunos centros de atención de larga duración se prohibieron las visitas. Sin embargo, la ausencia de contacto con la familia tiene efectos perjudiciales en el bienestar psicológico, sobre todo en caso de un brote prolongado (OCDE, 2020[104]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

Niños

Cuantificar el bienestar de los niños resulta complicado, ya que por lo general no suelen ser el objetivo principal de los instrumentos comunes de recopilación de datos, como las encuestas a los hogares, salvo que hayan sido específicamente diseñadas con este fin. Por consiguiente, hay muy pocos datos desglosados por edad referidos a la población infantil menor de 15 años. También existe escasa información sobre los problemas específicos de la infancia, como el acceso a los programas de educación inicial y en la primera infancia, los resultados del aprendizaje y las competencias cognitivas, el bienestar social y emocional, la malnutrición y otros aspectos del estado de salud, así como la violencia contra los niños (tanto en el hogar como en las escuelas). Medir el bienestar de los niños conlleva dificultades y consideraciones adicionales en comparación con otros grupos de población, como tener en cuenta las importantes consecuencias del desarrollo infantil en los resultados posteriores de la vida, y la estrecha relación entre el bienestar de los niños y las oportunidades y los recursos de sus familias, escuelas y comunidades. Esto constituye una inquietud en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ya que para lograr las metas de los ODS relativos a la infancia (p. ej., erradicar la pobreza infantil [meta 1.2] o acabar con la violencia contra los niños [meta 16.2]), los países deberán disponer de datos exactos, oportunos y desglosados.

Además, incluso en los casos en los que los niños están incluidos en las encuestas a los hogares, puede que estas no midan su situación en las posiciones más marginales, como los niños con discapacidades, los que sufren malos tratos y los que viven fuera del hogar. Por ello, las encuestas no son plenamente representativas de todos los niños, y disponer de encuestas más concretas podría contribuir a proporcionar una imagen más nítida. Los países del grupo analizado han avanzado en este sentido y, países como Chile, Costa Rica, México y Perú han desarrollado herramientas concretas de elaboración de encuestas que permiten medir la discapacidad infantil (INEC, 2018[117]; INSP, 2016[118]; SENADIS, 2015[119]; INEI, 2014[120]). Los datos administrativos pueden aportar información importante sobre la situación de los niños acogidos en instituciones y la prestación de servicios de protección de la infancia. Por último, los expertos otorgan un valor cada vez mayor a saber qué piensan y opinan los niños sobre aspectos de su propia vida. Pese a que la recopilación de datos reportados por los propios niños plantea algunas dificultades, sobre todo a una edad temprana, se han establecido técnicas para este fin[22] y, como sucede con los adultos, las medidas subjetivas pueden servir de valioso complemento (y no como sustituto) de otras medidas de bienestar de los niños (OCDE, 2021[65]).

El programa de la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS) por Conglomerados, promovido por UNICEF, cuyo objetivo es apoyar a los gobiernos en la elaboración de encuestas centradas en la infancia mediante asistencia técnica, apoyo material y metodologías estandarizadas, constituye una importante iniciativa de medición. Hasta la fecha se han completado 34 MICS en 18 países de la región (UNICEF, 2021[121]). Algunos ejemplos de los temas tratados en las encuestas incluyen el acceso a la educación; las experiencias de trabajo infantil; la disciplina infantil; el acceso al agua, el saneamiento y las instalaciones para el lavado de manos; y la exposición a insecticidas.

Jóvenes adultos

Una tercera parte de las metas de los ODS se refieren a los jóvenes, ya sea de forma implícita o explícita, y se centran especialmente en el empoderamiento, la participación y el bienestar. Las metas específicas para los jóvenes (incluidas en los objetivos relativos al hambre, la educación, la igualdad de género, el trabajo decente, la desigualdad y el cambio climático) requieren mejor información sobre las desigualdades en un contexto intergeneracional. El actual alcance limitado del análisis pone de relieve la importancia de desarrollar de forma adicional estudios longitudinales, por ejemplo, que incluyen aquellos que hacen un seguimiento de las personas desde su nacimiento. Una opción importante (y mucho menos costosa) consiste en incluir preguntas retrospectivas sobre las condiciones de los padres (y sobre los resultados de bienestar de los encuestados en etapas anteriores de su vida) en encuestas transversales: pese a que son exigentes desde el punto de vista cognitivo y presentan sesgos de memoria, estas preguntas pueden mejorar de forma significativa las investigaciones y el diseño de las políticas públicas (OCDE, 2017[6]).

Este estudio relativo a la salud de los jóvenes presenta carencias de medición específicas. Por ejemplo, en la región existe un número relativamente escaso de estudios epidemiológicos sobre la salud mental de los jóvenes, y los que hay resultan difíciles de comparar, debido a diferencias en los instrumentos de medición, el rango de edad objeto de estudio y los períodos comprendidos (CEPAL, 2014[12]).

Esta falta de datos comparables también resulta problemática para abordar dificultades que no se han mencionado en esta sección, como el alcohol y el abuso de sustancias. Las encuestas nacionales sobre juventud pueden incluir este aspecto de forma pormenorizada, aunque debido a las diferencias metodológicas no es posible compararlas. En este sentido, estudios internacionales como la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS), elaborada por la OMS, cobran especial relevancia para arrojar luz sobre las tendencias regionales, aunque no contemplan a los adolescentes que no acuden a la escuela —y entre los que suele ser frecuente el abuso de sustancias—.

Por último, con relación a la identidad sexual y de género, la escasez de datos disponibles sobre los adolescentes y jóvenes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) contrasta con su desproporcionada vulnerabilidad y exposición al riesgo (CDC, 2020[122]; Coker, Austin and Schuster, 2010[123]). Según los datos de la encuesta nacional sobre comportamientos de riesgo entre los jóvenes (YRBS) de 2015, los alumnos lesbianas, gais y bisexuales (LGB) de los Estados Unidos eran un 140% más propensos (12% frente al 5%) de no acudir a la escuela al menos un día durante los 30 días anteriores a la encuesta por motivos de seguridad, en comparación con los estudiantes heterosexuales (Kann et al., 2016[124]). Los jóvenes LGBT también se vieron expuestos a un mayor riesgo de depresión, suicidio, consumo de sustancias y prácticas sexuales de riesgo. Prácticamente una tercera parte (29%) de los jóvenes LGB habían intentado suicidarse al menos en una ocasión en el año anterior, frente al 6% de los jóvenes heterosexuales (Kann et al., 2016[124]).

Personas mayores

Dado que la región de ALC se enfrenta a una transición demográfica caracterizada por el envejecimiento de la población, cada vez será más necesario monitorear y comprender aspectos de particular importancia para el bienestar de las personas mayores. Este hecho es reconocido en la región desde hace tiempo, y ya en 2006, tras crearse el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002, la CEPAL elaboró un *Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez* (CEPAL, 2006[125]). Este manual trata sobre la medición de una serie de temas incluidos en el marco de bienestar, entre ellos la seguridad económica (participación en la fuerza de trabajo, protección social, pobreza) salud y bienestar (estado de salud, riesgos del estilo de vida) y el entorno social (apoyo de la red social, participación social, violencia y maltrato a las personas mayores). Sin embargo, actualmente existe una serie de lagunas de datos para elaborar estadísticas periódicas y armonizadas sobre el bienestar de las personas mayores.

En lo que a la salud de las personas mayores se refiere, la información disponible sobre las enfermedades crónicas, la capacidad funcional, la propia percepción del estado de salud, la depresión, los hábitos de vida, los gastos directos, las cirugías y el consumo de medicamentos o el uso de ayudas técnicas es relativamente escasa (NASEM, 2015[126]). Pese a que la proporción de personas con discapacidades suele aumentar con la edad, son muy pocas las oficinas de estadística que elaboran estadísticas comparativas en este campo (CEPAL/OIT, 2018[95]). No existen datos comparables sobre la proporción de personas que reciben atención de larga duración.

Las encuestas sobre el uso del tiempo podrían ser una herramienta útil para mejorar la evaluación de los servicios de atención que reciben y solicitan las personas mayores de América Latina. Otras encuestas más específicas sobre la población de 60 años o mayor deberían ser prioritarias para los países de la región, a fin de hacer un seguimiento del rápido envejecimiento de la población y comprender mejor las causalidades en los distintos ámbitos al final del ciclo de vida.

Desigualdades territoriales

La región de América Latina y el Caribe se caracteriza por una elevada concentración espacial de la población y la actividad económica, ya que el 80% de la población vive en zonas urbanas (55% en ciudades y 25% en pueblos) (PNUD, 2020[127]; OCDE/Comisión Europea, 2020[128]), lo que constituye la mayor proporción entre las regiones del mundo y muy superior a la media mundial del 56%. Las grandes desigualdades en las condiciones de vida también caracterizan a los distintos lugares de un país (CEPAL, 2020[129]). En el Gráfico 5.18 se recogen las ratios de desempeño de determinados resultados de bienestar y recursos para el bienestar futuro de las personas que viven en zonas rurales comparadas con las que viven en zonas urbanas, en promedio, en los 11 países de ALC analizados. A fin de facilitar su comprensión, todos los indicadores se codifican en el mismo sentido, de forma que las ratios más elevadas siempre se correspondan con un mejor desempeño de las personas que viven en zonas rurales.

Aunque la satisfacción con el nivel de vida y el empleo no presentan grandes diferencias, en promedio, entre las zonas rurales y urbanas de los países analizados (Gráfico 5.18, panel A), el empleo informal es aproximadamente un tercio más alto en las zonas rurales que en las urbanas, mientras que los ingresos mensuales rurales en el sector formal son aproximadamente un tercio más bajos que en las zonas urbanas. Las personas que viven en zonas rurales tienen dos tercios más de probabilidades de vivir en la pobreza que los de las zonas urbanas (con tasas de pobreza rural del 29% frente a las tasas de pobreza urbana del 17,4%), y más del triple de probabilidades de vivir en la pobreza extrema (con tasas respectivas de pobreza extrema rural y urbana del 11,2% y el 3,6%). Los habitantes de las zonas rurales también tienen más probabilidades de que su vivienda presente unas condiciones deficientes: tienen tres veces más probabilidades de vivir en viviendas construidas con materiales de baja calidad y más de un tercio de probabilidades de vivir en condiciones de hacinamiento, en comparación con los de las zonas urbanas.[23] La disponibilidad de infraestructuras también es más limitada en las zonas rurales; algo menos del 70% de la población tiene acceso a servicios de agua y saneamiento, frente a una cobertura casi universal en las zonas urbanas, y menos de un tercio de los hogares de las zonas rurales tiene acceso a Internet, frente a más de la mitad en las zonas urbanas (56%).

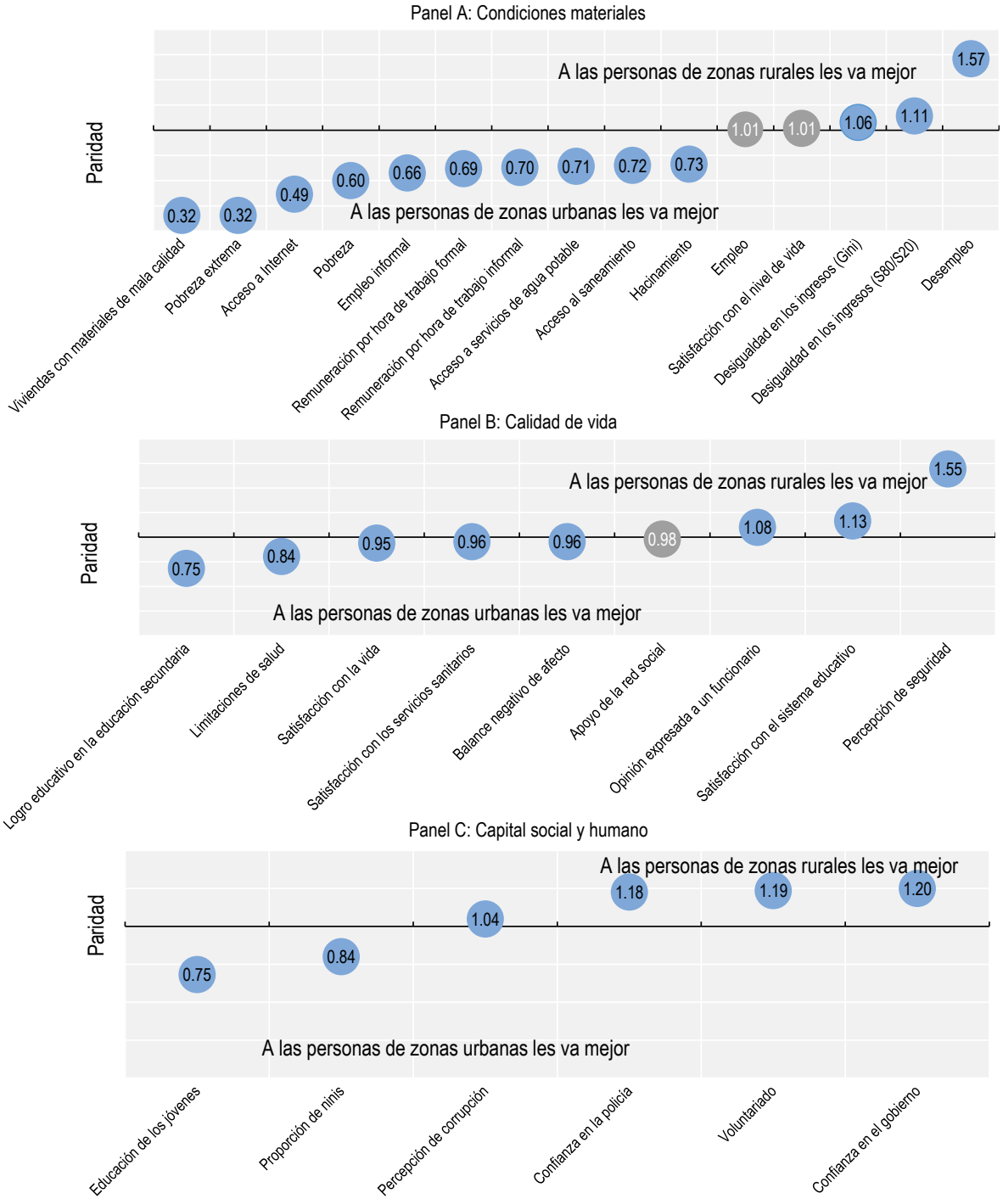
Por otra parte, los habitantes de las zonas rurales tienen menos probabilidades de estar desempleados (en 2019, el 5% de la población rural estaba desempleada, frente al 8% de los habitantes urbanos), pero los ingresos informales son prácticamente un tercio menores que en las zonas urbanas. La desigualdad en los ingresos también es menor en las zonas rurales, tanto si se tiene en cuenta el coeficiente de Gini como la diferencia entre la proporción de ingresos entre el 20% de la población más pudiente y el menos pudiente.

En cuanto a la calidad de vida (Gráfico 5.18, panel B), las personas que viven en zonas rurales se sienten más seguras y su compromiso cívico es mayor. Tienen un 55% más de probabilidades de asegurar sentirse seguras al caminar a solas de noche por la zona en la que viven y un 8% más de probabilidades de manifestar su opinión a un funcionario que las personas de las zonas urbanas de los países analizados. Las personas que viven en zonas rurales también son un 13% más propensas a estar satisfechas con el sistema educativo, lo que posiblemente refleja su menor logro educativo, una menor conciencia sobre las limitaciones del sistema educativo y un menor nivel de exigencia a la hora de evaluarlo (Cárdenas et al., 2008[130]). Por otro lado, las personas que viven en zonas rurales presentan una mayor tendencia a notificar los problemas de salud que les impiden hacer lo que hacen normalmente las personas de su edad, lo cual refleja una mayor pobreza e informalidad y una disponibilidad y acceso limitados a la asistencia sanitaria, que puede desanimar a las personas a buscar tratamiento. Los habitantes de las zonas rurales también son ligeramente menos propensos a declarar estar satisfechos con la disponibilidad de una atención sanitaria de calidad. Además, los habitantes de las zonas rurales son ligeramente más propensos a manifestar más emociones negativas que positivas en un día concreto (balance negativo de afecto) y a manifestar una satisfacción con la vida ligeramente menor que los habitantes de las zonas urbanas.

Por lo general, el capital social es mayor en las zonas rurales (Gráfico 5.18, panel C): en todos los países analizados, los habitantes de estas zonas tienen casi un 20% más de probabilidades de haber ofrecido su tiempo como voluntarios que los de las zonas urbanas, un 20% más de probabilidades de confiar en el gobierno nacional, un 4% menos de probabilidades de creer que el gobierno es corrupto y un 18% más de probabilidades de confiar en la policía. Por otra parte, el capital humano es menor en las zonas rurales que en las urbanas (Gráfico 5.18, panel C): la proporción de jóvenes adultos (de 20 a 24 años) que han completado el segundo ciclo de educación secundaria es un 25% menor en las zonas rurales, mientras que la proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis) es un 16% mayor.

Gráfico 5.18. En las zonas rurales, las personas se sienten más seguras, tienen un mayor compromiso cívico y el capital social es más sólido, pero sus resultados son mucho peores que los de las personas que viven en zonas urbanas en numerosas dimensiones del bienestar y en capital humano

Ratios territoriales (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de bienestar actual, capital humano y social, 2019 o último año disponible



Nota: Cada ratio de desempeño constituye la media simple por zona territorial calculada en los 11 países analizados de los que existen datos disponibles para todos los grupos de desigualdad que se han tenido en cuenta. Debido a esto, las ratios de desempeño pueden comprender un subconjunto de los 11 países analizados. Las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para la población rural, mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para la urbana —incluidos los indicadores negativos, en los que se ha invertido la puntuación—. Los círculos grises denotan que no existe una diferencia clara entre la población urbana y rural, lo que se define como ratios territoriales a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink.

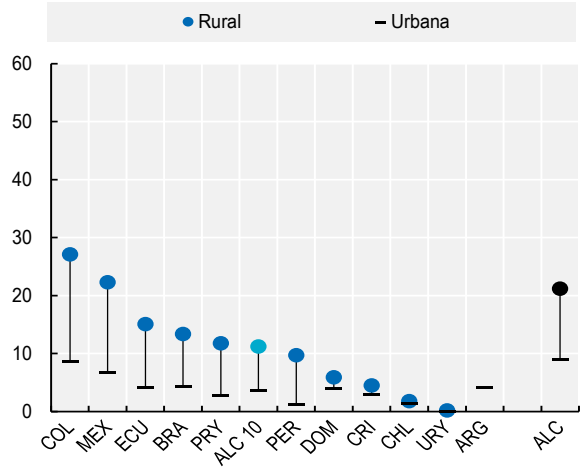
StatLink https://stat.link/zn1gbx

Desigualdad en los ingresos y pobreza

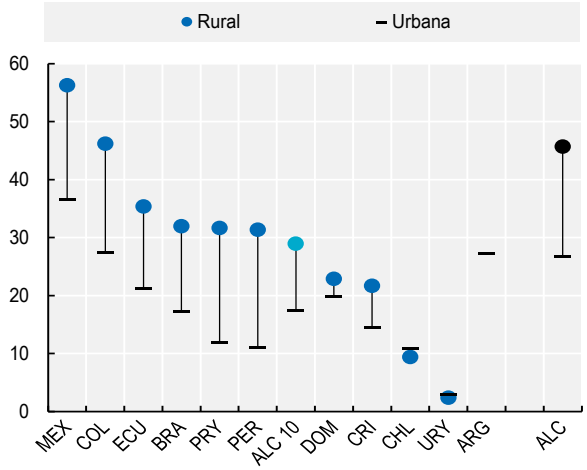
Por lo general la pobreza absoluta y la extrema son mayores en las zonas rurales (Gráfico 5.19). Las proporciones de personas que viven en hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos (definición de la CEPAL de pobreza extrema), así como otros bienes y servicios necesarios (definición de la CEPAL de pobreza absoluta) son, en promedio, respectivamente 8 y 11 puntos porcentuales mayores en las zonas rurales de los países analizados. Según estas definiciones, la pobreza extrema y la pobreza absoluta más altas se registran en Colombia y México (por encima del 20% en el caso de la pobreza extrema y del 45% en el de la absoluta). Las mayores diferencias entre las zonas rurales y urbanas se observan en Paraguay y Perú (donde las proporciones de personas que viven en la pobreza extrema y absoluta en las zonas rurales son más de cuatro veces y más de dos veces mayores que en las zonas urbanas, respectivamente). Las menores se observan en Chile (con diferencias limitadas a 0,2 y 0,4 puntos porcentuales) y Uruguay (donde hay más personas que viven en la pobreza en las zonas urbanas que en las rurales).

Gráfico 5.19. La pobreza extrema en las zonas rurales triplica la de las zonas urbanas en los países analizados

Panel A: Proporción de la población que vive en la pobreza extrema, porcentaje, 2019 o último año disponible



Panel B: Proporción de la población que vive en la pobreza absoluta, porcentaje, 2019 o último año

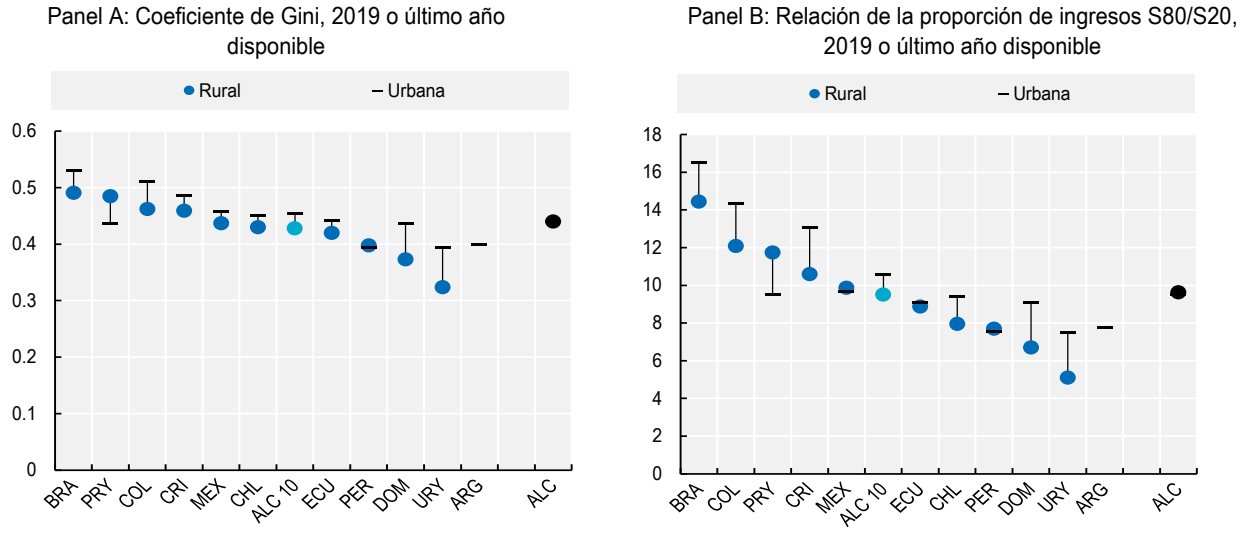


Nota: La CEPAL define pobreza extrema como la proporción de personas que viven en hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Según la CEPAL, pobreza absoluta se refiere a los hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y atender otras necesidades no alimentarias. El último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de México y 2017 en el de Chile. ALC 10 excluye a Argentina, ya que no existen datos disponibles para las zonas rurales. ALC se refiere al promedio regional de América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=i

StatLink https://stat.link/gl34xc

Si se observa la distribución de los ingresos entre la población (Gráfico 5.20), la desigualdad en los ingresos es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, salvo en Paraguay (donde es mayor en las zonas rurales) y en Perú (donde casi no hay diferencia entre ambas). Las dos medidas de desigualdad en los ingresos presentadas (el coeficiente de Gini, que se centra en la parte media de la distribución de los ingresos, representado en el panel A; y la ratio de ingresos S80/S20, que informa sobre la diferencia entre los ingresos del 20% más pudiente y el 20% menos pudiente, representado en el panel B) transmiten, con contadas excepciones, una imagen coherente.

Gráfico 5.20. La desigualdad en los ingresos es mayor en las zonas urbanas, con las únicas excepciones de Paraguay y Perú



Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2018 en el caso de México y 2017 en el de Chile. ALC 10 excluye a Argentina, ya que no existen datos disponibles para las zonas rurales. ALC se refiere al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=1&idTema=935&idIndicador=3289&idioma=e (panel A) y https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e (panel B)

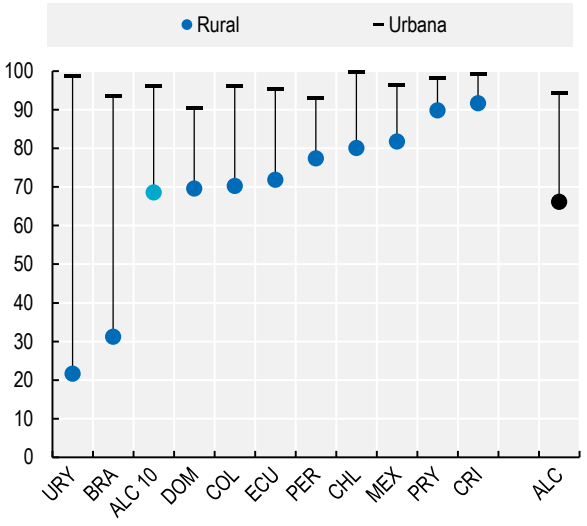
StatLink https://stat.link/h9ny5t

Infraestructura de la vivienda

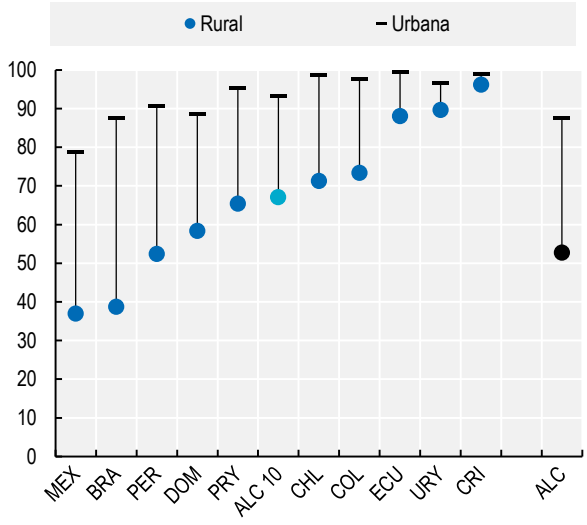
La cobertura de infraestructuras es más limitada en las zonas rurales, en las que algo menos del 70% de la población tiene acceso a agua y saneamiento, mientras que esta es prácticamente total en las zonas urbanas. La cobertura más baja se registra en las zonas rurales (inferior al 40%, Gráfico 5.21) de Brasil (tanto agua como saneamiento), México (únicamente saneamiento) y Uruguay (únicamente agua), y la más alta (casi del 90% y superior) en Costa Rica (tanto agua como saneamiento), Paraguay (agua únicamente) y Uruguay (saneamiento únicamente).

Gráfico 5.21. Algo menos del 70% de la población rural tiene acceso a agua y saneamiento, mientras que en las zonas urbanas la cobertura es prácticamente total

Panel A: Proporción de la población con acceso al agua, porcentaje, 2018 o último año disponible



Panel B: Proporción de la población con baños higiénicos, porcentaje, 2018 o último año disponible



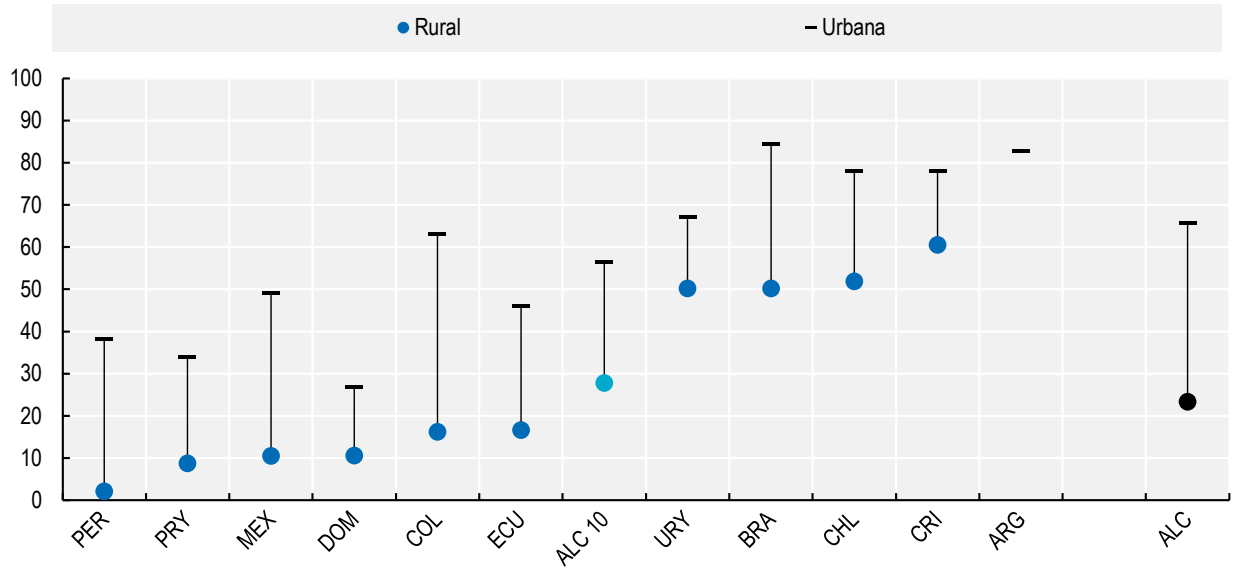
Nota: El último año disponible es 2017 en el caso de Chile (paneles A y B), Paraguay (panel A) y 2015 en el caso de Brasil (paneles A y B). ALC 10 excluye Argentina, ya que no existen datos disponibles para las zonas rurales. El promedio regional de ALC comprende 16 países de América Latina y el Caribe, incluidos los analizados en este documento.
Fuente: Base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS y Banco Mundial) https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/ (consultado en junio de 2021)

StatLink https://stat.link/hdu2e1

Las diferencias en el acceso a Internet en los países analizados también son grandes: tan solo el 27% de los hogares de zonas rurales tienen acceso a Internet, pero prácticamente la mitad de los de zonas urbanas (Gráfico 5.22). El acceso a Internet en los hogares rurales va de menos del 10% en Paraguay y Perú a aproximadamente la mitad en Chile, Costa Rica y Uruguay. Estos países también registran un mayor acceso en las zonas rurales.

Gráfico 5.22. Aproximadamente una tercera parte de los hogares tienen acceso a Internet en las zonas rurales, la mitad que en las zonas urbanas

Proporción de hogares con acceso a Internet, porcentaje, 2019 o último año disponible



Nota: El último año del que hay datos disponibles es 2019 en el caso de Argentina y Brasil, 2017 en el caso de Chile y Ecuador y 2018 en el de los países restantes. ALC 10 excluye a Argentina, ya que no existen datos disponibles para las zonas rurales. El promedio regional de ALC comprende 15 países de América Latina y el Caribe, incluidos los 10 analizados sobre los cuales hay datos disponibles.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL, en relación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; UIT, Base de Datos de Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones / TIC 2020, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx, en relación con todos los demás países.

StatLink https://stat.link/1bn7ai

El impacto del COVID-19 en las desigualdades entre zonas urbanas y rurales

La marcada concentración espacial y la elevada densidad de población en América Latina, así como las grandes desigualdades territoriales, constituyen factores de alto riesgo que aceleran la propagación del COVID-19, en especial en los segmentos de población expuestos a importantes vulnerabilidades y carencias materiales (CEPAL, 2020[129]). Las personas expuestas a un mayor riesgo epidemiológico, así como las más vulnerables a los efectos socioeconómicos de la pandemia, son aquellas que viven en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado al agua o el saneamiento —en especial las que viven en barrios marginales o asentamientos informales de zonas urbanas que, además, suelen tener problemas de salud preexistentes—. En su mayoría son trabajadores informales, con escasos o limitados recursos, sin seguridad social y a menudo sin acceso a Internet. Las disfunciones familiares son frecuentes entre los pobres de las zonas urbanas. Con las medidas de confinamiento, estas pueden derivar en violencia doméstica y maltrato infantil. Muchas de estas condiciones se aplican también a las personas pobres que viven en zonas rurales (Lustig and Tommasi, 2020[131]). Quedarse en casa en estas condiciones es poco saludable, inseguro y muy complicado para las personas que no pueden teletrabajar y necesitan salir para ganarse la vida. Los efectos económicos y sociales serán mayores en las vecindades desfavorecidas de las grandes zonas urbanas, y agravarán los problemas ya existentes (CEPAL, 2020[129]).

En general, el acceso al agua y a medios para el lavado de manos, así como al saneamiento, son esenciales para contener la propagación del COVID-19. El acceso a Internet y a los servicios digitales se ha vuelto necesario para continuar desarrollando las actividades habituales (educación y trabajo, cuando es posible), para acceder a la atención sanitaria y, de forma más general, para vivir (mantener las relaciones sociales, para el ocio, etc.). Por tanto, las tecnologías de la información resultarán cruciales para limitar las consecuencias de futuras crisis de este tipo.[24]

Aspectos para el desarrollo estadístico

No siempre se dispone de datos armonizados sobre el bienestar por zonas urbanas y rurales, y en algunos ámbitos del bienestar son muy limitados (p. ej., el estado de salud, los conocimientos y competencias, el compromiso cívico y el empoderamiento, y el capital humano). Si se analizan los indicadores individuales de esta sección, existe un amplio margen de mejora. Por ejemplo, podría precisarse mejor el indicador que mide el hacinamiento, definido como la proporción de hogares con más de dos personas por dormitorio, ya que los dormitorios pueden presentar distintos tamaños y ser mayores en las zonas rurales. Además, este indicador no tiene en cuenta los barrios marginales urbanos ni los asentamientos informales. Una medida más precisa podría considerar los metros cuadrados disponibles por persona de la vivienda. Sin embargo, esta información no está disponible de forma generalizada en los países latinoamericanos ni, en general, en el conjunto de los países de la OCDE.

Como se recoge en esta sección, la geografía es importante a efectos del bienestar, y la clasificación binomial entre urbano y rural puede ocultar una realidad más matizada: las zonas urbanas difieren entre sí, ya que las ciudades presentan distintos tamaños, mientras que las zonas rurales pueden mostrar características y geografías diferentes (desde comunidades bien atendidas próximas a zonas urbanas, hasta lugares remotos y poco poblados con acceso limitado a los servicios básicos). La recopilación de indicadores armonizados para las ciudades y las zonas urbanas y rurales requiere definiciones armonizadas para delimitar estas zonas. Las definiciones nacionales muestran notables variaciones de un país a otro, lo que limita la comparabilidad internacional. El 51.º período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó un nuevo método, denominado “grado de urbanización”, como recomendado a efectos de establecer comparaciones internacionales. El grado de urbanización categoriza todo el territorio nacional de un país con arreglo a tres clases: 1) ciudades, 2) localidades o pueblos y zonas de densidad intermedia, y 3) zonas rurales. El grado de urbanización tiene dos extensiones: la primera identifica las ciudades, los pueblos, las zonas suburbanas o periurbanas, las aldeas, las zonas rurales dispersas y las zonas mayoritariamente deshabitadas; la segunda añade una zona de desplazamientos en torno a cada una de las ciudades a fin de crear un área urbana funcional o zona metropolitana (Comisión Europea et al., 2020[132]).

Otro importante nivel espacial para comprender las desigualdades en América Latina y el Caribe es la región. Las regiones adoptan distintas formas y tamaños en función de cada país (p. ej., noreste de Brasil, suroeste de México y Norte Grande en Argentina), y presentan identidades socioculturales específicas y problemas comunes.[25] Los datos comparables de bienestar a nivel regional son muy limitados en América Latina (Recuadro 5.3). Disponer de una escala regional favorecería un enfoque más integral de los diversos aspectos socioespaciales y geográficos del desarrollo y de las interacciones entre ellos, como las dinámicas urbanas y periurbanas, el desarrollo rural, las cuencas fluviales, la gestión y la gobernanza de los recursos naturales, la conversión de energía limpia y las infraestructuras de conectividad. A nivel regional, pueden identificarse mejor las realidades de las distintas zonas y las diferencias entre ellas, las inversiones pueden enfocarse mejor y los asentamientos humanos pueden reconocerse mejor y gestionarse de forma sostenible como parte de los ecosistemas (CEPAL, 2020[129]). Sin embargo, para medir los resultados de bienestar a nivel de las diferentes regiones sería necesario contar con tamaños de muestra mayores que los actualmente disponibles en la región de ALC, o movilizar los registros administrativos. La OCDE también ha estado trabajando en el desarrollo de tipologías de clasificación de

las regiones, por ejemplo, en función de la accesibilidad de una región a las áreas metropolitanas (Fadic et al., 2019[133]).

Por último, si bien (como se ha demostrado en este capítulo) las zonas rurales tienden a sufrir más carencias en el acceso a los servicios básicos (como el agua, el saneamiento o la electricidad), estos indicadores captan manifestaciones muy extremas de las carencias, que puede que no sean las medidas más significativas para países relativamente más desarrollados y para las zonas urbanas. Para medir las carencias relativas de las zonas urbanas puede que sean necesarios umbrales distintos (como, por ejemplo, el número de horas al día en que está disponible el servicio en cuestión, o la calidad del agua) (Santos, 2019[134]). También resultaría muy relevante contar con información mejor y más comparable sobre el acceso a los servicios de recuperación de residuos y de transporte público, además de su frecuencia.

Recuadro 5.3. Las disparidades regionales en materia de bienestar son notables en los países latinoamericanos incluidos en el marco de bienestar regional de la OCDE

La herramienta web *Regional Well-being* (bienestar regional) *de la OCDE* permite medir el bienestar a nivel regional y comparar 403 regiones de la OCDE con arreglo a once dimensiones del bienestar (ingresos, empleo, vivienda, acceso a los servicios, salud, educación, comunidad, compromiso cívico, medioambiente, seguridad y satisfacción con la vida). Las regiones se clasifican según dos niveles territoriales, que reflejan la organización administrativa de los países: regiones grandes (TL2) y regiones pequeñas (TL3). Las regiones pequeñas se clasifican en función de su acceso a las zonas metropolitanas (Fadic et al., 2019[133]). Se dispone de datos de tres países latinoamericanos de la OCDE: Chile, Colombia y México.

Según el informe *OECD Regions and Cities at a Glance 2020* (OCDE, 2020[135]), que describe cómo progresan las regiones y ciudades de la OCDE en sus esfuerzos por construir economías y sociedades más fuertes, sostenibles y resilientes, Chile, Colombia y México se enfrentan a marcadas disparidades regionales. En cada uno de estos tres países, hay dos regiones que se encuentran en el 20% superior de las regiones de la OCDE en algunas de las dimensiones del bienestar: en Chile, Ñuble se encuentra al máximo nivel en medioambiente y salud, y Aysén es líder en satisfacción con la vida y empleo; en Colombia, Vichada destaca en medioambiente y Arauca en comunidad; y en México, Baja California Sur se encuentra entre el 20% superior de las regiones de la OCDE en lo que a comunidad se refiere y Tamaulipas en satisfacción con la vida. Por el contrario, la mayoría de las regiones chilenas se sitúan en el 20% más bajo de las regiones de la OCDE en cuanto a ingresos, vivienda y compromiso cívico; todas las regiones colombianas se cuentan entre el 25% inferior de las regiones de la OCDE en cuanto a seguridad y todos los estados mexicanos se incluyen en el 20% inferior de las regiones de la OCDE en las dimensiones de ingresos y salud.

Además de la herramienta web de *ECD Regional Well-being* (https://www.oecdregionalwellbeing.org/), la herramienta web de la OCDE *easuring the distance to the SDGs in regions and cities* (Medición de la distancia con los ODS en las regiones y ciudades) mide la distancia con respecto a los ODS en más de 600 regiones y 600 ciudades de la OCDE y países asociados. En el caso de América Latina, se dispone de información para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México (https://www.oecd-local-sdgs.org/).

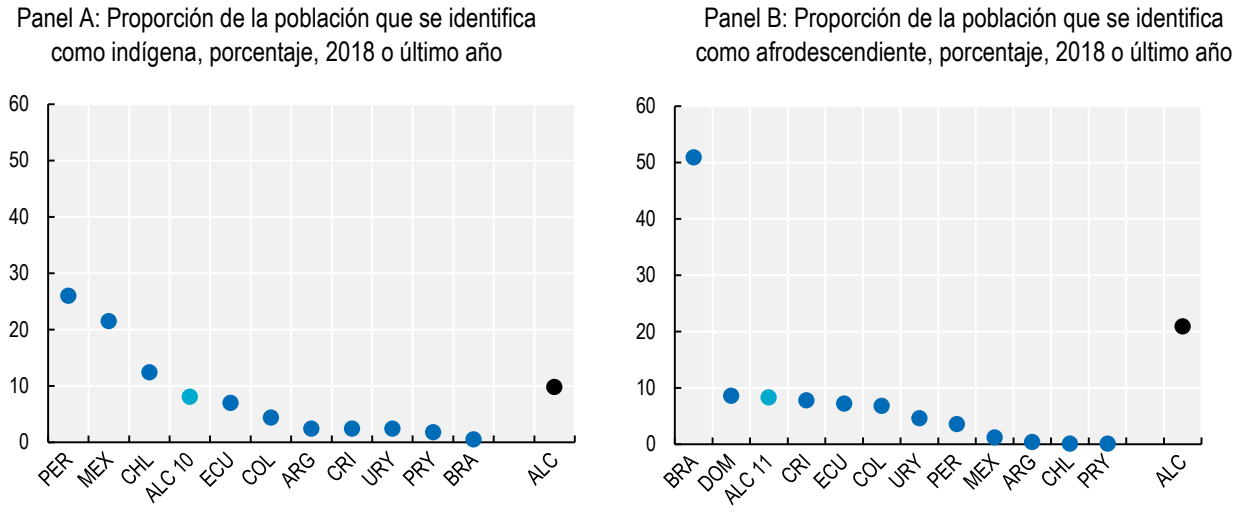
Nota:

1. Este trabajo ha sido elaborado antes de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

Desigualdades étnicas y raciales

En América Latina, el concepto de origen étnico se refiere habitualmente a las personas indígenas y el concepto de raza se emplea sobre todo con los afrodescendientes (CEPAL, 2016[8]). En el conjunto de la región de ALC, aproximadamente el 10% de la población se autoidentifica como indígena y el 21% como afrodescendiente (Gráfico 5.23). En los 11 países analizados, las proporciones son algo menores, aunque siguen siendo sustanciales, ya que aproximadamente el 8% se identifica como indígena y una proporción similar como afrodescendiente. El tamaño de estos grupos varía considerablemente entre países (Gráfico 5.23): el 26% de la población de Perú y el 21,5% de la población de México se autodefine como indígena, frente al 0,5% de Brasil; por otra parte, más de la mitad de la población brasileña (50,9%) se identifica como afrodescendiente, frente a menos del 0,5% en Argentina, Chile y Paraguay. Aparte de estas diferencias de tamaño, estos grupos también presentan una importante diversidad social y lingüística tanto dentro de los países como entre ellos. Se calcula que en toda la región de ALC existen 800 pueblos indígenas distintos (CEPAL et al., 2020[136]), y, a pesar de que la población afrodescendiente de la región tiene un pasado común arraigado en la esclavitud, en la actualidad muestra una gran variedad cultural, socioeconómica y racial, tanto dentro de los países como entre ellos (Banco Mundial, 2018[137]).

Gráfico 5.23. En promedio, en los países analizados, el 8% de la población se identifica como indígena y otro 8% como afrodescendiente



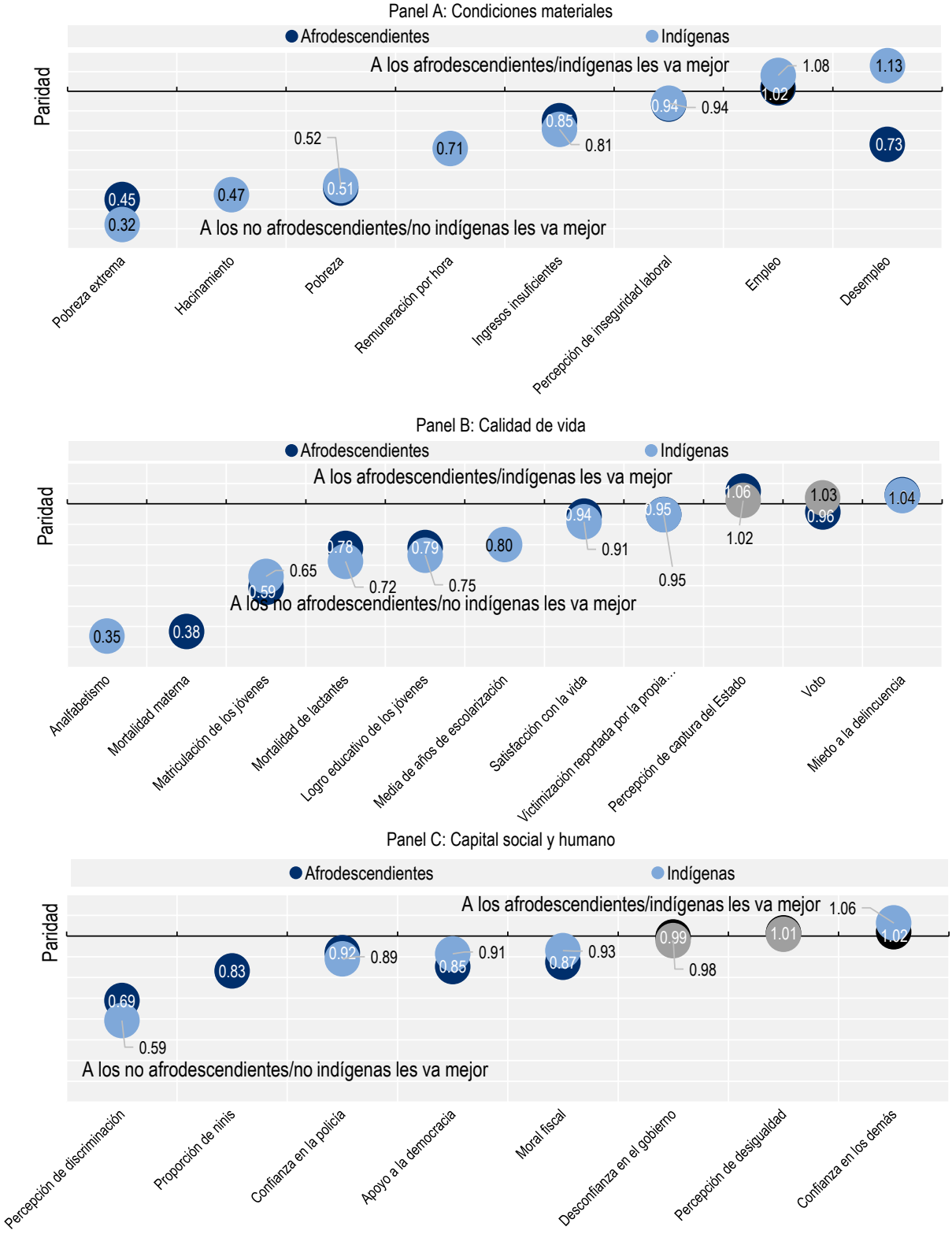
Nota: Los datos se refieren a 2018 en el caso de Colombia, 2017 en el de Chile y Perú, 2015 en el de México, 2014 en el de la República Dominicana, 2012 en el de Paraguay, 2011 en el de Costa Rica y Uruguay, y 2010 en el de Argentina, Brasil y Ecuador. El promedio regional de ALC incluye a Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, además de los países analizados, y comprende la recopilación de datos de 2007 a 2018.
Fuente: "Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial" (CEPAL/FILAC, 2020[138]) para el panel A, y "Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: Retos para la inclusión" (CEPAL, 2020[139]) para el panel B

StatLink https://stat.link/es12p7

No obstante, tanto las poblaciones indígenas como las afrodescendientes de la región se enfrentan a algunos problemas comunes en lo que a exclusión, carencias y discriminación se refiere. El Gráfico 5.10 muestra que en prácticamente todos los indicadores disponibles correspondientes a condiciones materiales, calidad de vida y capital social y humano, las personas indígenas suelen obtener menores resultados de bienestar que las no indígenas, y los afrodescendientes suelen registrar resultados de bienestar más bajos que los no afrodescendientes.[26]

Gráfico 5.24. En la mayoría de los indicadores seleccionados las personas indígenas y afrodescendientes registran peores resultados de bienestar que el grupo comparativo

Ratios de origen étnico y raza (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de bienestar actual y capital humano y social, 2019 o último año disponible



Nota: Cada ratio de desempeño constituye la media simple, calculada en los países analizados de los que existen datos disponibles (véase la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo de Statlink para obtener más información sobre los países que abarca cada indicador). Se han codificado todos los indicadores de forma que las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las personas indígenas y afrodescendientes, mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las no indígenas y no afrodescendientes. Los círculos grises (correspondientes a las personas indígenas) y los negros (correspondientes a las afrodescendientes) denotan que no existe una diferencia clara con respecto al grupo de referencia, lo que se define como ratios de desempeño a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad. El grupo de referencia por defecto a efectos de las comparaciones es la población no indígena *y* no afrodescendiente, aunque hay algunas excepciones. El grupo comparativo de las personas indígenas a efectos de las ratios de desempeño para el empleo, el desempleo, los ingresos por hora, el hacinamiento, el analfabetismo, el promedio de años de escolarización, el logro educativo de los jóvenes en la educación secundaria, el logro educativo de los jóvenes en la educación terciaria y la mortalidad de lactantes está compuesto únicamente por personas no indígenas (es decir, el grupo comparativo incluye afrodescendientes). El grupo comparativo de los afrodescendientes a efectos de las ratios de desempeño para la mortalidad materna y la mortalidad de lactantes está formado únicamente por personas no afrodescendientes (es decir, el grupo comparativo incluye personas indígenas). En Panel B, 'Matriculación de los jóvenes' refiere a la matriculación de los jóvenes en educación terciaria, 'Logro educativo de los jóvenes' refiere al logro educativo de los jóvenes en educación secundaria, y 'Percepción de captura del Estado' refiere a la percepción de captura del Estado por parte de las élites.

Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink

StatLink https://stat.link/0k4971

Si se analizan los indicadores disponibles de condiciones materiales (Gráfico 5.24, panel A), las personas indígenas tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza absoluta y más de tres veces de vivir en la pobreza extrema que las personas no indígenas. Sus ingresos por hora también son menores. Las personas afrodescendientes tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza y más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza extrema que las no afrodescendientes. Tanto las personas indígenas como las afrodescendientes tienen menos probabilidades de pensar que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades o de tener más miedo a perder su empleo que sus respectivos grupos comparativos. No obstante, el panorama es más dispar si se analizan el empleo y el desempleo. No existen diferencias sustanciales en las tasas de empleo de las personas indígenas y afrodescendientes con respecto al grupo comparativo; y, si bien las afrodescendientes tienen más probabilidades de estar desempleadas que las no afrodescendientes (con tasas de desempleo del 9,8% y el 7,1%, respectivamente), las personas indígenas tienen un 13% menos de probabilidades de estar desempleadas que su grupo comparativo. Estos resultados "positivos" del mercado laboral relativos al empleo y el desempleo de los indígenas y el empleo de los afrodescendientes deben interpretarse con cautela, ya que enmascaran el hecho de que el tipo de empleos disponibles para los trabajadores de ambos grupos suele ser de escasa calidad. A nivel mundial, las personas indígenas tienen más probabilidades de trabajar en empleos informales que las no indígenas, y la brecha es aún mayor en América Latina, donde, en promedio, la tasa de informalidad es del 87% para los trabajadores indígenas en comparación con el 51% de los no indígenas (CEPAL/FILAC, 2020[138]). Los trabajadores afrodescendientes tienen más probabilidades de trabajar en el sector informal que los no afrodescendientes en la mayoría de los países analizados de los que hay datos disponibles (Banco Mundial, 2018[137]), aunque las diferencias son menores que en el caso de los trabajadores indígenas.[27] Los empleos informales implican una mayor vulnerabilidad, como el empleo en la agricultura intensiva, que ha provocado un incremento del número de trabajadores indígenas rurales que abandonan sus comunidades para trabajar de forma precaria en condiciones de vida degradadas (CEPAL/FILAC, 2020[138]). Una de las principales características del trabajo informal es la falta de protección social, incluida la cobertura de las pensiones, que se analiza más detenidamente en esta sección. Por último, las personas indígenas tienen más del doble de probabilidades de vivir en condiciones de hacinamiento.[28]

En lo referente a los indicadores de calidad de vida disponibles (Gráfico 5.24, panel B), los indígenas y los afrodescendientes suelen obtener peores resultados en los ámbitos relacionados con la salud y la educación. La mortalidad de lactantes es mayor tanto en el caso de los afrodescendientes como de los indígenas que para el grupo comparativo, y la mortalidad materna es más de 2,5 veces superior para la población afrodescendiente que para la no afrodescendiente. Los jóvenes de ambos grupos tienen menos

probabilidades de completar la educación secundaria y de acceder a la educación terciaria que su grupo comparativo. Por otra parte, el analfabetismo es prácticamente tres veces mayor entre las personas indígenas que entre las no indígenas, y la media de años de escolarización también es más baja.

Sin embargo, las diferencias en otros indicadores de calidad de vida seleccionados son menores o más ambiguas. Ambos grupos declaran niveles de satisfacción con la vida ligeramente inferiores y tasas de victimización ligeramente superiores. Sin embargo, ambos grupos muestran un temor ligeramente menor a la delincuencia y una percepción ligeramente menor de captura del Estado por parte de las élites (la creencia de que su país está gobernado por los poderosos en su propio beneficio) que sus grupos comparativos. Mientras que los afrodescendientes mostraron una tendencia ligeramente menor a votar en las últimas elecciones en comparación con los no afrodescendientes, las personas indígenas registraron una probabilidad marginalmente mayor de haber votado que las no indígenas. En ocasiones, estos resultados son poco lógicos y ponen de relieve la necesidad de disponer de mejores datos y de investigar más sobre estas cuestiones. Por ejemplo, el temor ligeramente menor a la delincuencia va en contra de lo que se conoce sobre la mayor exposición a la violencia paramilitar y por parte del que padecen los pueblos indígenas, lo que indica que podría no ser la mejor medida para captar los tipos de riesgos a los que se enfrentan estos grupos. Además, las diferencias también son muy reducidas y podrían no ser estadísticamente significativas (en los gráficos de resumen, cualquier diferencia del 3% o inferior se presenta como sin una diferencia clara).

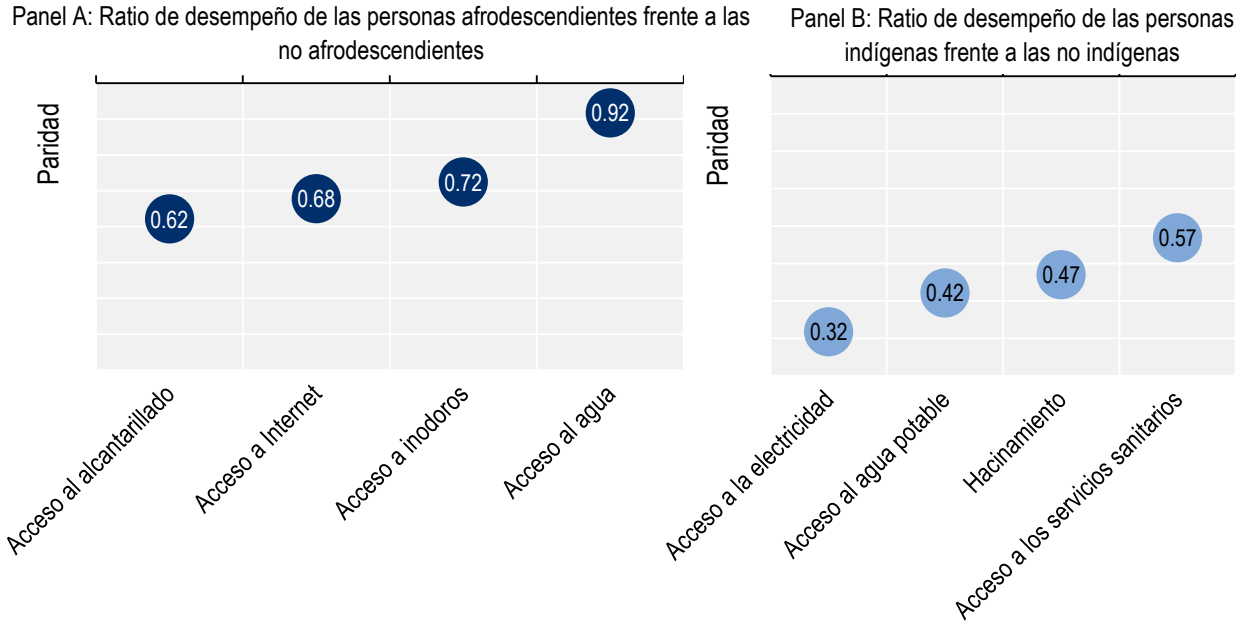
Por último, en cuanto a los indicadores disponibles de capital social y humano, la mayor diferencia se observa en la percepción de discriminación, en la que las personas afrodescendientes e indígenas son significativamente más propensas a creer que pertenecen a un grupo discriminado que las no afrodescendientes y las no indígenas. Ambos grupos son menos propensos a confiar en la policía, a respaldar la democracia sobre otras formas de gobierno y a considerar que la evasión fiscal nunca está justificada (es decir, menor moral fiscal). A la hora de considerar la confianza en el gobierno, la confianza en los demás y la percepción de desigualdad (es decir, la proporción de personas que piensa que la distribución de los ingresos es injusta), hay muy poca diferencia entre los grupos indígenas y los afrodescendientes y sus grupos comparativos, mientras que los afrodescendientes de 15 a 29 años tienen más probabilidades de no estudiar ni trabajar ni recibir formación (ninis) que los no afrodescendientes (con tasas de ninis del 26% en el caso de los afrodescendientes y del 21% en el de los no afrodescendientes).

Condiciones de la vivienda y servicios básicos

Una vivienda inadecuada y un acceso insuficiente a los servicios básicos aumentan la vulnerabilidad de las personas afectadas y es más probable que afecten a quienes además sufren otras carencias materiales, como la pobreza de ingresos. En varios indicadores relacionados con las condiciones de la vivienda, las personas indígenas y afrodescendientes registran peores resultados que su grupo comparativo (Gráfico 5.25). Las personas afrodescendientes tienen menos posibilidades de acceder al agua, aseos, Internet y el alcantarillado que las no afrodescendientes. Las diferencias en los resultados relativos a vivienda y servicios son todavía mayores para la población indígena, que tiene menos probabilidades que la no indígena de tener acceso a los servicios de saneamiento, el doble de probabilidades de habitar viviendas hacinadas y unas tres veces menos de tener acceso a la electricidad.

Gráfico 5.25. En varios indicadores relativos a la vivienda y los servicios, las personas afrodescendientes e indígenas obtienen peores resultados que otras personas

Ratios de origen étnico (distancia con respecto a la paridad) para determinados indicadores de vivienda y servicios, 2019 o último año disponible



Nota: Las ratios de desempeño se han calculado dividiendo los resultados promedios de las personas afrodescendientes (panel A) e indígenas (panel B) en los países analizados para los que se dispone de datos entre el promedio de resultados correspondiente a las personas no afrodescendientes (panel A) o no indígenas (panel B). Las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para la población afrodescendiente (panel A) o indígena (panel B), mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para la población no afrodescendiente (panel A) o no indígena (panel B), —incluidos los indicadores negativos, en los que se ha invertido la puntuación—.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink

StatLink https://stat.link/bzo70g

Cobertura de las pensiones

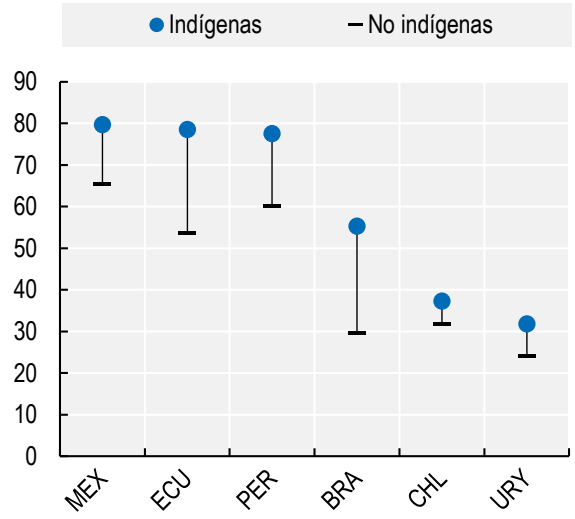
Como se expone en el Capítulo 2, la protección social puede adoptar diversas formas, que engloban las garantías básicas de bienestar, el seguro ante riesgos derivados del contexto o del ciclo de vida, y la moderación o reparación del daño social que se produce cuando se materializan los riesgos sociales (Cecchini et al., 2015[140]). Proporciona una red de seguridad esencial en momentos de mayor vulnerabilidad, como el desempleo o la vejez, aunque muchos tipos de protección están vinculados al empleo formal. Por consiguiente, los trabajadores informales tienen menos posibilidades de acceder a prestaciones sociales de atención sanitaria, pensiones de jubilación, seguros de desempleo, por lesiones o por maternidad.

Aunque no se dispone de datos comparables sobre protección social relativos a las poblaciones indígenas o afrodescendientes, los datos sobre la cobertura de pensiones ofrecen una indicación de las carencias de protección social por origen étnico y raza. El Gráfico 5.26 muestra que, entre los países y los grupos de edad de los que se dispone de datos, las personas indígenas y afrodescendientes cuentan con menor cobertura de pensiones que otras personas. Aproximadamente 4 de cada 5 trabajadores indígenas no cuentan con afiliación a un sistema de pensiones en México (80%), Ecuador (79%) y Perú (78%), lo que supone una carencia de entre 25 puntos porcentuales (en Ecuador) y 14 puntos (en México) con respecto

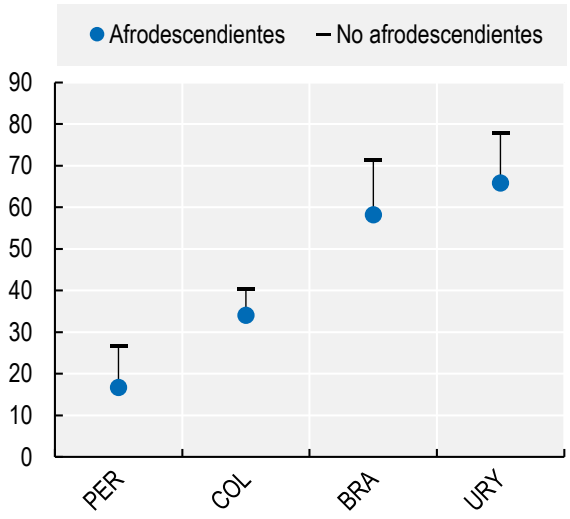
a los trabajadores no indígenas (Gráfico 5.26, panel A). En los cuatro países con datos disponibles (Gráfico 5.26, panel B), la población afrodescendiente en edad de trabajar es sistemáticamente menos propensa a estar afiliada a un sistema de pensiones que el grupo comparativo no afrodescendiente.

Gráfico 5.26. En los países analizados con datos disponibles existen grandes carencias en la cobertura de las pensiones por origen étnico y raza

Panel A: Proporción de trabajadores no afiliados a un sistema de pensiones, porcentaje



Panel B: Proporción de población en edad de trabajar (15-64 años) afiliados o que contribuyen a un sistema de pensiones, porcentaje



Nota: Los datos del panel A se refieren a 2016 en el caso de Ecuador, México, Perú y Uruguay, y a 2015 en el de Brasil y Chile. En el panel B, los datos corresponden a 2018 en el caso de todos los países.
Fuente: "Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial" (CEPAL/FILAC, 2020[138]) para el panel A, y "Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión" (CEPAL, 2020[139]) para el panel B

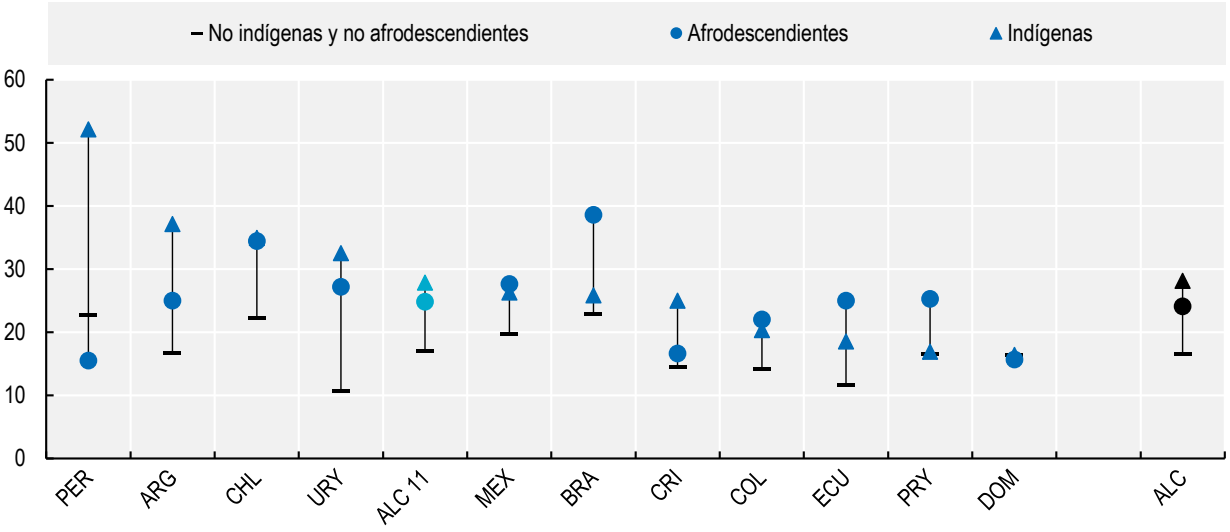
StatLink https://stat.link/i5z0ge

Discriminación

La discriminación y el racismo son a la vez causa y efecto de las desigualdades existentes en los resultados de bienestar por origen étnico y raza en América Latina. Estas han estado presentes de forma constante en la región durante siglos, arraigadas en el proceso de colonización y esclavitud. Desde comienzos del siglo XX, el concepto de mestizaje —la idea de que la mayoría de las personas eran de raza mixta y no existía la discriminación— ganó aceptación generalizada en la región (Sánchez-Ancochea, 2021[11]). Sin embargo, en las últimas décadas los gobiernos han ido reconociendo gradualmente la existencia de discriminación étnica y racial, lo que ha permitido mejorar los datos por origen étnico y raza. En promedio, en los países analizados, el 29% de las personas indígenas y el 25% de las afrodescendientes aseguran pertenecer a un grupo discriminado, frente al 17% de quienes no son ni indígenas ni afrodescendientes (Gráfico 5.27). Entre países existen grandes diferencias, ya que más de la mitad (52%) de las personas indígenas de Perú y casi cuatro quintas partes (39%) de las afrodescendientes de Brasil afirman pertenecer a un grupo discriminado. Las encuestas experimentales realizadas en cuatro países de América Latina (Brasil, Colombia, México y Perú) que emplean un espectro de color de piel (que va del más oscuro al más claro) como categoría de identificación muestran que las desigualdades en el estatus social y económico, y en la experiencia de discriminación, dependen tanto del color de la piel como del grupo étnico-racial (Telles, 2014[141]).

Gráfico 5.27. Al menos 1 de cada 4 personas indígenas y afrodescendientes considera que pertenecen a un grupo discriminado, en comparación con menos de 1 de cada 6 en el caso de otras personas

Proporción de personas que asegura pertenecer a un grupo discriminado por origen étnico, porcentaje



Nota: Los datos indican resultados agrupados correspondientes a 2010, 2011 y 2015, a fin de garantizar un tamaño de muestra adecuado. Por indígena se hace referencia a aquellas personas que se autodefinen como tales y afrodescendiente a las que se autoidentifican como negras o mulatas en la encuesta del Latinobarómetro.
Fuente: Cálculos de la OCDE a partir de Latinobarómetro (base de datos), https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

StatLink https://stat.link/sp1j2m

El impacto del COVID-19 en las desigualdades étnicas y raciales

Las carencias de las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes conllevaron una gran vulnerabilidad ante las consecuencias de la pandemia. Los desafíos comunes a los que se enfrentan ambos grupos en lo que a pobreza, informalidad, falta de protección social, vivienda inadecuada y otros ámbitos se refiere incrementan los riesgos que han experimentado durante la pandemia, tanto en lo referente al impacto directo en la salud como a los resultados socioeconómicos más amplios (CEPAL et al., 2020[136]; CEPAL, 2021[142]). Estas desventajas se ven reforzadas por las desigualdades espaciales, y las personas indígenas y afrodescendientes se enfrentarán a distintos riesgos en función de si viven en zonas urbanas o rurales y de los territorios concretos en los que se concentran debido a los patrones históricos de asentamiento.

La población indígena ya no es predominantemente rural en todos los países latinoamericanos, y ya, según la ronda de censos elaborada en 2010, la mayoría de las personas indígenas vivía en ciudades en cuatro de los doce países para los que se disponía de información (CEPAL et al., 2020[136]). Además, las que viven en las ciudades suelen tener carencias: el 36% de los habitantes urbanos indígenas de la región viven en barrios marginales, casi el doble de la proporción de habitantes urbanos no indígenas (Banco Mundial, 2015[143]). Esto tiene importantes implicaciones para las respuestas a la pandemia centradas en los pueblos indígenas, ya que la concentración de migrantes medioambientales indígenas y de personas desplazadas que viven en condiciones muy precarias en las grandes ciudades hace que se vean expuestos de forma desproporcionada al riesgo de enfermedad y muerte por COVID (CEPAL et al., 2020[136]).

No obstante, muchas personas indígenas continúan viviendo en zonas rurales, y a nivel regional, la población indígena representa el 24% del total de la población rural de América Latina (CEPAL et al., 2020[136]). Como ya se ha descrito en la sección anterior, en las zonas rurales sufren mayores carencias en el acceso al agua y el saneamiento (necesarios para evitar la propagación del virus), así como en el acceso a Internet (necesario para participar en actividades escolares o económicas a distancia durante los períodos de distanciamiento social). Sin embargo, los pueblos indígenas de las zonas rurales suelen estar especialmente marginados, por su lejanía a los servicios públicos (incluidos los servicios de atención sanitaria), la continua invasión y apropiación de los territorios indígenas y otros factores relacionados con el deterioro sistemático de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales (CEPAL et al., 2020[136]). Pese a ser una fuente de resiliencia cultural, la importancia que otorgan las comunidades indígenas tradicionales a la vida comunitaria también conlleva un mayor riesgo de propagación de la enfermedad durante la pandemia (CEPAL et al., 2020[136]).

Entre tres y siete millones de personas indígenas aproximadamente viven en zonas de selvas, y conservan sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales tradicionales (CEPAL et al., 2020[136]). La relación entre las selvas y los pueblos indígenas que los habitan es profunda y recíproca: las selvas proporcionan medios de subsistencia y continuidad cultural a estas comunidades, que a su vez practican técnicas tradicionales y sostenibles de gestión y uso forestal, que contribuyen a la restauración y adaptación de las selvas y su biodiversidad. Estas zonas cada vez están más expuestas a la actividad industrial a gran escala, como la minería y la agricultura, que no solo destruyen los hábitats forestales, sino que también atraen a un gran número de trabajadores externos a las zonas en cuestión, lo que favorece la propagación del virus. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en fase de contacto inicial[29] (se estima que incluyen unos 200 grupos indígenas, principalmente en la Amazonía y el Gran Chaco paraguayo) son especialmente vulnerables en este sentido, ya que las actividades de monitoreo para garantizar su protección se han visto reducidas durante la pandemia (CEPAL et al., 2020[136]).

Los pueblos indígenas han puesto en marcha una serie de esfuerzos colectivos para hacer frente a la pandemia en aquellos casos en que no ha habido respuestas oficiales por parte del Estado o han sido deficientes. Por ejemplo, en casi todos los países de la región se han aplicado medidas como el cierre de los límites territoriales de las comunidades, y puede que sin ellas el impacto sanitario entre los pueblos indígenas habría sido aún mayor. Las estrategias de reciprocidad y cooperación intercomunitaria han suplido las carencias de la cobertura de la ayuda humanitaria de los gobiernos, y se han empleado técnicas de medicina tradicional para complementar o sustituir la atención sanitaria formal, en los casos en que el acceso a los sistemas formales de salud ha sido insuficiente. Del mismo modo, ante la insuficiencia de datos para seguir la evolución de la enfermedad y las tasas de mortalidad entre los pueblos indígenas, algunas comunidades han creado sus propios sistemas de monitoreo epidemiológico (CEPAL et al., 2020[136]).

En cambio, la población afrodescendiente es predominantemente urbana, con un nivel de urbanización superior al 70% en la mayoría de los países de la región, y que alcanza el 97% en Uruguay (CEPAL, 2021[142]). Debido a los mayores niveles de pobreza que sufren los afrodescendientes, por lo general viven en condiciones de mayor hacinamiento, con frecuencia en barrios marginales o asentamientos informales, lo que prácticamente imposibilita el distanciamiento social (CEPAL, 2021[142]). La crisis también ha puesto de relieve las vulnerabilidades propias de ciertas ocupaciones que antes eran menos visibles, sobre todo en el empleo informal. Por ejemplo, en la mayoría de los países de ALC para los que se dispone de datos, las mujeres afrodescendientes son más propensas a trabajar en el sector doméstico que las mujeres no afrodescendientes.[30] Dado que se realiza mayoritariamente en espacios interiores y en estrecho contacto con los empleadores u otros clientes, el trabajo doméstico conlleva una mayor exposición al virus, ya sea en un domicilio privado o en entornos médicos o asistenciales. Además, los elevados índices de informalidad en el sector de los cuidados domésticos, y el carácter esencial de este servicio durante la pandemia, han hecho que normalmente los trabajadores domésticos no tengan la opción de quedarse en casa (CEPAL, 2021[142]).

Los datos de Brasil muestran claramente el impacto desproporcionado de la pandemia en la población afrodescendiente. Diversos estudios y encuestas de los primeros meses (hasta julio de 2020) demostraron que, en ese país, el segundo mayor factor de riesgo de muerte por COVID entre las personas hospitalizadas era ser afrodescendiente (el primero era la edad), y la población afrodescendiente tenía un 47% más de riesgo de muerte que la no afrodescendiente. Las personas afrodescendientes tenían casi la mitad de probabilidades de trabajar a distancia que las no afrodescendiente (el 9% y el 17,6% de estas poblaciones respectivas trabajan desde casa). Si bien la educación ha influido (un paciente afrodescendiente analfabeto tiene 3,8 veces más probabilidades de morir de COVID-19 que un paciente no afrodescendiente con estudios superiores), incluso al comparar personas con el mismo nivel educativo, se produjo el 37% más de muertes entre los afrodescendientes, cifra que aumentó hasta el 50% más al comparar personas con educación superior, lo que sugiere que la discriminación y el racismo han tenido cierta influencia (CEPAL, 2021[142]).

Aspectos para el desarrollo estadístico

En las últimas décadas se han logrado enormes avances en la medición de las desigualdades étnico-raciales en la región latinoamericana. En gran medida, esto ha sido gracias a los esfuerzos de los movimientos sociales que defienden que se mejoren los datos a fin de hacer más visibles las necesidades de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, respaldados por el proceso de democratización en curso en la región (Telles and Paschel, 2014[144]). En la década de 1980, aproximadamente solo la mitad de los países latinoamericanos identificaban a las poblaciones indígenas en sus censos nacionales, y únicamente dos países (Brasil y Cuba) incluían preguntas para diferenciar a los afrodescendientes. En la ronda de censos de 2010, casi todos los países de la región o incluían una pregunta para identificar a las personas indígenas y afrodescendientes o tenían previsto hacerlo (Loveman, 2021[145]; CEPAL, 2019[146]).

Aunque los censos constituyen una poderosa fuente de información, solo se realizan una vez cada década. Se necesitan más esfuerzos para mejorar la disponibilidad de datos desglosados por raza y origen étnico (de preferencia que no solo indiquen la condición de indígena en general, sino también las agrupaciones indígenas concretas, cuando proceda) a través de otras fuentes de datos como las encuestas a los hogares y los datos administrativos. Esto incluye la necesidad de contar con datos que estén mejor desglosados por origen étnico y raza a efectos de los registros médicos y de defunción, con miras a evaluar con mayor precisión el impacto sanitario diferenciado de la crisis del COVID-19 en las poblaciones indígenas y afrodescendientes (CEPAL et al., 2020[136]; CEPAL, 2021[142]).

Muchas de las prioridades para mejorar las medidas de los resultados de bienestar por origen étnico y raza en la región latinoamericana son comunes a las de los países de la OCDE. Estas incluyen (Balestra and Fleischer, 2018[147]):

- Ampliar todos los ejercicios de recopilación de datos pertinentes para incluir las variables de origen étnico, raza o identidad indígena, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y la privacidad de las personas al garantizar medidas adecuadas de protección de datos y control de la divulgación.
- Implicar a las comunidades pertinentes en los procesos de desarrollo de la encuesta (incluida la redacción de las preguntas y las categorías de respuesta), la validación de la exactitud de la información reportada por la propia persona, los esfuerzos de recopilación de datos y la difusión de los resultados. De este modo se generará confianza y se mejorará la calidad de los datos.
- Garantizar la representación de las poblaciones a las que es difícil llegar, como las comunidades indígenas, a través de técnicas de muestreo no estándar, como el muestreo en relación con el tiempo y la ubicación o el muestreo dirigido por los propios encuestados, e incluir a estas comunidades entre las opciones de respuesta precodificadas, cuando proceda.
- Recopilar información sobre la diversidad tanto en los censos de población como en las encuestas para proporcionar estadísticas demográficas sólidas y datos oportunos que permitan evaluar los

múltiples resultados de bienestar y las experiencias discriminatorias. Cuando sea posible, vincular el censo, la muestra de datos de la encuesta y los registros administrativos relativos a estas poblaciones.

- Cuando se comparen los datos de dos o más colecciones distintas, debe tenerse en cuenta cómo y cuándo fueron recopilados. Además, es necesario explicitar las suposiciones sobre las incertidumbres de los datos resultantes. Siempre que sea posible, las oficinas nacionales de estadísticas deberían invertir en el desarrollo de normas estadísticas sobre diversidad y proporcionar orientaciones claras destinadas a mejorar la coherencia y la comparabilidad entre todas las fuentes de datos (censos, encuestas, datos administrativos).
- Permitir que los encuestados declaren más de una identidad, a fin de tener en cuenta la fluidez de las clasificaciones étnicas y raciales, y reflejar mejor la composición cada vez más diversa de las sociedades. Las categorías estadísticas deberían reflejar los cambios demográficos, así como la evolución en la comprensión de las identidades raciales y étnicas.

Con relación a este último punto, es necesario profundizar en el debate y la reflexión sobre las identidades múltiples de la región y cómo abordar esta cuestión en los sistemas estadísticos nacionales, debate que debería realizarse con las organizaciones de personas afrodescendientes e indígenas. El origen étnico y la raza son supuestos sociales más que biológicos, lo que significa que la forma en que las personas se autoidentifican (y son identificadas por los demás) depende en gran medida del contexto y la situación, lo que permite que coexistan múltiples identidades (CEPAL, 2020[139]). Sin embargo, las estadísticas oficiales de la región suelen emplear la autoidentificación con categorías excluyentes, lo que permite captar únicamente la categoría "principal" seleccionada. La información sobre el tamaño de las diferentes poblaciones étnicas y raciales tiene un innegable componente político, ya que puede repercutir en la asignación de recursos o en el acceso de la población a los procesos de toma de decisiones,[31] por lo que garantizar su exactitud y representatividad debe ser una prioridad.

En el impacto del origen étnico y la raza en la configuración de los resultados de bienestar intervienen otras variables que confluyen, como el género, la edad, la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico. Las mujeres indígenas y afrodescendientes, las personas que viven en zonas rurales, las personas mayores y las personas con menor nivel educativo u otros marcadores socioeconómicos suelen ser más vulnerables, y los que acumulan numerosos riesgos presentan las mayores carencias. Para poder comprender mejor la forma en que confluyen las desventajas es preciso incluir muestras más amplias de minorías étnicas y raciales en las encuestas de población, a fin de favorecer un análisis más sólido de los grupos a los que afectan varias vulnerabilidades. Asimismo, es importante que los datos sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes se analicen teniendo en cuenta los contextos sociales, territoriales y culturales pertinentes.

Desde un punto de vista más conceptual, la idea indígena de bienestar, tal y como se engloba en el marco del Buen Vivir de Ecuador o en el marco del Vivir Bien de Bolivia, hace un mayor énfasis en las relaciones comunitarias (incluidas las relaciones entre la comunidad y el entorno natural) y en las prácticas colectivas que otras sociedades occidentales (Garcia and Viteri, 2018[148]). Las perspectivas indígenas rara vez se incorporan en los ejercicios de medición del bienestar (con las notables excepciones de Ecuador y Bolivia). Esto pone de relieve la necesidad de involucrar a las comunidades pertinentes en el proceso de desarrollo de encuestas siempre que sea posible. Incorporar las prioridades indígenas implicaría también medir mejor los aspectos importantes específicos de sus comunidades, como los derechos territoriales,[32] la conservación de la lengua, los objetos y las representaciones culturales, así como la protección de los lugares sagrados y los conocimientos tradicionales (OCDE, 2019[149]).

Desigualdades en función de la educación

La educación permite que las personas adquieran las competencias necesarias para comprender el mundo y desenvolverse en él, les ofrece oportunidades y mejora el control sobre su vida (OCDE, 2011[150]). A pesar de las mejoras en el logro educativo, en los países analizados, todavía menos de la mitad de la población de 25 años o más ha completado al menos el segundo ciclo de educación secundaria, lo que contrasta con más del 70% del promedio de la OCDE (véase el Capítulo 3).

En el Gráfico 5.28 se recogen las ratios de desempeño de determinados resultados de bienestar y recursos para el bienestar futuro de las personas con educación primaria (azul oscuro) y educación secundaria (azul claro) comparados con las que cuentan con educación terciaria, en promedio, en los 11 países de ALC del grupo analizado. A fin de facilitar su comprensión, todos los indicadores se codifican en el mismo sentido, de forma que, cuanto mayor sea la ratio, mejor será el desempeño relativo de las personas con educación primaria y secundaria.

La educación tiene un importante efecto positivo en las condiciones de vida materiales de las personas (Gráfico 5.28, panel A). En general, las personas con un menor logro educativo tienen unas condiciones de vida materiales más bajas. Aquellas con educación primaria y las que poseen educación secundaria tienen, respectivamente, 11 y 6 veces más probabilidades de ser pobres, son más propensas a declarar que sus ingresos no son suficientes para atender sus necesidades (respectivamente, el doble y un 50% más) y sus probabilidades de tener un empleo son menores, en comparación con las personas con educación terciaria. Cuando tienen un empleo, son más propensas a que este sea informal y a ganar menos, y más propensas a trabajar muchas horas en comparación con las que tienen educación terciaria. Las personas con estudios primarios y secundarios también tienen más miedo a perder su trabajo y más probabilidades de estar desempleadas. Sin embargo, la probabilidad de estar desempleadas es ligeramente mayor para las personas con educación secundaria que para aquellas con educación primaria. Esto podría explicarse por la polarización cada vez mayor del mercado laboral, debido sobre todo a la digitalización, que reduce la demanda de puestos de trabajo de cualificación media en favor del empleo de baja y alta cualificación (OCDE, 2020[151]; OCDE, 2017[152]).

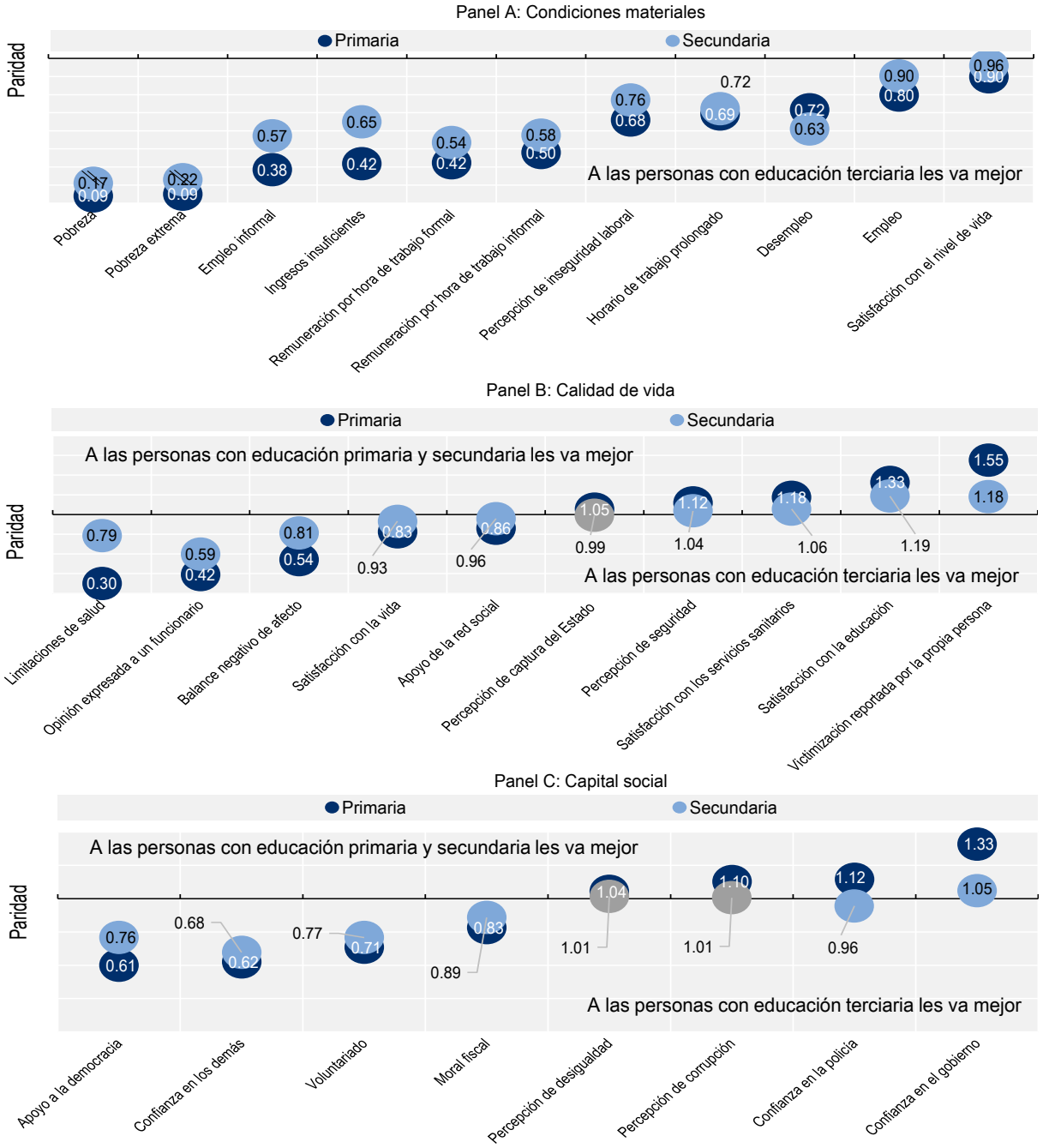
La relación entre educación y calidad de vida no está tan claramente definida (Gráfico 5.28, panel B). En promedio, las personas con educación primaria y secundaria manifiestan una menor satisfacción con la vida, un mayor balance negativo de afecto y menos apoyo de su red social que las que tienen educación terciaria. Las personas con estudios primarios y secundarios también son menos propensas a expresar su opinión a un funcionario, mientras que la percepción de que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio está generalizada y presente en todos los niveles educativos. Las personas con educación primaria son tres veces más propensas que aquellas con educación terciaria a declarar limitaciones en las actividades cotidianas por problemas de salud, mientras que las personas con educación secundaria también son algo más propensas a declarar estas limitaciones. Este patrón se debe en parte a las diferencias en la distribución por edad en los distintos niveles educativos: debido a que el logro educativo aumenta con el tiempo, la proporción de personas de 50 años o más (que son también las que tienen más probabilidades de indicar limitaciones de salud) es mayor entre las que tienen educación primaria (41%) que entre las que tienen educación terciaria (19%) en promedio en los países analizados. Sin embargo, si se compara la proporción de personas que declaran tener limitaciones de salud en los distintos grupos de edad, esta es también sistemáticamente menor en el caso de quienes tienen educación terciaria en comparación con los que tienen educación primaria.

La satisfacción con los servicios (atención sanitaria y educación) es mucho más alta entre las personas con educación primaria y secundaria que entre las que tienen educación terciaria. Esto puede deberse en parte al hecho de que las personas con estudios superiores son más conscientes de las limitaciones de los sistemas educativo y sanitario, y su nivel de exigencia a la hora de evaluarlos es mayor (Cárdenas et al., 2008[130]). La seguridad y la percepción de seguridad son también más elevadas entre las personas con educación primaria: solo el 21% de ellas declara haber sido víctima de un delito en los 12 meses anteriores, frente al 27% y el 32% de las personas con estudios secundarios y terciarios, respectivamente. La diferencia de nivel educativo en cuanto a la percepción de seguridad es menor, ya que la proporción de personas que se sienten seguras al caminar a solas de noche en su vecindad es tan solo 4 puntos porcentuales mayor en el caso de las personas con educación primaria que en aquellas con educación terciaria.

Las desigualdades en el capital social en función de la educación son menores (Gráfico 5.28, panel C). Mientras que el apoyo a la democracia, la confianza en los demás, el voluntariado y el respaldo a pagar impuestos son más bajos entre las personas con educación primaria o secundaria que entre aquellas con educación terciaria, la percepción de distribución desigual de los ingresos es muy similar en todos los niveles educativos (en torno al 80% de las personas de todos los niveles educativos consideran que la distribución de los ingresos es injusta). La confianza en el gobierno es mayor entre las personas con educación primaria y secundaria (respectivamente, el 40% y el 31% de ellos confían en el gobierno, frente al 30% de aquellos con educación terciaria). La percepción de corrupción del gobierno es elevada, aunque menor entre las personas con educación primaria (el 69% piensa que la corrupción es generalizada en el gobierno), en comparación con quienes tienen educación secundaria (75%) y terciaria (76%). Comparadas con las personas con educación terciaria, la confianza en la policía es mayor entre las personas con educación primaria, aunque ligeramente menor entre aquellas con educación secundaria, en comparación con las personas con educación terciaria.

Gráfico 5.28. Las personas con menos educación afrontan peores condiciones materiales, mientras que la situación no está tan clara en cuanto a la calidad de vida y el capital social

Ratios de educación (distancia con respecto a la paridad) con relación a las personas con educación terciaria para determinados indicadores de bienestar actual y capital social, 2019 o último año disponible



Nota: Cada ratio de desempeño constituye la media simple en función de la educación calculada en los 11 países analizados de los que hay datos disponibles para todos los grupos de desigualdad que se han tenido en cuenta. Debido a esto, las ratios de desempeño pueden comprender un subconjunto de los 11 países analizados. Las ratios de desempeño superiores a 1 indican mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las personas con educación primaria y secundaria, mientras que las ratios inferiores a 1 señalan mejores resultados (es decir, mayor bienestar) para las personas con educación terciaria —incluidos los indicadores negativos, en los que se ha invertido la puntuación—. Los círculos grises denotan que no existe una diferencia clara con el grupo de referencia (personas con educación terciaria), lo que se define como ratios de educación a una distancia de 0,03 puntos con respecto a la paridad. En Panel A, 'Horario de trabajo prolongado' refiere a horarios de trabajo de más que 60 horas semanales. En Panel B, 'Percepción de captura del Estado' refiere a la percepción de captura del Estado por parte de las élites.
Fuente: Cálculos de la OCDE. Para obtener una lista completa de las fuentes consúltese la pestaña "Sources and Methods" (Fuentes y métodos) del archivo Statlink.

StatLink https://stat.link/p6zq31

El impacto del COVID-19 en las desigualdades en función de la educación

Es probable que el impacto de la pandemia en la población con menor nivel educativo haya sido más grave en varias dimensiones del bienestar, dada su vulnerabilidad en cuanto a condiciones materiales y algunas dimensiones de la calidad de vida. El COVID-19 afectó más gravemente a los trabajadores con menor nivel educativo, debido a sus mayores probabilidades de perder el empleo o de verlo interrumpido de otro modo comparados con los trabajadores con mayor nivel educativo (OCDE, 2021[153]). En los casos en que estaban ocupadas, las personas con menor nivel educativo tenían más probabilidades de ser trabajadoras esenciales (p. ej., del transporte, la limpieza o el comercio minorista esencial), un mayor riesgo de verse expuestas al virus y menos probabilidades de poder teletrabajar, en comparación con las personas trabajadoras con mayor nivel educativo (OCDE, 2020[154]). Dado que también tienen más probabilidades de estar desempleadas y de tener dificultades económicas, las personas con menor nivel educativo también presentan más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad. Como ya se ha señalado en el Capítulo 3, es probable que el cierre de las escuelas y el paso a la educación a distancia en la mayoría de los países hayan agravado las diferencias en los resultados del aprendizaje, con un efecto especialmente negativo en los alumnos vulnerables con conexión a Internet deficiente o escasas competencias digitales o que carecen de un espacio propio en el que concentrarse (OCDE, a continuación[59]).

La rápida propagación del COVID-19 y la gravedad de sus efectos sobre la salud humana han requerido que las personas adquieran y apliquen con rapidez la información sobre medidas preventivas y adapten su conducta a fin de evitar contraer o propagar el virus. La alfabetización en materia de salud (es decir, la capacidad de adquirir, comprender y utilizar la información sobre salud de forma adecuada y ética) se ha convertido en algo fundamental durante la pandemia para ayudar a que las personas entiendan las razones que justifican las recomendaciones oficiales y reflexionen sobre los resultados de sus acciones (Paakkari and Okan, 2020[155]). La alfabetización de las personas en materia de salud está condicionada por su nivel educativo, lo que añade una dimensión adicional a la vulnerabilidad de las personas con bajo nivel educativo.

Aspectos para el desarrollo estadístico

La información sobre los resultados de bienestar suele estar disponible en función de la educación, con la excepción de las condiciones de la vivienda y las infraestructuras. Sin embargo, en el caso de algunos indicadores (como los ingresos insuficientes, el miedo a perder el trabajo, la percepción de la captura del Estado por parte de las élites) no se dispone de información en función del logro educativo, sino únicamente de los años de educación, lo que no informa necesariamente sobre el nivel educativo que han alcanzado las personas (debido a la posibilidad de "repetir curso"). Se requiere una mayor armonización de las categorías de educación en origen, a fin de garantizar que se adopta un enfoque coherente de las

desigualdades en función de la educación basado en el logro educativo en todas las dimensiones e indicadores del bienestar.

Referencias

Aarkrog, V. et al. (2018), "Decision-Making Processes Among Potential Dropouts in Vocational Education and Training and Adult Learning", *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, Vol. 5/2, pp. 112-129, http://dx.doi.org/10.13152/ijrvet.5.2.2. [111]

Amarante, V., M. Colacce and F. Scalese (a continuación), "Poverty and gender in Latin America: how far can income-based measures go?". [11]

Arnesen, L. et al. (2016), "An analysis of three levels of scaled-up coverage for 28 interventions to avert stillbirths and maternal, newborn and child mortality in 27 countries in Latin America and the Caribbean with the Lives Saved Tool (LiST)", *BMC Public Health*, Vol. 16/1, http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3238-z. [76]

Balestra, C. and L. Fleischer (2018), "Diversity statistics in the OECD: How do OECD countries collect data on ethnic, racial and indigenous identity?", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2018/09, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/89bae654-en. [147]

Banco Interamericano de Desarrollo (2018), *The Future of Work in Latin America and the Caribbean: Education and Health, the Sectors of the Future?*, https://publications.iadb.org/en/future-work-latin-america-and-caribbean-education-and-health-sectors-future-interactive-version. [52]

Banco Mundial (2020), *Gender Dimensions of the COVID 19 Pandemic*. [51]

Banco Mundial (2020), *Policy Note: Gender dimensions of the Covid-19 pandemic*, Grupo del Banco Mundial. [50]

Banco Mundial (2020), *World Development Indicators*, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=ZJ. [68]

Banco Mundial (2018), *Afro-descendants in Latin America: Towards a Framework of Inclusion*, Grupo del Banco Mundial, Washington, DC. [137]

Banco Mundial (2015), *Indigenous Latin America in the Twenty-First Century: the first decade*, Grupo del Banco Mundial, Washington, DC, https://documents1.worldbank.org/curated/en/145891467991974540/pdf/Indigenous-Latin-America-in-the-twenty-first-century-the-first-decade.pdf. [143]

BID (2017), *¿Cómo viven los adultos mayores en América Latina y el Caribe?*, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama_-_Como_viven_los_adultos_mayores_en_ALC_es_es.pdf. [113]

Bott, S. et al. (2012), *Violence Against Women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-based data from 12 countries*, Pan American Health Organization, Washington, DC, https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.pdf. [33]

Cafagna, G. et al. (2019), *Envejecer con cuidado: Atención a la dependencia en América Latina y el Caribe*, Inter-American Development Bank, http://dx.doi.org/10.18235/0001972. [114]

Caputi, J. and D. Russell (1990), "Femicide: speaking the unspeakable", *Ms*, Vol. 1/2, pp. 34-37. [37]

Cárdenas, M. et al. (2008), *Education and Life Satisfaction: Perception or Reality?*, https://core.ac.uk/download/pdf/6783786.pdf. [130]

CDC (2020), *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health*, https://www.cdc.gov/lgbthealth/youth.htm. [122]

Cecchini, S. et al. (eds.) (2015), *Towards universal social protection: Latin American pathways and policy tools*, CEPAL, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39484/S1500752_en.pdf. [67]

Cecchini, S. et al. (2015), *Towards universal social protection: Latin American pathways and policy tools*, CEPAL, Santiago. [140]

CEPAL (2021), "COVID-19 Reports: People of African descent and COVID-19: unveiling structural inequalities in Latin America", CEPAL, Santiago. [142]

CEPAL (2021), *COVID-19 Special Report No. 9: The Economic Autonomy of Women in a Sustainable Recovery with Equality*, CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46634/S2000739_en.pdf. [53]

CEPAL (2021), "Repository of information on time use in Latin America and the Caribbean", https://oig.cepal.org/sites/default/files/c2100061_web.pdf. [26]

CEPAL (2021), *Social Panorama of Latin America 2020*, CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46688/S2100149_en.pdf. [3]

CEPAL (2020), *Addressing violence against women and girls during and after the COVID-19 pandemic requires financing, responses, prevention and data compillation*, CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46425/S2000874_en.pdf. [31]

CEPAL (2020), *Afro-descendants and the social inequality matrix: Inclusion challenges [Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: Retos para la inclusión]*, CEPAL, Santiago. [139]

CEPAL (2020), *Latin America and the Caribbean and the COVID-19 pandemic: economic and social effects*, https://www.cepal.org/en/publications/45351-latin-america-and-caribbean-and-covid-19-pandemic-economic-and-social-effects. [109]

CEPAL (2020), *Measurement and status of young women and men in paid and unpaid work*, World's Women 2020, https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=17627ede6e6241bab21c21deaf483ab1. [160]

CEPAL (2020), *Persons with disabilities and coronovirus disease (COVID-19) in Latin America and the Caribbean: status and guidelines*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45492/S2000299_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [106]

CEPAL (2020), *Reconstruction and transformation with equality and sustainability in Latin America and the Caribbean*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46130/1/2000652_en.pdf. [129]

CEPAL (2019), "Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: Desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020 [Conceptual aspects of population and housing censuses: Challenges for the definition of inclusive content in the 2020 round.]"*, serie Seminarios y Conferencias*, No. 94 (LC/TS.2019/67), https://www.cepal.org/es/publicaciones/44944-aspectos-conceptuales-censos-poblacion-vivienda-desafios-la-definicion. [146]

CEPAL (2019), "Follow-up of the SDGs from a gender perspective in Latin America and the Caribbean"*, Note prepared for the Work Session on Gender Statistics, Conference of European Statisticians, 15-17 May 2019*, CEPAL. [161]

CEPAL (2019), *Indicator: "Number of femicides or feminicides"*, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2780&idioma=i. [39]

CEPAL (2019), *Time-use measurements in Latin America and the Caribbean*, https://oig.cepal.org/sites/default/files/time_use-measurement_in_lac_0.pdf. [61]

CEPAL (2018), *Social Panorama of Latin America 2017*, CEPAL, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42717/6/S1800001_en.pdf. [97]

CEPAL (2018), *Social Panorama of Latin America 2018*, http://www.cepal.org/en/suscripciones. [13]

CEPAL (2017), *Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 [Montevideo Strategy for the Implementation of the Regional Gender Agenda in the context of Sustainable Development to 2030]*. [9]

CEPAL (2016), *Social Panorama of Latin America 2016*. [63]

CEPAL (2016), *The social inequality matrix in Latina America*, United Nations, https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/s1600945_en.pdf. [8]

CEPAL (2015), *Inclusive social development. The next generation of policies for overcoming poverty and reducing inequality in Latin America and the Caribbean*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39101/4/S1600098_en.pdf. [90]

CEPAL (2015), *Social Panorama of Latin America 2015*, United Nations, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39964/S1600174_en.pdf?sequence=5&isAllowed=y. [91]

CEPAL (2014), *La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina. Introducción al análisis demográfico, con énfasis en el uso de microdatos censales de la ronda de 2010*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/36853-la-reproduccion-la-adolescencia-sus-desigualdades-america-latina-introduccion-al. [44]

CEPAL (2014), *Social Panorama of Latin America 2014*, CEPAL, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/4/S1420728_en.pdf. [12]

CEPAL (ed.) (2013), *Ageing, solidarity and social protection in Latin America and the Caribbean. Time for progress towards equity*, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2620. [86]

CEPAL (2006), *Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/3539-manual-indicadores-calidad-vida-la-vejez. [125]

CEPAL et al. (2020), *The impact of COVID-19 on indigenous peoples in Latin America (Abya Yala): between invisibility and collective resistance*, CEPAL, Santiago. [136]

CEPAL/FILAC (2020), *The Indigenous people of Latin America - Abya Yala and the SDG Agenda: Tensions and challenges from a territorial perspective [Los pueblos inidígenos de América Latina - Abya Yala y la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial]*. [138]

CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres (2016), *Classification of Time-Use Activities for Latin America and the Caribbean (CAUTAL)*. [62]

CEPAL/OIT (2020), "Employment trends in an unprecedented crisis: policy challenges", *Employment Situation in Latin America and the Caribbean*, No. 23, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46309/4/S2000600_en.pdf. [54]

CEPAL/OIT (2018), *Employment situation in Latin America and the Caribbean. Labour market participation of older persons: needs and options*, CEPAL/OIT, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_630074.pdf. [95]

CEPAL/ONU-Mujeres (2021), "Measures and actions promoted by the Governments of Latin America and the Caribbean against COVID-19 in key areas for the autonomy of women and gender equality (Preliminary working document)", https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/220222_documento_mapeo_medidas_covid-19_rev_dag_eng.pdf. [60]

CEPAL/UNICEF (2007), *Teenage motherhood in Latin America and the Caribbean. Trends, problems and challenges*, https://www.cepal.org/en/publications/36002-teenage-motherhood-latin-america-and-caribbean-trends-problems-and-challenges. [45]

Coker, T., S. Austin and M. Schuster (2010), "The Health and Health Care of Lesbian, Gay, and Bisexual Adolescents", *Annual Review of Public Health*, Vol. 31/1, pp. 457-477, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103636. [123]

Comisión Europea et al. (2020), *A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons*, https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdf. [132]

Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2013), *Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact in the Americas: Recommendations for the full respect of their human rights*, OAS Organization of American States, http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/report-indigenous-peoples-voluntary-isolation.pdf. [166]

Costa, A. and A. Ludermir (2005), "Transtornos mentais comuns e apoio social: estudo em comunidade rural da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil", *Cadernos de Saúde Pública*, Vol. 21/1, pp. 73-79, http://dx.doi.org/10.1590/s0102-311x2005000100009. [88]

Cuartas, J. et al. (2019), "Early childhood exposure to non-violent discipline and physical and psychological aggression in low- and middle-income countries: National, regional, and global prevalence estimates", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 92, pp. 93-105, http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.03.021. [110]

Escotto, T. (2015), *Las juventudes centroamericanas en contextos de inseguridad y violencia*, CEPAL, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39229/1/S1500621_es.pdf. [83]

Eurostat (2021), *Indicator: "Intentional homicide rate for women by intimate partner or family member/relative"*, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hom_vrel&lang=en. [40]

Fadic, M. et al. (2019), "Classifying small (TL3) regions based on metropolitan population, low density and remoteness", *OECD Regional Development Working Papers*, No. 2019/06, OECD, Paris. [133]

Ferreira, F. and M. Schoch (2020), *Inequality and social unrest in Latin America: The Tocqueville Paradox revisited*, Banco Mundial blog. [4]

Gallup Inc./OIT (2017), *Towards a Better Future for Women and Work: Voices of women and men*, Gallup Inc., https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf. [15]

Garcia, N. and J. Viteri (2018), "Methodological proposal for the construction of well-being measures in Ecuador [Propuesta metodológica para la Construcción de Medidas de Bienestar en el Ecuador]", INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Quito, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Documento_metodologico_Metricas_de_Bienestar_11122018. [148]

Gasparini, L. et al. (2015), "Female Labor Force Participation in Latin America: Evidence of Deceleration", No. 181, Universidad Nacional de la Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), https://www.econstor.eu/bitstream/10419/127697/1/cedlas-wp-181.pdf. [14]

Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (2021), *Distribution of total employed population by productivity level and sex*, https://oig.cepal.org/en/indicators/distribution-total-employed-population-productivity-level-and-sex. [16]

Gherardi, N. (2016), *Otras forma de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar*, CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/40754/S1601170_es.pdf. [30]

GHRC - USA (s.f.), *Femicide and Feminicide: Fact Sheet*, Guatemala Human Rights Commission, Washington, DC, http://www.ghrc-usa.org/Programs/ForWomensRighttoLive/factsheet_femicide.pdf. [35]

Gigantesco, A. et al. (2019), "The Relationship Between Satisfaction With Life and Depression Symptoms by Gender", *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 10, http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00419. [87]

Global Health 50/50; APHRC; ICRW (2021), *The Covid-19 Sex Disaggregated Data Tracker: February Update Report*, https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/about-us/. [49]

Gracia, E. (2004), “Unreported cases of domestic violence against women: towards an epidemiology of social silence, tolerance, and inhibition The ’’iceberg’’ of domestic violence”, *Journal of Epidemiology and Community Health*, Vol. 58, pp. 536-537, http://dx.doi.org/10.1136/jech.2003.019604. [34]

Grove, J. et al. (2015), “Maternal, newborn, and child health and the Sustainable Development Goals—a call for sustained and improved measurement”, *The Lancet*, Vol. 386/10003, pp. 1511-1514, http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(15)00517-6. [77]

Heise L and Garcia Moreno C (2002), “Violence by intimate partners”, in Krug E.G., L. et al. (eds.), *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, Geneva. [28]

Hobbs, C. et al. (2020), “COVID-19 in Children: A Review and Parallels to Other Hyperinflammatory Syndromes”, *Frontiers in Pediatrics*, Vol. 8, http://dx.doi.org/10.3389/fped.2020.593455. [100]

INEC (2018), *Encuesta Nacional sobre Discapacidad [National survey on disability]*, https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-sobre-discapacidad. [117]

INEGI (2019), *Statistics related to the International Day of the Eradication of Violence Against Women, 25 November [Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 25 noviembre]*, INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf. [38]

INEI (2014), *Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012*, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf. [120]

INSP (2016), *Encuesta Nacional de Percepción de la Discapacidad en Población Mexicana 2010 [National Survey of Perceptions of Disability in the Mexican Population 2010]*, https://encuestas.insp.mx/enpdis/index.php. [118]

Jewkes, R., P. Sen and C. Garcia Moreno (2002), “Sexual violence”, in Krug, E. et al. (eds.), *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, Geneva, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsession. [29]

Jutting, J. and J. de Laiglesia (2009), *Is Informal Normal? Towards more and better jobs in developing countries*, OECD Development Centre, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264059245-en.pdf?expires=1615473078&id=id&accname=ocid84004878&checksum=31453504A7E68FF504E107A704E4295B. [23]

Kann, L. et al. (2016), “Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, and Health-Related Behaviors Among Students in Grades 9–12 — United States and Selected Sites, 2015”, *MMWR. Surveillance Summaries*, Vol. 65/9, pp. 1-202, http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6509a1. [124]

Kawachi, I. (2001), “Social Ties and Mental Health”, *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, Vol. 78/3, pp. 458-467, http://dx.doi.org/10.1093/jurban/78.3.458. [89]

Kendig, S., M. Mattingly and S. Bianchi (2014), “Childhood Poverty and the Transition to Adulthood”, *Family Relations*, Vol. 63/2, pp. 271-286, http://dx.doi.org/10.1111/fare.12061. [71]

Langman, J. (2019), *From Model to Muddle: Chile’s Sad Slide Into Upheaval*. [5]

Lansbury, L., C. Brown and J. Nguyen-Van-Tam (2017), "Influenza in long-term care facilities", *Influenza and Other Respiratory Viruses*, Vol. 11/5, pp. 356-366, http://dx.doi.org/10.1111/irv.12464. [116]

Latinobarómetro (2015), *"Degree of agreement: Women should work only if the partner does not earn enough money" [Grado de acuerdo: Mujeres deben trabajar sólo si la pareja no gana suficiente]*, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. [159]

Loveman, M. (2021), "The politics of a datascape transformed: ethnoracial statistics in Brazil in regional comparative perspective [A política de um cenário de dados transformado: estatísticas etnorraciais no Brasil em uma perspectiva comparativa regional]", *Sociologias*, Vol. 23/56, pp. 110-153. [145]

Lustig, N. and M. Tommasi (2020), *Covid-19 and social protection of poor and vulnerable groups in Latin America: a conceptual framework*, UNDP, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html. [131]

Michaeljon, A., E. Bell and J. Holden (2016), *DFID Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle Violence against Women and Girls (VAWG)*, VAWG Helpdesk, London. [41]

Mostafa, T. (2019), ""Why don't more girls choose to pursue a science career?"", *PISA in Focus* 93. [10]

Naciones Unidas (1948), *Universal Declaration of Human Rights*, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. [162]

NASEM (2015), *Strengthening the Scientific Foundation for Policymaking to Meet the Challenges of Aging in Latin America and the Caribbean*, National Academies Press, Washington, D.C., http://dx.doi.org/10.17226/21800. [126]

OCDE (2021), *Man Enough? Measuring Masculine Norms to Promote Women's Empowerment*, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6ffd1936-en. [55]

OCDE (2021), *Measuring What Matters for Child Well-being and Policies*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e82fded1-en. [65]

OCDE (2021), "Risks that matter 2020: The long reach of COVID-19", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/44932654-en. [153]

OCDE (2020), *A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis report*, OECD Urban Policy Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e86fa715-en. [163]

OCDE (2020), "Combatting COVID-19's effect on children", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/2e1f3b2f-en. [99]

OCDE (2020), "COVID-19: Protecting people and societies", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e5c9de1a-en. [104]

OCDE (2020), *OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/1686c758-en. [154]

OCDE (2020), *OECD Regions and Cities at a Glance 2020*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/959d5ba0-en. [135]

OCDE (2020), *SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean*, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/cb7d45d1-en. [42]

OCDE (2020), "What is happening to middle-skill workers?", in *OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/c9d28c24-en. [151]

OCDE (2020), "Women at the core of the fight against COVID-19 crisis", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/553a8269-en. [56]

OCDE (2020), *Women at the Core of the Fight Against the Covid-19 Crisis*, OECD. [57]

OCDE (2019), *Health at a Glance 2019: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4dd50c09-en. [115]

OCDE (2019), *Linking Indigenous Communities with Regional Development*, OECD Rural Policy Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/3203c082-en. [149]

OCDE (2019), *OECD Economic Surveys: Argentina 2019*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/0c7f002c-en. [93]

OCDE (2019), *OECD Economic Surveys: Colombia 2019*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e4c64889-en. [92]

OCDE (2019), *SIGI 2019 Global Report: Transforming Challenges into Opportunities*, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/bc56d212-en. [46]

OCDE (2019), *Under Pressure: The Squeezed Middle Class*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/689afed1-en. [2]

OCDE (2018), *OECD Economic Surveys: Brazil 2018*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-bra-2018-en. [94]

OCDE (2017), *How's Life? 2017: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en. [6]

OCDE (2017), *OECD Employment Outlook 2017*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en. [152]

OCDE (2017), *Preventing Ageing Unequally*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264279087-en. [66]

OCDE (2015), *How's Life? 2015: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en. [69]

OCDE (2011), *How's Life?: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en. [150]

OCDE (a continuación), *COVID-19 and Well-Being Evidence Scan*. [59]

OCDE/Banco Mundial (2020), *Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6089164f-en. [79]

OCDE/BID/Banco Mundial (2014), *Pensions at a Glance: Latin America and the Caribbean*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2014-en. [96]

OCDE/CAF/CEPAL (2016), *Latin American Economic Outlook 2017: Youth, Skills and Entrepreneurship*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-en. [80]

OCDE/Comisión Europea (2020), *Cities in the World: A New Perspective on Urbanisation*, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/d0efcbda-en. [128]

OCDE/OIT (2019), *Tackling Vulnerability in the Informal Economy*, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/939b7bcd-en. [21]

OIT (2021), *SDG Indicator 8.3.1: Indicator: 8.3.1: Proportion of informal employment in total employment, by sector and sex*, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/. [165]

OIT (2021), *SDG Indicator 8.8.1: Fatal and non-fatal occupational injuries per 100,000 workers, by sex and migrant status*, https://ilostat.ilo.org/topics/safety-and-health-at-work/. [22]

OIT (2020), *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf. [112]

OIT (2019), *Panorama Laboral America Latina y el Caribe 2019 [Labour Overview for Latin America and the Caribbean 2019]*, OIT Regional Office for Latin America and the Caribbean, Peru, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf. [17]

OIT (2019), *Women in the World of Work: Pending Challenges for Achieving Effective Equality in Latin America and the Caribbean*, OIT Regional Office for Latin America and the Caribbean, Lima, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_736930.pdf. [19]

OIT (2018), *Women and men in the informal economy: a statistical picture (Third edition)*. [20]

OIT (2017), *Global Estimates of Child Labour: Results and trends 2012-2016*, OIT, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf. [164]

OIT (2017), *Regional factsheet for the Americas: 2017 Global Estimates of Modern Slavery and Child Labour*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597871.pdf. [75]

OIT (2016), *Formalizing Domestic Work*, OIT. [24]

OIT (2016), *Women at Work Trends 2016*. [18]

OIT (2015), *Youth and Informality Promoting Formal Employment among Youth: Innovative Experiences in Latin America and The Caribbean*, OIT Regional Office for Latin America and the Caribbean, Lima. [81]

OMS (2013), *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, OMS (Organización Mundial de la Salud), http://www.who.int. [32]

ONU-DESA (2020), *Sustainable Development*, https://sdgs.un.org/. [74]

ONU-Mujeres (2020), *"The pandemic's impact due to COVID-19 on violence against women"*, https://lac.unwomen.org/en/noticias-y-eventos/articulos/2020/11/impacto-de-la-pandemia-covid-en-violencia-contra-las-mujeres. [58]

ONU-Mujeres (2020), *From Insights to Action: Gender Equality in the wake of Covid-19*, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142. [48]

ONU-Mujeres (2020), "Sexual Harassment in the Informal Economy: Farmworkers and domestic workers", https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-sexual-harassment-in-the-informal-economy-en.pdf?la=en&vs=4145. [25]

ONU-Mujeres (2019), *Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world*, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-of-the-worlds-women-2019-2020-en.pdf?la=en&vs=3512. [27]

OPS (2020), "Weekly Press Briefing on the COVID-19 Situation in the Americas", OPS (Organización Panamericana de la Salud), https://www.paho.org/en/media/weekly-press-briefing-covid-19-situation-americas. [101]

OPS (2017), *Health in the Americas+, 2017 Edition. Summary: Regional Outlook and Country Profiles*, OPS (Organización Panamericana de la Salud), https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34321/9789275119662_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y. [78]

Paakkari, L. and O. Okan (2020), *COVID-19: health literacy is an underestimated problem*, Elsevier Ltd, http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30086-4. [155]

PNUD (2020), *UNDP in Latin America and the Caribbean*, PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home.html. [127]

Russell, D. and N. Van de Ven (eds.) (1976), *Crimes Against Women: The Proceedings of the International Tribunal. East Palo Alto, CA: Frog in the Well; 1976.*, Frog in the Well, East Palo Alto, CA. [36]

Sánchez-Ancochea, D. (2021), *The Costs of Inequality in Latin America: Lessons and Warnings for the Rest of the World*, I. B. Tauris, London. [1]

Santana, V., L. Kiss and A. Andermann (2019), "The scientific knowledge on child labor in Latin America", *Cadernos de Saúde Pública*, Vol. 35/7, http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00105119. [73]

Santos, M. (2019), "Non-monetary indicators to monitor SDG targets 1.2 and 1.4: Standards, availability, comparability and quality", *Statistics series*, No. No. 99 (LC/TS.2019/4), CEPAL, Santiago. [134]

SENADIS (2015), *Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad*, https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad. [119]

Soto, H. and D. Trucco (eds.) (2015), *Youth: Realities and Challenges for Achieving Development with Equality*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40015/1/S1501235_en.pdf. [84]

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (eds.) (2018), *For Good Measure: Advancing Research on Well-being Metrics Beyond GDP*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264307278-en. [7]

Sudre, C., B. Murray and T. Varsavsky (2020), "Attributes and predictors of Long COVID: analysis of COVID cases and their symptoms collected by the Covid Symptoms Study App", https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.19.20214494v1.full.pdf. [158]

Telles, E. (2014), *Pigmentocracies: Ethnicity, Race, and Color in Latin America*, University of North Carolina Press. [141]

Telles, E. and T. Paschel (2014), "Who is Black, White or Mixed Race? How skin color, status and nation shape racial classification in Latin America", *American Journal of Sociology*, pp. 864-907. [144]

Thévenon, O. et al. (2018), "Child poverty in the OECD: Trends, determinants and policies to tackle it", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 218, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/c69de229-en. [70]

Tsirigotis, K., W. Gruszczynski and M. Tsirigotis (2011), "Gender differentiation in methods of suicide attempts", *Medical Science Monitor*, Vol. 17/8, pp. 65-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3539603/. [157]

Ullman, H. (2018), *Main challenges faced by young people in Latin America and the Caribbean*, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Youth/ECLAC.pdf. [43]

UN Women (2021), *Towards parity and inclusive participation in Latin America and the Caribbean: Regional overview and contributions to CSW65*, UN Women, New York, https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/lac_consultation_csw65.pdf. [47]

UNESCO (2021), *UNESCO Science Report: The race against time for smarter development*, UNESCO, Paris, https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/race4smarter-development. [156]

UNESCO (2017), *School violence and bullying: global status report*, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970?posInSet=1&queryId=e2a1a7e5-847e-4351-8eed-92dfc642211c. [85]

UNICEF (2021), *UNICEF data: Covid 19 and children*, https://data.unicef.org/covid-19-and-children/. [98]

UNICEF (2021), *UNICEF MICS*, http://mics.unicef.org/. [121]

UNICEF (2020), *COVID-19: Más del 95 por ciento de niños y niñas está fuera de las escuelas de América Latina y el Caribe*, https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-m%C3%A1s-del-95-por-ciento-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-est%C3%A1-fuera-de-las-escuelas-de. [103]

UNICEF (2020), *Impact of COVID-19 on Children and Families in Latin America and the Caribbean*, https://www.unicef.org/lac/media/14381/file/UNICEF_LACRO_COVID19_impact.pdf. [102]

UNICEF (2020), *UNICEF data: Covid 19 and children*, https://data.unicef.org/covid-19-and-children/. [107]

UNICEF (2020), *Youth speak up about violence during COVID-19*, https://www.unicef.org/lac/en/youth-speak-about-violence-during-covid-19. [108]

UNICEF/CEPAL (2019), *Las mediciones multidimensionales de pobreza infantil en América Latina y el Caribe y a nivel internacional [Multidimensional measures of child poverty in Latin America and the Caribbean and at the international level]*, https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-10/PDF%20Las%20mediciones%20multidimensionales%20de%20pobreza%20infantil%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20y%20a%20nivel%20internacional.pdf. [72]

UNODC (2019), *Global Study on Homicide*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet1.pdf. [82]

Villatoro, P. (2017), *Indicadores no monetarios de pobreza: avances y desafíos para su medición: Memoria del seminario regional realizado en Santiago, los días 15 y 16 de mayo de 2017 [Non-monetary indicators of poverty: measurement achievements and challenges, Summary of a regional seminar in Santiago, 15-16 May 2017]*, CEPAL, Santiago. [64]

WFP (2020), *El impacto de COVID-19 en programas de comidas escolares en América Latina y el Caribe [The impact of COVID-19 on school meal programmes in Latin America and the Caribbean]*, https://historias.wfp.org/26-de-33-paises-han-suspendido-sus-programas-de-comidas-escolares-en-america-latina-y-el-caribe-5687c79e75a3. [105]

Notas

[1] Como señalan Deere, Kanbur y Stewart (2018[7]), toda desigualdad horizontal significativa es injusta, ya que no existen motivos para que las personas obtengan retribuciones desiguales ni posean poder político desigual por el único motivo de que son negras y no blancas, mujeres y no hombres, o de un grupo étnico y no de otro; al mismo tiempo, las desigualdades horizontales han demostrado incrementar considerablemente el riesgo de conflicto violento, ya que causan importantes agravios que los líderes pueden aprovechar para movilizar la protesta política, apelando a marcas culturales (p. ej., una historia, una lengua o una religión común) y señalando la explotación del grupo (p. 87, en inglés).

[2] Estos aspectos no están totalmente ausentes en la recopilación de datos, sino al contrario. Desde hace tiempo la migración se incluye como una variable de referencia en los censos, los registros administrativos y algunas encuestas a los hogares, aunque la inframedición de la población migratoria sigue siendo un reto. La discapacidad también se ha considerado en numerosos instrumentos de medición recurrentes de la región, aunque no existe una estandarización y, por tanto, tampoco medidas comparables al respecto. En cuanto a la orientación sexual y la identidad de género, prácticamente existe una total ausencia de datos.

[3] La expresión “países analizados” utilizada a lo largo del informe se refiere a los 11 países objeto de estudio: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay.

[4] El aumento de las tasas de suicidio entre los hombres podría deberse a la presión de las normas restrictivas de la masculinidad. Cuando los hombres no se ajustan a las normas masculinas que dicta la sociedad, puede acarrearles importantes consecuencias psicosociales (OCDE, 2021[55]). Sin embargo, también debe señalarse que, pese a que a nivel mundial los hombres son entre dos y tres veces más propensos a suicidarse, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir episodios de depresión grave, y si se tienen en cuenta los intentos de suicidio fallidos y los materializados, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de intentar suicidarse (Tsirigotis, Gruszczynski and Tsirigotis, 2011[157]).

[5] También cabe destacar que es probable que estas divergencias no se deban a diferencias naturales en la capacidad en función del género, sino que más bien sean consecuencia del condicionamiento social causado a través de normas discriminatorias y del entorno educativo, que tiene la consecuencia de fomentar el desempeño de los chicos en estos campos y desalentar el de las chicas (UNESCO, 2021[156]).

[6] Entre las posibles explicaciones podría incluirse el hecho de que los hombres suelen tener una mayor participación en el espacio público y, por lo tanto, experimentan algunas formas de discriminación a las que no se ven sometidas las mujeres. Otra posible explicación es que las normas sociales normalizan algunos tipos de discriminación, lo que hace menos probable que las mujeres sean conscientes de los aspectos discriminatorios de sus situaciones. Sin embargo, es necesario continuar investigando para comprender por completo este resultado y confirmar su validez.

[7] Una vez más, la carga desproporcionada de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado que asumen las mujeres ejerce un papel importante. En la región de ALC, el 57,8% de las mujeres de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan ni reciben formación (clasificadas como ninis) se dedican al trabajo de cuidados y doméstico no remunerado (al igual que el 66,1% de las mujeres de 25 a 29 años), lo que contrasta con tan solo el 7% de los hombres de 15 a 29 años incluidos en la categoría de ninis. (CEPAL, 2020[160]).

[8] A lo largo de este capítulo, al igual que en el resto del informe, por "pobreza" se hace referencia a la tasa de “pobreza absoluta” y por "pobreza extrema" a la tasa de pobreza extrema calculadas por la CEPAL, salvo que se indique lo contrario (véase el capítulo 2, recuadro 2.1).

[9] Como se explica en el Recuadro 2.1 (Capítulo 2), el umbral de pobreza extrema se calcula como el valor necesario para adquirir una canasta básica de alimentos sin bienes y servicios adicionales, mientras que la pobreza absoluta incorpora a los costos de la canasta de alimentos los correspondientes a los componentes esenciales no alimentarios.

[10] No obstante, cabe señalar que las mujeres sin ingresos no tienen por qué ser pobres (y, de hecho, debido al predominio de las estructuras familiares tradicionales, es probable que el cabeza de familia de muchas de las familias más acomodadas de la región sea un único hombre con ingresos y que su esposa no los tenga). Por consiguiente, este indicador dice tanto sobre la capacidad de acción de las mujeres y su autonomía económica general como sobre sus resultados en materia de pobreza.

[11] Los resultados de los países analizados oscilaron entre el 17,5% de los encuestados en Brasil y el 51,3% en México (Latinobarómetro, 2015[159]).

[12] Esta brecha es incluso mayor si se tiene en cuenta el empleo no agrícola: en promedio, en todos los países analizados, el 50% del empleo no agrícola de las mujeres era informal en 2019, en comparación con el 46% de los hombres (OIT, 2021[165]).

[13] Sin embargo, también debe señalarse que la metodología que se emplea en los países de ALC para registrar el uso del tiempo difiere de la utilizada en la mayoría de los países de la OCDE, por lo que estos dos valores no son totalmente comparables.

[14] Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.

[15] Según los datos de las encuestas realizadas en 11 países de América Latina desde mediados hasta finales de la década de 2000 (entre 2004 y 2009), en la mayoría de los países la incidencia de la violencia de pareja era de 2 a 3 veces mayor entre las mujeres que tuvieron su primer hijo nacido vivo antes de los 17 años (o de los 15) frente a aquellas que tuvieron su primer hijo nacido vivo después de los 24 años (Bott et al., 2012[33]).

[16] De (Bott et al., 2012[33]): “[Existen] varios resultados indicativos de que la exposición a la violencia en la niñez puede tener efectos de largo plazo e intergeneracionales. Por ejemplo, después de controlar otros factores, el factor de riesgo más constantemente asociado a violencia física o sexual contra las mujeres por parte de un esposo/compañero era en todos los países una historia familiar de ‘padre golpeaba a la madre’. De manera análoga, la prevalencia de violencia por parte de un esposo/compañero era significativamente mayor (en general unas dos veces mayor) entre las mujeres que informaron haber sido maltratadas físicamente en la niñez, en comparación con las que no. La violencia por parte de un esposo/compañero también era significativamente mayor (en general más de dos veces mayor) entre las mujeres que informaron haber sufrido abuso sexual en la niñez, en comparación con las que no. Además, los niños que vivían en hogares donde las mujeres habían sufrido violencia por parte de su esposo/compañero tenían probabilidades significativamente mayores que otros niños de ser castigados con golpes, nalgadas, palmadas o bofetadas (cabe observar que en las encuestas no siempre se identificaba a quienes castigaban a los niños)”.

[17] Más allá del total de infecciones y fallecimientos, en el impacto sanitario del COVID-19 también es necesario tener en cuenta los desequilibrios entre los géneros. Según un estudio preliminar elaborado en el Reino Unido, a partir de datos recopilados mediante una aplicación para hacer seguimiento de los síntomas, las mujeres menores de 60 años tenían muchas más probabilidades de sufrir síntomas de "COVID persistente" (con una duración superior a un mes y que tiene el potencial de provocar una enfermedad a largo plazo). Las mujeres del grupo de edad de 40-50 años presentan el doble de probabilidades de verse afectadas que los hombres de edades similares (Sudre, Murray and Varsavsky, 2020[158]).

[18] Los gobiernos latinoamericanos declaran la importancia de los sistemas de información específica por género en la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2017[9]), una declaración conjunta de las prioridades para la implementación de la Agenda Regional de Género en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las oficinas de estadística de la región destacaron asimismo la importancia de la perspectiva de género a la hora de formular el conjunto prioritario de indicadores de los ODS para América Latina y el Caribe. En consecuencia, el marco regional acordado por la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) subraya la importancia de monitorear los desafíos estructurales a los que se hace frente en la búsqueda de la igualdad de género, en especial con relación al uso del tiempo y la autonomía física y económica de las mujeres (CEPAL, 2019[161]).

[19] El Capítulo 3, sobre la calidad de vida, incluye la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, ya que se trata de un indicador importante del estado de salud general y de los sistemas. El Capítulo 4, sobre los recursos para el bienestar futuro, incluye la tasa de ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación), el empleo informal juvenil, el logro educativo de los jóvenes y la malnutrición infantil, dada la importancia que tienen estos indicadores no solo a nivel individual, sino también como reflejo de las reservas de capital humano de las sociedades.

[20] Aunque las diferencias entre los géneros en el trabajo infantil también pueden deberse a la infranotificación en el caso de las niñas, más expuestas a formas de trabajo menos visibles, como el trabajo doméstico en los hogares (OIT, 2017[164]). Las niñas también muestran una mayor propensión al trabajo no remunerado: según las estimaciones a nivel mundial, el 55% de los niños que realizan tareas domésticas son mujeres (Thévenon et al., 2018[70]).

[21] En el contexto de los pueblos indígenas, es importante hacer una diferenciación entre las formas de trabajo infantil que constituyen explotación y las actividades domésticas y productivas que tienen lugar en la infancia como parte del apoyo a la familia, así como las estrategias de transferencia de conocimientos basadas en los procesos formativos de su propia cultura. Se trata de un elemento fundamental de la crianza y la transmisión de los conocimientos y tradiciones ancestrales, y constituye una forma de desarrollar progresivamente las competencias y capacidades para la vida adulta. Por tanto, forma parte de su "derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad", como establece el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948[162]). Los datos disponibles no permiten establecer una diferenciación entre las personas indígenas que viven en comunidades tradicionales y las que no.

[22] Por ejemplo en la encuesta de *Children's Worlds*, que emplea técnicas visuales y de relato para obtener respuestas significativas (OCDE, 2021[65]).

[23] Sin embargo, no se dispone de información sobre los barrios marginales urbanos y los asentamientos informales, que quedan excluidos de los datos sobre hacinamiento en los asentamientos urbanos.

[24] Más allá de las infraestructuras digitales, la proporción de puestos de trabajo a los que puede aplicarse el teletrabajo (lo cual tiene que ver con el perfil de competencias de las ocupaciones predominantes) condiciona también de forma considerable la exposición al virus. Según un trabajo reciente de la OCDE, las regiones capitales presentan el mayor potencial de teletrabajo, con tasas que superan en 8 puntos porcentuales el promedio de sus respectivos países (OCDE, 2020[135]).

[25] Las regiones que cuentan con un gobierno subnacional también son responsables, incluso a través del gasto público, de muchas políticas públicas importantes a efectos del bienestar y los ODS, sobre todo en países federales como México, Brasil y Argentina. Un análisis de los países de la OCDE elaborado en 2016 determinó que los gobiernos subnacionales de la OCDE eran responsables de alrededor del 40% del total del gasto público y del 60% del total de la inversión pública. Al menos el 70% de estos recursos

públicos se invirtió en áreas fundamentales de los ODS, como la educación, los servicios públicos, los asuntos económicos y la protección del medioambiente (OCDE, 2020[163]).

[26] En el Gráfico 5.24 únicamente se proporciona una indicación general de las diferencias, más que una evaluación precisa de la situación actual, ya que la disponibilidad y la oportunidad de los datos varían mucho en función de la medida (para más información, véase Statlink y la nota al Gráfico 5.24). Estas cuestiones reflejan las carencias generales de la información disponible y la necesidad de disponer de datos más oportunos y completos sobre el bienestar por origen étnico y raza en la región (véase la sección posterior sobre aspectos para el desarrollo estadístico). Sin embargo, el mensaje general de que las personas indígenas y afrodescendientes registran peores resultados que su grupo comparativo en la mayoría de las medidas del bienestar resulta válido y claro.

[27] Los afrodescendientes tenían un 3% más de probabilidades de trabajar en el sector informal en Brasil (2015) y Uruguay (2005) y un 1,3% más en Colombia (2015). Sin embargo, en Ecuador, los afrodescendientes registraban un 3,5% menos de probabilidades de trabajar en el sector informal (Banco Mundial, 2018[137]).

[28] Cabe señalar que la interpretación del indicador de hacinamiento no es sencilla en el caso de las comunidades indígenas, ya que la convivencia puede estar asociada a patrones residenciales y de parentesco propios de cada cultura y —en ese sentido— denotaría solidez cultural.

[29] Se definen como sigue: “Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población mayoritaria no indígena, y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. También pueden ser pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que, tras un contacto intermitente con las sociedades no indígenas han vuelto a una situación de aislamiento, y rompen las relaciones de contacto que pudieran tener con dichas sociedades... Los pueblos indígenas en situación de contacto inicial son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que mantienen un contacto intermitente o esporádico con la población mayoritaria no indígena, por lo general referido a aquellos que han iniciado un proceso de contacto recientemente. No obstante, se advierte que “inicial” no debe entenderse necesariamente como un término temporal, sino como una referencia al poco grado de contacto e interacción con la sociedad mayoritaria no indígena” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2013[166]).

[30] Las trabajadoras afrodescendientes eran más propensas a ocupar puestos de trabajo doméstico que las no afrodescendientes en los cinco países analizados con datos disponibles procedentes del último censo (Brasil, 2010; Costa Rica, 2011; Ecuador, 2010; México, 2015; Perú, 2018) (CEPAL, 2020[139]).

[31] Por ejemplo, en Chile, la proporción de la población indígena en el censo abreviado de 2017 sirvió de base para determinar el número de escaños reservados a los representantes indígenas en el proceso de la Convención Constitucional para reformar la Constitución chilena.

[32] También es relevante para los pueblos afrodescendientes.

6 Las políticas públicas desde la óptica del bienestar: experiencias en ALC y países de la OCDE

La región de ALC enfrenta una serie de desafíos persistentes en materia de bienestar social que se han visto agravados por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Para superar estos desafíos, es necesario un enfoque multidimensional en las políticas públicas. En este capítulo se describe cómo puede ayudar este tipo de enfoque a los países de ALC a superar los desafíos sumamente interrelacionados a los que se enfrentan: 1) centrando sistemáticamente las acciones emprendidas por los gobiernos en los resultados de bienestar más necesarios; 2) promoviendo un enfoque pangubernamental más coherente de la mejora del bienestar social; 3) fomentando una gobernanza más previsible; 4) reforzando el contrato social entre gobiernos y ciudadanos; e 5) impulsando nuevas formas de cooperación internacional. Para ilustrar la manera en que se puede introducir un enfoque multidimensional en el ciclo de formulación de políticas públicas, se incluyen ejemplos prácticos.

Desafíos en materia de bienestar social en los países de ALC

Es importante mejorar la medición del bienestar multidimensional, pero eso no basta para promover políticas que propicien un desarrollo sostenible e inclusivo. El informe se centra principalmente en reunir los datos concluyentes comparativos de los que se dispone en materia de bienestar y sostenibilidad en la región de ALC, así como en identificar esferas para el desarrollo estadístico. El alcance de este ejercicio —que abarca las condiciones materiales, la calidad de vida, los recursos para el bienestar futuro y la falta de igualdad de oportunidades— demuestra el enorme número de indicadores sobre el conjunto de aspectos que determinan la vida de las personas que son necesarios para tener información en la que fundamentar las políticas públicas. No obstante, aunque el desarrollo de un conjunto integral de indicadores resulta esencial para hacerse una idea más completa de los recursos y desafíos de un país, la mera existencia de dicha información no basta para garantizar que se utilicen en la formulación de las políticas. Un enfoque en las políticas basado en el bienestar emplea los indicadores de bienestar y los datos concluyentes de forma integrada a lo largo del ciclo de formulación de políticas, para trabajar en pro de una visión más completa, integrada y a largo plazo del desarrollo. Concentra de forma decidida las acciones de los gobiernos en los aspectos que más preocupan a las personas y la sociedad, en lugar de hacerlo en un único objetivo o en una serie muy restringida de metas, como puede ser el crecimiento del PIB, de manera independiente del resto (Unión Europea, 2021[1]). Cada vez son más los gobiernos de todo el mundo que incorporan elementos de este tipo de enfoque (utilicen o no la denominación específica de “bienestar”), pues reconocen que para superar los principales desafíos que plantea el mundo actual, es necesario trascender las formas de pensar y actuar tradicionales, cortoplacistas y con una tendencia al aislamiento[1].

Para ALC, la adopción de un enfoque multidimensional resulta especialmente importante. Los capítulos anteriores han demostrado que incluso antes de la pandemia, los países de América Latina y del Caribe afrontaban dificultades persistentes en múltiples dimensiones del bienestar y la sostenibilidad, y que el ritmo de avance en esferas como la pobreza y la desigualdad estaba comenzando a ralentizarse. El reciente descontento social de la región ha subrayado la magnitud de la desconexión e insatisfacción de muchos ciudadanos con sus gobiernos. El impacto de la crisis del COVID-19 ha acentuado aún más las dificultades sociales, pues ha repercutido en cada una de las dimensiones que se abordan en el presente informe, y posiblemente seguirá haciéndolo en un futuro próximo. Las múltiples facetas de los desafíos en materia de políticas que encara ALC se analizaron de forma pormenorizada en la edición de 2019 de las *Perspectivas Económicas de América Latina* (OCDE et al., 2019[2]). Este informe se centraba en la evolución de los desafíos y las oportunidades de la región en materia de desarrollo y mostraba un avance general en las últimas décadas, lo cual demuestra que el crecimiento del PIB por sí solo no basta para superar los obstáculos estructurales que impiden alcanzar un bienestar inclusivo y sostenible debido a las existencia de varias “trampas del desarrollo” que deben resolverse conjuntamente (Recuadro 6.1).

Recuadro 6.1. El bienestar social en los países de ALC se ve obstaculizado por varias "trampas del desarrollo"

En las *Perspectivas Económicas de América Latina* de 2019 se identificaron cuatro trampas del desarrollo en los países de ALC, caracterizadas por una dinámica circular que se perpetúa a sí misma y mantiene a los países atrapados en bajos niveles de bienestar general:

- **La trampa de la productividad:** el estancamiento de la productividad en los países de ALC se vincula con una estructura exportadora dominada por sectores primarios con bajos niveles de sofisticación (como la agricultura, la pesca o la minería). Esta estructura exportadora presenta barreras a la entrada y no genera vínculos de concatenación regresiva en la economía. Por lo tanto, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que predominan en ALC, les resulta difícil conectarse con los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la integración en las cadenas mundiales de valor sigue siendo deficiente. La escasa participación de ALC en dichas cadenas globales también está asociada a escasos niveles de adopción de tecnología y genera pocos incentivos para invertir en capacidades productivas. En general la competitividad no aumenta, lo que dificulta el avance hacia una estructura exportadora más adelantada y segmentos de mayor valor agregado de las cadenas mundiales de valor, lo que genera un círculo vicioso que menoscaba la productividad. La crisis del COVID-19 ha agravado esta trampa de la productividad, ya que la región de América Latina y el Caribe se vio seriamente afectada por la contracción del PIB en 2020 (OCDE, 2020[3]).
- **La trampa de la vulnerabilidad social:** la mayor parte de la población de los países de ALC que ha salido de la pobreza ha pasado a formar parte de una clase media vulnerable que depende de trabajos de escasa calidad y a menudo informales, con poca o ninguna protección social, e ingresos bajos y con frecuencia inestables. Algo más de un 61% de los trabajadores de la región desarrolla su actividad en el sector informal, que se define como aquellos trabajadores que no se benefician de los programas de protección social relacionados con el empleo, es decir, pensiones, vacaciones anuales remuneradas o licencias por enfermedad (véase el Capítulo 2). La inestabilidad de los ingresos impide que estos trabajadores puedan invertir en continuar su educación y su formación para así conseguir trabajos más productivos, por lo que se encuentran atrapados en empleos vulnerables. La pandemia ha agravado esta situación, al registrarse tasas de empleo más bajas, aumentar el porcentaje de trabajos informales en el mercado laboral e incrementarse la pobreza (véase el Capítulo 2). Pese a que las tecnologías digitales han ayudado a muchas personas a capear esta crisis, la brecha digital ha impedido que los más vulnerables se beneficien de dichas soluciones (véase la sección sobre Conocimientos y competencias del Capítulo 3). Además, las medidas de confinamiento combinadas con la falta de acceso a Internet han generado un importante atraso académico entre los menores y los jóvenes más vulnerables, lo cual pone en riesgo la formación de capital humano y, por ende, el futuro bienestar (OCDE et al., a continuación[4]).
- **La trampa institucional:** el crecimiento de la clase media en ALC —que representaba aproximadamente un tercio de la población antes de la crisis del COVID-19— se ha traducido en mayores aspiraciones y demandas por parte de los ciudadanos, que reivindican de instituciones y servicios públicos de mejor calidad. Las instituciones de la región han tenido dificultades para responder de forma efectiva, lo cual ha dado lugar a una trampa institucional, con un descenso de la confianza y la satisfacción de la ciudadanía y el aumento del desinterés de la sociedad. A su vez, los escasos niveles de confianza en el gobierno y satisfacción con este por parte de los ciudadanos están mermando los ingresos públicos y limitando la capacidad de las administraciones públicas para mejorar los servicios. Asimismo, los servicios públicos infravalorados suelen experimentar una elevada politización y un descenso de la

profesionalidad, lo que restringe su capacidad y consolida el hecho de que se les otorgue escaso valor (OCDE, 2020[5]).

El impacto de la pandemia en la pobreza y la desigualdad podría exacerbar el descontento social, por lo que plantea desafíos adicionales (OCDE, 2020[3]), ya que el coronavirus ha golpeado a ALC en un contexto en el que la confianza en el gobierno es estructuralmente escasa (véanse los Capítulos 3 y 4). Reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos es, por lo tanto, esencial para que exista una fructífera colaboración destinada a mejorar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

- **La trampa ambiental:** por último, los países de ALC están lastrados por unos modelos de desarrollo ambiental y económicamente insostenibles, que presentan una marcada preferencia por actividades económicas con un uso intensivo de recursos y materiales. En comparación con el año 2000, la superficie forestal intacta de la región de ALC descendió cerca de un 9% (aproximadamente 400 000 km^2), mientras que los elevados niveles de estrés hídrico local (p. ej., del 45% en la República Dominicana y del 26% en México[1]) provocan escasez de agua (véase el Capítulo 4). La trampa ambiental está reduciendo la sostenibilidad del desarrollo económico y acentuando la vulnerabilidad de las personas ante el riesgo ambiental, lo cual tiene un efecto dominó en los resultados en materia de bienestar. Esta situación pone de relieve la necesidad de transformar el modelo de desarrollo económico de los países de ALC y dirigir los programas de estímulo económico pos-COVID-19 hacia la construcción de modelos económicos basados en la sostenibilidad ambiental (OCDE, 2020[3]).

Nota:
1. El término "estrés hídrico" alude a la extracción bruta de agua dulce como porcentaje del conjunto de recursos de agua dulce renovables que se encuentran disponibles.

Estas cuatro trampas del desarrollo interactúan entre sí y se refuerzan recíprocamente, con lo que se crean círculos viciosos que ponen en peligro el aumento del bienestar social. Por ejemplo, aunque resolver la trampa de la productividad constituye una manera evidente de elevar el nivel de vida de una región en la que los empleos siguen siendo precarios y predomina la informalidad (la trampa de la vulnerabilidad), la informalidad constituye en sí misma un lastre para las iniciativas destinadas a aumentar la productividad (la trampa de la productividad). La ausencia de una red de seguridad adecuada y las deficiencias del sistema sanitario y educativo (la trampa institucional) aumentan aún más la vulnerabilidad de la población (la trampa de la vulnerabilidad). Al mismo tiempo, esta trampa de la vulnerabilidad incrementa la evasión fiscal, ya que menos de la mitad (45%) de la población de los países analizados considera que no existe nada que justifique esta práctica (Capítulo 4), lo que crea mayores obstáculos para la mejora de la calidad institucional (la trampa institucional). De igual manera, la trampa ambiental incrementa la vulnerabilidad porque agota los recursos necesarios para un desarrollo económico sostenible y se ve empeorada por una escasa diversificación de la productividad económica (la trampa de la productividad), así como por obstáculos institucionales que impiden la inversión directa en tecnologías respetuosas con el medioambiente (la trampa institucional). Habida cuenta de estas interrelaciones, superar estos complejos desafíos en materia de desarrollo exige un sólido enfoque multidimensional y respuestas políticas coordinadas.

En este capítulo se describe cómo la adopción de una óptica multidimensional puede favorecer las actuaciones de los gobiernos de ALC para aumentar el bienestar de toda la población, tanto en la actualidad como en el futuro. En la siguiente sección, se esbozan los componentes de un enfoque multidimensional de las políticas públicas y se describe su valor en lo que atañe a: 1) centrar el enfoque pangubernamental en aumentar el bienestar social; 2) ayudar a incrementar la efectividad y la eficiencia del gasto público; 3) fomentar una gobernanza más previsible; 4) reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos; y 5) obtener información para fundamentar la cooperación internacional. A continuación, se incluye una descripción general de una nueva práctica que consiste en observar las políticas públicas desde una óptica multidimensional, relatando experiencias pertinentes en la región de ALC y en países de la OCDE. Salvo

manifestación en contrario, las conclusiones específicas respecto a ALC que se incluyen en esta sección son el resultado de reuniones bilaterales mantenidas entre la Secretaría de la OCDE y países de ALC. La última sección resume las conclusiones principales y pone de relieve oportunidades para seguir desarrollando un enfoque multidimensional de las políticas públicas en los países de ALC.

El valor de un enfoque de desarrollo multidimensional en la región de ALC

¿Qué es un enfoque multidimensional de las políticas públicas?

Los marcos multidimensionales de bienestar adoptan una perspectiva más amplia sobre el progreso de la sociedad, que va "más allá del PIB" (Unión Europea, 2021[1]). Además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por 193 naciones en 2015, más de la mitad de los países de la OCDE han creado conjuntos de indicadores y marcos multidimensionales de bienestar propios individualizados, algunos de los cuales son anteriores a los ODS (Exton and Fleischer, a continuación[6]; Exton and Shinwell, 2018[7]). El propósito de los marcos multidimensionales es abordar de mejor manera el carácter polifacético del desarrollo de un país, teniendo en cuenta objetivos sociales, ambientales y económicos, además de la inclusión y la sostenibilidad (Unión Europea, 2021[1]). Los marcos conceptuales, que describen los diferentes dominios y dimensiones del bienestar social, suelen ponerse en práctica mediante un conjunto de indicadores de bienestar para valorar los niveles de bienestar actuales, las desigualdades y los recursos para el bienestar futuro:

- Entre los indicadores de **bienestar actuales** se encuentran medidas de la *calidad de vida* (p. ej., de la salud, la seguridad, los conocimientos y las competencias, las relaciones sociales, el compromiso cívico) y también del *bienestar material* (p. ej., los ingresos y el patrimonio, el empleo, la vivienda). Al medir las muchas dimensiones que conforman el bienestar actual de la población, se obtiene una perspectiva global de los resultados últimos que verdaderamente importan a las personas y que los responsables de formular políticas públicas tratan de mejorar en último término.

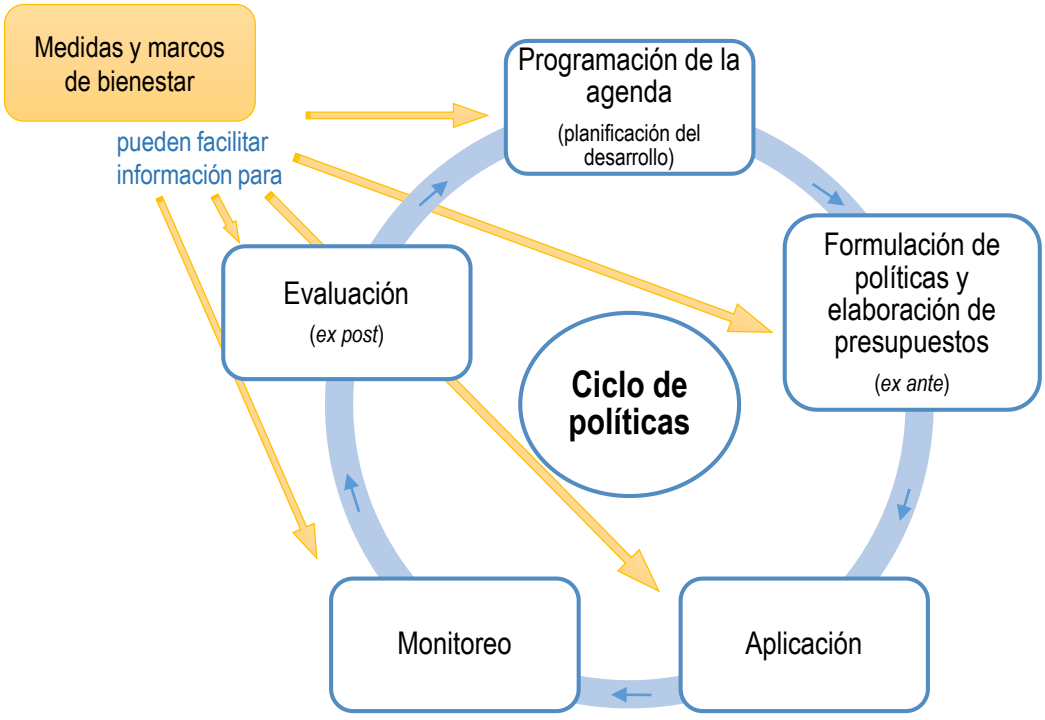
  Los indicadores del bienestar actual suelen consistir en una amplia variedad de medidas objetivas, a menudo complementadas por algunos indicadores subjetivos. Las propias experiencias de las personas en sus vidas cotidianas (es decir, el nivel de satisfacción con la vida, la confianza en los demás y en las instituciones públicas, el temor a ser víctima de algún acto delictivo y la discriminación observada) pueden advertir a los responsables de formular políticas públicas de problemas que las medidas objetivas no captan (OCDE, 2013[8]).[2]
- La medición de las **desigualdades** pone de relieve la diversidad de experiencias y niveles de vida de la población, en función de sus características personales (p. ej., género, edad, contexto socioeconómico, raza o grupo ético), así como la distribución regional de los resultados de bienestar dentro de los países. La medición de las desigualdades es especialmente pertinente en la región de ALC, ya que en sus sociedades están profundamente arraigadas las disparidades socioeconómicas y regionales, como se ha visto en los capítulos anteriores del presente informe.
- Las medidas de **sostenibilidad** se centran en los recursos fundamentales necesarios para apuntalar el bienestar, tanto en el presente como en el futuro. La OCDE y otros actores denominan estos factores "capitales", entre otros capital social, capital humano, capital natural y capital económico (OCDE, 2013[9]; Exton and Fleischer, a continuación[6]). Este "enfoque de los capitales" reconoce que las mejoras del bienestar actual no son sostenibles si agotan los recursos que determinan el bienestar a lo largo del tiempo. Entre ellos estarían la confianza y la voluntad de la ciudadanía de contribuir positivamente a los resultados en materia social (capital social), los futuros resultados en materia sanitaria y educativa (capital humano), los activos naturales, los ecosistemas y los servicios de los que estos dependen (capital natural), así como los activos financieros y de producción que favorecen un desarrollo económico sostenible (capital económico).

Por otro lado, las medidas de los efectos transfronterizos ayudan a valorar la influencia que tiene un país en el bienestar de otros, por ejemplo en lo que atañe a las huellas de carbono, la ayuda externa o la exportación de residuos (Stats NZ, 2018[10]; CBS, 2020[11]; UNECE, Eurostat and OECD, 2013[12]).

Los marcos multidimensionales se centran en los resultados deseados en materia de políticas y no en los medios necesarios para conseguirlos (Durand and Exton, 2019[13]). En las últimas décadas, con frecuencia los gobiernos han dado prioridad al crecimiento del PIB frente a otras metas, asumiendo implícitamente que el bienestar llegaría por sí solo. Sin embargo, cada vez existen más datos contrastados que demuestran que el crecimiento económico no va necesariamente acompañado de un bienestar. En todo el mundo, países con niveles similares de PIB per cápita muestran resultados sociales muy diferentes en otras esferas (OCDE, 2020[14]) (OCDE et al., 2019[2]). Tal como se expone en el Capítulo 1, este es también el caso de los países de ingresos medios e ingresos medios-altos, entre ellos muchos países de ALC[3]. La divergencia entre el PIB y resultados de mayor alcance en materia social pone de relieve la importancia de ir "más allá del PIB" y observar el avance de la sociedad aplicando un enfoque multidimensional (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[15]; Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2019[16]). Pese a que la reactivación económica constituye una prioridad fundamental en la región de ALC a la luz de lo ocurrido por la pandemia, el nivel de mejora que la recuperación económica supondrá en las vidas de la población vendrá determinado por el modo en que esta se produzca y por su calidad (no por el volumen de actividad económica en sí) (Sarracino, 2019[17]).

Un enfoque multidimensional de las políticas públicas centra la atención de los gobiernos en la diversidad de resultados sociales, así como en las interacciones entre estos, que son claves para conseguir una sociedad que funcione correctamente y sea resiliente (Unión Europea, 2021[1]). Para ello se utilizan medidas y marcos de bienestar de forma *integrada* y a lo largo del ciclo de políticas (Gráfico 6.1).

Gráfico 6.1. Las medidas y los marcos de bienestar pueden aportar información en la que fundamentar cada fase del ciclo de políticas



Fuente: Adaptación a partir de Exton C. y M. Shinwell (2018[7])

En la **fase de programación de la agenda**, un análisis de situación de los resultados multidimensionales ayuda a los gobiernos a identificar ámbitos en los que es prioritario adoptar medidas (Durand and Exton, 2019[13]). Los paneles integrales de indicadores de bienestar, elaborados normalmente por las oficinas nacionales de estadística, pueden proporcionar una herramienta de diagnóstico para identificar las fortalezas y debilidades de los países y comparar el desempeño respecto a otros territorios. Incluso cuando aún no existen datos completos, los marcos multidimensionales pueden servir como herramienta conceptual para orientar la programación de la agenda, ya que fomentan que los gobiernos tengan en cuenta cada una de las dimensiones y dominios del bienestar social.

Es importante que se integren los marcos de bienestar en la fase de **formulación de políticas y elaboración de presupuestos** para adaptar el gasto público y la formulación de políticas a las prioridades identificadas en materia social. Desde un punto de vista práctico, usar a conjunto más reducido de indicadores de bienestar social para este propósito ayuda a que resulte factible aplicar una óptica multidimensional en la fase de formulación de políticas y elaboración de presupuestos (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2019[16]). La creación de estos marcos de bienestar, de menor envergadura y centrados en las políticas, a menudo ha sido dirigida por los ministerios de economía y hacienda u otros organismos del gobierno central, basándose en varias metodologías de selección: en Francia, los 10 *Nouveaux Indicateurs de Richesse* ("Nuevos Indicadores de Riqueza") fueron producto de una amplia consulta pública; en Nueva Zelanda, los cinco objetivos de bienestar globales en los que se basa el proceso de elaboración de políticas públicas y presupuestos fueron seleccionados a partir de una análisis del bienestar de diagnóstico, utilizando el conjunto íntegro de indicadores de bienestar; y en Italia, un comité de expertos creado por el primer ministro seleccionó un conjunto de 12 indicadores de bienestar (Durand and Exton, 2019[13]). Ya sea que se haya establecido a partir de análisis de datos, mediante grupos de expertos, en debates de grupos de discusión o mediante una combinación de estos métodos, el conjunto seleccionado de objetivos de bienestar ha de tener un amplio apoyo y legitimidad por parte de la sociedad para servir como base de la toma de decisiones de los gobiernos (Durand and Exton, 2019[13]).

Durante la **implementación de las políticas públicas** y a partir de esta fase, este conjunto de indicadores de bienestar de diagnóstico más amplio puede servir de base para **monitorear y evaluar** la efectividad de las intervenciones políticas con respecto a los resultados deseados, como contribución al ciclo permanente de formulación de políticas. Así, un grupo amplio y completo de indicadores de bienestar permite a los gobiernos llevar un seguimiento de la evolución de los resultados de bienestar y de su distribución en el tiempo, además de evaluar la repercusión de programas políticos concretos en los resultados de índole social deseados.

El valor de un enfoque multidimensional de la política pública

Los marcos multidimensionales de bienestar pueden servir de base de un enfoque más coherente y mejor orientado destinado a superar los complejos desafíos que encaran los países de ALC en materia de desarrollo. Para mejorar el bienestar de la sociedad, se necesitan políticas que tengan en cuenta una amplia serie de determinantes y factores de bienestar, y la forma en que varían entre la distinta población y a lo largo del tiempo. Encuadrar las políticas en un marco integral también contribuye a la armonización estratégica de los objetivos en cuanto a resultados entre las distintas partes del gobierno. En todo el mundo, los departamentos del gobierno central suelen organizarse en compartimentos aislados que formulan, aplican y dan seguimiento a políticas sobre temas económicos, ambientales y sociales de manera generalmente separada entre sí. En estos procesos aislados, cada ministerio trabaja para conseguir un conjunto de objetivos propio y los incentivos para invertir en resultados que sean responsabilidad de otros departamentos son escasos (APPG, 2014[18]). En tal coyuntura, las estadísticas económicas suelen utilizarse principalmente para evaluar las políticas económicas, las estadísticas sociales principalmente para las políticas sociales y las estadísticas ambientales principalmente para las políticas ambientales (Durand and Exton, 2019[13]). En cambio, un marco multidimensional basado en resultados ofrece una declaración manifiesta sobre los aspectos determinantes de las vidas de las

personas que la administración pretende mejorar conjuntamente, que suelen abarcar varios ministerios y cuya consecución suele comportar una responsabilidad común. Con un enfoque multidimensional, el eje central de toda formulación de políticas públicas es un conjunto central de indicadores y objetivos de bienestar sociales (entre otros ambientales, económicos y sociales, incluyendo perspectivas a corto y largo plazo). Estos marcos de políticas multidimensionales no sustituyen los análisis ni los marcos sectoriales, intersectoriales, regionales ni de subpoblaciones, sino que los aúnan en un marco global pangubernamental y permiten a los responsables de formular políticas públicas tener una perspectiva más amplia y observar las formas en que su trabajo y los objetivos se entrecruzan con los de otros departamentos. Impulsar un enfoque pangubernamental para aumentar el bienestar social resulta especialmente importante en la región de ALC, puesto que los desafíos de desarrollo que encara son procesos sumamente interrelacionados, no aislados.

Los marcos de resultados multidimensionales pueden contribuir a reforzar la efectividad y la eficiencia del gasto público para aumentar el bienestar social de esta región. Las trampas del desarrollo existentes implican que el margen fiscal de los gobiernos de ALC para invertir en aumentar el bienestar social sea limitado. Aunque existen enormes diferencias entre los países de ALC, en promedio, la recaudación de impuestos sigue siendo baja (un 23% del PIB en 2019, es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE) (OCDE et al., 2021[19]). Por este motivo, resulta esencial que los gobiernos destinen el gasto público a las políticas y los programas más rentables en términos sociales de la forma más estratégica y coordinada posible. Además de tener en cuenta el rendimiento en materia de bienestar de cada partida de gasto individual, los gobiernos necesitan mecanismos para adoptar una perspectiva global en sus presupuestos, a fin de reducir al mínimo los efectos indirectos negativos y maximizar las sinergias positivas. Un marco común de resultados compartidos, que abarque a todos los departamentos del gobierno, puede facilitar este proceso. El objetivo último de esta coordinación es aprovechar al máximo las oportunidades para gastar en cada ministerio político con el fin de crear bucles de retroalimentación positivos que contribuyan a los objetivos de otros ministerios (p. ej., un gasto orientado en salud o educación que tenga consecuencias positivas para la participación y la productividad de los trabajadores o que reduzca el gasto en protección social). Al mismo tiempo, esta coordinación puede mejorar la formulación de las políticas públicas ayudando a prever y mitigar riesgos cuando actuaciones bien intencionadas en una esfera política causen problemas en otras esferas que más tarde exigirán un gasto adicional para ser resueltos (entre ellas, políticas que incrementen la carga sobre los sistemas de protección social o ambiental, por ejemplo, porque hacen subir el precio de bienes esenciales, causan desempleo o aumentan la contaminación del medioambiente). Puesto que la crisis de la pandemia está incrementando la presión sobre los ingresos públicos, actualmente resulta más crucial que nunca coordinar el gasto en políticas y programas que aumenten el bienestar social de la forma más rentable.

Un enfoque multidimensional puede ayudar a sentar las bases para reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobiernos en los países de ALC. La pandemia ha puesto de relieve la importante función de una colaboración efectiva entre gobiernos y ciudadanos para determinar los resultados en materia social (Borgonovi and Andrieu, 2020[20]; Bartscher et al., 2020[21]). Sin embargo, tal como se describe en los Capítulos 3 y 4 del presente informe, la crisis del COVID-19 ha golpeado a muchos países de ALC en una coyuntura en la que el contrato social entre gobiernos y ciudadanos ya presentaba fisuras estructurales. Reforzar la confianza en el gobierno resulta, por lo tanto, fundamental para una colaboración efectiva entre administración pública y ciudadanía durante la construcción del futuro tras la pandemia. La OCDE distingue cinco factores clave de confianza en el gobierno que hacen referencia a competencias públicas (capacidad de respuesta y confiabilidad) y valores en los que se basan las acciones y los comportamientos de las instituciones públicas (integridad, apertura e imparcialidad) (OCDE, 2017[22]). Establecer objetivos de bienestar social mediante un proceso de participación transparente y fiable, que sea resultado de una diversidad de voces dentro de la sociedad, puede contribuir a reforzar la apertura, la capacidad de respuesta y la imparcialidad de los órganos públicos. Esto resulta especialmente importante en los países de ALC, en los que la participación de la sociedad civil en la definición de las metas sociales y las estrategias de desarrollo sigue siendo escasa hasta la fecha (OCDE et al., 2019[2]; OCDE, 2020[3]; Máttar

and Cuervo, 2017[23]). Utilizar un enfoque participativo e inclusivo para definir las prioridades de bienestar social puede ayudar a restablecer la conexión entre gobiernos y ciudadanos mediante un sentido de propósito compartido, como punto de partida para movilizar una acción colectiva destinada a conseguir dichos objetivos. Al plasmar una visión de bienestar en un marco de medición del bienestar, con indicadores para cada una de las metas en materia social, se puede reforzar la responsabilidad pública de los gobiernos con respecto a dichas metas, de manera que se siente una base más sólida para mantener la confianza a lo largo del tiempo. El desarrollo conjunto de medidas y un marco de bienestar puede, por lo tanto, ser una parte importante de iniciativas más amplias destinadas a volver a conectar a los gobiernos con los ciudadanos y centradas en cada uno de los cinco factores que impulsan la confianza en las instituciones. Entre ellas estaría la importancia de desplegar mayores esfuerzos para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas por parte del sector público, además de promover y proteger el espacio cívico, es decir, el conjunto de condiciones jurídicas, políticas, institucionales y prácticas que son necesarias para que los actores no públicos accedan a información, puedan expresarse, se asocien, se organicen y participen en la vida pública (OCDE, 2017[24]).

Los marcos multidimensionales también pueden servir de base para una planificación a largo plazo, al fomentar la consideración sistemática tanto de los resultados de bienestar actuales como de los recursos de cara al futuro. Muchos marcos multidimensionales engloban componentes a futuro, entre otros, indicadores de los niveles de capital social, humano, natural y económico que sustentan el bienestar futuro. Por lo tanto, responden a la crítica de que el PIB no tiene en cuenta la sostenibilidad —tanto en el sentido de si el crecimiento económico es en sí mismo sostenible a lo largo del tiempo, como de si el crecimiento se produce a costa de elementos ambientales y sociales que contrarrestan los beneficios que genera— (Exton and Shinwell, 2018[7]). Hacer una distinción clara entre resultados de bienestar actuales y los recursos para el bienestar futuro ayuda a esclarecer las importantes concesiones mutuas que suelen existir entre ambos. Este aspecto reviste especial importancia, ya que los resultados de bienestar pueden verse fácilmente eclipsados por preocupaciones actuales (Boston, 2016[25]).

Al igual que la formulación de las políticas nacionales pueden beneficiarse de perspectivas más amplias, centradas en el bienestar, un enfoque multidimensional también puede facilitar información en la que basar la cooperación internacional. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la gobernanza multilateral y la cooperación internacional para responder y hacer frente a la crisis. A raíz de la pandemia y habida cuenta de los objetivos que se han marcado los países de conseguir un futuro más equitativo y sostenible, existe la oportunidad de aumentar los objetivos de cooperación internacional para incluir resultados de bienestar más generales e ir más allá de los indicadores actuales relacionados con los ingresos, que actualmente siguen influyendo de manera primordial en la asignación de la financiación obtenida en condiciones favorables. De cara al futuro, un enfoque multidimensional puede fomentar un cambio de las perspectivas y las prácticas, lo que permitirá la creación de alianzas renovadas que tengan en cuenta el carácter multidimensional del desarrollo —al considerar objetivos sociales, ambientales y económicos, así como la interrelación existente entre ellos— y que favorezcan un enfoque pangubernamental. Los marcos multidimensionales también pueden ayudar a captar una mayor atención respecto a los efectos transfronterizos y el carácter interrelacionado de los resultados de desarrollo, consolidando las bases de una programación de la agenda común y un enfoque más coherente entre los diferentes países. Un enfoque multidimensional, al ayudar a países individuales a entender mejor cómo pueden afectar sus políticas nacionales y locales a los bienes públicos mundiales y resultados transfronterizos, puede fomentar una mayor armonización de los resultados nacionales en materia de desarrollo, por una parte, y de los regionales y mundiales, por otra.

El alcance del aprendizaje mutuo y el diálogo político basado en una perspectiva más amplia de los resultados de desarrollo consiste de forma más general en la concepción de un sistema de cooperación multilateral renovado en igualdad de condiciones. Pese a la significativa aceptación de la Agenda 2030 por países de la región de ALC, lo que incluye la perspectiva multidimensional de desarrollo de la Agenda, indicadores económicos tradicionales como el PIB y el Ingreso Nacional Bruto (INB) siguen determinando

en gran medida la prestación de asistencia por parte de los donantes. Al interpretarse que un mayor nivel de INB per cápita indica un mayor grado de desarrollo, las economías de ingresos medios y altos pueden quedar sin opción de optar a ayudas económicas, puesto que su nivel de desarrollo se considera suficiente. Sin embargo, con frecuencia estos países siguen encarando importantes desafíos estructurales y combinan un buen desempeño en algunos objetivos de la Agenda 2030 con peores resultados en otros. Las amplias desigualdades existentes dentro de los propios países también pueden traducirse en una medición del INB per cápita del país que supere el nivel límite para poder optar a la ayuda oficial al desarrollo, aunque una gran parte de ese país o incluso la mayoría de su población no llegue a ese nivel de ingresos. Estas situaciones no constituyen anomalías ni peculiaridades que pongan de manifiesto circunstancias nacionales concretas, sino que son la consecuencia natural de utilizar medidas promedio restringidas que pueden ocultar enormes disparidades y desigualdades en los resultados de bienestar. Por lo tanto, es importante utilizar un enfoque multidimensional para obtener información en la que fundamentar la cooperación y el diálogo regional.

Enfoque multidimensional de las políticas públicas: aprovechar la experiencia de América Latina y del resto del mundo

Pese a que las aplicaciones políticas de los marcos y las métricas de bienestar difieren entre los distintos países, gracias a una serie de experiencias recientes, se está generando una valiosa base de conocimientos para que los países aprendan unos de otros. Los distintos países integran los conceptos multidimensionales y los datos contrastados en el ciclo de políticas de diferentes maneras (Exton and Shinwell, 2018[7]; Durand and Exton, 2019[13]). Estas diferencias se deben en parte a que es necesario que los enfoques, modelos y herramientas más efectivos funcionen en las distintas circunstancias locales concretas y, por ello, no existe un “enfoque multidimensional” universal de las políticas públicas. Sin embargo, en décadas recientes, el número de prácticas que integran perspectivas multidimensionales en el ciclo de políticas es cada vez mayor. En esta sección se describen esas prácticas surgidas recientemente, aprovechando estudios de casos pertinentes de países de ALC y también experiencias de otros países de la OCDE. Los datos contrastados se organizan de acuerdo con las fases principales del ciclo de políticas (véase el Gráfico 6.1):

- **Programación de la agenda:** Utilizar un marco multidimensional para identificar esferas prioritarias de bienestar en las que emprender actuaciones públicas, favoreciendo una perspectiva a largo plazo y una concentración en la prevención.
- **Elaboración de presupuestos:** Armonizar el gasto público con los resultados de bienestar social de máxima prioridad y usar el proceso presupuestario como herramienta para potenciar la coherencia de las políticas.
- **Formulación y implementación de las políticas:** Utilizar marcos basados en resultados multidimensionales para fomentar un enfoque pangubernamental encaminado a aumentar el bienestar, con el fin de identificar las intervenciones más efectivas para abordar las esferas prioritarias seleccionadas y reforzar la coherencia de las políticas con respecto a dichas prioridades.
- **Monitoreo de los resultados y evaluación de las políticas:** Realizar un seguimiento de los avances en materia social y orientar las evaluaciones aplicando una óptica multidimensional que tenga en cuenta el elevado número de resultados que son importantes para el bienestar de la sociedad.

Uso de marcos multidimensionales durante la programación de la agenda

Basar el proceso de programación de la agenda del gobierno en un marco multidimensional contribuye a centrar las intervenciones públicas en los resultados de bienestar de máxima prioridad. Más de la mitad de los países de la OCDE cuentan con marcos de políticas y medición del bienestar avanzados que van "más allá del PIB", para especificar la diversidad de resultados significativos en cuanto a bienestar de la población en la actualidad y en el futuro (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2019[16]). En muchos países, los marcos conceptuales de bienestar se apoyan en marcos de medición que permiten a los gobiernos identificar esferas prioritarias en las que es necesario adoptar medidas públicas. Al fundamentar las prioridades del gobierno en un análisis de diagnóstico del bienestar social, se puede incrementar la transparencia de la diversidad de resultados tenidos en cuenta durante la fase de programación de la agenda. Este hecho puede influir de manera importante en la rendición de cuentas públicas y el aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. De este modo, también se promueve una gobernanza más previsible considerando sistemáticamente los resultados de bienestar actuales y los recursos para el futuro bienestar. Incluso cuando no se encuentran fácilmente disponibles conjuntos de datos completos, los marcos conceptuales pueden ayudar a introducir consideraciones más amplias en el proceso de programación de la agenda de los gobiernos, al señalar los componentes centrales del bienestar social que han de tenerse en cuenta —y sus interrelaciones—.

Durante la creación de marcos de bienestar, muchos gobiernos han mantenido un diálogo nacional entre políticos, sociedad civil, académicos y responsables de la formulación de políticas, con el objetivo de dar con una idea general común sobre lo que se necesita para tener una buena vida (Exton and Shinwell, 2018[7]; León Guzmán, 2015[26]; RREE, 2010[27]). Estos procesos participativos pueden tener una enorme utilidad para gobiernos y ciudadanos: los gobiernos que saben escuchar pueden obtener más información sobre las perspectivas, los problemas y las preocupaciones de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables. Al mismo tiempo, los ciudadanos pueden entender mejor la a menudo compleja interrelación entre los resultados de bienestar social en cuestión y pueden participar de manera más directa en la programación de la agenda y la toma de decisiones públicas (OCDE, 2020[28]). Un proceso inclusivo que se dirija de manera activa a quienes encaren mayores obstáculos, estén menos acostumbrados a "implicarse" o sean más reacios a hacerlo resulta esencial para garantizar que los marcos de bienestar incorporen las perspectivas de aquellos segmentos de la población más desatendidos o menos escuchados.

En el Cuadro 6.1 se ofrece un resumen de las medidas y los marcos principales que van "más allá del PIB" utilizados por gobiernos de ALC. El ejemplo más destacado de un marco de progreso de la sociedad multidimensional utilizado por países de ALC es la Agenda 2030, un conjunto internacionalmente consensuado de metas y objetivos políticos centrado en los principales elementos de bienestar actual, las desigualdades, la sostenibilidad del bienestar a lo largo del tiempo y los efectos transfronterizos. Tal como se comentará de manera más pormenorizada a continuación, los planes nacionales de desarrollo también tienen gran relevancia en el proceso de programación de la agenda multidimensional de los países de ALC. Algunos países, entre ellos Ecuador y Bolivia, han creado marcos locales de bienestar propios para obtener información en la que amparar el proceso de formulación de políticas. Además, el uso de medidas multidimensionales, como los índices de pobreza multidimensionales, ha ayudado a avanzar en una agenda que vaya "más allá del PIB" en los países de ALC (Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1. Resumen de las medidas y los marcos principales que van "más allá del PIB" aplicados a las políticas públicas en países de ALC

Marco	Tipo	Usos en ALC	Enfoque del bienestar	Ámbito principal
Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas)	Compromisos políticos y marco de medición en el que se amparan	• Visión y planificación del desarrollo • Definición de metas y objetivos • Asignación presupuestaria • Monitoreo y evaluación	Aspiraciones y privaciones	Pangubernamental
Planes nacionales de desarrollo (varios)	Marco conceptual y declaraciones de visión (en ocasiones acompañados por medidas políticas)	Incluyen: • Visión y planificación del desarrollo • Definición de metas y objetivos • Asignación presupuestaria • Coordinación horizontal (sectorial) y vertical (subnacional) • Monitoreo y evaluación	Aspiraciones	Pangubernamental
Buen Vivir (Ecuador)	Marco conceptual y de medición	• Medición no oficial del bienestar[1] • Visión de desarrollo y planificación	Aspiraciones y privaciones	Pangubernamental
Vivir Bien (Bolivia)	Marco conceptual	• Visión y planificación del desarrollo	Aspiraciones	Pangubernamental
Medidas de pobreza multidimensionales	Marco de medición	• Medición oficial de la pobreza • Planificación del desarrollo • Definición de metas y objetivos • Asignación presupuestaria • Monitoreo y evaluación	Privaciones	Sectorial
Índice de Progreso Social	Marco conceptual y de medición	• Medición no oficial del desarrollo (Paraguay)[1] • Visión y planificación del desarrollo	Aspiraciones y privaciones	Pangubernamental
Medidas multidimensionales de focalización	Medidas de focalización	• Política social de focalización	Privaciones	Sectorial

Nota:
1. Las medidas oficiales implican generalmente el reconocimiento de esta medida por parte de la oficina nacional de estadística como uno de los principales indicadores del país, cuyos datos se actualizan periódicamente. Las medidas no oficiales han sido generalmente actuaciones puntuales y no periódicas destinadas a recabar datos y calcular una medida, con un uso y reconocimiento más restringido.
Fuente: Adaptación a partir de Montoya y Nieto-Parra (a continuación[29])

La mayoría de gobiernos y oficinas de estadística de la región han contraído importantes compromisos en relación con la Agenda 2030. Muchos países de ALC han adaptado sus marcos institucionales para cumplirla (Cuadro 6.2), delegando la responsabilidad de coordinar las actuaciones destinadas a alcanzar los ODS en órganos públicos existentes o en comisiones (interinstitucionales) de nueva creación (CEPAL, 2021[30]). La Agenda 2030 de los ODS ha constituido una importante fuerza impulsora de la ampliación del proceso de programación de la agenda y del fomento del desarrollo estadístico en esta región. Varios países de ALC han adaptado sus planes nacionales de desarrollo a los ODS (CLAD, 2018[31]). Por ejemplo, en Guatemala, el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032 incluye 129 objetivos, un 90% de los cuales están en consonancia con los ODS 2030. De igual manera, en Colombia, un 98% de los objetivos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022 (Pacto por Colombia, pacto por la equidad) se corresponden con la agenda de los ODS (Joint SDG Fund, 2021[32]).

Cuadro 6.2. Marcos jurídicos que son la base del cumplimiento de la Agenda 2030 en los países de ALC

País	Órgano o institución principal	Secretaría técnica	Marco jurídico para la Agenda 2030	Disposiciones jurídicas
Argentina	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	-	Decreto n.º 499-2017	• Designación de una institución principal • Promoción de la coordinación
Bolivia	Comité Interinstitucional de las Metas del PDES y de Desarrollo Sostenible (CIMPDS)	-	Resolución multiministerial n.º 001/2017	• Creación de un organismo principal • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Monitoreo de los objetivos
Brasil	Secretaría de Gobierno de la Presidencia	-	Decreto n.º 9980-2019	• Designación de una institución principal • Promoción de la coordinación • Monitoreo de los objetivos
Chile	Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	Ministerio de Desarrollo Social	Decreto n.º 49-2016	• Creación de un organismo principal • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Promoción de alianzas público-privadas • Fomento de la participación ciudadana • Monitoreo de los objetivos
Colombia	Comisión interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda 2030	Departamento Nacional de Planeación	Decreto n.º 280-2015	• Creación de un organismo principal • Identificación de carencias en cuanto a datos • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Promoción de alianzas público-privadas • Creación de mecanismos de rendición de cuentas • Monitoreo y evaluación de objetivos
Costa Rica	Consejo de Alto Nivel de los ODS	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica	Decreto n.º 40203	• Creación de un organismo principal • Promoción de alianzas público-privadas • Creación de mecanismos de rendición de cuentas • Fomento de la participación ciudadana • Monitoreo y evaluación de objetivos
República Dominicana	Comisión Interinstitucional de Alto Nivel Político para el Desarrollo Sostenible	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	Decreto n.º 23-16	• Creación de un organismo principal • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Monitoreo de los objetivos
Ecuador	Secretaría Técnica de Planificación	-	Decreto ejecutivo n.º 622	• Designación de una institución principal • Promoción de la coordinación
México	Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	Oficina de la Presidencia	Acuerdo para crear un comité técnico especializado en ODS	• Creación de un organismo principal • Promoción de la coordinación • Creación de mecanismos de rendición de cuentas • Monitoreo y evaluación de objetivos
Panamá	Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil	Ministerio de Desarrollo Social	Decreto n.º 393-2015	• Creación de un organismo principal • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Promoción de alianzas público-privadas • Creación de mecanismos de rendición de cuentas • Monitoreo de los objetivos
Paraguay	Comisión Interinstitucional ODS 2030 Paraguay	Ministerio de Relaciones Exteriores	Decreto n.º 3581-2020	• Creación de un organismo principal • Identificación de interlocutores • Promoción de la coordinación • Creación de mecanismos de rendición de cuentas

País	Órgano o institución principal	Secretaría técnica	Marco jurídico para la Agenda 2030	Disposiciones jurídicas
				• Monitoreo de los objetivos
Uruguay	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	-	Resolución n.º 988-2016	• Designación de una institución principal • Promoción de la coordinación • Monitoreo de los objetivos

Fuente: Adaptación a partir de CEPAL (2021[30])

Algunos países de ALC han creado marcos locales de bienestar avanzados tras celebrar consultas con interlocutores de toda la sociedad. Por ejemplo, en Ecuador, la noción de "buen vivir" se refiere al objetivo de perseguir un bienestar colectivo en una relación sostenible con el medioambiente. Este concepto tiene su origen en los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonia (originalmente "Sumak Kawsay" en quechua). Ecuador incorporó en su Constitución el concepto del Buen Vivir tras haberse aprobado en un referéndum en septiembre de 2008. La Constitución ecuatoriana fue la primera del mundo en reconocer derechos constitucionales a la naturaleza (León Guzmán, 2015[26]). De manera similar a lo ocurrido en Ecuador, en Bolivia se ha planteado el "vivir bien" como una idea alternativa de desarrollo, basada en los principios de equilibrio y armonía, y con un gran arraigo en la visión que tienen del mundo los pueblos indígenas aymara de la región andina. El marco basado en Vivir Bien se incorporó a la Constitución de Bolivia en 2009 para servir de base a las actuaciones públicas (Weyer, 2017[33]). Aunque el concepto del Buen Vivir y los marcos basados en él constituyen pasos importantes hacia enfoques del desarrollo más equilibrados, hasta la fecha, siguen siendo principalmente marcos conceptuales, con una repercusión relativamente escasa en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

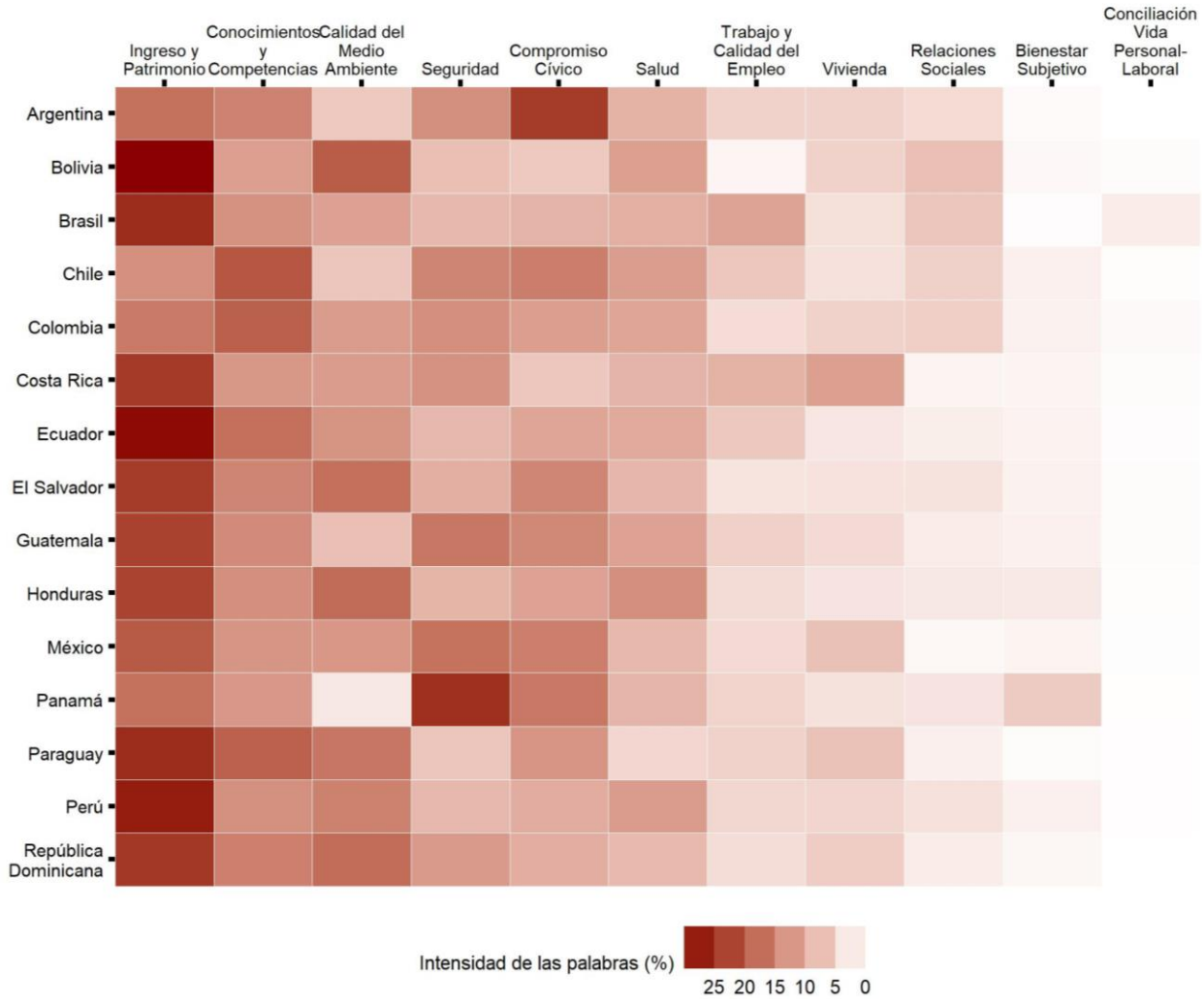
Un amplio apoyo público y político y unos mecanismos institucionales específicos que vinculen las prioridades en materia de bienestar con operaciones del gobierno a largo plazo son elementos importantes para garantizar un compromiso continuo (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). Por ejemplo, en Ecuador, los cambios en la coyuntura política han provocado un descenso de la promoción del enfoque del Buen Vivir. Varios países de la OCDE han "consolidado" determinados aspectos de un enfoque multidimensional a través de la legislación, para potenciar la rendición de cuentas públicas en relación con los resultados de bienestar social más allá de los períodos electorales (Durand and Exton, 2019[13]; Ormston, Pennycook and Wallace, 2021[34]). Francia, Italia y Nueva Zelanda, así como Escocia y Gales, han impuesto prescripciones legales que obligan a sus gobiernos a informar sobre los resultados en materia de bienestar y a realizar una consulta pública periódica sobre qué resultados de bienestar deberían tenerse en cuenta. Por ejemplo, los ministros escoceses tienen la obligación de consultar, elaborar y publicar un nuevo conjunto de Resultados Nacionales de Escocia (*National Outcomes for Scotland*) como mínimo cada cinco años (Durand and Exton, 2019[13]). Aunque nunca existe garantía de que una administración continúe con la estrategia del gobierno anterior, generalmente el planteamiento de metas sociales globales, elaboradas por y para las personas, es más difícil de obviar (OCDE et al., 2019[35]).

El uso de medidas multidimensionales, como los índices de pobreza multidimensionales (IPM), ha constituido también la base de programas orientados al bienestar en países de ALC. La región posee una larga tradición en cuanto a medición de la pobreza desde una perspectiva multidimensional. El IPM (Alkire, 2018[36]) complementa medidas monetarias tradicionales de la pobreza, al reflejar una serie más amplia de privaciones de la población, por ejemplo en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y la seguridad social, y las relaciones sociales (Anexo 6.A). Aunque el IPM no representa en sí mismo un marco integral de bienestar[4], constituye un paso importante hacia el uso de medidas multidimensionales en el proceso político, por ejemplo para abordar de mejor manera iniciativas públicas destinadas a quienes más lo necesitan. Colombia, por ejemplo, ha utilizado información de su Índice de Pobreza Multidimensional nacional con la finalidad de refrendar información del sistema nacional multidimensional de focalización para identificar posibles beneficiarios de programas sociales (SISBEN IV) y ofrecer nuevos

servicios y programas de asistencia social (Ingreso Solidario) a la población más vulnerable durante la crisis de la pandemia, trascendiendo así las medidas tradicionales de la pobreza basadas en los ingresos (MPPN, 2020[37]; Prosperidad Social, 2021[38]). El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2018[39]) y el Índice de Progreso Social (Social Progress Imperative, 2020[40]) también han adquirido considerable relevancia en los países de ALC en las últimas décadas (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). El uso de estas medidas multidimensionales ha fomentado un enfoque más basado en datos contrastados de la programación de la agenda y la formulación de políticas públicas por parte de los gobiernos, que tiene en cuenta las múltiples facetas del progreso.

La planificación nacional del desarrollo desempeña una función crucial en el proceso de programación de la agenda de los países de ALC y está promoviendo cada vez más una visión multidimensional de la definición de desarrollo (OCDE et al., 2019[2]). El concepto de planificación del desarrollo estuvo muy en boga fuera de los países socialistas en los años cincuenta y sesenta, tras un amplio consenso en favor de la intervención del Estado en la economía (p. ej., el Plan Marshall). Esta corriente se prolongó durante más de dos décadas, tras las cuales la popularidad mundial de la planificación nacional se redujo en la década de los ochenta, en particular en los países de ingresos altos. Desde principios de la primera década del siglo XXI, el compromiso de los países de ALC con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas —seguidos en 2015 por la aprobación de la Agenda 2030— motivó que muchos de ellos persiguiesen sus objetivos de desarrollo de forma más estructurada. Esto provocó la aparición de una nueva generación de planes de desarrollo (Chimhowu, Hulme and Munro, 2019[41]). En la actualidad, al menos 18 países de ALC cuentan con planes nacionales de desarrollo (OCDE et al., 2019[2]). Al contrastarlos con el Marco de bienestar de la OCDE usando análisis de extracción de texto, se observa que, en términos de bienestar actual, los planes nacionales de desarrollo suelen centrarse de manera principal en los ingresos y el patrimonio, lo que pone de manifiesto una preocupación generalizada por la pobreza en esta región (véase el Gráfico 6.2). Además, también se mencionan con relativa frecuencia los dominios del bienestar relativos a conocimientos y competencias, calidad del medioambiente, seguridad, compromiso cívico y salud. En los planes de desarrollo existe un menor número de referencias a cuestiones de trabajo y calidad del empleo, la vivienda y las relaciones sociales, y el bienestar subjetivo y la conciliación de la vida laboral y personal son las cuestiones mencionadas con menor frecuencia (véase el Gráfico 6.2).

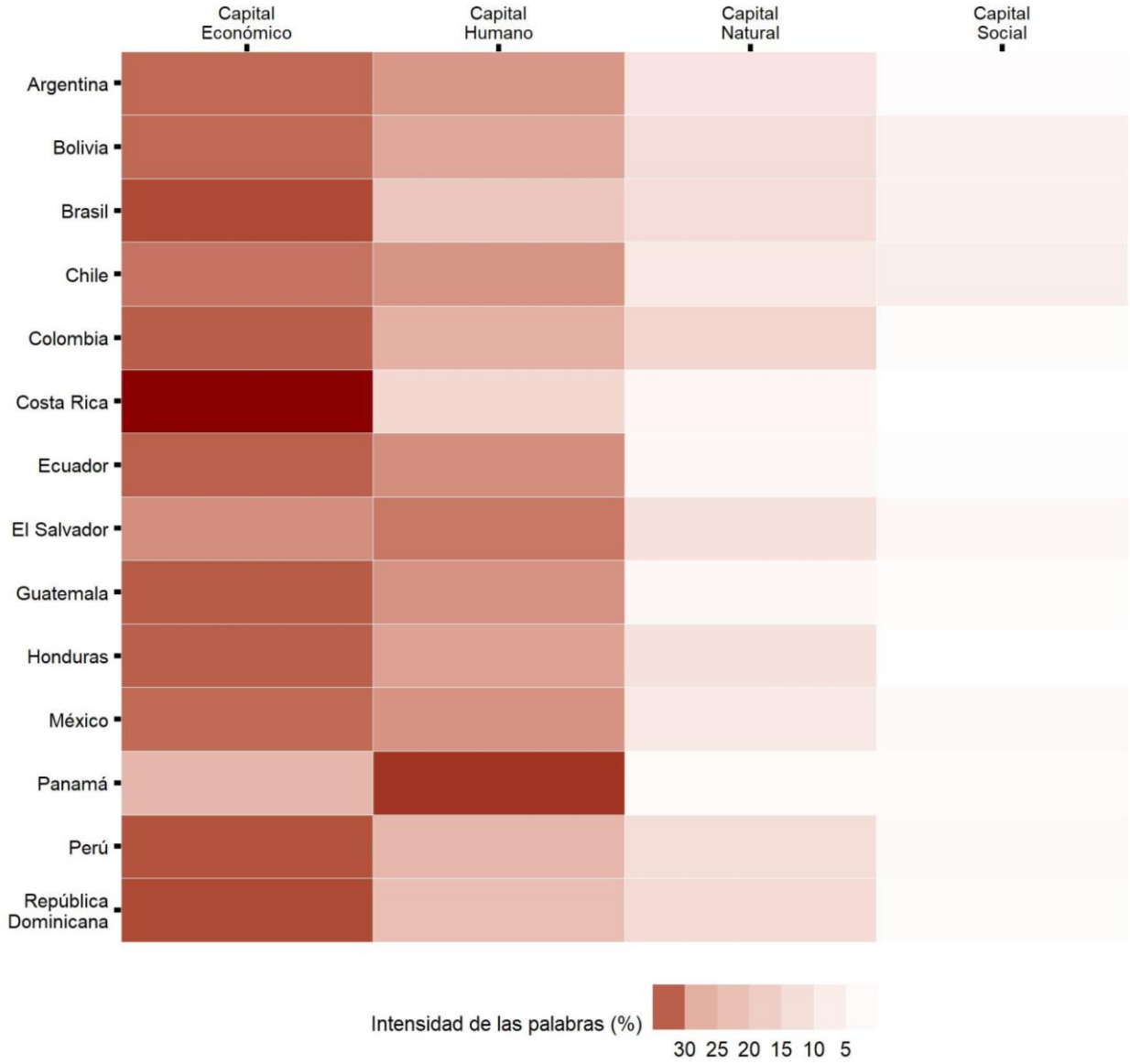
Gráfico 6.2. Dominios del bienestar actual incluidos en planes nacionales de desarrollo de ALC



Nota: La intensidad del color indica la frecuencia con que se encuentran referencias a las dimensiones del Marco de bienestar de la OCDE en los planes nacionales de desarrollo de 16 países de ALC. Un color más oscuro indica una mayor frecuencia de referencias a una dimensión determinada dentro del plan. La suma de las frecuencias de aparición relativas del conjunto de las dimensiones en el plan nacional de desarrollo de un país es 100. Los datos sobre el texto de cada país proceden del último plan de desarrollo (o su equivalente) aprobado al cierre de 2020. Véanse los pormenores sobre la metodología en el Anexo 6.B.
Fuente: Los autores han basado su estudio en análisis del texto de los planes nacionales de desarrollo del país

En términos de sostenibilidad, los planes nacionales de desarrollo de los países de ALC se centran principalmente en el capital económico, con un menor número de referencias a los demás recursos necesarios para mantener el bienestar a lo largo del tiempo. El análisis de extracción de texto indica que los planes de desarrollo de la región de ALC atienden con mayor frecuencia al desarrollo del capital económico (p. ej., a la formación de capital bruto, la inversión en infraestructura, el avance en materia de investigación y la gestión de la deuda externa). Los siguientes aspectos más mencionados tienen que ver con el capital social, tales como la confianza en el gobierno y las instituciones, la corrupción observada y la moral tributaria. En los planes de desarrollo de diferentes países de ALC, el capital natural se trata de forma más difusa (p. ej., en relación con las emisiones de gases con efecto invernadero, las especies en peligro y la deforestación). El desarrollo del capital humano (con respecto a los jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación [NiNi], la malnutrición infantil y el consumo de tabaco, por ejemplo) es el elemento de capital mencionado con menor frecuencia en los planes nacionales de desarrollo de ALC.

Gráfico 6.3. Dominios del bienestar futuro incluidos en planes nacionales de desarrollo de ALC



Nota: La intensidad del color indica la frecuencia con que se encuentran referencias a las dimensiones del Marco de bienestar de la OCDE en los planes nacionales de desarrollo de 16 países de ALC. Un color más oscuro indica una mayor frecuencia de referencias a una dimensión determinada dentro del plan. La suma de las frecuencias de aparición relativas del conjunto de las dimensiones en el plan nacional de desarrollo de un país es 100. Los datos sobre el texto de cada país proceden del último plan de desarrollo (o su equivalente) aprobado al cierre de 2020. Véanse los pormenores sobre la metodología en el Anexo 6.B.
Fuente: Los autores han basado su estudio en análisis del texto de los planes nacionales de desarrollo del país

Es importante adoptar de forma más decidida una orientación al largo plazo en los planes nacionales de desarrollo, a fin de garantizar que estos promuevan un desarrollo más sostenible. Mejorar el bienestar es un proceso largo que no puede lograr una sola administración. Utilizar un marco multidimensional para considerar de manera sistemática tanto el bienestar actual como los recursos para el futuro puede ayudar a identificar vías de desarrollo sostenibles. Sin embargo, tal como muestra el mapa de calor (Gráfico 6.3), aparte del capital económico, los planes nacionales de desarrollo de ALC incluyen muy pocas referencias a los otros recursos necesarios para mantener el bienestar a lo largo del tiempo. En parte, esto refleja la gran diversidad del alcance de los planes nacionales de desarrollo de ALC. En algunos países, la

planificación del desarrollo es un proceso a medio plazo vinculado a una sola administración (de 4 a 6 años), como ocurre en Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. En otros, estos planes tratan de definir estrategias y objetivos de desarrollo a largo plazo, más allá del ciclo de políticas en curso, como ocurre en Paraguay y la República Dominicana (ILPES/AECID, 2020[42]). Varios países de ALC, entre ellos Paraguay y Uruguay, han formulado planes a largo plazo a través de procesos de participación con una amplia representación de diferentes interlocutores (Recuadro 6.2). Armonizar los planes nacionales de desarrollo con la Agenda 2030, como se hace, por ejemplo, en Paraguay, Argentina y Guatemala, también promueve una perspectiva a más largo plazo. Es importante combinar la planificación a largo plazo con sólidos mecanismos de rendición de cuentas respecto a los logros conseguidos, para capitalizar las virtudes de ambos enfoques (véase la sección posterior sobre "Monitoreo y evaluación multidimensionales".

Recuadro 6.2. Enfoques participativos de la elaboración de planes nacionales de desarrollo en Paraguay

Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030

Ya en el año 2014, Paraguay publicó una hoja de ruta a largo plazo relativa a sus políticas públicas para 2030. El Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030 fue el primero en aunar diferentes planes sectoriales en un único plan general centrado en tres ejes estratégicos: 1) reducción de la pobreza y desarrollo social; 2) crecimiento económico inclusivo; 3) inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada. Cuatro líneas transversales entrelazan estos ejes: 1) igualdad de oportunidades; 2) gestión pública transparente y eficiente; 3) desarrollo y ordenamiento territorial; y 4) sostenibilidad ambiental. La elaboración del plan de desarrollo publicado en diciembre de 2014,[1] estuvo dirigida por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y se basó en un enfoque participativo para establecer una visión del país hasta 2030 y definir metas de desarrollo concretas (OCDE, 2018[43]).

Tras haber elaborado el Plan 2030, el gobierno de Paraguay creó un comité electo dentro del organismo de planificación para hacer un seguimiento de su aplicación. El Plan Nacional de Desarrollo 2030 ha sido un mecanismo importante para coordinar las estrategias de base sectorial y aquellas de ámbito subnacional con las destinadas al conjunto del país. Los objetivos integrados en este plan han proporcionado a los responsables de la toma de decisiones subnacionales unas pautas más precisas sobre los ámbitos más estratégicos a los que destinar inversiones públicas. Los ministerios, las secretarías y otras entidades públicas deben elaborar planes sectoriales basados en los objetivos y ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, en coordinación con la Secretaría de Planificación. Aunque se prevé que todas las políticas se ajusten a las pautas del Plan, sin embargo, elementos clave como la asignación presupuestaria anual siguen siendo en gran medida un aspecto independiente del proceso de planificación (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]).

Tras la llegada al poder de la siguiente administración en 2018, el gobierno decidió actualizar el Plan Nacional de Desarrollo 2030. La administración actual tomó el plan elaborado por su antecesora y lo utilizó como base de sus trabajos. Entre otros cambios, introdujeron un cuarto eje estratégico: el fortalecimiento político e institucional de Paraguay. Asimismo, a lo largo de este proceso de monitoreo se ajustaron objetivos específicos, con la definición de indicadores de monitoreo, valores de línea de base y metas para 2023 y 2030.

Nota:
1. Mediante el Decreto presidencial n.º 2794.

Armonización de los presupuestos gubernamentales con las prioridades de bienestar social

En los países de ALC, la escasa armonización de los planes nacionales de desarrollo con la asignación presupuestaria reduce el impacto que tienen dichos planes en los resultados de bienestar generales. Los presupuestos gubernamentales son un instrumento clave para vincular las prioridades del gobierno a la asignación de recursos para atender dichas prioridades (Durand and Exton, 2019[13]). En la actualidad, en muchos países de ALC no existe una conexión clara entre los planes nacionales de desarrollo y su asignación en el presupuesto gubernamental, y con frecuencia su financiación resulta insuficiente para la ejecución integral de dichos planes (OCDE et al., 2019[2]; Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). La planificación nacional, la asignación presupuestaria y la formulación de políticas siguen siendo procesos independientes en muchos países de ALC, que tienen criterios discrecionales y modos de funcionamiento propios. En un reducido número de países, como Costa Rica, Ecuador y Colombia, la elaboración de los presupuestos se vincula al proceso de planificación del desarrollo (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). Por ejemplo, en Colombia, los planes de desarrollo están coordinados por el Departamento Nacional de Planeación e incluyen un componente estratégico (el Plan de Desarrollo, que contiene objetivos y programas), así como un componente de financiación (el Plan de Inversión Multianual) (Recuadro 6.3). Sin embargo, el proceso de asignación presupuestaria sigue siendo independiente del proceso de planificación en la mayoría de los países de la región (RedSNIP, 2020[44]). Esto significa que, en muchos casos, los objetivos de los planes nacionales de desarrollo ofrecen una visión del país, en ocasiones integrada incluso en la constitución nacional, sin influir en gran medida en elementos cruciales de la toma de decisiones gubernamentales como la asignación presupuestaria.

Recuadro 6.3. Vinculación de la planificación del desarrollo con la asignación presupuestaria: el Departamento Nacional de Planeación de Colombia

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia se encarga de coordinar la planificación nacional del desarrollo y también el proceso de elaboración del presupuesto gubernamental. Tras la llegada al poder de cada nuevo gobierno, el DNP elabora un borrador del plan nacional de desarrollo para someterlo a consultas en coordinación con la Oficina de Presidencia y el Ministerio de Hacienda, basándose en las propuestas de campaña del Gobierno electo. El plan nacional de desarrollo define los objetivos de la administración y señala pautas y metas para las instituciones públicas responsables, incluyendo indicadores para dar seguimiento a los avances hacia la consecución de los objetivos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, también se asoció cada meta con uno o dos ODS de la Agenda 2030 (DNP, 2020[45]).

Además de coordinar el proceso de planificación, el DNP también se encarga de coordinar el Plan de Inversión Plurianual, que asigna el presupuesto nacional de inversiones públicas a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y ofrece pautas estratégicas a las instituciones públicas responsables de aplicar las políticas. El primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el DNP, se somete a la valoración de tres órganos diferentes para garantizar: 1) la participación de la sociedad civil; 2) la viabilidad técnica y financiera; y 3) su transformación en ley.

En la primera fase, se presenta el plan de desarrollo al Consejo Nacional de Planeación, que recaba aportaciones para las propuestas del borrador reuniendo a representantes de entidades territoriales, los sectores económico, social, ambiental y educativo, y también organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, minorías étnicas y grupos de mujeres (CNP, 2020[46]). En la segunda fase, los objetivos y las metas del borrador del plan se debaten con las instituciones públicas responsables de alcanzarlos y se ajustan en caso necesario. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) —formado por el presidente, el vicepresidente y todos los ministros— revisa el borrador del

plan antes de que el Ministerio de Hacienda lo vincule al Proyecto de Presupuesto General de la Nación. En la última fase, el gobierno presenta el borrador del plan al Congreso por si hubiera algún cambio final. Una vez aprobado, el Congreso convierte en ley el Plan Nacional de Desarrollo, que posteriormente sienta las bases y establece la dirección estratégica del programa de gobierno. El Departamento Nacional de Planeación presta posteriormente asistencia técnica y monitorea y evalúa la implementación de las políticas públicas.

El proceso presupuestario puede ser un factor importante para impulsar la coherencia de las políticas en favor de los objetivos sociales generales. Es importante atender las prioridades en materia de bienestar social desde los planes nacionales de desarrollo hasta el proceso de asignación del presupuesto gubernamental, para aumentar la capacidad de respuesta de las actuaciones del gobierno ante las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Para que los objetivos señalados en el plan nacional de desarrollo se apliquen de manera efectiva, resulta esencial establecer flujos de financiación correspondientes claros, como ocurre en Colombia. Un siguiente paso sería utilizar prioridades de bienestar social —que tengan una amplia legitimidad pública— para obtener información en la que basar la asignación del presupuesto anual a los distintos departamentos del gobierno. Cada vez es mayor el número de países que está empezando a usar marcos de bienestar como herramienta para incorporar una perspectiva multidimensional más amplia en el proceso presupuestario. Francia, Italia y Suecia, por ejemplo, han complementado los informes económicos y fiscales habituales que suelen acompañar al presupuesto con el monitoreo de un panel indicadores de bienestar, con el fin de plantear el debate presupuestario desde una perspectiva multidimensional más amplia (Durand and Exton, 2019[13]). De igual manera, varios países de ALC utilizan indicadores de los ODS para dotar de información las deliberaciones sobre el presupuesto y hacer un seguimiento de las contribuciones presupuestarias a los ODS. Por ejemplo, el gobierno mexicano vincula sus programas presupuestarios con los ODS para determinar, por un lado, la proporción de cada objetivo vinculada a cualquier programa presupuestario y, por otro, el número de programas presupuestarios vinculados a cada objetivo (Ministry of Finance and Public Credit y UNDP, 2017[47]; Hege and Brimont, 2018[48]). Debido a su concentración en el plano internacional, los ODS tienen una naturaleza muy amplia. Por lo tanto, para que funcionen como parte de los procesos de formulación de políticas y elaboración de presupuestos, resulta fundamental localizarlos dentro de los singulares contextos de los países.

Evaluar el impacto previsto de las propuestas presupuestarias en las prioridades de bienestar seleccionadas puede ayudar a plantear la toma de decisiones estratégicas y la formulación de políticas desde la óptica del bienestar. Además de su utilización para dotar de información la narrativa presupuestaria y hacer un seguimiento de las contribuciones presupuestarias a los objetivos de bienestar social, los marcos de bienestar también pueden servir como un marco de evaluación *ex ante* que permita valorar de manera más completa las propuestas presupuestarias a la luz de los objetivos sociales de un país. De este modo, los marcos de bienestar no solo pueden ayudar a responder preguntas sobre "¿en qué deberíamos gastar más o menos?", sino también sobre "¿cómo podemos mejorar el gasto?", fomentando la elaboración de propuestas presupuestarias que minimicen los efectos indirectos negativos y maximicen las sinergias entre los programas de gasto. Por ejemplo, desde 2019, el gobierno de Nueva Zelanda evalúa todas las propuestas presupuestarias contrastándolas con cinco prioridades globales de bienestar social, para ayudar a impulsar la coherencia de las políticas con estos objetivos de carácter social (Recuadro 6.4). El gobierno de Canadá también ha adoptado medidas para conocer mejor las distintas formas en que afectan sus inversiones presupuestarias a las personas, aprovechando su metodología de Análisis Basada en el Género Plus (GBA+).[5] Como siguiente paso, el gobierno canadiense está trabajando actualmente en mejorar la incorporación de medidas de bienestar en su toma de decisiones presupuestarias (Government of Canada, 2021[49]). Otros países y regiones también han manifestado interés en integrar más estrechamente marcos de resultados multidimensionales en sus procesos presupuestarios, entre ellos Irlanda (Government of Ireland, 2021[50]), Islandia (Jakobsdóttir, 2020[51]) y Gales (Future Generations Commissioner for Wales, 2019[52]).

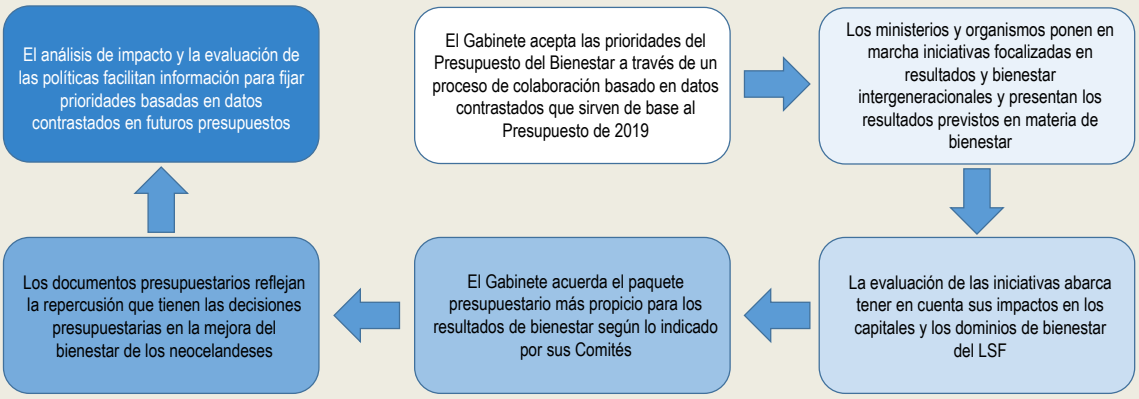
Recuadro 6.4. El Presupuesto del Bienestar de Nueva Zelanda

En mayo de 2019, el gobierno neozelandés publicó su primer Presupuesto del Bienestar (*Wellbeing Budget*). El Presupuesto del Bienestar se basa en análisis de datos sobre bienestar del Marco de Nivel de Vida (*Living Standards Framework* o LSF) del Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda (https://lsfdashboard.treasury.govt.nz). El LSF, publicado por primera vez en diciembre de 2018, es una adaptación nacional del Marco de bienestar de la OCDE e incluye 12 dominios de bienestar actual y desigualdades en los resultados de cada uno de estos 12 dominios, así como indicadores de recursos para el bienestar futuro (capital humano; capital social; capital financiero y físico; y capital natural) (New Zealand Treasury, 2019[53]).

Desde 2019, el Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda utiliza análisis de datos en su Marco de Nivel de Vida para identificar una larga lista de prioridades de bienestar. Basándose en esta lista, los ministros preseleccionan un conjunto más reducido de prioridades presupuestarias y después, todo el gabinete decide sobre las prioridades presupuestarias finales (Huang, Renzio and McCullough, 2020[54]). Entre 2019 y 2021, las prioridades del Presupuesto del Bienestar de Nueva Zelanda se han centrado en promover una transición justa a una economía de bajas emisiones, definir el futuro del trabajo, reducir las desigualdades, mejorar el bienestar infantil y mejorar los resultados de salud física y mental (New Zealand Government, 2018[55]; New Zealand Government, 2021[56]; New Zealand Government, 2019[57]). Las prioridades presupuestarias seleccionadas se describen en una Declaración de Política Presupuestaria. Como parte de su enfoque del bienestar, a partir de 2019, dicha Declaración incluye unas Perspectivas de bienestar *(Wellbeing Outlook)* (un análisis del bienestar actual, las desigualdades y la sostenibilidad de los resultados de bienestar) que complementan las tradicionales Perspectivas económicas y fiscales *(Economic and Fiscal Outlook)* del presupuesto como base de la definición de prioridades por parte del gobierno. Estas nuevas Perspectivas de bienestar incrementan la transparencia en el sentido de que aportan datos que justifican la selección de prioridades de bienestar realizada.

Tras la publicación de la Declaración de Política Presupuestaria (por lo general en el mes de diciembre), se invita a los ministerios a presentar solicitudes de financiación para propuestas políticas acordes a las prioridades del gobierno en materia de bienestar. Al hacerlo, se recomienda encarecidamente a los ministerios que cooperen entre sí para presentar propuestas de asignación presupuestaria orientadas a las prioridades de bienestar generales. Para impulsar la integración de las políticas, se designan ministros que coordinen las propuestas presupuestarias. En consecuencia, el presupuesto de Nueva Zelanda para 2019 reunió nada menos que a 10 organismos que presentaron una propuesta presupuestaria conjunta para abordar temas de violencia familiar y sexual (Huang, Renzio and McCullough, 2020[54]). En sus propuestas, los ministerios deben presentar datos que demuestren cómo promueve el bienestar su solicitud de financiación y señalar las repercusiones previstas en materia de bienestar, para lo cual se basan en un modelo de análisis de costos y beneficios (que incluye un componente opcional de evaluación monetaria denominado CBAx) que se ha coordinado de manera específica con un enfoque de bienestar (New Zealand Treasury, 2018[58]). Se seleccionan aquellas propuestas de política que se considere son las que mejor promueven las prioridades de bienestar social identificadas, tras lo cual se publica el presupuesto definitivo (normalmente en mayo) (Gráfico 6.4).

Gráfico 6.4. Proceso del Presupuesto del Bienestar de Nueva Zelanda



Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda (2018), Declaración de Política Presupuestaria, Presupuesto de 2019

Un enfoque multidimensional de la formulación y aplicación de las políticas públicas

Hace ya tiempo que se reconoce la falta de integración y coordinación de las estrategias, las políticas y su aplicación como uno de los principales impedimentos para lograr un desarrollo sostenible en todo el mundo (OCDE, 2019[59]). La incoherencia de las políticas y la fragmentación de los programas comportan un mayor riesgo de duplicación, gasto ineficiente, menor calidad de servicio y dificultad para cumplir las metas. Esto conduce, en última instancia, a una menor capacidad para obtener resultados y a opciones y vías que no son sostenibles (De Coning, 2007[60]; OCDE, 2019[59]). Los costos asociados —tanto en términos de descenso del bienestar como de gasto financiero— son importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, la Government Accountability Office ha estimado que las actuaciones del Congreso y de los órganos del poder ejecutivo para reducir la fragmentación, el solapamiento y la duplicación de los programas públicos desde 2011 a 2018 han generado cerca de 262.000 millones de USD de beneficio financiero declarado (GAO, 2019[61]; OCDE, a continuación[62]).

Una óptica multidimensional puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas a diseñar políticas que se refuercen mutuamente y a prever y gestionar cualquier compensación que pueda surgir. Maximizar las sinergias y minimizar las alteraciones reviste especial importancia en la región de ALC, donde es necesario superar desafíos en materia de desarrollo enormemente interrelacionados con presupuestos gubernamentales limitados que se han visto aún más restringidos por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 (OCDE, 2020[3]). El Centro para el Desarrollo Sostenible de la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC) utiliza la metáfora del cubo de Rubik para mostrar la importancia que reviste la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible (Van Weerelt, 2018[63]; OCDE, 2019[64]). Si pensamos en las diferentes caras del cubo de Rubik, resulta fácil observar cómo los movimientos que se realizan en una de las caras influyen en la disposición de las demás. Los responsables de las políticas públicas deben tener constantemente en mente que lo que podría parecer una solución en una esfera concreta podría causar un perjuicio a otra involuntariamente. Potenciar que esto se tenga en cuenta ayuda a crear un enfoque más coherente, efectivo y eficiente para aumentar el bienestar social (Van Weerelt, 2018[63]; OCDE, a continuación[62]).

Desde la década de los 2000, la planificación del desarrollo ha contribuido a fomentar un enfoque pangubernamental de las políticas públicas en los países de ALC. Los planes nacionales de desarrollo constituyen un importante mecanismo de coordinación de los programas y las estrategias públicas, tanto en sentido horizontal (entre diferentes sectores del gobierno) como vertical (entre diferentes niveles del gobierno) (OCDE et al., 2019[2]). Varios países de ALC han creado un organismo de planificación

especializado que se encarga de elaborar planes de desarrollo y coordinar la formulación de políticas entre los diferentes sectores. Estos órganos de planificación suelen redactar las estrategias y los planes de desarrollo y supervisar su puesta en práctica, tanto en el ámbito nacional como subnacional. Mediante la coordinación del proceso de planificación de políticas y, en algunos casos, también la asignación del presupuesto gubernamental, los órganos de planificación han contribuido a la mejora de la coordinación entre diferentes departamentos del gobierno y entre sus distintos niveles (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). En algunos países, las autoridades de planificación también se encargan de evaluar y dar seguimiento a la aplicación de las políticas públicas.

Someter las propuestas de políticas públicas a un proceso de valoración previo respecto a un conjunto central de objetivos de bienestar social puede potenciar aún más la coherencia de las políticas. En los últimos años, varios países de la OCDE han comenzado a utilizar como eje central de la formulación de *todas* sus políticas un conjunto de objetivos de progreso social (Recuadro 6.5). Actuar de este modo puede ayudar a superar enfoques aislados en los que cada ministerio trabaja para conseguir un conjunto de objetivos propio y los incentivos para invertir en resultados de los que se responsabilizan otros ministerios son escasos (APPG, 2014[18]). Evaluar adecuadamente las políticas de los diferentes departamentos del gobierno para conocer su impacto multidimensional en materia de bienestar, *ex ante* en lugar de *ex post*, puede mejorar la coordinación estratégica y reforzar la colaboración entre distintas partes del gobierno para superar problemas sociales. Además, los marcos multidimensionales pueden centrar la atención en temas de bienestar que suelen pasarse por alto o no abordarse en análisis más tradicionales, pero que, sin embargo, pueden obstaculizar el progreso en otros ámbitos. Aunque hace tiempo que la consideración de factores externos y efectos indirectos constituye una parte importante del trabajo de muchos analistas políticos, al situar como eje central de todas las políticas un conjunto principal de objetivos sociales, estas evaluaciones resultan más sistemáticas en tres ámbitos importantes: 1) los organismos que valoran su impacto en los resultados multidimensionales; 2) los dominios y las dimensiones del bienestar social tenidos en cuenta; y 3) la coherencia de los indicadores utilizados para medir e informar sobre estos dominios y dimensiones (OCDE, a continuación[62]).

Recuadro 6.5. Integración de prioridades de bienestar en el proceso de formulación de políticas

La ley galesa sobre el bienestar de las generaciones futuras

La ley galesa sobre el bienestar de las generaciones futuras de Gales (*Well-being of Future Generations [Wales] Act*) de 2015 obliga a todos los organismos públicos a basar su toma de decisiones en siete objetivos de bienestar —seleccionados mediante un amplio proceso de consulta pública—. Estos siete objetivos son: *un Gales próspero, un Gales resiliente, un Gales más igual, un Gales más sano, un Gales de comunidades cohesionadas, un Gales con una gran actividad cultural y un floreciente idioma galés y un Gales mundialmente responsable*. Esta ley hace hincapié en que cada uno de estos objetivos es igual de importante que los demás y, en la medida de lo posible, los órganos públicos deben trabajar para que se cumplan todos, en lugar de centrarse únicamente en uno o dos. La ley establece cinco formas de trabajo para que los organismos públicos alcancen estas siete metas: pensar a largo plazo; integrar los objetivos en toda la administración; implicar a un grupo amplio de interlocutores sociales; colaborar; y favorecer la prevención (actuar para evitar que surjan problemas o que estos empeoren).

En total, 44 organismos públicos se encuentran actualmente sujetos a las obligaciones que contempla la ley, desde el gobierno de Gales a juntas de sanidad locales, cuerpos contra incendios o de rescate, el órgano encargado de los parques nacionales y algunas otras instituciones (como el Arts Council, el Higher Education Funding Council y el Sport Wales). Puesto que la ley se aplica a los ministros galeses y los consejos nacionales, así como a autoridades locales, constituye un importante mecanismo para fomentar una coherencia tanto horizontal como vertical entre las distintas partes del gobierno en favor

de la consecución de objetivos comunes. Pese a que la ley impone una obligación en materia de bienestar a todos los organismos públicos, que deben promover una armonización de las estrategias de bienestar en varios niveles, cabe señalar que lo hace de tal manera que, a nivel local, existe cierta flexibilidad con respecto a las estrategias y metas más adecuadas al contexto.

La transparencia y la rendición de cuentas son también componentes importantes de esta ley. El Future Generations Commissioner presta apoyo a los organismos públicos que se enumeran en la ley para trabajar en pro de la consecución de las metas de bienestar. Cuando dicha institución galesa realiza recomendaciones a una entidad pública, esta debe publicar una respuesta. Si la entidad pública no acata la recomendación, debe explicar sus motivos e indicar qué medida alternativa adoptará. Asimismo, Audit Wales se encarga de evaluar en qué media estos 44 organismos públicos respetan el principio de desarrollo sostenible (inclusive las "cinco formas de trabajo") cuando definen sus objetivos de bienestar y adoptan medidas para cumplirlos. El auditor general debe presentar un informe sobre estos exámenes a la Asamblea Nacional de Gales como mínimo un año antes de la elección de cada Asamblea (Audit Wales, 2020[65]).

Fuente: Future Generations Commissioner for Wales (2021[66]), http://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act

Aunque muchos gobiernos de ALC aprueban sus planes de desarrollo por ley, no suelen existir mecanismos de obligado cumplimiento que garanticen que todos los órganos del gobierno tendrán en cuenta las prioridades de bienestar identificadas (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]). No obstante, la experiencia reciente de Costa Rica destaca el valor de las evaluaciones *ex ante* de los programas y las políticas públicas con respecto a las prioridades sociales (Recuadro 6.6). El enfoque, que en este caso se centra en las repercusiones de los programas del *sector social* en la pobreza, podría ampliarse aún más para evaluar las políticas *de los diferentes sectores* con respecto a un *conjunto central* de prioridades de bienestar. Si no hay datos disponibles para justificar evaluaciones de impacto multidimensionales, se podrían utilizar metodologías cualitativas para examinar las políticas. Por ejemplo, el gobierno de Bután utiliza un análisis de criterios múltiples para evaluar las propuestas de políticas con respecto a nueve dominios considerados componentes fundamentales de la Felicidad Nacional Bruta (FNB)[6] (GNH Centre Bhutan, 2021[67]). Las notas conceptuales de las propuestas de nuevas políticas se presentan a la Comisión de Felicidad Nacional Bruta, que posteriormente reúne a expertos para aplicar la herramienta de examen emitiendo una decisión cualitativa sobre si se prevé que la política propuesta tenga un efecto negativo, incierto, neutral o positivo en los dominios de la FNB (GNH Centre Bhutan, 2021[67]; Durand and Exton, 2019[13]). De manera similar, la Herramienta de Evaluación del Impacto en la Felicidad de los Emiratos Árabes Unidos incluye una evaluación cualitativa de la repercusión que tendrá una determinada propuesta en siete dominios que se considera conforman el bienestar social[7]. Las propuestas de políticas deben ser sometidas a un conjunto de preguntas de análisis con respecto a cada dominio antes de ser presentadas al gabinete (Government of United Arab Emirates, 2021[68]; Durand and Exton, 2019[13]). El objetivo de estas herramientas de evaluación del impacto es promover el diálogo entre los interlocutores y proteger la toma de decisiones de perspectivas sesgadas, más que servir como un ejercicio consistente en marcar casillas.

Recuadro 6.6. Evaluación de impacto *ex ante* en Costa Rica

Las evaluaciones de impacto *ex ante* han ayudado al gobierno costarricense a realizar asignaciones presupuestarias más eficientes y mejorar la coordinación de varias intervenciones en materia de política social. Como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para 2019-2022 de Costa Rica, el órgano de planificación costarricense (MIDEPLAN) empleó modelos estadísticos para calcular el costo de oportunidad que suponía ampliar diferentes programas en lo que atañe a su posible

repercusión en la reducción de la pobreza multidimensional. Con tal finalidad, se llevaron a cabo una serie de simulaciones para cuantificar el impacto de 13 intervenciones clave en materia de política social en el Índice de Pobreza Multidimensional a lo largo de cuatro años (2019-2022) (MIDEPLAN, 2018[69]). Los programas sociales seleccionados formaban parte de la estrategia general de reducción de la pobreza e incluían programas de becas, comedores escolares y campañas de salud enfocados en diferentes dimensiones de la pobreza, como los resultados en materia de salud, los resultados académicos y la seguridad social (Cuadro 6.3).

Las simulaciones se basaban en un modelo que permitía introducir un cambio controlado de determinadas variables, por ejemplo, el número de becas ofrecidas, para observar su repercusión en el Índice de Pobreza Multidimensional. Así, MIDEPLAN pudo identificar la combinación de beneficiarios de estos 13 programas sociales que mayor impacto tendría en la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional. La combinación identificada disminuiría la pobreza multidimensional entre un 2,3% y un 2,7% para 2022, lo que significaba que saldrían de la pobreza entre 36.639 y 41.408 hogares. El modelo facilita además información pormenorizada sobre las diferencias en cuanto a impacto en el plano nacional y regional.

Cuadro 6.3. Evaluación de impacto *ex ante* de una estrategia coordinada para reducir la pobreza multidimensional en Costa Rica

Institución responsable	Programa	Línea de base de beneficiarios de 2017	Objetivo de beneficiarios para 2022 (establecido usando simulaciones)
Fondo Nacional de Becas (FONABE)	Becas	95.000	130.000
Ministerio de Educación Pública (MEP)	Comedores escolares PANEA	775.001	800.000
	Programa de transporte escolar	143.697	159.697
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	Programa AVANCEMOS	180.282	184.300
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)	Formación de graduados	10.645	15.968
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	Programa de capacitación PRONAMYPE	-	15.000
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)	Bonos para reparación, ampliaciones, mejoras o terminación (RAMT) de viviendas	1.026	3.570
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	Programa sobre agua potable de calidad de ASADAS	1.344.399	1.375.995
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)	Seguro médico	334.479	354 479
	Seguro no contributivo	116.000	131.000
Ministerio de Salud (MS)	Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral	27.000	31.620
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	Ayudas para madres adolescentes	2.138	2.500
	Red de centros de atención	28.244	34.244

Nota: Las estimaciones se realizaron usando intervalos de confianza del 90%. En todos los casos, se llevaron a cabo 1.000 simulaciones. El modelo de simulación se basó en los siguientes supuestos: 1) los nuevos beneficiarios no se habían beneficiado del programa el año anterior; 2) los beneficiarios se encontraban distribuidos regionalmente de acuerdo con el porcentaje de hogares pobres que experimentaba cada tipo de privación; 3) se consiguió eficiencia en la asignación de recursos dando prioridad a hogares pobres multidimensionales en cada región; y 4) no existían "fugas" en los sistemas de asignación.
Fuente: Adaptación a partir de MIDEPLAN (2018[69]) and Fernández (2018[70]).

Además de intensificar la coordinación horizontal entre los diferentes ministerios, un marco de bienestar común puede ayudar a armonizar la contribución de cada nivel del gobierno con los objetivos sociales[8]. Los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de bienestar, ya que asumen las principales responsabilidades en muchos ámbitos de bienestar. También mantienen un contacto más directo con sus comunidades, inclusive con los grupos más vulnerables, por ejemplo a través de los trabajadores sociales y el personal de primera línea (OCDE, 2018[71]). Al utilizar marcos de bienestar para contar con una gobernanza más coordinada a múltiples niveles, es importante disponer de suficiente flexibilidad para que los gobiernos locales se centren en prioridades de bienestar que sean especialmente pertinentes en su zona (OCDE et al., 2019[72]) (Recuadro 6.5). Las oficinas de planificación nacional constituyen un importante mecanismo de adaptación de las estrategias de desarrollo de ámbito nacional y subnacional. Por ejemplo, en Paraguay, el plan de desarrollo hasta 2030 contribuye a la alineación de las estrategias de carácter sectorial a nivel nacional y también de las estrategias nacionales y subnacionales (Recuadro 6.2). Una intensa alineación vertical ofrece además oportunidades para aprender de homólogos y adoptar enfoques de bienestar que hayan dado buenos resultados en niveles superiores de los gobiernos locales y regionales, puesto que gobiernos subnacionales de todo el mundo se sitúan en la vanguardia de la aplicación de conceptos y métricas de bienestar a las políticas públicas (Whitby, Seaford and Berry, 2014[73]; OCDE, a continuación[62]).

Para observar las políticas desde una óptica multidimensional, se necesita un mecanismo destinado a adquirir nuevos conocimientos sobre la interrelación entre los resultados sociales y las formas de incorporarlos a la formulación e implementación de las políticas. Una de las dificultades que supone aplicar esa óptica multidimensional a las políticas públicas reside en que puede apartar rápidamente a los analistas de sus ámbitos de especialización (Durand and Exton, 2019[13]). Algunas de las iniciativas en materia de bienestar dirigidas por gobiernos nacionales de los países han incluido, por lo tanto, componentes de creación de capacidad para la función pública. Por ejemplo, la Academia de Bienestar de Emiratos Árabes Unidos[9] ofrece programas a entidades de los gobiernos federales y locales sobre cómo integrar la consideración de resultados multidimensionales en políticas, programas y servicios. Las comisiones o equipos multidisciplinares también pueden incidir de manera considerable en reunir una serie de conocimientos especializados necesarios para evaluar las repercusiones multidimensionales de las políticas. Aunque la capacidad multidisciplinar reviste especial importancia para los órganos del gobierno central, también es útil a la hora de considerar cómo se puede facilitar el acceso a la base de conocimientos en que se fundamenta cada uno de los objetivos de bienestar social identificados en todo el sistema de gobierno (OCDE, a continuación[62]).

Monitoreo y evaluación multidimensionales

Uso de indicadores multidimensionales para dar seguimiento al progreso de la sociedad

El monitoreo de los *resultados* sociales, además de los *productos* de las políticas públicas, ayuda a mantener la concentración en la serie de objetivos que las políticas tratan de lograr en última instancia (OCDE et al., 2019[2]). Consolidar marcos de progreso de la sociedad con un conjunto claro de métricas no solo promueve una programación de la agenda más refrendada por datos contrastados, sino que además incrementa la rendición de cuentas públicas en relación con el avance hacia la consecución de los objetivos de bienestar social y ofrece información útil para el proceso de formulación de políticas. En 2019, al menos 14 países de ALC contaban con sistemas de monitoreo y evaluación o estaban creándolos (OCDE et al., 2019[2]). Algunas iniciativas de monitoreo de los países de ALC se han centrado en reunir indicadores multidimensionales sobre resultados de bienestar social. Esto incluye iniciativas de seguimiento de resultados dirigidas por el INEGI y CONEVAL en México, medidas iniciales para medir el Buen Vivir en Ecuador, así como un trabajo en curso en Chile sobre un Marco de Medición del Bienestar Social en (Recuadro 6.7).

Recuadro 6.7. Iniciativas de monitoreo de los resultados de bienestar en los países de ALC

Iniciativas de medición del bienestar en México

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha creado un portal de indicadores de bienestar (www.inegi.org.mx/app/bienestar) que reúne indicadores objetivos y subjetivos relativos a 12 dominios de bienestar actual, los cuales se refieren tanto a los niveles de vida de carácter material como a la calidad de vida. Se facilitan indicadores de bienestar correspondientes a cada estado mexicano con la finalidad de resaltar oportunidades y limitaciones en materia de desarrollo regional (OCDE, 2015[74]). El portal de bienestar regional, construido en colaboración con la OCDE, se basa en el Marco de bienestar de la OCDE. Las dimensiones del bienestar que refleja el conjunto de indicadores del INEGI son, entre otras, las siguientes: accesibilidad a servicios; comunidad; educación; empleo; conciliación de la vida personal y laboral; ingresos; medioambiente; compromiso cívico y gobernanza; salud; satisfacción con la vida; seguridad; y vivienda (OCDE, 2015[74]).

Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México lleva más de 10 años generando información que sirve de base para la formulación y evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL, 2020[75]). CONEVAL ha creado un Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) que se guía por una serie de indicadores a lo largo del tiempo para ayudar a evaluar el logro de objetivos en el marco de programas de desarrollo social y del Plan Nacional de Desarrollo. Pese a que este sistema incluye algunos indicadores sobre resultados de bienestar (p. ej., el porcentaje de estudiantes que alcanzan, como mínimo, el nivel de competencia básico en las pruebas PISA), mide principalmente indicadores de los productos (p. ej., la tasa de escolarización). CONEVAL también va a crear un Sistema de Información sobre Derechos Sociales (SIDS) compuesto por un amplio conjunto de indicadores que complementan las medidas de pobreza multidimensionales, entre otros, indicadores sobre educación, salud, seguridad social, nutrición y condiciones de vida. El Plan Nacional de Desarrollo de México para 2013-2018 ha incorporado, por primera vez, indicadores que dan seguimiento a los avances en la consecución del conjunto de objetivos. A partir de estos indicadores, CONEVAL preparó su primera evaluación del avance registrado durante ese periodo de seis años (CONEVAL, 2018[76]).

La medición del Buen Vivir en Ecuador

Desde 2015, la Oficina Nacional de Estadística de Ecuador (INEC) ha venido promoviendo un programa para medir el bienestar de acuerdo con los preceptos del Buen Vivir. Durante la concepción del marco de medición, el INEC llevó a cabo una importante consulta a expertos internacionales, académicos, sociedad civil, representantes del sector privado, organizaciones internacionales y grupos de discusión formados por ciudadanos europeos (León Guzmán, 2015[26]; García, Moreno and Viteri, 2018[77]). Este proceso dio lugar a la selección de 25 indicadores respecto a siete dimensiones de bienestar: vivienda; agua y saneamiento; salud; empleo y seguridad económica; educación; relaciones con la comunidad y bienestar subjetivo; y prácticas ambientales. El marco de medición del Buen Vivir tiene el propósito de medir aquellos aspectos que confieren una buena vida, a fin de complementar las medidas existentes con una concentración en las privaciones en materia de bienestar, como el Índice de Pobreza Multidimensional.

Pese al avance registrado en la conversión del marco del Buen Vivir en un marco de monitoreo, el INEC no recaba estas medidas periódicamente. A diferencia del Índice de Pobreza Multidimensional, las medidas del Buen Vivir no tienen carácter oficial. En parte, esto se debe a los cambios en la coyuntura política del Ecuador, que han provocado un descenso de la promoción del enfoque del Buen Vivir, auspiciado inicialmente por el expresidente Rafael Correa. Pese a que sigue habiendo consenso sobre la necesidad de disponer de datos estadísticos fiables en materia de pobreza, el apoyo de la

población a la medición de resultados del bienestar más amplios es menor, en parte por el costo económico que comporta seguir reuniendo datos (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[29]).

El Marco de Medición del Bienestar Social de Chile

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile está desarrollando actualmente un marco de medición del bienestar social. Las protestas sociales registradas en Chile durante el año 2019 pusieron de relieve la necesidad de conocer mejor las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. En respuesta a ello, el gobierno ha iniciado la creación de un instrumento y marco de medición para reunir datos más completos sobre el bienestar y la calidad de vida de los chilenos. Utilizando como punto de partida el Marco de bienestar de la OCDE, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile está elaborando una Encuesta de Bienestar Social para complementar la actual Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que facilita datos sobre el nivel de vida material (resultados en materia de ingresos; trabajo y remuneración; y vivienda). La Encuesta de Bienestar Social tiene por objeto recabar datos complementarios sobre calidad de vida, centrándose tanto en resultados como en oportunidades. Esto incluye indicadores sobre: salud; conciliación de la vida laboral y personal; educación; relaciones sociales; compromiso cívico y gobernanza; calidad ambiental; seguridad personal; y bienestar subjetivo (Ministry of Social Development and Family, 2020[78]).

Sustentar los objetivos de bienestar social en un claro conjunto de métricas constituye un importante factor de la mejora en la rendición de cuentas. Por ejemplo, en Colombia, el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) ayuda a dar seguimiento a los avances en la consecución de los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo. El SINERGIA tiene tres objetivos de alto nivel: 1) seguimiento de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo; 2) monitoreo de los avances en el ámbito subnacional; y 3) evaluación de la aplicación y repercusión de las políticas públicas seleccionadas (SINERGIA, 2020[79]). El SINERGIA también es responsable de realizar un seguimiento de los avances en la consecución de los ODS. Para supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, SINERGIA actualiza continuamente su sistema abierto con información sobre los logros alcanzados por 24 sectores, 61 entidades públicas y 96 programas, basándose en más de 670 indicadores. El SINERGIA genera boletines de progreso periódicos para sectores públicos y para la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, que también remite informes periódicos del Presidente al Congreso. Además, el SINERGIA posee un sistema de alerta precoz para instituciones públicas que se quedan rezagadas en su avance hacia la consecución de sus objetivos, lo que permite a los responsables de políticas introducir las correcciones necesarias para aumentar las probabilidades de cumplimiento de los objetivos.

Uso de marcos multidimensionales para evaluar "lo que funciona" en la mejora del bienestar

Usar marcos multidimensionales para evaluar "lo que funciona" en la mejora del bienestar puede ayudar a acelerar el progreso de la sociedad. Los marcos multidimensionales ofrecen a los responsables de las políticas directrices más completas sobre la diversidad de resultados que es necesario tener en cuenta al evaluar el éxito de las intervenciones públicas, entre otros las desigualdades y las repercusiones intergeneracionales. En las últimas décadas, se han observado avances importantes en el ámbito internacional en cuanto a la diversidad de datos utilizados para valorar las consecuencias de las políticas, más allá de indicadores de resultados tradicionales como los ingresos, las calificaciones académicas y el estado de salud. Organismos públicos como el Ministerio de Hacienda del Reino Unido han creado directrices específicas para usar el bienestar como factor central al evaluar y valorar las políticas públicas (Durand and Exton, 2019[13]). Crear capacidad para la evaluación *ex post* de las repercusiones en materia de bienestar es importante para garantizar mejoras constantes en las políticas y las estrategias, a fin de abordar de manera más efectiva y eficiente los problemas sociales.

La evaluación de las políticas es un tema en auge en los países de ALC, pero es necesaria una labor constante para que los marcos de evaluación sean más completos. Varias administraciones de ALC han creado mecanismos permanentes e instituciones para evaluar los programas de acuerdo con los objetivos nacionales de desarrollo (Recuadro 6.8). En términos generales, los países delegan las responsabilidades de monitoreo y evaluación de las políticas en un mismo organismo (p. ej., el SINERGIA en Colombia, CONEVAL en México y el SINE en Costa Rica). En México, las evaluaciones de impacto han conducido al replanteamiento de amplios programas sociales (p. ej., el antiguo Progresa) con la finalidad de garantizar un impacto más significativo en el bienestar de los beneficiarios. Pese a que la evaluación de las políticas es una herramienta de uso frecuente en la región de ALC, se puede seguir avanzando en el empleo de un número más amplio de resultados de bienestar al decidir sobre las variables para evaluaciones de impacto. Un marco de bienestar común puede ayudar a centrar las actividades de evaluación en un conjunto de resultados sociales pertinentes en diferentes partes del gobierno, fomentando una evaluación más integral de la contribución de las intervenciones a la diversidad de aspectos que determinan el bienestar social. Tal como se ha mencionado anteriormente, esto contrasta con enfoques más compartimentados en los que las estadísticas económicas suelen utilizarse principalmente para evaluar las políticas económicas, las estadísticas sociales para las políticas sociales y las estadísticas ambientales para las políticas ambientales (véase la sección anterior sobre “El valor de un enfoque de desarrollo multidimensional en la región de ALC”).

Algunos países de la OCDE han creado institutos especializados para para reunir los conocimientos académicos sobre “lo que funciona”, como aportación a la formulación permanente de políticas. Por ejemplo, en el Reino Unido se ha creado el What Works Centre for Well-being, un organismo dedicado explícitamente a sintetizar datos contrastados sobre formas de mejorar diferentes resultados de bienestar. En lugar de enfocarse en un sector en particular, este Centro pretende aportar información para la formulación de políticas en todo el sistema de gobierno. Esta entidad, que se financia a través de ayudas a la investigación y contribuciones de los departamentos del gobierno, organiza además cursos de formación y publica boletines informativos periódicos para animar a los responsables de las políticas a incorporar los datos contrastados en su trabajo (Recuadro 6.8).

Recuadro 6.8. Uso de la evaluación de las políticas para acelerar la consecución de objetivos sociales

Evaluación de las políticas públicas por parte de SINERGIA en Colombia

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA)[1] realiza cuatro tipos de evaluación de las políticas: 1) evaluaciones de procesos, que examinan el funcionamiento y los procesos de las intervenciones públicas; 2) evaluaciones institucionales, para determinar las fortalezas y debilidades de las instituciones que pueden facilitar o dificultar la aplicación de las políticas; 3) evaluación de los resultados, que valora en qué medida se están alcanzado los resultados sociales buscados; y 4) evaluación del impacto, que cuantifica los efectos atribuibles a las intervenciones públicas y valora la causalidad entre intervenciones y resultados (SINERGIA, 2020[79]). Por ejemplo, SINERGIA evaluó recientemente la repercusión del programa de transferencias monetarias condicionadas Familias en Acción en los resultados obtenidos en materia de pobreza, educación y salud. Su conclusión fue que el programa incrementaba en un 5% la probabilidad de que niños y niñas pasasen de quinto a sexto grado en centros escolares de las principales ciudades (es decir, que pasasen de la enseñanza primaria a la secundaria). Esto reducía, a su vez, en un 2% la probabilidad de que niños y adolescentes terminasen realizando trabajo infantil y también la probabilidad de embarazos en adolescentes (Arteaga and Pecha, 2020[80]).

El What Works Centre for Well-being del Reino Unido

En el Reino Unido, el What Works Centre for Well-being tiene por objeto crear y compartir datos contrastados que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil puedan utilizar para mejorar el bienestar en todo el país. Este Centro ofrece asesoramiento a diferentes organismos públicos sobre los factores que mejoran los resultados de bienestar y su medición, y también sobre cómo integrar datos contrastados sobre bienestar en las políticas públicas. Forma parte de una red de siete centros de este tipo que abordan diferentes cuestiones políticas o abarcan distintas zonas geográficas. Estos centros ayudan a garantizar que la toma de decisiones se fundamente a todos los niveles en datos contrastados de alta calidad, valorados de forma independiente, mediante:

- La recolección de datos contrastados existentes sobre la efectividad de las prácticas y los programas de políticas.
- La elaboración de informes de síntesis de gran calidad y de exámenes sistemáticos en ámbitos en los que actualmente no existen.
- El fomento del uso de estas conclusiones por parte de los responsables de políticas como base de sus decisiones, compartiéndolas en un formato accesible, por ejemplo, mediante boletines informativos periódicos, cursos y eventos de formación.

Nota:
1. El SINERGIA está dirigido por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DESEPP) del Departamento Nacional de Planeación.
Fuente: https://whatworkswellbeing.org

En el caso de los países de ALC, resulta esencial mejorar la infraestructura estadística para intensificar el monitoreo y la evaluación multidimensionales. La región de ALC ha realizado importantes progresos en la agenda destinada a efectuar mediciones que vayan “más allá del PIB”, en especial en el marco de los ODS. Sin embargo, es necesaria una labor permanente para garantizar que los indicadores tengan suficiente cobertura, los datos sean suficientemente detallados y resulten oportunos, y que se puedan realizar comparaciones internacionales para mejorar el monitoreo del progreso de la sociedad y poder ampliar la concentración en la evaluación de las políticas. En los Capítulos 2 a 4 de este informe se han descrito los avances en materia de estadística que son necesarios para medir mejor las dimensiones de bienestar actual y futuro. En el Capítulo 5 se han resumido las cuestiones estadísticas que deben abordarse para valorar mejor la desigualdad de oportunidades por género, edad, grupo étnico y raza, distribución geográfica y nivel educativo. Además, se precisan mecanismos más sólidos para velar por que, como parte del proceso de formulación de políticas, se actúe con respecto a la información obtenida durante el monitoreo y la evaluación.

Marcos de medición multidimensionales para propiciar alianzas internacionales renovadas

Las alianzas regionales e internacionales en materia de desarrollo y un sistema multilateral abierto y basado en normas son esenciales para favorecer el desarrollo en la región de ALC. La pandemia de COVID-19, con su devastador impacto en cada país de la región, ha hecho que resulte más urgente dar con respuestas coordinadas internacionalmente que no solo “construyan un futuro mejor”, sino que además “construyan un futuro juntos”. Las políticas internas han demostrado tener sus límites y la cooperación multilateral se ha convertido en un imperativo para superar desafíos comunes. Se necesitan nuevas formas de cooperación que respondan mejor a la interconexión entre los resultados de los países y sus aspiraciones cada vez mayores de lograr un mundo más justo y respetuoso con el medioambiente. Los debates políticos y el aprendizaje mutuo podrían beneficiarse de una visión común del futuro de la región de ALC y de los principales desafíos y oportunidades para materializarla, respaldada por un

conjunto de medidas que podrían utilizarse para dar seguimiento a los avances y establecer comparaciones relativas del desempeño de los países. Una visión holística común —que tenga en cuenta los resultados en las diferentes dimensiones (social, ambiental y económica), grupos y períodos de tiempo (corto y largo plazo)— puede revestir gran importancia para ayudar a identificar oportunidades de formación de alianzas entre los diferentes países de ALC y con otras regiones del mundo. Pese a que la Agenda 2030 ofrece un plan inicial de trabajo, de carácter internacional, con compromisos políticos basados en una interpretación amplia del desarrollo de índole multidimensional y universal, muchas organizaciones regionales o agrupaciones de países (desde la Unión Europea a los BRICS (RIS, 2016[81]) y la APEC) lo han complementado con visiones y objetivos adaptados a sus circunstancias específicas como base de la cooperación y el diálogo regionales.

Los marcos multidimensionales pueden ayudar a superar las limitaciones que comporta utilizar el PIB y el INB como base de la cooperación y los objetivos de desarrollo. Pese a admitir que los ingresos son sumamente volátiles y con frecuencia pueden inducir a error, en la actualidad las clasificaciones de los países que se utilizan para determinar si cumplen las condiciones exigidas para recibir ayuda oficial al desarrollo (AOD), y en relación con instrumentos específicos de esta, se basan en los ingresos agregados. Esto incluye a la Asociación Internacional de Fomento (AIF), cuyos umbrales determinan la disponibilidad operativa de la financiación en condiciones favorables que ofrece el Banco Mundial y constituyen la base para la toma de decisiones sobre el acceso a este tipo de financiación de una serie de instituciones financieras multilaterales diferentes, como el Fondo Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el FMI. El criterio de los ingresos también forma parte de los criterios utilizados para la identificación de países menos adelantados (PMA) y su inclusión en esta categoría. Sin embargo, actualmente existe un consenso generalizado sobre que el desarrollo es una cuestión que abarca mucho más que los incrementos de los ingresos nacionales per cápita exclusivamente. El desarrollo es un proceso de múltiples facetas, cuyo objetivo último es mejorar el bienestar de los ciudadanos, en la actualidad y para las generaciones futuras. El ritmo y el modelo de crecimiento económico pueden tener una gran trascendencia a la hora de impulsar otras dimensiones del desarrollo, aunque determinados resultados clave en materia de bienestar estén relacionados de forma vaga e incluso negativa con los resultados agregados. En consecuencia, las transiciones observadas en los grupos de ingresos pueden no concordar con el avance de una serie de indicadores de desarrollo pertinentes (OCDE, 2017[82]). Los desafíos en materia de desarrollo existen en un *continuum* y no desparecen después de que los países hayan alcanzado un nivel de INB per cápita que supere el umbral establecido para poder recibir AOD de la AIF. Al contrario, los desafíos estructurales experimentados por países que han registrado recientemente una mejora en su clasificación podrían verse acentuados por una súbita pérdida de ayuda económica, al no cumplir los criterios para recibir AOD u otra financiación en condiciones favorables.

El marco de desarrollo en transición (DiT, por sus siglas en inglés) (CEPAL, 2021[83]; OCDE et al., 2019[2]) ha defendido la necesidad de marcos más amplios y medidas que doten de información la cooperación internacional. El enfoque de DiT analiza la cooperación internacional como elemento facilitador del desarrollo, basándose en tres pilares principales: 1) redefinir la gobernanza basándose en la inclusividad; 2) reforzar las capacidades institucionales armonizando las prioridades internas e internacionales; y 3) ampliar las herramientas de cooperación para incluir el intercambio de conocimientos, los diálogos de política multilateral, la creación de capacidades y la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación (OCDE et al., 2019[2]). Un marco común de medición multidimensional puede favorecer un enfoque más amplio de las alianzas internacionales más allá de la cooperación financiera. Puede ayudar a promover alianzas internacionales renovadas que faciliten el acceso de los países a conocimientos y tecnología, y puede facilitar una plataforma para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en diferentes países. Asimismo, puede movilizar financiación internacional para abordar cuestiones de bienestar claves que afectan a las generaciones actuales y futuras y que trascienden las cuestiones de pobreza. Los marcos multidimensionales también ayudan a que se preste mayor atención a los efectos transfronterizos, lo que proporciona a los países más información sobre las repercusiones transfronterizas

de sus políticas locales y nacionales. Por lo tanto, un enfoque multidimensional puede favorecer alianzas que mejoren la armonización de los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales identificando interrelaciones clave entre las estrategias de desarrollo de los países y los objetivos internacionales en materia de bienestar.

Las instituciones multilaterales están desplegando cada vez más marcos multidimensionales que abarcan una serie de resultados en materia de desarrollo y reconocen diferentes vías que pueden seguir los países para alcanzarlos. Por ejemplo, el Consejo de Europa ha señalado la importancia de la cooperación internacional con países de ingresos medios y ha destacado que las "medidas de desarrollo deberían ir más allá del PIB per cápita y considerar otras dimensiones, como las desigualdades dentro de los países y el cambio climático" (Consejo de la Unión Europea, 2021[84]). Algunos países individuales también han adoptado medidas en este sentido. Por ejemplo, Uruguay ha basado su política de cooperación internacional en el concepto de DiT y en el entendimiento de que los desafíos en materia de desarrollo tienen múltiples facetas (véase el Recuadro 6.9). Durante la reconstrucción de los países tras la pandemia, incorporar perspectivas multidimensionales en los compromisos contraídos y los debates celebrados con socios internacionales puede ser un primer paso importante para ayudar a establecer prioridades comunes a las que dar seguimiento en toda la región.

Recuadro 6.9. Política de Cooperación Internacional de Uruguay para el Desarrollo Sostenible al 2030

El gobierno uruguayo ha definido sus prioridades estratégicas para gestionar la cooperación internacional en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En 2020, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional[1] (AUCI) inició el proceso de elaboración del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2021-2024 (MECNUD), con la promoción de las Naciones Unidas y la coordinación de la AUCI. El punto de partida de dicho proceso fue una reunión de diálogo convocada por el presidente de la república en la que participaron 15 representantes de organismos miembros del Sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de informarles acerca de las directrices en materia de políticas públicas para sentar las bases de la cooperación internacional. Participaron más de 300 representantes y organizaciones nacionales e internacionales e incluyó cuatro talleres generales, dos talleres específicos y numerosas entrevistas con representantes del gobierno. Dentro de este marco, el gobierno uruguayo fijó sus prioridades estratégicas en torno a los siguientes ejes:

1. ***Una economía que innove, genere empleo y garantice la sostenibilidad del desarrollo:*** promover la innovación y la producción sostenible, y crear una estrategia para generar empleo y un sector privado comprometido con el desarrollo social.
2. ***Un Estado eficiente, transparente y responsable con presencia en todo el territorio:*** fomentar la descentralización y el desarrollo local, y un Estado que garantice la coexistencia ciudadana y erradique la violencia.
3. ***Políticas públicas que garanticen una educación de calidad, la protección social y la salud para toda la población:*** promover la transformación de la educación, la cohesión social y territorial y la atención sanitaria.
4. ***Una sociedad que no deje a nadie atrás:*** empoderar a grupos sociales vulnerables, incluidas mujeres, personas desfavorecidas y económicamente vulnerables, niños y jóvenes.

Nota:
1. La AUCI se encarga de coordinar la cooperación internacional no reembolsable para el desarrollo que ofrece y recibe Uruguay. Se creó en 2010 en el seno de la presidencia de la república. Uno de sus principales objetivos es priorizar y negociar la cooperación internacional que recibe Uruguay y adaptarla a las prioridades de desarrollo del país.
Fuente: AUCI (2020[85]; 2021[86])

Conclusión

Adoptar una perspectiva multidimensional puede ayudar a los países de ALC a superar los desafíos sociales sumamente interrelacionados que encaran y que se han visto agravados por la crisis del COVID-19. Los marcos multidimensionales pueden reforzar la efectividad y la eficiencia de las actuaciones y el gasto de los gobiernos para elevar el bienestar social centrando decididamente las acciones del gobierno en los resultados de bienestar de máxima necesidad; promoviendo un enfoque pangubernamental más coherente para alcanzar objetivos sociales, que maximice posibles sinergias y prevea y gestione activamente las compensaciones entre las actuaciones del gobierno para aumentar el bienestar; y promoviendo una gobernanza más previsible que tenga en cuenta sistemáticamente los resultados de bienestar y las desigualdades actuales, así como los recursos para el futuro. Vincular las medidas públicas a una idea de sociedad ampliamente compartida sobre los aspectos que ofrecen una vida satisfactoria y fructífera también puede sentar las bases para reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos, y desempeñar una función central en la generación de apoyo público a las reformas estructurales necesarias. Por último, los marcos multidimensionales pueden ayudar a reforzar y dotar de información la cooperación internacional, en línea con el enfoque de desarrollo en transición. El valor que puede ofrecer un enfoque multidimensional resulta especialmente pertinente a la luz de lo ocurrido con la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias dificultan el bienestar social y limitan los presupuestos gubernamentales de los que se dispone para paliarlas en mayor medida.

Los gobiernos de los países de ALC ya han dado pasos importantes para adoptar un enfoque de las políticas públicas que vaya “más allá del PIB”. Los países de ALC tienen una larga trayectoria de aplicación de enfoques de medición multidimensionales, en particular en relación con la pobreza. El uso de índices multidimensionales, como el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza Multidimensional, ha promovido enfoques de las políticas públicas más completos y basados en datos contrastados. La mayoría de los países también han avanzado de forma significativa en la recolección de nuevos datos que ofrezcan mayor información sobre el bienestar social. De la misma manera, el compromiso de la región de ALC con los marcos internacionales de bienestar, como la Agenda 2030 de los ODS, y la creación de marcos de bienestar localizados apuntan a un movimiento hacia perspectivas multidimensionales más sólidas. La adopción de la Agenda 2030 y la fuerte tradición de planificación del desarrollo nacional de esta región han ayudado a promover enfoques pangubernamentales a más largo plazo y más coordinados para la formulación de políticas. Algunos países han elaborado sus planes de manera participativa, con una concentración en el largo plazo, para ayudar a impulsar un desarrollo más sostenible.

Los métodos participativos para la elaboración de marcos multidimensionales y el establecimiento de prioridades sociales pueden ayudar a reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos. Una amplia participación pública en el desarrollo y el examen periódico de marcos multidimensionales de bienestar son esenciales para garantizar la legitimidad y el apoyo público a dichos marcos, orientar la toma de decisiones de los gobiernos y movilizar acciones colectivas encaminadas a la consecución de los objetivos sociales identificados. Al hacerlo, es fundamental conectar con aquellos que son menos capaces, están menos acostumbrados o están menos dispuestos a “implicarse” para que los marcos de bienestar y las estrategias nacionales de desarrollo atiendan mejor a los grupos excluidos, como los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías étnicas raciales y los jóvenes (OCDE, 2020[87]). Los enfoques participativos para la elaboración de marcos multidimensionales resultan de enorme utilidad a gobiernos y ciudadanos, ya que permiten a los gobiernos obtener más información sobre las perspectivas, los problemas y las preocupaciones de los ciudadanos, en particular de quienes son más vulnerables. Al mismo tiempo, permiten a los ciudadanos conocer de manera más profunda la compleja interconexión entre las cuestiones sociales, económicas y ambientales, así como los objetivos a corto y largo plazo de los gobiernos. De este modo, los enfoques participativos pueden reforzar el funcionamiento democrático al otorgar a los ciudadanos un papel más directo en la programación de la agenda pública y la toma de decisiones. Establecer un amplio apoyo social a un marco también puede

resultar útil para salvaguardar la continuidad de los enfoques multidimensionales cuando se produzcan cambios políticos.

Aunque los planes nacionales de desarrollo están adoptando cada vez más una perspectiva multidimensional, los objetivos económicos siguen predominando, en parte por las carencias informativas en cuanto a objetivos no económicos. El análisis de los planes nacionales de desarrollo de ALC muestra que se presta escasa atención a formas más amplias de capital que son necesarias para sostener el bienestar a lo largo del tiempo, trascendiendo el capital económico. Incluso cuando no existen aún datos completos, los marcos de bienestar pueden proporcionar información para una programación de la agenda más equilibrada como parte del proceso de planificación del desarrollo, señalando los componentes centrales del bienestar social que han de tenerse en cuenta —y sus interrelaciones—. Por otra parte, reforzar la infraestructura estadística puede proporcionar más información al proceso de programación de la agenda, al facilitar mejores datos sobre la diversidad de resultados que determinan el bienestar social. A su vez, esto puede contribuir a incrementar la transparencia del proceso de programación de la agenda y promover el diálogo público sobre las prioridades adecuadas para seleccionar y reforzar la rendición de cuentas públicas sobre el progreso de la sociedad. Mejorar la medición de los resultados multidimensionales también intensificará el monitoreo del progreso de la sociedad y ayudará a ampliar la evaluación del impacto de las intervenciones públicas. En los Capítulos 2 a 5 se han detallado esferas específicas para el desarrollo estadístico.

También son necesarios vínculos más fuertes entre, por una parte, los objetivos multidimensionales recogidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo, y, por otra, su aplicación real, incluso a través de la asignación presupuestaria y la formulación de políticas. En la actualidad, pese a que los planes nacionales de desarrollo se plasman en una ley, su función suele limitarse a definir una idea de país, sin suficientes mecanismos para hacer que se cumplan las directrices del plan durante el proceso de asignación presupuestaria, la formulación y la aplicación de las políticas. Las buenas intenciones expresadas en los acuerdos constitucionales y los marcos jurídicos no suelen ser parejas al funcionamiento real de los gobiernos. Esto incluye la conexión entre los planes de desarrollo y la asignación del presupuesto gubernamental, que ha de reforzarse para alcanzar un gasto más equilibrado entre las diferentes prioridades de bienestar (OCDE et al., 2019[2]). Utilizar prioridades de bienestar social —que cuentan con un amplio apoyo público— como base del gasto público es clave tanto para obtener el máximo rendimiento de la inversión en materia de bienestar como para reforzar la rendición de cuentas públicas. Del mismo modo, usar correctamente un conjunto central de objetivos de bienestar en la evaluación *ex ante* de las propuestas de política de diferentes partes de la administración puede sustentar un enfoque pangubernamental más coherente de la mejora del bienestar social. Aprovechar las buenas prácticas existentes y reforzar los vínculos entre los “objetivos” y la “aplicación” puede marcar la diferencia entre un plan nacional de desarrollo que siga siendo una visión de alto nivel y otro que se base en objetivos sociales ampliamente compartidos y pueda convertirse así en un poderoso factor de movilización de la acción colectiva para mejorar la vida de las personas.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, un enfoque de la política basado en el bienestar puede orientar el proceso para construir un futuro mejor, ayudando a los gobiernos a replantear las prioridades, el diseño, la armonización y la conexión de diferentes formas. Puede esclarecer los objetivos, las prioridades y las medidas de éxito, articulando lo que significa “construir un futuro mejor” en la práctica. Asimismo, ayuda a identificar las vulnerabilidades preexistentes o nuevas o acumuladas para orientar el apoyo de manera más efectiva. Aborda temas que, en ocasiones, son menos visibles en la política, pero que son muy importantes para la calidad de vida de las personas y que se han visto considerablemente perjudicados por la pandemia, como las relaciones sociales, la salud mental y el bienestar subjetivo. Aporta resiliencia a los sistemas, incluidos no solo los económicos y naturales, sino también los sistemas sociales (tales como las instituciones y la confianza). También establece redes de colaboración entre los diferentes departamentos y los organismos del gobierno centrados en resultados comunes, que son

necesarias para el cumplimiento de agendas multidimensionales integradas, pues esto será preciso para aplicar planes de recuperación inclusivos y sostenibles.

Por último, los marcos de medición multidimensionales tienen la posibilidad de orientar la toma de decisiones a nivel regional e internacional, así como a nivel nacional (y subnacional). La crisis del COVID-19 ha supuesto un recordatorio urgente de que los principales desafíos que encaran actualmente los gobiernos no se circunscriben al territorio nacional (al igual que ocurre con el cambio climático o la migración, por ejemplo). Para construir un futuro mejor, los países necesitan hacerlo juntos en la máxima medida posible. Consensuar un conjunto de prioridades compartido que sea objeto de seguimiento usando indicadores comunes en toda la región (un proceso tan político como técnico) ayudaría a los países de ALC a identificar desafíos comunes, así como ámbitos relativos de fortaleza o debilidad. A su vez, esto promovería una evolución hacia una serie de modalidades de alianza internacional más amplias y flexibles (más allá de la ayuda económica exclusivamente), que se adapten mejor a las necesidades de los países en la era del desarrollo en transición.

Referencias

Alkire, S. (2018), *Multidimensional poverty measures as relevant policy tools. OPHI Working Papers 118*, University of Oxford , Oxford, https://ideas.repec.org/p/qeh/ophiwp/ophiwp118.html. [36]

Angulo, R., B. Díaz and R. Pardo (2013), *A Counting Multidimensional Poverty Index in Public Policy Context: the case of Colombia*, OPHI Working Paper No. 62, https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophi-wp-62.pdf. [93]

APPG (2014), *Wellbeing in four policy areas*, All Party Parliamentary Group on Wellbeing Economics, London, https://b.3cdn.net/nefoundation/ccdf9782b6d8700f7c_lcm6i2ed7.pdf. [18]

Arteaga, N. and C. Pecha (2020), *Resumén ejecutivo y recomendaciones de la evaluación de impacto Familias en Acción*, SINERGIA-National Planning Department of Colombia (DNP), Bogota, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Evaluacion_Impacto_FEA_Resumen_Ejecutivo.pdf. [80]

AUCI (2021), *Memoria anual año 2020*, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Montevideo, https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/institucional/informacion-gestion/memoria-anual-ano-2020. [86]

AUCI (2020), *Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2021-2025*, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Montevideo, https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/2021-04/UNSDCF%20Uruguay%202021_2025_firmado_21122020%20MECNUD%281%29.pdf. [85]

Audit Wales (2020), *So what's different? Findings from the Auditor General's sustainable development principle examinations*, Audit Wales, https://www.wao.gov.uk/sites/default/files/Well-being-of-Future-Generations-report-eng_11.pdf. [65]

Bartscher, A. et al. (2020), "Social Capital and the Spread of Covid-19: Insights from European Countries", *SSRN Electronic Journal*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3616714. [21]

Borgonovi, F. and E. Andrieu (2020), "Bowling together by bowling alone: Social capital and COVID-19", *Social Science and Medicine*, Vol. 265, p. 113501, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113501. [20]

Boston, J. (2016), *Governing for the future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Emerald Publishing, Bingley. [25]

Castillo Añazco, R. and F. Jácome Pérez (2017), *Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador*, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Quito, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf. [97]

CBS (2020), *Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 [Monitor of Broad Prosperity and the Sustainable Development Goals 2020]*, Centraal Bureau Statistiek , The Hague, http://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020. [11]

CEPAL (2021), *Development in transition: concept and measurement proposal for renewed cooperation in Latin America and the Caribbean*, CEPAL, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/47167-development-transition-concept-and-measurement-proposal-renewed-cooperation-latin. [83]

CEPAL (2021), *Regional observatory on planning for development. Legal frameworks.*, CEPAL, https://observatorioplanificacion.cepal.org/en. [30]

Chimhowu, A., D. Hulme and L. Munro (2019), "The 'New' national development planning and global development goals: Processes and partnerships", *World Development* 120, pp. 76-89. [41]

CLAD (2018), *Avances y propuestas sobre la Agenda 2030 y los ODS en Iberoamérica*, Simposio Iberoamericano sobre Modelos de Gestión Pública con Miras a los ODS y la Agenda 2030, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Avances-y-propuestas-sobre-la-Agenda-2030-y-los-ODS-en-Iberoamerica-LIBRO-2018.pdf. [31]

CNP (2020), *¿Qué es el Consejo Nacional de Planeación (CNP)?*, Consejo Nacional de Planeación (CNP) de Colombia, Bogotá, https://www.cnp.gov.co/cnp/que-es-el-cnp. [46]

CONEVAL (2020), *Funciones de CONEVAL*, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Mexico City, https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx. [75]

CONEVAL (2018), *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Balance del sexenio*, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Mexico City, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/PND_2013_2018_Balance_del_Sexenio.pdf#search=plan%20nacional%20de%20desarrollo. [76]

CONEVAL (2010), *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Mexico, https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf. [92]

Consejo de la Unión Europea (2021), *EU partnerships with Middle-Income Countries: Opportunities for the development in transition agenda*. [84]

De Coning, C. (2007), *Coherence and coordination in United Nations Peacebuilding and Integrated Missions - A Norwegian perspective. NUPI Report*, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, https://gsdrc.org/document-library/coherence-and-coordination-in-united-nations-peacebuilding-and-integrated-missions-a-norwegian-perspective/. [60]

DNP (2020), *¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?*, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx. [45]

Durand, M. and C. Exton (2019), "Adopting a well-being approach in central government: Policy mechanisms and practical tools", in *Global Happiness Policy Report 2019*, Sustainable Development Solutions Network, New York, http://www.happinesscouncil.org. [13]

Exton, C. and L. Fleischer (a continuación), "The Future of the OECD Well-being Dashboard", *OECD Statistics Working Papers*, No. a continuación, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/statistics/The-Future-of-the-OECD-Well-being-Dashboard.pdf. [6]

Exton, C. and M. Shinwell (2018), "Policy use of well-being metrics: Describing countries' experiences", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2018/07, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/d98eb8ed-en. [7]

Fernández, A. (2018), "Costa Rica: El IPM para alcanzar las metas de reducción de la pobreza", *Dimensiones. Red de Pobreza Multidimensional (MPPN)*, Vol. 5/Noviembre 2018, p. 21.24, https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2018/10/Dimensiones-Nov-2018._ES_webversion.pdf. [70]

Future Generations Commissioner for Wales (2021), *Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015*, Future Generations Commissioner for Wales, Cardiff, https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/. [66]

Future Generations Commissioner for Wales (2019), *How the Welsh Government draft budget is taking account of the Well-being of Future Generations Act. A Briefing for Assembly Members*, Future Generations Commissioner for Wales, Cardiff. [52]

GAO (2019), *US Government Accountability Office 2019 Annual Report*, US Government Accountability Office, Washington, https://www.gao.gov/products/gao-19-285sp. [61]

García, N., L. Moreno and J. Viteri (2018), *Propuesta metodológica para la construcción de medidas de bienestar en el Ecuador [Methodological proposal for the construction of welfare measures in Ecuador]*, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, Quito, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Documento_metodologico_Metricas_de_Bienestar_11122018.pdf. [77]

GNH Centre Bhutan (2021), *GNH Screening tool*, GNH Centre Bhutan, http://www.gnhcentrebhutan.org/what-is-gnh/gnh-screening-tool/. [67]

Government of Canada (2021), *Budget 2021*, http://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-en.html. [49]

Government of Canada (2021), *Gender-based Analysis Plus (GBA+)*, Government of Canada, https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-analysis-plus.html. [103]

Government of Ireland (2021), *Budget 2021 Wellbeing and the Measurement of Broader Living Standards in Ireland*, Department of Finance. [50]

Government of United Arab Emirates (2021), *Happiness and National Agenda*, Government of United Arab Emirates, https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness. [68]

Hege, E. and L. Brimont (2018), *Integrating SDGs into national budgetary processes*, IDDR, Paris, http://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201807-ST0518-SDGs-budget-EN_1.pdf. [48]

Huang, C., P. Renzio and D. McCullough (2020), *New Zealand's "Well-Being Budget": A New Model for Managing Public Finances?*, International Budget Partnership, Washington. [54]

ILPES/AECID (2020), *Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe*, Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe ILPES/AECID, Santiago, https://observatorioplanificacion.cepal.org/es. [42]

INE (2021), *Boletín Técnico Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Paraguay*, Instituto Nacional de Estadística (INE), Asunción, https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/8e39_BOLETIN_TECNICO_IPM_2020.pdf. [101]

INEC (2015), *Índice de Pobreza Multidimensional de Costa Rica*, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), San José, https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf. [96]

Jakobsdóttir, K. (2020), "In Iceland, well-being is the measure of our success", *London Evening Standard*, https://www.standard.co.uk/comment/comment/iceland-wellbeing-measure-success-katrin-jakobsdottir-a4324791.html. [51]

Joint SDG Fund (2021), *Colombia launches the Integrated National Financing Framework (INFF) for the Sustainable Development Goals*, http://www.jointsdgfund.org/article/colombia-launches-integrated-national-financing-framework-inff-sustainable-development. [32]

León Guzmán, M. (2015), *Buen Vivir en el Ecuador: Del concepto a la Medición. Propuesta metodológica para medir el Buen Vivir en Ecuador*, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Quito, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Buen-Vivir-en-el-Ecuador.pdf. [26]

López-Calva, L. (2019), "The Multidimensional Poverty Index: Rethinking Measurement, Improving Governance", *Dimensions. Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN)*, Vol. 6/April 2019, https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2019/06/Dimensions-6_2019_web-EN-5.pdf. [89]

Máttar, J. and L. Cuervo (eds.) (2017), *Planificación para el desarrollo en America Latina y el Caribe. Enfoques, experiencias y perspectivas*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42139/10/S1700693_es.pdf. [23]

MDS y OPHI (2018), *Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-GT)*, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Nueva Guatemala de la Asunción, https://mppn.org/wp-content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19-v1.1.pdf. [102]

MEF, MDS y INEC (2017), *Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá: Año 2017*, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), and Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) of Panama, Panama City, https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/Informe-del-%C3%8Dndice-de-Pobreza-Multidimensional-de-Panam%C3%A1-2017.pdf. [100]

MEF, MDS, y INEC (2018), *Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes de Panamá: Año 2018. Aspectos conceptuales y metodológicos y Resultados correspondientes al año*, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), and Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panama City, https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2018/09/MEF_DAES-Informe-del-IPM-de-ni%c3%b1os-ni%c3%b1as-y-adolescentes-a%c3%b1o-2018.pdf. [90]

MIDEPLAN (2018), *Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022*, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), San José. [69]

Ministerio de Desarrollo Social (2015), *Pobreza Multidimensional: Anexo Entorno y redes*, Serie Documentos Metodológicos No. 29, División Observatorio Social: 24 de Enero de 2015. [94]

Ministry of Finance and Public Credit y UNDP (2017), *Investing for sustainable development: How does Mexico invest in the Sustainable Development Goals*, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Documentos_anteriores/mexico_sdg.pdf. [47]

Ministry of Social Development and Family (2020), *The Complementary Social Well-being Survey*, Social Observatory Division, Ministry of Social Development and Family, Santiago. [78]

Montoya, N. and S. Nieto-Parra (a continuación), *Policymaking beyond GDP in Latin America: Case studies and lessons*, OECD Development Policy Papers, OECD Publishing, Paris. [29]

MPPN (2020), *Multi-dimensional Poverty Index: Some National Measures*, Multidimensional Poverty Peer Network, Oxford, https://mppn.org/applications/national-measures/. [91]

MPPN (2020), *Using the MPI as a tool for crafting government responses to the Covid-19 pandemic*, https://mppn.org/mpi-tool-for-covid-19-pandemic/. [37]

MPPN (2019), *Un IPM infantil para diseñar e implementar mejores políticas públicas en Panamá*, Multidimensional Poverty Peer Network, Oxford, https://mppn.org/es/ipm-infantil-panama/. [88]

New Zealand Government (2021), *Budget Policy Statement 2021*, New Zealand Government, Wellington. [56]

New Zealand Government (2019), *Budget Policy Statement 2020*, New Zealand Government, Wellington. [57]

New Zealand Government (2018), *Budget Policy Statement 2018*, New Zealand Government, Wellington. [55]

New Zealand Treasury (2019), *The Living Standards Framework: Dashboard Update*, New Zealand Treasury, Govenent of New Zealand, Wellington, https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-12/lsf-dashboard-update-dec19.pdf. [53]

New Zealand Treasury (2018), *Budget 2019: Guidance for Agencies*, New Zealand Treasury, New Zealand Government, Wellington, https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2018-12/budget19-guidance.pdf. [58]

OCDE (2020), "COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Regional socio-economic implications and policy priorities", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5b0fd8cd-en. [3]

OCDE (2020), *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/13130fbb-en. [5]

OCDE (2020), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9870c393-en. [14]

OCDE (2020), *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the deliberative wave*, OCDE, Paris, http://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. [28]

OCDE (2020), *OECD-LAC virtual social inclusion Ministerial Summit. Informality and social inclusion in the times of COVID-19. Session 3. Inclusive social dialogue and citizen engagement to enhance social cohesion and ownership of recovery measures*, http://www.oecd.org/latin-america/events/lac-ministerial-on-social-inclusion/2020-OECD-LAC-Ministerial-Inclusive-social-dialogue-and-citizen-engagement-to-enhance-social-cohesion-background-note.pdf. [87]

OCDE (2019), *Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/a90f851f-en. [64]

OCDE (2019), *Recommendation of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development*, OECD/LEGAL/0381, OECD, Paris, http://www.oecd.org/gov/pcsd/recommendation-on-policy-coherence-for-sustainable-development-eng.pdf. [59]

OCDE (2018), *OECD Public Governance Reviews: Paraguay: Pursuing National Development through Integrated Public Governance*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264301856-en. [43]

OCDE (2018), *Opportunities for All: A Framework for Policy Action on Inclusive Growth*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264301665-en. [71]

OCDE (2017), *Next Steps for Development in Transition. A Background Paper*, Presented during the 18 May 2017 meeting in Brussels, Belgium, co-hosted by The Directorate-General for International Cooperation and Development of the European Commission, the OECD Development and ECLAC, https://www.oecd.org/dev/BackgroundPaper_DiT.pdf. [82]

OCDE (2017), *Recommendation of the Council on Open Government*, OCDE, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438. [24]

OCDE (2017), *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en. [22]

OCDE (2015), *Measuring Well-being in Mexican States*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264246072-en. [74]

OCDE (2013), *How's Life? 2013: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en. [9]

OCDE (2013), *OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en. [8]

OCDE (a continuación), *COVID-19 and Well-Being Evidence Scan*, OECD Publishing, Paris. [62]

OCDE et al. (2019), *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/g2g9ff18-en. [2]

OCDE et al. (a continuación), *Latin American Economic Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris. [4]

OCDE et al. (2021), *Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 2021*, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/doi.org/10.1787/96ce5287-en-es. [19]

OCDE et al. (2019), *Metrics that make a difference. Policy uses of well-being and sustainable development indicators in Latin America and the Caribbean SUMMARY AND KEY MESSAGES EU Regional Facility for Development in Transition for Latin America and the Caribbean*, http://www.oecd.org/statistics/LAC-well-being-metrics-Bogota-2019-summaryandkeymessages.pdf. [35]

OCDE et al. (2019), *Metrics that make a difference. Policy uses of well-being and sustainable development indicators in Latin America and the Caribbean SUMMARY AND KEY MESSAGES EU Regional Facility for Development in Transition for Latin America and the Caribbean*, http://www.oecd.org/statistics/LAC-well-being-metrics-Bogota-2019-summaryandkeymessages.pdf. [72]

Ormston, H., L. Pennycook and J. Wallace (2021), *Embedding a Wellbeing Framework in Northern Ireland A contribution from Carnegie UK Trust to inform discussions around the Programme for Government consultation*, Carnegie UK Trust, Fife. [34]

PNUD (2018), *Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, New York. [39]

Prosperidad Social (2021), *Ingreso Solidario*, Prosperidad Social (Government of Colombia), Bogotá, https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. [38]

RedSNIP (2020), *Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe (RedSNIP)*, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/redsnip?page=0. [44]

RIS (2016), *Health, Nature and Quality of Life Towards BRICS Wellness Index*, Research and Information System for Developing Countries (RIS), http://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/57f2/d14d/6272/6908/181e/0000/original/BRICS_Wellness_Report.pdf?1475531085. [81]

RREE (2010), *Vivir Bien. Mensajes y documentos sobre el Vivir Bien 1995 - 2010, Diplomacia por la Vida*, Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, La Paz, http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/libros/vivir%20bien.pdf. [27]

Sarracino, F. (2019), "When does economic growth improve well-being?", in Rojas, M. (ed.), *The economics of happiness: How the Easterlin Paradox Transformed our Understanding of Well-being and Progress*, Springer International Publishing, Cham, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-15835-4_15. [17]

SCGG y INE (2016), *Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras*, Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) and Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Tegucigalpa, http://ipm.scgg.gob.hn/wp-content/uploads/2019/08/medicion_multidimensional_pobreza.pdf. [98]

SINERGIA (2020), *Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA)*, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx. [79]

SIUBEN (2017), *IPM-RD: Índice de Pobreza Multidimensional de la República Dominicana*, Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Santo Domingo, https://siuben.gob.do/wp-content/uploads/2019/07/libro-ipm-rd-26062017.pdf. [99]

Social Progress Imperative (2020), *2020 Social Progress Index*, http://www.socialprogress.org. [40]

Stats NZ (2018), *Indicators Aotearoa New Zealand*, Stats NZ, Wellington, http://www.stats.govt.nz/assets/Consultations/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-consultation/indicators-aotearoa-new-zealand-measuring-our-well-being.pdf. [10]

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (2019), *For Good Measure: An Agenda for Moving Beyond GDP*, The New Press, New York and London, http://dx.doi.org/10.1017/s004727942000063x. [16]

Stiglitz, J., A. Sen and J. Fitoussi (2009), *Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)*, https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/090914mesure_perf_eco_progres_social/synthese_ang.pdf. [15]

STPP y MINEC-DIGESTYC (2015), *Medición Multidimensional de la Pobreza en El Salvador*, Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos (MINEC-DIGESTYC), San Salvador, https://www.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/Medici%C3%B3n%20Multidimensional%20de%20la%20Pobreza%20El%20Salvador.pdf. [95]

UNECE, Eurostat and OECD (2013), *Framework and suggested indicators to measure sustainable development*, UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, https://unece.org/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/SD_framework_and_indicators_final.pdf. [12]

Unión Europea (2021), *Beyond GDP: Measuring what Matters*, Issues Paper, Consejo de la Unión Europea, Bruselas. [1]

Van Weerelt, P. (2018), *Transforming our world: Advancing society through science with a soul*, United Nations System Staff College, http://www.unssc.org/news-and-insights/blog/transforming-our-world-advancing-society-through-science-soul/. [63]

Weyer, F. (2017), *Implementing 'Vivir Bien': Results and Lessons from the Biocultura Programme, Bolivia*, Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America, International Development Policy series No.9, Geneva, Boston, https://journals.openedition.org/poldev/2361. [33]

Whitby, A., C. Seaford and C. Berry (2014), *The BRAINPOoL Project Final Report. Beyond GDP - From measurement to politics and policy*, World Future Council , Hamburg, http://www.brainpoolproject.eu. [73]

Anexo 6.A. Índices de Pobreza Multidimensionales de los países de ALC

Los Índices de Pobreza Multidimensionales ofrecen información sobre las privaciones experimentadas en una serie de resultados de bienestar, a nivel agregado y con respecto a subgrupos de interés específicos (p. ej., en función del género, la edad, la ubicación geográfica, la ascendencia indígena o una discapacidad) (Cuadro del Anexo 6.A.1). En los países de ALC, estos índices se están incorporando cada vez más en el ciclo de políticas para ayudar a recabar información útil en la que basar la formulación de políticas destinadas a reducir la pobreza, distribuir los presupuestos públicos, orientar los programas sociales y monitorear y evaluar los resultados de los programas de reducción de la pobreza. En la actualidad, Uruguay está elaborando un Índice Nacional de Pobreza Multidimensional.

Cuadro del Anexo 6.A.1. Índices Nacionales de Pobreza Multidimensionales en los países de ALC

País	Dimensiones	Fuente de datos	Número de años abarcados	Desglose	Usos actuales en política
Chile	• Salud • Educación • Vivienda, medioambiente • Trabajo, seguridad social • Redes, cohesión social	Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)	5 años (2009, 2011, 2013, 2015, 2017) [a]	Nivel regional [b], urbano/rural, población indígena, género y cohorte de edad	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS
Colombia	• Salud • Educación • Suministros públicos, vivienda • Trabajo, infancia, juventud	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV)	9 años (2011-2019)	Nivel de departamento, urbano/rural, género y edad	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS • Fijación de metas y monitoreo del PND
Colombia (municipios)	• Salud • Educación • Suministros públicos y vivienda • Trabajo, infancia, juventud	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV)	1 año (2018)	Nivel municipal y urbano/rural	• Medición oficial de la pobreza • Focalización de la política social • Respuesta al COVID-19
Costa Rica	• Salud • Educación • Vivienda e Internet • Empleo • Protección social y equidad	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)	9 años (2010-2019)	Nivel regional [c] y urbano/rural	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS • Fijación de metas y monitoreo del PND • Valoración *ex ante* • Elaboración de presupuestos
República Dominicana	• Salud • Educación y atención infantil • Vivienda y medioambiente • Empleo y medios de vida • Relaciones sociales • Brecha digital, armonía social	Cuestionario MPI dentro de la Encuesta de Indicadores de Calidad de Vida	1 año (2015) [f]	Nivel municipal y urbano/rural	• Medición no oficial de la pobreza
Ecuador	• Salud, agua y alimentación • Educación • Hábitat, vivienda,	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y	11 años (2009-2019)	Urbano/rural	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los

	medioambiente • Trabajo y seguridad social	Subempleo (ENEMDU)			ODS • Fijación de metas y monitoreo del PND
El Salvador	• Salud y seguridad alimentaria • Educación • Vivienda • Empleo • Hábitat	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)	4 años (2014-2017)	Nivel de departamento, urbano/rural, género y quintil de ingresos	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS
Guatemala	• Salud, alimentación, seguridad nutricional • Educación • Vivienda • Empleo • Suministros públicos	Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)	1 año (2014)	Nivel de departamento y urbano/rural	• Medición no oficial de la pobreza
Honduras	• Salud • Educación • Vivienda • Empleo	Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)	7 años (2012-2018)	Nivel de departamento, urbano/rural y género	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS
México	• Servicios de salud • Retraso en educación • Calidad y características de la vivienda • Suministros públicos básicos • Seguridad social • Seguridad alimentaria • Ingresos[e]	Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH)	6 años (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018)	Nivel federal (cada dos años), nivel municipal (cada cinco años), rural/urbana, indígena, género, discapacidad, grupo de edad	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS
Panamá	• Salud • Educación • Vivienda, suministros públicos, Internet • Empleo • Medioambiente y saneamiento	Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM)	2 años (2017-2018)	Nivel provincial, urbano/rural y población indígena	• Medición oficial de la pobreza • Monitoreo oficial de los ODS
Panamá (niños)	• Salud • Educación • Vivienda • Agua y saneamiento • Protección de la infancia	Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM)	1 año (2018)	Nivel provincial, urbano/rural y población indígena	• Medición no oficial de la pobreza
Panamá (distritos y corregimientos)	• Salud y agua • Educación • Vivienda y servicios básicos • Empleo • Medioambiente y saneamiento	Censo de Población y Vivienda (CPV) de 2010	1 año (2010)	Niveles de distrito y corregimiento [d] y urbano/rural [g]	• Medición no oficial de la pobreza
Paraguay	• Trabajo y seguridad social • Vivienda y servicios • Salud y medioambiente • Educación	Encuesta Permanente de Hogares (EPH)	4 años (2016-2020)	Urbano/rural	• Medición oficial de la pobreza

Notas: Las medidas oficiales suelen contar con el reconocimiento de la oficina nacional de estadística del país como uno de los indicadores nacionales prioritarios, por lo que se actualizan periódicamente los datos que se utilizan para calcularlas. Las medidas no oficiales, por el contrario, suelen ser fruto de actuaciones puntuales y no periódicas, destinadas a recabar datos y calcular una medida, con un uso y reconocimiento más restringido. En la columna de Desglose, el desglose por género suele permitir comparar los datos de acuerdo al género del cabeza de familia. a) La versión anterior del IPM-Chile, que ahora incluye cuatro dimensiones, abarca los años 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017; la versión actual, que incluye cinco dimensiones, abarca 2015 y 2017. b) Chile se divide en 16 regiones administrativas, que a su vez se subdividen en 56 provincias. c) El nivel de desglose por "regiones" se refiere a las seis regiones de planificación de Costa Rica (regiones socioeconómicas o funcionales). d) Panamá se divide administrativamente en provincias, y estas, a su vez, en distritos que se dividen en corregimientos. El IPM-C de Panamá, calculado usando datos del censo de 2010, permite un desglose por niveles de distrito y corregimiento. e) CONEVAL diseñó la metodología para la medición multidimensional de la pobreza de México. Combina la pobreza en cuanto a ingresos y las privaciones en relación con seis derechos sociales básicos, que suman en total siete dimensiones. f) Los datos se recabaron a través del Cuestionario del IPM entre noviembre y diciembre de 2015. La elaboración del índice se llevó a cabo a lo largo de 2016, aunque no se publicó oficialmente hasta 2017. g) El desglose urbano/rural solo se encuentra disponible con respecto a algunas de las dimensiones (vivienda y servicios básicos, y acceso a Internet).

1. También existe un cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional con datos del Censo de 2005, realizado por el PND–SPSCV.

2. Tras la aplicación de un IPM nacional en Panamá, los datos revelaron que un 48% de la población que vivía en condiciones de pobreza multidimensional tenía menos de 18 años (MPPN, 2019[88]). Por lo tanto, el gobierno panameño decidió introducir un IPM para niños, niñas y adolescentes, que complementase el IPM nacional. El IPM-NNA incluye dimensiones adaptadas a la medición de diferentes vulnerabilidades presentadas por niños, niñas y adolescentes, por ejemplo en materia de protección y actividades recreativas (López-Calva, 2019[89]; MEF, MDS, y INEC, 2018[90]).

Fuente: Adaptación a partir de Montoya y Nieto-Parra (2021) basada en MPPN (2020[91]); México (CONEVAL, 2010[92]); Colombia (Angulo, Díaz and Pardo, 2013[93]); Chile (Ministerio de Desarrollo Social, 2015[94]); El Salvador (STPP y MINEC-DIGESTYC, 2015[95]); Costa Rica (INEC, 2015[96]); Ecuador (Castillo Añazco and Jácome Pérez, 2017[97]); Honduras (SCGG y INE, 2016[98]); la República Dominicana (SIUBEN, 2017[99]); Panamá (MEF, MDS y INEC, 2017[100]); Paraguay (INE, 2021[101]); y Guatemala (MDS y OPHI, 2018[102])

Anexo 6.B. Metodología de los mapas de calor

Los mapas de calor incluidos en los Gráficos 6.2 y 6.3 se elaboraron analizando los planes nacionales de desarrollo de 15 países de ALC con el *software* estadístico R. Los planes nacionales de desarrollo analizados fueron, entre otros, los de Argentina (2015-2019), Bolivia (2016-2020), Brasil (2016-2019), Chile (2018-2022), Colombia (2018-2022), Costa Rica (2019-2022), la República Dominicana (2010-2030), Ecuador (2017-2021), El Salvador (2014-2019), Guatemala (2032), Honduras (2018-2022), México (2019-2024), Panamá (2015-2019), Paraguay (2030) y Perú (2021).

Se llevaron a cabo dos análisis por separado para crear dos mapas de calor que hacen referencia a las 11 dimensiones de bienestar actual y las 4 dimensiones de bienestar futuro. En cada análisis, se codificaron los textos de los planes nacionales de desarrollo de acuerdo con las dimensiones del Marco de bienestar de la OCDE. El término "codificar/codificación" se refiere a un proceso consistente en extraer del texto palabras o grupos de palabras (expresiones) de interés y clasificarlas en diferentes categorías (dimensiones). Esta codificación se realizó usando las palabras o expresiones en español que se incluyen en el Cuadro del Anexo 6.B.1 y el Cuadro del Anexo 6.B.2, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Un primer paso consistió en crear diferentes categorías en R, una por cada dimensión del marco de bienestar actual y futuro de la OCDE. Los datos de los textos de los planes nacionales de desarrollo se importaron y limpiaron eliminando palabras, signos de puntuación, números y espacios en blanco adicionales entre las palabras no necesarios. A continuación, se transformaron los datos para disponerlos en una sola columna y varias filas. Cada fila es un *token*, es decir, nuestra unidad de análisis. Un *token* puede ser una palabra o un grupo de palabras (una expresión) extraídos del texto. Los datos de los textos se dispusieron en una tabla con un *token* por fila. Cada *token* creado a partir del texto limpio se hizo coincidir con una de las dimensiones basadas en las palabras y los grupos de palabras (expresiones) definidos en el Cuadro del Anexo 6.B.1 (bienestar actual) y el Cuadro del Anexo 6.B.2 (bienestar futuro). Como último paso, se contó el número de *tokens* coincidentes de cada dimensión y se hizo un recuento de las frecuencias relativas con respecto a cada país. La suma de la frecuencia de todos los *tokens* del plan nacional de desarrollo de un país, distribuidos entre todas las dimensiones, es 100. En los mapas de calor, se utilizaron diferentes intensidades del mismo color para ilustrar la intensidad (frecuencia) de uso de cada dimensión del bienestar en cada plan nacional de desarrollo.

Cuadro del Anexo 6.B.1. Bienestar actual

	Tokens
Ingreso y patrimonio	ingreso; renta; PIB; crecimiento; riqueza; crédito; economía; económica; económico; producción; economía; consumo; calidad de vida; pobreza; línea de pobreza; pobreza extrema; seguridad alimentaria; inseguridad alimentaria; pensión; pensiones; pensionados; jubilado; jubilados; transferencias monetarias; transferencia monetaria; subsidio; subsidios;
Conocimientos y competencias	educación; ciencia; ciencias; científico; científica; conocimiento; estudiantes; lectura; matemáticas; filosofía; inglés; alfabetización; libro; libros; biblioteca; bibliotecas; sabiduría; cultura; escuela; escuelas; colegio; colegios; educación; competencia educacional; alumnos competentes; habilidades cognitivas; habilidad cognitiva; rendimiento académico; deserción escolar; PISA; sistema educativo; materiales escolares; útiles escolares; transporte escolar; universidad; universidades; universitaria; formación; formaciones; formación técnico-profesional; técnica-vocacional; técnico-vocacional; técnica-profesional; técnico-profesional; pedagogía; pedagógica; pedagógicas; capacidades blandas; infraestructura escolar;
Seguridad	seguridad; seguro; inseguridad; inseguro; homicidio; policial; policía; paz; pacífico; pacífica; feminicidio; víctima; víctimas; crimen; crímenes; criminalidad; criminal; criminales; muerte; carretera; muertes; carretera; accidente tránsito; accidentes tránsito; accidentes viales; pandilla; pandillas; pandilleros; sicario; sicarial; delincuencia; delincuente; asalto; robo; extorsión; secuestro; violencia; violento; violenta; narcotráfico; narcotraficante; tráfico; delito; delitos; ilícito; ilícita; asesinato; asesinatos;

	Tokens
Relaciones sociales	conexión social; conexiones sociales; red social; redes sociales; red comunitaria; redes comunitarias; red de apoyo; redes de apoyo; red apoyo social; comunidad; comunidades; comunitario; comunitaria; interacciones; amigo; amiga; amigos; amigas; buena convivencia; fortalecimiento familiar; familia; cohesión social; trabajo en equipo; trabajos en equipo;
Trabajo y calidad de vida	empleo; empleos; trabajo; trabajos; salario; salarios; empleados; empleadas; rutina; trabajador; trabajadora; trabajadores; trabajadoras; doméstica; doméstico; desempleo; desempleados; desempleadas; subempleo; subempleados; subempleadas; informal; informalidad; ingreso laboral; ingresos laborales; brecha trabajo; empleo primario; empleo secundario; ocupación; ocupaciones; seguro social; seguridad social; pymes; mipymes; cuentapropistas; trabajadores independientes; trabajadores informales; formalización; política activa de empleo; políticas activas de empleo; profesionales liberales;
Bienestar subjetivo	bienestar; bienestar subjetivo; satisfacción con la vida; satisfacción; calidad vida; sentimiento; sentimientos; felicidad; feliz; triste; depresión; ansiedad; suicidio; suicidios; tranquilidad; serenidad; resiliencia; percepción; percepciones; buen vivir; vivir bien;
Conciliación vida personal-laboral	balance trabajo vida; balance vida trabajo; equilibrio trabajo vida; equilibrio vida trabajo; equilibrio trabajo; jornada laboral; jornadas laborales; ocio; descanso; recreación; trabajo pago; trabajo no pago; relación laboral; relaciones laborales; bienestar del trabajador; bienestar de los trabajadores;
Vivienda	casa; apartamento; inmueble; propiedad; alojamiento; vivienda; viviendas; habitacional; residencia; refugio; posada; rancho; casa; casas; dirección; comunas; villas; barriadas; tugurios; vivienda inadecuada; acceso a saneamiento; acceso a agua potable; acceso a internet; internet; asentamientos informales; hacinamiento; vivienda digna; viviendas dignas;
Salud	expectativa de vida; salud; higiene; personal de salud; médico; médicos; doctor; doctores; enfermero; enfermeros; enfermera; enfermeras; medicina; nutrición; nutritivo; nutritiva; desnutrición; saludable; saludable; comida; alimentación; alcohol; mortalidad infantil; mortalidad materna; tasa de mortalidad; muerte prematura; muertes prematuras; atención primaria; hospital; hospitales; clínica; clínicas; gasto bolsillo; gastos bolsillo; gasto catastrófico; gastos catastróficos; discapacidad; discapacitados; deporte; deportes; morbilidad; VIH; educación sexual; enfermedad; enfermedades; trastorno; trastornos;
Calidad ambiental	calidad ambiental; gestión ambiental; calidad aire; medioambiente; naturaleza; sostenibilidad; sostenible; polución; contaminación; aire; tierra; agua; limpio; limpieza; verde; bosque; desastre natural; desastres naturales; volcán; volcanes; terremoto; terremotos; temblor; temblores; tsunami; tsunamis; incendio; incendios; deslizamiento tierra; deslizamientos tierra; inundación; inundaciones; tempestad; tempestades; madre tierra; emisión co2; emisiones co2; descarbonización; combustibles fósiles; energía limpia; energías limpias; suelo; suelos; ordenamiento territorial; empleo verde; empleos verdes; economía verde; protección ambiental; gestión forestal; manejo forestal; cambio climático; bioeconomía;
Compromiso cívico	voto; votos; votación; votaciones; elección; elecciones; votante; votantes; plebiscito; referéndum; electorado; electo; electoral; voz; política; acción comunal; gobierno abierto; gobierno electrónico; gobierno digital; diálogo; acuerdo ciudadanos; acuerdos ciudadanos; pacto democrático; democracia; transparencia; transparente; consulta ciudadana; consultas ciudadanas; participación ciudadana; participación propositiva; cohesión social; sociedad civil; representación política; consejos; gobierno local; gobiernos locales; consulta popular; líderes; liderazgo; organizaciones civiles; asociaciones civiles; juntas de acción comunal; derechos humanos; empoderamiento; activismo; activista; activistas; colectividad; colectividades;

Cuadro del Anexo 6.B.2. Bienestar futuro

	Tokens
Capital económico	formación bruta capital; formación capital; investigación; investigación desarrollo; inversión infraestructura; producción activos fijos; propiedad intelectual; activos propiedad intelectual; deuda externa; deuda pública; apalancamiento sector privado; patrimonio líquido financiero; patrimonio líquido gobierno; estabilidad macroeconómica; inversión infraestructura;
Capital natural	biodiversidad; especies vía extinción; emisiones gas; emisiones carbono; bosques intactos; bosques vírgenes; bosques silvestres; bosques autóctonos; área protección ambiental; cobertura natural; estrés hídrico; energía renovable; energías renovables; reciclaje; huella material; huella ambiental; huella ecológica; nutrición; suelo; deforestación; deforestado; deforestada; reforestar; reforestación; protección medioambiente; protección medioambiental; protección natural; calentamiento global; amazonas; amazonia;
Capital social	confianza gobierno; confianza estado; confianza institucional; confianza instituciones; confianza interpersonal; confianza policial; confianza policía; confianza fuerzas armadas; confianza sistema judicial; legitimidad; corrupción; corrupto; corrupta; democracia; apoyo; democracia; discriminación; desigualdad; voluntariado; voluntario; voluntarios; voluntaria; voluntarias; moral tributaria; satisfacción; servicios públicos; instituciones nacionales; sistema judicial; ética; confianza ciudadana; confianza pública; transparencia; gobierno abierto;
Capital humano	jóvenes sin educación; joven sin educación; ni-ni; ni ni; nini; ni estudia ni trabaja; sobrepeso; obesidad; desnutrición infantil; tabaco; uso tabaco; consumo de tabaco; cigarrillo; cigarrillos; alcohol; consumo alcohol; informalidad; trabajo informal; deserción escolar

Notas

[1] Tras admitir el hecho de que existen muchos marcos políticos que integran aspectos del marco de políticas de "bienestar" sin utilizar necesariamente este término, en particular en la región de ALC, el resto del presente capítulo se refiere a los marcos multidimensionales de resultados, así como a los marcos de bienestar. Véase en la sección titulada "Qué es un enfoque multidimensional de las políticas públicas?" una explicación del contenido y del alcance de dichos marcos.

[2] Tal como se describen en este documento, entre los indicadores más "objetivos" estarían el estado laboral, los ingresos y los resultados académicos. Una distinción crucial reside en que, incluso cuando son los propios ciudadanos los que informan sobre estos aspectos de sus vidas (p. ej., mediante la participación en encuestas), hacen referencia a aspectos objetivos de los niveles de vida (entre ellos las calificaciones obtenidas o los ingresos percibidos) que alguien ajeno a ellos también puede observar y medir. Por el contrario, las medidas más subjetivas (p. ej., la satisfacción con la vida, la percepción en cuanto a seguridad) están directamente relacionadas con las impresiones y experiencias de la población —y pese a que pueden validarse consultando datos objetivos, el constructo meta de dichas medidas es inherentemente subjetivo por naturaleza—.

[3] La mayoría de los países de ALC son de ingresos medios-altos, entre ellos 9 de los 11 países a los que se refieren los capítulos estadísticos anteriores (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana). Los otros dos países analizados, Chile y Uruguay, son países de ingresos altos.

[4] Los Índices de Pobreza Multidimensionales (IPM) son herramientas políticas importantes en la región de ALC y abarcan muchos elementos del enfoque multidimensional, centrado en las personas, que resulta esencial para el bienestar. Por ejemplo, prácticamente todos los IPM utilizados por gobiernos de esta región tienen en cuenta aspectos relacionados con la vivienda y los suministros públicos, la salud, la educación y el empleo (véase el Cuadro del Anexo 6.A.1). La función principal de los IPM es ampliar la definición de quién puede considerarse pobre o vulnerable, más allá de las medidas monetarias, para ofrecer información más amplia en relación con una focalización, monitoreo y evaluación efectivos de los programas sociales de reducción de la pobreza y de otra índole. Por lo tanto, se centran en identificar las privaciones existentes en diferentes grupos y ámbitos. Por el contrario, los enfoques de bienestar describen tanto el nivel como la distribución de los resultados en el conjunto de la sociedad, además de los recursos que propician dichos resultados a lo largo del tiempo. En este sentido, los enfoques de bienestar representan una visión objetivo de lo que es importante para tener una buena vida en la actualidad y en el futuro, más allá de la ausencia de privaciones (que, no obstante, se reconoce como un componente esencial). Varios elementos del bienestar actual, como el compromiso cívico y la voz de los ciudadanos, la conciliación de la vida laboral y personal, la calidad del empleo, las relaciones sociales, el medioambiente y el bienestar subjetivo solo se incluyen en los IPM en contadas ocasiones. Y lo que es más importante, los recursos para el bienestar futuro a nivel social quedan excluidos prácticamente por completo de los IPM —por razones obvias, dado su propósito principal—.

[5] GBA+ es una herramienta de análisis desarrollada por el gobierno de Canadá para que los responsables de la formulación de políticas puedan examinar los posibles impactos (tanto intencionados como no intencionados) de una política, plan, programa u otra iniciativa en diversos grupos de personas. Considera el género y también otros factores identitarios como la edad, la etnia, el patrimonio indígena, la geografía,

el nivel socioeconómico, el estado civil y cualquier discapacidad metal o física (Government of Canada, 2021[103]).

[6] Estos dominios son los siguientes: nivel de vida; educación; salud; diversidad ecológica y resiliencia; vitalidad de la comunidad; uso del tiempo; bienestar psicológico; buena gobernanza; y resiliencia y diversidad cultural (GNH Centre Bhutan, 2021[67]).

[7] Estos dominios son los siguientes: economía; salud; educación; cultura y sociedad; gobernanza y servicios públicos; y medioambiente e infraestructura (Government of United Arab Emirates, 2021[68]).

[8] La necesidad de mejorar la vinculación de la planificación y el seguimiento de ámbito nacional y subnacional, en especial en el contexto de los OSD, fue puesta de relieve por los participantes de la Conferencia sobre los Usos de los Indicadores de Bienestar y Desarrollo Sostenible en las Políticas Públicas en América Latina y el Caribe que se celebró en Bogotá (Colombia) en 2019.

[9] Véase https://wellbeingacademy.hw.gov.ae

¿Cómo va la vida en América Latina?

MEDICIÓN DEL BIENESTAR PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Muchos países de América Latina han experimentado mejoras en sus ingresos en las últimas décadas, y varios de ellos han entrado en la categoría de países de ingresos altos o medio-altos en términos de métricas convencionales. ¿Acaso se han reflejado estas mejoras económicas en los distintos ámbitos de la vida de las personas? *¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas* aborda esta cuestión al presentar datos comparativos del bienestar en América Latina y el Caribe (ALC), centrándose en 11 países de ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay). El informe se basa sobre el Marco de Bienestar de la OCDE y presenta los datos disponibles sobre el bienestar antes y después del inicio de la pandemia, incluyendo condiciones materiales, calidad de vida, recursos para el bienestar futuro y desigualdades. El informe también identifica las prioridades para abordar las deficiencias en materia de bienestar y analiza el uso de marcos de bienestar en la formulación de políticas públicas en América Latina y otras partes del mundo, aportando lecciones sobre qué se necesita para que el bienestar de las personas sea el eje central de las actuaciones de los gobiernos. Este documento se ha elaborado en el marco del Mecanismo Regional de la UE para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe.

Cofinanciado por la Unión Europea

IMPRESA ISBN 978-92-64-35985-7
PDF ISBN 978-92-64-64891-3

9 789264 359857